Historia
M·Í·N·I·M·A

Brasil

BORIS FAUSTO

EL COLEGIO DE MÉXICO

HISTORIA MÍNIMA DE BRASIL

Colección
HISTORIAS MÍNIMAS

Director
Pablo Yankelevich

Consejo editorial
Soledad Loaeza
Carlos Marichal
Óscar Mazín
Erika Pani
Francisco Zapata

HISTORIA MÍNIMA DE BRASIL

Boris Fausto

Con la colaboración de
Sérgio Fausto

Traducción de Paula Abramo

EL COLEGIO DE MÉXICO

981
F268h

Fausto, Boris, 1930-.
Historia mínima de Brasil / Boris Fausto ; colaboración de Sérgio Fausto ; traducción: Paula Abramo. – 1a ed. -- Ciudad de México : El Colegio de México, 2022.
460 p. : il., gráfs. ; 21 cm. – (Colección Historias mínimas ; v. 11)

ISBN 978-607-564-404-2 (volumen 11)
ISBN 978-607-564-173-7 (obra completa)

1. Brasil – Historia. 2. Brasil – Política y gobierno. I. Fausto, Sérgio, colab. II. Abramo, Paula, 1980- , tr. III t. IV. Ser.

Historia mínima de Brasil, Boris Fausto, con la colaboración de Sérgio Fausto.
Traducción de Paula Abramo

CREATIVE COMMONS

Primera edición impresa, 2022
Primera edición electrónica, Octubre de 2022

D. R. © El Colegio de México, A. C.
Carretera Picacho-Ajusco núm. 20
Ampliación Fuentes del Pedregal
Alcaldía Tlalpan
C. P. 14110
Ciudad de México, México
www.colmex.mx

ISBN 978-607-564-404-2 (volumen 11)
ISBN 978-607-564-173-7 (obra completa)
ISBN 978-607-564-426-4 (electrónico)

Conversión gestionada por:
Simon and Sons ITES Services Pvt Ltd, Chennai, India.
+91 (44) 4380 6826
info@simonnsons.com
www.simonnsons.com

SUMARIO

1. El Brasil colonial (1500-1822)

La expansión marítima y la llegada de los portugueses a Brasil
Los indígenas
La colonización
La sociedad colonial
Las actividades económicas
La Unión Ibérica y sus repercusiones en Brasil
La colonización de la periferia
Las *bandeiras* y la sociedad paulista
Un balance de la economía colonial: el mercado interno
La crisis del sistema colonial
Movimientos de rebeldía y conciencia nacional
Brasil a fines del periodo colonial

2. El Brasil monárquico (1822-1889)

La consolidación de la independencia y la construcción del Estado
El Segundo Reinado
La estructura socioeconómica y la esclavitud
La modernización y la expansión del café
El comienzo de la gran inmigración
La Guerra de Paraguay
La crisis del Segundo Reinado

El republicanismo
La caída de la monarquía
Economía y demografía

3. La Primera República (1889-1930)

Los años de consolidación
Las oligarquías y los coroneles
Relaciones entre la Unión y los estados
Los cambios socioeconómicos
Los movimientos sociales
El proceso político en la década de 1920
La Revolución de 1930

4. El Estado getulista (1930-1945)

La acción gubernamental
El proceso político
El Estado Novo
El fin del Estado Novo
El cuadro socioeconómico

5. La experiencia democrática (1945-1964)

Las elecciones y la nueva Constitución
La vuelta de Getúlio
La caída de Getúlio
Del nacionalismo al desarrollismo
La crisis del régimen y el golpe de 1964

6. El régimen militar y la transición a la democracia (1964-1990)

La modernización conservadora

El cierre político y la lucha armada
El proceso de apertura política

7. La modernización por la vía democrática (1990-2010)

Introducción
El gobierno de Sarney: democratización e inflación descontrolada
La crisis política y el cambio económico: el breve gobierno de Fernando Collor
El gobierno de Itamar Franco: de la crisis política al Plan Real
El gobierno de Fernando Henrique Cardoso: estabilización económica y reformas estructurales
La democracia y los derechos sociales
La crisis de las metrópolis: (in)seguridad y (des)empleo
La política exterior: la autonomía por la inserción
¿Una herencia maldita o bendita?
La alternancia en el poder: la victoria de Lula
La formación del nuevo Gobierno
Lula y el presidencialismo de coalición
La aceleración del crecimiento y la distribución del ingreso
La política social: más continuidad que ruptura
La crisis política y la crisis de la política: serie de escándalos
¿Un nuevo modelo de desarrollo?
La controversia sobre el presal
El crecimiento y el medio ambiente
La posición de Brasil en las negociaciones sobre el clima
La identidad de la política exterior
La sucesión de Lula
La democracia bajo Lula

8. El fin del ciclo petista y el surgimiento de Bolsonaro

Dilma Rousseff: nuevo personaje, nuevo contexto
Las protestas sociales de junio de 2013: un parteaguas
Reelección y crisis política
El *impeachment* de Dilma
El interregno *postimpeachment*
El surgimiento de Jair Bolsonaro

9. Brasil (1950-2020)

Macroeconomía
Transformación estructural
Transición demográfica
Indicadores sociales
Consideraciones finales

Referencias bibliográficas

El Brasil colonial (1500-1822)
El Brasil monárquico (1822-1889)
La Primera República
El Estado getulista (1930-1945)
La experiencia democrática (1945-1964)
El régimen militar y la transición a la democracia (1964-1990)
La modernización por la vía democrática (1990-2010)

Sobre el autor

1. EL BRASIL COLONIAL (1500-1822)

La expansión marítima y la llegada de los portugueses a Brasil

Desde muy pronto, en casa o en la escuela, aprendemos que Brasil fue descubierto por Pedro Álvares Cabral en abril de 1500. Este hecho constituye uno de los episodios del proceso de expansión marítima portuguesa que se inició a principios del siglo XV.

¿Por qué el pionero de este proceso fue Portugal, un país tan pequeño, a principios del siglo XV, casi cien años antes de que Cristóbal Colón, enviado por los españoles, pusiera un pie en América? No hay una sola respuesta y es necesario considerar una serie de factores. Para empezar, Portugal se consolidaba en el contexto europeo como un país autónomo, con una tendencia a mirar hacia afuera. Los portugueses ya habían acumulado a lo largo de los siglos XIII y XIV experiencia en el comercio de larga distancia, aunque no se comparaban aún con los venecianos y los genoveses, a quienes habrían de superar. De hecho, antes de que los portugueses asumieran el control de su comercio internacional, los genoveses habían invertido en la expansión de éste, hasta convertir a Lisboa en un gran centro del comercio genovés.

La experiencia comercial también se vio facilitada por los vínculos económicos que Portugal mantenía con el mundo islámico del Mediterráneo: la progresión de sus intercambios puede medirse por el uso creciente de la moneda como medio de

pago. Sin duda, la posición geográfica del país, cercano a las islas del Atlántico y la costa africana, fomentó su atracción por el mar. Dada la tecnología de la época, era importante servirse de corrientes marinas favorables zarpando de los puertos situados en Portugal o en el sudoeste de España.

Pero hay otros factores de la historia política portuguesa tan importantes como los que ya se mencionaron, o incluso más. Portugal no salió inmune de la crisis general del occidente europeo, pero le hizo frente en mejores condiciones políticas que otros reinos. Durante todo el siglo XV fue un reino unificado y menos sujeto a convulsiones y disputas, en contraste con Francia, Inglaterra, España e Italia, que se vieron envueltos en guerras y problemas dinásticos.

La monarquía portuguesa se consolidó a través de una historia que tuvo como uno de sus puntos más significativos la revolución de 1383-1385. Debido a una disputa por la sucesión del trono portugués, la burguesía comercial de Lisboa se sublevó. Tuvo lugar a continuación un gran levantamiento popular, la "revuelta de la gente menuda", como lo llamó el cronista Fernão Lopes. Fue una revolución parecida a otras que agitaban el occidente europeo en esa misma época, pero tuvo un desenlace distinto al de las revueltas campesinas, que en los demás países fueron aplastadas por los grandes señores. El problema de la sucesión dinástica se confundió con una guerra de independencia cuando el rey de Castilla, apoyado por la gran nobleza lusa, entró en Portugal para asumir la regencia del trono. Con el enfrentamiento se consolidaron al mismo tiempo la independencia portuguesa y el ascenso al poder de la figura central de la revolución, don Juan, maestre de Avis, hijo bastardo del rey Pedro I.

Aunque algunos historiadores consideran que la de 1383 fue una revolución burguesa, en realidad, si se tiene en cuenta la

política ejercida por el maestre de Avis, lo que produjo fue el fortalecimiento y la centralización del poder monárquico. A su alrededor fueron reagrupándose los varios sectores influyentes de la sociedad portuguesa: la nobleza, los comerciantes, la naciente burocracia. Éste es un punto fundamental cuando se discuten las razones de la expansión portuguesa, pues, en las condiciones de aquella época, era el Estado, o más propiamente la Corona, el que podía convertirse en un gran emprendedor si alcanzaba las condiciones de fuerza y estabilidad para ello.

Por último, recordemos que a principios del siglo XV la expansión correspondía a los intereses de las clases, grupos sociales e instituciones que conformaban la sociedad portuguesa. Para los comerciantes representaba la ocasión de hacer un buen negocio; para el rey era una oportunidad de crear nuevas fuentes de ingresos en una época en que los rendimientos de la Corona habían disminuido mucho, y además constituía una buena forma de mantener ocupados a los nobles y un motivo de prestigio; para los nobles y miembros de la Iglesia, servir al rey o a Dios cristianizando a los "pueblos barbaros" se traducía en recompensas y cargos cada vez más difíciles de obtener dentro de los estrechos márgenes de la metrópoli; para el pueblo, lanzarse al mar era, sobre todo, emigrar, buscar una vida mejor, huir de un sistema social opresivo. Esta convergencia de intereses sólo dejaba fuera a los empresarios agrícolas, ya que la salida de brazos del país provocaba un encarecimiento de la mano de obra.

Por eso la expansión se convirtió en una especie de gran proyecto nacional al que todos o casi todos se sumaron y que pervivió durante siglos.

El atractivo de la aventura marítima no era sólo comercial. Hace cinco siglos aún había continentes parcial o totalmente desconocidos, océanos enteros que nadie había atravesado. Las

llamadas regiones ignotas atraían la imaginación de los pueblos europeos, que veían en ellas, dependiendo del caso, reinos fantásticos, habitantes monstruosos o la sed del paraíso terrestre.

Al descubrir América, por ejemplo, Colón pensaba que hacia el interior del territorio descubierto encontraría hombres con un solo ojo o con hocico de perro. Llegó a ver tres sirenas saltando sobre la superficie del mar, pero se decepcionó con sus rostros: no eran tan bellas como las creía. En una de sus cartas se refería a las personas que, hacia el poniente, nacían con rabo. En 1487, cuando dejaron Portugal con el cometido de hallar un camino terrestre hacia las Indias, Afonso de Paiva y Pero da Covilhã tenían instrucciones de don Juan II de encontrar el reino del preste Juan. La leyenda del preste Juan, descendiente de los Reyes Magos y enemigo encarnizado de los musulmanes, formaba parte del imaginario europeo al menos desde mediados del siglo XII. Se construyó partiendo de un hecho real: la existencia de Etiopía, al este de África, donde una población negra había abrazado una rama del cristianismo.

Los sueños asociados con la aventura marítima no deben verse como fantasías despreciables por encima del interés material. Sin duda fue este último el que prevaleció, sobre todo cuando empezaron a conocerse mejor los contornos del mundo y las cuestiones prácticas de la colonización se pusieron en el orden del día.

Para analizar en términos generales la expansión marítima portuguesa, hay que considerar otros dos últimos puntos. Por un lado, la expansión representó una importante renovación de las llamadas "técnicas de marear". Cuando empezaron los viajes lusitanos a Guinea, las cartas de navegación aún no señalaban latitudes ni longitudes, sólo rumbos y distancias. El perfeccionamiento de instrumentos como el cuadrante y el

astrolabio, que permitían que el barco se orientara según la posición de los astros, fue una innovación sustancial. Los portugueses desarrollaron también una arquitectura naval más apropiada con la construcción de la carabela, que se utilizó a partir de 1441. Se trataba de una embarcación ligera y veloz para las condiciones de la época, de pequeño calado, que podía gracias a ello acercarse bastante a tierra firme, evitando hasta cierto punto el riesgo de encallar. La carabela fue la niña de los ojos de los portugueses, que la usaron mucho durante los siglos XVI y XVII en sus viajes a Brasil.

El otro punto tiene que ver con un cambio gradual de mentalidad, que puede notarse en humanistas portugueses como Duarte Pacheco Pereira, Diogo Gomes y don João de Castro. La expansión marítima dejó cada vez más claro lo erróneas que eran las viejas concepciones —la descripción del mundo en la *Geografía* de Claudio Ptolomeo, por ejemplo— y empezó a dársele más valor al conocimiento basado en la experiencia. Así comenzó a ponerse en duda el criterio de autoridad. Es decir: cada vez más, el prestigio de un autor dejaba de ser garantía de la veracidad de sus afirmaciones.

El oro y las especias conformaron el binomio de bienes más codiciado por la expansión portuguesa. Es fácil comprender el interés por el oro. Por un lado, se usaba como moneda confiable y, por el otro, los aristócratas asiáticos lo empleaban para confeccionar ropa y decorar templos y palacios. Pero ¿por qué el interés por las especias, es decir, por los condimentos?

El alto valor de los condimentos se explica por lo limitado de las técnicas de conservación de aquella época, y también por los hábitos alimenticios. La Europa Occidental de la Edad Media fue "una civilización carnívora". A principios del verano, cuando se acababa el forraje en los campos, se sacrificaban grandes cantidades de ganado. La carne se almacenaba y se conservaba

precariamente salándola, ahumándola o simplemente exponiéndola al sol. Estas formas de procesamiento, que se utilizaban también para preservar el pescado, hacían que la comida fuera intragable; la pimienta servía para disimular la podredumbre. Los condimentos respondían asimismo a un gusto alimentario de la época, como el café, que sólo mucho más tarde empezó a consumirse a gran escala en todo el mundo. El oro y las especias fueron, así, bienes siempre muy buscados durante los siglos XV y XVI, pero hubo otros, como el pescado, la carne, la madera, los tintes, las drogas medicinales y, poco a poco, un instrumento dotado de voz: los esclavos africanos.

Suele considerarse la conquista de Ceuta, al norte de África, en 1415, como el punto de partida de la expansión ultramarina portuguesa. La expansión metódica se desarrolló a lo largo de la costa occidental africana y en las islas del océano Atlántico. El reconocimiento de la costa occidental africana no se llevó a cabo de la noche a la mañana. Tardó 53 años, desde que Gil Eanes dejó atrás el cabo Bojador (1434) hasta el temido paso del cabo de Buena Esperanza por Bartolomeu Dias (1487). Una vez que se penetró en el océano Índico, fue posible que Vasco da Gama llegara a India, la soñada e ilusoria India de las especias. Después los portugueses alcanzaron China y Japón, donde su influencia fue considerable, tanto que los historiadores japoneses llaman "siglo cristiano" al periodo comprendido entre 1540 y 1630.

Sin internarse profundamente en el territorio africano, los portugueses fueron instalando sobre la costa una serie de factorías, es decir, puestos comerciales fortificados. La Corona portuguesa organizó el comercio africano estableciendo un monopolio real sobre las transacciones en oro, que obligaba a acuñar la moneda en una Casa de Moneda. Se creó también, hacia 1481, la Casa de Mina o Casa de Guinea como una aduana

especial para el comercio africano. De la costa occidental de África, los portugueses extrajeron escasas cantidades de oro en polvo; marfil, cuyo comercio había estado hasta entonces en manos de mercaderes árabes que lo transportaban a través de Egipto; amomo, y, a partir de 1441, sobre todo esclavos. Éstos, al principio, se encauzaron a Portugal y se emplearon en trabajos domésticos y tareas urbanas.

La historia de la ocupación de las islas del Atlántico es muy distinta. Ahí, los portugueses realizaron significativos experimentos de plantación a gran escala usando trabajo esclavo. Después de disputarse con los españoles y perder la posesión de las Canarias, se establecieron en otras islas: Madeira (*circa* 1420), las Azores (*circa* 1427), las islas de Cabo Verde (1460) y Santo Tomé (1471). En Madeira dos sistemas agrícolas paralelos compitieron por el predominio económico. El tradicional cultivo del trigo atrajo a un número considerable de modestos campesinos portugueses que eran propietarios de sus tierras. Al mismo tiempo surgieron las plantaciones de caña de azúcar, incentivadas por mercaderes y agentes comerciales genoveses y judíos, y basadas en el trabajo esclavo.

La economía azucarera terminó venciendo, pero su éxito fue breve. Su rápido declive se debió tanto a factores internos como a la competencia con el azúcar de Brasil y de Santo Tomé. En esa isla, ubicada en el golfo de Guinea, los portugueses implantaron un sistema de grandes plantaciones de caña de azúcar muy semejante al que se creó en Brasil. Por estar cerca de la costa africana y especialmente de las factorías de San Jorge de la Mina y Axim, la isla contó con una abundante provisión de esclavos. En ella hubo ingenios que, según una descripción de 1554, llegaron a tener de 150 a 300 cautivos. Santo Tomé fue siempre un punto donde se concentraba a los esclavos oriundos del continente para luego distribuirlos por América y Europa, y ésa terminó siendo la

actividad principal de la isla cuando, en el siglo XVII, la industria azucarera vivió tiempos difíciles.

En julio de 1499 llegó a Portugal, despertando gran entusiasmo, el primer barco de la expedición de Vasco da Gama. Meses después, el 9 de marzo de 1500, salía del Tajo, en Lisboa, una flota de 13 barcos, la más fastuosa que hasta entonces hubiera zarpado del reino, aparentemente con destino a las Indias, al mando de un hidalgo de poco más de 30 años, Pedro Álvares Cabral. Tras pasar por las islas de Cabo Verde, la flota se dirigió al oeste alejándose de la costa africana, hasta que el 21 de abril divisó aquella que sería la tierra brasileña. Ese día tuvo lugar únicamente un breve descenso a tierra; sólo al día siguiente la flota anclaría en Porto Seguro, en la costa de lo que hoy es el estado de Bahía.

Desde el siglo XIX es tema de debate si la llegada de los portugueses a Brasil fue obra de la casualidad y las corrientes marinas, o si ya había noticia del Nuevo Mundo y se trató de una especie de misión secreta para que Cabral se dirigiera al occidente. Todo indica que la expedición estaba efectivamente destinada a las Indias. Pero esto no excluye la posibilidad de que otros navegantes europeos, sobre todo portugueses, hubieran frecuentado la costa de Brasil antes de 1500.

Los indígenas

Cuando los europeos llegaron a la tierra que habría de convertirse en Brasil, hallaron una población amerindia bastante homogénea desde el punto de vista cultural y lingüístico, distribuida a lo largo de la costa y en la cuenca de los ríos Paraná-Paraguay.

Una vez admitida esta homogeneidad, podemos distinguir los dos grandes bloques en que se subdividía esta población: los tupí-guaraníes y los tapuyas. Los primeros se extendían a lo largo de casi toda la costa brasileña, desde por lo menos el Ceará hasta la laguna de los Patos, en el extremo sur. Los tupíes, también denominados tupinambás, dominaban la franja costera desde el norte hasta Cananeia, al sur del actual estado de São Paulo; los guaraníes se ubicaban en la cuenca Paraná-Paraguay y en la extensión costera que está entre Cananeia y el extremo sur de lo que habría de ser Brasil. Pese a su ubicación geográfica diversa, hablamos en conjunto de los tupí-guaraníes por sus semejanzas en términos de lengua y cultura.

En algunos puntos de la costa la presencia tupí-guaraní se veía interrumpida por otros grupos, como los goitacases, en la desembocadura del río Paraíba; los aimorés, al sur de Bahía y al norte de Espírito Santo; los tremembés, en la franja que se encuentra entre el Ceará y Maranhão. A estas poblaciones se les denominaba tapuyas, término genérico empleado por los tupí-guaraníes para designar a los indígenas que hablaban otra lengua.

Es difícil analizar la sociedad y las costumbres indígenas, pues ello implica lidiar con pueblos cuya cultura es muy distinta a la nuestra y en torno a la cual han existido y siguen existiendo fuertes prejuicios. Esto se refleja, en mayor o menor medida, en los relatos escritos por los cronistas, viajeros y religiosos, sobre todo jesuitas.

En esos relatos se distingue a los indígenas con cualidades positivas de los indígenas con cualidades negativas según el mayor o menor grado de resistencia que opusieron a los portugueses. A los aimorés, por ejemplo, destacados por su eficacia militar y su rebeldía, se les representó siempre de manera desfavorable. Según esas descripciones, los indígenas

solían vivir en casas, como seres humanos; los aimorés, en cambio, vivían como los animales, en la selva. Los tupinambás se comían a sus enemigos por venganza; los aimorés lo hacían porque les gustaba la carne humana. Cuando la Corona publicó la primera ley para prohibir la esclavización de los indígenas (1570), los aimorés fueron los únicos que quedaron específicamente excluidos de la prohibición.

Hay también una escasez de datos que no se debe ni a la incomprensión ni al prejuicio, sino a su difícil obtención. No se sabe, por ejemplo, cuántos indígenas había en el territorio que equivale a lo que hoy son Brasil y Paraguay cuando los portugueses llegaron al Nuevo Mundo. Los cálculos oscilan entre cifras muy disímiles que van desde los dos millones para todo el territorio hasta aproximadamente cinco millones tan sólo en la Amazonia brasileña.

Los grupos tupíes practicaban la caza, la pesca, la recolección de frutos y la agricultura. Cuando la tierra se agotaba relativamente, migraban a otras zonas de manera temporal o definitiva. Para practicar la agricultura recurrían a la roza, tumba y quema, técnica que sería adoptada por los colonizadores. Sembraban frijol, maíz, calabaza y, sobre todo, yuca, cuya harina también se convirtió en un alimento básico durante la Colonia. Tenían una economía básicamente de subsistencia, destinada al autoconsumo. Cada aldea producía para satisfacer sus necesidades, de modo que había pocos intercambios de géneros alimenticios entre aldeas.

Empero, se establecían contactos para intercambiar mujeres y bienes de lujo, como plumas de tucán y piedras para hacer bezotes. De estos contactos surgían alianzas en las que ciertos grupos de aldeas se enfrentaban con otros. La guerra y captura de enemigos —a los que se sacrificaba en ritos antropofágicos— eran elementos constitutivos de la sociedad tupí. De estas

actividades, reservadas a los hombres, dependían la obtención de prestigio y el reabastecimiento de mujeres.

La llegada de los portugueses fue una verdadera catástrofe para los indígenas. La imaginación de los tupíes asoció a los portugueses, y sobre todo a los religiosos, llegados desde muy lejos en sus enormes embarcaciones, con los grandes chamanes que recorrían sus territorios de aldea en aldea, curando, vaticinando y hablando de una tierra de abundancia. Los blancos eran a un tiempo respetados, temidos y odiados como hombres dotados de poderes especiales.

Por otro lado, al no existir una nación indígena, sino grupos dispersos y muchas veces en conflicto, los portugueses hallaron aliados indígenas en su lucha contra los grupos que se les resistían. En sus primeros años de existencia, sin el auxilio de los tupíes de São Paulo, la villa de São Paulo de Piratininga muy probablemente habría sido conquistada por los tamoyos. Ello no quiere decir que los indígenas no opusieran una fuerte resistencia a los colonizadores, sobre todo cuando éstos trataron de esclavizarlos. Una forma excepcional de resistencia consistió en el aislamiento al que llegaron desplazándose continuamente hacia zonas cada vez más pobres. Dentro de un estrecho margen, este recurso permitió que se preservara una herencia biológica, social y cultural.

Los indígenas que se sometieron o fueron sometidos sufrieron violencia cultural, epidemias y muertes. De su contacto con los europeos resultó una población mestiza que deja ver su presencia silenciosa en la formación de la sociedad brasileña hasta nuestros días.

No obstante, la palabra *catástrofe* es sin duda la más adecuada para referirse al destino de la población amerindia en su conjunto. En la época de la conquista vivían millones de

individuos en Brasil; hoy, en cambio, sólo existen entre 300 000 y 350 000.

La colonización

El llamado hallazgo de Brasil no provocó ni remotamente el mismo entusiasmo que la llegada de Vasco da Gama a India. Brasil aparece como una tierra cuya posible explotación y contornos geográficos se ignoraban. Durante varios años se pensó que no era otra cosa que una gran isla. Lo que prevalecía eran sus atractivos exóticos —indígenas, loros, guacamayas—, tanto que algunos informantes, sobre todo los italianos, le dieron el nombre de Tierra de Loros. El rey don Manuel prefirió llamarlo Vera Cruz y poco después Santa Cruz. El nombre *Brasil* empieza a figurar en 1503. Se le ha asociado con la principal riqueza de la tierra durante sus primeros tiempos, el palo brasil. El duramen de este árbol, muy rojo, se usaba como colorante, y su madera, de gran resistencia, se empleaba en la construcción de muebles y barcos. Es curioso recordar que las "islas Brasil", o algo parecido, eran un referente fantástico en la Europa medieval. En una carta geográfica de 1367 pueden verse tres islas con ese nombre dispersas en el grupo de las Azores, por la latitud de Bretaña (Francia) y la costa de Irlanda.

Los primeros intentos de explotación del litoral brasileño se basaron en el sistema de factorías adoptado en la costa africana. Brasil se arrendó durante tres años a un consorcio de comerciantes de Lisboa encabezado por el cristiano nuevo Fernando de Loronha o Noronha, que recibió el monopolio comercial, obligándose, al parecer, a enviar anualmente seis barcos a explorar 300 leguas (alrededor de 2 000 kilómetros) de la costa y a construir ahí una factoría. El consorcio realizó

algunos viajes, pero aparentemente, cuando en 1505 terminó el periodo de arrendamiento, la Corona tomó las riendas de la explotación de sus nuevas tierras.

En esos años iniciales, entre 1500 y 1535, la principal actividad económica fue la extracción del palo brasil, que se obtenía sobre todo mediante el intercambio con los indígenas. Los árboles no crecían juntos en grandes extensiones, sino dispersos. A medida que la madera se fue agotando en la costa, los europeos empezaron a recurrir a los indígenas para obtenerla. El trabajo colectivo, en especial la tala de árboles, era una tarea común en la sociedad tupinambá, de modo que la extracción del palo brasil pudo incorporarse con relativa facilidad en los marcos tradicionales de la vida indígena. Los indígenas proveían a los europeos de madera y, en menor medida, de harina de yuca, que intercambiaban por piezas de tela, cuchillos, navajas y baratijas.

Inicialmente, Brasil mantuvo un estrecho vínculo con India, ora como punto de descanso en la ruta ya descubierta, ora como eventual paso hacia una nueva ruta, buscada sobre todo por los españoles. Cuando en 1492 llegó a América —más específicamente a las Antillas—, Colón, por ejemplo, pensó que había llegado al mar de la China. La posesión de la nueva tierra fue impugnada por Portugal, y ello llevó a una serie de negociaciones que desembocaron en el Tratado de Tordesillas (1494). Así, el mundo se dividió en dos hemisferios, separados por una línea imaginaria que pasaba 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Las tierras que se descubrieran al oeste de la línea pertenecerían a España; las que se situaran al este corresponderían a Portugal.

Esta división se prestaba a controversias, pues nunca fue posible establecer con exactitud por dónde pasaba la línea de Tordesillas. No fue sino hasta fines del siglo XVII cuando los

holandeses lograron desarrollar una técnica precisa para medir las longitudes. La desembocadura del Amazonas al norte, o la del Río de la Plata al sur, por ejemplo, que en un principio se consideraron posibles rutas occidentales hacia las Indias, ¿estarían en territorio portugués o español? Varias expediciones de ambos países se sucedieron hacia el sur, siguiendo la costa brasileña, hasta que un portugués al servicio de España, Fernando de Magallanes, cruzó el estrecho que hoy lleva su nombre y, navegando a través del océano Pacífico, llegó a Filipinas en 1521. Esta espectacular hazaña naval fue, al mismo tiempo, una decepción para los españoles. Se había encontrado la ruta occidental hacia las Indias, pero era demasiado larga y difícil como para representar una ventaja económica. Los ojos de los españoles se fijaron entonces en las riquezas de oro y plata que fueron hallando en las tierras americanas que estaban bajo su dominio.

La peor amenaza a la posesión de Brasil por parte de Portugal no provino de los españoles, sino de los franceses. Francia no reconocía los tratados de reparto del mundo, sino que sostenía el principio de *uti possidetis*, según el cual quien poseía una región era quien efectivamente la ocupaba. Los franceses participaron en el comercio del palo brasil y practicaron la piratería a lo largo de una costa demasiado extensa como para que las patrullas portuguesas pudieran guarecerla. Más tarde, en diversos momentos, se establecerían en Guanabara (1555-1560) y en el Maranhão (1612-1615).

Consideraciones de orden político convencieron a la Corona portuguesa de que era necesario colonizar la nueva tierra. La expedición de Martim Afonso de Sousa (1530-1533) representó un momento de transición entre el periodo anterior y el nuevo. Su objetivo era patrullar la costa, establecer una colonia (São Vicente, 1532) mediante la concesión no hereditaria de tierras a

los pobladores que llevaba consigo y explotar la tierra teniendo en mente la necesidad de ocuparla de manera efectiva.

Hay indicios de que Martim Afonso de Sousa aún se encontraba en Brasil cuando don Juan III decidió crear las capitanías hereditarias. Brasil se dividió entonces en 15 fracciones mediante una serie de líneas paralelas al ecuador que iban desde la costa hasta el meridiano de Tordesillas, y esas fracciones se entregaron a los "capitanes donatarios". Se trataba de un grupo diverso, en el que había miembros de la pequeña nobleza, burócratas y comerciantes, que tenían en común sus vínculos con la Corona.

Figuraban entre los donatarios el curtido navegante Martim Afonso de Sousa; Duarte Coelho, un militar destacado en Oriente, sin grandes recursos, cuya historia en Brasil descollaría por el éxito que alcanzó en Pernambuco; Jorge Figueiredo Correia, escribano de la Hacienda Real y gran negociante, vinculado con Mem de Sá y con Lucas Giraldes, de la familia de los Giraldi, negociantes y banqueros de origen florentino, y Pero do Campo Tourinho, que vendió sus propiedades en Portugal y se marchó a Brasil con 600 colonos, pero fue denunciado ante la Inquisición tras tener conflictos con los colonos y se embarcó de vuelta a Portugal. Antes de 1532, Fernando de Noronha recibió del rey la primera capitanía de Brasil: la isla de São João, que hoy lleva su nombre. No había ningún representante de la gran nobleza en la lista, pues en ese entonces eran mucho más atractivos los negocios en India, en Portugal y en las islas del Atlántico.

Los donatarios recibían de la Corona una donación mediante la cual se volvían poseedores, si bien no propietarios, de la tierra. No podían vender ni dividir la capitanía, y era atribución del rey el derecho a modificarla o incluso extinguirla. La posesión daba a los donatarios poderes extensos, tanto en la esfera económica y de recaudación de impuestos como en la

esfera administrativa. La instalación de ingenios de azúcar y molinos de agua, así como el uso de yacimientos de sal, dependía del pago de derechos; parte de los impuestos debidos a la Corona por la explotación del palo brasil, de los metales preciosos y de los derivados de la pesca correspondía también a los capitanes donatarios. Desde el punto de vista administrativo tenían el monopolio de la justicia y la autorización para fundar villas, donar *sesmarías*, reclutar colonos con fines militares y formar milicias bajo su mando.

La facultad de los donatarios de otorgar *sesmarías* dio origen a vastos latifundios. La *sesmaría* se concibió en Brasil como una extensión de tierra virgen cuya propiedad se donaba a un *sesmeiro*; éste adquiría la obligación —pocas veces cumplida— de cultivarla durante un periodo de cinco años pagando un impuesto a la Corona. Los derechos reservados a ésta incluían el monopolio de las drogas y especias, así como la recepción de parte de los impuestos. El rey se aseguró también el derecho a administrar la justicia cuando estuviera en juego la muerte o pérdida de miembros de personas de condición noble. Nombró además una serie de funcionarios que debían asegurar la recaudación de los ingresos de la Corona.

Al instituir las capitanías, la Corona recurrió a algunas fórmulas cuyo origen se remontaba a la sociedad medieval europea. Tal era el caso, por ejemplo, del derecho que se concedió a los donatarios de obtener pagos por conceder licencias para la instalación de ingenios azucareros, análogo a las banalidades que los labradores pagaban a los señores feudales. En esencia, no obstante, incluso en su forma original, las capitanías fueron un intento transitorio y todavía titubeante de colonización con vistas a integrar la colonia a la economía mercantil europea.

Con excepción de las capitanías de São Vicente y Pernambuco, las otras fracasaron en mayor o menor grado por falta de recursos, conflictos internos, inexperiencia y ataques de los indígenas. No en vano, las más prósperas conjugaron la actividad azucarera con una relación menos agresiva con las tribus indígenas. A lo largo de los años, las capitanías fueron readquiridas por la Corona mediante la compra; subsistieron como unidad administrativa, pero cambiaron de carácter, pues pasaron a manos del Estado. Entre 1752 y 1754 el marqués de Pombal prácticamente concluyó la transición de las capitanías del ámbito privado al público.

Cuando don Juan III decidió establecer un Gobierno General en Brasil, estaban sucediendo ciertos hechos significativos para la Corona portuguesa en la esfera internacional. En primer lugar, empezaban a verse los primeros signos de crisis en los negocios de India. Portugal había sufrido además varias derrotas militares en Marruecos, aunque su sueño de un Imperio africano aún no se había extinguido. El mismo año en que Tomé de Sousa fue enviado a Brasil como primer gobernador general (1549) se cerró, por déficit, el depósito comercial portugués de Flandes. Por último, a diferencia de lo que sucedía con las tierras de Brasil, los españoles tenían un éxito creciente en la explotación de metales preciosos en su colonia americana: en 1545 habían descubierto la gran mina de plata de Potosí. Si bien es cierto que todos estos factores pudieron haber pesado en la decisión de la Corona, debemos recordar que, internamente, el fracaso de las capitanías hizo aún más evidentes los problemas de la precaria administración de la América lusitana.

La institución del Gobierno General representaría un paso importante para la organización administrativa de la colonia. Tomé de Sousa —un hidalgo con experiencia en África y en India

— llegó a Bahía con amplias instrucciones por escrito y acompañado de más de 1 000 personas, entre las cuales se contaban 400 desterrados. Estas instrucciones revelan el propósito de asegurar la posesión territorial de la nueva tierra, colonizarla y organizar los ingresos de la Corona. Para cumplir con estos objetivos se crearon algunos cargos. Los principales eran el de oidor, que se encargaba de administrar la justicia; el de capitán mayor, responsable de la vigilancia de la costa, y el de proveedor mayor, encargado del control y crecimiento de la recaudación.

Sin embargo, en el siglo XVI Brasil no ofrecía riquezas considerables a los cofres reales. Al contrario: según cálculos del historiador Vitorino Magalhães Godinho, en 1558 la recaudación proveniente de Brasil representaba únicamente alrededor de 2.5% de los ingresos de la Corona, al tiempo que el comercio con India equivalía a un 26 por ciento.

Junto con el gobernador general llegaron los primeros jesuitas —Manuel da Nóbrega y cinco compañeros suyos—, con el propósito de catequizar a los indígenas y disciplinar al bajo y mal afamado clero de la colonia. Más tarde (en 1533) se creó el obispado de São Salvador, subordinado al arzobispado de Lisboa, y se avanzó así hacia la organización del Estado y de la Iglesia, estrechamente vinculados. El arranque de los Gobiernos generales significó también el establecimiento de un polo administrativo en la organización de la colonia. Siguiendo las instrucciones recibidas, Tomé de Sousa emprendió el largo trabajo de construir São Salvador, que fue la capital de Brasil hasta 1763.

El establecimiento de un Gobierno General constituyó un esfuerzo de centralización administrativa, pero el gobernador general no detentaba todos los poderes, y en los primeros tiempos tampoco podía ejercer una actividad muy amplia. Las

conexiones entre las capitanías eran bastante precarias, y ello limitaba el radio de acción de los gobernadores. La correspondencia de los jesuitas da claras muestras de este aislamiento. En una carta enviada de Bahía a sus hermanos de Coímbra en 1552, el padre Francisco Pires se quejaba de que únicamente podía escribir sobre asuntos locales, ya que "a veces pasa un año sin que sepamos los unos de los otros, por los tiempos y los pocos navíos que andan por la costa, y a veces se ven más pronto navíos de Portugal que de las capitanías". Un año después, desde el interior del sertón de São Vicente, Manuel da Nóbrega decía prácticamente lo mismo: "Más fácil es que venga de Lisboa que de Bahía recado a esta capitanía".

Pasadas las primeras tres décadas, que estuvieron marcadas por el esfuerzo de asegurar la posesión de la nueva tierra, la colonización empezó a tomar forma. Como toda América Latina, Brasil habría de convertirse en una colonia cuya razón de ser básica sería la de proveer al comercio europeo de géneros alimenticios o minerales de gran importancia. La política de la metrópoli portuguesa consistió en fomentar la empresa comercial basada en algunos pocos productos exportables producidos a gran escala, y asentada sobre la gran propiedad. Este lineamiento debía atender a los intereses de acumulación de riqueza en la metrópoli lusa a manos de los grandes comerciantes, de la Corona y de sus ahijados. Como Portugal no tenía el control de los circuitos comerciales en Europa, que estaban en poder de los españoles, holandeses e ingleses, dicho lineamiento terminó por atender también al conjunto de la economía europea.

La elección de la gran propiedad tuvo que ver con la conveniencia de producir a gran escala. Además, los pequeños propietarios autónomos hubieran tendido a producir para su

propia subsistencia, vendiendo en el mercado tan sólo un reducido excedente; proceder contrario a los objetivos de la iniciativa mercantil.

A la empresa comercial y al régimen de la gran propiedad hay que añadir un tercer elemento: el trabajo forzado. También en este sentido la regla será común a toda América Latina, con sus diferencias. Mientras que en la América española predominaron formas distintas de trabajo servil, en Brasil dominó la esclavitud.

¿Por qué se recurrió a una relación de trabajo odiosa a nuestros ojos, que parecía medio muerta, precisamente en la época que conocemos pomposamente como la aurora de los tiempos modernos? Para responder sintéticamente, podría decirse que no había gran oferta de trabajadores en condiciones de emigrar como semidependientes o asalariados y que el trabajo asalariado no convenía a los fines de la colonización. Dada la disponibilidad de tierras, pues una cosa era la concesión de *sesmarías* y otra su ocupación efectiva, no hubiera sido fácil mantener a los trabajadores asalariados en las grandes propiedades. Éstos habrían tratado, quizá, de sobrevivir de otra manera, lo cual habría puesto trabas al adecuado flujo de mano de obra hacia la empresa mercantil.

No obstante, aunque así se explica en resumen la introducción del trabajo esclavo, ¿por qué se optó por el negro, antes que por el indígena? La principal razón es que el comercio internacional de esclavos provenientes de la costa africana era en sí mismo un negocio tentador, que acabó por convertirse en el gran negocio de la Colonia. Portugueses, holandeses y brasileños —estos últimos durante la etapa final de la Colonia— se disputaron el control de este sector. El tráfico era, pues, una potencial fuente de acumulación de riqueza, no sólo un medio de proveer de brazos a la gran agricultura de exportación. Debemos

recordar que el paso de la esclavitud del indígena a la esclavitud del negro varió en términos de tiempo y espacio. Fue más veloz en el núcleo central y más rentable para la empresa mercantil, es decir, para la economía azucarera, que tenía condiciones para absorber el precio de la compra del esclavo negro, mucho más elevado que el del indígena. Fue una transición más lenta en las zonas periféricas, como São Paulo, que sólo a principios del siglo XVIII, con el descubrimiento de las minas de oro, empezó a recibir esclavos negros en un número regular y considerable.

Además de lo atractivo que resultaba el comercio negrero, la esclavitud del indígena enfrentó una serie de inconvenientes para fines de la colonización. La cultura de los indígenas era incompatible con el trabajo intensivo y regular; tanto más con el trabajo forzado que exigían los europeos. No es que fueran vagos ni perezosos. Sólo hacían lo necesario para asegurar su subsistencia, lo cual no era difícil en una época de abundantes peces, frutas y animales. Dedicaban gran parte de su energía e imaginación a los ritos, festividades y guerras. Las nociones de trabajo continuo o de lo que hoy llamamos productividad les resultaban ajenas.

Podemos distinguir dos intentos básicos de sometimiento de los indígenas por parte de los portugueses. Uno de ellos, emprendido por los colonos de acuerdo con un frío cálculo económico, consistió en la simple y sencilla esclavización. El otro lo pusieron en práctica las órdenes religiosas, sobre todo los jesuitas, por motivos que tenían mucho que ver con sus proyectos misioneros. Se trató del esfuerzo por convertir a los indígenas, a través de la enseñanza, en "buenos cristianos", reuniéndolos en pequeños pueblos o aldeas. Ser buen cristiano significaba también adquirir los hábitos de trabajo de los europeos; de este modo se crearía un grupo de agricultores indígenas flexible ante las necesidades de la colonia.

Estas dos políticas eran incompatibles. Las órdenes religiosas tuvieron el mérito de tratar de proteger a los indígenas de la esclavitud impuesta por los colonos, lo cual causó incontables conflictos entre colonos y sacerdotes. No obstante, estos últimos tampoco respetaban la cultura indígena. Al contrario: dudaban incluso que los indígenas fueran personas. El padre Manuel da Nóbrega, por ejemplo, decía que los "indios son perros en el comerse y matarse; y son cerdos en los vicios y en la manera en que se tratan".

Los indígenas se resistieron a las varias formas de sometimiento mediante la guerra, la fuga y el rechazo al trabajo forzado. En comparación con los esclavos africanos, las poblaciones indígenas estaban en mejores condiciones de resistir. Mientras que los africanos se encontraban en un territorio desconocido en el que se les implantaba por la fuerza, los indígenas estaban en casa.

Otro factor importante para que la esclavitud indígena quedara en segundo plano fue la catástrofe demográfica. Los indígenas fueron víctimas de enfermedades como el sarampión, la viruela y la gripa, contra las que no tenían defensas biológicas. Entre 1562 y 1563 se destacaron por su virulencia dos olas epidémicas que mataron, al parecer, a más de 60 000 indígenas, sin contar a las víctimas del sertón. La muerte de la población indígena, que en parte se dedicaba a plantar alimentos, se tradujo en pérdida de brazos y en una terrible hambruna en el nordeste del territorio.

No en vano, a partir de la década de 1570 se fomentó la importación de africanos y la Corona empezó a tomar medidas, promulgando diversas leyes para tratar de impedir la mortandad y la esclavización desenfrenada de los indígenas. Pero las leyes tenían excepciones y se les burlaba con facilidad. Se siguió esclavizando indígenas a consecuencia de "guerras

justas" —esto es, guerras consideradas defensivas—, en castigo por la práctica de la antropofagia y a través del rescate, entre otras vías. El rescate consistía en la compra de indígenas apresados por otras tribus que iban a ser devorados en ritos antropofágicos. La Corona no determinó la liberación definitiva de los indígenas sino hasta 1758. Pero, en esencia, la esclavitud indígena se había abandonado mucho antes, en parte por las dificultades ya señaladas y en parte por la existencia de una solución alternativa.

En el siglo XV, mientras recorrían la costa africana, los portugueses iniciaron el tráfico de africanos, facilitado por el contacto con sociedades que, en su mayoría, ya conocían el valor mercantil del esclavo. Para las últimas décadas del siglo XVI no sólo estaba ya razonablemente organizado el comercio negrero, sino que también iba quedando claro su carácter lucrativo. Los colonizadores sabían de las habilidades de los negros, sobre todo por su rentable empleo en la actividad azucarera de las islas del Atlántico. Muchos esclavos provenían de culturas en que el trabajo del hierro y la cría de ganado eran usuales. Su capacidad productiva era, pues, muy superior a la de los indígenas. Se calcula que durante la primera mitad del siglo XVII, en los años de apogeo de la economía azucarera, el costo de adquisición de un esclavo negro se amortizaba en un lapso de entre 13 y 16 meses de trabajo; e incluso después de 1700, tras una fuerte alza en los precios de los cautivos, un esclavo se pagaba en 30 meses.

Los africanos fueron enviados del llamado "continente negro" a Brasil en un flujo de intensidad variable. Los cálculos en torno al número de personas transportadas como esclavos varían mucho. Se estima que entre 1550 y 1855 entraron por los puertos brasileños cuatro millones de esclavos, en su mayoría jóvenes de sexo masculino.

Las regiones de las que procedían dependieron de la organización del tráfico, de las condiciones locales de África y, en menor medida, de las preferencias de los señores brasileños. En el siglo XVI el mayor número de esclavos salió de la costa de Guinea, específicamente de núcleos como Bissau, Cacheu y San Jorge de la Mina. Del siglo XVII en adelante, zonas más meridionales de la costa africana —Congo y Angola— se convirtieron en los centros exportadores más importantes a través de los puertos de Luanda, Benguela y Cabinda. Los angoleños llegaron en mayor número en el siglo XVIII y conformaron, al parecer, 70% de la masa de esclavos transportados a Brasil en aquel siglo.

Se suele dividir a los pueblos africanos en dos grandes ramas étnicas: los "sudaneses", que predominan en el África occidental, en el Sudán egipcio y en la costa norte del golfo de Guinea, y los "bantúes", que se extienden por el África ecuatorial y tropical, parte del golfo de Guinea, Congo, Angola y Mozambique. Esta gran división no debe hacernos olvidar que los negros esclavizados en Brasil provenían de muchas tribus o reinos con culturas propias, como, por ejemplo, los yoruba, yeyé,[1] tapa[2] y hausa, entre los sudaneses, y los angola, benguela, monjolo[3] y mozambique entre los bantúes.

Los grandes centros importadores de esclavos fueron Salvador y más tarde Río de Janeiro, cada cual con su organización propia y en fuerte rivalidad. Los traficantes bahianos se sirvieron de una valiosa moneda de cambio en la costa africana: el tabaco que se producía en el Recôncavo (la zona que rodea a Salvador). Siempre estuvieron más vinculados con la Costa de la Mina, Guinea y a partir de mediados de 1770, cuando declinó el tráfico de la Costa de la Mina, con el golfo de Benín. Río de Janeiro recibió sobre todo esclavos de Angola y superó a Bahía con el descubrimiento de las minas de oro, el avance de la

economía azucarera y el gran crecimiento urbano a partir de principios del siglo XIX.

Sería erróneo pensar que los indígenas se opusieron a la esclavitud mientras que los negros la aceptaron pasivamente. Las fugas individuales o masivas, la agresión contra los señores y la resistencia cotidiana formaron parte de las relaciones entre señores y esclavos desde los primeros tiempos. En el Brasil colonial existieron cientos de *quilombos*: establecimientos constituidos por negros que huían de la esclavitud y reproducían en Brasil formas de organización social semejantes a las africanas. Palmares —una red de pueblos ubicada en una zona que hoy corresponde en parte al estado de Alagoas— fue sin duda el más importante de estos *quilombos*. Fundado a principios del siglo XVII, resistió ataques de portugueses y holandeses durante casi 100 años hasta que cayó en 1695.

Poco se sabe del *quilombo* de Palmares, mencionado sólo en algunas fuentes portuguesas que dan noticia de la prisión y ahorcamiento de Zumbi, líder de los rebeldes durante la última fase de existencia del *quilombo*. Con el paso del tiempo, Zumbi se convirtió en un símbolo de la resistencia de los negros esclavizados. Hoy en día, su figura está presente en todos los movimientos afirmativos de la población negra. Recientes investigaciones arqueológicas en la zona donde existió el *quilombo* sugieren la existencia de una comunidad socialmente diversa, que no sólo incluía negros que habían sido esclavos, sino también blancos perseguidos por la Corona por motivos religiosos o por la práctica de delitos e infracciones menores.

Si bien hubo estas varias formas de resistencia, al menos hasta las últimas décadas del siglo XIX los esclavos africanos o afrobrasileños no tuvieron condiciones para desorganizar el trabajo forzado. Bien o mal, se vieron obligados a adaptarse a él. Entre los varios factores que limitaron la posibilidad de la

rebeldía colectiva hay que recordar que, a diferencia de los indígenas, los negros se habían visto desarraigados de su medio, separados arbitrariamente, arrojados en sucesivas levas a un territorio desconocido.

Por otro lado, ni la Iglesia ni la Corona se opusieron a la esclavitud del negro. Algunas órdenes religiosas, como la de los benedictinos, se contaron, de hecho, entre los grandes propietarios de cautivos. Se utilizaron varios argumentos para justificar la esclavitud africana. Se decía que se trataba de una institución que ya existía en África, de manera que únicamente se estaban transportando cautivos al mundo cristiano, donde se les civilizaría y salvaría dándoles a conocer la verdadera religión. Además, se consideraba al negro un ser racialmente inferior. En el curso del siglo XIX, las "teorías científicas" reforzaron este prejuicio: el tamaño y la forma del cráneo de los negros, el peso de su cerebro, etc., "demostraban" que se trataba de una raza de escasa inteligencia y emocionalmente inestable, biológicamente destinada a someterse.

Recordemos también el trato que se daba a los negros en la legislación. En este aspecto, el contraste con los indígenas es evidente. Éstos contaban con leyes que los protegían de la esclavitud, aunque se aplicaran poco y dieran margen a muchas excepciones. Los negros esclavizados no tenían derechos, pues de hecho se les consideraba jurídicamente como cosas.

En cuanto al aspecto demográfico, aunque las cifras varían, hay datos sobre la alta tasa de mortalidad de los esclavos negros, especialmente de los niños y recién llegados, en comparación, por ejemplo, con la población esclava en Estados Unidos. Observadores de principios del siglo XIX calcularon que la población esclava decaía en una tasa de entre 5 y 8% al año. Datos recientes revelan que en 1872 la esperanza de vida de un esclavo de sexo masculino al nacer giraba en torno a los 20 años,

mientras que la de la población como un todo era de 27.4 años. Por su parte, un hombre cautivo nacido en Estados Unidos hacia 1850 tenía una esperanza de vida de 35.5 años.

Pese a lo escandaloso de estos números, no se puede decir que los esclavos negros hayan sido afectados por una catástrofe demográfica tan grande como la que diezmó a los indígenas. Aparentemente, los negros oriundos del Congo, del norte de Angola y de Dahomey —el actual Benín— eran menos susceptibles al contagio de enfermedades como la viruela. De cualquier manera, aun con la destrucción física prematura de los negros, los señores de esclavos tuvieron siempre la posibilidad de renovar su abasto mediante la importación. La esclavitud brasileña dependía por completo de esa fuente. Salvo raras excepciones, no hubo intentos de propiciar el crecimiento de la población esclava ya instalada en Brasil. La fertilidad de las mujeres esclavas era baja. Además, criar a un niño durante 12 o 14 años se consideraba una inversión arriesgada teniendo en cuenta las altas tasas de mortalidad que resultaban de sus propias condiciones de vida.

La forma en que la Corona portuguesa trató de asegurarse las mayores ganancias de la empresa colonial a lo largo de algunos siglos tiene que ver con las concepciones de la política económica mercantilista, vigente en aquella época. De acuerdo con esa política, las colonias debían propiciar la autosuficiencia de la metrópoli, convirtiéndose en zonas que cada potencia colonizadora se reservaba para su competencia internacional con las demás. Para ello había que establecer una serie de normas y prácticas que apartaran a la competencia de la explotación de las respectivas colonias, conformándose así el sistema colonial. El eje básico de este sistema era el pacto

colonial, es decir, la exclusividad del comercio exterior de la colonia a favor de la metrópoli.

Se trataba de hacer todo lo posible por impedir que las mercancías de la colonia fueran transportadas por barcos extranjeros, sobre todo cuando la intención era venderlas directamente en otros países de Europa; e, inversamente, que llegaran mercancías a la colonia en barcos de esos otros países, en especial mercancías que no se hubieran producido en la metrópoli. O más sencillamente, se procuraba reducir, en la medida de lo posible, los precios que se pagaban por los productos de la colonia para venderlos con mayores ganancias en la metrópoli. Se trataba también de obtener mayores ganancias vendiendo en la colonia, sin competencia, los bienes que ésta importaba. El pacto colonial adoptó varias formas: el arrendamiento, la explotación directa por parte del Estado, la creación de compañías privilegiadas de comercio en beneficio de determinados grupos comerciales metropolitanos, etcétera.

En el caso portugués, los preceptos mercantilistas no se aplicaron de manera consistente. Curiosamente, la aplicación más consecuente de la política mercantilista no ocurrió sino hasta mediados del siglo XVIII, bajo el mando del marqués de Pombal, cuando los principios de esa política ya se estaban poniendo en duda en el resto de la Europa Occidental. La Corona abrió grietas en esos principios, sobre todo porque tenía una capacidad limitada para imponerlos. No nos referimos sólo a la existencia del contrabando, pues éste era simplemente una violación de las reglas del juego. Nos referimos, sobre todo, a la posición de Portugal en el contexto de las naciones europeas. Los portugueses habían estado en la vanguardia de la expansión marítima, pero no tenían los medios necesarios para monopolizar su comercio colonial. Ya desde el siglo XVI las grandes plazas comerciales estaban en Holanda, no en Portugal.

Los holandeses fueron importantes socios comerciales de Portugal; transportaron sal y vino portugueses, y azúcar brasileño, a cambio de productos manufacturados, quesos, cobre y telas. Participaron también en el tráfico internacional de esclavos.

Más tarde, a lo largo del siglo XVII, la Corona se vería orillada a establecer relaciones desiguales con una de las nuevas potencias emergentes: Inglaterra. Debido a estas condiciones, el pacto colonial luso varió de acuerdo con las circunstancias y osciló entre la relativa libertad y un sistema centralizado y dirigido, combinado con concesiones especiales. Esas concesiones representaban, en el fondo, la participación de otros países en el usufructo de la explotación del sistema colonial portugués.

Sin describir todos los avances y retrocesos, veamos algunos ejemplos. Hubo una fase de relativa libertad comercial entre 1530 y 1571, cuando el rey don Sebastián decretó la exclusividad de los barcos portugueses en el comercio de la colonia, medida que coincidió con los primeros años de la gran expansión de la economía azucarera. El periodo de la unión de las dos Coronas (1580-1640), cuando el rey de España ocupó también el trono de Portugal, se caracterizó por crecientes restricciones a la participación de otros países en el comercio colonial, teniendo como blanco especialmente a Holanda, que estaba en guerra contra España. Aun así, hay noticias de un tráfico regular y directo entre Brasil y Hamburgo, en Alemania, hacia 1590.

Tras el fin del periodo de la unión de las dos Coronas, con la aclamación de don Juan IV como rey de Portugal, hubo una breve fase de "libre comercio" poco reglamentada y sin control sobre el mercado colonial de importación. Pero en 1649 se pasó a un nuevo sistema de comercio centralizado y dirigido, por medio de flotas. Con capital proveniente sobre todo de cristianos nuevos se creó la Compañía General del Comercio de Brasil. Ésta debía

mantener una flota de 36 barcos armados para custodiar a los navíos mercantes que salían y volvían a Brasil dos veces al año; a cambio, se le otorgó el monopolio de las importaciones de vino, harina, aceite de oliva y bacalao en la colonia, así como el derecho a fijar los precios de esos productos. A partir de 1694 la compañía se convirtió en un órgano gubernamental.

Sin embargo, la creación de esta empresa no impidió que Portugal hiciera concesiones a Holanda y sobre todo a Inglaterra. En pocas palabras, la Corona buscaba la protección política de los ingleses a cambio de ventajas comerciales. Un buen ejemplo de ello es el tratado impuesto por Oliver Cromwell en 1654, que aseguraba a los ingleses el derecho a negociar con la colonia brasileña, excepto en lo relativo a los productos monopolizados por la Compañía General del Comercio de Brasil. El sistema de flotas no se abandonó sino hasta 1765, cuando el marqués de Pombal decidió fomentar el comercio y restringir el creciente papel de los ingleses. Para ello se crearon nuevas compañías (la Compañía del Gran Pará y Maranhão y la Compañía de Pernambuco y Paraíba), que representaron las últimas expresiones de la política mercantilista en Brasil.

Las dos instituciones básicas que por su naturaleza estaban destinadas a organizar la colonización de Brasil fueron el Estado y la Iglesia católica. Estaban vinculadas entre sí, pues el catolicismo se reconocía como la religión del Estado. En principio se dio una división del trabajo entre estas dos instituciones. Al Estado le correspondió el papel fundamental de garantizar la soberanía portuguesa en la colonia, dotarla de una administración, desarrollar una política de poblamiento, resolver problemas básicos como la provisión de mano de obra y establecer qué tipo de relación debía existir entre la metrópoli y la colonia. Esta tarea presuponía que los colonizadores que se

instalaran en Brasil reconocieran la autoridad del Estado, ya fuera por la fuerza o por la aceptación, o por ambas vías.

En ese sentido, el papel de la Iglesia se volvía relevante. Como en sus manos estaba la educación de la gente, el "control de las almas" era un instrumento muy eficaz para difundir la idea general de obediencia y, más precisamente, de obediencia al poder del Estado. Pero el papel de la Iglesia no se limitaba a eso. Estaba presente en la vida y en la muerte de las personas, en los episodios decisivos como el nacimiento, el matrimonio y la defunción. El ingreso a la comunidad, el apego a los principios de una vida decente, la partida sin pecado de este "valle de lágrimas" dependían de actos monopolizados por la Iglesia: el bautismo, la confirmación, el matrimonio religioso, la confesión y la extremaunción, así como la inhumación en un cementerio que recibía el significativo nombre de "camposanto".

Como se sabe, en la historia del mundo occidental las relaciones entre Estado e Iglesia han variado mucho de país a país, y no han sido uniformes a lo largo del tiempo. En el caso portugués, la Iglesia estuvo subordinada al Estado a través de un mecanismo denominado patronato regio, el cual consistió en una amplia concesión de la Iglesia de Roma al Estado portugués a cambio de la garantía de que la Corona promovería y aseguraría los derechos y la organización de la Iglesia en todas las tierras descubiertas. El rey de Portugal se quedaba con el derecho de recaudar el tributo pagado por los fieles, conocido como diezmo, correspondiente a un décimo de las ganancias obtenidas por cualquier actividad. También era atribución de la Corona crear diócesis y nombrar a los obispos.

Muchas de las facultades de la Corona, como, por ejemplo, la responsabilidad de remunerar al clero, construir edificios destinados al culto y velar por su conservación, resultaban, al menos en teoría, en una mayor subordinación de la Iglesia. Para

supervisar todas estas tareas, el Gobierno portugués creó una especie de departamento religioso del Estado: la Mesa de la Conciencia y Órdenes.

El control de la Corona sobre la Iglesia se vio limitado en parte porque, hasta la época del marqués de Pombal (1750-1777), la Compañía de Jesús tuvo una fuerte influencia en la corte. En la colonia, el control estatal enfrentó otras limitantes. Por un lado, era muy difícil regular las actividades del clero secular, disgregado por el territorio; por el otro, las órdenes religiosas alcanzaron un mayor grado de autonomía. Esta autonomía de las órdenes de franciscanos, mercedarios, benedictinos, carmelitas y sobre todo jesuitas se debió a varias circunstancias. Las órdenes obedecían a las reglas propias de cada institución y tenían una política definida en lo relativo a asuntos vitales de la colonización, como la cuestión indígena. Además, al convertirse en propietarias de grandes extensiones de tierra y de empresas agrícolas, dejaron de depender de la Corona para sobrevivir.

Cuando se les presentaba la oportunidad, los sacerdotes seculares trataban de librarse por la vía individual del peso del Estado y de la Iglesia misma. La presencia de religiosos también puede constatarse en prácticamente todos los movimientos de rebelión desde 1789, y se prolongó después de la Independencia de Brasil hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, sería erróneo atribuir a todo el clero estas marcas de rebeldía, notorias pero excepcionales. En su actividad diaria, a veces en silencio y a veces con pompa, la Iglesia trató de cumplir con su misión de convertir a los indígenas y negros y de inculcar en la población la obediencia a sus preceptos y a los del Estado.

En la época de la colonización, el Estado portugués era de tipo absolutista. En teoría, todos los poderes se concentraban, por derecho divino, en la persona del rey. El reino —es decir, el

territorio, los súbditos y sus bienes— pertenecía al monarca, era su patrimonio. Se trataba, pues, de un Estado caracterizado por el patrimonialismo. Esto no quiere decir que el rey no tuviera que tomar en cuenta los intereses de los distintos estratos sociales —nobles, comerciantes, clero, gente del pueblo—, ni tampoco que gobernara solo. El que se prefiera la expresión "Corona" en vez de "rey" para designar al poder de la monarquía portuguesa es un indicio de ello. Aunque el rey tenía la última palabra, una burocracia elegida por él y que conformaba un cuerpo de gobierno tenía mucho peso en la toma de decisiones. Incluso se pusieron límites a la indefinición entre lo público y lo privado con una serie de medidas, sobre todo fiscales, que tenían el objetivo de delimitar la acción del soberano. El "bien común" se presentaba como una idea nueva que justificaba que se restringieran los poderes reales de imponer préstamos o tomar bienes privados para su uso.

La construcción de una administración colonial desplegó y debilitó el poder de la Corona. Es cierto que en la metrópoli se tomaban las decisiones centrales. Pero los administradores de Brasil tenían una esfera de atribuciones, se veían obligados a improvisar medidas ante situaciones nuevas y muchas veces trataban de mantener el equilibrio entre las presiones inmediatas de los colonizadores y las instrucciones emanadas desde la distante Lisboa.

La sociedad colonial

En el contexto de la estructura social de la colonia, un principio básico de exclusión distinguía ciertas categorías, por lo menos hasta la ley de 1773. Se trataba del precepto de la pureza de sangre. Impuros eran los cristianos nuevos, los negros (aun los

libres), los indígenas —en cierta medida— y los diversos tipos de mestizos. De ese principio racial se derivaba la imposibilidad de ocupar cargos, recibir títulos de nobleza, participar en hermandades prestigiosas, etc. La ley de 1773 terminó con la distinción entre cristianos antiguos y nuevos, lo cual no quiere decir que a partir de entonces se hubiera extinguido el prejuicio contra estos últimos.

El criterio discriminatorio se refería esencialmente a las personas. Pero había un corte más profundo, que separaba a las personas de las no personas, es decir, a la gente libre de los esclavos, jurídicamente considerados cosas. La condición de libre o esclavo estaba muy relacionada con la etnia y el color, pues los esclavos eran ante todo negros, y luego indígenas y mestizos. Los mestizos estaban sujetos a toda una nomenclatura, en la que se distinguían los mulatos; los *mamelucos*, *curibocas* o *caboclos*, nacidos de la unión entre blanco e indígena, y los *cafuzos*, resultantes de la unión entre negro e indígena.

Sin embargo, conviene diferenciar la esclavitud indígena de la negra. Desde el principio de la colonización hasta que la esclavitud indígena se extinguió formalmente, hubo indígenas cautivos e indígenas a los que se llamaba *forros* (libertos) o *administrados*. Estos últimos eran los que, tras su captura, habían sido puestos bajo la tutela de los colonizadores. Su situación no era muy distinta de la de los cautivos. Pero aunque en general la condición de los indígenas era muy penosa, no era igual a la de los negros. La protección de las órdenes religiosas en los asentamientos indígenas puso límites a la simple y llana explotación. La Corona misma trató de ejercer una política menos discriminatoria.

Una autorización de 1755, por ejemplo, llegó a fomentar los matrimonios mixtos entre indígenas y blancos puesto que no presentaban "ninguna infamia". Estaba prevista una preferencia

en términos de "empleos y honores" para los descendientes de estas uniones y se prohibía que se les llamara con la voz *caboclo* u otras semejantes que pudieran considerarse "injuriosas". Años más tarde, el virrey de Brasil ordenó que se le retirara el cargo de capitán mayor a un indígena porque "había mostrado tener tan bajos sentimientos que se casó con una negra, manchando su sangre con esta alianza y volviéndose, así, indigno de ejercer el referido cargo".

La presencia significativa de africanos y afrobrasileños en la sociedad brasileña puede constatarse mediante los indicadores poblacionales de fines del periodo colonial. En las cuatro regiones principales —Minas Gerais, Pernambuco, Bahía y Río de Janeiro—, negros y mulatos representaban, respectivamente, el 75, 68, 79 y 64% de la población. Sólo São Paulo tenía una población mayoritariamente blanca (56%). Los cautivos trabajaron en los campos, en los ingenios, en las minas y como sirvientes en la casa grande. En las ciudades realizaban penosas tareas en el transporte de carga, de personas y de desechos malolientes, o en la industria de la construcción. Fueron también artesanos, tenderos, vendedores ambulantes, recaderos, etcétera.

Las relaciones esclavistas no se limitaron a un vínculo directo entre señor y esclavo, excluyendo a otras personas. Hubo cautivos que se rentaban para que prestaran servicios a terceros, y en los centros urbanos existieron los esclavos a jornal, figura común en el Río de Janeiro de los primeros decenios del siglo XIX: los señores permitían que los esclavos obtuvieran su "jornal" prestando servicios o vendiendo mercancías, y les cobraban a cambio, diaria o semanalmente, una cantidad fija. Los esclavos a jornal se utilizaron a pequeña y gran escala, desde un solo cautivo hasta 30 o incluso 40. Si bien la mayoría de ellos ejercía su actividad en las calles, cayendo incluso en la prostitución y en

la mendicidad con el consentimiento de sus señores, también trabajaron bajo esta modalidad obreros y barberos instalados en establecimientos.

Ni siquiera entre los esclavos dejó de haber distinciones. Algunas tenían que ver con la labor que desempeñaban, pues no era lo mismo servir en la casa grande que trabajar en el campo; ser esclavo en una gran propiedad o esclavo a jornal en las ciudades. Otras distinciones tenían que ver con la nacionalidad, el tiempo de permanencia en el país o el color de piel. Bozal era el cautivo recién llegado de África que desconocía la lengua y las costumbres; ladino, el que ya estaba relativamente "adaptado" y hablaba y entendía el portugués; criollo era el nacido en Brasil. Una cosa era el negro retinto, en un extremo, y otra el mulato claro, en el otro. Por lo general, se prefería a los mulatos y criollos para las tareas domésticas, artesanales y de inspección, y se delegaban a los más oscuros, sobre todo a los africanos, los trabajos más pesados.

Además de las distinciones entre la masa esclavizada, debemos pensar que en el Brasil colonial hubo un gran número de africanos o afrobrasileños libres o libertos. Datos de fines del periodo indican que alrededor de 42% de la población negra o mulata correspondía a esta categoría. Su condición era ambigua. Considerados formalmente libres, volvían a ser esclavizados en la práctica de manera arbitraria, sobre todo cuando el color de su piel y sus rasgos mostraban que se trataba de negros. No podían pertenecer a la Cámara Municipal ni a hermandades laicas prestigiosas como la Tercera Orden de San Francisco. Incluso la libertad de una persona manumitida podía revocarse pretextando actitudes que se juzgaran poco respetuosas hacia su antiguo señor.

La esclavitud fue una institución nacional. Permeó toda la sociedad, condicionando su modo de actuar y de pensar. El deseo de poseer esclavos y el esfuerzo por obtenerlos iban desde la clase dominante hasta el modesto artesano de las ciudades. Hubo dueños de ingenios y propietarios de minas que poseían cientos de esclavos, pequeños campesinos con dos o tres, y hogares con tan sólo uno. El prejuicio contra el negro superó el fin de la esclavitud y ha llegado, modificado, hasta nuestros días. Al menos hasta la introducción masiva de trabajadores europeos en el centro-sur de Brasil, el trabajo manual fue socialmente despreciado como "cosa de negros".

En teoría, las personas libres de la colonia fueron encasilladas en una jerarquía estamental. La división social en estamentos —nobleza, clero y pueblo— era propia del Antiguo Régimen. El trasplante de ese modelo vigente en Portugal tuvo pocos efectos prácticos en Brasil. La élite blanca anhelaba títulos de nobleza, pero no hubo una aristocracia hereditaria. Los hidalgos eran pocos, y la gente común con pretensiones de ascender a la nobleza constituía la gran mayoría.

Esto no significa que la sociedad colonial estuvo conformada únicamente por señores y esclavos. Agricultores, pequeños campesinos y trabajadores poblaron los campos; en las pocas ciudades se congregaron vendedores ambulantes, pequeños comerciantes y artesanos. Pero este cuadro no se mantuvo estático. La expansión del comercio internacional de esclavos dio origen a un importante sector de la élite representado por los traficantes de Río de Janeiro y de Salvador. El descubrimiento de oro y diamantes en Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso a partir de principios del siglo XVIII y la llegada de la familia real a Río de Janeiro en los albores del siglo XIX fueron, cada cual a su manera, factores que impulsaron la diversificación social y alteraron las relaciones entre el campo y la ciudad. En lo que concierne a la

zona minera y centros urbanos como Salvador y Río de Janeiro, puede hablarse de la existencia de una burocracia administrativa, de letrados y de gente que se dedicaba a las llamadas profesiones liberales, especialmente la abogacía.

Las distintas actividades se valoraban desigualmente. La más prestigiosa, sobre todo en los primeros tiempos, no era propiamente una actividad, sino "ser señor de ingenio". De acuerdo con la famosa expresión del padre André João Antonil, en *Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas*, obra escrita a principios del siglo XVIII, "ser señor de ingenio es título al que muchos aspiran porque trae consigo el ser servido y respetado de muchos. Y [...] bien se puede estimar en Brasil el ser señor de ingenio cuanto en proporción se estiman los títulos entre los hidalgos del Reino".

El comercio se consideraba una profesión menos digna, y, en teoría, los hombres de negocios estaban excluidos de las Cámaras y de los honores. El hecho de que muchos de ellos fueran cristianos nuevos sumaba un elemento más de discriminación. A los artesanos también se les despreciaba, pues el trabajo manual se consideraba una actividad inferior. Casi siempre sin representación en las Cámaras, estos sectores lograron hacerse oír en ocasiones a través del *juiz de fora* (juez externo), un magistrado profesional nombrado por la Corona que presidía la Cámara en las ciudades más grandes.

En la cúspide de la pirámide social de la población libre, al lado de la élite de los traficantes, estaban los grandes propietarios rurales y quienes se dedicaban al comercio exterior. Éste fue el cuadro típico en la costa del nordeste de Brasil y más tarde en Río de Janeiro. Al desempeñar un papel estratégico en la vida de la colonia, los grandes comerciantes no se vieron afectados por la

exclusión que, en teoría, se había impuesto a su actividad. Al contrario: desde mediados del siglo XVII describieron una curva de ascenso social y político. Participaron cada vez más en las Cámaras y hermandades prestigiosas y ocuparon cargos elevados en las milicias.

En ciertos puntos, estos dos sectores de la cúpula eran cercanos; en otros, rivalizaban. Por un lado, conformaban en su conjunto las fuerzas socialmente dominantes de la colonia frente a la masa de esclavos y hombres libres de condición inferior. El ascenso económico de los comerciantes facilitó su ingreso a la élite colonial. A través del matrimonio y de la compra de tierras, muchos de ellos se volvieron también señores de ingenios en el nordeste de Brasil, de modo que en ocasiones se borró la distinción entre comerciantes y propietarios.

Por otro lado, existían potenciales motivos de conflicto. Los grandes comerciantes influían en los precios de los productos de exportación e importación, sobre todo cuando lograban acceder a cargos en las compañías comerciales privilegiadas, organizadas por la Corona. Además, prestaban por adelantado recursos a los grandes propietarios rurales para financiar la siembra y la compra de esclavos y equipo, con garantía de hipoteca sobre sus tierras. Los problemas por deudas y las controversias por solicitudes de moratorias fueron frecuentes en la zona de los ingenios azucareros del nordeste de Brasil. Estas disputas recrudecían cuando se sumaba a ellas la diferencia de origen entre señores rurales nativos y comerciantes portugueses.

Un ejemplo extremo de estas divergencias fue la llamada Guerra de los Mascates, que tuvo lugar en Pernambuco entre 1710 y 1711. La rivalidad entre dos ciudades —Olinda y Recife— sacó a la superficie la desavenencia más profunda entre la vieja Olinda de los señores de ingenios y el Recife de los *mascates*, que poco tenían de vendedores ambulantes.[4] Se trataba en realidad

de grandes comerciantes, algunos de los cuales habían visto crecer su poder al adquirir, en subastas realizadas por la Corona, el derecho a cobrar impuestos.

Una división de la sociedad directamente vinculada con el principio de pureza de sangre era la relativa a la religión. Los súbditos de la Corona que residían en Brasil eran, por definición, católicos. Pero unos eran más católicos que otros. Estos últimos eran los cristianos nuevos, judíos o descendientes de judíos obligados a convertirse al cristianismo por decisión de la monarquía lusa (1497). Sobre ellos pesaba la sospecha adicional de practicar en secreto la religión judía. Los cristianos nuevos tuvieron un papel relevante desde los primeros tiempos de la Colonia como mercaderes, artesanos o señores de ingenios, y ocuparon también cargos civiles y eclesiásticos. Pese a la relevancia de su papel, y tal vez debido a ella, los cristianos nuevos fueron discriminados, algunos de ellos presos y muertos a manos de inquisidores. Pero estas persecuciones no fueron tan eficientes en comparación con las que se desencadenaron en la América española. La Inquisición no se instaló con carácter permanente en Brasil y, con excepción de la visita al estado del Gran Pará en 1763-1769, sus terroríficas inspecciones tuvieron lugar cuando la Corona portuguesa estaba en manos de los reyes de España. El Santo Oficio estuvo en Bahía y en Pernambuco entre 1591 y 1595, y volvió a Bahía en 1618.

Por último, hay que recordar la división entre hombres y mujeres, que va de la mano con un análisis de la familia. Tradicionalmente, sobre todo por influencia de los estudios de Gilberto Freyre, el concepto de familia en la Colonia se relaciona con el modelo patriarcal: un grupo extensivo conformado por parientes consanguíneos y políticos, agregados y protegidos, bajo

el liderazgo indiscutible de una figura masculina. La familia patriarcal tuvo gran importancia y marcó las relaciones entre la sociedad y el Estado. Pero fue característica de la clase dominante, y más específicamente de la clase dominante del nordeste de Brasil. Entre la gente de condición social inferior, la familia extensiva no existió y las mujeres solían gozar de mayor independencia cuando no tenían un marido o compañero. En Ouro Preto (1804), por ejemplo, de un total de 203 unidades domésticas, sólo 93 estaban encabezadas por varones.

Y aun en lo que respecta a las familias de la élite, el cuadro de sumisión femenina tuvo sus excepciones. En ciertas circunstancias, las mujeres desempeñaron un papel relevante en las actividades económicas. Tal fue el caso de la región de São Paulo, donde las mujeres —que hacia 1692 fueron descritas por un gobernador de la capitanía como "hermosas y varoniles"— asumían la administración de su casa y de sus bienes cuando los hombres se lanzaban durante varios años a las expediciones por el sertón.

La población colonial vivió en su mayoría en el campo. Las ciudades crecieron poco a poco y dependieron del medio rural. La capital misma de la colonia fue descrita por fray Vicente do Salvador en el siglo XVI como una "ciudad extraña, de casas sin habitantes, pues los propietarios pasaban más tiempo en sus fincas rurales y sólo acudían en tiempo de fiestas. La población urbana estaba compuesta de mecánicos que ejercían sus oficios, mercaderes, oficiales de justicia, de hacienda y de guerra, obligados a residir allí". Un padre jesuita se refiere a la pobreza de la pequeña São Paulo en el siglo XVII como resultado de la "constante ausencia de sus habitantes, porque, excepto en ocasión de tres o cuatro fiestas principales, permanecen en sus heredades o andan por los bosques y campos en busca de indios, en lo cual consumen sus vidas".

Este cuadro se modificó en parte por la creciente influencia de los grandes comerciantes, entre los que se incluía la élite de traficantes de esclavos, y por el crecimiento del aparato administrativo, que incrementó el peso cualitativo de las ciudades. Hechos como la invasión holandesa y sobre todo la llegada de la familia real a Río de Janeiro también fueron importantes para el crecimiento de los centros urbanos.

En la historiografía brasileña hay dos interpretaciones básicas, radicalmente opuestas, de las relaciones entre Estado y sociedad. Una de ellas ve en el Estado el polo dominante. De acuerdo con esta interpretación, tal dominio se remontaría a la formación del Estado portugués, que desde el siglo XVI se caracterizaba, por su centralización precoz y por la vigencia de un cuerpo de leyes, como un Estado patrimonialista. En la colonia, la burocracia estatal habría reforzado la obra centralizadora, acentuando los mecanismos de poder y represión. Sus brazos llegaron hasta el sertón más remoto a través de cabecillas y *bandeirantes*[5] que, en última instancia, actuaban en nombre del Estado.

La interpretación contraria, más antigua, sostiene que, ante un Estado débil e inexpresivo, imperó en la colonia un sector de la sociedad. El polo dominante sería el de los grandes terratenientes. De acuerdo con esta interpretación, eran ellos quienes gobernaban, legislaban, hacían justicia y luchaban contra las tribus del interior en defensa de las poblaciones que vivían cerca de sus haciendas, que funcionaban como sus castillos feudales o como las cortes de sus señoríos.

No es posible alinearse con una u otra de estas interpretaciones por dos motivos principales: en primer lugar, porque se presentan como un modelo impuesto a espacios y momentos históricos distintos; en segundo lugar porque, al separar radicalmente al Estado y la sociedad, suele excluirse la

posibilidad de que estos dos niveles estuvieran entrelazados. Empezando por la interpretación más antigua, podemos decir que la ausencia del Estado y el desempeño de sus funciones por parte de grupos privados se dieron en ciertas zonas volcadas a la producción pecuaria, como el sertón nordestino. Pero esto no basta para definir el cuadro más general de la colonia.

Por otro lado, el Estado portugués no se ajusta a la idea de un aparato burocrático aplastante trasplantado con éxito a la colonia. El intento de trasladar la organización administrativa lusa a Brasil chocó con incontables obstáculos debido a la extensión de la colonia, la lejanía de la metrópoli y lo novedoso de los problemas que se presentaban. El Estado fue ampliando sus alcances a lo largo del tiempo —diríamos mejor, a lo largo de los siglos— y se hizo más presente en aquellas regiones que conformaban el núcleo fundamental de la economía de exportación. Hasta mediados del siglo XVII, la acción de las autoridades sólo se ejerció eficientemente en la sede del Gobierno General y en las capitanías que estaban a su alrededor. En las demás regiones predominaron las órdenes religiosas, sobre todo la de los jesuitas, considerada un Estado dentro del Estado, o bien los grandes propietarios rurales y captores de indígenas.

Con el descubrimiento de las minas de oro y diamantes a principios del siglo XVIII, el Estado incrementó sus controles para organizar una sociedad en rápido crecimiento y asegurar la percepción de impuestos sobre las nuevas riquezas. Pero aun entonces sólo el Distrito Diamantino, instalado en Minas Gerais, corresponde a la imagen de un Estado que estaba por encima de la sociedad y amputaba a todos aquellos miembros que se resistían a su dominio.

Esto no quiere decir que sea inviable establecer un patrón general para las relaciones entre el Estado y la sociedad en el

Brasil colonial, respetando las diferencias de tiempo y espacio. En primer lugar, sobre todo cuando nos referimos a los niveles más altos de la actividad del Estado, casi siempre es posible distinguir entre la acción estatal y los intereses dominantes de la sociedad. La Corona y sus representantes en Brasil asumieron el papel de organizadores generales de la vida de la colonia, y al hacerlo no respondieron necesariamente a esos intereses. Las medidas tendentes a limitar la esclavitud de los indígenas, por ejemplo, o a asegurar el abasto de géneros alimenticios mediante su cultivo obligatorio en las haciendas fueron recibidas incluso con indignación por los captores de indígenas y los propietarios rurales.

Pero el Estado y la sociedad no son mundos ajenos. Al contrario, hay un doble movimiento del Estado hacia la sociedad y viceversa, que se caracteriza por la indefinición entre los espacios públicos y privados. Si por un lado el Estado está atravesado por intereses particulares, por el otro su acción no tiene límites claros que deriven de las garantías individuales de los ciudadanos. Los rasgos del Estado patrimonial luso, en el que todo, en última instancia, es patrimonio del rey, coinciden con los de una sociedad colonial en la que la representación de clase, pensada como representación colectiva de un sector social, cede terreno a la solidaridad familiar.

La familia o familias aliadas de la clase dominante se presentan como redes formadas no sólo por parientes consanguíneos, sino por padrinos y ahijados, protegidos y amigos. Para la Corona, el Estado es patrimonio real y los gobernantes deben ser elegidos entre los hombres leales al rey. Por su parte, los sectores dominantes de la sociedad tratan de abrirse paso dentro del aparato estatal o de alcanzar la gracia de los gobernantes en beneficio de su red familiar.

Lo anterior resulta, por diversas vías, en un Gobierno que no se ejerce de acuerdo con criterios de impersonalidad y apego a la ley, sino con criterios de lealtad. La famosa expresión "para los amigos, todo; para los enemigos, la ley" resume la mentalidad y las prácticas descritas.

Las actividades económicas

La vida económica de la colonia se caracterizó por su diversidad regional.

En la franja costera, el nordeste de Brasil fue el primer núcleo de colonización y urbanización de la nueva tierra. La actual situación de la región nordeste no es fruto de la fatalidad, sino de un proceso histórico. Hasta mediados del siglo XVIII, en esta zona se concentraron la vida social y las actividades económicas más significativas de la colonia; durante ese periodo, el sur se mantuvo como un área periférica, menos urbanizada, sin vínculos directos con la economía exportadora. Salvador fue la capital de Brasil hasta 1763 y, durante mucho tiempo, su única ciudad importante. Aunque no hay datos seguros sobre su población hasta mediados del siglo XVIII, se calcula que tenía 14 000 habitantes en 1585, 25 000 en 1724 y alrededor de 40 000 en 1750, la mitad de los cuales eran esclavos. Estos números podrán parecer modestos, pero son muy significativos si se les compara con los de otras regiones: São Paulo, por ejemplo, tenía menos de 2 000 habitantes en 1600.

La empresa azucarera fue el núcleo central de la activación socioeconómica del nordeste de la colonia. El azúcar tiene una historia larga y diversa en cuanto a sus usos y su ubicación geográfica. En el siglo XV todavía era un producto que se utilizaba como medicina o condimento exótico. Los recetarios del

siglo XVI ya dejan ver que iba ganando terreno en el consumo de la aristocracia europea. Pronto dejaría de ser un producto de lujo para convertirse en un bien de consumo masivo.

En las décadas de 1530 y 1540, la producción azucarera fincó bases sólidas en Brasil. En su expedición de 1532, Martim Afonso de Sousa llevó consigo un perito en la manufactura del azúcar, así como portugueses, italianos y flamencos con experiencia en la actividad azucarera de la isla de Madeira. En todas las capitanías, desde São Vicente hasta Pernambuco, se cultivó la caña y se construyeron ingenios. Uno de los objetivos centrales al crear un Gobierno General fue fomentar la producción en la abandonada capitanía de Bahía. Las instrucciones que llevaba consigo Tomé de Sousa contenían una serie de preceptos destinados a estimular el cultivo y la molienda de la caña, que concedían, entre otras ventajas, la exención de impuestos durante cierto tiempo. Además, el gobernador general, también por determinación del reglamento, construyó un ingenio propiedad de la Corona en Pirajá, cerca de Salvador.

En la capitanía de São Vicente, Martim Afonso de Sousa fue socio, junto con portugueses y extranjeros, de un ingenio que tal vez fue el más grande del sur de la colonia, el São Jorge dos Erasmos, nombre derivado del alemán Erasmo Schetz, que se lo había comprado a sus socios originales. La producción de caña en Río de Janeiro, sobre todo en la región de Campos, también cobró relevancia, pero hasta el siglo XVIII la cachaza, y no el azúcar, fue el principal producto obtenido y se usaba sobre todo como moneda de cambio en el comercio de esclavos con Angola.

Los grandes centros azucareros en la colonia fueron Pernambuco y Bahía. Factores climáticos, geográficos, políticos y económicos explican esta ubicación. Ambas capitanías tenían una región costera con buena calidad de suelos y un régimen pluvial adecuado. Estaban más cerca de los centros importadores

europeos y, conforme Salvador y Recife se convirtieron en puertos importantes, pudieron dar salida relativamente fácil a la producción.

Instalar un ingenio era una empresa considerable. En rigor, comprendía las plantaciones de caña, el equipo para procesarla, construcciones, esclavos y otros elementos, como ganado, pasturas y carros de transporte, además de la casa grande. El procesamiento de la caña hasta llegar al azúcar era una operación compleja. Ya desde los primeros tiempos exigía capacidad administrativa y el uso de cierta tecnología que mejoró con el paso de los años. El proceso incluía varias fases sucesivas, desde la extracción del jugo hasta la clarificación y la purga. La caña se molía mediante un sistema de cilindros movidos con fuerza hidráulica o por tracción animal. Los ingenios que empleaban la fuerza hidráulica, por su mayor tamaño y productividad, se conocieron como ingenios reales.

Ni en Brasil ni en Portugal se instalaron refinerías durante el periodo colonial. El azúcar de Brasil se llamaba *barreado* porque para prepararlo se utilizaba barro. Esto no significa que fuera de mala calidad. El azúcar *barreado* se convertía en el azúcar blanco tan apreciado en Europa, y también en azúcar mascabado, de color pardo, que en aquella época se consideraba de menor calidad. De este modo, la técnica de obtener azúcar blanco mediante el empleo del barro compensaba, en parte, la ausencia de refinerías.

La instalación y la actividad de un ingenio eran operaciones costosas que dependían de la obtención de créditos. En el siglo XVI, buena parte de éstos provenía de inversores extranjeros, flamencos e italianos, o de la propia metrópoli. Más tarde, para el siglo XVII, esas fuentes parecen haberse vuelto poco significativas. Al menos en Bahía, las dos fuentes principales de

crédito fueron, en primer lugar, las instituciones religiosas y de beneficencia y, en segundo lugar, los comerciantes. Estos últimos tenían una relación especial con los señores de ingenio: financiaban sus instalaciones, les prestaban recursos para poner en marcha el negocio y, por su propia posición, tenían facilidades para proveerlos de bienes de consumo importados. Ambas partes hacían cuentas al final de la zafra. Muchas veces los comerciantes aceptaban recibir azúcar en pago de deudas, pero a precios por debajo del mercado. En sus últimas etapas, el comercio del azúcar ya no estaba en manos de los locales, ni siquiera de los portugueses. Los grandes centros importadores se encontraban en Ámsterdam, Londres, Hamburgo y Génova, y tenían un enorme poder a la hora de fijar los precios, por más que Portugal se esforzara por monopolizar el producto más rentable de su colonia americana.

Fue en el contexto de la producción azucarera donde ocurrió con mayor nitidez el paso de la esclavitud indígena a la africana. En las décadas de 1550 y 1560 prácticamente no había africanos en los ingenios del nordeste de Brasil. La mano de obra estaba conformada por esclavos indígenas o, en mucho menor escala, por indígenas provenientes de las aldeas jesuitas, que recibían un salario ínfimo. Si observamos el ejemplo de un gran ingenio —Sergipe do Conde, en Bahía— cuyos registros han sobrevivido hasta hoy, podemos darnos una idea de la forma en que se verificó esta transición. En 1574 los africanos representaban sólo 7% de la fuerza de trabajo esclava; en 1591 conformaban el 37%, y hacia 1638 junto con los afrobrasileños componían la totalidad de la fuerza de trabajo.

Los cautivos realizaban gran número de tareas, concentrándose en su mayoría en los arduos trabajos del campo. Era peor la situación de quienes se ocupaban en la molienda, los hornos y las calderas. No pocas veces los esclavos perdían el

brazo o la mano en la molienda. Los hornos y calderas producían un calor insoportable, y los que trabajaban allí se arriesgaban a sufrir quemaduras. A muchos cautivos se les entrenaba desde temprana edad en este trabajo, que se consideraba también un castigo para los rebeldes. Pese a todo, en casos excepcionales los esclavos ascendían en la jerarquía de funciones y llegaban a ser "banqueros" —auxiliares del maestro de azúcar— o incluso maestros. El maestro era un trabajador especializado, el responsable de las operaciones finales y, en última instancia, de la calidad del azúcar.

Varios señores de ingenio tuvieron poder económico, social y político en la vida de la colonia. Constituyeron una aristocracia en términos de riqueza y poder, pero no una nobleza hereditaria como la que existía en Europa. El rey concedió títulos de nobleza por servicios prestados o a cambio de un pago. Pero esos títulos no se transmitían a los herederos. No hay que exagerar, sin embargo, ni la estabilidad social ni la riqueza de los señores de ingenio, generalizando al conjunto de una clase social lo que fue característico de algunas familias. El negocio de la caña implicaba riesgos, dependía de la oscilación de los precios, de una buena administración y del control de la masa de los esclavos. Los ingenios fueron más permanentes que sus señores. Existieron con los mismos nombres durante cientos de años, aunque cambiaron de manos varias veces.

¿Quiénes eran los señores de ingenio en los primeros tiempos? Algunas familias de origen noble o con altos cargos en la administración portuguesa, inmigrantes con posesiones o comerciantes que se dedicaban también a la producción. Muy pocos eran hidalgos, y además no todos eran católicos desde hacía mucho. Los cristianos nuevos estuvieron bien representados entre los primeros señores de ingenio en Bahía. En el periodo de 1587 a 1592, de 41 ingenios con propietarios

cuyo origen pudo identificarse, 12 pertenecían a cristianos nuevos. Con el paso del tiempo y a base de muchos matrimonios celebrados entre las mismas familias, los señores de ingenio se convirtieron en una clase homogénea. Sus miembros más prestigiosos trataron entonces de trazar una genealogía que fincara sus raíces nobles en Portugal.

Entre los dos extremos, el de los señores y el de los esclavos, se encontraban los libertos y los trabajadores blancos que realizaban servicios especializados como artesanos (herreros, carpinteros, cerrajeros, etc.) y maestros de azúcar. El grupo más numeroso de hombres libres con actividades ligadas a los ingenios era el de los cultivadores de caña, productores independientes que no poseían recursos para montar su propio ingenio. Dependían de los señores, pero a veces tenían cierto poder de negociación cuando la producción de caña en los ingenios era escasa. Los mulatos o negros libertos rara vez fueron cultivadores de caña. Una vez admitida esta exclusión racial, resta decir que el poder económico de este sector varió mucho. Había desde cultivadores humildes, que sembraban pequeñas extensiones de tierra con dos o tres esclavos, hasta otros que poseían 20 o 30 cautivos y eran candidatos a convertirse en señores de ingenio.

Sin entrar en las minucias de los vaivenes del negocio azucarero, pueden distinguirse algunas fases básicas de su historia en el periodo colonial, demarcadas por guerras, invasiones extranjeras y por la competencia. Entre 1570 y 1620 hubo una coyuntura de expansión debida al aumento de la demanda europea y a que prácticamente no había competencia. Enseguida los negocios se complicaron por el inicio de la Guerra de los Treinta Años en el continente europeo (1618), y luego por las invasiones holandesas en el nordeste de la colonia.

En general, las invasiones tuvieron un efecto muy negativo, aunque hay que señalar algunos matices. La ocupación de Salvador (1624-1625) fue desastrosa para la economía azucarera del Recôncavo Bahiano, pero no para la de Pernambuco. En cambio, mientras Pernambuco sufría las consecuencias de las luchas resultantes de una nueva invasión holandesa entre 1630 y 1637, Bahía se benefició de la escasez del producto en el mercado internacional y del consecuente incremento de los precios.

En la década de 1630 nació la competencia. En las pequeñas islas de las Antillas, Inglaterra, Francia y Holanda iniciaron el cultivo a gran escala, lo cual tuvo una serie de efectos negativos en la economía azucarera del nordeste brasileño. A los comerciantes portugueses y productores coloniales en Brasil se les fue aun más de las manos la posibilidad de fijar precios. La producción antillana, también basada en el trabajo esclavo, elevó el precio de los esclavos y fomentó la competencia de holandeses, ingleses y franceses en el comercio negrero de la costa africana. Los "buenos viejos tiempos" de la economía azucarera de Brasil no habrían de volver. Pero durante el periodo colonial el ingreso obtenido por la exportación de azúcar siempre ocupó el primer lugar. Aun durante el auge de la explotación aurífera, el azúcar siguió siendo el producto más importante, al menos en el comercio legal. En 1760 el azúcar correspondió al 50% del valor total de las exportaciones y el oro al 45%. Además, hacia el fin del periodo colonial la producción azucarera se benefició de un nuevo impulso, no sólo en la región nordeste. Medidas tomadas por el marqués de Pombal y una serie de acontecimientos internacionales favorecieron su expansión. Entre estos acontecimientos se destacan la gran rebelión de esclavos que tuvo lugar en 1791 en Saint-Domingue, colonia francesa de las Antillas. Durante 10 años, la guerra dejó a Saint-Domingue —gran productor de azúcar y café— al margen

de la escena internacional. A principios del siglo XIX producían azúcar, en orden de importancia, Bahía, Pernambuco y Río de Janeiro. São Paulo empezaba a despuntar, pero aún como un exportador modesto.

Desde el punto de vista económico y social, el nordeste colonial no sólo fue azúcar, entre otras razones porque el azúcar mismo dio lugar a una diversificación de actividades dentro de ciertos límites. La tendencia a la especialización en el cultivo de la caña ocasionó una escasez continua de alimentos, y ello fomentó la producción de géneros alimenticios, particularmente el cultivo de yuca. La cría de ganado también se relacionó en parte con las necesidades de la economía azucarera.

La segunda actividad en importancia destinada a la exportación fue el tabaco, aunque distó mucho de competir con el azúcar. La gran región productora era el Recôncavo Bahiano. Se cultivaron varios tipos de tabaco, desde los más finos, que se exportaban a Europa, hasta los más rústicos, que fueron valiosos como moneda de cambio en la costa africana. La viabilidad de la producción a pequeña escala permitió la existencia de un sector de pequeños propietarios conformado por antiguos productores de yuca o inmigrantes portugueses de escasos recursos. A lo largo de los años creció en el sector la presencia de mulatos. Una muestra de 450 labradores de tabaco bahianos entre 1684 y 1725 deja ver que sólo 3% eran mulatos, mientras que en un estudio semejante realizado a fines del siglo XVIII su porcentaje asciende al 27 por ciento.

La cría de ganado empezó en las proximidades de los ingenios, pero la tendencia a ocupar las tierras más fértiles para el cultivo de la caña fue empujando a los ganaderos hacia el interior. En 1701 la administración portuguesa prohibió la cría de ganado en

una franja de 80 kilómetros a partir de la costa. La actividad pecuaria fue la responsable de la exploración del "gran sertón". Los ganaderos se internaron en los actuales estados del Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y, partiendo de la región del río São Francisco, llegaron a los ríos Tocantins y Araguaia. Fueron estas regiones, más que la costa, las que se caracterizaron por inmensos latifundios en los que el ganado se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A fines del siglo XVII había propiedades en el sertón de Bahía más grandes que Portugal, y un gran hacendado podía llegar a poseer más de un millón de hectáreas de tierras.

La Unión Ibérica y sus repercusiones en Brasil

Hubo un cambio de rumbo en la monarquía portuguesa que tuvo importantes consecuencias en la colonia. Tras una crisis que dejó vacante el trono de Portugal, la nobleza y la gran burguesía lusas aclamaron a Felipe II de España como rey portugués y con ello pusieron fin a la dinastía de Avis (1580). La presencia de los Habsburgo de España en el trono de Portugal se extendió hasta 1640. Además de los íntimos vínculos entre las noblezas española y portuguesa, pesaron sobre esta decisión intereses relacionados con el mundo colonial. Con la unión de las dos Coronas, la burguesía mercantil portuguesa esperaba tener un mayor acceso al mercado español en América e intercambiar plata por esclavos y alimentos.

La Unión Ibérica hizo que, en la práctica, se desconociera temporalmente el meridiano de Tordesillas. De este modo, se abrieron a la penetración de exploradores portugueses territorios situados en la zona amazónica y en tierras que hoy forman parte del Brasil central, rumbo a Goiás y Mato Grosso.

Desde el punto de vista institucional, una de las medidas más importantes del periodo fue la promulgación del Código Filipino (1603), que consolidó y amplió las leyes portuguesas. El código tuvo una vigencia duradera en Brasil: algunas de sus disposiciones no se revocaron sino hasta que entró en vigor el Código Civil (1917).

La consecuencia más significativa de la unión de las dos Coronas ocurrió en el terreno de las relaciones internacionales. La cercanía entre Portugal y los Países Bajos desapareció, lo que dio lugar a un periodo de confrontación abierta debido al conflicto que había entre los Países Bajos y España. En el mundo colonial americano esta lucha giró en torno al control del comercio de azúcar y el tráfico de esclavos.

Éste fue el escenario en el que tuvieron lugar las invasiones holandesas en Brasil: el mayor conflicto político-militar de la época colonial. Las embestidas holandesas comenzaron con el saqueo de la costa africana (1595) y de la ciudad de Salvador (1604). Pero la Tregua de los Doce Años entre España y los Países Bajos (1609-1621) dio a Portugal cierta tranquilidad. Con el fin de la tregua y la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, el escenario cambió. Esta compañía, fundada con capital del Estado y patrocinio de particulares, tendría como objetivo principal la ocupación de las zonas de producción azucarera en la América portuguesa y el control del abasto de esclavos.

Las invasiones se iniciaron con la ocupación de Salvador en 1624. En poco más de 24 horas los holandeses dominaron la ciudad, pero prácticamente no pudieron ir más allá. Los llamados "hombres buenos" se refugiaron en las haciendas cercanas a la capital y organizaron la resistencia al mando de Matias de Albuquerque, el nuevo gobernador al que habían elegido, y del obispo don Marcos Teixeira. Con una táctica de

guerrillas y refuerzos llegados de Europa, impidieron la expansión de los invasores. Luego se unieron a las tropas combatientes una flota de 52 barcos y más de 12 000 hombres. Tras librar duros combates, los holandeses se rindieron en mayo de 1625. Habían permanecido un año en Bahía.

El ataque a Pernambuco comenzó en 1630 con la conquista de Olinda. A partir de ese episodio la guerra puede dividirse en tres periodos distintos. Entre 1630 y 1637 se libró una guerra de resistencia que terminó con la consolidación del poder holandés sobre toda la zona comprendida entre el Ceará y el río São Francisco. En este periodo destacó negativamente, para la perspectiva lusobrasileña, la figura de Domingos Fernandes Calabar, nacido en Porto Calvo (Alagoas), un perfecto conocedor del terreno en el que se entablaban los combates. Calabar dejó las fuerzas lusobrasileñas para sumarse a las holandesas; se convirtió en un eficaz colaborador de éstas hasta que fue apresado y ejecutado.

El segundo periodo, que va de 1637 a 1644, se caracteriza por una relativa paz, que tuvo que ver con el gobierno del conde y más tarde príncipe alemán Mauricio de Nassau. El nombre de Nassau se asocia con una importante serie de logros e iniciativas políticas. Para poner fin a la paralización de la economía y establecer vínculos con la sociedad local, ordenó que se vendieran a crédito los ingenios abandonados por sus dueños, que habían huido a Bahía. Se hizo frente a las crisis de abasto obligando a los propietarios rurales a cultivar, en una cantidad proporcional al número de sus esclavos, el "pan del país", es decir, la yuca.

El príncipe, que era calvinista, fue tolerante con los católicos y todo parece indicar que también con los israelitas, aunque hay controversias al respecto. Los llamados criptojudíos, es decir, los cristianos nuevos que practicaban su antiguo culto a escondidas,

recibieron la autorización para profesarlo abiertamente. Hubo dos sinagogas en Recife en la década de 1649 y muchos judíos llegaron de Holanda. Cuando los holandeses se retiraron de Brasil, una de las cláusulas de la capitulación autorizó la migración de los judíos que habían estado del lado de los flamencos. Éstos se marcharon a Surinam, a Jamaica y a Nueva Ámsterdam (Nueva York), o bien volvieron a Holanda.

Nassau favoreció la llegada de artistas, naturalistas y letrados a Pernambuco. Entre los artistas figuró Frans Post, pintor de los primeros paisajes y escenas de la vida brasileña. El nombre del príncipe también se relaciona con las mejoras que se hicieron en Recife, elevada por los holandeses a la categoría de capital de la capitanía, en lugar de Olinda. Al lado del viejo Recife, Nassau construyó la Ciudad Mauricia con un trazado geométrico y canales: un intento de réplica tropical de la lejana Ámsterdam. Por sus desavenencias con la Compañía de las Indias Occidentales, Nassau volvió a Europa en 1644.

El tercer periodo de la guerra, entre 1645 y 1654, está marcado por la reconquista. El fin de la etapa de unión de las dos Coronas no trajo la paz. El cuadro de las relaciones entre Portugal y Holanda, previo al dominio español, ya no era el mismo. Los vínculos pacíficos entre los dos países, anteriores a 1580, no se reestablecerían automáticamente. Los holandeses ocupaban ahora parte del territorio de Brasil y no tenían intenciones de irse.

El principal centro de rebeldía contra la presencia holandesa se ubicó en Pernambuco, donde se destacaron las figuras de André Vidal de Negreiros y João Fernandes Vieira; este último, uno de los propietarios más acaudalados de la región. A ellos se sumaron el negro Henrique Dias y el indígena Filipe Camarão. Tras algunos éxitos iniciales de los lusobrasileños, la guerra llegó a un punto muerto que se extendió varios años. Mientras que los

rebeldes dominaban el interior, Recife permanecía en manos holandesas. La inacción terminó con las dos batallas de Guararapes, en que los insurrectos obtuvieron la victoria (1648 y 1649). Además, una serie de circunstancias complicó la situación de los invasores. La Compañía de las Indias Occidentales había entrado en crisis y ya nadie quería invertir sus recursos en ella. En Holanda había un grupo favorable a la paz con Portugal con el argumento de que el comercio de sal de Setúbal era básico para la industria pesquera holandesa y de mayor importancia económica que las dudosas ganancias de la colonia de ultramar. Por último, el estallido de la guerra entre Holanda e Inglaterra en 1652 hizo que escasearan los recursos para las operaciones militares en Brasil. Al año siguiente, una escuadra portuguesa cercó Recife por mar y al fin se llegó a la capitulación de los holandeses en 1654.

La historia de la ocupación flamenca es un claro ejemplo de las relaciones entre la producción colonial y el tráfico de esclavos. En cuanto fueron capaces de estabilizar razonablemente la industria azucarera en el nordeste de Brasil, los holandeses trataron de asegurarse el abasto de esclavos controlando sus fuentes en África. En realidad, hubo dos frentes de combate muy distantes geográficamente, pero vinculados entre sí. En 1637 los holandeses ocuparon varios puntos de la Costa de la Mina. Una tregua que habían pactado Portugal y Holanda inmediatamente después de la Restauración se rompió cuando Nassau ocupó Luanda y Benguela, en Angola (1641). Las responsables de retomar Angola en 1648 fueron las tropas lusobrasileñas bajo el mando de Salvador Correia de Sá. No en vano hombres como João Fernandes Vieira y André Vidal de Negreiros estuvieron al frente de la administración portuguesa en esa colonia africana.

Los recursos colectados localmente para la guerra del nordeste constituyeron dos terceras partes de los gastos en la etapa de resistencia y casi su totalidad en la lucha por la reconquista. Así también, mientras que en la primera fase de la guerra las tropas conformadas por portugueses, castellanos y mercenarios napolitanos fueron la amplia mayoría, en la segunda fase los soldados locales, y sobre todo la gente de Pernambuco, tuvieron la superioridad numérica. Lo mismo ocurrió con el mando militar. Esos hombres fueron los principales responsables de la práctica de la "guerra volante",[6] o la "guerra de Brasil", en oposición a la "guerra de Europa", lo que condujo a victorias decisivas sobre los holandeses.

Subrayar el papel de las fuerzas locales no equivale a decir que constituían un Ejército democrático, un modelo de la "unión de las tres razas". Por su importancia, Calabar se volvió famoso como "el gran traidor" en la primera etapa de la guerra. Pero el suyo no fue un caso aislado. En realidad, los holandeses siempre contaron con la ayuda de los locales, entre ellos varios señores de ingenio y cultivadores de caña, así como grupos mal integrados o excluidos del orden colonial portugués, como los cristianos nuevos, los negros esclavizados, los indígenas tapuyas y los mestizos pobres y miserables. Es cierto que los indígenas de Filipe Camarão y los negros de Henrique Dias se alinearon con los lusobrasileños. Pero su movilización fue reducida. En 1648, por ejemplo, el contingente de Henrique Dias estaba compuesto de 300 soldados que equivalían a 10% del total de los hombres en armas y a 0.75% de la población esclavizada de la zona.

La expulsión de los holandeses, por la forma en que se dio, impulsó el nativismo pernambucano. Durante 200 años, hasta la Revolución Praieira (1848), Pernambuco se convirtió en un centro de manifestaciones de autonomía, de independencia y de abierta revuelta. Hasta la Independencia, su blanco principal fue

la metrópoli portuguesa; después se planteó la autonomía de la provincia, muchas veces con tintes de reivindicación social. El nativismo tuvo contenidos diversos a lo largo de los años, dependiendo de las situaciones históricas específicas y de los grupos sociales involucrados. Pero se mantuvo como un referente básico en el imaginario social pernambucano.

La colonización de la periferia

Lejos del centro más importante de la vida de la colonia, el norte de Brasil vivió una existencia muy distinta de la del nordeste. Allí la colonización resultó lenta; la integración económica con el mercado europeo fue precaria hasta fines del siglo XVIII y el trabajo forzado indígena era predominante. Para simplificar hablaremos de la región como un todo, pero no debemos olvidar las profundas diferencias que había entre el Maranhão, por un lado, y la Amazonia, por el otro.

Hasta 1612, cuando los franceses se establecieron en el Maranhão y fundaron São Luís, los portugueses no habían mostrado mayor interés o capacidad de asentarse en esa zona. El riesgo de pérdida territorial los llevó a expulsar a los franceses y a fundar Belém en 1616. Ésta fue la base de una gradual penetración por el río Amazonas, que Pedro Teixeira recorrió en un viaje hasta Perú (1637). En 1690 los portugueses instalaron un pequeño puesto avanzado cerca de lo que hoy es Manaos, en la desembocadura del río Negro. La Corona estableció una administración aparte para el norte del país, creando el estado del Maranhão y el Gran Pará con un gobernador y una administración separados del Estado de Brasil. El estado de Maranhão tuvo una existencia por lo menos formal e intermitente hasta 1774.

La influencia indígena fue nítida, tanto en términos numéricos como culturales. La lengua dominante en pleno siglo XVIII era la lengua franca, una variante del tupí. Hubo un extenso mestizaje de la población, entre otras cosas porque, pese a los esfuerzos por enviar a São Luís inmigrantes de las Azores, las mujeres blancas eran escasas.

Aunque en todas las regiones del Brasil colonial hubo problemas de escasez de moneda, en el norte esto sería aún más acentuado. Hasta mediados del siglo XVIII fue frecuente el trueque directo de productos o el uso de cacao o mantas de algodón como moneda. Los intentos de implantar una agricultura exportadora basada en el azúcar y en el algodón fracasaron en gran medida hasta las últimas décadas del siglo XVIII. Hacia esa época, el Maranhão se convirtió rápidamente en una importante región productora de algodón, cuyo cultivo se extendió hacia el nordeste. En su conjunto, la producción del norte se basó en productos de la selva, las llamadas drogas del sertón, como la vainilla, la zarzaparrilla y sobre todo el cacao nativo que indígenas y mestizos cosechaban a lo largo de los ríos y transportaban hasta Belém.

La gran presencia indígena hizo del norte uno de los principales terrenos de actividad misionera de las órdenes religiosas, con los jesuitas al frente. Se estima que hacia 1740 unos 50 000 indígenas vivían en las aldeas jesuitas y franciscanas. Fue importante la actividad del padre Antonio Vieira, que llegó a Brasil en 1653 como provincial de la orden de los jesuitas y desarrolló una intensa labor de prédica para poner freno a los abusos que se cometían contra los indígenas. Los conflictos entre representantes de la Corona, colonizadores y religiosos fueron frecuentes en la región. Los jesuitas eran blanco constante de ataques, pues su proyecto de aculturación y control de los indígenas era distinto del de los colonizadores. Además, poseían

extensas haciendas ganaderas, plantaciones de algodón e ingenios, y participaban activamente en el comercio de las drogas del sertón. Enfrentaron una serie de problemas y fueron expulsados del Maranhão en 1684. Con el apoyo de la Corona volvieron dos años más tarde. Pero el equilibrio entre misioneros y colonos siempre fue precario, hasta la expulsión definitiva de los jesuitas en 1759.

Al escribir su primera historia de Brasil, en 1627, fray Vicente do Salvador lamentaba el carácter predatorio de la colonización y el hecho de que los portugueses hubieran sido hasta entonces incapaces de poblar el interior de su nueva tierra, limitándose a "arañar las costas como cangrejos". Esta afirmación era en gran medida cierta, pero ya empezaba a fallar en algunas regiones, sobre todo el centro-sur de Brasil.

La colonización de la capitanía de São Vicente empezó por la costa, con el cultivo de caña y la construcción de ingenios. Esta actividad no fue muy lejos. El azúcar que se producía allí competía desventajosamente con el del nordeste de la colonia, ya fuera por la calidad del suelo o por la mayor distancia respecto a los puertos europeos.

Por otro lado, la existencia de grandes cantidades de indígenas atrajo a la región a los primeros jesuitas. Con distintos objetivos, religiosos y colonizadores habrían de emprender una gran aventura hacia el interior: remontaron la sierra del Mar, abriéndose camino por los senderos indígenas, hasta llegar a la meseta de Piratininga, a una altura de 800 metros. En 1554 los padres Manuel da Nóbrega y José de Anchieta fundaron en esa meseta la población de São Paulo, convertida en villa en 1561, e instalaron allí el colegio de los jesuitas. Separados de la costa por barreras naturales, los primeros colonizadores y misioneros volvieron su atención cada vez más hacia el sertón y recorrieron

sus caminos con ayuda de los indígenas y de la red pluvial conformada por el Tietê, el Paranaíba y otros ríos.

Entre la región paulista en sus tiempos más remotos y la periferia del norte hubo algunas semejanzas: la debilidad de la agricultura exportadora, la fuerte presencia de indígenas, la lucha entre colonizadores y misioneros por el control de los nativos, la escasez de moneda y el frecuente recurso del trueque. Particularmente notable fue la influencia indígena. Un extenso mestizaje, impulsado por el muy escaso número de mujeres blancas, dio origen al llamado *mameluco*, resultado de la unión de blanco con indígena. El tupí fue lengua dominante hasta el siglo XVIII. Los portugueses de São Paulo adoptaron muchos hábitos y habilidades de los nativos; se volvieron capaces de usar tanto el arco y flecha como las armas de fuego.

Una vez más, misioneros y colonizadores chocaron por sus distintos métodos y objetivos en cuanto a la subordinación de los indígenas. Ciertas decisiones del papa y de la Corona (1639-1640), por ejemplo, que insistían en poner límites a la esclavitud indígena, provocaron reacciones violentas en Río de Janeiro, Santos y São Paulo. Los jesuitas fueron expulsados de la región y no volvieron a São Paulo sino hasta 1653.

Pese a sus semejanzas iniciales con el norte, la región de São Paulo tuvo ya desde fines del siglo XVI una historia muy peculiar. Los pobladores combinaron el cultivo de la uva, del algodón y sobre todo del trigo con otras actividades que los llevaron a internarse profundamente en zonas desconocidas o poco exploradas de Brasil. Paulistas criadores de ganado se esparcieron por el nordeste brasileño, adentrándose en el valle del río São Francisco hasta llegar al Piauí. Al sur, el actual Paraná —donde hubo algunos intentos de minería— se convirtió en una extensión de São Paulo. El ganado se expandió por Santa Catarina, Rio Grande do Sul y la Banda Oriental (Uruguay).

Las iniciativas individuales se conjugaron con la acción de la Corona, interesada en asegurar la ocupación de la zona y extender en la medida de lo posible la frontera con la América española. Inmigrantes provenientes del archipiélago de las Azores y paulistas fundaron Laguna, en Santa Catarina (1684). Algunos años antes (1680), los portugueses habían establecido a orillas del Río de la Plata, frente a Buenos Aires, la Colonia del Sacramento, con la intención de interferir en el comercio del Alto Perú, sobre todo en el comercio de la plata, que se transportaba por el río hacia el extranjero.

LAS *BANDEIRAS* Y LA SOCIEDAD PAULISTA

La gran marca de los paulistas en la vida colonial del siglo XVII fueron las *bandeiras*.[7] Se trataba de expediciones que, reuniendo a veces miles de indígenas, se internaban en el sertón y pasaban allí meses, a veces años, en busca de metales preciosos y de indígenas a los que pudieran esclavizar. No es difícil comprender que en estas expediciones participaran indígenas ya cautivos, pues la guerra —a diferencia de la agricultura— era una actividad propia de los varones en las sociedades nativas. El número de mamelucos e indígenas siempre superó al de los blancos. La gran *bandeira* de Manuel Preto y Raposo Tavares, que atacó la región del Guaíra en 1629, por ejemplo, estaba compuesta por 69 blancos, 900 mamelucos y 2 000 indígenas.

Las *bandeiras* tomaron una serie de direcciones: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso y las regiones donde se ubicaban las aldeas de indígenas guaraníes organizadas por los jesuitas españoles. Entre ellas se destacaba el Guaíra, situado al oeste del Paraná, entre los ríos Paranapanema e Iguazú, zona donde los *bandeirantes* emprendieron continuas campañas de saqueo, destrucción y

captura de indígenas. Algunas *bandeiras* realizaron inmensos viajes en los que la atracción por las grandes aventuras se entremezclaba con los objetivos económicos. Siendo ya un veterano, Raposo Tavares recorrió entre 1648 y 1652 un trayecto de 12 000 kilómetros. Marchó hacia Paraguay hasta las faldas de los Andes, se dirigió luego al nordeste cruzando el actual estado de Rondônia para luego bajar por los ríos Mamoré y Madeira y, finalmente, llegar a Belém a través del río Amazonas.

No fueron sencillas las relaciones entre los intereses de la Corona y el fenómeno de las *bandeiras*. Algunas *bandeiras* contaron con el apoyo directo de la administración portuguesa y otras no. En general la búsqueda de metales preciosos, la captura de indígenas en ciertos periodos y la expansión territorial eran compatibles con los objetivos de la metrópoli. Los *bandeirantes* también sirvieron para reprimir a las poblaciones sometidas en el norte y el nordeste del país. Domingos Jorge Velho y otro paulista, Matias Cardoso de Almeida, participaron en el combate a la larga rebelión indígena de Rio Grande do Norte que se conoce como la Guerra de los Bárbaros (1683-1713). El mismo Domingos Jorge Velho dirigió la campaña final para acabar con el *quilombo* de Palmares en Alagoas (1690-1695).

Los observadores jesuitas estimaron en 300 000 el número de indígenas capturados tan sólo en las misiones de Paraguay. La cifra podrá parecer exagerada, pero las demás propuestas también arrojan cantidades elevadas. ¿Qué fue de esos indígenas? Todo parece indicar que a muchos los vendieron como esclavos en São Vicente y sobre todo en Río de Janeiro, donde a lo largo del siglo XVII se desarrolló la producción de azúcar. Según datos de la congregación de São Bento, entre un tercio y un cuarto de la fuerza de trabajo en los ingenios benedictinos de Río de Janeiro estaba conformada por indígenas. Debe tenerse en cuenta también la coyuntura de escasez en el

abasto de esclavos africanos entre 1625 y 1650, ocasionada por la intervención holandesa. No es coincidencia que en aquellos años hayan repuntado las *bandeiras*.

En años recientes se ha demostrado que una parte considerable de los indígenas capturados se empleó dentro de la propia economía paulista, sobre todo en el cultivo de trigo. Este fenómeno se concentró en el siglo XVII y tuvo que ver con las invasiones holandesas. Con la destrucción de la flota portuguesa se volvió precaria la importación de trigo. Al mismo tiempo, la numerosa presencia de tropas extranjeras en el nordeste de la colonia amplió las posibilidades de consumo. Con el fin de la guerra, el cultivo del trigo decayó, y terminó por extinguirse ante la mengua de las reservas de indígenas y la competencia del producto importado.

En sus andanzas por los sertones, los paulistas habrían de cumplir, al fin, un viejo sueño de los colonizadores portugueses. En 1695, en el río Velhas, cerca de las actuales Sabará y Caeté (Minas Gerais), se hizo por primera vez un hallazgo significativo de oro. La tradición asocia con esos primeros descubrimientos el nombre de Borba Gato, yerno de Fernão Dias, conocido como "el cazador de esmeraldas". Durante los siguientes 40 años se encontró oro en Minas Gerais, Bahía, Goiás y Mato Grosso. Junto con el oro aparecieron los diamantes, de menor importancia económica, descubiertos hacia 1730 en Serro Frio, al norte de Minas.

La explotación de metales preciosos tuvo importantes efectos en la metrópoli y en la colonia. La fiebre del oro provocó el primer gran flujo migratorio de Portugal a Brasil. Durante los primeros 60 años del siglo XVIII llegaron a Brasil desde Portugal y las islas del Atlántico aproximadamente 600 000 personas en un promedio anual de entre 8 000 y 10 000. Eran gente de las más

variadas condiciones: pequeños propietarios, religiosos, comerciantes, prostitutas y aventureros de todo tipo.

Por otro lado, los metales preciosos aliviaron momentáneamente los problemas financieros de Portugal. El desequilibrio en la balanza comercial entre Portugal e Inglaterra, que se había convertido en un elemento estructural desde principios del siglo XVIII, se compensó durante varios años gracias al oro proveniente de Brasil. Los metales preciosos recorrieron un circuito triangular: una parte se quedó en Brasil y dio origen a la relativa riqueza de la zona minera; otra fue a dar a Portugal, donde se consumió durante el largo reinado de don Juan V (1706-1750), sobre todo en gastos de la corte y obras como el inmenso palacio-convento de Mafra; otra parte, al fin, llegó a manos británicas de forma directa (vía contrabando) o indirecta, y aceleró la acumulación de capital en Inglaterra.

El *boom* de los metales preciosos afectó la economía azucarera del nordeste de la colonia. Ésta ya estaba en problemas desde 20 años antes del descubrimiento del oro y no se extinguió; sin embargo, indudablemente se vio afectada por los desplazamientos de la población y sobre todo por el aumento en el precio de la mano de obra esclava debido a la creciente demanda de la misma. En términos administrativos, el eje de la vida de la colonia se desplazó hacia el centro-sur, especialmente a Río de Janeiro, por donde entraban esclavos y provisiones y por donde salía el oro. En 1763 la capital del virreinato se transfirió de Salvador a Río. Ambas ciudades tenían aproximadamente la misma población (unos 40 000 habitantes), pero una cosa era ser la capital y otra ser tan sólo la principal ciudad del nordeste.

La economía minera produjo cierta articulación entre zonas distantes de la colonia. Desde Bahía hasta Minas Gerais se transportaron ganado y alimentos, y se estableció una ruta comercial en el sentido inverso. Desde el sur llegaron no sólo

ganado sino también mulas, muy necesarias para el traslado de mercancías. En el interior de São Paulo, Sorocaba, con su famosa feria, se convirtió en un paso obligado para los convoyes de animales, distribuidos sobre todo en Minas.

La extracción de oro y diamantes dio origen a la intervención reguladora más amplia que emprendió la Corona en Brasil. El Gobierno portugués hizo un gran esfuerzo por recaudar los impuestos. Tomó también varias medidas para organizar la vida social en las minas y en otras partes de la colonia, ya fuera en provecho propio o para evitar que la fiebre del oro resultara en un caos. En su intento por reducir el contrabando e incrementar sus ingresos, la Corona estableció formas de recaudación de impuestos que variaron a lo largo de los años.

En general, hubo dos sistemas básicos: el del quinto y el de la capitación. El primero consistía en la disposición de que la quinta parte de todos los metales extraídos debía pertenecer al rey. El quinto se deducía del oro —en polvo o pepitas— que se llevaba a las casas de fundición. La capitación, adoptada por la Corona en sustitución del quinto para obtener mayores ingresos, era mucho más abarcadora. En el caso de los mineros era un impuesto que se cobraba por cada cabeza de esclavo mayor de 12 años, fuera o no productivo e independientemente de su género. Los *faiscadores*, o sea, los mineros que no tenían esclavos, también pagaban el impuesto, en su caso sobre su propia cabeza. Asimismo, este gravamen se cobraba a establecimientos como talleres, tiendas, posadas, rastros, etcétera.

Otra preocupación de la Corona fue la de limitar el ingreso de personas a la región de las minas. Durante los primeros tiempos de actividad minera, la Cámara de São Paulo solicitó al rey de Portugal que sólo los habitantes de la villa de São Paulo, a quienes se debía el hallazgo del oro, pudieran obtener

concesiones para su explotación. Los hechos se encargaron de demostrar que esta pretensión era inviable ante la oleada no sólo de portugueses, sino de brasileños, sobre todo bahianos, que llegaban a la zona. De ahí resultó la guerra civil que se conoce como la Guerra de los Emboabas, en la que se enfrentaron paulistas, por un lado, contra extranjeros y bahianos por el otro (1708-1709). La solicitud de los paulistas no tuvo éxito, pero éstos lograron que se creara la capitanía de São Paulo y Minas de Oro separada de Río de Janeiro (1709) y que la villa de São Paulo se elevara a la categoría de ciudad (1711). En 1720, Minas Gerais se convertiría en una capitanía aparte.

Aunque los paulistas no lograron hacerse del monopolio de las minas, la Corona trató de evitar que éstas se convirtieran en un territorio libre. Se esforzó por impedir que Portugal se despoblara, estableciendo normas para la emigración. Prohibió la entrada de frailes, y una orden real dirigida al gobernador de la capitanía determinó la prisión de todos aquellos religiosos que estuvieran allí "sin empleo o permiso" (1738). Desde las primeras fases de la explotación minera, los frailes fueron sospechosos de contrabando. También se vigiló mucho a los orfebres, por la naturaleza misma de su profesión, y se les obligó a renunciar a ella so pena de expulsión de la zona minera.

Otros esfuerzos de la Corona se centraron en evitar el desequilibrio entre la región de las minas y otras zonas del país. Se prohibió la circulación de mercancías importadas de Portugal y se tomaron medidas para asegurar el abasto de esclavos en el nordeste de la colonia mediante el establecimiento de cuotas para la entrada de cautivos a la región minera.

Para tratar de asegurar "la ley y el orden", la Corona creó juntas de arbitraje y nombró oidores. Éstos muchas veces tuvieron la facultad no sólo de juzgar casos, sino de supervisar la recaudación del quinto del oro, tarea que en principio

correspondía al proveedor mayor. Para controlar a los esclavos, escoltar el transporte del oro y reprimir disturbios, en 1719 llegaron de Portugal a Minas Gerais dos compañías de dragones (fuerzas militares profesionales). También se crearon milicias para enfrentar emergencias, dirigidas por blancos y conformadas no sólo por éstos, sino por negros y mulatos libres.

La administración portuguesa no alcanzó del todo sus objetivos básicos en la región minera. Las grandes distancias, la corrupción de las autoridades locales, la posición de esas autoridades entre la Corona y la vida de la colonia, así como conflictos entre las facultades de los funcionarios, fueron algunos de los factores que dificultaron la acción del Gobierno portugués. Además, los lineamientos provenientes de Lisboa no representaban un todo coherente. Dudas, demoras y cambios de rumbo hicieron crecer la brecha entre las intenciones y la realidad.

No sólo desde Portugal llegó gente de todas condiciones a Minas Gerais. A partir del arribo de los paulistas y sus esclavos indígenas, tuvieron lugar migraciones desde varias partes de Brasil. Nació así una sociedad diversa, conformada no sólo por mineros y propietarios de minas, sino por negociantes, abogados, religiosos, hacendados, artesanos, burócratas y militares. Muchos de estos personajes tenían intereses estrechamente vinculados con la colonia; no en vano Minas fue cuna de una serie de revueltas y conspiraciones contra las autoridades coloniales. Aunque los sectores más acaudalados de la población eran a veces propietarios de haciendas e invertían en la minería en sitios distantes, la vida social se concentró en las ciudades que fueron puntos de residencia, de negocios y fiestas conmemorativas. En ellas ocurrieron notables manifestaciones culturales en el campo de las artes, las letras y la música. El

hecho de que las órdenes religiosas tuvieran prohibida la entrada a Minas favoreció el surgimiento de asociaciones religiosas laicas: hermandades y órdenes terceras. Éstas patrocinaron la construcción de las iglesias barrocas de Minas, proceso en que se distinguió la figura del mulato Antônio Francisco Lisboa, el llamado *Aleijadinho*, hijo bastardo de un constructor portugués y una esclava.

En la base de la sociedad estaban los esclavos. El trabajo más duro era el de la minería, sobre todo cuando el oro del lecho de los ríos empezó a escasear y hubo que ir a buscarlo a las galerías subterráneas. Enfermedades como la disentería, la malaria, infecciones pulmonares y muertes por accidente fueron comunes. Se estima que la vida útil de un esclavo en las minas no pasaba de siete a doce años. Sucesivas importaciones atendieron las necesidades de la economía minera, incluso para sustituir la mano de obra inutilizada. El número de cautivos enviados a Brasil creció entre 1720 y 1750, a pesar de la crisis del azúcar. Datos sobre la población de la capitanía de Minas registrados en 1776 muestran la aplastante presencia de negros y mulatos. Los negros representaban alrededor de un 52%, los mulatos un 26% y los blancos un 22% de aproximadamente 320 000 habitantes.

A lo largo de los años tuvo lugar un intenso mestizaje, creció la proporción de mujeres, que en 1776 representaba más o menos un 38% del total, y se registró un fenómeno cuya interpretación es controvertida: un gran número de manumisiones. Para dar idea de su extensión: si entre 1735 y 1749 los libertos representaban menos de 1.4% de la población de ascendencia africana, hacia 1786 constituían aproximadamente 41% de esa población y 34% del número total de habitantes de la capitanía. La hipótesis más plausible para explicar la magnitud de estas proporciones, que superan, por ejemplo, a las de Bahía, es que en las minas la progresiva decadencia en la extracción de metales

volvió secundaria o económicamente inviable la posesión de esclavos.

Por su vínculo con el oro, la sociedad de la zona minera suele asociarse con la idea de riqueza. Pero, vista de cerca, esta idea merece muchos reparos. Ante todo, hay que distinguir entre la fase inicial de la fiebre del oro y la que la siguió. En la fase inicial, esto es, durante la última década del siglo XVII y principios del XVIII, la búsqueda de metales preciosos sin el apoyo de otras actividades provocó escasez de alimentos y una inflación que afectó a toda la colonia. El hambre llegó a grados extremos y muchos campamentos fueron abandonados. Con el paso del tiempo, los cultivos y la diversificación de actividades económicas cambiaron ese cuadro de privaciones. La sociedad minera acabó por acumular riquezas, y sus vestigios pueden verse hoy en las construcciones y obras de arte de las llamadas ciudades históricas.

Pero estas riquezas estaban en manos de unos cuantos: de un grupo que se dedicaba no sólo a la incierta extracción del oro, sino a los diversos negocios y oportunidades que surgieron en torno a ella, incluyendo los servicios contratados en la administración pública. Debajo de este grupo, la amplia capa de la población libre estuvo compuesta por gente pobre o pequeños funcionarios, emprendedores o comerciantes, con posibilidades económicas limitadas. Sin lugar a dudas, la sociedad de Minas fue más abierta y compleja que la de la región azucarera, pero no por eso dejó de ser, en su conjunto, una sociedad pobre. El apogeo del oro se sitúa entre 1733 y 1748; a partir de entonces empezó a declinar. A principios del siglo XIX la producción aurífera ya no tenía un peso significativo en el conjunto de la economía brasileña. El retroceso de la zona minera fue nítido; basta recordar que algunas ciudades que habían gozado de una vida intensa se volvieron históricas en el sentido, también, de

hallarse estancadas. Ouro Preto, por ejemplo, tenía 20 000 habitantes en 1740 y sólo 7 000 en 1804.

Pero el retroceso no afectó a toda la capitanía de Minas Gerais. No todo en ella eran minas. Aun en los tiempos gloriosos del oro, la hacienda minera muchas veces combinaba la ganadería, el ingenio azucarero y la producción de harina con la explotación aurífera. Gracias a la ganadería, a los cereales y más tarde a las manufacturas, Minas no retrocedió como un todo. Al contrario: a lo largo del siglo XIX habría de expandir esas actividades y mantener un constante flujo de importación de esclavos. La provincia de Minas representaría una curiosa combinación entre el régimen esclavista y una economía que no era de plantación ni estaba orientada principalmente al mercado internacional.

UN BALANCE DE LA ECONOMÍA COLONIAL: EL MERCADO INTERNO

Tradicionalmente, sobre todo a partir de los libros de Caio Prado Júnior, la mayoría de los historiadores ha considerado que el sentido más profundo de la colonización está determinado por el objetivo de la metrópoli portuguesa: hacer de Brasil una colonia de explotación. Este objetivo implicaba organizar la economía colonial de tal manera que la producción a gran escala, destinada a la exportación, produjera ganancias y acumulación de capital en la metrópoli.

Nadie duda que ésa haya sido la intención de la Corona portuguesa, pero trabajos más recientes han empezado a preguntarse si se cumplió. Un sector vital de la colonia, por lo menos, no se alineó con este esquema: el de los grandes traficantes de esclavos. Estudios como los de Manolo Florentino y João Luis Fragoso han demostrado que, al menos desde fines del

siglo XVIII, los traficantes de Río de Janeiro constituyeron un grupo muy poderoso, compuesto casi en su totalidad por brasileños o portugueses radicados en la colonia. Partiendo sobre todo de ganancias acumuladas en el sector inmobiliario, el grupo conformó una extensa red de negocios que incluía el abasto de esclavos y varias actividades ligadas a él, como la compra de mercancías en puertos de Asia para intercambiarlas por esclavos en las costas de África. Los trabajos de la historiadora Kátia Mattoso muestran que en Salvador el cuadro era semejante.

No sólo se ha demostrado que los habitantes de la Colonia fueron adquiriendo una posición dominante en el llamado comercio de almas, sino que también se ha retomado una línea de interpretación histórica, cuyo mayor representante en el pasado fue Capistrano de Abreu, que dirige su atención hacia las actividades económicas destinadas al mercado interno. En esta línea, los trabajos de Jorge Caldeira son los que han llevado más lejos la tesis de la relevancia del mercado interno y, en consecuencia, del creciente distanciamiento entre la colonia y la metrópoli.

Este autor señala la importancia de la producción *gaúcha* (ganado, carne seca, trigo y mulas que se enviaban a la feria de Sorocaba, en el interior de São Paulo), así como el ya mencionado caso de Minas Gerais durante la fase de declive de la minería, el abastecimiento interno de esclavos provenientes de los puertos, etc., y concluye que Brasil ya andaba por su propio pie mucho antes de lo que se imagina.

Las recientes investigaciones han tenido el gran mérito de demostrar que la economía del Brasil colonial no puede entenderse como una sucesión de ciclos —el del azúcar, el del oro, etc.—, sino que tuvo características mucho más complejas. También es importante insistir en el significado del comercio de

esclavos, que dio origen a un sector social que llegó a ser más relevante que el de los grandes propietarios rurales.

No obstante, conviene tener cuidado y no ir demasiado lejos. La economía de exportación, que muchas veces impulsó actividades ligadas al mercado interno, fue un eje vital de la colonia; y no sólo de ésta, si se tiene en cuenta el papel central que tuvo la economía cafetalera desde mediados del siglo XIX hasta aproximadamente 1930.

La crisis del sistema colonial

Las últimas décadas del siglo XVIII se caracterizaron por una serie de transformaciones en el mundo occidental, tanto al nivel de las ideas como al nivel de los hechos. El Antiguo Régimen, o sea, el conjunto de monarquías absolutas que imperaba en Europa desde principios del siglo XVI, y con el que se vinculaban determinadas prácticas y concepciones, entró en crisis. A partir de los filósofos franceses y de los economistas ingleses, el pensamiento ilustrado y el liberalismo empezaron a implantarse y a ganar terreno.

Algunos hechos significativos impulsaron las transformaciones del mundo occidental. En 1776 las colonias inglesas de América del Norte proclamaron su independencia. A partir de 1789 la Revolución Francesa puso fin al Antiguo Régimen en Francia, lo que repercutió en toda Europa incluso por la fuerza de las armas. Al mismo tiempo, en Inglaterra se llevaba a cabo una revolución silenciosa, sin fecha precisa, tan importante o más que las mencionadas: la Revolución Industrial. El uso de nuevas fuentes de energía, la invención de máquinas que se introdujeron sobre todo en la industria textil, el desarrollo agrícola y el control del comercio internacional

fueron factores que habrían de convertir a Inglaterra en la mayor potencia mundial de la época.

En su esfuerzo por ampliar los mercados, los ingleses fueron imponiéndole al mundo el libre comercio y el abandono de los principios mercantilistas, al tiempo que trataban de preservar su propio mercado y sus colonias con aranceles proteccionistas. En cuanto a sus relaciones con las Américas española y portuguesa, abrieron brechas cada vez más extensas en el sistema colonial por medio de acuerdos comerciales, contrabando y alianzas con comerciantes locales. El mundo colonial se vio afectado por otro factor importante: la tendencia a limitar o extinguir la esclavitud, manifestada por las más grandes potencias de la época: Inglaterra y Francia. En febrero de 1794 la Francia revolucionaria decretó el fin de la esclavitud en sus colonias; Inglaterra haría lo mismo en 1807. En el caso de Francia, sin embargo, hay que señalar que Napoleón revocó la medida en 1802.

El cuadro internacional afectó las relaciones entre la Corona portuguesa y la más grande de sus colonias. Para mediados del siglo XVIII, Portugal se había convertido en un país atrasado en comparación con las grandes potencias europeas. Dependía de Inglaterra, de quien recibía, a cambio, protección contra Francia y España. Aun así, la monarquía lusa trataba de mantener el sistema colonial y de limitar la creciente presencia inglesa en Brasil.

Un acontecimiento importante en ese periodo fue el ascenso de don José I al trono en 1750. No propiamente por el rey, sino por su ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marqués de Pombal. Antes de que lo nombraran ministro, Pombal, de más de 50 años, había tenido una carrera relativamente oscura como representante de Portugal en

Inglaterra y diplomático en la corte austriaca. Su obra, que llevó a cabo a lo largo de muchos años (1750-1777), representó un gran esfuerzo por hacer más eficiente la administración portuguesa y modificar la relación entre metrópoli y colonia. Esta reforma habría de ser una peculiar mezcla entre lo viejo y lo nuevo, que se explica por las características de Portugal. En ella se combinaban el absolutismo ilustrado y un intento de aplicar de manera consecuente las doctrinas mercantilistas. La fórmula general se concretó en una serie de medidas. Destacaremos las que más directamente tuvieron que ver con Brasil.

En línea con los preceptos mercantilistas, Pombal creó dos compañías privilegiadas de comercio: la Compañía General del Gran Pará y Maranhão (1755) y la Compañía General de Pernambuco y Paraíba (1759). La primera tenía como objetivo desarrollar la zona norte, ofreciendo precios atractivos para las mercancías que se producían allí y se consumían en Europa, como el cacao, el clavo, la canela y, ya para entonces, el algodón y el arroz, transportados exclusivamente por los barcos de la empresa. Introdujo también esclavos negros que, debido a la pobreza de la región, fueron en su mayoría reexportados a las minas de Mato Grosso. La segunda compañía trató de reactivar el nordeste de la colonia, siguiendo la misma vía de acción.

La política pombalina perjudicó a los sectores comerciales de Brasil, que se vieron marginados por las compañías privilegiadas; pero no tuvo como objetivo perseguir a la élite colonial. Al contrario, colocó a miembros de esa élite en los órganos administrativos y fiscales del Gobierno, en la magistratura y en las instituciones militares.

El programa económico de Pombal resultó frustrado en gran medida porque a mediados del siglo XVIII la colonia entró en un periodo de depresión económica que se prolongó hasta fines de la década de 1770. Las principales causas de esta depresión

fueron la crisis del azúcar y, a partir de 1760, el declive en la producción de oro. Mientras caían los ingresos de la metrópoli, crecían los gastos extraordinarios destinados a reconstruir Lisboa, destruida por un terremoto en 1775, y a sostener las guerras contra España por el control de la extensa región que iba desde el sur de São Paulo hasta el Río de la Plata.

Pombal trató de inhibir el contrabando de oro y diamantes e hizo esfuerzos por mejorar la recaudación de impuestos. En Minas Gerais, el impuesto de capitación fue sustituido por el antiguo quinto del oro, con la exigencia de que rindiera anualmente al menos 100 arrobas del metal. Tras una serie de omisiones, la Corona se encargó de explotar directamente las minas de diamante (1771). Al mismo tiempo, trató de que la metrópoli dependiera menos de la importación de productos industrializados, fomentando la instalación de establecimientos manufactureros en Portugal e incluso en Brasil.

Una de las medidas más controvertidas de la administración pombalina fue la expulsión de los jesuitas de Portugal y sus dominios, acompañada de la confiscación de sus bienes (1759). Ésta puede comprenderse considerando la intención que tenía la Corona de centralizar la administración portuguesa e impedir que órdenes religiosas cuyos fines eran distintos a los suyos tuvieran espacios para actuar de manera autónoma. Además de los jesuitas, los mercedarios —segunda orden en importancia en la Amazonia— fueron expulsados del territorio a mediados de la década de 1760 y sus propiedades fueron confiscadas. Pero el blanco principal fue la Compañía de Jesús, a la que se acusaba de ser "un Estado dentro del Estado".

En Brasil, la consolidación del dominio portugués en las fronteras del norte y del sur debía pasar, según Pombal, por la integración de los indígenas a la civilización portuguesa. Sin una población nacida en Brasil que se identificara con los objetivos

lusos, sería imposible asegurar el control de vastas áreas semidespobladas. De ahí que se adoptara una serie de medidas en relación con los indígenas. La esclavitud de los nativos se extinguió en 1757; muchas aldeas de la Amazonia se convirtieron en villas con una administración civil; la legislación fomentó los matrimonios mixtos entre blancos e indígenas. Esta política de asimilación chocaba con el paternalismo jesuita y era un punto central de conflicto.

Al mismo tiempo se acusaba a los jesuitas españoles de haber fomentado una revuelta indígena en la zona de los Siete Pueblos de las Misiones de Uruguay contra la entrega de aquel territorio a los portugueses: la llamada Guerra Guaranítica, que se extendió de 1754 a 1756. Tampoco podemos olvidar que las extensas propiedades de la Compañía de Jesús se habían convertido en objeto de deseo para los miembros de la élite colonial y de la Corona misma.

La mayoría de las propiedades urbanas y rurales confiscadas a los jesuitas se remató en subastas a importantes hacendados y comerciantes. Sus más grandes iglesias pasaron a manos de obispos que no estaban integrados a órdenes religiosas. Muchos de los colegios de la Compañía de Jesús se convirtieron en palacios de gobernadores o en hospitales militares. En términos generales hubo un gran desperdicio, en especial de bienes culturales como las bibliotecas, que fueron consideradas cosa de poco valor.

La expulsión de la orden abrió un vacío en la ya de por sí pobre educación en la colonia. La Corona portuguesa, a diferencia de la española, temía que se formara en Brasil una élite letrada. Ya desde el siglo XVI, España creó en América varias universidades: la de Santo Domingo, en 1538; la de San Marcos, en Lima, y la de la Ciudad de México, en 1551. Nada de esto ocurrió en la América lusa durante todo el periodo colonial. Lo

mismo sucedió con la imprenta, que también surgió en las principales ciudades de la América española en el siglo XVI. En cambio, con excepción de un taller gráfico abierto en 1747 en Río de Janeiro, que luego se cerró por orden real, la imprenta no nació en Brasil sino hasta el siglo XIX, con la llegada de don Juan VI.

La Corona tomó algunas medidas para remediar los problemas ocasionados por la expulsión de los jesuitas en el terreno de la educación. Se creó un impuesto especial —el subsidio literario— para mantener la enseñanza promovida por el Estado. El obispo de Pernambuco creó el seminario de Olinda, parcialmente orientado a las ciencias naturales y las matemáticas. En Río de Janeiro y Bahía surgieron pequeños clubes intelectuales.

Las medidas de Pombal contra las órdenes religiosas fueron parte de una política de subordinación de la Iglesia al Estado portugués, aunque este último trató de evitar conflictos directos con el papa. La Iglesia, por su parte, aceptó la expulsión de los jesuitas. Lo que es más, en 1773 el papa Clemente XIV extinguió la Compañía de Jesús, convencido de que causaba más problemas que ventajas. La orden de los jesuitas no volvería a existir sino hasta 1814.

La gran controversia entre los historiadores portugueses a favor o en contra de Pombal llevó a la percepción de un profundo corte entre la época pombalina y la que vino después: el reinado de doña María I. La propia expresión *viradeira*, con que se define el periodo que siguió a la muerte de don José, en 1797, y la caída de Pombal, es un indicio de esta percepción. Muchas cosas cambiaron: las compañías de comercio se extinguieron y se prohibió la existencia de fábricas o talleres manufactureros textiles en la colonia, con excepción de los que fabricaban manta

gruesa de algodón para el uso de los esclavos. Esto, sumado a la represión que sufrieron los miembros de la Conspiración Minera, produjo en la historiografía brasileña una imagen muy negativa de la etapa posterior a la caída de Pombal.

Lo cierto, no obstante, es que entre los años 1777 y 1808 la Corona siguió tratando de hacer reformas para adaptarse a los nuevos tiempos y salvar al colonialismo mercantilista. El reinado de doña María I y del príncipe regente don Juan, a diferencia del anterior, se benefició de una coyuntura propicia a la reactivación de las actividades agrícolas de la colonia: la producción de azúcar, como hemos visto, se cotizó y expandió, favorecida por la insurrección de los esclavos de Saint-Domingue. Además ganó fuerza un nuevo cultivo: el algodón, desarrollado por la compañía de comercio pombalina e impulsado por la Guerra de Independencia de Estados Unidos, convirtió al Maranhão, durante cierto tiempo, en la zona más próspera de la América portuguesa.

Movimientos de rebeldía y conciencia nacional

Mientras la Corona lusa mantenía una política de reforma del absolutismo, en la colonia brotaron varias conspiraciones contra Portugal e intentos de independencia. Estos últimos tenían que ver con las nuevas ideas y los acontecimientos internacionales, pero también reflejaban la realidad local. Podría decirse incluso que se trató de revueltas regionales y no de revoluciones nacionales. Éste fue el rasgo común de episodios tan distintos como la Conspiración Minera (1789), la Conjura Bahiana (1798)[8] y la Revolución de 1817 en Pernambuco.

¿En qué momento los miembros de la sociedad colonial nacidos en la colonia, e incluso algunos portugueses que residían

en ella, empezaron a pensar en Brasil como una unidad distinta de Portugal? En otras palabras, ¿en qué momento surgió la conciencia de ser brasileño?

No hay una respuesta rígida para una pregunta de esta naturaleza. La conciencia nacional fue definiéndose a medida que sectores de la sociedad colonial empezaron a tener intereses distintos a los de la metrópoli o a identificar en ella la fuente de sus problemas. Lejos de constituir un grupo homogéneo, estos sectores abarcaban desde grandes propietarios rurales, por un lado, hasta artesanos o soldados mal pagados, por el otro, pasando por bachilleres y letrados. Tampoco tenían en común exactamente la misma ideología. Sus fuentes de inspiración eran las "ideas francesas" o el liberalismo de la revolución estadounidense. Pero los sectores dominantes trataban de limitarlas siendo, por ejemplo, muy prudentes en lo que concernía a la abolición de la esclavitud, que iba en contra de sus intereses. Para los estratos dominados, al contrario, la idea de la independencia iba acompañada de propósitos igualitarios de reforma social.

La Guerra de los Mascates en Pernambuco (1710), las rebeliones ocurridas en la región de Minas Gerais a partir de la Revuelta de Filipe dos Santos en 1720 y, principalmente, las conspiraciones y revoluciones registradas en los últimos decenios del siglo XVIII y en los dos primeros del siglo XIX suelen señalarse como ejemplos afirmativos de la conciencia nacional. Aunque es posible decir que apuntan en ese sentido, hay que recordar que, hasta la Independencia e incluso después, la conciencia nacional pasaba por la conciencia regional. Los rebeldes de ese periodo se afirman como *mineiros*, bahianos, pernambucanos y, en algunos casos, como pobres, tanto o más que como brasileños.

La manifestación de rebeldía más relevante en Brasil desde fines del siglo XVIII fue la llamada Conspiración Minera (Minas Gerais, 1789). La importancia de este movimiento no se debe al hecho en sí, sino a la construcción simbólica de la que fue objeto. La conspiración estuvo directamente relacionada con el agravamiento de los problemas de la sociedad regional en aquel periodo. Al mismo tiempo, sus integrantes recibieron influencias de las nuevas ideas que surgían en Europa y en América del Norte. Muchos miembros de la élite *mineira* viajaban por el mundo y estudiaban en Europa. José Joaquim da Maia, por ejemplo, exestudiante de Coímbra, entró a la Facultad de Medicina de Montpellier, en Francia, en 1786. Durante aquel año y el siguiente tuvo contacto con Thomas Jefferson, que entonces era embajador de Estados Unidos en Francia, y solicitó su apoyo para una revolución que, según él, se estaba tramando en Brasil. José Álvares Maciel, miembro de la Conspiración Minera, se graduó en Coímbra y vivió un año y medio en Inglaterra. Ahí aprendió sobre técnicas fabriles y habló con comerciantes ingleses sobre la posibilidad de que respaldaran un movimiento por la independencia de Brasil.

Los conspiradores *mineiros* pertenecían, en su mayoría, a un grupo de la élite colonial conformado por propietarios de minas y hacendados, religiosos involucrados en negocios, funcionarios y abogados de prestigio, y militares de alta patente. Todos ellos tenían vínculos con las autoridades coloniales de la capitanía y, en algunos casos, ocupaban cargos en la magistratura.

Joaquim José da Silva Xavier constituía, en parte, una excepción. Desfavorecido por la muerte prematura de sus padres, que tuvieron siete hijos, perdió sus propiedades por deudas y probó, sin éxito, fortuna en el comercio. En 1775 ingresó a la carrera militar, con el puesto de alférez, que correspondía al grado inicial en la escala de oficiales. En sus

horas libres ejercía el oficio de dentista, que le valió el apodo despectivo de *Tiradentes*.

Para las últimas décadas del siglo XVIII, la sociedad *mineira* había entrado en una fase de declive marcada por el continuo desplome de la producción de oro y por las iniciativas de la Corona portuguesa para asegurar la recaudación del quinto. Al mismo tiempo, el entrelazamiento entre la élite local y la administración de la capitanía sufrió una sacudida con la llegada a Minas del gobernador Luís da Cunha Meneses en 1782. Cunha Meneses hizo a un lado a los miembros más significativos de la élite para favorecer a su grupo de amigos. Aunque no pertenecía a la élite, el propio Tiradentes se vio perjudicado cuando perdió el mando del destacamento militar con el que patrullaba el estratégico camino de la sierra de Mantiqueira, puerta de entrada a las minas.

La situación se agravó con la designación del vizconde de Barbacena como sustituto de Cunha Meneses. Barbacena recibió del ministro portugués Melo e Castro instrucciones para asegurar el cobro del impuesto anual de 100 arrobas de oro. Para alcanzar esta cifra, el gobernador podría apropiarse de todo el oro existente y, si ni aun eso bastaba, decretar la *derrama*, un gravamen que tendría que pagar cada habitante de la capitanía. También se le pidió investigar a los deudores de la Corona, así como los contratos firmados entre la administración pública y particulares. Estas instrucciones hacían flotar una nube de amenaza sobre la capitanía y más directamente sobre el grupo de élite, al que pertenecían los principales morosos del poder real.

Los conspiradores empezaron a preparar el movimiento de rebeldía en los últimos meses de 1788, impulsados por la posibilidad de la derrama. Sin embargo, no llegaron a poner en práctica sus planes. En marzo de 1789, Barbacena decretó la

suspensión del gravamen, mientras se denunciaba a los conspiradores. Se sucedió el encarcelamiento de éstos en Minas y el de Tiradentes en Río de Janeiro. El largo proceso, que tuvo lugar en la capital de la colonia, no terminó sino hasta el 18 de abril de 1792. Tiradentes y varios otros acusados fueron condenados a la horca. Algunas horas después, una carta de clemencia de la reina doña María trasmutó todas las condenas a muerte en penas de destierro, con excepción de la de Tiradentes. La mañana del 21 de abril de 1792, Tiradentes fue ahorcado como protagonista de un escenario típico de las ejecuciones del Antiguo Régimen. Entre sus elementos, la puesta en escena incluía la presencia de tropa, discursos y aclamaciones a la reina. A continuación se destazó y decapitó el cuerpo. La cabeza se exhibió en la plaza principal de Ouro Preto.

¿Qué pretendían los conspiradores? La respuesta no es sencilla, pues deriva en gran parte de lo que dijeron los acusados y los testigos en el proceso que emprendió la Corona y en el que se decidiría, literalmente, su vida o su muerte. Al parecer, la mayoría tenía la intención de proclamar una república tomando como modelo la Constitución de Estados Unidos. El Distrito Diamantino se liberaría de las restricciones que pesaban sobre él, se perdonaría a los deudores de la Corona y se fomentaría la instalación de establecimientos manufactureros. No habría un Ejército permanente; en lugar de ello, los ciudadanos tendrían que portar armas y servir, cuando fuera necesario, en la milicia nacional. El punto más interesante de las muchas medidas propuestas es el que respecta a la esclavitud. Divididos entre la coherencia ideológica y sus intereses, los conspiradores optaron por una vía intermedia y defendieron, aparentemente, la liberación de los esclavos nacidos en Brasil.

La Conspiración Minera es un ejemplo de cómo acontecimientos históricos de alcance aparentemente limitado

pueden tener impacto en la historia de un país. Como hecho material, la rebelión no llegó a concretarse y sus posibilidades de éxito eran casi nulas. En este sentido, la Revolución de 1817, que a partir de Pernambuco se extendió a una amplia zona del nordeste de Brasil, tuvo mayor importancia. Pero la relevancia del movimiento deriva de su fuerza simbólica. Tiradentes se convirtió en un héroe nacional y las escenas de su muerte, incluyendo el descuartizamiento de su cuerpo y la exhibición de su cabeza, se evocaron con mucha emoción y horror en los pupitres escolares. Esto no sucedió de la noche a la mañana, sino a través de un largo proceso de formación de un mito que tiene su propia historia. En un primer momento, mientras Brasil no fue independiente, prevaleció la versión de los colonizadores. La propia expresión, "conspiración (o *inconfidência*) *minera*", utilizada en la época y que la tradición curiosamente ha preservado hasta nuestros días, es muestra de ello. La palabra *inconfidência* tiene un sentido negativo que se refiere a la falta de fidelidad, al incumplimiento de un deber, específicamente para con el soberano o el Estado. Durante el Imperio, el episodio resultaba incómodo, pues los conspiradores tenían pocas simpatías por la forma monárquica del Gobierno. Además, los dos emperadores de Brasil descendían en línea directa de la reina doña María, responsable de condenar a los revolucionarios.

La Proclamación de la República favoreció la proyección del movimiento y la transformación de la figura de Tiradentes en un mártir republicano. Había una base real para ello. Hay indicios de que el gran espectáculo montado por la Corona portuguesa para intimidar a la población de la colonia causó el efecto opuesto y mantuvo viva la memoria del acontecimiento y la simpatía por los conspiradores. La actitud de Tiradentes, que a partir de cierto momento del proceso asumió toda la responsabilidad por la conspiración, así como su sacrificio final,

facilitaron la mitificación de su figura inmediatamente después de la Proclamación de la República. El 21 de abril se convirtió en día feriado; cada vez más, se hicieron cuadros en los que se retrataba a Tiradentes con rasgos semejantes a los de las imágenes más divulgadas de Cristo. Así, se convirtió en uno de nuestros pocos héroes nacionales, al que no sólo rindieron culto la derecha y la izquierda, sino también la gente común.

La Independencia de Brasil no llegaría bajo la forma de un corte revolucionario con la metrópoli, sino como un proceso del que resultaron algunos cambios y muchas continuidades respecto al periodo colonial. La historia de este proceso pasa por la transferencia de la familia real portuguesa a Brasil y por la apertura de los puertos brasileños al comercio exterior, lo que puso fin al sistema colonial.

La guerra que Napoleón llevaba a cabo en Europa contra Inglaterra, a principios del siglo XIX, acabó teniendo consecuencias para la Corona portuguesa. Tras controlar casi toda Europa Occidental, Napoleón impuso un bloqueo al comercio entre Inglaterra y el continente. Portugal representaba una brecha en ese bloqueo, y había que cerrarla. En noviembre de 1807, tropas francesas cruzaron la frontera entre Portugal y España, y avanzaron hacia Lisboa.

El príncipe don Juan, que regía el trono desde que en 1792 se declaró loca a su madre, doña María, decidió en pocos días transferir la corte a Brasil. Entre el 25 y el 27 de noviembre de 1807, de 10 000 a 15 000 personas se embarcaron en navíos portugueses rumbo a la colonia, bajo la protección de la flota inglesa. Todo un aparato burocrático se trasladó a la nueva sede: ministros, consejeros, jueces de la Suprema Corte, empleados del Tesoro, miembros del Ejército y de la Marina, e integrantes del alto clero. Se trasladaron también el Tesoro real, los archivos del

Gobierno, una imprenta y varias bibliotecas, que serían la base de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro.

En cuanto comenzó su breve estancia en Bahía, el 28 de enero de 1808, don Juan decretó la apertura de los puertos de Brasil a las naciones amigas. Aunque se sabe que en aquel momento la expresión "naciones amigas" equivalía a decir Inglaterra, este acto ponía fin a 300 años de sistema colonial. Ya en Río de Janeiro, en el mes de abril, el príncipe regente revocó los decretos que prohibían la instalación de empresas manufactureras en la colonia, exentó de aranceles la importación de materias primas destinadas a la industria, ofreció subsidios para las industrias de la lana, la seda y el hierro, y fomentó la invención e introducción de nuevas máquinas.

La apertura de los puertos fue un acto históricamente previsible y, al mismo tiempo, forzado por las circunstancias. Portugal estaba ocupado por tropas francesas y el comercio no podía realizarse por esa vía. Para la Corona, era preferible legalizar el extenso contrabando que había entre la colonia e Inglaterra y recibir los impuestos correspondientes.

Inglaterra fue la principal beneficiaria de esta medida. Río de Janeiro se convirtió en el puerto de entrada para los productos manufacturados por los ingleses, con destino no sólo a Brasil, sino al Río de la Plata y la costa del Pacífico. Para agosto de 1808 ya existía en la ciudad un importante núcleo de entre 150 y 200 comerciantes y agentes comerciales ingleses. La apertura de los puertos favoreció también a los propietarios rurales que producían bienes destinados a la exportación (sobre todo azúcar y algodón), los cuales se liberaron del monopolio comercial de la metrópoli. En adelante, podrían venderle a quien fuera, sin las restricciones impuestas por el sistema colonial.

Por otra parte, la medida provocó grandes protestas entre los comerciantes de Río de Janeiro y de Lisboa, a tal grado que el príncipe don Juan tuvo que hacerles algunas concesiones. Mediante un decreto de junio de 1808, el libre comercio se limitó a los puertos de Belém, São Luís, Recife, Salvador y Río de Janeiro; el llamado comercio de cabotaje —entre los puertos de la colonia— quedó reservado a los barcos portugueses; el impuesto sobre productos importados, que se había fijado en un 24% del valor, se redujo a 16% para las embarcaciones portuguesas. Sólo la última de estas decisiones tenía una importancia real, pero pronto sería superada.

La escalada inglesa por el control del mercado colonial brasileño culminó en el Tratado de Navegación y Comercio que se firmó, después de largas negociaciones, en febrero de 1810. La Corona portuguesa tenía poco margen de acción. Dependía del resultado de la guerra contra Napoleón para recuperar el territorio metropolitano y sus colonias recibían la protección de la escuadra británica. El tratado de 1810 fijó en un 15% el valor del arancel que debía pagarse por las mercancías inglesas exportadas a Brasil. De este modo los productos ingleses tuvieron ventaja incluso en comparación con los portugueses. Aunque poco después los aranceles se igualaron, la ventaja siguió siendo inmensa. Sin protección arancelaria, las mercancías de un país atrasado —y eso era Portugal en el ámbito del capitalismo europeo— no estaban en condiciones de competir en términos de precio y variedad con los productos ingleses. Los propósitos industrializantes de las primeras iniciativas de don Juan también acabaron, salvo raras excepciones, como letra muerta.

Un aspecto de la política británica se volvería motivo de preocupación para los distintos sectores de la sociedad colonial. Tras haber sido una gran beneficiaria del comercio de esclavos, desde fines del siglo XVIII, Inglaterra empezó a combatir la

esclavitud. El Tratado de Alianza y de Amistad, que se firmó junto con el Tratado de Navegación y Comercio de 1810, obligaba a la Corona portuguesa a limitar el tráfico de esclavos hacia los territorios que estaban bajo su dominio y prometía vagamente tomar medidas para restringirlo. Algunos años más tarde, cuando las potencias que salieron victoriosas en la guerra contra Napoleón se reunieron en el Congreso de Viena (1815), el Gobierno portugués firmó un nuevo tratado en el que aceptaba cesar el tráfico al norte del ecuador. En principio, con ello debía terminar el comercio de esclavos de la Costa de la Mina a Brasil. Una cláusula adicional del tratado concedía a Inglaterra el "derecho de visita" en altamar a los barcos sospechosos de transportar cautivos y autorizaba su aprehensión. Ninguna de estas medidas impidió el tráfico, que, por el contrario, llegó a ser más intenso a principios de 1820 que a comienzos de siglo. Pero se vislumbraba en el horizonte una disputa entre el Gobierno inglés, por un lado, y las autoridades y sectores sociales dominantes en Brasil, por el otro. Este conflicto se agudizaría en el Brasil independiente.

La transferencia de la sede de la monarquía portuguesa a Brasil modificó el cuadro de las relaciones internacionales en el contexto de América del Sur. La política exterior de Portugal empezó a decidirse en la colonia, pues el Ministerio de Negocios Extranjeros y de Guerra se instaló en Río de Janeiro. Además de realizar una expedición a la Guyana Francesa fomentada por Inglaterra, la Corona concentró su acción en la zona del Río de la Plata, específicamente en la Banda Oriental —actual Uruguay—, región donde españoles y portugueses se habían estado enfrentando desde las últimas décadas del siglo XVII.

Para anexar la Banda Oriental a Brasil, don Juan VI llevó a cabo dos intervenciones militares, una en 1811 y otra a partir de 1816. La derrota de José Artigas —principal figura en la lucha

por la independencia uruguaya— aseguró a los portugueses la posesión de la región y la anexión de la Banda Oriental a Brasil en 1821, bajo el nombre de Provincia Cisplatina. Pero los conflictos en Río de la Plata estaban lejos de terminar.

La llegada de la familia real desplazó definitivamente el eje de la vida administrativa de la colonia a Río de Janeiro, lo que transformó también la fisonomía de la ciudad. Entre otros aspectos, se esbozó allí cierta vida cultural, con acceso a los libros y una relativa circulación de ideas. En septiembre de 1808 salió a la luz el primer periódico editado en la colonia; se abrieron también teatros, bibliotecas, academias literarias y científicas para atender los requisitos de la corte y de una población urbana en rápida expansión. Baste decir que, durante el periodo en que don Juan VI permaneció en Brasil, el número de habitantes de la capital se duplicó, pasando de aproximadamente 50 000 a 100 000 personas. Muchos de los nuevos habitantes eran inmigrantes, no sólo portugueses, sino también españoles, franceses e ingleses que conformarían una clase media de profesionales y artesanos calificados.

Además de ellos, llegaron a Brasil científicos y viajeros extranjeros, como el naturalista y mineralogista inglés John Mawe, el zoólogo bávaro Johann von Spix, el botánico Carl von Martius, también bávaro, y el naturalista francés Auguste de Saint Hilaire, autores de trabajos que son una fuente indispensable para el conocimiento de aquella época. En marzo de 1816 arribó a Río de Janeiro la misión artística francesa, que incluía, entre otros, al arquitecto Grandjean de Montigny, creador de proyectos de edificación urbana, y los pintores Nicolas-Antoine Taunay y Jean-Baptiste Debret. Éstos dejaron dibujos y acuarelas que retratan los paisajes y costumbres del Río de Janeiro de las primeras décadas del siglo XIX.

Al transferirse a Brasil, la Corona no dejó de ser portuguesa ni de favorecer los intereses portugueses en Brasil. Uno de los principales focos de descontento eran las fuerzas militares. Don Juan mandó llamar tropas de Portugal para guarnecer las principales ciudades y organizó el Ejército reservando los mejores cargos para la nobleza lusa. El peso de los impuestos aumentó, pues la colonia tenía que cargar sola con los gastos de la corte más los de las campañas militares que el rey promovió en el Río de la Plata.

A ello se sumaba el problema de la desigualdad regional. El sentimiento imperante en el nordeste era que, con la llegada de la familia real a Brasil, el dominio político de la colonia había pasado de una ciudad extraña a otra, o sea, de Lisboa a Río de Janeiro. La revolución que estalló en Pernambuco en marzo de 1817 añadió a este sentimiento varios descontentos resultantes de las condiciones económicas y de los privilegios concedidos a los portugueses. Participaron en ese movimiento amplias capas de la población: militares, propietarios rurales, jueces, artesanos, comerciantes y gran número de religiosos, tantos que se le conoce también como la Revolución de los Padres. Llama la atención la presencia de grandes comerciantes brasileños vinculados con el comercio exterior, que empezaban a competir con los portugueses en un terreno hasta entonces controlado en gran medida por estos últimos.

Otro rasgo importante de la Revolución de 1817 es que pasó de Recife al sertón, extendiéndose a Alagoas, Paraíba y Rio Grande do Norte. La desigualdad regional, acompañada de un fuerte antilusitanismo, fue el denominador común de esta especie de rebelión general de todo el nordeste. Pero los distintos grupos sociales tenían distintos objetivos. Para los sectores pobres de la ciudad, la independencia estaba asociada con la idea de igualdad. Por su parte, el principal cometido de

los grandes propietarios rurales era acabar con la centralización impuesta por la Corona y hacerse de las riendas, si no de la colonia, al menos del nordeste de Brasil.

Los revolucionarios tomaron Recife e implantaron un Gobierno provisional basado en una "ley orgánica" que proclamaba la república, establecía la igualdad de derechos y la tolerancia religiosa, aunque no tocaba el problema de la esclavitud. Se enviaron emisarios a las otras capitanías y a Estados Unidos, Inglaterra y Argentina, en busca de apoyo y reconocimiento. La revuelta avanzó por el sertón, pero pronto las fuerzas portuguesas respondieron bloqueando Recife y desembarcando en Alagoas. Las luchas tuvieron lugar en el interior y revelaron la falta de preparación y las desavenencias de los revolucionarios. Al final, en mayo de 1817, las tropas portuguesas ocuparon Recife. Se sucedió la prisión y ejecución de los líderes de la revolución. El movimiento duró más de dos meses y dejó una profunda marca en el nordeste brasileño.

Quien, hacia 1817, dijera que dentro de cinco años Brasil sería independiente, estaría haciendo una previsión dudosa. La revolución pernambucana, limitada al nordeste, fue derrotada. La Corona tomaba medidas para integrar Portugal y Brasil como partes de un mismo reino, teniendo en cuenta que la guerra había terminado en Europa, en 1814, con la derrota de Napoleón. Aparentemente, ya no había razones para que la corte permaneciera en Brasil. Sin embargo, don Juan decidió continuar en la colonia americana y, en diciembre de 1815, elevó a Brasil a la condición de Reino Unido a Portugal y Algarves. Meses después, tras la muerte de la reina, fue nombrado rey de Portugal, de Brasil y Algarves, con el nombre de don Juan VI.

La independencia se explica por un conjunto de factores, tanto internos como externos. Pero fueron vientos llegados de

fuera los que imprimieron a los acontecimientos un rumbo que la mayoría de los actores involucrados no había previsto, en una escalada que pasó de la defensa de la autonomía brasileña a la alternativa de la independencia.

En agosto de 1820 estalló en Portugal una revolución liberal inspirada en las ideas ilustradas. Los revolucionarios trataban de encontrar salidas para una coyuntura de profunda crisis en la vida portuguesa. Era una crisis política, causada por la ausencia del rey y de los órganos de Gobierno; una crisis económica, resultante en parte de la libertad de comercio que beneficiaba a Brasil; una crisis militar, debida a la presencia de oficiales ingleses en los altos cargos del Ejército y a retardos en el ascenso de oficiales portugueses. Baste recordar que, en ausencia de don Juan, Portugal fue gobernado por un consejo de regencia presidido por el mariscal inglés Beresford. Después de la guerra, Beresford se convirtió en el comandante del Ejército portugués.

La revolución portuguesa de 1820 tenía aspectos contradictorios. Podría definirse como liberal porque consideraba a la monarquía absoluta un régimen superado y opresivo y porque trataba de dar vida a órganos de representación de la sociedad, como las Cortes. Al mismo tiempo, al promover los intereses de la burguesía lusa y tratar de limitar la influencia inglesa, pretendía que Brasil volviera a subordinarse por completo a Portugal.

A fines de 1820 los revolucionarios establecieron en Portugal una junta provisional para gobernar en nombre del rey y exigieron que éste volviera a la metrópoli. Decidieron convocar a las Cortes, que serían elegidas en todo el mundo portugués, con el propósito de redactar y aprobar una constitución. Se preveía que se crearan en Brasil juntas de gobierno leales a la revolución en las diversas capitanías, que pasaron a llamarse provincias.

Los militares descontentos iniciaron el movimiento de 1820 en Portugal. Fue también entre los militares, incluso portugueses, donde se dieron las primeras repercusiones del movimiento en Brasil. En Belém y en Salvador las tropas se rebelaron e instituyeron juntas de gobierno. En Río de Janeiro, manifestaciones populares y de la tropa portuguesa forzaron al rey a reconfigurar el gabinete, a crear juntas donde no las había y a preparar las elecciones indirectas para las Cortes.

A esas alturas, las tendencias se dividían entre el retorno o no de don Juan VI a Portugal. En Río de Janeiro defendía el retorno la "facción portuguesa", conformada por altos mandos militares, burócratas y comerciantes interesados en subordinar Brasil a la metrópoli, de ser posible de acuerdo con las líneas del sistema colonial. Se oponía al retorno, por razones contrarias a éstas, el "partido brasileño", integrado por grandes propietarios rurales de las capitanías cercanas a la capital, burócratas y miembros del Poder Judicial nacidos en Brasil. A ellos se sumaban portugueses cuyos intereses se habían vinculado con los de la colonia, comerciantes adaptados a las nuevas circunstancias del libre comercio, inversionistas en tierras y propiedades urbanas, muchas veces ligados por lazos matrimoniales con personas de la colonia. Hablamos de un "partido brasileño" entre comillas porque con esta expresión no se designa propiamente a un partido, sino a una corriente de opinión. Las articulaciones políticas en este periodo se dieron sobre todo a través de las logias masónicas, cuyos miembros más radicales defendían la independencia.

La cuestión del retorno de don Juan VI se agotó pronto. Temiendo perder el trono si no volvía a Portugal, el rey finalmente decidió regresar. Se embarcó en abril de 1821 acompañado de 4 000 portugueses. En su lugar dejaba, como príncipe regente, a su hijo Pedro, futuro don Pedro I. Durante los

meses siguientes tuvieron lugar en Brasil las elecciones para designar la representación brasileña en las Cortes. Casi todos los elegidos habían nacido en Brasil. Entre ellos se contaban algunos defensores radicales o exradicales de la independencia, como Cipriano Barata (de Bahía), Muniz Tavares (de Pernambuco) y Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (de São Paulo), que habían formado parte de la Revolución de 1817.

Las Cortes empezaron a reunirse en enero de 1821, meses antes de que llegaran los diputados electos en Brasil. Se tomó una serie de medidas que produjeron un profundo descontento en la colonia. Los Gobiernos provinciales ya no dependerían de Río de Janeiro, sino que se subordinarían directamente a Lisboa. Hubo un intento de revocar los acuerdos comerciales con Inglaterra, que eran del interés tanto de los ingleses como de los grandes propietarios rurales brasileños y los consumidores urbanos. A esto hay que añadir que los líderes de la revolución liberal atizaban la hoguera al referirse con desdén a la colonia. Para muchos de ellos Brasil era "una tierra de monos, de bananas, de negritos cazados en la costa de África" que necesitaba un perro guardián para ponerse en orden.

Entre fines de septiembre y octubre de 1821, nuevas medidas tomadas por las Cortes fortalecieron en Brasil las tendencias independentistas, hasta entonces apenas esbozadas. Se decidió transferir a Lisboa las principales dependencias instaladas en Brasil por don Juan VI, se enviaron nuevos destacamentos de tropas a Río de Janeiro y Pernambuco, y —punto decisivo— se determinó que el príncipe regente volviera a Portugal.

El "partido brasileño" centró sus esfuerzos en lograr que don Pedro permaneciera en Brasil. La decisión del príncipe de quedarse en el país, solemnemente anunciada el 9 de enero de 1922, que se conoce como *Dia do Fico* (o día del "me quedo"), representó la elección de un camino sin retorno. Tras el *Dia do*

Fico los actos del príncipe regente fueron actos de ruptura. Las tropas portuguesas que se negaron a jurar lealtad a don Pedro se vieron obligadas a marcharse de Río de Janeiro. Se esbozó a partir de entonces la creación de un Ejército brasileño. Don Pedro fundó un nuevo gabinete conformado por portugueses, pero dirigido por un brasileño: José Bonifácio de Andrada e Silva.

Los hermanos Andrada, Antônio Carlos, Martim Francisco y José Bonifácio, y especialmente este último, fueron figuras centrales en la política brasileña de aquellos años. José Bonifácio provenía de una de las familias más ricas de Santos, donde su padre se había dedicado a la exportación de azúcar. Estudió en Coímbra y permaneció en Europa de 1783 a 1819. Ocupó cargos administrativos importantes en Portugal y fue profesor universitario en Coímbra. Cuando volvió a Brasil, lo invitaron a presidir, en marzo de 1821, la junta provisional de São Paulo. No es fácil rotular el pensamiento de José Bonifácio. Sostenía ideas progresistas en el terreno social, como la extinción gradual del tráfico de esclavos y de la esclavitud, así como una reforma agraria y la libre entrada de inmigrantes al país. Políticamente era un liberal conservador, adversario de las "harapientas banderas de la sucia y caótica democracia", como dijo en cierta ocasión. Consideraba que a Brasil le convenía una forma monárquica de gobierno que tuviera como base una representación ciudadana limitada a los sectores dominantes e ilustrados.

En el curso de los acontecimientos que resultaron en la Independencia, se definieron con cierta claridad las corrientes conservadoras y radicales del "partido brasileño". En el marco de los años inmediatamente previos a la Independencia, la corriente conservadora defendía una mayor autonomía de Brasil respecto a Portugal, y sólo en un segundo momento asumió la

idea de la emancipación. La forma de gobierno deseable, para los conservadores, era la monarquía constitucional, con representación limitada, como garantía de orden y estabilidad social. Más difícil es definir la corriente radical, pues incluía desde monárquicos a los que les preocupaba asegurar las libertades —sobre todo la de prensa— y una mayor representación popular, hasta los llamados "extremos", para los que la independencia se asociaba con la idea de república, voto popular y, en algunos casos, reforma social.

Tras la decisión de convocar a una Constituyente, se aceleraron las medidas de ruptura, aunque todavía se invocaba el propósito de la "unión con Portugal". Empezó a exigirse como requisito para ejercer cargos en el servicio público la adhesión a la causa de la unión e independencia de Brasil, y se recomendó a los Gobiernos provinciales que no aceptaran empleados provenientes de Portugal. En agosto de 1822 el príncipe regente decretó que se consideraría como enemigas a las tropas oriundas de la metrópoli; Gonçalves Ledo y poco después José Bonifácio dirigieron manifiestos a las naciones amigas.

La llegada desde Lisboa de despachos que revocaban los decretos del príncipe regente y determinaban, una vez más, que éste debía volver a la capital lusa, además de acusar a los ministros de traición, alentó la idea de ruptura definitiva. La princesa doña Leopoldina y José Bonifácio se apresuraron a enviar la noticia al príncipe, que estaba viajando hacia São Paulo. Cuando ésta lo alcanzó, el 7 de septiembre de 1822, a orillas del riachuelo Ipiranga, don Pedro profirió el llamado grito de Ipiranga y formalizó así la independencia de Brasil. El 1º de diciembre, con sólo 24 años de edad, el príncipe regente fue coronado emperador y recibió el título de don Pedro I. Brasil se volvía independiente preservando una forma monárquica de

gobierno. Lo que es más: el trono del nuevo país estaría ocupado por un rey portugués.

Brasil a fines del periodo colonial

Desde el punto de vista territorial y poblacional, ¿cómo era el Brasil que se había independizado?

Desde principios del siglo XVIII, la extensión geográfica de la colonia ya no tenía nada que ver con la dudosa línea de Tordesillas. La expansión de las *bandeiras* de São Paulo hacia el oeste y de los ganaderos y las fuerzas militares hacia el sudoeste amplió en los hechos las fronteras del país. A partir del siglo XVIII, los avances en las minas significaron un nuevo impulso, de modo que la fisonomía territorial de Brasil ya se acercaba bastante a la actual.

Faltaba que las nuevas fronteras quedaran legalmente reconocidas, cuestión que debía definirse principalmente con España. Esto ocurrió a través del Tratado de Madrid, firmado entre las Coronas portuguesa y española, en que se reconoció el principio de *uti posidetis* en beneficio de los portugueses. En las fronteras del sur hubo una excepción. Portugal renunció a Colonia del Sacramento, en la orilla izquierda del río Uruguay: el llamado Territorio de las Siete Misiones ocupado por indígenas y jesuitas.

Pese a la unión de voluntades, las controversias sobre las fronteras del sur no cesaron. Un acuerdo datado en 1761 anuló el Tratado de Madrid. Luego, el Tratado de San Ildefonso (1777) restituyó a los españoles las Siete Misiones. Los portugueses no dejaron de pretender la anexión de Colonia del Sacramento, base estratégica para el contrabando de la plata transportada desde Bolivia y Perú por el río Paraná.

Aun con las fronteras definidas, amplias extensiones del país seguían prácticamente sin explorar u ocupadas por indígenas que no tenían contacto con los colonizadores. No hay números confiables sobre la población de Brasil a fines del periodo colonial. Los conteos realizados a solicitud de la Corona solían excluir a los menores de siete años, a los indígenas y algunas veces incluso a los esclavos. Se calcula que en 1819 Brasil tenía alrededor de 3.6 millones de habitantes, concentrados en las provincias de Minas Gerais, Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco, en ese orden. El sur del país seguía siendo una zona periférica.

Desde el punto de vista racial, los datos existentes sobre las principales provincias sugieren que los blancos representaban menos de 30% de la población total.

Ésta era, en términos muy generales, la fisonomía de Brasil en lo que respecta al territorio y la población a fines del periodo colonial. Sus habitantes ya no se arrastraban como cangrejos por la costa, pero aún se concentraban —aproximadamente en un 74%— en torno a los principales puertos de exportación y al interior de las capitanías costeras de Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco y Paraíba.

---

[1] Etnia fon (Benín) (N. de la T.).

[2] Con este nombre se refieren los yoruba a sus vecinos nupe, de Nigeria (N. de la T.).

[3] En Brasil se denominaba así a las personas originarias del reino Anziku, que se extendía por lo que hoy son la República del Congo, la República Democrática del Congo y Gabón (N. de la T.).

[4] La palabra *mascate* se refiere en portugués a los vendedores ambulantes. Aplicado a los grandes comerciantes de Recife por sus enemigos de Olinda, el término era despectivo (N. de la T.).

[5] *Bandeirantes* eran los hombres que, organizados en grupos denominados *bandeiras*, partían de São Paulo a explorar el sertón. El tema se

retoma más adelante (N. de la T.).

[6] La "guerra volante" se caracterizaba por ataques veloces y sorpresivos (N. de la T.).

[7] El término *bandeira* designa tanto a la expedición como al grupo de expedicionarios que la conforman, llamados *bandeirantes* porque portaban banderas distintivas de la incursión (N. de la T.).

[8] Aunque se optó por preservar el gentilicio *mineiro*, para distinguirlo de la voz "minero", que puede dar lugar a confusiones en español, en este caso, por tratarse del nombre con que se conoce el episodio histórico en nuestra lengua, se traduce por Conjuración Minera el movimiento que en Brasil se llama *Inconfidência Mineira*. La Conjura Bahiana, a su vez, se denomina en portugués *Conjuração dos Alfaiates* (N. de la T.).

2. EL BRASIL MONÁRQUICO (1822-1889)

La consolidación de la independencia y la construcción del Estado

La independencia se consolidó en pocos años. Las tropas portuguesas resistieron en la Provincia Cisplatina, y al fin se retiraron de allí en noviembre de 1823. Comenzaría entonces una larga guerra por la independencia uruguaya, pero ya contra los brasileños y no contra los portugueses. Otro núcleo de conflictos se ubicó en Bahía, donde los brasileños terminaron derrotando a los lusitanos.

A nivel internacional, Estados Unidos reconoció la independencia en mayo de 1824. Informalmente, también la reconocía Inglaterra, interesada en asegurar el orden en la antigua colonia portuguesa. De este modo, Inglaterra conservaba la ventaja comercial en un país que para entonces ya era su tercer mercado internacional. El reconocimiento sólo se retrasó porque los ingleses trataron de que Brasil extinguiera de inmediato el tráfico de esclavos. Pero, directa o indirectamente, los ingleses estuvieron presentes en la consolidación de la independencia y sirvieron también como mediadores en el reconocimiento de la nueva nación por parte de Portugal.

Esto ocurrió en agosto de 1825, mediante un tratado en el que Brasil accedió a compensar a la metrópoli con dos millones de libras por la pérdida de su antigua colonia, y a no permitir que ninguna otra colonia se le sumara. La necesidad de indemnizar a la Corona portuguesa dio origen al primer préstamo externo, una deuda que Brasil contrajo con Londres. La segunda cláusula aquí mencionada, aparentemente extraña, se

explica porque los intereses brasileños ligados al comercio de esclavos estaban fuertemente arraigados en algunas zonas de la costa africana. Cuando llegaron a Angola las noticias de la separación, circularon panfletos impresos en Brasil que invitaban a Benguela a sumarse a la "causa brasileña". A la precaución de los portugueses no le faltaba, pues, fundamento.

En la historiografía brasileña es tradición comparar la relativa facilidad de la consolidación de la independencia de Brasil con el complicado proceso de emancipación de la América española. Se subraya también que, mientras Brasil se mantuvo unido, la América española se fragmentó en varias naciones. Estas dos observaciones están relacionadas entre sí. Pero aquí vamos a revisarlas por separado, porque la forma en que se mantuvo la unidad territorial resultará más clara después de que analicemos los acontecimientos ocurridos entre 1822 y 1840.

Cabe preguntarse, de entrada, si esta tradición historiográfica aún se sostiene. No le faltan objeciones. Sus críticos subrayan que la independencia, bajo la forma de una unión en torno a Río de Janeiro, derivó de una lucha y no de un consenso general. En esta lucha resultaron derrotados, en las provincias, los movimientos autonomistas y los que apoyaban que se mantuviera la unión con Portugal, como sucedió en Pará.

Estas objeciones tienen el mérito de llamar la atención sobre el hecho de que la independencia de Brasil no fue una transición pacífica. Pero aunque se admita el uso de la fuerza y las muertes que de él resultaron, esto no invalida que la independencia se consolidó en pocos años, sin grandes desgastes. Lo que es más: la emancipación brasileña no causó grandes cambios en el orden social y económico existente ni en la forma de gobierno. Brasil, ejemplo único en la historia de América Latina, siguió siendo una monarquía entre repúblicas.

Una de las principales causas de esta relativa continuidad entre dos épocas fue la llegada de la familia real a Brasil y la forma en que se dio el proceso de independencia. La apertura de los puertos estableció un puente entre la Corona portuguesa y los sectores dominantes de la colonia, especialmente aquellos que se concentraban en Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. Los beneficios a los que dio lugar la presencia del rey en Río de Janeiro fomentaron la expansión económica de esa región, vinculada con los negocios del azúcar, el café y el tráfico de esclavos.

Sin duda persistieron muchos descontentos con la corte, pero ninguno que se acercara a la insatisfacción de algunas regiones del nordeste de Brasil, donde despuntaron ideas de república. A la élite política que había promovido la independencia no le interesaba favorecer rupturas que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la vida de la antigua colonia dentro de los moldes existentes. Es significativo recordar que los esfuerzos por la autonomía que desembocaron en la independencia se concentraron en la figura del rey y luego en la del príncipe regente. En los primeros años después de lograda la independencia, la monarquía se convirtió en un símbolo de autoridad, aun cuando la figura del emperador pudiera objetarse.

La afirmación de que la independencia se dio en poco tiempo y sin grandes sobresaltos no debe llevarnos a dos conclusiones erróneas. Una consistiría en decir que nada cambió, pues Brasil simplemente siguió dependiendo de Inglaterra, sólo que ya sin la intermediación de Portugal. La otra consistiría en suponer la existencia de una élite política homogénea, con una base social bien estructurada, dueña de un proyecto claro para la nueva nación.

Esta primera conclusión sería errónea por varias razones. La nueva relación de dependencia, que se fue consolidando desde 1808 con la apertura de los puertos, representaba más que un simple intercambio de nombres: era un cambio en la forma en que la antigua colonia se insertaba en el sistema económico internacional. Además, la independencia imponía la tarea de construir un Estado nacional para organizar el país y asegurar su unidad.

La segunda conclusión sería igualmente errónea, porque ni siquiera dentro del núcleo promotor de la independencia, con José Bonifácio al frente, había un acuerdo sobre las líneas básicas que debían guiar la organización del Estado. Al contrario: los años que van de 1822 a 1840 estarían marcados por una enorme fluctuación política, por una serie de rebeliones e intentos de organizar el poder que discrepaban entre sí.

Durante los dos primeros años que siguieron a la emancipación del país, el debate político se centró en la aprobación de una Constitución. Las elecciones para una Asamblea Constituyente ya estaban previstas desde meses antes de lograda la independencia. Tuvieron lugar después del 7 de septiembre, y la Constituyente empezó a reunirse en Río de Janeiro en mayo de 1823. No tardaron en surgir desavenencias entre la asamblea y don Pedro, apoyado al principio por su ministro José Bonifácio, en lo que concernía a las atribuciones del Poder Ejecutivo (en este caso, el emperador) y del Poder Legislativo.

Los constituyentes no querían que el emperador tuviera la facultad de disolver cuando lo creyera necesario la futura Cámara de Diputados para obligar a que se celebraran nuevas elecciones. Tampoco querían que tuviera el poder de veto absoluto, es decir, el derecho a negar la validez de cualquier ley aprobada por el Legislativo. Para don Pedro I y los círculos

políticos que lo apoyaban había que crear un Ejecutivo fuerte, capaz de enfrentar las tendencias "democráticas y disgregadoras", y esto justificaba la concentración de mayores atribuciones en manos del emperador. Eran tiempos de incertidumbre política. Menos de un año después de la Independencia, en julio de 1823, se apartó a José Bonifácio del gabinete. Había quedado atrapado entre la crítica de los liberales y las insatisfacciones de los conservadores. Éstos veían con malos ojos la dirección personal del Gobierno por parte del ministro, que les cerraba el acceso directo al trono.

La lucha entre poderes desembocó en la disolución de la Asamblea Constituyente por parte de don Pedro, con apoyo de la tropa. Varios diputados acabaron presos, entre ellos los tres Andradas. Enseguida se emprendió la elaboración de un proyecto de Constitución que resultó en el texto promulgado el 25 de marzo de 1824. Esta Constitución no difería mucho de aquella que habían propuesto los constituyentes antes de la disolución de la asamblea. Pero es necesario subrayar esta diferencia: la primera carta magna brasileña nació de arriba hacia abajo, impuesta por el rey al "pueblo", aunque por "pueblo" debe entenderse la minoría de blancos y mestizos que votaba y participaba de algún modo en la vida política.

Había un considerable contingente de la población excluido de los dispositivos constitucionales: los esclavos. En ellos no se piensa, a no ser de modo indirecto cuando se habla de los libertos. Otro punto que hay que observar tiene que ver con la distancia entre los principios y la práctica. La Constitución representaba un avance, pues organizaba los poderes, definía atribuciones y garantizaba derechos individuales. El problema era que, sobre todo en el campo de los derechos, su aplicación sería muy relativa. A los derechos se sobreponía la realidad de un país en el que incluso la masa de la población libre dependía

de los grandes propietarios rurales, donde sólo un pequeño grupo tenía acceso a la instrucción y donde existía una tradición autoritaria.

La Constitución de 1824 se mantuvo en vigor, con algunas modificaciones, hasta el fin del Imperio. Definió el sistema político como monárquico, hereditario y constitucional. El Imperio tendría una nobleza, pero no una aristocracia. Es decir: el emperador concedería títulos de nobleza, pero éstos no serían hereditarios; de lo contrario se daría lugar a una "aristocracia de sangre". La religión católica romana seguiría siendo la religión oficial y sólo se permitiría el culto privado de otras religiones.

El Poder Legislativo se dividió entre la Cámara y el Senado, y se previeron elecciones para ambos, con ciertas diferencias esenciales. La elección para la Cámara era temporal, mientras que la del Senado era vitalicia. Además, en el caso del Senado las elecciones estaban destinadas a seleccionar una terna por cada provincia; era atribución del emperador escoger uno de los tres nombres elegidos. En la práctica, estas restricciones hicieron del Senado un órgano cuyos miembros fueron designados por el emperador con carácter vitalicio.

El voto era indirecto y censatario. Indirecto, porque los votantes, que equivaldrían hoy a la masa de electores, votaban por un cuerpo electoral en unas elecciones llamadas primarias. El cuerpo electoral elegía a los diputados. Por el principio del voto censatario, votaban en las elecciones primarias aquellos ciudadanos brasileños que tuvieran un ingreso anual mínimo de 100 000 reales por concepto de bienes raíces, industria, comercio o empleo. Ésos eran los votantes. Ellos elegían al cuerpo electoral, es decir, a los electores, entre personas que, para postularse como candidatos, además de los requisitos mencionados, debían tener un ingreso de 200 000 reales y no ser

libertos. Para ser diputado, el censo ascendía a 400 000 reales e imponía ciertas exigencias, entre ellas la práctica de la religión católica. No se hacía mención explícita de las mujeres, pero las normas sociales las excluían de los derechos políticos. Curiosamente, si se tiene en cuenta el silencio de la Constitución en este sentido, hasta 1882 se aceptó en la práctica el voto de la enorme cantidad de analfabetos.

El país se dividió en provincias cuyo presidente sería nombrado por el emperador. Se garantizaron los derechos individuales, entre ellos la igualdad ante la ley, la libertad religiosa —con las limitantes ya señaladas—, la libertad de pensamiento y de manifestación.

Un importante órgano de la estructura política era el Consejo de Estado, integrado por consejeros vitalicios nombrados por el emperador entre ciudadanos brasileños con una edad mínima de 40 años (una edad avanzada para aquella época), un ingreso no inferior a 800 000 reales y que fueran "personas de saber, capacidad y virtud". El Consejo de Estado debía ser consultado en lo concerniente a "asuntos graves y medidas generales de la pública administración", como declaraciones de guerra, ajustes en los pagos y negociaciones en las que el emperador se propusiera ejercer las atribuciones del Poder Moderador.

La idea de instituir un Poder Moderador provenía del escritor francés Benjamin Constant, cuyos libros eran leídos por don Pedro y por muchos políticos de la época. Benjamin Constant defendía la separación entre el Poder Ejecutivo, cuyas atribuciones correspondían a los ministros del rey, y el poder propiamente imperial, llamado Neutro o Moderador. El rey no intervendría en la política ni en la administración cotidiana, y su papel sería el de moderar las disputas más serias y generales, interpretando "la voluntad y el interés nacional".

En Brasil, el Poder Moderador no estuvo tan claramente separado del Ejecutivo. Esto derivó en la concentración de atribuciones en manos del emperador. De acuerdo con los principios constitucionales del Poder Moderador, la persona del emperador se consideró inviolable, sagrada y libre de toda responsabilidad. Le correspondía, entre otras atribuciones, el nombramiento de los senadores, la facultad de disolver la Cámara y convocar elecciones para sustituirla por otra, así como el derecho a aprobar o vetar las decisiones de la Cámara y del Senado.

Las acciones de don Pedro I al disolver la Constituyente y decretar una Constitución son símbolo del predominio del emperador y de los burócratas y comerciantes, muchos de ellos portugueses, que formaban parte de su círculo íntimo. En Pernambuco, estos actos avivaron una hoguera que, ni en 1817 ni antes, había dejado de arder.

En esa inquieta provincia, la propagación de las ideas republicanas, antiportuguesas y federativas se vio fortalecida. Como figura central de las críticas al Imperio se destacó fray Joaquim do Amor Divino, conocido como *Frei Caneca.* Este apodo remitía a su origen humilde como vendedor de tazones (*canecas*), cuando era niño, en las calles de Recife. Educado en el seminario de Olinda, centro de difusión de las ideas liberales, se convirtió en un intelectual erudito y en un hombre de acción. La contrariedad que causó en la provincia el nombramiento de un gobernador no deseado abrió el camino a la revuelta. Su líder más notorio, Manuel de Carvalho, proclamó la Confederación del Ecuador el 2 de julio de 1824. Carvalho fue un personaje curioso: estaba casado con una estadounidense y era un gran admirador de Estados Unidos. El día en que se aprobó la Constitución de 1824, es decir, antes de la rebelión, remitió un oficio al

secretario de Estado estadounidense solicitándole que enviara una pequeña escuadra al puerto de Recife para hacer contrapeso a las amenazas a la libertad que representaba la presencia de barcos de guerra ingleses y franceses. En el oficio citaba la reciente doctrina que había planteado el presidente James Monroe contra la intervención de las potencias europeas en las Américas.

La Confederación del Ecuador habría de agrupar, bajo una forma federativa y republicana, además de Pernambuco, a las provincias de Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y posiblemente Piauí y Pará. El levantamiento tuvo un carácter acentuadamente urbano y popular, lo que lo distinguió del amplio frente regional, encabezado por propietarios rurales y algunos comerciantes, y que había caracterizado a la revolución de 1817. A la viajera inglesa Maria Graham, que estuvo en Recife tratando de lograr un acuerdo entre las partes, el ambiente del palacio gubernamental ocupado por los rebeldes le pareció semejante, toda proporción guardada, al de la Convención Nacional en la Revolución Francesa. Vio las dependencias palaciegas ocupadas por elementos populares —verdaderos *sans-culottes*— con los ojos muy abiertos y el oído atento ante la sospecha de trampas y traiciones.

La Confederación del Ecuador no tuvo condiciones para arraigarse y resistir militarmente a las tropas del Gobierno y fue derrotada en las varias provincias del nordeste hasta extinguirse por completo en 1824. El castigo a los revolucionarios excedió todas las expectativas. Un tribunal manipulado por el emperador condenó a muerte a Frei Caneca y a otros revolucionarios. Frei Caneca, condenado a la horca, acabó fusilado ante la negativa del verdugo a ahorcarlo.

Las marcas de la Revolución de 1824 no se borrarían fácilmente. De hecho, es posible verla como parte de una serie

de rebeliones y revueltas que tuvieron lugar en Pernambuco entre 1817 y 1848, e hicieron de la provincia un centro irradiador de muchas de las insatisfacciones del nordeste.

El recién creado Imperio brasileño heredó los problemas derivados de la ocupación de la Banda Oriental. En 1825 una rebelión regional proclamó la separación de Brasil y la incorporación del futuro Uruguay a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este hecho precipitó la guerra entre Brasil y Buenos Aires en diciembre de 1825.

La guerra fue un desastre militar para los brasileños, derrotados en Ituzaingó (1827), y una catástrofe financiera para ambas partes. La paz se logró gracias a la mediación de Inglaterra, que tenía interés en restaurar la normalidad de las transacciones comerciales, aniquilada por el conflicto. El tratado de paz que puso fin a la contienda aseguró el nacimiento de Uruguay como país independiente y la libre navegación del Río de la Plata y sus afluentes. Este último punto interesaba a las potencias europeas, especialmente Inglaterra, y también a Brasil. En el caso de éste, razones de naturaleza geopolítica se sumaban a razones económicas, pues la navegación pluvial era la principal vía de acceso a la región de Mato Grosso.

Internamente, la guerra provocó el impopular y temido reclutamiento forzoso de la población. El emperador decidió contratar tropas en el extranjero para completar las filas del Ejército. Las tropas estuvieron conformadas en su mayoría por personas pobres que nada tenían de militares profesionales, reclutadas en Europa con la expectativa de convertirse en pequeños propietarios en Brasil. Como era de esperarse, su aporte para inclinar la guerra a favor del Imperio fue nulo. Por añadidura, algunos cientos de mercenarios alemanes e irlandeses desilusionados se amotinaron en Río de Janeiro en julio de 1828. La situación llegó a ser muy grave y el Gobierno se

vio forzado a recurrir a la humillante protección de barcos ingleses y franceses.

Los gastos militares agravaban los problemas económicos y financieros ya existentes. El volumen físico de algunos productos de exportación, como el café, aumentó considerablemente a lo largo de la década de 1820. Pero los precios del algodón, el cuero, el cacao, el tabaco y el café mismo tendían a caer. Los ingresos del Gobierno central, que dependían en gran medida del impuesto sobre las importaciones, eran insuficientes. En agosto de 1827, Inglaterra impuso un tratado comercial que mantenía un arancel de 15% sobre la importación de sus productos, medida que se extendió después al resto de las naciones.

El Banco de Brasil, creado por don Juan VI en 1808, empezó a verse en dificultades desde 1821, cuando, antes de partir a Portugal, el rey sacó el oro que había depositado allí. Al fin, cerró en 1829. Don Pedro recurrió a la emisión de gran cantidad de monedas de cobre, lo que dio origen a falsificaciones y a un incremento en el costo de la vida, sobre todo en los centros urbanos. Aun no se empleaba el término "inflación", pero se hablaba de algo parecido cuando se aludía a la "hinchazón" del medio circulante.

Incluso el papel moneda emitido por el Banco de Brasil y por el Tesoro era mal recibido fuera de Río de Janeiro. En 1829, el papel moneda circulaba en São Paulo por el 57% de su valor nominal. Por otro lado, la moneda brasileña se devaluó en relación con la libra inglesa a lo largo de la década de 1820. Esto favoreció las exportaciones, pero, al mismo tiempo, encareció la importación de bienes de consumo, tan deseados por las élites y por los nacientes sectores medios urbanos.

El descontento ahondó los conflictos entre brasileños y portugueses. Estos últimos, que controlaban buena parte del

comercio al menudeo, eran un blanco privilegiado para los ataques de los nativistas. La contienda política guardaba relación con la división nacional, pero no se limitaba a ella. En la época de don Pedro, la élite política se escindía entre liberales y absolutistas. Los absolutistas defendían el orden y la propiedad, asegurados por un emperador al que querían ver fuerte y respetado. Temían que la "libertad excesiva" pusiera en riesgo sus privilegios y aceptaban, en nombre del orden, actos imperiales contrarios a la legalidad. Al igual que los absolutistas, los liberales propugnaban el orden y la propiedad, pero sostenían que la libertad constitucional debía ser la forma de garantizarlos y eran partidarios de las "novedades", especialmente de la gran novedad de oponerse al Gobierno y al monarca mismo.

Muchos miembros de la élite brasileña se alinearon con don Pedro porque desconfiaban del liberalismo y porque habían aceptado cargos en la administración y recibido títulos honoríficos que el emperador prodigaba con largueza. Sin embargo, con el paso de los acontecimientos, los brasileños fueron nutriendo cada vez más críticas liberales, mientras los portugueses se apegaban a la figura del emperador. Entre la población urbana y el Ejército, el sentimiento antiluso tuvo un fuerte poder movilizador. Flotaba en el aire la sospecha de que don Pedro trataría de volver a los tiempos del Reino Unido, sobre todo porque, con la muerte de don Juan VI, en 1826, se abría la posibilidad de que, como primogénito, asumiera también el trono portugués.

El Ejército fue alejándose del emperador. Su base se reclutaba entre la población más pobre de los centros urbanos: en su mayoría eran mulatos que sufrían malas condiciones de vida, retrasos en el pago de sueldos y la disciplina que se les imponía.

La cúpula estaba descontenta con las derrotas militares y la presencia de oficiales portugueses en puestos de mando.

Desde mediados de 1830, los hechos se precipitaron. La caída de Carlos X en Francia y el inicio de la Monarquía de Julio, que se tenía por liberal, repercutieron en Brasil, donde fueron objeto de discusiones incluso en el Consejo de Estado. En marzo de 1831, la temperatura política subió en Río de Janeiro. El emperador regresaba de un viaje a Minas Gerais, donde había sido recibido con la mayor frialdad. Los portugueses decidieron realizar unos festejos promovidos por la sociedad secreta Columna del Trono para demostrarle su apoyo. Los brasileños reaccionaron y se originaron así los primeros tumultos, que duraron cinco días. Enseguida hubo intentos de formar un nuevo gabinete y organizar renovadas protestas. Los más prestigiados comandantes militares brasileños, como los hermanos Lima e Silva, uno de ellos padre del futuro duque de Caxias, se sumaron a la revuelta. Al final, don Pedro se vio forzado a abdicar a favor de su hijo, don Pedro II, el 7 de abril de 1831.

Brasil se veía entonces ante la perspectiva de ungir a un rey nacido en el país, pero tendría que pasar casi una década para que esto sucediera. El niño Pedro contaba sólo cinco años cuando su padre abdicó la corona y partió a Inglaterra soñando con recuperar el trono portugués, ocupado por su hermano don Miguel.

El periodo posterior a la abdicación de don Pedro I se conoce como Regencia porque figuras políticas gobernaron el país en nombre del emperador, hasta que se anticipó la mayoría de edad de éste, en 1840. En un principio, los regentes fueron tres, pero a partir de 1834 pasó a ser uno solo.

La Regencia fue uno de los periodos más agitados de la historia política de Brasil. En esos años estuvo en juego la unidad

territorial del país, y temas como la centralización o descentralización del poder, el grado de autonomía de las provincias y la organización de las Fuerzas Armadas ocuparon el centro del debate político. Las reformas emprendidas por los regentes también son un buen ejemplo de las dificultades que representaba adoptar una práctica liberal que rehuyera los males del absolutismo. En las condiciones de Brasil, muchas medidas destinadas a dar cierta flexibilidad al sistema político y asegurar las libertades individuales resultaron en violentos choques entre las élites y en el predominio de intereses de grupos locales. No todo se decidió en la época de la Regencia, pues la monarquía centralizada no se consolidó sino hacia 1850, cuando cesaron las últimas rebeliones provinciales.

Un punto importante que hay que subrayar para que se comprendan las dificultades de este periodo es que las élites no habían llegado a un consenso sobre cuál era la organización institucional más conveniente. Tampoco había claridad respecto al papel del Estado como organizador de los intereses dominantes generales, papel que exigía que en ciertas circunstancias se sacrificaran los intereses específicos de determinado sector social.

La tendencia política que resultó vencedora tras el 7 de abril fue la de los liberales moderados que se organizaron, siguiendo la tradición masónica, en la Sociedad Defensora de la Libertad e Independencia Nacional. Entre ellos había una alta proporción de políticos de Minas Gerais, São Paulo y Río de Janeiro. También había una presencia significativa de religiosos, y algunos hombres graduados en Coímbra. Muchos eran propietarios de tierras y de esclavos. Destacaron entre ellos los nombres de Bernardo Pereira de Vasconcelos, magistrado *mineiro* educado en Coímbra; el padre Diogo Feijó, nacido en São Paulo y futuro regente, y Evaristo da Veiga, responsable por la edición en Río

de Janeiro de la *Aurora Fluminense*, el periódico liberal más importante de aquel tiempo.

En la oposición estaban, por un lado, los exaltados y, por el otro, los absolutistas. Los primeros defendían la federación, las libertades individuales y, en algunos casos, la república. Los segundos, llamados *caramurus*,[1] muchos de ellos portugueses con cargos en la burocracia, en el Ejército y en las altas esferas del comercio, luchaban por la vuelta de don Pedro I al trono. Sus sueños de restauración no duraron mucho, pues don Pedro I murió en Portugal en 1834.

Las reformas del periodo de la Regencia trataron de suprimir o disminuir las atribuciones de órganos de la monarquía y de crear una nueva forma de organización militar, reduciendo el papel del Ejército.

En 1832 entró en vigor el Código del Proceso Penal, que estableció normas para la aplicación del Código Penal de 1830. El Código del Proceso Penal dio mayores poderes a los jueces de paz, que ya desde el reinado de don Pedro I se elegían en las localidades pero que, a partir de entonces, podrían, por ejemplo, arrestar y juzgar a personas acusadas de cometer pequeñas infracciones. Al mismo tiempo, siguiendo los modelos estadounidense e inglés, el código estableció la institución del jurado para juzgar la mayoría de los delitos, y del *habeas corpus*, que podría concederse a personas presas ilegalmente o cuya libertad se viera amenazada.

Una ley de agosto de 1834, llamada "acto adicional" porque introdujo adiciones y cambios en la Constitución de 1824, determinó que el Poder Moderador no podía ejercerse durante la Regencia. Suprimió también el Consejo de Estado. Los presidentes de provincia siguieron nombrándose desde el Gobierno central, pero se crearon asambleas provinciales con

mayores poderes en sustitución de los antiguos consejos generales.

Además, se legisló sobre el reparto de ingresos entre el Gobierno central, las provincias y los municipios. Se atribuyó a las asambleas provinciales el poder de establecer los gastos municipales y provinciales y de asignar los impuestos necesarios para atender esos gastos, siempre y cuando no perjudicaran los ingresos que el Gobierno central debía recaudar. Esta fórmula vaga de reparto de impuestos permitió a las provincias obtener recursos propios a costa del debilitamiento del Gobierno central. Una de las atribuciones más importantes que se concedieron a las asambleas provinciales fue la de nombrar y destituir a los funcionarios públicos. De ese modo, se ponía en manos de los políticos regionales un arma significativa, tanto para obtener votos a cambio de favores como para perseguir enemigos.

Cuando comenzó el periodo de la Regencia, el Ejército era una institución mal organizada, a la que el Gobierno veía con mucha suspicacia. Aun después de la abdicación de don Pedro, el número de oficiales portugueses siguió siendo significativo. La mayor preocupación tenía que ver, sin embargo, con la base del Ejército, conformada por gente mal pagada, insatisfecha y propensa a aliarse con el pueblo en las revueltas urbanas.

Mediante una ley de agosto de 1831 se creó la Guardia Nacional en sustitución de las antiguas milicias. Era una copia de una ley francesa promulgada ese mismo año. La idea consistía en organizar un cuerpo armado de ciudadanos confiables, capaz de reducir, por un lado, los excesos del Gobierno centralizado y, por el otro, las amenazas de las “clases peligrosas”. En la práctica, la nueva institución se encargó de mantener el orden en aquellos municipios en los que se formaba. Se le llamó en casos especiales a enfrentar rebeliones fuera de sus municipios y a proteger las fronteras del país bajo el mando del Ejército.

Conformaban forzosamente la Guardia Nacional, por regla general, todos aquellos ciudadanos que tuvieran derecho a voto en las elecciones primarias, de entre 21 y 60 años. El alistamiento forzoso en la Guardia Nacional mermó los cuadros castrenses, pues quien pertenecía a la guardia se libraba del reclutamiento para servir en el Ejército. Hasta 1850, los oficiales de menor rango de la Guardia Nacional fueron elegidos por los integrantes de la corporación en elecciones presididas por el juez de paz. Luego, la realidad nacional y la necesidad de establecer una jerarquía se impusieron sobre el principio electivo. Las elecciones fueron volviéndose letra muerta y desaparecieron aun antes de que la ley cambiara.

Las revueltas del periodo de la Regencia no siguen un mismo modelo. Tenían que ver con las dificultades de la vida cotidiana y la incertidumbre de la organización política, pero cada una de ellas resultó de una realidad específica, provincial o local. Muchas rebeliones, sobre todo hasta mediados de la década de 1830, se dieron en las capitales más importantes y tuvieron a la tropa y al pueblo como protagonistas. En Río de Janeiro hubo cinco levantamientos entre 1831 y 1832. En 1832, la situación se agravó tanto que se consultó al Consejo de Estado sobre las medidas que habría que tomar para salvar al emperador niño en caso de que la anarquía se adueñara de la ciudad y las provincias del norte se separaran de las del sur.

En contraste con estas revueltas, estalló en Pernambuco la Guerra de los Cabanos, que tuvo lugar entre 1832 y 1835. Se trató de un movimiento esencialmente rural, que también se distinguió de las insurrecciones pernambucanas previas por su contenido. Los *cabanos* reunían a pequeños propietarios, trabajadores del campo, indígenas, esclavos e, inicialmente, algunos señores de ingenio. En ciertos aspectos constituyen un

anticipo de lo que habría de ser la revuelta de Canudos en el sertón, a principios de la República. Lucharon por la religión y por el retorno del emperador contra aquellos a los que ellos llamaban "carbonarios jacobinos", en referencia crítica a los revolucionarios franceses y a las sociedades secretas liberales europeas del siglo XIX.

Así fue como los sectores pobres de la población rural protestaron contra unos cambios que no entendían, distantes de su mundo. Una vez planteados los objetivos explícitos de la revuelta, los *cabanos* contaron con el apoyo inusitado de comerciantes portugueses de Recife y políticos restauracionistas en la capital del Imperio.

Tras una guerra de guerrillas, los rebeldes fueron al fin derrotados, irónicamente, por Manuel de Carvalho Pais de Andrade, la misma persona que en 1824 había proclamado la Confederación del Ecuador y que entonces era presidente de la provincia.

Luego del acto adicional, tuvieron lugar la Cabanagem, en Pará (1835-1840), que no debe confundirse con la Guerra de los Cabanos en Pernambuco; la Sabinada, en Bahía (1837-1838); la Balaiada, en Maranhão (1838-1840), y la Guerra de los Farrapos, en Rio Grande do Sul (1836-1845).

Si se tiene en cuenta que muchas de las viejas quejas de las provincias iban dirigidas contra la centralización monárquica, puede resultar extraño que surgieran tantas revueltas en este periodo. A fin de cuentas, la Regencia trataba de dar cierta autonomía a las asambleas provinciales y de organizar la distribución de ingresos entre el Gobierno central y las provincias. Sucede, sin embargo, que al actuar en este sentido los regentes acabaron fomentando disputas entre las élites regionales por el control de aquellas provincias cuya importancia crecía. Además, el Gobierno había perdido el aura

de legitimidad que bien que mal tuvo mientras hubo un emperador en el trono. El nombramiento erróneo de algunos presidentes de provincia hizo el resto.

La Cabanagem estalló en Pará, región cuyos vínculos con Río de Janeiro eran endebles. Allí la estructura social no tenía la misma estabilidad que en otras provincias, ni había una clase de propietarios rurales bien establecida. Era un mundo de indígenas, mestizos, trabajadores esclavizados o dependientes, con una minoría blanca conformada por comerciantes portugueses y unos cuantos ingleses y franceses. Esta minoría se concentraba en Belém, una pequeña ciudad de 12 000 habitantes, punto de salida de la modesta producción de tabaco, cacao, caucho y arroz.

Una pugna entre grupos de la élite local sobre el nombramiento del presidente de la provincia abrió el camino a la rebelión popular. Se proclamó la independencia de Pará. Una tropa cuya base estaba compuesta por negros, mestizos e indígenas atacó Belém y tomó la ciudad luego de varios días de duras luchas. A partir de ese punto, la revuelta se extendió al interior de la provincia. En la contienda destacó, al mando de los rebeldes, Eduardo Angelim, un cearense de tan sólo 21 años que había migrado a Pará luego de que una gran sequía aquejó su provincia en 1827. Angelim trató de organizar un gobierno y nombró como su secretario a un sacerdote: una de las pocas personas capaces de escribir con fluidez.

Los *cabanos* no llegaron a proponer una organización alternativa en Pará y se centraron en el ataque a los extranjeros y masones, así como en la defensa de la religión católica, de los brasileños, de don Pedro II y de la libertad. Aunque entre ellos había muchos cautivos, no se abolió la esclavitud. Angelim llegó incluso a reprimir una insurrección de esclavos.

La rebelión fue derrotada por las tropas legalistas luego de que se bloqueó la entrada del río Amazonas y tras una serie de largos y crueles enfrentamientos. Belém acabó prácticamente destruida, y su economía, devastada. Se calcula que murieron 30 000 personas entre rebeldes y legalistas, es decir, alrededor de 20% de la población estimada de la provincia.

La Sabinada debe su nombre al de su líder principal: Sabino Barroso, periodista y profesor de la Escuela de Medicina. Desde la Independencia, Bahía venía siendo escenario de varias revoluciones urbanas, entre ellas revueltas de esclavos o que contaron con su participación. La Sabinada agrupó en torno a ideas federalistas y republicanas a una base amplia de apoyo que incluía a personas de clase media y comerciantes de Salvador.

El movimiento buscó un compromiso en lo relativo a los esclavos, a quienes dividió entre nacionales y extranjeros. Serían liberados los cautivos criollos que hubieran tomado las armas por la revolución; los demás seguirían en la esclavitud. Los *sabinos* no lograron penetrar en el Recôncavo Bahiano, donde los señores de ingenio apoyaron al Gobierno. Tras sitiar Salvador por tierra y por mar y luego de una lucha cuerpo a cuerpo que resultó en aproximadamente 1 800 muertos, las fuerzas gubernamentales recuperaron la ciudad.

La Balaiada marañense comenzó con una serie de pugnas entre grupos de la élite local. Las rivalidades desembocaron en una revuelta popular. Ésta se concentró en el sur de Maranhão, cerca de la frontera con Piauí, una zona de pequeños productores de algodón y ganaderos. Encabezaron el movimiento Raimundo Gomes, personaje involucrado en la política local, y Francisco dos Anjos Ferreira, de cuyo oficio —hacer y vender canastas (*balaios*)— derivó el nombre de la revuelta. Ferreira se sumó a la rebelión para vengar el honor de una hija suya, violada por un capitán de la policía. Paralelamente, surgió un

líder negro conocido como Cosme —sin apellido, al menos en los relatos históricos— al frente de 3 000 esclavos cimarrones.

Los *balaios* llegaron a ocupar Caxias, la segunda ciudad de la provincia. En sus escasas proclamas escritas constan vítores a la religión católica, a la Constitución, a don Pedro II y a la "santa causa de la libertad". No se mencionan temas de naturaleza social o económica, pero es difícil imaginar que Cosme y sus hombres no estuvieran luchando por su causa personal de libertad, fuera o no santa.

Las diversas tendencias existentes entre los *balaios* resultaron en desavenencias. Por otro lado, la acción de las tropas del Gobierno central fue rápida y eficaz. Los rebeldes fueron derrotados a mediados de 1840. Enseguida se concedió una amnistía a cambio de la reesclavización de los negros rebeldes. Cosme fue ahorcado en 1842. Al mando de las tropas imperiales figuró un oficial cuya presencia habría de ser una constante en las batallas y enfrentamientos políticos del Segundo Reinado: Luís Alves de Lima e Silva, que en esa ocasión recibió el título de barón de Caxias.

En 1835, a miles de kilómetros del norte y del nordeste estalló, en Rio Grande do Sul, la Guerra de los Farrapos o Farroupilhas. *Farrapos* y *farroupilhas* son expresiones equivalentes que se refieren a los andrajosos, a la gente que viste harapos. Los *farrapos gaúchos* recibieron de sus adversarios este apodo despectivo. Pero lo cierto es que, aunque la tropa vistiera harapos, no podría decirse lo mismo de sus dirigentes, que representaban a la élite de los estancieros, los ganaderos de la provincia.

Rio Grande do Sul era un caso especial entre las regiones brasileñas desde tiempos de la Colonia. Por su posición geográfica, formación económica y relaciones sociales, los *gaúchos* tenían muchos vínculos con el mundo del Río de la Plata, en

especial con Uruguay. Los jefes de grupos militarizados de la frontera —los caudillos—, que eran también ganaderos, tenían amplias relaciones en aquel país. Poseían allí tierras y se unían en matrimonio con muchas familias de la élite.

Por otro lado, desde el punto de vista del destino de sus productos, la economía riograndense se vinculaba tradicionalmente con el mercado interno. Era un centro de cría de mulas que tuvo un papel importante en cuanto al transporte de mercancías a lo largo del centro-sur del país antes de que se construyeran los ferrocarriles. Durante el periodo del renacimiento agrícola de las últimas décadas del siglo XVIII, colonos oriundos de las Azores cultivaron trigo que se consumía sobre todo en Brasil. Cuando el país se independizó, la fase de expansión del trigo ya había cesado debido a las plagas y la competencia estadounidense.

La cría de ganado se generalizó, así como la transformación de la carne de res en charque (carne seca). Éste era un producto vital destinado al consumo de la población pobre y de los esclavos del sur y del centro-sur. Ganaderos y charqueadores conformaban dos grupos aparte. Los primeros se habían asentado en la zona de la Campanha, situada en la frontera con Uruguay. Los segundos tenían sus industrias instaladas en la costa, en la zona de las lagunas, donde se concentraban ciudades como Rio Grande y Pelotas. Tanto ganaderos como charqueadores utilizaban mano de obra esclava y trabajadores que dependían de ellos.

Los reclamos de Rio Grande do Sul contra el Gobierno central eran antiguos. Los *gaúchos* consideraban que, pese a los aportes que hacía su provincia a la economía brasileña, se les explotaba mediante un sistema de pesados impuestos. Las reivindicaciones de autonomía e incluso de separación eran antiguas y muchas veces incluían a conservadores y liberales.

La regencia y el acto adicional no mitigaron estos reclamos. Las provincias que no podían costear todos sus gastos recibían recursos del Gobierno central, provenientes en parte de otras provincias. Esto sucedía desde antes del acto adicional, y siguió sucediendo después de él. Frecuentemente, Rio Grande do Sul mandaba fondos para cubrir los gastos de Santa Catarina y otras regiones.

Pero la revuelta no unió a todos los sectores de la población *gaúcha*. Organizado por estancieros de la frontera y algunas figuras de la clase media de las ciudades, el movimiento tuvo sobre todo el apoyo de esos grupos. Los charqueadores, que dependían de Río de Janeiro —el principal centro consumidor de charque y cuero en Brasil—, se mantuvieron del lado del Gobierno central.

Además de los reclamos generales ya mencionados, los estancieros tenían motivos específicos de descontento. Querían acabar con el gravamen impuesto al ganado en la frontera con Uruguay, o reducirlo, instaurando la libre circulación de los rebaños que poseían en ambos países. Asimismo, como ya estaban organizados militarmente gracias a sus pequeños ejércitos particulares, de los que eran líderes indiscutibles, les parecía peligrosa la creación de una Guardia Nacional con cargos electivos de oficiales.

Los *farrapos* contaron con el apoyo de algunos oficiales del Ejército que habían llegado hacía poco a Rio Grande do Sul. Entre sus filas destacó también al menos una veintena de revolucionarios italianos refugiados en Brasil, el más célebre de los cuales era Giuseppe Garibaldi. La figura más importante del movimiento fue Bento Gonçalves, hijo de un rico estanciero, con amplia experiencia militar en las guerras de la región. Gonçalves organizó logias masónicas en la frontera y aprovechó el servicio

postal de los masones como alternativa para su correspondencia secreta.

La lucha fue larga y estuvo basada en la acción de la caballería. Garibaldi y Davi Canabarro llevaron la guerra al norte de la provincia y asumieron durante algún tiempo el control de Santa Catarina. En 1838, en la ciudad de Piratiní, dentro de la zona *gaúcha* dominada por los rebeldes, se proclamó la República de Piratiní, cuya presidencia estuvo a cargo de Bento Gonçalves.

La posición del Gobierno central fue una sucesión de combates y concesiones a los rebeldes. Los líderes de los *farrapos* eran gente de élite, y la región en la que luchaban tenía gran importancia estratégica para el Imperio. A principios de 1840, por ejemplo, el Gobierno cedió ante una de las principales exigencias económicas de los *farrapos* y decretó una tasa de importación de 25% sobre la carne salada proveniente del Río de la Plata, que competía con la carne nacional.

Un paso crucial para poner fin al conflicto fue el nombramiento de Caxias como presidente y comandante de armas de la provincia en 1842. Caxias combinó hábilmente una política de ataque militar con medidas de apaciguamiento. Al fin, en 1845, tras pactar por separado con varios jefes rebeldes, Caxias y Canabarro firmaron la paz. No se trató de una rendición incondicional. Se concedió una amnistía general a los rebeldes, los oficiales de los *farrapos* se integraron de acuerdo con sus grados al Ejército brasileño y el Gobierno imperial asumió las deudas de la República de Piratiní.

No es posible afirmar con seguridad que los *farrapos* querían separarse de Brasil y formar un nuevo país junto con Uruguay y las provincias del Río de la Plata. Sin embargo, los rebeldes coincidían en su intención de hacer de Rio Grande do Sul al

menos una provincia autónoma con ingresos propios, libre de la centralización del poder impuesta por Río de Janeiro.

La Guerra de los Farrapos forzó a Brasil a ejercer en la zona del Río de la Plata una política exterior muy distinta de la tradicional. Durante años, Brasil se vería en la circunstancia de no aplicar una política agresiva en la región y de buscar acuerdos con Buenos Aires para poder ocuparse de una revolución en sus fronteras. Con el fin de la Guerra de los Farrapos se reavivaron las pretensiones brasileñas de mantener una fuerte influencia en Uruguay, así como el temor de que un mismo poder controlara las dos orillas del Río de la Plata. Ese temor creció conforme Juan Manuel de Rosas, al frente de Buenos Aires y de otras provincias argentinas, trataba de consolidar su autoridad.

Una coalición antirrosista se formó entre Brasil —facción de los colorados, aliados tradicionales de Brasil en Uruguay— y las provincias argentinas de Corrientes y Entre Ríos, rebeladas contra Rosas. La presencia brasileña fue dominante en la guerra, que comenzó en 1851, cuando don Pedro II ya había asumido el trono. Unos 24 000 soldados brasileños, reclutados principalmente en Rio Grande do Sul, participaron en el conflicto. Luego de que los colorados aseguraron el control de Uruguay, las tropas rosistas fueron derrotadas en territorio argentino (Monte Caseros) en febrero de 1852.

Mientras estas rebeliones agitaban Brasil, en el centro rector iban definiéndose las tendencias políticas. Aparecían los gérmenes de los dos grandes partidos imperiales: el Conservador y el Liberal. Los conservadores reunían a magistrados y burócratas, a una parte de los propietarios rurales, especialmente de Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco, y a los grandes comerciantes, entre los que se contaban muchos

portugueses. Los liberales agrupaban a la pequeña clase media urbana y a algunos religiosos y propietarios rurales de zonas menos tradicionales, sobre todo de São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul.

Pero el sistema político aún no se había estabilizado. En las elecciones para la regencia única, celebradas en 1835, el padre Feijó derrotó a su principal rival, Holanda Cavalcanti, propietario rural en Pernambuco. Después de poco más de dos años, en septiembre de 1837, Feijó renunció. Había sufrido presiones por parte del Congreso y se le acusaba de no reprimir con suficiente energía a los *farrapos*, entre cuyos líderes se contaba un primo suyo.

En las elecciones que se sucedieron triunfó Pedro de Araújo Lima, futuro marqués de Olinda, antiguo presidente de la Cámara y señor de ingenio en Pernambuco. La victoria de Araújo Lima simboliza el principio del "retorno". El término se refiere a las acciones de la facción conservadora, deseosa de "retornar" a la centralización política y a una autoridad reforzada. Una de las primeras leyes en este sentido fue una "interpretación" del acto adicional de mayo de 1840, la cual les quitó a las provincias varias de sus atribuciones, sobre todo aquellas que tenían que ver con nombramiento de funcionarios públicos.

El Segundo Reinado

Por una de esas paradojas comunes en la política, no fueron los conservadores, sino los liberales, los que apresuraron el ascenso de don Pedro al trono. Superados por las iniciativas "regresionistas", propusieron en el Congreso que se anticipara la mayoría de edad del rey mediante una nueva interpretación del

acto adicional. Así, en julio de 1840, siendo todavía un adolescente de 14 años, Pedro II asumió el trono de Brasil.

Las medidas "regresionistas" prosiguieron después de 1840. Volvió a instaurarse el Consejo de Estado y el Código del Proceso Penal se modificó en 1841. Todo el aparato administrativo y judicial tornó a manos del Gobierno central, con excepción de los jueces de paz. Pero la policía ganó importancia en detrimento de éstos.

En cada capital de provincia había ahora un jefe de policía nombrado por el ministro de Justicia. Se crearon los cargos de comisario y subcomisario en las parroquias y municipios. Éstos asumieron muchas funciones que antes se atribuían a los jueces de paz, entre ellas la de juzgar pequeñas causas penales. Así pues, la policía pasó a tener, en algunos casos, no sólo la facultad de investigar, sino la de procesar y aplicar penas a los individuos.

El proceso de centralización política y de reforzamiento de la figura del emperador —objetivos primordiales de los "regresionistas"— se completó con la reforma de la Guardia Nacional. El principio electivo, que en la práctica no había funcionado, desapareció por completo. El poder de elegir a los oficiales recayó sobre el Gobierno central o los presidentes de provincia y se incrementó la exigencia de ingresos para asumir los cargos. De este modo quedaba establecida la jerarquía y se aseguraba el reclutamiento de los oficiales en círculos más restringidos. A partir de entonces, entre la Guardia Nacional y el Ejército en vez de competencia se daría una división de funciones: a la Guardia Nacional le correspondería preservar el orden y defender a los grupos dominantes a nivel local, mientras que el Ejército se encargaría de arbitrar los conflictos, asegurar las fronteras y mantener la estabilidad general del país.

Aunque los liberales se beneficiaron de las medidas centralizadoras cuando estuvieron en el poder, no todo fue tranquilidad. Durante los primeros años de la década de 1840, el Gobierno imperial aún carecía de una base social de apoyo sólida. En mayo y junio de 1842, en dos provincias poco afectadas por las rebeliones —São Paulo y Minas Gerais— estallaron revueltas liberales que se extendieron al valle del Paraíba, en la provincia de Río de Janeiro. Los grandes propietarios rurales se dividieron entre los dos bandos enfrentados. En Río de Janeiro, el líder de los rebeldes era Joaquim de Sousa Breves, hacendado cafetalero y el hombre más rico de la provincia. Breves se oponía al Gobierno porque estaba en contra de sus intentos de evitar la evasión de impuestos sobre el café y de sus medidas de combate al tráfico de esclavos.

Algunos años más tarde, en 1848, irrumpió en Pernambuco la Revolución Praieira. Debe su nombre a un periódico liberal —el *Diário Novo*— cuya sede estaba en la Rua da Praia, en Recife. El de 1848 no fue un año cualquiera: por entonces, Europa se vio barrida por una serie de revoluciones democráticas y en Olinda y Recife se respiraba lo que un autor anónimo, adversario de las revoluciones, había llamado muchos años antes "el maligno vapor pernambucano". El vapor iba mezclado por esas fechas con la crítica social y las ideas socialistas. Un contundente crítico social ejemplar fue Antônio Pedro de Figueiredo, que en las páginas de su revista *O Progreso*, publicada entre 1846 y 1848, señalaba que los grandes males sociales de la provincia eran la estructura agraria, que concentraba la tierra en manos de unos cuantos propietarios, y el monopolio de comercio por parte de los extranjeros. Las ideas socialistas encontraron portavoces tan diversos como Louis Vauthier, arquitecto francés contratado por el presidente de la provincia para embellecer Recife, y el general José Inácio de Abreu e Lima, autor, años más tarde, de

un pequeño libro titulado *O Socialismo*. No se trataba del socialismo de Karl Marx, poco conocido en ese tiempo incluso en Europa, sino del de Pierre-Joseph Proudhon, Charles Fourier y Robert Owen.

La Praieira no fue, empero, una revolución socialista. Precedida por manifestaciones contra los portugueses, de las que resultaron varias muertes en Recife, tuvo como base, en el campo, a los señores de ingenio vinculados con el Partido Liberal. Su motivo de queja era la pérdida del control de la provincia a manos de los conservadores. El núcleo urbano de los praieiros, en el que destacaba la figura del viejo republicano Antônio Borges da Fonseca, sostuvo un programa favorable al federalismo, la abolición del Poder Moderador, la expulsión de los portugueses y la nacionalización del comercio al menudeo, controlado en gran medida por los lusitanos. Una novedad fue la defensa del sufragio universal, con ciertas restricciones, como la edad mínima para votar y postularse, aunque sin la exigencia de un ingreso mínimo. Aproximadamente 2 500 hombres atacaron Recife, pero fueron derrotados. La lucha prosiguió hasta 1850 bajo la forma de guerrillas, si bien no causó mayores problemas al Gobierno imperial.

La Praieira fue una de las últimas rebeliones provinciales. Al mismo tiempo, con la integración de la provincia al orden imperial, se cerró en Pernambuco el ciclo revolucionario, que se remontaba a la guerra contra los holandeses.

Desde mucho tiempo antes de que estallara la Revolución Praieira, las élites imperiales habían estado tratando de formalizar las reglas del juego político. Los puntos básicos del gran acuerdo que al fin se logró eran el fortalecimiento de la figura del emperador mediante la restauración del Poder Moderador y el Consejo de Estado, así como un conjunto de

normas escritas y no escritas. Estas últimas constituían algo a lo que se llamaba, de manera deliberadamente vaga, "el espíritu del régimen". Empezó a funcionar un sistema de Gobierno parecido al parlamentario, que, sin embargo, no debe confundirse con el parlamentarismo en el sentido exacto del término. En primer lugar, la Constitución de 1824 no tenía nada de parlamentarista. De acuerdo con sus dispositivos, el Poder Ejecutivo estaba regido por el emperador y era ejercido por ministros de Estado libremente nombrados por él. Durante el Primer Reinado y la Regencia, no hubo práctica parlamentaria. Ésta empezó a esbozarse, y aun así de un modo particular y limitado, a partir de 1847. Ese año se creó por decreto la figura del presidente del Consejo de Ministros, que sería designado por el emperador.

Este personaje político fue el encargado de armar el gabinete, cuyo conjunto conformaba el Consejo de Ministros o Ministerio, responsable del Poder Ejecutivo. El funcionamiento de este sistema presumía que, para mantenerse en el Gobierno, el gabinete debía ser digno de la confianza tanto de la Cámara como del emperador. Hubo casos en los que la Cámara obligó a cambiar la composición del Consejo de Ministros. Pero el emperador detentaba una considerable suma de atribuciones a través del Poder Moderador, de modo que el sistema político imperial se distinguió del parlamentarismo incluso en la etapa que va de 1850 a 1889. El emperador ejercía las prerrogativas del Poder Moderador cuando la Cámara no apoyaba al gabinete de su preferencia. En esos casos, con base en el Poder Moderador, disolvía la Cámara tras escuchar al Consejo de Estado y convocaba a nuevas elecciones. Como en las elecciones el peso del Gobierno era muy grande, el emperador podía elegir una Cámara acorde al gabinete de su preferencia.

Mediante este mecanismo se sucedieron 36 gabinetes en un periodo de 50 años, con un promedio de duración de un año y tres meses. Esto podría parecer indicio de gran inestabilidad. Pero, en realidad, pese a las crisis, el sistema político permitió que los dos partidos principales se alternaran en el Gobierno. Aquel que estaba en la oposición tenía siempre la esperanza de que lo llamaran a gobernar. De este modo se hizo innecesario el recurso de las armas.

Los dos grandes partidos imperiales —el Conservador y el Liberal— quedaron constituidos a finales de la década de 1830. Pero ¿había, a fin de cuentas, diferencias ideológicas o sociales entre ellos? ¿No serían en el fondo grupos casi idénticos, separados por rivalidades personales? Muchos contemporáneos afirmaban esto. Era célebre una frase atribuida al político pernambucano Holanda Cavalcanti: "Nada se parece más a un *saquarema* que un *luzia* en el poder". Durante los primeros años del Segundo Reinado, *saquarema* fue el apodo de los conservadores. El término derivaba del municipio fluminense de Saquarema, donde tenía una hacienda el vizconde de Itaboraí, uno de los principales líderes del partido. *Luzia* era el mote de los liberales: hacía alusión a la villa de Santa Luzia, en Minas Gerais, donde estalló la Revolución de 1842. La idea de la indistinción de los dos partidos también parecía confirmarse por el hecho de que los políticos se pasaban con frecuencia de un bando al otro.

Al considerar esta cuestión hay que tener en cuenta que, en buena medida, la política de aquel y de otros periodos no se ejercía para alcanzar grandes objetivos ideológicos. Llegar al poder significaba obtener prestigio y beneficios para uno mismo y para los suyos. En las elecciones, no se esperaba que el candidato cumpliera con banderas programáticas, sino con las promesas hechas a sus partidarios. Conservadores y liberales se

sirvieron de los mismos recursos para lograr victorias electorales, concediendo favores a sus amigos y empleando la violencia contra los indecisos y contra sus adversarios. Así, la división entre liberales y conservadores era muy semejante a una lucha entre clientelas opuestas en busca de las ventajas o las migajas del poder.

Al mismo tiempo, la política no se reducía al interés personal, y la élite política del partido tenía que lidiar, en un terreno más amplio, con grandes temas como la organización del Estado, las libertades públicas, la representación y la esclavitud. Las líneas divisorias en estas cuestiones corresponderían a las divisiones partidistas. ¿Qué significaron estas divisiones, si las hubo? Dejaremos para más tarde el problema de la esclavitud, que merece una revisión por separado, y trataremos aquí otras cuestiones.

El tema de la centralización o descentralización del poder separó a conservadores y liberales. Pero, en la práctica, esta separación no fue relevante durante la década de 1830, cuando estas dos tendencias aún no llegaban a constituirse en partidos. Las medidas asociadas con el "retorno" y la mayoría de edad de don Pedro, promovidas por los propios liberales, marcaron la victoria del modelo centralizador. En adelante, los dos partidos lo suscribieron, aunque los liberales insistían de dientes para afuera en defender la descentralización.

Fue bandera del Partido Liberal la defensa de las libertades y de una representación política más amplia para los ciudadanos. En este sentido, las posiciones del partido evolucionaron. Estos temas no ganaron fuerza sino hasta la década de 1860, cuando se retomaron las propuestas de descentralización. El llamado nuevo Partido Liberal, organizado en 1870 con la adhesión de conservadores como Nabuco de Araújo y Zacarias de Góis, incluía en su programa las elecciones directas en las principales

ciudades, el Senado no vitalicio, una reducción en las atribuciones del Consejo de Estado, las garantías de libertad de conciencia, educación, comercio e industria y la abolición gradual de la esclavitud.

Si hubo algunas diferencias ideológicas entre los dos partidos, cabe preguntarse a qué se debieron. En su análisis de la composición de los ministerios imperiales, el historiador José Murilo de Carvalho llega a algunas conclusiones significativas. En su opinión, el Partido Conservador, sobre todo durante las décadas de 1840 y 1850, era una coalición de propietarios rurales y burócratas del Gobierno a la que se sumó un sector de grandes comerciantes preocupados por las conmociones urbanas. El Partido Liberal agrupaba principalmente a propietarios rurales y profesionales liberales.

Una distinción importante era la que concernía a las bases regionales de los dos partidos. Mientras los conservadores sacaban su principal fuerza de las provincias de Bahía y Pernambuco, los liberales eran más fuertes en São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. La unión entre burócratas —sobre todo magistrados— y grandes propietarios rurales fluminenses representó el corazón de la política centralizadora que sostuvieron los conservadores.

La concepción de un imperio estable y unificado, originada en la burocracia gubernamental, fue asumida por los terratenientes fluminenses, que estaban estrechamente vinculados con la capital por la geografía y por sus negocios. El sector de propietarios rurales de Bahía y Pernambuco, que pertenecía al Partido Conservador, había vivido y seguía viviendo la experiencia de las luchas por la autonomía regional, de contenido popular. Ésta fue su principal razón para apoyar la idea de un Gobierno central dotado de gran autoridad.

Las propuestas liberales de descentralización, por su parte, surgieron de zonas como São Paulo y Rio Grande do Sul, donde la clase dominante regional tenía una tradición de autonomía. En el caso de Minas Gerais, el liberalismo emanaba tanto de los propietarios rurales como de la población urbana de las antiguas ciudades que nacieron con la minería.

Por otro lado, la introducción de temas como el de la mayor representación, así como el énfasis en el papel de la opinión pública, se debió a la presencia de profesionales liberales urbanos en el Partido Liberal. Esta presencia sólo fue significativa a partir de la década de 1860, con el desarrollo de las ciudades y el incremento en el número de personas con educación superior.

Recordemos por último que hacia 1870, sobre todo en São Paulo, las transformaciones socioeconómicas habían producido una clase basada en la producción de café que asumió con toda consecuencia uno de los principales aspectos de la descentralización: la defensa de la autonomía provincial. Al mismo tiempo, entre grupos de base social distinta, como esa burguesía cafetalera y la clase media urbana, surgía una nueva convicción: ya no se creía que las reformas descentralizadoras y la ampliación de la representación política pudieran darse en el marco de la monarquía. Así nació el movimiento republicano.

¿Por qué no se fragmentó Brasil? ¿Cómo mantuvo una unidad territorial que se remontaba a los tiempos de la Colonia? Las rebeliones provinciales y la incertidumbre en torno a la forma de organizar el poder central indican que la unidad del país no estaba asegurada cuando se proclamó la Independencia. Fue producto de la resolución de conflictos mediante la fuerza y la habilidad, así como del esfuerzo de los gobernantes por construir un Estado centralizado. Pero no hay dudas de que en ese proceso

la hipótesis de la separación de las provincias siempre fue menos probable que la conservación de la unidad.

En la historiografía brasileña este tema es bastante controvertido y hay explicaciones en conflicto que subrayan desde los elementos socioculturales hasta la naturaleza de las élites. Pero no es imposible hacer una síntesis de dichas explicaciones. Desde el punto de vista estructural, el elemento fundamental para explicar esta cuestión es el sistema esclavista. El interés por mantener la esclavitud llevó a las provincias más importantes a descartar la alternativa de separarse del Imperio, la cual las habría debilitado enormemente ante las presiones internacionales antiesclavistas, encabezadas por Inglaterra. Al mismo tiempo, Inglaterra fomentó la unidad de un país que representaba su principal mercado latinoamericano y que era una monarquía relativamente estable rodeada de repúblicas turbulentas.

Por su parte, la formación de una élite homogénea, educada en la Facultad de Derecho de Coímbra y más tarde en las facultades de Olinda-Recife y São Paulo, con una concepción jerárquica y conservadora, favoreció la adopción de una política que tenía como objetivo la construcción de un imperio centralizado. La circulación de esta élite por el país, ocupando cargos administrativos en diferentes provincias, la integró al poder central y redujo sus vínculos con los distintos intereses regionales.

La estructura socioeconómica y la esclavitud

La gran novedad para la economía brasileña de las primeras décadas del siglo XIX fue el surgimiento de la producción de café para exportación. La introducción de los cafetos en Brasil fue

obra de Francisco de Melo Palheta, quien en 1727 llevó a Pará las primeras semillas de la planta. El café, que se utilizaba para el consumo doméstico, llegó a Río de Janeiro alrededor de 1760 y se combinó con los pequeños cultivos de pomares y huertas que había en los alrededores de la capital de la colonia.

No obstante, fue en el extenso valle del río Paraíba, que atraviesa parte de Río de Janeiro y São Paulo, donde se reunieron las condiciones óptimas para la primera gran expansión del café a nivel comercial. La zona era conocida y por ella pasaban algunos caminos y senderos que desde los tiempos del apogeo de la minería conducían a Minas Gerais; tenía tierras vírgenes disponibles y clima favorable. Además, su cercanía con el puerto de Río de Janeiro, pese a la precariedad del transporte, facilitaba la salida del producto y los contactos para la obtención de créditos, la compra de mercancías, etcétera.

Las haciendas se instalaron siguiendo el modelo tradicional de la gran propiedad, con mano de obra esclava. No era imposible producir café para exportación en pequeñas unidades productivas, como quedaría demostrado con el caso de Colombia. Pero en las condiciones brasileñas de acceso a la tierra, de organización y abasto de mano de obra, la gran propiedad se impuso.

La historia de la ocupación de las tierras siguió un esquema que se remontaba al pasado y que habría de repetirse a lo largo de la historia de Brasil. Los límites de las propiedades eran totalmente indefinidos y muchos terrenos no habían sido explorados aún. Los títulos de propiedad, cuando los había, eran discutibles, entre otras cosas porque se traslapaban. En un escenario así prevaleció la ley del más fuerte, y éste era el que reunía las condiciones necesarias para permanecer en la tierra por la fuerza, desalojar a los ocupantes que no tenían recursos,

contratar buenos abogados, influir sobre jueces y legalizar, así, la posesión.

Para establecer una hacienda de café, el hacendado tenía que hacer inversiones significativas que incluían la tala de la selva, la preparación de la tierra, la siembra, la construcción de las instalaciones y la compra de esclavos. Además, aunque el cafeto es una planta perenne —lo cual quiere decir que no hay necesidad de renovar a corto plazo los cultivos—, hay que esperar cuatro años para obtener las primeras cosechas. En un principio, los recursos para montar haciendas parecen haber surgido sobre todo del ahorro que se obtuvo con la gran expansión del comercio tras la llegada de don Juan VI a Brasil. Con el tiempo, las ganancias obtenidas de la propia caficultura y, a partir de 1850, el capital que se liberó con la extinción del tráfico de esclavos fueron fuentes de inversión.

Durante casi todo el periodo monárquico, el cultivo de café se llevó a cabo empleando técnicas bastante sencillas. Algunas de ellas, como las de uso del suelo o, en ciertos aspectos, de depredación del suelo, existen hasta hoy. La producción era extensiva, es decir, no había ningún interés o preocupación por la productividad de la tierra. Cuando el suelo se agotaba por la falta de abono y de otros cuidados, el cultivo se extendía a nuevas áreas y las viejas tierras quedaban en el abandono o se destinaban a la siembra de alimentos.

Los instrumentos de trabajo básicos y casi exclusivos de la plantación cafetalera fueron la hoz y el azadón. Los esclavos se adaptaron a estas herramientas tradicionales del trabajador de la tierra en Brasil, y las condiciones topográficas del valle del Paraíba favorecieron su uso. El empleo del arado por parte de los hacendados del café no se generalizó sino hasta 1870, aproximadamente, en las zonas nuevas de São Paulo.

Salvo casos excepcionales, los trabajos se llevaban a cabo de la siguiente manera. Una vez talada la selva, se utilizaba una parte de la madera y se quemaba el resto. La siembra se hacía con mudas, e inicialmente los hacendados ni siquiera las alineaban. Siguiendo la costumbre de las Antillas, en el espacio de tierra que quedaba libre entre las mudas jóvenes de café se sembraban intercalados alimentos como el frijol, el maíz y la yuca. Esto tenía la ventaja de proporcionar la sombra necesaria a las mudas durante su crecimiento y de producir comida para los propietarios, sus dependientes y sus esclavos.

El cuidado de los cafetos consistía esencialmente en limpiar la tierra que los rodeaba para extirpar las malas hierbas. Cuando el arbusto empezaba a producir, los esclavos realizaban a mano la cosecha anual. Se calcula que, en promedio, en las plantaciones fluminenses un esclavo se encargaba de entre 4 000 y 7 000 matas de café, proporción que indica que el cuidado era poco. Las técnicas de producción y mejora eran preindustriales. También el transporte del café tras empacarse en costales con destino a la exportación se caracterizaba por la precariedad. Antes de que se construyeran las vías de tren, el traslado a los puertos se llevaba a cabo mediante caravanas de burros a cargo de un guía y de arrieros esclavizados. Las caravanas recorrían varias veces al año los caminos que iban del valle del Paraíba a Río de Janeiro. De ida conducían la producción de la hacienda. De regreso llevaban víveres como bacalao, carne seca, tocino y herramientas. Con el tiempo, los hacendados compraron muebles y piezas de lujo, entre ellas artículos de porcelana y cristal.

Un personaje importante en la comercialización del café era el comisario. Establecido en los puertos, inicialmente en Río de Janeiro y después también en Santos, el comisario fungía como intermediario entre productores y exportadores. Recibía la mercancía para vendérsela a los exportadores cuando lo

consideraba oportuno. A cuenta de la mercancía que se le entregaba o entregaría, el comisario proporcionaba al hacendado los bienes de consumo e instrumentos que éste le encargaba, ganando una comisión sobre el negocio. De este modo se establecía una relación de confianza entre hacendado y comisario. Éste abría una cuenta corriente en la que registraba los créditos y débitos del hacendado. En algunos casos, la relación fue tan estrecha que los comisarios servían de guía a sus clientes cuando éstos visitaban la capital, u orientaban a sus hijos cuando iban a estudiar allí. Productores y comisarios eran, por regla general, brasileños. Pero la exportación del café estuvo desde los primeros tiempos en manos de grandes organizaciones estadounidenses e inglesas.

Aunque la costumbre de consumir café se generalizó en Brasil, el mercado interno no bastaba para absorber una producción de gran escala. El destino del negocio cafetalero dependía, como hoy, del mercado exterior. La producción fue avanzando conforme se extendía el consumo habitual de café entre la clase media cada vez más numerosa de Estados Unidos y Europa. Estados Unidos se convirtió en el principal cliente del café brasileño, que también se exportaba a Alemania, los Países Bajos y Escandinavia.

Inglaterra, donde estaba arraigada la costumbre de tomar té, nunca fue una gran consumidora. Lo poco que consumía salía de sus colonias del Caribe, América Central y el sur de Asia. El café proveniente de estos sitios entraba en el mercado inglés con impuestos reducidos, y ello hacía aún más inviable la entrada del café brasileño. Ésta habría de ser una característica importante de las relaciones internacionales de Brasil a nivel económico y financiero durante el siglo XIX y parte del XX. El país dependía esencialmente de Inglaterra para conseguir créditos y préstamos. Los acreedores de la deuda externa eran, sobre todo,

banqueros ingleses. Pero Brasil no obtenía de las transacciones comerciales con Inglaterra ingresos que bastaran para pagar las importaciones que provenían de ella y atender a los compromisos de la deuda.

Basta un simple dato para dar idea de los avances en la producción de café y su importancia para el comercio exterior de Brasil: en el decenio de 1821-1830, el café correspondía al 18% del valor de las exportaciones brasileñas; en el decenio de 1881-1890, representaba el 61 por ciento.

Desde el punto de vista económico, el complejo cafetalero agrupaba un abanico de actividades que desplazó definitivamente el polo dinámico del país hacia el centro-sur. En función del café se aparejaron puertos, se crearon nuevos mecanismos de crédito y nuevos empleos y se revolucionaron los transportes. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, sino a través de un proceso relativamente largo de decadencia del nordeste y de fortalecimiento del centro-sur, que hacia 1870 se volvió irreversible.

El poder central otorgó beneficios a los grandes hacendados del valle del Paraíba y acarició su vanidad concediéndoles títulos de nobleza. La aventura del gran hacendado fluminense Joaquim de Sousa Breves, que comandó a los rebeldes liberales en 1842, era cosa del pasado. Para mediados del siglo XIX, el Imperio se había hecho de una base de apoyo entre los grandes comerciantes y propietarios rurales, incluyendo sobre todo a los "barones del café" de la provincia de Río de Janeiro. Esto no debe hacernos creer que esos sectores sociales se apropiaron del Estado. Había diferencias entre el Estado y los grupos dominantes de la sociedad. Prueba de ello es que los presidentes de provincia se elegían, por regla, fuera de los cuadros de la élite provinciana. Este procedimiento evitaba la simple y sencilla identificación del elegido con los intereses regionales.

De este modo, el Gobierno central conservaba una mayor independencia en cada provincia para ejercer su política.

El emperador y la burocracia imperial atendían la esencia de los intereses preponderantes al promover el orden en general, tratar de manera gradual el problema de la esclavitud, etc. Pero, en ocasiones, al hacerlo actuaban contra los puntos de vista de su base de apoyo. La Ley del Vientre Libre, propuesta por el emperador pese a la oposición casi generalizada de los hacendados, es un ejemplo de ello. El núcleo de la concepción estatista de Brasil se concentraba en los miembros vitalicios del Consejo de Estado. Según José Murilo de Carvalho, para los consejeros del Imperio, Brasil era como un sistema heliocéntrico dominado por el sol del Estado, en torno al cual giraban los grandes planetas de las así llamadas clases conservadoras y, muy lejos, la miríada de estrellas de la gran masa del pueblo.

La frase "Brasil es el café y el café es el negro", común entre los círculos dominantes de la primera mitad del siglo XIX, sólo es verdadera en parte. Brasil no era sólo el café, como no había sido sólo el azúcar. Además, la producción cafetalera continuaría en el futuro, sin la intervención del trabajo esclavo. Pero no hay duda de que en ese periodo buena parte de la expansión del tráfico se debió a las necesidades del cultivo del café.

Tras la Independencia, el Gobierno brasileño se encontraba en una situación complicada. Exceptuando algunas voces aisladas, no sólo los grandes propietarios y traficantes, sino toda la población libre estaban convencidas de que el fin del tráfico de esclavos a corto plazo provocaría un colapso en la sociedad. No obstante, Inglaterra —de quien dependía el país— presionaba cada vez más en sentido contrario. Las desavenencias y acuerdos entre Brasil e Inglaterra en torno a esta cuestión muestran cómo, a pesar de la dependencia brasileña, no todo podía

resolverse de acuerdo con los objetivos ingleses ni de un momento a otro.

En el decenio de la Independencia, el tráfico aumentó en relación con el periodo anterior. Según estadísticas oficiales, el promedio anual de ingreso de esclavos a Brasil fue de 32 700 para el periodo de 1811 a 1820 y de 43 100 para el periodo de 1821 a 1830. La concentración del ingreso de esclavos por los puertos al sur de Bahía, entre los que destacó con un amplio margen Río de Janeiro, creció enormemente. Estos puertos recibieron 53% del total de cautivos importados entre 1811 y 1829, y 69% del total entre 1821 y 1830. La mayor parte de los esclavos se envió a los cultivos de café del valle del Paraíba o se quedó en Río de Janeiro. De hecho fue la importación, y no el desplazamiento de esclavos de la región de Minas Gerais, como se pensaba hasta hace algunos años, la principal fuente de abasto de cautivos durante esta fase de la economía cafetalera.

En 1826, Inglaterra logró que Brasil firmara un tratado con cuya ratificación tres años después, se declararía ilegal el tráfico de esclavos a Brasil desde cualquier procedencia. Inglaterra se reservó además el derecho de inspeccionar en altamar los barcos sospechosos de comercio ilegal. El acuerdo entró en vigor en marzo de 1827; debía, pues, ser efectivo a partir de marzo de 1830. Una ley del 7 de noviembre de 1831 intentó activar el tratado previendo severas penas para los traficantes y declarando libres a todos los cautivos que entraran en Brasil después de aquella fecha. La ley se aprobó en un momento de caída temporal en el flujo de esclavos, pero pronto éste volvió a crecer y los dispositivos de la ley prácticamente no se aplicaron.

Los traficantes aún no eran mal vistos entre los sectores dominantes y también resultaron beneficiados por las reformas descentralizadoras que se emprendieron durante la Regencia. Los jurados locales, controlados por los grandes propietarios,

absolvían a los pocos acusados que llegaban a juicio. Se decía que la ley de 1831 era una ley *para inglês ver*.[2] En adelante esta expresión, hoy pasada de moda, se volvió común para referirse a las actitudes que sólo se asumen en apariencia y no de fondo.

Los grupos dominantes se apegaron al trabajo esclavo por diversas razones. Subrayemos entre ellas dos hechos: que aún no había una alternativa viable a la figura del trabajador cautivo en la gran propiedad y que tampoco se dieron rebeliones generalizadas de esclavos. Una excepción parcial en este sentido fueron el Recôncavo Bahiano y la ciudad de Salvador. Desde principios del siglo XIX, la rebeldía de los esclavos se instaló en la región y se incorporó a la vida cotidiana. Pero los negros que nacían en Brasil estuvieron por regla general ausentes de los diversos movimientos, lo cual es indicio de sus límites. La revuelta más significativa tuvo lugar en 1835, cuando cientos de negros africanos, esclavos y libertos de religión musulmana se levantaron en Salvador. A los negros musulmanes se les llamaba *malês*, y de allí viene el nombre que se dio a la rebelión. El Levantamiento de los Malês fue violentamente reprimido, lo que ocasionó la muerte de alrededor de 70 de sus miembros. Más de 500 africanos sufrieron violencia, desde pena de muerte (un pequeño número) hasta cárcel, azotes y deportación.

La situación de Bahía era excepcional, y ni aun allí ocurrieron otras rebeliones significativas después de 1835. En Río de Janeiro, donde había una masa esclavizada superior al 40% de la población, no sucedió nada semejante. La represión, la esperanza de obtener la libertad, las divisiones entre esclavos que estaban en mejores y peores situaciones, así como entre libertos y esclavos, o entre criollos y africanos, fueron varios de los factores que propiciaron esta circunstancia.

Inglaterra no se cruzó de brazos ante la inercia del Gobierno brasileño. Muchos barcos que transportaban esclavos fueron

aprehendidos. El acuerdo que concedía a Inglaterra el derecho de inspección debía terminar en 1846 y Brasil no se disponía a prorrogarlo. Ante esta situación, el Parlamento inglés aprobó un decreto que en Brasil se conoció con el nombre de Bill Aberdeen, en referencia a lord Aberdeen, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno británico. El decreto autorizaba a la Marina inglesa a tratar los barcos negreros como barcos piratas, con derecho a aprehenderlos y a juzgar a los implicados en tribunales ingleses. En Brasil, el Bill Aberdeen fue blanco de ataques de índole nacionalista. Incluso en Inglaterra se alzaron muchas voces contra el papel de "guardián moral del mundo" que se arrogaba el país.

En septiembre de 1848 subió al poder en Brasil un gabinete conservador presidido, a partir de octubre de 1849, por el marqués de Monte Alegre. Este gabinete representaba una alianza de burócratas, magistrados y grandes propietarios, en especial hacendados cafetaleros fluminenses. Como ministro de Justicia se nombró a Eusébio de Queirós. Hijo de un juez luso-angoleño, Eusébio de Queirós había nacido en Angola y se había casado con una joven proveniente de una familia ligada a los negocios urbanos de Río de Janeiro. Desde el Ministerio de Justicia se envió al Parlamento un proyecto de ley que establecía medidas más eficaces contra el tráfico, reforzando la ley de 1831. Entre otros puntos, Brasil reconocería que el tráfico era equivalente a la piratería y los infractores serían juzgados en tribunales especiales. El proyecto se convirtió en ley en septiembre de 1850. Esta vez la ley "prendió". La entrada de esclavos al país cayó de aproximadamente 54 000 cautivos en 1849 a menos de 23 000 en 1850 y a alrededor de 3 300 en 1851, fecha a partir de la cual prácticamente desapareció.

¿Qué sucedió entre 1831 y 1850? ¿Por qué la segunda ley "prendió" y la primera no? La respuesta tiene que ver con las

condiciones que había a fines de la década de 1840, sobre todo con la creciente presión de Inglaterra. Basada en el Bill Aberdeen, la Marina inglesa no se limitó a aprehender en altamar a los barcos sospechosos de contrabando de esclavos. Embarcaciones británicas penetraron en aguas territoriales brasileñas, amenazando incluso con bloquear los principales puertos. La escalada británica provocó incidentes a lo largo de la costa; el más serio fue un intercambio de disparos entre un barco de la escuadra inglesa y el fuerte de Paranaguá, en Paraná. El Gobierno imperial tenía muy pocas posibilidades de resistir a esta gran presión. Tanto más porque Brasil se veía amenazado al sur por una invasión argentina y necesitaba de la protección de los ingleses.

El movimiento de afuera hacia adentro fue, pues, un rasgo esencial de la extinción del tráfico. Al mismo tiempo, hacia fines de la década de 1840, luego de años de una intensa importación de esclavos, el mercado brasileño estaba abastecido. Hubo hacendados fluminenses que hipotecaron sus propiedades a grandes traficantes para obtener recursos destinados a comprar cautivos. Los traficantes empezaban a ser vistos con resentimiento. El frente interno antibritánico se había resquebrajado.

Además, el fortalecimiento del Gobierno central, que se logró por iniciativa de los conservadores, facilitó la acción represiva. Nabuco de Araújo, ministro de Justicia entre 1853 y 1857, llegó, por ejemplo, a forzar la sustitución del presidente de la provincia de Pernambuco por otro más decidido cuando tuvo lugar allí uno de los últimos intentos de desembarco de esclavos.

Tras la toma de medidas efectivas de combate al tráfico, la esclavitud estaba condenada a terminarse. Los propietarios de esclavos en Brasil no se preocuparon nunca por reproducirlos, de modo que dependieron del flujo de las importaciones. Al

estancarse éstas, el número de cautivos tendía a ser insuficiente para prestar los variados servicios a los que se les destinaba. Además, el fin del tráfico constituía un parteaguas desde el punto de vista político e ideológico. Si Brasil proscribía la importación de esclavos, la preservación de la esclavitud en el país perdería legitimidad. Pero a partir de este punto surgían muchas preguntas. ¿Dentro de cuánto tiempo y de qué manera se acabaría la esclavitud en Brasil? ¿Quién sustituiría la mano de obra esclava?

Un atisbo de respuesta puede encontrarse en la Ley de Tierras que se aprobó en 1850, dos semanas después de la extinción del tráfico. La ley trataba de poner orden en la confusión que había en materia de propiedad rural. Establecía que, en el futuro, las tierras públicas se vendieran y no se donaran, como había sucedido con las antiguas *sesmarías*; incluyó normas para legalizar la posesión de terrenos y procuró hacer forzoso el registro de las propiedades. La ley se concibió como una forma de evitar que futuros inmigrantes tuvieran acceso a la propiedad de la tierra. Las tierras públicas debían venderse por un precio lo suficientemente elevado como para ahuyentar a los ocupantes e inmigrantes pobres. Los extranjeros con boletos financiados para ir a Brasil no podrían adquirir tierras sino hasta tres años después de su llegada. En resumen, los grandes hacendados querían atraer inmigrantes para empezar a sustituir la mano de obra esclava, tratando al mismo tiempo de impedir que esos inmigrantes se convirtieran luego en propietarios. Pero la gran inmigración aún estaba por venir. Un recurso ampliamente utilizado por los hacendados del centro-sur fue el de abastecerse de esclavos en el mercado interno, comprándolos en las regiones que estaban en decadencia.

El año de 1850 no sólo marcó la mitad del siglo en Brasil. Fue también la fecha de la extinción del tráfico de esclavos, de la Ley de Tierras, de la centralización de la Guardia Nacional y de la aprobación del primer Código Comercial. Este último incluía innovaciones y al mismo tiempo integraba textos dispersos que se remontaban al periodo colonial. Entre otros puntos, definía qué tipos de compañías podrían organizarse en el país y regulaba sus operaciones. Al igual que la Ley de Tierras, su punto de referencia era la extinción del tráfico.

Los capitales que se liberaron con el fin de la importación de esclavos dieron origen a una actividad de negocios y especulación intensa para las condiciones de la época. Surgieron bancos, industrias, empresas de navegación a vapor, etc. Gracias a un aumento en los aranceles sobre los productos importados, que se había decretado a mediados de la década anterior (1844), se incrementaron los ingresos del Gobierno. Para 1852-1853 éstos se habían duplicado en comparación con el periodo de 1842-1843.

En el plano político, liberales y conservadores llegaron provisionalmente a un acuerdo nacional, que se tradujo en el Ministerio de Conciliación (1853-1856), presidido por el marqués de Paraná. De algún modo, el acuerdo pervivió en los siguientes gabinetes hasta 1861.

Se esbozaban así, en las áreas más dinámicas del país, cambios para la modernización capitalista; es decir, nacían los primeros intentos de crear un mercado para el trabajo, la tierra y los recursos disponibles.

La modernización debía pasar por la mejora del precario sistema de transportes. A mediados del siglo XIX, por transportes modernos se entendía la navegación a vapor y, sobre todo, los

ferrocarriles. Aun así, data de esta época la iniciativa de construcción de caminos más importante de todo el siglo: la carretera Unión e Industria, creada por iniciativa de Mariano Procópio, que unía Petrópolis, en la provincia de Río de Janeiro, con Juíz de Fora, en Minas Gerais. Iniciada en 1856, la carretera no llegó a Juíz de Fora sino hasta 1861 y alcanzó una extensión de 144 kilómetros. Era una vía pavimentada con grava, o *macadamizada*, como se decía en esa época, pues ese sistema era un invento del ingeniero escocés John Loudon McAdam. Era impresionante, además, por sus puentes metálicos y por las estaciones de postas para la línea regular de diligencias que la recorría. La Unión e Industria fue, sin embargo, muy costosa y era difícil mantenerla. Pronto sería superada por la competencia de los ferrocarriles.

Las mayores iniciativas de construcción de ferrocarriles se debieron a la necesidad de mejorar las condiciones de transporte de las principales mercancías de exportación hacia los puertos principales del país. Había que superar los inconvenientes que significaban los caminos precarios y la carga a lomo de burro, que encarecían los costos y dificultaban el flujo adecuado de los productos.

En el nordeste de Brasil, los esfuerzos más importantes se concentraron en Pernambuco y su función primordial fue dar salida a la cosecha de azúcar. Allí surgieron empresas de capital inglés: la pionera Recife-São Francisco, cuya construcción se inició en 1855; y, mucho más tarde, ya en la década de 1880, la Great Western. En el centro-sur, el principal objetivo de los ferrocarriles sería el transporte del café, un problema cada vez más apremiante, conforme las plantaciones se alejaban de la capital, extendiéndose hacia la Zona de la Mata en Minas Gerais y después hacia el llamado oeste paulista.

La construcción de vías de tren y la navegación a vapor revolucionaron la economía inglesa entre 1840 y 1880, incrementando la producción de la industria pesada de hierro, acero y carbón. La acumulación de capitales hizo posible la concesión de préstamos y la inversión extranjera; la inversión en ferrocarriles constituyó un sector privilegiado. Muchos de éstos se fabricaron con recursos financieros, materiales, equipos y contratistas ingleses.

Hacia 1850, la economía cafetalera del valle del Paraíba llegó a su auge. El problema del transporte se solucionó en gran medida con la creación del Ferrocarril Don Pedro II, más tarde llamado Central de Brasil. Su construcción empezó en 1855 y a lo largo de los años se fueron inaugurando segmentos sucesivos de la línea, que sólo en 1875 alcanzó Cachoeira, en territorio paulista. Posteriormente, una empresa organizada en São Paulo uniría Cachoeira con la capital de la provincia, con lo que se completó la conexión entre Río de Janeiro y São Paulo.

Mientras tanto, el café empezaba a implantarse en una nueva zona al interior de São Paulo: el llamado oeste paulista. El cafeto se introdujo allí en parte como sustituto de la caña en las antiguas haciendas. São Paulo siempre había sido un productor marginal de azúcar en el conjunto de la economía brasileña. La tendencia a la baja en los precios del producto, en contraste con los del café, fomentó la sustitución de cultivos. El éxito de la economía cafetalera del oeste paulista dependía esencialmente del transporte y de un puerto exportador viable, pues Río de Janeiro estaba muy lejos. La principal dificultad era cruzar las escarpas de la sierra del Mar y llegar a la costa. El problema se superó con la construcción del ferrocarril de Santos a Jundiaí por parte de una concesionaria inglesa —la São Paulo Railway (SPR)—, que entró en funciones en 1868. El puerto de Santos

exportaba en pequeñas cantidades el café que se cultivaba en el litoral paulista desde fines del siglo XVIII. La instalación del ferrocarril representó un salto en la consolidación de la ciudad como centro exportador.

La SPR tenía una concesión para prolongar la línea desde Jundiaí hasta Rio Claro. Pero perdió el interés en construir ese tramo, alegando dificultades en el mercado de capitales de Londres. Es posible que hayan pesado consideraciones estratégicas, pues la compañía monopolizaba, en la práctica, el acceso del interior al puerto de Santos. Entonces, a partir de las primeras medidas que se tomaron en 1868, surgió la Compañía Paulista de Ferrocarriles, empresa formada con capitales brasileños ligados a los negocios del café. La siguieron las compañías Mogiana, Ituana y Sorocabana. Esta última constituyó una excepción, porque no estaba ligada al café, sino a la producción algodonera que se desarrolló en la década de 1860 en la zona de Sorocaba.

Las compañías cafetaleras del valle del Paraíba y del oeste paulista siguieron caminos opuestos. A partir de las dos últimas décadas del Imperio fue posible constatar que, mientras la primera declinaba, la segunda estaba en franca expansión. Tanto en el valle del Paraíba como en el oeste paulista se practicaba la agricultura extensiva. Pero en este último había gran disponibilidad de tierras, lo que permitía incorporar continuamente nuevas extensiones; el valle del Paraíba tenía límites geográficos definidos y no había mucho espacio para avanzar. En consecuencia, las tierras agotadas, afectadas por la erosión, se volvieron poco rentables y su valor decayó. En vísperas de la abolición, la gran inversión de los hacendados de la zona eran los esclavos, hecho que demuestra por sí solo el impacto que causó allí la extinción del sistema esclavista.

Además de la disponibilidad de tierras, la trayectoria ascendente del oeste paulista se debió al concurso de otros factores que tenían que ver con el medio físico, la tecnología y el momento histórico. En la gran meseta del interior de São Paulo se reunían las condiciones más favorables de suelo y clima para el cultivo del café. El suelo allí es de una tierra roja a la que los inmigrantes italianos llamaron *rossa,* altamente productiva, que extendía el rendimiento del cafeto a 30 años, mientras que en otros suelos no sobrepasaba el cuarto de siglo. Aunque no hay que exagerar en cuanto a los avances tecnológicos, fue en el oeste paulista donde se introdujeron el arado y la despulpadora. Ésta representó una verdadera revolución en la técnica de pelado de los granos.

Por último, hay que recordar el momento histórico. En la nueva zona, los capitales se acumularon durante una etapa de la vida del país en la que ya estaba clara la necesidad de buscar alternativas para sustituir la fuerza de trabajo esclavizada. La zona cafetalera del valle del Paraíba nació antes, teniendo como horizonte el sistema esclavista, y sólo cuando llegó a su apogeo se extinguió el tráfico. A medida que declinó su productividad, fue más difícil encontrar una alternativa para el problema de la mano de obra, y esta dificultad no se superó.

Se formaron, así, dos clases regionales con destinos distintos. Los hacendados del valle del Paraíba apoyaron a la monarquía y fueron separándose de ella cuando se aprobaron medidas que tendían a abolir gradualmente la esclavitud. Este distanciamiento se completó con la abolición, en 1888, pero para entonces los barones del valle ya no tenían gran peso social o político.

La economía del oeste paulista dio origen a una nueva clase a la que se suele llamar burguesía del café. A partir de las últimas

décadas del siglo XIX, la región de São Paulo entró en un proceso de transformaciones que apuntaban a la conformación de una economía capitalista. Este cambio no se dio de un momento a otro. En ciertos aspectos, la introducción del capitalismo no se completó sino hasta años recientes. A lo largo de varias décadas, lo que se verificó fue un proceso de acumulación de capital, de diversificación de la economía, de conformación de un mercado de tierras, de producción y de consumo.

La acumulación de capital ocurrió en un primer momento a través de la producción de café y luego se combinó con las inversiones en ferrocarriles, bancos y comercio. La expansión del café dio pie a una red de núcleos urbanos que se convirtieron en centros de pequeña producción y de consumo, lo cual fue diversificando la economía. La llegada masiva de inmigrantes a partir de la década de 1880 impulsaría la formación de un mercado de producción y consumo, así como de mano de obra.

Sería ilusorio pensar que los grupos sociales del valle del Paraíba y del oeste paulista eran completamente distintos y que uno representaba lo "viejo", la aristocracia decadente, y otro lo "nuevo", la burguesía emprendedora. Ambos grupos partieron de supuestos comunes y se diversificaron a causa de las diferentes realidades de sus medios físicos y sociales. Ambos practicaron la agricultura extensiva y utilizaron ampliamente la mano de obra esclavizada. Los hacendados paulistas no recurrieron al inmigrante porque creyeran en sus virtudes o en la mayor rentabilidad del trabajo libre, sino porque la alternativa del esclavo estaba desapareciendo y había que encontrar una respuesta a ese problema. Para 1887, menos de un año antes de la abolición, la provincia de São Paulo ocupaba el tercer lugar en población esclavizada, con 107 000 cautivos; el primer lugar lo ocupaba Minas Gerais (con 192 000), y el segundo Río de Janeiro (162 000).

Después de 1850, el abasto de cautivos se dio a través del tráfico interprovincial. Así, las migraciones internas empezaron en Brasil bajo la triste forma de la transferencia forzada de esclavos de una región a otra. Surgieron nuevos traficantes y una nueva profesión: la del viajero comprador de esclavos, que recorría las provincias convenciendo a los hacendados más pobres o a los habitantes de las ciudades de que le vendieran sus siervos. Los cautivos no sólo se transportaban por vía marítima hacia las regiones cafetaleras; posiblemente para evadir los impuestos que había que pagar en los puertos de salida, muchos de ellos se veían obligados a viajar por tierra, por el interior de Bahía y de Minas Gerais, hasta llegar a la zona productora de café.

No hay datos seguros sobre el volumen del tráfico interprovincial. Estimaciones globales indican que entre 1850 y 1888 se desplazaron de las zonas azucareras del nordeste hacia el centro-sur entre 100 000 y 200 000 cautivos. Entre 1864 y 1874, el número de esclavos del nordeste cayó de 774 000 (45% del total de esclavos existentes en Brasil) a 435 000 (28% del total). En ese mismo periodo, la población esclava en las zonas productoras de café subió de 645 000 (43% del total de esclavos) a 809 000 (56% del total), y tan sólo en la provincia de São Paulo el número de cautivos creció más del doble, pasando de 80 000 a aproximadamente 174 000.

Con el alza en los precios de los esclavos resultante de la extinción del tráfico, incluso zonas productoras tradicionales como Bahía y Pernambuco exportaron cautivos en gran cantidad. Desde 1874, la población esclava declinó en todas las regiones del país, y esta tendencia se acentuó a partir de 1885. Aun así, la caída fue mucho más nítida en el nordeste que en el centro-sur. Aunque el descenso general fue de 19% entre 1874 y 1884, correspondió a 9% en el centro-sur y a 31% en el nordeste. La

población esclava del sur presentó también una fuerte caída, con Rio Grande do Sul encabezando la lista: allí la disminución fue de casi 39% durante este periodo.

El comienzo de la gran inmigración

La mayor o menor dependencia de cada región respecto a la mano de obra esclava se reflejó de manera importante en el curso que llevó a la extinción de la esclavitud. Pero la posibilidad y la capacidad de alcanzar una solución alternativa —el caso típico de São Paulo— también desempeñaron un papel relevante.

La solución alternativa consistió en atraer mano de obra europea para que trabajara en las haciendas cafetaleras. ¿Por qué no se trató de convertir a los esclavos en trabajadores libres ni se fomentó el traslado de personas oriundas de las zonas pobres del nordeste?

La respuesta a la primera pregunta es mixta. Por un lado, los prejuicios de los grandes hacendados les dificultaban e incluso les impedían concebir la hipótesis de un cambio de régimen para la masa esclavizada; por otro lado, era dudoso que, tras años de servidumbre, los esclavos estuvieran dispuestos a permanecer en una situación no muy distinta a aquella en la que habían vivido. Hay que recordar, en este sentido, que los inmigrantes, sobre todo cuando aún existía el régimen servil, se vieron obligados a presionar a los hacendados para obtener una mejor posición en comparación con la de los esclavos.

La respuesta a la segunda pregunta tiene un punto de contacto con la anterior. La argumentación racista que se apoderó de la mentalidad de los círculos dirigentes del Imperio, a partir de autores como Henry Thomas Buckle y el conde de

Gobineau, no sólo despreciaba a los esclavos o a los exesclavos. También se consideraba inferiores a los mestizos nacidos a lo largo de la colonización portuguesa, y la única salvación para Brasil, según estas posturas, sería europeizarlo lo más pronto posible. Además del factor cultural, es necesario considerar algunos otros. Los señores de ingenio y los propietarios de plantaciones de algodón del nordeste habían perdido recientemente mano de obra esclava y no verían con buenos ojos que una fuerza de trabajo que estaba bajo su control se transfiriera al centro-sur.

Es cierto que la sequía golpeaba periódicamente a algunos estados del nordeste y generaba masas de víctimas. Pero muchas de ellas quedaron en el abandono y otras fueron reclutadas para trabajar en la extracción de caucho, en el norte del país, o en las plantaciones de cacao, en Bahía. Así, durante los últimos años del siglo XIX los sueños de riqueza, o cuando menos de una vida mejor, no conducían al lejano centro-sur, sino a la Amazonia y a ciertas regiones del mismo nordeste brasileño.

La historia de la inmigración masiva a las zonas cafetaleras de São Paulo no coincide con la periodización de la historia política. Se inicia durante el Segundo Reinado, pero su mayor impacto se da en los años que siguieron a la Proclamación de la República. Las políticas de incentivo a la llegada de inmigrantes pasaron por pruebas y errores. En 1847, Nicolau de Campos Vergueiro, exregente del Imperio, un hacendado cuya fortuna se debía en buena medida al comercio de importación de esclavos, hizo un primer experimento. Con recursos del Gobierno imperial trasladó a Brasil a inmigrantes alemanes y suizos para que trabajaran en haciendas, tanto suyas como de otros propietarios del oeste paulista, en un régimen de aparcería.

La experiencia produjo un sinfín de problemas. Pese a que provenían de zonas de Europa golpeadas por la crisis de

alimentos, los aparceros no se conformaron con las condiciones de vida que hallaron en Brasil. Se les sometía a una disciplina estricta, en la que se incluía la censura de su correspondencia y la limitación de sus desplazamientos por las haciendas. En 1856 estalló, finalmente, una revuelta en la hacienda Ibicaba, propiedad de Vergueiro. Desde entonces cesaron las iniciativas basadas en la aparcería.

Los esfuerzos por atraer inmigrantes se retomaron a partir de 1871 y coincidieron con la aprobación de la Ley del Vientre Libre. Esta vez la iniciativa no partió sólo de los propietarios rurales, sino también del Gobierno provincial. Una ley de marzo de 1871 autorizó al Gobierno paulista a prestar dinero público a los hacendados con el fin de introducir trabajadores agrícolas en las haciendas. Para atraer inmigrantes se asignaron apoyos que cubrían los gastos del viaje. Empezaba así la inmigración subsidiada hacia São Paulo, esto es, la llegada de inmigrantes mediante apoyos concedidos por el Estado. A lo largo de los años el subsidio fue variando y llegó a incluir ocho días de hospedaje en la capital, en un edificio construido por el Gobierno, así como el transporte a las haciendas.

Hasta los primeros años de la década de 1880, el número de personas que llegaron como inmigrantes a São Paulo fue reducido. Entre 1875 y 1879 sólo se registró el ingreso de 10 455 personas, cifra muy por debajo de las necesidades de la producción cafetalera. Los italianos, que habían empezado a llegar poco a poco a partir de 1874, no se conformaban con las condiciones de vida que hallaban en Brasil; muchos volvieron a su tierra. En 1885, el Gobierno italiano publicó una circular en la que São Paulo se describía como una región inhóspita e insalubre y se desaconsejaba la emigración a Brasil.

Las figuras más prominentes de la élite paulista reaccionaron a este estado de cosas en un momento sensible, cuando se hacía

evidente la desorganización del sistema esclavista. La Sociedad Promotora de la Inmigración, fundada en 1886 por iniciativa de los hermanos Martinho Prado Júnior y Antônio da Silva Prado, entre otros, tomó una serie de medidas para atraer inmigrantes a las haciendas cafetaleras.

Esta organización publicó folletos en portugués, alemán e italiano en que se subrayaban las ventajas de inmigrar a São Paulo y se hacían comparaciones favorables respecto a otros países que recibían inmigrantes, como Estados Unidos y Argentina, cuyo atractivo era mayor. No se mencionaba, entre otros males, la existencia de la esclavitud. Martinho Prado Júnior viajó al norte de Italia buscando formas de atraer inmigrantes y se abrió en Génova una oficina de la Sociedad Promotora de la Inmigración.

Fueron varios los factores que, a uno y otro lado del océano, favorecieron al fin el flujo de gran número de inmigrantes. En Italia, la crisis derivada de la unificación del país y de las transformaciones capitalistas, que golpeó con más fuerza a la población pobre, fue un factor fundamental. Al mismo tiempo, el pago del viaje y la posibilidad del alojamiento representaron, bien que mal, un incentivo.

Hasta los primeros años del siglo XX, la mayoría de los inmigrantes que llegaron a São Paulo estaba conformada por trabajadores del campo o pequeños propietarios rurales del norte de Italia —del Véneto y Lombardía, sobre todo— que no estaban en condiciones de sobrevivir cultivando sus parcelas.

En los últimos años del Imperio, la emigración a São Paulo desde cualquier procedencia saltó de 6 500 personas en 1885 a casi 92 000 en 1888. En este último año, los italianos constituían casi 90% del total. Significativamente, en 1888 la cosecha de café que siguió a la abolición de la esclavitud (que había tenido lugar

en mayo de ese año) pudo llevarse a cabo sin que la disponibilidad de mano de obra representara un problema.

La Guerra de Paraguay[3]

Mientras el café seguía su marcha en el oeste paulista y las propuestas de abolición gradual de la esclavitud daban los primeros pasos, un acontecimiento internacional marcó profundamente la historia del Segundo Imperio. Ese acontecimiento fue la Guerra de Paraguay, que duró más de cinco años, del 11 de noviembre de 1864, cuando tuvo lugar el primer acto de hostilidad, hasta el 1º de marzo de 1870.

Para comprender bien el conflicto, empecemos por definir los rasgos más generales de las naciones involucradas y la forma en que se relacionaban unas con otras. El virreinato del Río de la Plata no sobrevivió como unidad política al fin del colonialismo español en las primeras décadas del siglo XIX. En el espacio que ocupaba su territorio, luego de largas páginas, nacieron Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La República Argentina surgió después de muchos vaivenes y guerras en las que se enfrentaban la tendencia unitaria y la federalista.

Los unitarios representaban sobre todo a los comerciantes de Buenos Aires, que defendían un modelo de Estado centralizado, encabezado por la capital del viejo virreinato. Esto permitiría a los sectores comerciales asegurar, a través del puerto de Buenos Aires, el control del comercio exterior argentino y apropiarse de los ingresos provenientes de los impuestos aduaneros sobre las importaciones.

La tendencia federalista reunía a las élites regionales, a los grandes propietarios y a los pequeños industriales y comerciantes que se dedicaban mayormente al mercado interno.

Estos sectores propugnaban un Estado descentralizado que asegurara sus ingresos y que no los sometiera a los impuestos establecidos por la burguesía comercial de Buenos Aires.

Uruguay nació en 1828, luego de tres años de lucha entre argentinos, brasileños y partidarios de la independencia. Inglaterra vio con buenos ojos la creación de ese país, que serviría para estabilizar la zona del estuario del Río de la Plata, donde los ingleses tenían intereses financieros y comerciales. Pero la historia uruguaya en el siglo XIX no tuvo nada de pacífica. La facción de los blancos y la de los colorados se disputaron el poder a sangre y fuego. Los colorados estaban vinculados con los comerciantes y las potencias europeas, y simpatizaban con las ideas liberales. Los blancos, que eran principalmente propietarios rurales, heredaron la vieja tradición autoritaria española y veían con suspicacia los avances de las nuevas potencias europeas en el país.

Los habitantes de la antigua provincia de Paraguay, gran número de los cuales descendía de indígenas guaraníes, no aceptaron someterse a la burguesía porteña y desde la década de 1810 empezaron a actuar de manera autónoma. Su autonomía no fue reconocida por los porteños, que en 1813 prácticamente impidieron el comercio paraguayo con el exterior. Bloquearon la vía natural de acceso al mar a través del estuario del Río de la Plata, al que los paraguayos llegaban navegando por los ríos Paraguay y Paraná. Este bloqueo llevó al líder paraguayo José Gaspar de Francia a aislar el país y a convertirse en su dictador perpetuo. El Estado expropió tierras que pertenecían a la Iglesia y a un sector de la élite favorable a la reconciliación con Buenos Aires, y se convirtió en el principal agente de producción y comercio.

La idea de Paraguay como un país de pequeños propietarios al mando de un Estado clarividente, común en la historiografía

de izquierda de la década de 1970, se refiere sobre todo a la época de Gaspar de Francia. Si bien es cierto que éste tomó medidas excepcionales en el contexto de América del Sur, etiquetar dichas medidas como progresistas simplifica su contenido. En las tierras confiscadas el Gobierno organizó las estancias de la patria, explotadas por éste o por pequeños arrendatarios. En las estancias del Gobierno se empleaba mano de obra de esclavos y prisioneros. La economía dejó de ser monetaria: tanto la renta de la tierra como los impuestos se pagaban en especie, sin recurrir a la moneda.

Tras la muerte de Francia, se designó presidente a Carlos Antonio López, que proclamó formalmente la independencia de Paraguay en 1842. López trató de romper el aislamiento del país mediante la instalación de un ferrocarril y el fomento al comercio exterior. Su hijo, Francisco Solano López, fue enviado a Inglaterra, donde compró material de guerra y reclutó técnicos europeos para que auxiliaran en la modernización de la nueva nación. Gradualmente, Paraguay intentó crecer vinculándose con el mercado exterior. Su interés por el control de la navegación fluvial de los ríos Paraguay y Paraná, así como por el libre tránsito a través del puerto de Buenos Aires, fue en aumento. Solano López ascendió al poder en este escenario, en 1862, tras el fallecimiento de su padre.

La posición que Brasil adoptó frente a sus vecinos durante la primera mitad del siglo XIX puede resumirse de la siguiente manera. Las preocupaciones del Gobierno imperial se concentraban en Argentina. Se temía la unificación del país, que podría convertirse en una república fuerte, capaz de neutralizar la hegemonía brasileña y de resultar atractiva para la inquieta provincia de Rio Grande do Sul.

En cuanto a Uruguay, por parte de Brasil hubo siempre una política de influencia en el país. Los *gaúchos*, siendo ganaderos,

tenían intereses económicos en Uruguay y veían con malos ojos las medidas que reprimían el contrabando en la frontera. Brasil apoyó el lado de los colorados, cuya línea política era cercana a sus intereses. El Gobierno imperial llegó incluso a establecer un acuerdo secreto con los colorados, adversarios de Rosas, mediante el cual se comprometía a darles mensualmente un aporte en dinero.

Durante la primera mitad del siglo XIX las relaciones de Brasil con Paraguay dependieron del estado de las relaciones entre Brasil y Argentina. Cuando las rivalidades entre estos dos países aumentaban, el Gobierno imperial solía acercarse a Paraguay. Y cuando las cosas se acomodaban, salían a relucir las diferencias entre Brasil y Paraguay. Estas divergencias tenían que ver con cuestiones de frontera y con la insistencia de Brasil en que se garantizara la libre navegación por el río Paraguay, principal vía de acceso a Mato Grosso.

A primera vista, las posibilidades de una alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, y, lo que es más, de una guerra con este tipo de configuración, parecían remotas. Pero eso fue lo que sucedió. Los futuros aliados empezaron a acercarse en 1862, cuando Bartolomé Mitre llegó al poder en Argentina, derrotando a los federalistas. El país se reunificó bajo el nombre de República de Argentina y Mitre fue elegido presidente. Mitre empezó a poner en práctica una política que los liberales brasileños, que habían asumido el Gobierno ese mismo año, veían con buenos ojos. Se acercó a los colorados uruguayos y se convirtió en un defensor de la libre navegación de los ríos.

Estos ajustes abrieron lugar a las rivalidades entre Brasil y Paraguay. Aunque estos dos países competían por los mercados de hierba mate, sus disputas, desde la perspectiva del Gobierno brasileño, tenían un contenido predominantemente geopolítico (fronteras, libre navegación de los ríos). En un intento de romper

de una vez por todas el aislamiento de Paraguay y de tener cierta presencia en la región, Solano López se alió con los blancos y los adversarios de Mitre, líderes de las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes.

A principios de la década de 1860 el Gobierno imperial, lejos de actuar como un instrumento de los intereses de Inglaterra, se involucró en varios incidentes con ese país que se conocen como la Cuestión Christie, nombre del embajador británico en Brasil. Luego de que la Marina británica apostada en Río de Janeiro aprehendiera unos barcos mercantes brasileños, Brasil rompió relaciones diplomáticas con Inglaterra a principios de 1863. Surgió entonces en el país un ambiente de exaltación patriótica, fomentado también por la noticia de que en Uruguay, donde los blancos ocupaban el poder, los ciudadanos brasileños estaban siendo víctimas de violencia. El Gobierno imperial invadió Uruguay en septiembre de 1864 para ayudar a poner a los colorados en el poder.

López decidió entonces tomar la iniciativa. El 11 de noviembre de 1864 un cañonero paraguayo capturó en el río Paraguay al buque brasileño *Marqués de Olinda*, lo cual ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Las operaciones de guerra se iniciaron efectivamente el 23 de diciembre de 1864, cuando López lanzó una ofensiva contra Mato Grosso. Enseguida pidió autorización a Argentina para pasar con sus tropas por la provincia de Corrientes, con el objetivo de atacar a las fuerzas brasileñas en Rio Grande do Sul y en Uruguay. La petición fue rechazada.

Se especula mucho sobre las razones que llevaron a Solano López a iniciar el conflicto, corriendo el riesgo de provocar la unión de dos viejos rivales —Brasil y Argentina— contra Paraguay. Aparentemente, tenía la esperanza de neutralizar las amenazas de sus poderosos vecinos y de convertir a Paraguay en

una fuerza dentro del juego político del continente. Contaba para ello con una victoria en el desguarnecido Mato Grosso —que podría conducir a Brasil a firmar un acuerdo—, así como con el apoyo de los blancos uruguayos y de las provincias argentinas adversarias de Mitre.

Estas expectativas no se cumplieron. El apoyo de las provincias no se hizo presente: en Uruguay el Gobierno imperial forzó el ascenso al poder del colorado Venancio Flores. En marzo de 1865, Paraguay declaró la guerra a Argentina; el 1º de mayo de ese año los Gobiernos argentino, brasileño y uruguayo firmaron el Tratado de la Triple Alianza. El presidente argentino Mitre asumió el mando de las fuerzas aliadas.

El peso económico y demográfico de los tres países que conformaban la alianza era muy superior al de Paraguay. En Brasil y Argentina se creía —como suele suceder cuando se inician los conflictos— que la guerra sería un paseo por el campo. Pero no fue así. López, a diferencia de sus adversarios, estaba bien preparado militarmente. Al parecer —pues no hay números seguros—, al comenzar la guerra los efectivos de los ejércitos ascendían a 18 000 hombres en Brasil, 8 000 en Argentina y 1 000 en Uruguay, mientras que en Paraguay sumaban 64 000, sin contar con una reserva de veteranos que se calculaba en 28 000 integrantes. Brasil gozaba, sin embargo, de una amplia superioridad naval para el combate en los ríos.

Con el paso de los años, las fuerzas de la Triple Alianza crecieron, predominando los brasileños, que representaban al menos dos tercios del total. El número general de brasileños movilizados se calcula entre 135 000 y 200 000 para una población masculina estimada en 4.9 millones en 1865. Las tropas se formaron con el Ejército, los batallones de la Guardia Nacional y gente reunida en su mayoría con los viejos métodos de

reclutamiento forzado, que se remontaban a la Colonia. Pese a ello, muchos se sumaron al cuerpo de Voluntarios de la Patria.

Hubo propietarios de esclavos que cedieron también cautivos para que lucharan como soldados. Una ley de 1866 concedió la libertad a los "esclavos de la nación" que sirvieran en el Ejército. La ley se refería a los africanos ilegalmente introducidos en el país después de la extinción del tráfico, los cuales habían sido aprehendidos y se encontraban bajo la custodia del Gobierno imperial.

El Ejército brasileño se fue consolidando en el transcurso de la guerra. Hasta entonces el Imperio había contado con un cuerpo profesional de oficiales reducido y había hecho frente a muchas dificultades para ampliar sus efectivos militares. No había un servicio militar obligatorio, sino un sorteo muy restringido para alistarse en el Ejército. Los elementos de la Guardia Nacional, que en su mayoría formaban parte de la población blanca, estaban exentos de ese servicio. Hasta la Guerra de Paraguay había sido la milicia *gaúcha* la que se había encargado de las campañas militares de Brasil en el Plata, pero esta milicia resultó incapaz de enfrentar a un Ejército moderno como el paraguayo.

En la historia de esta guerra las hazañas militares de ambas partes se combinan con imágenes de privaciones, muertes en combate y por enfermedades, sobre todo cólera. Al principio del conflicto, en junio de 1865, la Marina brasileña destrozó a la paraguaya en la Batalla de Riachuelo, en territorio argentino. Así, los aliados bloquearon Paraguay, cerrando su única vía de acceso al exterior, a través del río Paraná. Pero los aliados no aprovecharon del todo esta ventaja. Temiendo las fortificaciones enemigas a lo largo del río Paraguay —sobre todo en torno a Humaitá—, se vieron inmovilizados durante varios años por el sistema defensivo terrestre de los paraguayos.

En ese mismo junio de 1865 las fuerzas paraguayas ya instaladas en Corrientes, Argentina, invadieron Rio Grande do Sul para ser derrotadas poco después. De noviembre de ese año en adelante, con excepción de Mato Grosso, que se había convertido en un frente de lucha secundario, el conflicto se desarrolló en territorio paraguayo. La mayor batalla campal de la guerra tuvo lugar en Tuyutí en mayo de 1866. Pese a la derrota paraguaya, los aliados no pudieron aprovechar la situación y pronto sufrieron un serio revés en Curupaytí. El objetivo de estos combates era tomar la fortaleza de Humaitá.

Un hecho importante en los derroteros de la guerra fue el nombramiento de Caxias al mando de las fuerzas brasileñas en octubre de 1866. Este nombramiento se debió a la presión del Partido Conservador, que, desde la oposición, culpaba a los liberales de la incertidumbre en el conflicto. A principios de 1868, Caxias asumió también el mando de las fuerzas aliadas. Mitre se había visto obligado a volver a Buenos Aires para hacer frente a problemas de política interna, entre los cuales destacaba la resistencia de las provincias a enviar tropas a Paraguay. A partir entonces Brasil continuó en el conflicto prácticamente solo.

Antes de atacar Humaitá, Caxias concentró sus esfuerzos en la tarea de dotar al Ejército de una infraestructura adecuada. Sólo entonces emprendió la ofensiva. Humaitá capituló en agosto de 1868, y en enero de 1869 los brasileños entraron en Asunción. Enfermo, deseando la paz, pues la continuación de la guerra ya sólo estaba motivada por una política de destrucción, Caxias dejó el mando. Lo sustituyó el conde D'Eu, marido de la princesa Isabel, heredera del trono imperial.

Luego de varios combates las tropas brasileñas derrotaron a un último y pequeño ejército de paraguayos conformado por ancianos, niños y enfermos. Solano López se vio al fin rodeado en

su campamento y murió a manos de los soldados brasileños el 1º de marzo de 1870.

Paraguay salió arrasado del conflicto: partes de su territorio fueron anexadas a Brasil y Argentina, y su propio futuro se vio comprometido. Su proceso de modernización se volvió cosa del pasado, y Paraguay se convirtió en un país exportador de productos de poca importancia. De acuerdo con los cálculos más confiables, la mitad de la población paraguaya murió; cayó de un total que rondaba los 406 000 habitantes en 1864 a 231 000 en 1872. La mayor parte de los sobrevivientes eran ancianos, mujeres y niños.

Brasil terminó la guerra más endeudado con Inglaterra, con quien había reanudado las relaciones diplomáticas al inicio de las hostilidades. Pero la principal consecuencia del conflicto fue la consolidación del Ejército como una institución con una fisonomía y objetivos propios. Entre otras cosas, los reclamos contra el Gobierno imperial, que no eran una novedad, tomaron otro cariz. Después de todo, con aciertos y con errores, el Ejército había sostenido la lucha en el frente de batalla. Mientras tanto, las élites civiles —los *casacas*, como empezó a llamárseles desdeñosamente— habían permanecido a salvo, y en ciertos casos se habían enriquecido gracias a negocios vinculados con el abasto de la tropa.

La crisis del Segundo Reinado

A partir de la década de 1870 se hicieron presentes varios síntomas de crisis en el Segundo Reinado, como, por ejemplo, el nacimiento del movimiento republicano y los conflictos entre el Gobierno imperial, el Ejército y la Iglesia. Además, el curso que había tomado el problema de la esclavitud desgastó las

relaciones entre el Estado y sus bases sociales de apoyo. Estos factores no tuvieron el mismo peso en la caída del régimen monárquico, que se explica por un conjunto de razones entre las que se cuentan las transformaciones socioeconómicas, que hicieron surgir nuevos grupos sociales, y la receptividad ante las ideas de reforma.

La extinción de la esclavitud se dio por etapas hasta culminar en 1888. Sin embargo, no fue en 1888 cuando tuvo lugar la mayor controversia en torno a las medidas legales que conducirían a la abolición, sino cuando el Gobierno imperial propuso la llamada Ley del Vientre Libre, en 1871. En la propuesta de ley se declaraba libres a los hijos de mujeres esclavas nacidos a partir de su promulgación. Estos niños permanecerían en poder de los propietarios de sus madres hasta la edad de ocho años. A partir de entonces los propietarios podrían elegir una de dos opciones: recibir una indemnización del Estado o hacer uso de los servicios del menor hasta que éste cumpliera 21 años.

El proyecto surgió de un gabinete conservador presidido por el vizconde de Rio Branco, hecho que arrebató la bandera del abolicionismo a los liberales. ¿Qué fue lo que llevó al Gobierno a proponer una ley que, aunque no tenía nada de revolucionaria, lo ponía en conflicto con su base social de apoyo?

La explicación más razonable es que la iniciativa se debió a una decisión del emperador y de sus consejeros. Aunque no estaban teniendo lugar insurrecciones de esclavos, los círculos dirigentes, después de la Guerra de Paraguay, consideraban que Brasil sufría de una debilidad básica en su frente interno, ya que no podía contar con la lealtad de gran parte de la población. La solución de la cuestión servil, aunque lastimaba importantes intereses económicos, se veía como un mal menor ante ese problema y el potencial riesgo de revueltas de esclavos.

La clase social dominante, en cambio, veía en ese proyecto un grave riesgo de que se subvirtiera el orden. Liberar esclavos mediante un acto de generosidad del propietario obligaba a los beneficiados a mostrar gratitud y obediencia. Pero abrirle paso a la libertad por la fuerza de la ley haría nacer en la mente de los esclavos la idea de que tenían derechos, lo cual llevaría al país a una guerra entre razas.

Las posiciones de los diputados en torno al proyecto que se aprobó al final son bastante reveladoras. Mientras los representantes del nordeste votaron en masa a favor de la propuesta (39 votos a favor y 6 en contra), entre los del centro-sur la tendencia se invirtió (30 en contra y 12 a favor). Esto reflejaba en parte el hecho de que, debido al tráfico interprovincial, el grado en que el nordeste dependía de la mano de obra esclava había ido disminuyendo.

Hay otro dato importante en cuanto a la profesión de los diputados: gran parte de ellos eran funcionarios públicos, sobre todo magistrados. Este grupo, que en su mayoría provenía del nordeste y del norte, seguía la línea del Gobierno y votó en bloque con él. Desde la perspectiva partidista no hubo una clara división del voto entre liberales y conservadores. Diputados de ambos partidos votaron, dependiendo del caso, a favor o en contra del proyecto. En la práctica, la ley de 1871 tuvo escasos efectos. Pocos niños se entregaron al poder público y los propietarios de esclavos siguieron haciendo uso de sus servicios.

A partir de la década de 1880 el movimiento abolicionista ganó fuerza con la aparición de asociaciones y periódicos, y con los avances de la propaganda en general. Gente de diversas condiciones sociales y posturas participó en las campañas abolicionistas. Entre las varias figuras de la élite destacó Joaquim Nabuco, importante parlamentario y escritor, oriundo de una familia de políticos y grandes propietarios rurales de

Pernambuco. Fueron también figuras centrales del abolicionismo negros y mestizos de origen humilde, como José do Patrocínio, André Rebouças y Luís Gama.

Patrocínio era hijo de un sacerdote y hacendado dueño de esclavos, y de una negra vendedora de fruta. Fue propietario de la *Gazeta da Tarde*, periódico abolicionista de Río de Janeiro, y se hizo famoso por sus encendidos discursos.

El ingeniero Rebouças representaba el tipo opuesto: era un hombre retraído, profesor de botánica, cálculo y geometría en la Escuela Politécnica de la corte. Relacionaba el fin de la esclavitud con el establecimiento de una "democracia rural" y defendía el reparto de tierras a los esclavos liberados, así como la creación de un impuesto territorial que forzara la venta y subdivisión de los latifundios.

Luís Gama tiene una biografía novelesca. Su padre era miembro de una acaudalada familia portuguesa de Bahía y su madre, Luísa Mahin, según afirmaba orgulloso su hijo, "era una negra africana libre que siempre rechazó el bautismo y la doctrina cristiana". Gama fue vendido ilegalmente como esclavo por su padre empobrecido, y enviado a Río de Janeiro y luego a Santos. Remontó la sierra del Mar junto con otros 100 esclavos, descalzo y hambriento. Huyó de la casa de su señor, se volvió soldado y, más tarde, poeta, abogado y periodista en São Paulo.

Mientras el abolicionismo crecía, las provincias del norte fueron perdiendo el interés en mantener el sistema esclavista, a tal grado que Ceará declaró extinta la esclavitud por su propia cuenta, en 1884. En este contexto se aprobó, en 1885, la Ley de los Sexagenarios, también conocida como Ley Saraiva-Cotegipe. Propuesta por un gabinete liberal presidido por el consejero Saraiva, la medida fue aceptada en el Senado cuando los conservadores, con el barón de Cotegipe al frente, volvieron al poder. Esta ley, a grandes rasgos, concedía la libertad a los

cautivos mayores de 60 años y establecía normas para la liberación gradual de todos los esclavos mediante una indemnización. Se pensó como un recurso para frenar el abolicionismo radical, pero no logró su objetivo.

Entre 1885 y 1888, tras una breve pausa, la campaña abolicionista adquirió nuevos ímpetus. Lo más importante entonces era la desorganización del trabajo en las haciendas paulistas, provocada por la fuga masiva de esclavos. Activistas dirigidos por Antônio Bento, miembro de una familia rica de São Paulo, iban a las haciendas y ciudades del interior y fomentaban allí actos de rebeldía. En poco tiempo, Santos se convirtió en un refugio donde se concentraban los esclavos fugitivos. En ese ínterin, la élite cafetalera paulista, dándose cuenta de que el sistema esclavista se desmoronaba a pasos acelerados, se esforzó por apresurar el funcionamiento del plan de inmigración.

En 1888 ya sólo se aferraban a la esclavitud los representantes de las viejas zonas cafetaleras del valle del Paraíba, cuyas fortunas en decadencia se concentraban en los esclavos. Antônio Prado, senador conservador de São Paulo vinculado con el oeste paulista, presentó un proyecto conciliador: en él se preveía la liberación inmediata de los esclavos, sujeta a una indemnización y a la prestación de servicios por tres meses para asegurar la cosecha, que se avecinaba. Frente a la oposición de los liberales, el presidente del Consejo, el conservador João Alfredo, optó por proponer la abolición sin restricciones. La iniciativa se aprobó con una gran mayoría parlamentaria y la princesa Isabel, entonces regente del trono, la sancionó el 13 de mayo de 1888. De los nueve diputados que votaron contra el proyecto, ocho representaban a la provincia de Río de Janeiro. En el Senado, el barón de Cotegipe encabezó la frágil resistencia, lanzando una amenaza: “Dentro de

poco pedirán la división de las tierras y el Estado podrá decretar que se expropien sin indemnización".

El destino de los exesclavos varió dependiendo de la región del país. En el nordeste, se convirtieron por lo general en dependientes de los grandes propietarios. Maranhão representó una excepción, pues allí los libertos abandonaron las haciendas y tomaron tierras desocupadas.

En el valle del Paraíba, los antiguos esclavos se volvieron aparceros en las haciendas de café en decadencia y más tarde pequeños granjeros o peones de ganadería. En el oeste paulista, las fugas masivas caracterizaron los años que antecedieron a la abolición, pero el flujo de negros a la ciudad de São Paulo y otras regiones se extendió al menos por una década. En los centros urbanos de São Paulo y de Río de Janeiro, la situación fue distinta. Mientras que en São Paulo los empleos estables fueron ocupados por los trabajadores inmigrantes y los servicios informales y mal pagados se relegaban a los exesclavos, en Río de Janeiro el escenario fue un poco diferente. Por la tradición de emplear a negros esclavos y libres en los talleres artesanales y manufactureros, y debido a que la inmigración tuvo menor peso, el trabajador negro tuvo allí relativamente más oportunidades. En 1891, por ejemplo, alrededor de 30% de los trabajadores fabriles cariocas eran negros, mientras que en São Paulo, en 1893, los inmigrantes desempeñaban 84% de los empleos industriales.

En Rio Grande do Sul, como en São Paulo, se dio un proceso de sustitución de los esclavos o exesclavos por inmigrantes en los empleos regulares.

Pese a los distintos escenarios que presentaban las diversas zonas del país, la abolición de la esclavitud no terminó con los problemas de los negros. La preferencia por los trabajadores inmigrantes en las regiones más dinámicas de la economía y las

escasas oportunidades que se abrían al exesclavo en otras áreas llevaron a la población negra a una profunda desigualdad social. Fruto en parte del prejuicio, esta desigualdad acabó reforzando el mismo prejuicio contra el negro. Sobre todo en las regiones donde la inmigración fue fuerte se consideró al negro como un ser inferior, útil cuando se mostraba servil, o peligroso por naturaleza, pues se le tenía por vago y propenso al crimen.

Pocos temas de la historia brasileña se han discutido e investigado tanto como la esclavitud. Hay apasionadas controversias sobre los índices de mortalidad de los esclavos en la travesía del Atlántico, sobre las posibilidades de conformación de la familia esclava, sobre el significado de la manumisión —es decir, de la libertad concedida a los cautivos antes de 1888—, sobre la llamada brecha campesina, sobre la condición del esclavo en diversas situaciones laborales, etcétera.

Estas discusiones contribuyen a demostrar que el sistema esclavista no se sostuvo sólo debido a la violencia abierta, aunque ésta fue fundamental. La larga vida del sistema se explica también por su amplitud, por las diferencias que había entre los esclavos y por sus expectativas reales o imaginarias de alcanzar la libertad. En este sentido, destacan dos temas: el de la llamada brecha campesina y el de las manumisiones.

La existencia de una "brecha campesina" es defendida por autores que —con Ciro Cardoso al frente— destacan la importancia del sector dedicado al mercado interno en la economía brasileña colonial y decimonónica. Esta tesis parte del hecho de que en las haciendas cañeras y sobre todo cafetaleras se permitía a los esclavos trabajar en patios cercanos a sus cabañas o en pequeñas parcelas, produciendo géneros alimenticios para su sustento y su venta en el mercado. La concesión se habría generalizado, al punto de convertirse en costumbre. Así, se

afirma que, al producir por su propia cuenta para el mercado, el esclavo se convirtió también en campesino, con lo que abrió una brecha en el sistema esclavista. Esto apunta al hecho de que, aunque el esclavo fuera jurídicamente una cosa, acababa teniendo, en la práctica de las relaciones sociales, ciertos derechos derivados de la costumbre.

El problema de la manumisión surge de la existencia de gran número de esclavos liberados en las colonias españolas y en Brasil, en comparación con las posesiones inglesas y francesas. Ya tocamos este tema cuando nos referimos al Brasil colonial, sobre todo en lo relativo al caso de Minas Gerais. De hecho, pese a la precariedad de las estadísticas, es posible ver que a finales del periodo colonial los libertos o libres representaban 42% de la población de origen africano (negros o mulatos) y 28% del total de la población brasileña, mientras que los esclavos correspondían a 38% de ese total. Según los datos del censo de 1872, los libertos o libres conformaban 73% de la población de origen africano y 43% del total de la población brasileña, al tiempo que los esclavos constituían 15% de ese total.

Las manumisiones tenían lugar cuando el esclavo o un tercero compraba su libertad, o bien cuando el señor decidía liberarlo. El hecho de que el mayor número de manumisiones pagadas haya tenido lugar en las ciudades indica que en ellas el esclavo tenía más posibilidades de reunir un peculio.

Una explicación fácil para la manumisión por iniciativa de los señores sería la de que, por razones económicas, sólo se liberaba a los ancianos y enfermos. No obstante, hay algunos estudios que ponen en duda esta hipótesis. Una investigación que abarcó a 7 000 libertos en Salvador entre 1684 y 1785, por ejemplo, muestra que la edad promedio de los beneficiados era de tan sólo 15 años.

Esto no quiere decir que haya que hacer a un lado las consideraciones económicas entre las causas del elevado número de manumisiones. Los estudios existentes sugieren que había más manumisiones en las zonas en decadencia que en las zonas donde la economía estaba en expansión. Pero las razones afectivas pueden haber pesado de manera importante en los actos de manumisión, pues es posible constatar una nítida mayoría de mujeres liberadas. En la ciudad de Río de Janeiro, entre 1807 y 1831, las mujeres constituyeron 64% de los manumitidos. Se trata de un porcentaje bastante alto si se tiene en cuenta que, entre la población esclava, la proporción de hombres era muy superior a la de mujeres.

Por último, hay que recordar que la condición de los libertos no era idéntica a la de la población libre. Hasta 1865 el antiguo propietario podía revocar la manumisión, ya fuera pagada o gratuita, mediante el simple alegato de ingratitud. Además, en el papel o en la práctica, la manumisión acarreaba, en muchos casos, una serie de restricciones, sobre todo la obligación de prestar servicios al amo. De hecho, la legislación posterior a 1870 incorporó esta costumbre al proclamar la libertad de niños y ancianos bajo ciertas condiciones.

Aunque hubo casos de libertos involucrados en actos de rebeldía de la población negra, su categoría ocupó una posición intermedia entre la de los libres y la de los esclavos, acercándose socialmente a la de los blancos pobres. Las manumisiones suavizaron, pues, el choque racial directo. Además, en determinadas condiciones, cuando había una fuerte presencia de población negra, los libertos tuvieron un papel importante en la preservación de las comunidades. El caso más típico es el de Bahía, donde los libertos, en el siglo XIX, aseguraron la existencia de una comunidad en que las culturas africanas se combinaron con las europeas.

El republicanismo

Desde finales del siglo XVIII el republicanismo estuvo presente en los dos movimientos por la independencia, asociado con ideas de revolución y de reforma de la sociedad. Ciertos miembros del movimiento republicano, nacido en 1870 en Río de Janeiro, heredaron esta postura. Hombres como Lopes Trovão, signatario del manifiesto republicano de 1870, y Silva Jardim —éste ya durante los últimos años del Imperio— defendieron la idea de una revolución popular como vía para alcanzar la república. La gran mayoría seguía la opinión de Quintino Bocaiuva, partidario de una transición pacífica de un régimen al otro, de preferencia después de que muriera don Pedro II.

Además de los militares, la base social del republicanismo urbano estaba conformada sobre todo por profesionales liberales y periodistas, grupo que surgió gracias al desarrollo de las ciudades y la expansión de la educación. Los republicanos de Río de Janeiro asociaban la república con una mayor representación política de los ciudadanos, con los derechos y garantías individuales, con la federación y con el fin del régimen esclavista.

La novedad de la década de 1870 fue el surgimiento de un movimiento republicano conservador en las provincias, cuyo mayor representante fue el Partido Republicano Paulista (PRP), fundado en 1873. Los cuadros del PRP provenían mayormente de la burguesía cafetalera. El punto fundamental del programa del partido era la defensa de la federación, que aseguraría una plena autonomía a las provincias. Aunque uno de los grandes inspiradores del federalismo —Tavares Bastos— abrazaba la idea de una monarquía federativa, los republicanos de São Paulo se convencieron de que el imperio era incompatible con la federación. Ésta, entre otras cosas, implicaría la

descentralización de los ingresos, así como el control de la política bancaria y migratoria por parte de las provincias.

El republicanismo paulista se distinguía del de Río de Janeiro porque hacía un mayor énfasis en la idea de la federación, le interesaba menos la defensa de las libertades civiles y políticas y enfrentaba de otro modo el problema de la esclavitud. Teniendo en cuenta su composición social, resulta evidente por qué el PRP evitó asumir una posición clara en relación con la esclavitud, o siquiera discutir el problema hasta las vísperas de la abolición. Entre otros puntos, los reclamos que hacían los republicanos paulistas al Gobierno central tenían que ver con la baja representación de São Paulo en el Parlamento y en los órganos ejecutivos. También se quejaban de la forma en que se aplicaban los ingresos del Gobierno. Subrayaban que São Paulo, con su economía en expansión, hacía aportaciones cada vez mayores al Imperio sin recibir beneficios proporcionales.

El movimiento republicano de Río de Janeiro, muy activo en el terreno de la propaganda y la edición de periódicos, no pudo organizarse en un partido político. Los partidos republicanos más significativos hasta el fin del Imperio fueron los de São Paulo y Minas Gerais, sobre todo el primero. En 1884 el PRP, aliándose con los conservadores que entonces estaban en la oposición, eligió para la Cámara de Diputados a Prudente de Morais y a Campos Sales, que más tarde serían los dos primeros presidentes civiles de la república. Según estimaciones de 1889, una cuarta parte del electorado paulista (3 600 personas) era republicana, lo que la situaba por detrás de los liberales (6 600) y de los conservadores (3 900).

En la década de 1870 se tensaron las relaciones entre Estado e Iglesia. La unión entre "el trono y el altar", prevista en la Constitución de 1824, era, en sí misma, fuente especial de

conflicto. Aunque la religión católica era oficial, la propia carta magna reservaba al Estado el derecho de conceder validez a los decretos eclesiásticos o negársela en caso de considerarlos anticonstitucionales.

El origen del problema fueron los nuevos lineamientos dictados por el Vaticano a partir de 1848, durante el pontificado de Pío IX. El pontífice condenaba "las libertades modernas" y trataba de consolidar el dominio espiritual de la Iglesia en el mundo. En 1870 el poder del papa se vio reforzado cuando el Concilio Vaticano proclamó el dogma de su infalibilidad. Esta postura de la Iglesia tuvo repercusiones en varios países. En Estados Unidos, por ejemplo, coincidió con la llegada de gran número de inmigrantes católicos irlandeses. Los círculos dirigentes protestantes temían que Estados Unidos se convirtiera en un país católico. En Brasil, la política del Vaticano fomentó actitudes más rígidas por parte de los clérigos en materia de disciplina religiosa, así como una afirmación de su autonomía frente al Estado.

El conflicto surgió cuando el obispo de Olinda, don Vital, en obediencia a la determinación del papa, decidió prohibir que los masones ingresaran a las hermandades religiosas. Aunque numéricamente reducida, la masonería tenía influencia en los círculos dirigentes. El vizconde de Rio Branco, que entonces presidía el Consejo de Ministros, era masón. A raíz de estos desencuentros se trató a don Vital como "funcionario rebelde", se le apresó y se le condenó. Más tarde otro obispo fue apresado y condenado. La tempestad sólo amainó gracias a un reacomodo (1874-1875) que resultó en la sustitución del gabinete de Rio Branco, en la concesión de amnistía a los obispos y en el cese, por parte del papa, de las prohibiciones que pesaban sobre los masones.

Hasta la abdicación de don Pedro I, la participación de oficiales del Ejército en el Gobierno fue significativa. Luego fue decreciendo. La presencia de tropa en las revueltas populares posteriores a la Independencia contribuyó a que la institución fuera vista con desconfianza. Los liberales del periodo de la Regencia, con Feijó al frente, redujeron los efectivos militares y crearon la Guardia Nacional. Argumentaban que un gran ejército permanente conduciría al surgimiento de pequeños Bonapartes, como ya sucedía en Argentina y México.

La Marina, en cambio, fue objeto de muchas atenciones; se le consideraba una corporación noble, entre otras cosas porque, durante los primeros años que sucedieron a la Independencia, había incorporado oficiales ingleses.

Pese a la desigualdad del trato, la escala de oficiales del Ejército tuvo un corte elitista hasta 1850. En las décadas siguientes su composición social cambió bastante. La baja remuneración, las malas condiciones de vida y la lentitud con que se obtenían los ascensos tendieron a alejar a los hijos de las familias pudientes de la carrera militar. El número de hijos de militares o de burócratas como aspirantes al cuerpo de oficiales aumentó.

En términos regionales, la mayoría de los nuevos oficiales era originaria de municipios del interior del nordeste y de Rio Grande do Sul. Por lo general, los del nordeste provenían de familias tradicionales en decadencia que no podían pagar los estudios de sus hijos. En Rio Grande do Sul, zona fronteriza que concentraba contingentes militares, la carrera castrense se consideraba relativamente prestigiosa. Prueba de ello es que en 1853 el Gobierno creó en esa provincia una academia militar para oficiales de infantería y caballería.

El cambio en la composición social del Ejército fomentó el distanciamiento de los oficiales de la élite política del Imperio,

sobre todo de los bachilleres formados en las facultades de derecho. Los legistas, como los llamaban los militares, encarnaban, desde la óptica castrense, la cultura inútil y la corrupción electoral, e impedían el desarrollo del país con su maraña de leyes y reglamentos.

En la década de 1850, en un periodo de prosperidad, el Gobierno tomó algunas medidas para reformar el Ejército. Una ley de septiembre de aquel año modificó la estructura del cuerpo de oficiales y concedió a aquellos que poseían diplomas de la Academia Militar privilegios especiales, sobre todo en los sectores técnicos de la corporación. La Academia Militar, que existía desde 1810 en la capital, incluía un programa de ingeniería civil que se combinaba con otro de rigurosa instrucción marcial. En 1858 el ministro de Guerra separó estos dos cursos y transfirió el de preparación militar a Praia Vermelha, sitio en que permaneció hasta 1904.

Ya desde antes de la Guerra de Paraguay los oficiales criticaban al gobierno del Imperio. Sus críticas se referían a cuestiones específicas de la corporación, como el criterio con que se concedían los ascensos o el derecho a casarse sin pedir el consentimiento del ministro de Guerra, y también a aspectos más generales que tenían que ver con la vida del país. Los jóvenes militares eran partidarios de un mayor énfasis en la educación y la industria, de la construcción de ferrocarriles y del fin de la esclavitud.

Después de la guerra y con la reorganización de la Academia Militar, el Ejército se fortaleció como corporación. En sus intervenciones en la arena política muchos oficiales empezaron a expresarse sólo como militares, y no como militares-políticos. Los ejemplos más notables de esta diferencia generacional son el duque de Caxias y Floriano Peixoto. Caxias era sin lugar a dudas una figura de gran prestigio dentro del Ejército, pero también

uno de los líderes del Partido Conservador, tanto que, antes de la Guerra de Paraguay, llegó a la presidencia del Consejo de Ministros. Floriano, pese a sus conexiones con la cúpula del Partido Liberal, que lo ayudaron a ascender en su carrera, se expresaba como militar y ciudadano. Su lealtad básica estaba con el Ejército.

La Escuela Militar de Praia Vermelha, concebida en un principio como institución de educación castrense, se convirtió, en la práctica, en un centro de estudios de matemáticas, filosofía y letras. Fue allí donde los ataques al Gobierno empezaron a tener como objetivo el propio régimen monárquico. La idea de la república iba ganando terreno. Para ello fue muy importante la influencia del positivismo, que gozó de creciente aceptación a partir de 1872, cuando Benjamin Constant comenzó a impartir clases en la escuela.

La doctrina comtiana tuvo gran influencia en América Latina, en países como México, Chile, Argentina y Brasil, pues parecía dar una respuesta científica y ordenada a los atolladeros políticos y sociales a los que había conducido el liberalismo oligárquico. Al otorgar valor a las innovaciones técnicas y a la industria, esta doctrina resultó particularmente atractiva para las élites emergentes, que criticaban el conocimiento formal de los bachilleres en derecho.

En el caso de Brasil, el positivismo contenía una fórmula de modernización conservadora, centrada en la acción del Estado y en la neutralización de los políticos tradicionales, que tuvo fuerte resonancia en los medios militares. En estos medios, la influencia del positivismo rara vez implicó la aceptación ortodoxa de sus principios. Por lo general, los oficiales del Ejército absorbieron los aspectos que más coincidían con sus propias percepciones. La dictadura republicana asumió la forma

de la defensa de un Ejecutivo fuerte e intervencionista, capaz de modernizar al país, o simplemente de la dictadura militar.

Además de la abolición de la esclavitud, una de las medidas más importantes del Imperio en la década de 1880 fue la aprobación de una reforma electoral conocida como Ley Saraiva, en enero de 1881. Esta reforma estableció el voto directo para las elecciones legislativas, lo que terminó con la distinción limitante entre votantes y electores. Siguió exigiéndose un nivel mínimo de ingresos —el censo económico— y se introdujo, a partir de 1882 un censo literario, esto es: el voto se restringiría a los alfabetizados. El derecho al voto se extendió a los no católicos, a los brasileños por naturalización y a los libertos.

Justificada como un instrumento que moralizaría las elecciones y ampliaría la ciudadanía, la Ley Saraiva se aplicó con éxito en los comicios de 1881. Parecía haberse acabado el tiempo de las unanimidades, pues el Partido Conservador, aunque quedó en minoría, contó con una expresiva bancada de 47 diputados. Pero en los años siguientes volvieron los viejos vicios, los fraudes y la presión sobre los electores. Así, la esperanza de alcanzar la "verdad electoral", anhelada por los medios urbanos y letrados del imperio, terminó por esfumarse. Al mismo tiempo es necesario notar que, al prohibir el voto de los analfabetos en un país de analfabetos, la Ley Saraiva redujo drásticamente el cuerpo electoral. En las elecciones de 1872, por ejemplo, los votantes representaban 10.8% de la población del país. El porcentaje se desplomó a un 0.8% en las elecciones de 1886.

A partir de 1883 surgieron varios desacuerdos entre el Gobierno, los diputados y los oficiales del Ejército. Uno de los más expresivos tuvo lugar cuando, en 1884, el teniente coronel Sena Madureira, oficial de prestigio y amigo del emperador, invitó a

uno de los balseros que habían participado en la lucha por la liberación de los esclavos en Ceará a visitar la escuela de tiro de Río de Janeiro, que estaba bajo su comando. Transferido a Rio Grande do Sul, Sena Madureira publicó en el periódico republicano *A Federação* un artículo en que narraba los episodios de Ceará.

Además de Sena Madureira, había otros casos que generaban polémica en los periódicos. El ministro de Guerra firmó entonces una orden que prohibía a los militares publicar en la prensa discusiones sobre cuestiones políticas o de la corporación.

Los oficiales asentados en Rio Grande do Sul celebraron una concurrida reunión en Porto Alegre para protestar contra la prohibición del ministro. Deodoro da Fonseca, que entonces era presidente de la provincia de Rio Grande do Sul, se negó a castigar a los oficiales y, en consecuencia, le ordenaron volver a Río de Janeiro. Al final se presentó una fórmula conciliadora, favorable a los militares. La prohibición se revocó y el Congreso censuró al gabinete.

En ese tiempo, en junio de 1887, los oficiales fundaron una asociación permanente para defender sus intereses: el Club Militar, y eligieron a Deodoro como su presidente. El mismo mes en que se fundó el club, Deodoro solicitó al ministro de Guerra que ya no se obligara al Ejército a cazar esclavos fugitivos. Pese a que el ministro se negó a atender a la petición, esto empezó a suceder en la práctica.

La insatisfacción militar y la propaganda republicana iban en aumento cuando, en junio de 1889, el emperador invitó a un liberal —el vizconde de Ouro Preto— a conformar un nuevo gabinete. Ouro Preto propuso una serie de reformas, pero contribuyó a inflamar los ánimos al nombrar a un enemigo personal de Deodoro para la presidencia de Rio Grande do Sul.

Desde 1887 los militares y algunos líderes republicanos paulistas y *gaúchos* habían establecido contactos esporádicos con el objetivo de acabar con la monarquía. El 11 de noviembre de 1889, figuras civiles y militares como Rui Barbosa, Benjamin Constant, Aristides Lobo y Quintino Bocaiuva se reunieron con el mariscal Deodoro y trataron de convencerlo de que dirigiera un movimiento contra el régimen. Una serie de rumores difundidos por los jóvenes militares, que hablaban de la prisión de Deodoro, de la reducción de efectivos e incluso de la extinción del Ejército, hizo que Deodoro se decidiera, por lo menos, a derribar a Ouro Preto.

Durante las primeras horas de la mañana del 15 de noviembre de 1889, Deodoro asumió el mando de la tropa y marchó hacia el Ministerio de Guerra, donde se encontraban los líderes monárquicos. Sobrevino entonces un episodio confuso sobre el cual existen múltiples versiones: no se sabe a ciencia cierta si aquel día Deodoro proclamó la república o si sólo consideró que el gabinete había caído. Sea como fuere, al día siguiente el derrumbe de la monarquía era un hecho consumado. Unos días más tarde la familia real partía rumbo al exilio.

La caída de la monarquía

El fin del régimen monárquico se debió a una serie de factores cuyo peso fue disímil. Hay que poner en relieve, en primer lugar, dos fuerzas de características muy distintas: el Ejército y un sector muy expresivo de la burguesía cafetalera de São Paulo, organizado políticamente en el PRP. El episodio del 15 de noviembre surgió por iniciativa casi exclusiva del Ejército: éste dio el pequeño pero decisivo empujón que precipitó la caída de la monarquía. Por otro lado, la burguesía cafetalera permitiría a

la república contar con una base social estable que ni el Ejército ni la población urbana de Río de Janeiro por sí mismos podrían proporcionarle.

También hay que considerar los factores humanos. El emperador sufría diabetes; su enfermedad lo anuló como ese importante elemento de estabilidad que había estado al centro de las disputas. Con su prestigio personal, sumado al prestigio del trono, Pedro II había podido amortiguar los reclamos militares. Su ausencia hizo que los oficiales del Ejército se enfrentaran directamente con la élite imperial, a la que veían con muchas reservas. Esta élite, por su parte, siguió creyendo en el predominio de las autoridades civiles, que, entre muchos otros ejemplos, se dejaba ver en el nombramiento de ciudadanos para cargos en el Ministerio de Guerra en un momento en que no era prudente que se adoptara semejante proceder.

Otro problema era la falta de una perspectiva alentadora de un tercer reinado. Con la muerte de don Pedro subiría al trono la princesa Isabel, cuyo marido —el francés conde D'Eu— era una figura, por decir lo menos, muy discutible.

En el pasado solía atribuirse un papel importante en la caída de la monarquía a otros dos factores: la pugna entre la Iglesia y el Estado, y la abolición. La primera ayudó en cierta medida a desgastar al régimen, pero no hay que exagerar su peso. El derrumbe de la monarquía no fue más que una lucha entre élites divergentes: la Iglesia no tenía una fuerte influencia ni entre los monárquicos ni entre los republicanos; al contrario, los positivistas, fueran ortodoxos o no, se distanciaban de ella.

En cuanto a la abolición, las iniciativas del emperador para extinguir gradualmente el sistema esclavista provocaron un fuerte resentimiento entre los propietarios rurales, y no sólo entre ellos. Los hacendados cafetaleros del valle del Paraíba se desilusionaron del Imperio, pues esperaban que éste defendiera

sus intereses. Esto hizo que el régimen perdiera su principal base social de apoyo. Pero, en lo que respecta al fin del Imperio, el episodio de la abolición no tuvo, en sí mismo, mayor significado. Para 1888 los barones fluminenses, únicos adversarios frontales de la abolición, ya no constituían una fuerza social de peso.

Economía y demografía

Durante el periodo que estamos considerando se llevaron a cabo —en 1872 y 1890— los dos primeros censos generales de la población. A pesar de todos sus defectos, estos censos empezaron a presentar cifras más confiables que las que había habido hasta entonces. De una población que en 1819 se calculaba en 4.6 millones de personas, incluyendo a 800 000 indígenas, se llegó a 9.9 millones en 1872 y a 14.3 en 1890. De acuerdo con los datos arrojados por el censo de 1872, Minas Gerais seguía siendo la provincia más poblada, con aproximadamente 2.1 millones de habitantes, seguida por Bahía, con 1.38 millones. Pernambuco y São Paulo tenían poblaciones muy semejantes, de cerca de 840 000 habitantes. Los cambios más relevantes fueron el crecimiento poblacional de São Paulo y la caída de la provincia de Río de Janeiro, que pasó del segundo al quinto lugar.

Desde el punto de vista racial, los mulatos conformaban aproximadamente 42% de la población, los blancos 38% y los negros 20%. Creció así la proporción de blancos, que para 1819 se estimaba en un 30%. Esto tuvo que ver con la llegada de inmigrantes. Poco más de 300 000 ingresaron al país entre 1846 y 1875, en un promedio de 10 000 al año. La mitad eran portugueses.

Los primeros datos generales sobre educación ponen en evidencia las enormes carencias de este sector. En 1872 el índice

de analfabetismo llegaba a 99.9% entre los esclavos y casi 80% entre la población libre, aunque superaba el 86% contando sólo a las mujeres. Se trata de porcentajes bastante elevados, aun considerando que se refieren al total de la población, incluyendo niños en sus primeros años de vida. El censo reveló también que únicamente 17% de la población de entre 6 y 15 años asistía a la escuela. Sólo había 12 000 alumnos inscritos en colegios de nivel medio. Sin embargo, se calcula que el número de personas con educación superior en el país ascendía a 8 000.

Un abismo separaba, pues, a la élite letrada de la gran masa de analfabetos y gente con una educación rudimentaria. Las escuelas de cirugía y otras ramas de la medicina surgieron en Bahía y en Río de Janeiro con la llegada de don Juan VI. Estas escuelas, así como la de ingeniería, se vincularon originalmente con instituciones militares. El paso más importante en cuanto a la formación de la élite fue la fundación de las escuelas de derecho en São Paulo y en Olinda/Recife; ambas se crearon el 11 de agosto de 1827. De ellas egresaron los bachilleres que, en su calidad de magistrados y abogados, conformaron el núcleo de los cuadros políticos del Imperio.

Brasil seguía siendo un país esencialmente campesino. El 80% de las personas activas en 1872 se dedicaba al sector agrícola, 13% a los servicios y 7% a la industria. Observemos que en la categoría de "servicios" más de la mitad eran empleados domésticos. Resulta claro que la industria aún era incipiente, sobre todo si se considera que ese rubro incluía a la minería.

Con sus 522 000 habitantes en 1890, Río de Janeiro era el único gran centro urbano. En la capital del Imperio se concentraban la vida política, las diversiones y gran número de inversiones en transportes, iluminación y embellecimiento de la ciudad. La seguían Salvador, Recife, Belém y sólo después São Paulo, con la modesta cifra de 65 000 habitantes. Pero esta

última ciudad, que se convertía en el centro de los negocios cafetaleros y atraía cada vez más inmigrantes, había iniciado un proceso de expansión de largos alcances, al crecer a una tasa geométrica anual de 3% entre 1872 y 1866 y de 8% entre 1886 y 1890.

Hacia 1870 se consolidaron las tendencias de desarrollo económico en el centro-sur y de decadencia en el nordeste. Esto se debió, en gran medida, a diversos estímulos a la producción agrícola que provenían del exterior. El número de habitantes y los ingresos de los países consumidores de café crecieron enormemente. La población de Estados Unidos —el principal país consumidor— casi se triplicó entre 1850 y 1900, y la costumbre de tomar café se extendió. Esto, sumado a otras circunstancias, permitió que los productores absorbieran la fluctuación de los precios; en otras palabras, ante la expansión de la demanda pudieron enfrentar eventuales pérdidas en aquellos periodos en los que el precio del café caía en el mercado internacional.

No fue el mismo el destino de la principal actividad económica del nordeste, aunque siguió siendo relevante. Luego de que lo superara el café, el azúcar se mantuvo en segundo lugar en la agenda de exportaciones brasileñas, con excepción del periodo de 1861 a 1870, cuando lo aventajó el algodón.

Pero la situación del azúcar brasileño en el mercado mundial no era fácil. El producto tenía dos fuertes rivales: el azúcar de remolacha, que a mediados del siglo XIX empezó a producirse a gran escala en Alemania, y el que provenía del Caribe, sobre todo de Cuba. A diferencia de Brasil, la isla enfrentaba problemas de mano de obra. Pero la fertilidad de las tierras y el capital disponible —español y más tarde estadounidense— pusieron a Cuba en una posición de liderazgo no sólo en términos de producción, sino también en cuanto a la modernización de la industria azucarera. Otro factor por

considerar es que Cuba estaba más cerca de los centros consumidores. Hacia 1860, 70% de los ingenios cubanos usaba máquinas de vapor, mientras que en Pernambuco sólo 2% utilizaba esta tecnología.

En el nordeste brasileño los esfuerzos de modernización, con apoyo gubernamental, fueron lentos, y sus resultados mucho más limitados. No es de sorprender, pues, que hacia 1875 la participación de Brasil en el mercado mundial del azúcar cayera del tradicional 10% a un 5 por ciento.

El cultivo de algodón se fue extendiendo, desde el periodo colonial, por las provincias del norte y del nordeste, concentrándose en Pernambuco, Maranhão, Alagoas y Paraíba. Lo producían pequeños y medianos campesinos que lo combinaban con el cultivo de alimentos destinados al autoconsumo y a la venta en los mercados locales.

Desde principios del siglo XIX la competencia del algodón estadounidense empezó a desplazar a la producción brasileña en el principal mercado importador: la industria textil inglesa. La guerra civil de Estados Unidos (1861-1865) dio un súbito impulso a las exportaciones brasileñas, tanto que el algodón figuró en segundo lugar en la agenda de exportaciones para el decenio 1861-1870. Pero se trató de una situación efímera y luego sobrevino el declive. El siguiente repunte de la producción algodonera tendría que ver con el mercado interno y con la expansión de la industria textil en el país.

En la región amazónica la extracción de caucho adquirió importancia y atrajo a la dispersa población local y a los trabajadores disponibles del nordeste. La demanda mundial del producto nació a partir de 1839, cuando Charles Goodyear perfeccionó el proceso de vulcanización. Gracias a este proceso el caucho se volvió resistente al calor y al frío, y empezó a

utilizarse en la fabricación de diversos productos, como correas, mangueras, zapatos e impermeables.

Hasta 1850 las exportaciones brasileñas de caucho fueron insignificantes. Con el paso de los años crecieron, hasta figurar en la década de 1880 en tercer lugar, con un 8% del valor de las exportaciones, porcentaje muy cercano al del azúcar (10%). La gran expansión —el *boom* del caucho— se inició en esa época. No sólo aumentaron las exportaciones, sino que se formó un polo económico regional. Hasta entonces los negocios se habían concentrado en manos de un pequeño grupo de intermediarios portugueses y de algunas casas exportadoras extranjeras. Con la expansión surgió una red bancaria, creció el número de intermediarios y de casas importadoras de bienes de consumo, y todo ello resultó en el crecimiento de Belém y Manaos. Lo único que no mejoró fue la suerte del trabajador y del pequeño cauchero.

Aunque Estados Unidos era el principal importador de café brasileño, hasta la década de 1870 Inglaterra figuró en primer lugar entre los países destino de las mercancías que exportaba Brasil. Entre 1870 y 1873, correspondió a Inglaterra casi 40% del valor de las exportaciones brasileñas, seguida por Estados Unidos, con 29%. Tomando como referencia esos mismos años, podemos ver que Brasil importaba bienes predominantemente de Inglaterra (53% del valor total), con Francia en un lejano segundo lugar (12%).

Al igual que en la Colonia, no toda la producción nacional se destinaba a la exportación. Varias regiones se dedicaron a la cría de ganado y otros animales, así como a la producción de alimentos, tanto para el autoconsumo como para su venta en el mercado interno. Dos de ellas sobresalieron en este sentido: Minas Gerais y el sur del país, sobre todo Rio Grande do Sul.

El territorio de Minas Gerais se dividía en varias áreas muy distintas y precariamente integradas por vías de comunicación deficientes. La Zona de la Mata producía café y estaba ligada a Río de Janeiro. El valle del río São Francisco era una región ganadera que guardaba relaciones más estrechas con Bahía y Pernambuco que con el resto de la provincia. El sur de Minas estaba ligado a São Paulo y a la capital del Imperio.

Pese al crecimiento de su producción cafetalera, que se exportaba a través de Río de Janeiro, Minas Gerais no se vinculaba predominantemente con el mercado exterior. La base de su economía era la cría de animales y el cultivo de alimentos. Al parecer, gran parte de los alimentos vegetales, como el maíz, el frijol y la harina de yuca, se consumía en la misma provincia, mientras que el ganado bovino, porcino y sus derivados eran los productos que más se exportaban a otras regiones.

Hasta la abolición, Minas Gerais fue la provincia más poblada del país, con el mayor número de cautivos, aunque en términos proporcionales la provincia de Río de Janeiro la superaba. La expansión del café absorbió gran cantidad de esclavos, pero la mayor concentración permaneció en las zonas no cafetaleras de Minas. De este modo se preservó un rasgo que se remontaba al periodo colonial, esto es, la combinación de relaciones esclavistas con una economía que estaba dirigida sobre todo al mercado interno.

En el sur del país la producción que se encauzaba a este mercado tenía que ver con el sector tradicional de los ganaderos y con la llegada de inmigrantes. El proceso de atracción de inmigrantes comenzó allí más pronto que en São Paulo y tuvo unas características muy distintas. Mientras en São Paulo el objetivo era abastecer de trabajadores las grandes plantaciones, en el sur la inmigración tenía que ver con planes de colonización basados en la pequeña propiedad.

Poco antes de la Independencia, José Bonifácio y don Pedro, por motivos socioeconómicos y militares, emprendieron los primeros esfuerzos por atraer colonos alemanes al sur, especialmente a Santa Catarina y Rio Grande do Sul. José Bonifácio quería fomentar la formación de una clase media rural en Brasil.

Cerca de Porto Alegre surgió la colonia más exitosa de todas: la colonia alemana de São Leopoldo (1824). La colonización alemana se extendió por el nordeste de Santa Catarina, donde surgieron las colonias de Blumenau (1850), Brusque y Dona Francisca, hoy Joinville.

Los inmigrantes se dedicaron a la cría de cerdos, gallinas, vacas lecheras, papas, verduras y frutas que hasta entonces no existían en Brasil, como la manzana. También tuvieron un papel importante en la instalación de talleres y establecimientos industriales. Así surgieron, aunque al principio modestamente, la industria de la manteca, de los lácteos, de las conservas de carne, de la cerveza y de otras bebidas.

Gracias sobre todo a ese flujo hacia el sur, los alemanes figuraron en segundo lugar entre los extranjeros que inmigraban a Brasil entre 1846 y 1875. Pero a partir de 1860 el flujo de alemanes empezó a disminuir. Esto se debió a una serie de razones, entre las que se cuenta el mal trato que recibieron los colonos, especialmente los suizos y alemanes que formaron parte del experimento de aparcería del senador Vergueiro en São Paulo. En 1871, el Imperio alemán unificado dejó de apoyar la inmigración a Brasil. Los datos referentes a Rio Grande do Sul muestran la diferencia entre dos épocas: los alemanes representaron alrededor de 93% de los inmigrantes recibidos entre 1824 y 1870, y sólo 15% de los que llegaron entre 1889 y 1914.

Después de 1870 el Gobierno imperial fomentó la llegada de colonos italianos a Rio Grande do Sul. Pequeños campesinos procedentes en su mayoría del Tirol, del Véneto y de la Lombardía establecieron una serie de colonias, de entre las cuales Caxias fue la más importante. La actividad económica de los italianos, además de compartir algunos rasgos con la de los alemanes, se especializó en el cultivo de la uva y en la producción de vino. Entre 1882 y 1889, de un total de 41 000 inmigrantes llegados a Rio Grande do Sul, 34 000 eran italianos.

La única semejanza entre la economía de los inmigrantes y la de los ganaderos era que ambos producían para el mercado interno. Por lo demás, todo era distinto, desde la época en que ocuparon la tierra hasta la estructura de la propiedad. Los estancieros se concentraban donde se concentran aún hoy, en la Campanha Gaúcha y en territorio uruguayo, y fueron propietarios de grandes extensiones de tierra. Del ganado utilizaban el cuero, procesado en curtiembres, y, en especial, la carne. Ésta se consumía localmente o se convertía en charque en las charqueadoras establecidas en la zona de la costa. El destino del charque era alimentar a la población pobre y esclavizada del centro-sur. Los criadores y charqueadores *gaúchos* producían, pues, esencialmente para el mercado interno. Su constante dolor de cabeza era su rivalidad con la carne del Río de la Plata, capaz de competir en mejores condiciones dentro del propio mercado brasileño.

La escasa integración territorial y económica del país, que se remontaba a los tiempos de la Colonia, persistió en el Brasil independiente a pesar del relativo progreso de los sistemas de transporte. Al igual que durante el periodo colonial, la administración imperial centralizada se hacía sentir en las regiones cercanas a la corte y en algunas capitales de provincia, pero se difuminaba en las zonas más lejanas. E incluso al interior

de cada provincia había áreas diversas y dispersas. En su organización política, la república asumió esta marca regional, que fue la base del régimen federativo.

---

[1] Palabra de origen tupí que se utilizó para referirse a los portugueses (N. de la T.).

[2] Esto es, "hecha para los ojos de los ingleses" (N. de la T.).

[3] Conocida en países de habla hispana como la Guerra de la Triple Alianza, y en Paraguay como Guerra contra la Triple Alianza o Guerra Grande, se respeta aquí el nombre que le dan los brasileños a ese suceso histórico, incluyendo al autor, porque implica un punto de vista (N. de la T.).

3. LA PRIMERA REPÚBLICA (1889-1930)

Los años de consolidación

Como episodio, el paso del Imperio a la República fue casi un paseo. En compensación, los años que siguieron al 15 de noviembre estuvieron marcados por una gran incertidumbre. Los varios grupos que se disputaban el poder tenían intereses distintos y formas divergentes de concebir la organización de la república. Los representantes políticos de la clase dominante de las principales provincias —São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul— eran partidarios de la república federativa, que habría de asegurar una considerable autonomía a las unidades regionales.

No obstante, se distinguían en otros aspectos relativos a la organización del poder. El Partido Republicano Paulista (PRP) y los políticos de Minas Gerais apoyaban el modelo liberal. Los republicanos *gaúchos* eran positivistas. No está claro por qué, bajo el mando de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul se convirtió en la región donde más influyente fue el positivismo. Quizá tuvieron que ver la tradición militar de la zona y el hecho de que los republicanos allí eran una minoría en busca de una doctrina que pudiera darles una fuerte cohesión. Tenían que imponerse a una corriente política tradicional, representada en el Imperio por el Partido Liberal.

Otro sector que hay que considerar es el militar. Los militares tuvieron bastante influencia durante los primeros años de la República. El mariscal Deodoro da Fonseca se convirtió en el jefe del Gobierno provisional y decenas de oficiales fueron elegidos

como miembros del Congreso Constituyente. Pero no conformaron un grupo homogéneo. Había rivalidades entre el Ejército y la Marina: mientras el primero había sido el artífice del nuevo régimen, se veía a la segunda como una institución ligada a la monarquía.

También había diferencias personales y conceptuales que separaban a los partidarios de Deodoro da Fonseca de los de Floriano Peixoto. En torno al viejo mariscal se reunían varios veteranos de la Guerra de Paraguay. Muchos de esos oficiales no habían estudiado en la Escuela Militar y estaban lejos de las ideas positivistas. Habían ayudado a acabar con la monarquía "para salvar el honor del Ejército" y no tenían una visión muy elaborada de la república, sólo creían que, en ella, el Ejército debería tener un papel más importante que el que había desempeñado en el Imperio.

Aunque Floriano no era positivista y también había participado en la Guerra de Paraguay, los oficiales que lo rodeaban eran distintos. Se trataba de jóvenes que habían estudiado en la Escuela Militar y recibido la influencia del positivismo. Concebían su inserción en la sociedad como soldados-ciudadanos con la misión de darle un sentido al destino del país. En la república debía haber orden y también progreso. Por progreso se entendía la modernización de la sociedad mediante la expansión del conocimiento técnico, de la industrialización y de las comunicaciones.

Pese a su profunda rivalidad en el interior del Ejército, estos grupos se acercaban en un punto fundamental. No expresaban los intereses de una clase social, como sucedía con los defensores de la república liberal. Eran, ante todo, portavoces de una institución que formaba parte del aparato del Estado. Por la naturaleza de sus funciones y por el tipo de cultura que se desarrollaba dentro de la institución, los oficiales del Ejército,

positivistas o no, eran adversarios del liberalismo. Para ellos la república debía estar dotada de un Poder Ejecutivo fuerte o entonces pasar por una fase más o menos prolongada de dictadura. La autonomía de las provincias les parecía sospechosa, no sólo porque serviría a los intereses de los grandes propietarios rurales, sino porque implicaba el riesgo de que el país se fragmentara.

Temiendo que una semidictadura bajo el mando personal de Deodoro se prolongara, los partidarios de la república liberal se apresuraron a asegurar que se convocara una Asamblea Constituyente. El nuevo régimen había sido recibido con desconfianza en Europa y era necesario dar al país una forma constitucional para garantizar el reconocimiento de la república y la obtención de créditos en el extranjero.

La primera Constitución republicana, promulgada en febrero de 1891, se inspiró en el modelo estadounidense y estableció la república federativa liberal. Los estados —nombre que se les dio en adelante a lo que antes habían sido las provincias— tenían la autorización implícita de ejercer diversas atribuciones, como contraer préstamos en el extranjero y organizar sus propias fuerzas militares: las fuerzas estatales. Estas atribuciones interesaban a los grandes estados, sobre todo a São Paulo. La posibilidad de contraer préstamos en el extranjero sería vital para que el Gobierno paulista pudiera concretar sus planes de valorización del café.

Una atribución importante para los estados exportadores —y, por lo tanto, para São Paulo— fue la de decretar impuestos sobre la exportación de sus mercancías. De este modo se aseguraban una considerable fuente de ingreso que hacía posible el ejercicio de la autonomía. Los estados también recibieron la facultad de organizar su propio sistema de justicia.

El Gobierno federal (la Unión) no quedó destituido de poderes. Tanto los militares como los paulistas combatieron la tendencia ultrafederalista, apoyada por los positivistas *gaúchos*. La fragmentación del poder central era un riesgo que, por diversas razones, esos sectores no querían correr. La Unión se quedó con los impuestos de las importaciones, el derecho de crear bancos emisores de moneda, de organizar las Fuerzas Armadas nacionales, etc. Conservó también la facultad de intervenir en los estados para restablecer el orden, con el fin de mantener la forma republicana federativa.

La Constitución inauguró el sistema presidencialista de gobierno. El Poder Ejecutivo, que antes correspondía al emperador, sería ejercido por un presidente de la república elegido para un periodo de cuatro años. Al igual que en el Imperio, el Legislativo se dividió entre la Cámara de Diputados y el Senado, pero el cargo de senador dejó de ser vitalicio. Los diputados se elegirían en cada estado, en un número proporcional al de sus habitantes, para un lapso de tres años. Los senadores se elegían para un periodo de nueve años en un número fijo: tres senadores por cada estado y tres por el Distrito Federal, es decir, la capital de la república.

Se estableció el sistema de voto directo y universal, y se suprimió el censo económico. Se consideró electores a todos los ciudadanos mayores de 21 años, con excepción de ciertas categorías, como los analfabetos, los mendigos y los soldados rasos. La Constitución no hacía referencia a las mujeres, pero se entendía implícitamente que no podían votar. De manera excepcional los primeros presidente y vicepresidente de la república serían elegidos mediante el voto indirecto de la Asamblea Constituyente, convertida en Congreso ordinario.

El texto constitucional estableció el derecho de los brasileños y extranjeros residentes en el país a la libertad, la seguridad

individual y la propiedad. Se extinguió la pena de muerte, que de hecho se ejerció rara vez en el Imperio. Se separó al Estado de la Iglesia. Dejó, pues, de haber una religión oficial en Brasil. Funciones importantes que hasta entonces había monopolizado la Iglesia católica se atribuyeron al Estado. La república únicamente reconocería el matrimonio civil, y los cementerios pasaron a manos de las administraciones municipales. En ellos habría libertad de culto para todas las creencias religiosas. Una ley de 1893 remató estos preceptos constitucionales con la creación de un registro civil para el nacimiento y la muerte de las personas. Estas medidas reflejaban la convicción laica de los dirigentes republicanos, la necesidad de zanjar los conflictos entre el Estado y la Iglesia, y el objetivo de facilitar la integración de los inmigrantes alemanes, que en su mayoría eran luteranos. Otra medida que buscaba la integración de los inmigrantes fue la que se conoce como "gran naturalización". A través de ella se convirtieron en ciudadanos brasileños todos aquellos extranjeros que, estando en Brasil el 15 de noviembre de 1889, no declararon, dentro de los seis meses que siguieron a la entrada en vigor de la Constitución, el deseo de conservar su nacionalidad original.

La Proclamación de la República, recibida con reservas en Inglaterra, fue saludada con entusiasmo por Argentina y acercó a Estados Unidos. El cambio de régimen ocurrió cuando en Washington tenía lugar la I Conferencia Panamericana, convocada por Estados Unidos. El representante brasileño en la conferencia fue sustituido por Salvador de Mendonça, un republicano histórico que coincidió con muchos de los puntos de vista estadounidenses.

El nítido desplazamiento del eje de la diplomacia brasileña de Londres hacia Washington se produjo cuando el barón de Rio

Branco entró al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde permaneció varios años —de 1902 a 1912— a lo largo de distintas sucesiones presidenciales. La política de Rio Branco no pretendía un alineamiento automático con Estados Unidos, pero sí un fuerte acercamiento con el objetivo de elevar a Brasil a la posición de primera potencia sudamericana.

Los tiempos de euforia en las relaciones entre Brasil y Argentina habían quedado atrás, y los dos países iniciaron una franca competencia en el terreno militar. Brasil trató de granjearse la simpatía de naciones más pequeñas, como Uruguay y Paraguay, y de acercarse a Chile para limitar la influencia argentina. Aun así, sobre todo durante los últimos años de su gestión, Rio Branco procuró establecer, sin éxito, un acuerdo estable entre Argentina, Brasil y Chile, conocido como ABC.

Durante la gestión de Rio Blanco, Brasil definió cuestiones fronterizas con varios países de América del Sur, entre ellos Uruguay, Perú y Colombia. Un conflicto armado enfrentó a los brasileños con los bolivianos en la disputa por Acre, en la zona amazónica, cuyo valor había aumentado súbitamente por la explotación del caucho. El área, considerada territorio boliviano, estaba ocupada en gran parte por migrantes brasileños. Una solución negociada desembocó en el Tratado de Petrópolis (1903), mediante el cual Bolivia reconoció la soberanía brasileña en el territorio de Acre y recibió a cambio una indemnización de 2.5 millones de libras esterlinas.

El primer año de la República estuvo marcado por una fiebre de negocios y especulación financiera que se debió a las fuertes emisiones y a la facilidad de crédito. De hecho, el medio circulante era incompatible con las nuevas realidades del trabajo asalariado y la entrada masiva de inmigrantes. Se formaron, así, muchas empresas, algunas reales y otras fantasma.

Se incrementó la especulación en las bolsas de valores y el costo de la vida se elevó de manera importante. La crisis llegó a principios de 1891, con la caída del precio de las acciones, la quiebra de establecimientos bancarios y de empresas. El valor de la moneda brasileña, que se cotizaba en relación con la libra inglesa, empezó a caer. Es posible que esto haya tenido que ver con un reflujo en la aplicación de capitales británicos en América Latina tras una grave crisis financiera en Argentina (1890).

En plena crisis el Congreso eligió a Deodoro da Fonseca como presidente de la república y a Floriano Peixoto como vicepresidente. Deodoro chocó con el Congreso, pues tenía la intención de reforzar al Poder Ejecutivo, tomando como modelo el extinto Poder Moderador. El presidente cerró el Congreso, prometiendo en un futuro convocar a nuevas elecciones y revisar la Constitución, con el fin de fortalecer el Poder Ejecutivo y reducir la autonomía de los estados. El éxito de los planes de Deodoro dependía de la unidad de las Fuerzas Armadas, que no era una realidad. Ante la reacción de los florianistas, de la oposición civil y de algunos sectores de la Marina, Deodoro renunció el 23 de noviembre de 1891. Subió al poder el vicepresidente, Floriano Peixoto.

El mariscal Floriano encarnaba una visión de la república que no se identificaba con las fuerzas económicas dominantes. Pensaba en conformar un Gobierno estable, centralizado, vagamente nacionalista, apoyado sobre todo en el Ejército y en las juventudes de las escuelas civiles y militares. Su visión chocaba con la de la llamada "república de los hacendados", liberal y descentralizada, que veía con sospechas el fortalecimiento del Ejército y las manifestaciones de la población urbana de Río de Janeiro.

Pero, contra todo pronóstico, durante la gestión de Floriano hubo un acuerdo táctico entre el presidente y el PRP. Esto se debió sobre todo al peligro —a veces real y a veces imaginario— que corría el régimen republicano. La élite política de São Paulo veía a Floriano como la figura que mejor podría asegurar la sobrevivencia de la república. Éste, a su vez, se daba cuenta de que sin el PRP no tendría la base política necesaria para gobernar.

Una de las regiones más inestables del país desde el punto de vista político durante los primeros años de la República fue Rio Grande do Sul. Entre la Proclamación de la República y la elección de Júlio de Castilhos a la presidencia del estado, en noviembre de 1893, se sucedieron 17 Gobiernos en el estado. Se enfrentaban, por un lado, los republicanos históricos, adeptos al positivismo y organizados en el Partido Republicano Riograndense (PRR) y, por el otro, los liberales. En marzo de 1892 estos últimos fundaron el Partido Federalista y aclamaron como líder a Silveira Martins, prestigiosa figura del Partido Liberal en el Imperio.

Las bases sociales de los federalistas eran, sobre todo, los estancieros de la Campanha, una zona ubicada al sur del estado, en la frontera con Uruguay. Se trataba de la élite política tradicional, cuyas raíces se remontaban al Imperio. Por su parte, la base de los republicanos era la población de la costa y de la sierra, entre la que se contaban muchos inmigrantes. Ésta conformaba una élite más reciente, que irrumpía en la política dispuesta a monopolizar el poder.

La guerra civil entre estos dos grupos, conocida como la Revolución Federalista, estalló en febrero de 1893 y no terminó sino hasta dos años y medio después, ya durante la presidencia de Prudente de Morais. La lucha fue implacable y resultó en

miles de muertos. Muchos de ellos no perecieron en combate: fueron degollados tras caer prisioneros.

Desde el inicio de los enfrentamientos, Floriano contó con el apoyo financiero de São Paulo y de sus muy organizadas milicias estatales. Al mismo tiempo, la influencia de los militares en el Gobierno fue declinando. En el Ministerio de Hacienda estaba Rodrigues Alves, miembro de una familia paulista del valle del Paraíba, antiguo consejero del Imperio convertido a la causa de la república. La presidencia de la Cámara y también la del Senado estaban en manos del PRP.

El acuerdo táctico entre Floriano y la élite política de São Paulo se terminó cuando llegó el momento de elegir a su sucesor. Con pocas bases de apoyo, entre las que se contaban los ruidosos pero poco eficaces jacobinos, Floriano no estuvo en condiciones de designar un candidato que lo sucediera. Prevaleció el nombre del paulista Prudente de Morais, elegido el 1º de marzo de 1894. El mariscal manifestó su contrariedad no asistiendo a la toma de posesión. Según las crónicas, prefirió quedarse en su modesta casa, cuidando las rosas del jardín.

Con esta sucesión la presidencia de la república dejó de estar ocupada por figuras del Ejército, con excepción del mariscal Hermes da Fonseca, elegido para el periodo de 1910 a 1914. Además, la actividad política de los militares disminuyó en general. El Club Militar, que coordinaba esta actividad, permaneció cerrado de 1896 a 1901.

Durante el gobierno de Prudente de Morais se agudizó la oposición —ya existente en tiempos de Floriano— entre la élite política de los grandes estados y el republicanismo jacobino, concentrado en Río de Janeiro. El contingente de los jacobinos estaba conformado por miembros de la baja clase media, algunos de ellos obreros y militares, que se habían visto golpeados por la carestía y por las malas condiciones de vida. Pero no sólo tenían

motivaciones materiales. Creían en una república fuerte, capaz de luchar contra las amenazas monárquicas, que veían por todas partes. Adversarios de la república liberal, asumían también la vieja tradición patriótica y antilusitana. Los "gallegos", en cuyas manos se concentraba gran parte del comercio carioca, eran blanco de violentos ataques. Los jacobinos apoyaron a Floriano e hicieron de él una bandera cuando murió, en junio de 1895.

Los años del gobierno de Prudente de Morais se vieron marcados por un acontecimiento que tuvo lugar muy lejos de Río de Janeiro, cuyas consecuencias, sin embargo, repercutieron en la política de la república. En una hacienda abandonada en el sertón norte de Bahía se había formado, en 1893, una población a la que se conocía como aldea de Canudos. Su líder era Antônio Vicente Mendes Maciel, mejor conocido como Antônio Conselheiro. Conselheiro había nacido en el Ceará, era hijo de un comerciante que pretendía hacer de él un sacerdote. Luego de enfrentar problemas económicos y complicaciones domésticas, ejerció varias profesiones: fue profesor y vendedor ambulante, hasta que se convirtió en un beato: una mezcla de sacerdote y jefe de *jagunços* (mercenarios).

Llevaba una vida nómada por el sertón, reuniendo al pueblo para construir y reconstruir iglesias, alzar muros en los cementerios y seguir una vida ascética. Se estableció después en Canudos, adonde atrajo a la población del sertón en cantidades que ascendieron a 20 000 o 30 000 habitantes.

La prédica de Conselheiro competía con la de la Iglesia; un incidente sin mayor importancia, relacionado con la obtención de madera, decidió al gobernador de Bahía a darles una lección a los "fanáticos". Sorprendentemente, las fuerzas bahianas fueron derrotadas. El gobernador acudió entonces a las tropas federales. La derrota de dos expediciones provistas de cañones y

ametralladoras, en una de las cuales resultó muerto el comandante, provocó una ola de protestas y violencia en Río de Janeiro.

Los jacobinos veían el dedo oculto de los políticos monárquicos en un episodio que en realidad tenía que ver con las condiciones de vida del sertón y el universo mental de sus habitantes. Alentaba esta fantasía el hecho de que Conselheiro pregonara la vuelta de la monarquía. La república —según él— era cosa de ateos y de masones, como lo probaban la adopción del matrimonio civil y una supuesta proscripción de la Compañía de Jesús.

En agosto de 1897 una expedición al mando del general Artur Oscar, conformada por 8 000 hombres y modernamente equipada, arrasó la aldea tras un mes y medio de lucha. Sus defensores murieron en combate y los que cayeron prisioneros fueron degollados. Para los oficiales positivistas y los políticos republicanos se trató de una lucha de la civilización contra la barbarie. En realidad hubo "barbarie" de ambos lados; aun más entre aquellos hombres instruidos que no fueron capaces de hacer por lo menos el intento de comprender a la gente del sertón.

La república liberal-oligárquica terminó de consolidarse con la sucesión de Prudente por otro paulista, Campos Sales (1898-1902). El movimiento jacobino se desmoronó luego de que algunos de sus miembros se involucraron en un intento de asesinato contra Prudente de Morais. La mayoría de los militares volvió a los cuarteles.

La élite política de los grandes estados, empezando por São Paulo, había triunfado. Pero aún faltaba crear un sistema de instrumentos que permitieran a la república oligárquica afianzarse sobre un sistema político estable. El gran papel que se

atribuyó a los estados hizo que en algunos de ellos se dieran luchas entre grupos rivales. El Gobierno federal intervenía ejerciendo sus controvertidos poderes, que estaban asentados en la Constitución. Así, el control del poder en algunos estados se hacía incierto y se reducían las posibilidades de que la Unión y los estados llegaran a un arreglo duradero. Súmese a ello el hecho de que al Poder Ejecutivo se le dificultaba imponerse ante el Legislativo, cosa que pretendía, aunque la Constitución dijera que "los poderes eran armónicos e independientes entre sí".

Basado en estas cuestiones, Campos Sales concibió un arreglo que se conoce como la "política de los gobernadores". Mediante una alteración artificiosa del Estatuto Interno de la Cámara de Diputados, se aseguró que la representación parlamentaria de cada estado correspondiera al grupo regional dominante. Al mismo tiempo, se incrementó la subordinación de la Cámara al Poder Ejecutivo. El propósito de la política de los gobernadores, que sólo se logró en parte, era eliminar las disputas de facciones en los estados y, al mismo tiempo, reforzar el Poder Ejecutivo, al que Campos Sales consideraba el "poder por excelencia".

En el terreno financiero, la grave situación que se remontaba a los tiempos de la monarquía se volvió crítica. El Gobierno republicano había heredado del Imperio una deuda externa que consumía anualmente gran parte del saldo de la balanza comercial. El cuadro se agravó en el transcurso de la década de 1890 con el incremento del déficit público. Muchos gastos se debían al costo de las operaciones militares en aquel periodo de incertidumbre. Se recurrió con frecuencia al crédito externo y la deuda creció aproximadamente un 30% entre 1890 y 1897, generando nuevos compromisos de pago.

Por otro lado, la extensión de las plantaciones de café a principios de esa década produjo grandes cosechas en 1896 y 1897. El aumento de la oferta del producto en el mercado

internacional llevó a una pronunciada caída de precios y a un decremento en el ingreso de divisas. Al final de su Gobierno, cuando quedó claro que ya no era posible seguir cumpliendo con el pago de la deuda, Prudente de Morais entabló conversaciones con los acreedores internacionales para llegar a un acuerdo. Hubo arreglos en Río de Janeiro con el London and River Plate Bank, y Campos Sales —ya como presidente electo, pero antes de tomar posesión— fue a Londres para hablar con la Casa Rothschild. Desde la Independencia, los Rothschild habían hecho las veces de agentes financieros de Brasil en Europa.

Al fin, ya en el gobierno de Campos Sales, se acordó un penoso *funding loan* en junio de 1898, como un esquema para dar holgura y asegurar, por medio de un nuevo préstamo, el pago de los intereses y del montante de los préstamos previos. Brasil dio como garantía a los acreedores los ingresos de la Aduana de Río de Janeiro y se le prohibió contraer nuevos préstamos hasta junio de 1901. El país se comprometió además a cumplir con un duro programa de deflación, incinerando parte del papel moneda que estaba en circulación; de este modo, se escapó de la insolvencia. Pero en los años siguientes tendría que pagar un pesado impuesto por estas medidas y otras que las siguieron durante el gobierno de Campos Sales, lo cual causó un decremento en la actividad económica, así como la quiebra de bancos y otras empresas.

Las oligarquías y los coroneles

La república hizo que se concretara la autonomía estatal al permitir la plena expresión de los intereses de cada región. A nivel político, esto se reflejó en la formación de partidos republicanos limitados a cada estado. Los intentos de organizar

partidos nacionales fueron transitorios o fracasaron. Controlados por una élite reducida, los partidos republicanos decidían los destinos de la política nacional y hacían pactos para nombrar a los candidatos para la presidencia de la república.

¿Qué representaban las diversas oligarquías estatales? ¿Qué significaba hablar en nombre de São Paulo, Rio Grande do Sul o Minas Gerais, por mencionar sólo los ejemplos más característicos? Aunque la forma en que estas oligarquías monopolizaban el poder político tenía un denominador común, sus relaciones con la sociedad eran distintas. En São Paulo, la élite política oligárquica estuvo más cerca de los intereses dominantes vinculados con la economía cafetalera y, con el paso del tiempo, también con la industria. Esto no quiere decir que fuera un simple comité de administración de estos grupos. La oligarquía paulista supo organizar el estado de São Paulo de manera eficiente, teniendo en cuenta los intereses más generales de la clase dominante.

Tanto la oligarquía *gaúcha* como la *mineira*, que controlaban respectivamente al PRR y al Partido Republicano (PRM), mostraron bastante autonomía en sus relaciones con la sociedad. El PRR se impuso como una maquinaria política fuerte, inspirada en una versión autoritaria del positivismo, que regulaba los intereses de los estancieros y los inmigrantes en ascenso. La oligarquía de Minas tampoco fue un simple títere de los caficultores o de los ganaderos. Obligada a tomar en cuenta a esos sectores de la sociedad, conformó una maquinaria de políticos profesionales cuyo poder, en gran medida, emanaba de sí misma: nombraba funcionarios, legalizaba la propiedad de las tierras y tenía el poder de decisión sobre inversiones en educación, transportes, etcétera.

A simple vista, parecería que la masa de la población podría haber acabado con el dominio de las oligarquías a través del

voto. Pero el voto no era obligatorio y el pueblo, por lo general, veía la política como un juego entre los poderosos o intercambios de favores. El desinterés crecía cuando en las elecciones presidenciales los partidos estatales establecían acuerdos y presentaban candidaturas únicas, o cuando los candidatos de oposición no tenían ninguna posibilidad de éxito. El porcentaje de votantes osciló entre un mínimo de 1.4% de la población total del país (en la elección de Afonso Pena, en 1906) y un máximo de 5.7% (en la elección de Júlio Prestes, en 1930).

Otro aspecto relevante es que los resultados electorales no reflejaban la realidad. El voto no era secreto y la mayoría de los electores estaba sujeta a la presión de los jefes políticos, con quienes trataba de quedar bien. Era común la práctica de fraudes electorales mediante la falsificación de actas, el voto de los muertos y extranjeros, etc. De hecho, estas distorsiones no eran novedad: eran la continuación de un cuadro que se remontaba a la monarquía.

Pese a todo, la participación electoral creció en comparación con los tiempos del Imperio. Si las elecciones para la última legislatura del Parlamento imperial (1886) se comparan con la primera elección para la presidencia de la república en que votaron electores de todos los estados (1898), puede verse que la participación aumentó en un 400%. Además, no todas las elecciones presidenciales fueron la simple ratificación de un nombre. Hubo bastante competencia en los comicios de 1910, 1922 y 1930, cuando resultaron electos, respectivamente, Hermes da Fonseca, Artur Bernardes y Júlio Prestes.

Es común referirse a la Primera República como República de los Coroneles, en alusión a los coroneles de la vieja Guardia Nacional, que en su mayoría eran propietarios rurales con una base local de poder. El *coronelismo* fue una variante de una

relación sociopolítica más general —el clientelismo— que se daba tanto en el campo como en las ciudades. Esta relación resultaba de la desigualdad social, de lo imposible que era para los ciudadanos hacer valer sus derechos, de la precariedad o ausencia de los servicios asistenciales del Estado y de la inexistencia de una carrera en el servicio público. Todas estas características se habían heredado de tiempos de la Colonia, pero la república sentó las condiciones necesarias para que estos jefes políticos locales concentraran una mayor suma de poder. Esto derivó principalmente en la extensión de la parte de los impuestos que se atribuía a los municipios y la elección de los alcaldes.

Desde el punto de vista electoral, el "coronel" controlaba a los votantes en su zona de influencia. Conseguía votos para los candidatos nombrados por él a cambio de favores tan disímiles como un par de zapatos, una cama en el hospital o un empleo de profesora. Pero los "coroneles" no monopolizaron la escena política durante la Primera República. En la conducción de la política también tuvieron un papel significativo otros grupos que representaban diversos intereses urbanos. Además, aunque fueron importantes para sostener la base del sistema oligárquico, los "coroneles" dependían de otras instancias para mantener su poder. Entre ellas destacaba, en los estados grandes, el Gobierno estatal, que no era un conjunto de "coroneles". Los coroneles conseguían votos para los jefes políticos de su respectivo estado, pero dependían de éstos para ofrecer muchos de los beneficios que esperaban los electores, sobre todo cuando se trataba de beneficios colectivos.

El *coronelismo* tuvo rasgos distintos según la realidad sociopolítica de cada región del país. Un ejemplo extremo del poder de los "coroneles" se encontraba en áreas del interior del nordeste, alrededor del río São Francisco, donde surgieron

verdaderas "naciones de coroneles" con sus propias fuerzas militares. En cambio, en los estados más importantes, los "coroneles" dependían de estructuras más amplias, es decir, del aparato del Gobierno y del Partido Republicano.

Relaciones entre la Unión y los estados

La Primera República se conoce popularmente como la época del "café con leche". Ello expresa la idea de que la política nacional, durante ese periodo, estuvo regida por una alianza entre São Paulo (café) y Minas Gerais (leche). Pero la realidad fue más variada. Para entenderla debemos observar de cerca las relaciones entre la Unión y por lo menos tres estados —São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul— bastante diversos entre sí.

Sin pretender desmantelar al Gobierno federal, São Paulo trató de consolidar su autonomía, asegurada por los ingresos de una economía en expansión y una poderosa fuerza militar. Pero los paulistas no podían darse el lujo de contar únicamente consigo mismos. Por mencionar sólo el ejemplo más importante, correspondía a la Unión el papel fundamental de definir la política monetaria y cambiaria, y esto, además de decidir los rumbos financieros del país, repercutía en la suerte de los negocios cafetaleros.

A nivel federal, los políticos paulistas se concentraron en esos temas y en iniciativas que buscaban el apoyo del Gobierno para los programas de valorización del café. Así, aunque la economía de São Paulo se diversificó en el transcurso de la Primera República, su élite política actuó ante todo en el interés de la burguesía cafetalera, de la que surgían, por cierto, muchos de sus miembros.

La política de la valorización del café es uno de los ejemplos más claros del papel que tuvo São Paulo en la federación y de las relaciones entre los diversos estados. A partir de la década de 1890, la producción cafetalera de São Paulo creció enormemente, y esto ocasionó problemas en relación con los ingresos de la caficultura. Las fuentes básicas de estos problemas eran dos: por un lado, la gran oferta del producto hacía caer su precio en el mercado internacional; por otro lado, la valorización de la moneda brasileña a partir del gobierno de Campos Sales impedía que la caída de los precios internacionales se compensara mediante un mayor ingreso en moneda nacional.

Para asegurar los ingresos de la caficultura, a principios del siglo XX surgieron en São Paulo varios planes de intervención gubernamental en el mercado del café. Finalmente, en febrero de 1906, se llegó a un acuerdo que se conoce como el Convenio de Taubaté por haberse celebrado en la ciudad del mismo nombre, en São Paulo. Firmaron el acuerdo los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

Los puntos básicos del convenio eran dos: la negociación de un préstamo de 15 millones de libras esterlinas para costear la intervención del Estado en el mercado mediante la compra del producto a un precio conveniente para la caficultura, y la creación de un mecanismo destinado a estabilizar el cambio, impidiendo la valorización de la moneda brasileña. El Gobierno tendría que comprar con recursos externos las cosechas abundantes y almacenar la mercancía para venderla en el mercado internacional en el momento oportuno. Este plan, pues, se basaba en la idea, correcta, de la alternancia entre buenas y malas cosechas, y en la expectativa de que las compras gubernamentales causaran un incremento de los precios al reducir la oferta del café.

La resistencia que opuso el Gobierno federal al plan y las reticencias de los demás estados que integraban el convenio llevaron al estado de São Paulo a actuar por su propia cuenta, asociándose con un grupo de importadores de Estados Unidos encabezado por Hermann Sielcken. El financiamiento de este grupo y los préstamos bancarios permitieron retirar el café del mercado. Pero no era posible mantener la situación por mucho tiempo sin un financiamiento a largo plazo y de mayor envergadura.

En el segundo semestre de 1908 el presidente Afonso Pena recibió una autorización del Congreso para convertir a la Unión en fiadora de un préstamo de hasta 15 millones de libras que São Paulo tenía la intención de contraer. A partir de entonces, el estado de São Paulo pudo seguir con la operación de valorización, entregando el control de ésta a los banqueros internacionales. Los precios globales del café empezaron a subir y se mantuvieron al alza hasta 1912 gracias a la disminución de la oferta, que se logró con el almacenamiento del producto y la merma en el volumen de las cosechas. El préstamo se pagó en junio de 1913.

La Unión fue responsable de otras dos operaciones de valorización hasta que, en 1924, el presidente Artur Bernardes, preocupado por el presupuesto federal, decidió dejar de defender el café. A partir de entonces fue el estado de São Paulo el que asumió, de manera directa, la protección permanente del producto.

Este breve resumen ilustra el tipo de relaciones existentes entre São Paulo y la Unión. Los paulistas tuvieron medios para asegurar su autonomía y, hasta cierto punto, sacar adelante sus planes económicos aun sin contar con el apoyo del Gobierno federal. Pero la política cambiaria de la Unión tenía repercusiones desfavorables en la caficultura paulista cuando se

tomaban medidas para valorizar el cambio. Además, la garantía del Gobierno federal podía ser imprescindible para la obtención de préstamos en el exterior o al menos para facilitar el proceso.

La posición de los políticos de Minas Gerais era diferente. Representaban un estado económicamente fragmentado entre el café, la ganadería y, en cierta medida, la industria, sin un polo dominante. Además, Minas no tenía el mismo potencial económico que São Paulo y dependía de los beneficios de la Unión. Este cuadro llevó a la élite política de Minas a guardar cierta distancia respecto a los intereses específicos del "café" y la "leche", e hizo que sus miembros acumularan poder como políticos profesionales. Los *mineiros* tenían una fuerte influencia en la Cámara de Diputados, donde gozaban de una bancada de 37 miembros, mientras que la bancada de los paulistas era de sólo 22. Esta proporción se fijó de acuerdo con el censo de 1890. Tras el censo de 1920, que reflejó el gran crecimiento poblacional de São Paulo, los paulistas solicitaron que la proporción se revisara, pero no tuvieron éxito.

Los políticos de Minas controlaron el acceso a muchos cargos políticos federales y consiguieron uno de sus objetivos prioritarios: la construcción de ferrocarriles en el territorio de Minas, que atendía a los intereses generales de su estado. Durante la década de 1920, casi 40% de los nuevos ferrocarriles federales que se estaban construyendo se concentró allí. Estos políticos también procuraron protección para los recursos de Minas que se consumían en el mercado interno y, dependiendo de las circunstancias, apoyaron la valorización del café.

La presencia de los *gaúchos* en la política nacional tuvo la peculiaridad de relacionarse con la presencia de los militares. Esta cercanía no implicaba que hubiera una identificación entre

los militares y el PRR. Entre 1894 y 1910 los *gaúchos* —al igual que la cúpula del Ejército—estuvieron casi ausentes de la administración federal. Volvieron a figurar con la elección del mariscal Hermes da Fonseca.

Esta afinidad se debió a varias razones. Desde los tiempos del Imperio, Rio Grande do Sul concentraba la mayor cantidad de efectivos del Ejército; en la Primera República reunió entre un tercio y un cuarto de los efectivos nacionales. La III Región Militar, creada en 1919, constituyó un puente con la alta administración, pues varios de sus comandantes se integraron al Ministerio de Guerra. La importancia del sector militar motivó a los *gaúchos* de cierto nivel social a seguir la carrera de las armas; de entre ellos surgió el mayor número de ministros de Guerra y presidentes del Club Militar durante la Primera República.

Por otro lado, la lucha armada intermitente en la zona favoreció el contacto entre oficiales y partidos políticos. De la Revolución Federalista, por ejemplo, brotaron lazos entre varios oficiales y el PRR.

La cercanía también se vio propiciada por ciertos rasgos ideológicos y peculiaridades políticas. El principal rasgo ideológico fue el positivismo, cuya importancia difusa siguió presente en el interior del Ejército. Además, la política económica y financiera que defendían los republicanos *gaúchos* solía coincidir con la postura de los militares. El PRR abogaba por la estabilización de los precios y por una política conservadora respecto a los gastos del Gobierno federal. La inflación causaría problemas en el mercado de la carne seca. Como el principal consumidor de ese producto eran las clases populares del nordeste y del Distrito Federal, cualquier decremento en el poder adquisitivo de esas clases se traducía en la disminución de la demanda. Aunque las motivaciones eran distintas, esta

perspectiva establecía un puente con los militares, que veían con buenos ojos la adopción de una política financiera conservadora.

Si las oligarquías del nordeste hubieran conformado un bloque, éste habría llegado a ser influyente en la política nacional. Pero los conflictos de intereses hacían muy difícil que los estados de esa región formaran una coalición. Por ejemplo: como los recursos obtenidos mediante el impuesto a la exportación en cada estado eran escasos, los estados competían entre sí por los favores del Gobierno federal; también se enfrascaban en interminables disputas en torno al derecho a cobrar impuestos interestatales sobre las mercancías que circulaban de un estado a otro.

La unión de las oligarquías paulista y *mineira* fue un elemento fundamental de la historia política de la Primera República. En dicha unión predominaba una u otra de las dos fuerzas. Con el tiempo surgieron las discusiones y un gran desacuerdo final.

Pese a la influencia militar, São Paulo se mantuvo al frente durante los primeros años de la República. Los paulistas lograron sus objetivos en la Constituyente con el apoyo de los *mineiros* y allanaron el camino a las presidencias civiles. Tres presidentes paulistas —Prudente de Morais, Campos Sales y Rodrigues Alves— fueron elegidos consecutivamente entre 1894 y 1902, cosa que nunca volvería a suceder. La preponderancia política de São Paulo en esos años no se explica sólo por la importancia económica del estado, sino también por la cohesión partidaria de su élite. La gran mayoría de la élite paulista dejó atrás muy pronto sus viejas diferencias y cerró filas en torno al PRP.

La situación fue distinta en Minas Gerais: allí, las divergencias entre grupos no se aplacaron sino hasta la llamada segunda fundación del PRM, en 1897. A partir de entonces, la presencia *mineira* en la política nacional fue en aumento.

Desde la presidencia de Campos Sales hasta 1909 prevaleció un acuerdo entre São Paulo y Minas Gerais. En 1909 se hicieron sentir las diferencias entre los dos estados, lo que facilitó la vuelta provisional de los militares y el regreso permanente de Rio Grande do Sul a la escena política nacional. La campaña para la presidencia de la república de 1909-1910 fue la primera contienda electoral efectiva en la vida republicana. El mariscal Hermes da Fonseca, sobrino de Deodoro da Fonseca, obtuvo la candidatura con el apoyo de Rio Grande do Sul, Minas Gerais y los militares. Desde la oposición, São Paulo lanzó la candidatura de Rui Barbosa en alianza con Bahía.

Barbosa trató de atraerse el voto de la clase media urbana defendiendo los principios democráticos y el voto secreto. Dio a su campaña un tono de reacción contra la intervención del Ejército en la política. Atacó a los jefes militares y propuso, como modelo a seguir, la Fuerza Pública del Estado en contraposición con el Ejército. Aunque la base política más importante de Rui Barbosa en aquel momento fue la oligarquía de São Paulo, su campaña se presentó como la lucha de la inteligencia por las libertades públicas, por la cultura y por las tradiciones liberales contra el Brasil inculto, oligárquico y autoritario. La victoria de Hermes da Fonseca fue una gran desilusión para la pequeña intelectualidad de la época.

La estrella de Rio Grande do Sul empezó a dar muestras de vida en ocasión de las negociaciones que resultaron en la candidatura del *mineiro* Afonso Pena (1906). A partir del gobierno de Hermes da Fonseca, esa estrella se convirtió en la tercera en tamaño dentro de la constelación del "café con leche", cosa que llevó a São Paulo y a Minas a evitar nuevos disensos. En 1913 un pacto no escrito, celebrado en la ciudad *mineira* de Ouro Fino, estableció que *mineiros* y paulistas tratarían de relevarse en la presidencia de la república. Pero los *gaúchos* no dejaron de estar

presentes en la política nacional. Aunque no definía el juego en las sucesiones presidenciales, la oligarquía *gaúcha* ascendió después de 1910, con fuerte presencia en los ministerios, mientras que la de São Paulo tendió a atrincherarse en su estado.

Finalmente, el desacato de las reglas del juego por parte del presidente Washington Luís, quien presentó como su sucesor al paulista Júlio Prestes (1929), fue un factor central de la ruptura política que se dio en 1930.

Si se analizan los acuerdos que establecieron entre sí las varias oligarquías, queda claro que el Gobierno federal no fue un simple club de hacendados cafetaleros. El poder central se definió como el articulador de una integración nacional que, aunque frágil, existía. Tenía que asegurar cierta estabilidad en el país, conciliar diversos intereses, atraer inversiones extranjeras y ocuparse de la deuda externa.

Pero el café fue el eje de la economía de ese periodo. Durante la Primera República el café ocupó, por mucho, el primer lugar en la agenda de exportaciones brasileñas, con un promedio de aproximadamente 60% del valor total. Hacia el final del periodo representaba en promedio 72.5% de las exportaciones. De él dependían el crecimiento y el empleo en las zonas más desarrolladas del país. También producía la mayor parte de las divisas necesarias para las importaciones y para atender compromisos en el extranjero, sobre todo la deuda externa.

En su política, el Gobierno federal no podía ignorar el peso del sector cafetalero, independientemente de la región de la que proviniera el presidente de la república. Pero lo más significativo es que los gobernantes supuestamente vinculados con los intereses del café no siempre actuaron como sus defensores. Curiosamente, tres presidentes oriundos de São

Paulo —Campos Sales, Rodrigues Alves y Washington Luís— molestaron al sector cafetalero o se enfrentaron con él. Este comportamiento, en apariencia extraño, se debe sobre todo a que el presidente de la república tenía que velar por lo que entendía como los intereses generales del país, entre los que se contaban la estabilización de las finanzas y los acuerdos con los acreedores foráneos, en especial con los Rothschild, que eran los principales agentes financieros de Brasil en el extranjero.

Los cambios socioeconómicos

La inmigración masiva fue uno de los cambios socioeconómicos más importantes que tuvieron lugar en Brasil a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Brasil fue uno de los países receptores de millones de europeos y asiáticos que llegaron a las Américas buscando oportunidades de trabajo y de ascenso social. A su lado figuran, entre otros, Estados Unidos, Argentina y Canadá.

Entre 1887 y 1930 arribaron a Brasil alrededor de 3.8 millones de extranjeros. Los años de 1887 a 1914 concentraron el mayor número de inmigrantes, en una cifra aproximada de 2.74 millones, alrededor de 72% del total. Esta concentración se debió, entre otros factores, a la intensa demanda de fuerza de trabajo en esos años para el cultivo del café. La Primera Guerra Mundial redujo mucho el flujo de inmigrantes. Luego del fin del conflicto tuvo lugar una nueva corriente inmigratoria que se prolongó hasta 1930.

A partir de 1930, debido a la crisis mundial que se había iniciado en 1929 y a los cambios políticos en Brasil y en Europa, la entrada de inmigrantes como fuerza de trabajo dejó de ser significativa. La única excepción fueron los japoneses: en

términos de décadas, llegaron al país en mayor número entre 1931 y 1940.

Las regiones del centro-sur, sur y este fueron las que recibieron masivamente a los inmigrantes. En 1920, 93.4% de la población extranjera vivía en estas zonas. El estado de São Paulo se destaca del conjunto, pues concentró por sí solo a la mayor parte de los residentes extranjeros que había en el país (52.4%). La preferencia se explica por las facilidades que concedió ese estado a los inmigrantes (pasajes, alojamiento) y por las oportunidades de empleo que ofrecía su economía en expansión.

Durante el periodo que va de 1887 a 1930, los italianos fueron el grupo más amplio; representaban 35.5% del total de inmigrantes. Los seguían los portugueses (29%) y los españoles (14.6%). Grupos relativamente poco numerosos en términos globales se volvieron cualitativamente importantes.

El caso más expresivo es el de los japoneses, que llegaron sobre todo a São Paulo. En 1920, 87.3% de los japoneses vivía en este estado. La primera leva arribó a Santos en 1908, con destino a las haciendas de café. Pese a lo difícil que resultaba establecer a los japoneses en las haciendas, la administración paulista concedió, durante varios años —hasta 1925—, varios subsidios a la inmigración proveniente de Japón. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, con la interrupción del flujo europeo, se temió que "faltaran brazos para el campo". A partir de 1925, el Gobierno japonés empezó a financiar los viajes; por esos tiempos, sus ciudadanos ya no eran enviados a las haciendas cafetaleras. Se asentaron en el campo durante más tiempo que cualquier otra etnia, pero como pequeños propietarios, y tuvieron un papel significativo en la diversificación de las actividades agrícolas.

Otros grupos minoritarios importantes fueron los sirio-libaneses y los judíos, que compartieron algunas características.

A diferencia de los japoneses, de los italianos y de los españoles, ambos se concentraron desde que llegaron sobre todo en las ciudades. Su inmigración fue espontánea, no subsidiada, pues sólo aquellos que se dirigían a las haciendas recibían el apoyo del Gobierno.

Los italianos llegaron básicamente a São Paulo y a Rio Grande do Sul. En 1920, 71.4% de los italianos que había en Brasil vivían en el estado de São Paulo y representaban el 9% de la población total. Su origen regional fue cambiando con el paso del tiempo. Hasta la vuelta del siglo predominaron los italianos del norte; a partir del siglo XX empezaron a llegar los del sur, en especial calabreses y napolitanos.

Los italianos fueron la etnia que más mano de obra aportó al cultivo del café. Entre 1887 y 1900, 73% de los inmigrantes que llegaron al estado de São Paulo eran italianos, aunque no todos se dedicaron a la agricultura. La pobreza de esas personas se deja ver, entre otras cosas, en el hecho de que los subsidios que ofrecía el Gobierno paulista representaron un fuerte atractivo para ellas. Cuando este esquema comenzó a presentar problemas hubo repercusiones directas en el volumen del flujo de inmigrantes.

Las malas condiciones con que se recibía a los recién llegados en Brasil llevaron al Gobierno italiano a tomar medidas contra el reclutamiento de inmigrantes. Esto sucedió, provisionalmente, entre marzo de 1889 y julio de 1891. En marzo de 1902 una decisión de las autoridades italianas que se conoce como el Decreto Prinetti —por el apellido del ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Giulio Prinetti— prohibió la inmigración subsidiada a Brasil. En adelante, quien quisiera emigrar al país podría hacerlo libremente, pero sin obtener boletos ni otras pequeñas facilidades. Esta medida fue consecuencia de las crecientes quejas que los italianos que vivían en Brasil

presentaban a sus cónsules sobre las precarias condiciones de vida, agravadas por la crisis del café. Posiblemente también la propició la mejora en el cuadro socioeconómico Italiano.

El flujo de la inmigración italiana no se interrumpió. Pero el Decreto Prinetti, la crisis del café y la situación de Italia hicieron que se redujera. Si se revisan las entradas y salidas de inmigrantes a través del puerto de Santos, sin distinción de nacionalidad, puede verse que, durante varios años, el número de los que se iban fue mayor que el de los que llegaban. En 1900, por ejemplo, en plena crisis del café, ingresaron alrededor de 21 000 inmigrantes y egresaron 22 000. En 1903, poco después del Decreto Prinetti, entraron 16 500 y salieron 36 400. El año siguiente también registró un saldo negativo.

Entre 1901 y 1930, hubo un equilibrio mucho mayor en cuanto al origen étnico de los inmigrantes que llegaban a São Paulo. La proporción de italianos cayó a un 26%, seguidos por los portugueses (23%) y los españoles (22%). La inmigración portuguesa se concentró en el Distrito Federal y en São Paulo. La capital de la república reunía el mayor contingente luso, aun si se le compara con los estados. Una característica de la inmigración portuguesa fue su mayor concentración en las ciudades. En 1920 había 65 000 portugueses en la ciudad de São Paulo, que representaban el 11% de la población total. En Río de Janeiro su número ascendía a 172 000, lo que correspondía a un 15% de la población. Esto no significa que los inmigrantes portugueses no se dedicaron al cultivo del café y a la agricultura en general. Pero fueron más conocidos por su papel en el comercio a pequeña y gran escala, y en la industria, sobre todo en Río de Janeiro.

El flujo más intenso de inmigrantes españoles tuvo lugar entre 1887 y 1914. Pero hubo una diferencia. Mientras los italianos predominaron ampliamente sobre los españoles de

1887 a 1903, estos últimos los superaron entre 1906 y 1920. Después de los japoneses, los inmigrantes españoles fueron los que más se concentraron, proporcionalmente, en el estado de São Paulo. En 1920, 78% de los españoles residían allí. En ciertos aspectos, la inmigración española fue semejante a la japonesa. Tal como sucedió con los japoneses, llegaron a Brasil más que nada familias con varios hijos, y no hombres solteros. Los españoles también se parecieron a los japoneses porque se dedicaron durante mucho tiempo a las actividades agrícolas y prefirieron vivir en pequeñas ciudades del interior en lugar de instalarse en la capital de São Paulo.

El ascenso social de los inmigrantes en las ciudades fue irrefutable; lo evidencia el éxito que tuvieron en las actividades comerciales e industriales en estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina. En cambio, el caso del campo fue más complicado. Tomemos el ejemplo de São Paulo. Durante los primeros años de la inmigración masiva, los inmigrantes se vieron sometidos a una existencia dura debido al trato que se daba en general en el país a los trabajadores, considerados casi como esclavos. Prueba de ello es el gran número de personas que regresaron a sus países de origen, los reclamos de los cónsules y las medidas tomadas por el Gobierno italiano. Con el paso del tiempo, muchos inmigrantes fueron alcanzando mejores posiciones en la sociedad. Unos cuantos se volvieron grandes hacendados. En su mayoría se convirtieron en pequeños y medianos propietarios, con lo que allanaron el camino para que sus descendientes fueran figuras centrales de la agroindustria paulista. El censo agrícola de São Paulo de 1934 reveló que 30.2% de las tierras estaba en manos de extranjeros: 12.2% correspondía a los italianos; 5.2%, a los españoles; 5.1%, a los japoneses; 4.3%, a los portugueses, y el resto, a otras nacionalidades. Estas cifras reflejan sólo en parte el acenso de los

inmigrantes, pues los propietarios de tierras que descendían de extranjeros fueron lógicamente considerados brasileños.

Durante las últimas décadas del siglo XIX y hasta 1930, Brasil siguió siendo un país predominantemente agrícola. Según el censo de 1920, de 9.1 millones de personas activas, 6.3 millones (69.7%) se dedicaban a la agricultura; 1.2 millones (13.8%), a la industria, y 1.5 millones (16.5%), a los servicios.

Bajo el rubro "servicios" se incluyen actividades urbanas de escasa productividad, como los servicios domésticos remunerados. El dato más revelador es el del aumento del número de personas activas en el sector industrial, que, según el censo de 1872, no superaba el 7% de la población activa. Aclaremos, sin embargo, que muchas "industrias" no eran más que pequeños talleres.

El predominio de las actividades agroexportadoras durante la Primera República no fue absoluto. No sólo fue significativa la producción agrícola para el mercado interno, sino también la industria, que se instauraba cada vez con más fuerza. El estado de São Paulo encabezó un proceso de desarrollo capitalista caracterizado por la diversificación agrícola, la urbanización y la explosión de la industria. El café siguió siendo el eje de la economía y constituyó la base inicial de ese proceso. Un factor importante, que aseguró la producción cafetalera, fue la fórmula que se encontró para resolver el problema del flujo de mano de obra y estabilizar las relaciones laborales. El primer punto se resolvió con la inmigración; el segundo, con el colonato.

El colonato sustituyó a la fracasada experiencia de aparcería. Los colonos, o sea, la familia de trabajadores inmigrantes, se hacían responsables del cuidado del cafetal y de la cosecha, y recibían básicamente dos pagos en dinero: uno anual, por el cuidado de algunos millares de cafetos, y otro por la recolección.

Este último pago variaba dependiendo del resultado de la tarea, es decir, del volumen de lo recolectado. El hacendado proporcionaba vivienda y cedía pequeñas parcelas de tierra donde los colonos podían producir géneros alimenticios. El colonato era distinto de la aparcería porque, entre otras cosas, las ganancias de la venta del café no se dividían. Por otro lado, no era una forma pura de trabajo asalariado, pues implicaba otros tipos de retribución.

En el caso de las nuevas plantaciones, que eran objeto de los llamados "contratos de formación", los colonos sembraban y cuidaban los cafetos durante un periodo de entre cuatro y seis años, pues las plantas por lo general empezaban a producir hacia el cuarto año. Los "formadores" prácticamente no recibían un salario, pero podían dedicarse a la producción de géneros alimenticios entre los surcos de los nuevos cafetales. Como este tipo de relación laboral era la preferida de los colonos, se infiere que la producción de alimentos no se limitaba al autoconsumo, sino que también incluía su venta en los mercados locales.

El colonato estabilizó las relaciones laborales, pero no acabó con los problemas entre colonos y hacendados. Hubo constantes choques individuales e incluso huelgas. Además, los colonos no eran esclavos y tenían una intensa movilidad espacial: se desplazaban de una hacienda a otra, o viajaban a los centros urbanos en busca de mejores oportunidades. Pero, como un todo, la oferta de mano de obra inmigrante, por un lado, y por el otro las oportunidades de ganancia que ofrecía el colonato aseguraron la producción de café y la relativa estabilidad de las relaciones laborales en la caficultura.

Mientras la producción de café crecía, São Paulo vivió un proceso de diversificación agrícola vinculado con el ascenso de los inmigrantes. Fomentada por la demanda de las ciudades en crecimiento, la producción de arroz, frijol y maíz se expandió. A

principios del siglo xx, São Paulo importaba parte de estos productos de otros estados, sobre todo arroz de Rio Grande do Sul; hacia la Primera Guerra Mundial se había vuelto autosuficiente en la producción de estos granos y empezó a exportarlos. Comparando los promedios de 1901-1906 con los de 1925-1930 puede verse que la producción de arroz aumentó casi siete veces; la de frijol, tres, y la de maíz, dos.

También se implantó el algodón. Hacia 1919, São Paulo se convirtió en el principal estado productor de algodón, responsable por aproximadamente un tercio del total en el país. Esto aseguraba el abasto de materia prima para la industria textil. Además, el cultivo combinado de café y algodón, con mayor énfasis en el café, fue en ocasiones providencial para los hacendados. Cuando en 1918 una helada devastó los cultivos de café, muchos se salvaron de la ruina gracias a la producción algodonera.

Todas las ciudades crecieron y el salto más espectacular lo dio la capital del estado de São Paulo. La causa principal fue el flujo de inmigrantes, unos espontáneos y otros que trataban de alejarse de las actividades agrícolas. La ciudad era un campo abierto al artesanado, al comercio ambulante, a las pequeñas fábricas domésticas; propicio para el empleo de los constructores autodenominados "maestros italianos" y de los profesionales liberales. Como opción más precaria, era posible trabajar en las nacientes fábricas o en el servicio doméstico. La capital paulista era también el gran centro distribuidor de los productos importados y el vínculo entre los sitios donde se producía el café, el puerto de Santos y la sede del Gobierno. Allí se encontraban los mayores bancos y los principales empleos burocráticos.

A partir de 1886, São Paulo empezó a crecer a un ritmo acelerado. Su gran repunte tuvo lugar entre 1890 y 1900, periodo en que la población paulistana pasó de 64 000 habitantes a 239 000: un aumento de 268% en 10 años, a una tasa geométrica de 14% de crecimiento anual.

En 1890, São Paulo ocupaba la quinta posición entre las ciudades brasileñas, por debajo de Río de Janeiro, Salvador, Recife y Belém. Hacia principios del siglo XX, llegó al segundo lugar, aunque aún estaba muy lejos de los 688 000 habitantes de la capital de la república. En comparación con Río de Janeiro, São Paulo seguía siendo simplemente la capital de una gran provincia.

Es necesario observar el crecimiento industrial desde una perspectiva geográfica más amplia, abarcando varias regiones, sobre todo Río de Janeiro y São Paulo.

Las pocas fábricas que surgieron en Brasil a mediados del siglo XIX se destinaban principalmente a producir telas de algodón de escasa calidad para el consumo de la población pobre y los esclavos. El núcleo primordial de actividades en este ramo fue Bahía, que reunía cinco de las nueve fábricas existentes en el país en 1866. Hacia 1885, la producción industrial se había desplazado al centro-sur. En cuanto al número de unidades fabriles, Minas ocupaba el primer lugar; pero era en el Distrito Federal donde se concentraban las fábricas más importantes. Con excepción de la agroindustria azucarera, hacia 1889 el Distrito Federal detentaba 57% del capital industrial brasileño. La instalación de fábricas en la capital de la república se debió a varios factores; entre ellos, la concentración de capital, un mercado de consumo de dimensiones razonables y el uso del vapor como fuente de energía, que sustituyó a las antiguas fabriquitas que trabajaban con fuerza hidráulica.

El crecimiento industrial de São Paulo data del periodo que siguió a la abolición, aunque ya empezaba a esbozarse en la década de 1870. Debe su surgimiento a por lo menos dos fuentes relacionadas entre sí: el sector cafetalero y los inmigrantes. Esta última no sólo estuvo presente en São Paulo: también hubo otras zonas que recibieron inmigrantes, sobre todo Rio Grande do Sul.

Los negocios del café sentaron las bases para el primer repunte industrial por diversas razones: en primer lugar, como fomentaban las transacciones en moneda y el crecimiento del ingreso, crearon un mercado para los productos manufacturados; en segundo lugar, como promovían la inversión en ferrocarriles, ampliaron e integraron dicho mercado; en tercer lugar, como desarrollaron el comercio de exportación e importación, ayudaron a crear un sistema de distribución para los productos manufacturados; en cuarto lugar, como promovían la inmigración, aseguraron la oferta de mano de obra. Finalmente, a través de las exportaciones, el café proporcionaba recursos para importar maquinaria industrial.

Los inmigrantes estuvieron presentes en los dos extremos de la industria, como dueños de empresas y como obreros. Varios de ellos fueron técnicos especializados. La historia de los trabajadores extranjeros es parte de la historia de esos inmigrantes que vinieron a "hacer la América" y vieron cómo se esfumaban sus sueños en la nueva tierra. Tuvieron un papel fundamental en la industria manufacturera de la capital de São Paulo, el 70% de cuyos integrantes eran extranjeros en 1893. Las cifras fueron menos expresivas en Río de Janeiro, pero aun así correspondían a 39% del total en 1890.

Las formas en que los inmigrantes llegaron a la condición de industriales fueron diversas. Algunos empezaron casi de cero y se beneficiaron de las oportunidades que presentaba el capitalismo en formación en São Paulo y Rio Grande do Sul. Otros

vieron oportunidades en la industria porque se dedicaban inicialmente a la importación. Esta posición les facilitaba los contactos para importar maquinaria y era una fuente de conocimiento sobre las posibilidades de inversión más lucrativas en el país. Los dos mayores industriales italianos de São Paulo comenzaron como importadores.

Considerando el valor de la producción industrial, en 1907 el Distrito Federal estaba al frente de los demás estados con un 33% del total; lo seguían São Paulo, con el 17%, y Rio Grande do Sul, con el 15%. En 1920 el estado de São Paulo había pasado al primer lugar, con un 32% de la producción; el Distrito Federal había caído al 21%, y Rio Grande do Sul ocupaba el tercer puesto, con el 11%. Se están comparando aquí dos estados contra una ciudad. A nivel de ciudades, los datos son imprecisos. De cualquier manera, es seguro que São Paulo superó a Río de Janeiro en algún punto entre 1920 y 1938.

El ramo industrial más importante de la época fue el textil, seguido por el alimentario —incluyendo bebidas— y el del vestido. La industria textil, sobre todo la que producía telas de algodón, fue verdaderamente fabril debido a la concentración de capital que se invirtió en ella y el número de obreros empleados. Varias fábricas llegaron a tener más de un millar de trabajadores. Hacia la Primera Guerra Mundial, 80% de las telas consumidas en el país eran nacionales, un indicio de la mejora de su calidad. Pese a ese relativo progreso en la producción, era profunda la falta de una industria de base (cemento, fierro, acero, maquinaria y equipos); en consecuencia, el despunte industrial dependía en gran medida de las importaciones.

Suele hablarse de la Primera Guerra Mundial como un periodo en que se fomentó a las industrias porque la competencia de los productos importados se había suspendido. Pero la década de 1920 fue tan significativa como el conflicto

europeo, pues en esos años empezaron a hacerse intentos por superar los límites de la expansión industrial. Con incentivos del Gobierno, nacieron dos empresas importantes: en Minas Gerais, la Compañía Siderúrgica Belgo-Mineira, cuya producción arrancó en 1924; en São Paulo, la Compañía Brasileña de Cemento Portland, que comenzó a producir en 1926. Al mismo tiempo, gracias a la experiencia y a las ganancias acumuladas durante la guerra, algunos pequeños talleres de reparaciones fueron convirtiéndose en industrias de maquinaria y equipos.

¿El Estado facilitó o dificultó el crecimiento industrial? La principal preocupación del Estado no era la industria, sino los intereses agroexportadores. Pero no se puede decir que el Gobierno haya adoptado una actitud antiindustrialista. La tendencia a largo plazo de las finanzas brasileñas, cuyo objetivo era la caída en la tasa de cambio, tuvo efectos contradictorios sobre la industria. La desvalorización monetaria encarecía la importación de bienes de consumo y, al hacerlo, restringía la competencia. Al mismo tiempo, encarecía también la importación de máquinas, de las que dependía el parque industrial. En ciertos periodos, el Gobierno protegió la importación de maquinaria reduciendo los aranceles aduaneros. En algunos casos, el Estado exentó impuestos y concedió préstamos para la instalación de industrias de base. En resumen: el Estado no fue un adversario de la industria, pero estuvo lejos de promover una política deliberada de desarrollo industrial.

En Rio Grande do Sul, a lo largo de la Primera República, se acentuó la diversificación de la actividad económica destinada al mismo estado y al mercado interno nacional. Los protagonistas de esta diversificación fueron los inmigrantes que se instalaron como pequeños propietarios en la región serrana y desde allí se expandieron a otras áreas. En el sector agrícola destacó en

primer lugar la producción de arroz, seguida del maíz, frijol y tabaco.

Tal como sucedía en otras partes del país, en lo relativo al capital invertido, la industria textil se situaba a la cabeza del sector industrial, seguida por la de bebidas. Dentro de esta última destacaba la producción de vino, que se remontaba al periodo colonial y que ganó un nuevo impulso con la llegada de inmigrantes italianos y alemanes.

La instalación de frigoríficos transformó los precarios procesos de conservación de la carne e hizo posible su almacenamiento. En 1917, las empresas estadounidenses Armour y Wilson se establecieron en el estado. Los ganaderos *gaúchos* trataron de mantener un frigorífico, pero fracasaron por falta de recursos: la empresa se vendió en 1921 al Frigorífico Anglo.

Todas estas iniciativas se dieron en el marco de una relativa decadencia de la actividad pecuaria, del charque y, sobre todo, del cuero. En 1890, el charque y el cuero juntos representaban alrededor de 55% del valor de las exportaciones. Para 1927, no pasaban de 24%: el cuero cayó de 37% a sólo cerca de 7% del valor de las exportaciones. Ese año, la manteca, individualmente, quedó en primer lugar (20%), seguida por el charque (18%) y el arroz (13%).

Aunque tanto en São Paulo como en Rio Grande do Sul se diversificaron las actividades económicas, el núcleo de la actividad económica de São Paulo fue la agricultura de exportación, mientras que Rio Grande do Sul se desarrolló casi enteramente en función del mercado interno.

La Amazonia vivió un sueño transitorio de riqueza gracias al caucho. Los avances en su producción, que se remontaban a algunas décadas, experimentaron un gran repunte a partir de 1880. La verdadera manía por la bicicleta durante la década de

1890 y la gradual popularización del automóvil a partir de la vuelta de siglo fomentaron aún más la producción.

Durante todo su apogeo, el caucho ocupó holgadamente la segunda posición entre los productos brasileños de exportación. Llegó a su punto máximo entre 1898 y 1910, cuando correspondió aproximadamente al 26% del valor de las exportaciones, superado sólo por el café (53%) y muy por delante del artículo que lo seguía: el cuero, que representaba sólo el 4 por ciento.

El *boom* del caucho fue responsable de una significativa migración hacia la Amazonia. Se calcula que entre 1890 y 1900 la migración líquida hacia esa región fue de alrededor de 110 000 personas. Éstas provenían sobre todo del Ceará, un estado periódicamente golpeado por las sequías.

La economía del caucho tuvo como consecuencia el crecimiento de la población urbana en Belém y Manaos y la mejora de las condiciones de vida de al menos una parte de esa población. Entre 1890 y 1900 la población de Belém casi se duplicó, al pasar de 50 000 a 96 000 personas. En las dos mayores ciudades de la Amazonia se instalaron líneas de tranvía eléctrico, servicios de teléfono, agua entubada y alumbrado eléctrico en las calles, cuando en muchas urbes todo esto aún era un lujo. Pero estos cambios no transformaron las miserables condiciones de vida de los caucheros que extraían la resina tierra adentro. Tampoco condujeron a una diversificación de las actividades económicas capaz de sostener el crecimiento en una situación de crisis.

La crisis llegó, avasalladora, a partir de 1910 y tuvo como síntoma una fuerte caída de los precios. Su causa básica fue la competencia internacional. El caucho nativo de Brasil siempre había competido con el que se exportaba desde América Central y África, cuya calidad era inferior. Pero las plantaciones creadas sobre todo por ingleses y holandeses en sus colonias de Asia

transformaron este cuadro. Ese caucho era de buena calidad, poco costoso y podía cultivarse en grandes extensiones. Mientras tanto, se volvía cada vez más caro extraer caucho nativo en las zonas remotas de la Amazonia.

En 1910 el caucho asiático representaba poco más de 13% de la producción mundial; para 1912 ya había ascendido a 28% y en 1915 llegó a 68%. Los intentos de cultivar caucho en la Amazonia no prosperaron, pues las plantas eran frecuentemente atacadas por las plagas. Un ejemplo de estos experimentos fue el emprendido por Ford —Fordlandia— a fines de la década de 1920, que resultó en un inmenso fracaso.

A lo largo de la Primera República, las relaciones internacionales de Brasil en el terreno económico-financiero sufrieron algunos cambios significativos. La mayoría de los préstamos e inversiones siguió partiendo de Gran Bretaña; Estados Unidos también mantuvo su posición como el principal mercado para el más importante producto brasileño de exportación: el café. Pero, con el paso de los años, Brasil mostró una tendencia a relacionarse más con Estados Unidos. Esto se hizo evidente en la década de 1920. Desde la Primera Guerra Mundial el valor de las importaciones provenientes de Estados Unidos ya había superado el de las importaciones oriundas de Gran Bretaña.

En 1928, Brasil era el país con la mayor deuda externa de América Latina. Representaba alrededor de 44% del total, seguida por la de Argentina (27%) y la de Chile (12%). Se calcula que en 1923 el pago de la deuda consumía 22% del montante de las exportaciones. La deuda había surgido de la necesidad de mantener al Estado, financiar la infraestructura portuaria y ferrocarrilera, valorizar el café y, simplemente, cubrir la deuda existente.

En las últimas décadas del Imperio la inversión extranjera se concentró en los ferrocarriles. En la República esta inversión fue pasando a un segundo plano y se vio superada por el capital inicial de las compañías de seguros, las empresas de navegación, los bancos y las empresas que generaban y distribuían energía eléctrica.

Los servicios básicos de las principales ciudades estuvieron en manos de compañías extranjeras. El caso más notable fue el de la Light & Power, empresa canadiense fundada en Toronto en 1899. Inicialmente estuvo activa en São Paulo y, a partir de 1905, también en la capital de la república. En la ciudad de São Paulo, la Light desplazó a una empresa local de tranvías y asumió el control del abasto y distribución de energía eléctrica. El repunte industrial de la ciudad estuvo estrechamente ligado a sus inversiones en infraestructura.

En cuanto a la economía exportadora, la producción fue objeto de pocas inversiones extranjeras. Pero los extranjeros estuvieron presentes de otras formas: financiaban la comercialización y controlaban parte del transporte ferrocarrilero, prácticamente toda la exportación, el transporte marítimo y los seguros de las mercancías.

No hay datos seguros sobre las ganancias de las empresas extranjeras. Al parecer, los que más se beneficiaron fueron los bancos, que lucraban especulando con la inestabilidad de la moneda brasileña o con la recesión. Luego del *funding loan* de 1898, muchos bancos nacionales quebraron y la posición de los bancos extranjeros se fortaleció. El mayor banco inglés —el London and Brazilian Bank— tenía muchos más recursos que el Banco de Brasil. Según datos de 1929, los establecimientos bancarios extranjeros eran responsables de la mitad de las transacciones.

Los inversionistas extranjeros tendieron a controlar sus terrenos de acción desplazando a los capitales nacionales. Gozaron de las ventajas derivadas del volumen de las inversiones, se sirvieron de abogados poderosos y miraron con desdén al país atrasado. Pero sus métodos no fueron muy distintos de los de la élite local. Como sea, el capital extranjero tuvo un importante papel en la creación de una estructura básica de servicios y transportes, de modo que coadyuvó en la modernización de Brasil.

Los movimientos sociales

Los movimientos de trabajadores adquirieron cierto impulso a lo largo de la Primera República, tanto en el campo como en las ciudades. Los primeros podrían dividirse en tres grandes grupos: *1*) los que combinaban sus carencias sociales con un contenido religioso; *2*) los que combinaban reivindicaciones sociales con un contenido religioso, y *3*) los que expresaban reivindicaciones sociales sin contenido religioso.

Canudos, cuya historia se narró ya brevemente, es un ejemplo del primer tipo. El movimiento del Contestado es un ejemplo del segundo. El Contestado era una zona limítrofe entre Paraná y Santa Catarina. Ambos estados se disputaban el territorio, pero no fue esa pugna el objeto del movimiento que surgió allí en 1911. Éste nació de la unión entre los seguidores de un "coronel" al que se consideraba amigo de los pobres y gente de diversos orígenes afectada por los cambios que se vivían en la zona. Entre ellos se contaban trabajadores rurales desplazados por la construcción de un ferrocarril y por una empresa maderera, así como personas que habían sido reclutadas para construir el

ferrocarril pero que, al término de sus contratos, quedaron en el desempleo.

Los rebeldes se agruparon en torno a la figura de José Maria, que murió durante los primeros enfrentamientos contra las milicias estatales y se volvió objeto de culto. Instalaron varios campamentos cuyos miembros se organizaron sobre la base de la igualdad y la fraternidad. Reivindicaban la posesión de la tierra mientras esperaban la resurrección de José Maria. Las tropas del Ejército apostadas en el estado asolaron a los rebeldes y los liquidaron en 1915.

El ejemplo más representativo del tercer tipo de movimientos sociales del campo fueron las huelgas por mejores salarios y condiciones de trabajo en las haciendas cafetaleras de São Paulo. Estallaron cientos de huelgas localmente focalizadas, que dejaron pocos registros. La más importante tuvo lugar durante la cosecha de 1913 y estuvo conformada por miles de colonos de la región de Ribeirão Preto que paralizaron las grandes haciendas exigiendo que se revisaran sus contratos de trabajo. Intervino la policía, así como el cónsul de Italia, que trató de servir de intermediario en las negociaciones. Los colonos no alcanzaron sus objetivos.

El requisito mínimo para la conformación de un movimiento de la clase trabajadora fue el crecimiento de las ciudades y la diversificación de su actividad. En las ciudades se concentraron las fábricas y los servicios, y se reunieron cientos de trabajadores que compartían una misma condición. Respecto a esto último, no había una gran diferencia con las grandes haciendas cafetaleras. Pero en los centros urbanos la libertad de circulación era mucho mayor, lo mismo que la circulación de las ideas, aunque hubiera divergencias significativas en cuanto al nivel de instrucción y no existieran grandes medios de divulgación.

Aun así, durante la Primera República, el movimiento de la clase trabajadora urbana fue limitado y, salvo algunas excepciones, no tuvo éxito. Esto se debió sobre todo a la importancia relativa de la industria desde el punto de vista económico, y de la clase obrera desde el punto de vista sociopolítico. Las huelgas sólo tenían una fuerte repercusión cuando eran generales o cuando afectaban a sectores clave del sistema agroexportador, como los ferrocarriles y los puertos. El juego político oligárquico, por su parte, podía desarrollarse sin necesidad de agradar a la incipiente masa obrera. Los obreros estaban divididos por rivalidades étnicas y eran poco propensos a organizarse: el simple hecho de sindicalizarse los ponía ya en la "lista negra" de los industriales. Además, muchos eran inmigrantes que aún no habían renunciado a la esperanza de "hacer la América" y volver a Europa.

En la capital de la república, cuando surgieron los primeros partidos obreros, a finales del siglo XIX, lo que predominaba era un vago socialismo y un sindicalismo pragmático que tendía a hacer reivindicaciones inmediatas, como aumentos salariales, reducción de la jornada laboral y salubridad, o bien de mediano alcance, como el reconocimiento de los sindicatos por parte de los patrones y del Estado.

En contraste con este cuadro, en São Paulo prevaleció el anarquismo o, más bien, una de sus vertientes: el anarcosindicalismo. En la práctica, dada la distancia entre su programa y la realidad social brasileña, los anarquistas, aunque asumían una ideología revolucionaria, se vieron orillados a centrar sus esfuerzos en las mismas reivindicaciones que sus adversarios. Esto no impidió que las dos tendencias chocaran, lo que debilitó el ya de por sí frágil movimiento obrero.

Las diferencias en términos de ideología y de métodos de acción entre el movimiento obrero de Río de Janeiro y el de São

Paulo se deben a un conjunto de factores que tienen que ver con las características de esas ciudades y con la composición de la clase trabajadora.

A finales del siglo XIX, la capital de la república tenía una estructura social mucho más compleja que la de São Paulo. Se concentraban allí sectores sociales menos dependientes de las clases agrarias, entre los que se contaban la clase media profesional y burocrática, los militares de carrera, los alumnos de la Escuela Militar y los estudiantes de las escuelas superiores. La presencia de jóvenes militares y la mayor independencia de la clase media respecto a las clases agrarias favorecieron, hasta cierto punto, una política de colaboración de clases. Hasta 1917 el contenido de los movimientos de protesta en Río de Janeiro fue más popular que específicamente obrero. Un ejemplo de esto fue, además del jacobinismo, la Revuelta de la Vacuna, que durante el gobierno de Rodrigues Alves, en 1904, se opuso a la introducción de la vacuna contra la viruela.

En cuanto a la composición de la clase trabajadora, hay que recordar que ésta se concentraba sobre todo en sectores vitales de los servicios (trabajadores ferrocarrileros, marítimos, portuarios), a los que el Gobierno trataba con cierta consideración. En Río de Janeiro había un mayor contingente de trabajadores nacionales, cuyas relaciones con los patrones y con el Gobierno estaban imbuidas de una tradición paternalista.

Con todo y su crecimiento, la estructura social de São Paulo seguía estando menos diversificada. La clase media orbitaba en torno a la burguesía cafetalera y no había grupos militares inquietos dispuestos a aliarse con "los de abajo". La presencia más numerosa de trabajadores extranjeros, sin raíces en la nueva tierra, favorecía una influencia difusa del anarquismo: los patrones y el Gobierno, en especial éste, eran el "otro", el enemigo.

Desde los albores de la Primera República surgieron expresiones de la organización y movilización de los trabajadores: partidos obreros —con pocos obreros, por cierto— que desaparecieron pronto, sindicatos y huelgas. Los anarquistas trataron realmente de organizar a la clase obrera a nivel nacional, creando en 1906 la Confederación Obrera Brasileña. Pero su movimiento era disperso y pocas veces despertaba atención o preocupación entre las élites. Los derechos se conquistaban ejerciendo presión sobre los patrones, pero no se consignaban en la ley; pasada la presión momentánea, se perdían.

Este cuadro cambió entre 1917 y 1920, cuando un ciclo de huelgas de grandes dimensiones estalló en las principales ciudades del país, sobre todo en Río de Janeiro y São Paulo. El ciclo se debió a dos factores: en primer lugar, al recrudecimiento de la carestía ocasionado por las perturbaciones de la Primera Guerra Mundial y la especulación alimentaria; en segundo lugar, a la oleada revolucionaria de Europa, que se inició con la Revolución de Febrero de 1917 en la Rusia zarista, seguida por la Revolución de Octubre. El movimiento obrero empezó a ser motivo de preocupación y llegó a las primeras planas de los periódicos.

Los trabajadores no pretendían revolucionar a la sociedad, sino mejorar sus condiciones de vida y conquistar un mínimo de derechos. Esto no quiere decir que a muchos no los cautivara el sueño de una sociedad igualitaria. Entre las tres huelgas generales de ese periodo, la de junio-julio de 1917 en São Paulo fue la que con más fuerza prevaleció en la memoria histórica. Tanto que la atención suele centrarse en ella y se olvida el escenario de movilizaciones más amplio.

La oleada de huelgas menguó a partir de 1920, ya sea porque era muy difícil alcanzar conquistas o por la represión. Ésta se

dirigió principalmente contra los líderes obreros extranjeros, que tenían un importante papel como organizadores. A muchos se les expulsó del país.

Sería exagerado decir que antes de la oleada de huelgas de 1917-1920 el Estado no mostraba ningún interés en regular las relaciones laborales o la sindicalización de los obreros. Pero lo cierto es que sólo con esta proliferación de huelgas empezó a pensarse de manera consistente en aprobar una legislación. Las principales propuestas surgieron en el Congreso Nacional y se reunieron en un proyecto de Código Laboral que establecía la jornada de ocho horas, la limitación del trabajo femenino e infantil y la licencia de maternidad. Los industriales y la mayoría de los congresistas destrozaron el proyecto. Sólo sobrevivió la ley que regulaba la indemnización por accidentes de trabajo, aprobada en 1919.

En la década de 1920, mientras el movimiento obrero amainaba, empezó a haber claros indicios de una acción estatal encaminada a intervenir en las relaciones laborales mediante una legislación que concediera derechos mínimos a los trabajadores. Dos leyes fueron importantes en este sentido: la que concedía 10 días de vacaciones a los empleados del comercio y la industria (1925) y la que limitaba el trabajo de los menores. La primera dependía de un reglamento y por presión de los industriales no pudo aplicarse sino hasta 1930.

A principios de la década de 1920 el anarquismo entró en crisis. Lo magro de las conquistas que las huelgas habían alcanzado pese a todo su ímpetu hizo surgir dudas sobre las concepciones de esta corriente. Al mismo tiempo, desde el extranjero llegaban a Brasil noticias de la ruptura entre los anarquistas y los comunistas que habían triunfado en Rusia.

La Revolución de Octubre de 1917 parecía anunciar el "amanecer de una nueva era", y los grupos de izquierda que le ponían reparos aparentemente estaban "contra la marcha de la Historia". Así nació, en marzo de 1922, el Partido Comunista de Brasil (PCB), cuyos fundadores, en su mayoría, habían salido del anarquismo. Esto fue excepcional en América Latina, donde prácticamente todos los partidos comunistas resultaron de escisiones del Partido Socialista. El PCB se mantuvo en la ilegalidad durante casi toda su historia. Hasta 1930 fue un partido de cuadros predominantemente obreros que nunca superó el millar de miembros. Se subordinó a la estrategia de la III Internacional, con sede en Moscú, que sostenía que los países coloniales y semicoloniales debían pasar por una revolución democrático-burguesa como etapa previa a la revolución socialista.

El proceso político en la década de 1920

Tras la Primera Guerra Mundial se hizo más visible la presencia de la clase media urbana en la escena política. En general, este sector de la sociedad solía apoyar figuras y movimientos que enarbolaban un liberalismo auténtico, capaz de hacer valer en la práctica las normas de la Constitución y las leyes del país para convertir la república oligárquica en una república liberal. Esto significaba, entre otras cosas, elecciones limpias y respeto a las garantías individuales. En esos medios se hablaba de una reforma social, pero su mayor esperanza estaba puesta en la educación del pueblo, el voto secreto y la creación de una Justicia Electoral.

Un claro indicio de la creciente participación política de la población urbana fueron las elecciones de 1919. Rui Barbosa,

candidato derrotado en 1910 y 1914, presentó su candidatura a manera de protesta contra la de Epitácio Pessoa. Aunque no contaba con el apoyo de ninguna maquinaria electoral, obtuvo aproximadamente un tercio de los votos y resultó vencedor en el Distrito Federal.

Los ajustes y desgastes entre las oligarquías durante las sucesiones presidenciales adquirieron nuevos tintes. Buen ejemplo de ello fue la contienda por la sucesión del presidente Epitácio Pessoa. El eje São Paulo-Minas Gerais presentó como candidato en los primeros meses de 1921 al gobernador *mineiro* Artur Bernardes. Contra esa candidatura se alzó Rio Grande do Sul con Borges de Medeiros al frente. Medeiros denunciaba que esa coalición política pretendía asegurar recursos para los programas de valorización del café y sostenía que lo que el país necesitaba era equilibrar sus finanzas. Los *gaúchos* también temían que se concretara un proyecto de revisión constitucional —emprendido en efecto por Bernardes en 1926— que limitara la autonomía. Otros estados se unieron a Rio Grande do Sul y juntos conformaron la Reacción Republicana, que presentó a Nilo Peçanha como candidato de oposición. Nilo era un político fluminense de origen plebeyo y partidario del florianismo.

En el transcurso de la contienda electoral salió a relucir la insatisfacción de los militares. En el Ejército se tenía la impresión general de que la candidatura de Bernardes era antimilitar, y esta sensación se exacerbó por unas cartas publicadas en octubre de 1924 en el diario *Correio da Manhã*, de Río de Janeiro. Se trataba de dos misivas que supuestamente había enviado Bernardes a un líder político de Minas Gerais y que contenían duros insultos contra los militares. Estos "documentos", con los que se procuraba exacerbar la predisposición de las Fuerzas Armadas contra la candidatura de Bernardes, atizaron el fuego; ya habían logrado su objetivo

cuando, poco antes de las elecciones del 1º de marzo de 1922, dos falsarios asumieron su autoría.

La situación se complicó aún más en junio de 1922. Para entonces Bernardes era el presidente electo, pero aún no había tomado posesión, cosa que no habría de suceder sino hasta el 15 de noviembre. El Club Militar llevó a cabo una protesta contra la utilización, por parte del Gobierno, de tropas del Ejército para intervenir en la política local de Pernambuco. En respuesta el Gobierno determinó cerrar el Club Militar basado en una ley contra las asociaciones nocivas para la sociedad.

Estos hechos precipitaron el estallido del movimiento *tenentista*, así llamado porque sus principales figuras fueron oficiales de los mandos medios del Ejército: ante todo tenientes, pero también capitanes.

El primer acto de rebelión fue la Revuelta del Fuerte de Copacabana, que tuvo lugar en Río de Janeiro el 5 de julio de 1922. La atmósfera de insultos falsos o verdaderos contra el Ejército y la represión de que había sido objeto el Club Militar llevaron a los jóvenes "tenientes" a sublevarse para "salvar el honor del Ejército". El motín no se extendió a otras unidades. Tras los primeros disparos de cañón, los rebeldes fueron bombardeados y rodeados. Al día siguiente cientos de ellos se entregaron, atendiendo a un llamado del Gobierno. Pero un grupo se dispuso a resistir. El fuerte sufrió bombardeos por mar y tierra. Diecisiete militares, con la adhesión fortuita de un civil, decidieron salir a la playa de Copacabana a enfrentar a las fuerzas gubernamentales. El intercambio de disparos dejó un saldo de 16 muertos. Los tenientes Siqueira Campos y Eduardo Gomes resultaron heridos. Con los "Dieciocho del Fuerte" empezó a surgir la leyenda del *tenentismo*.

Dos años después estalló en São Paulo el llamado Segundo Cinco de Julio. La fecha se eligió en homenaje al primer

levantamiento; el sitio, por la importancia del estado de São Paulo. La Revolución de 1924 estuvo mejor preparada y su objetivo explícito era derrocar a Artur Bernardes. Durante la década de 1920 se concentró en este político el odio que los "tenientes" sentían por la oligarquía dominante. La dirección formal del movimiento se atribuyó al general retirado Isidoro Dias Lopes: un oficial *gaúcho* que se había puesto de parte de los federalistas en tiempos de Floriano. Entre los oficiales más activos se contaban los hermanos Távora (Juarez y Joaquim), Eduardo Gomes, Estillac Leal, João Cabanas y Miguel Costa. La presencia de Miguel Costa —oficial de prestigio en la Fuerza Pública paulista— aportaba a los rebeldes el apoyo de una fracción de la milicia estatal.

El movimiento se inició con la toma de algunos cuarteles. Luego hubo una batalla por el control de São Paulo y los revolucionarios se apoderaron del Gobierno de la ciudad. La presencia de los "tenientes" en la capital paulista se extendió hasta el 27 de julio. Ese día abandonaron la capital y se desplazaron por el interior del estado, hacia el oeste. Se formó así la llamada Columna Paulista, que se estableció en el oeste de Paraná, cerca de la desembocadura del río Iguazú. Allí las tropas provenientes de São Paulo se enfrentaron con los legalistas mientras esperaban a otra columna que llegaría desde Rio Grande do Sul.

En Rio Grande do Sul había estallado, en octubre de 1924, una revuelta *tenentista* que tuvo como figuras destacadas al teniente João Alberto y al capitán Luís Carlos Prestes. El movimiento contó con el apoyo de la oposición *gaúcha* contra el PRR, de modo que combinó el *tenentismo* con la disidencia política local. Luego de varios combates, los *gaúchos* se dirigieron a Paraná para reunirse con las fuerzas paulistas. Las dos columnas se unieron en abril de 1925 y decidieron recorrer Brasil para propagar la

idea de la revolución y levantar al pueblo contra las oligarquías. Tenían también la esperanza de distraer la atención del Gobierno para permitir que estallaran nuevas revueltas en los centros urbanos.

Así nació la Columna Miguel Costa-Luís Carlos Prestes, que al final fue más conocida como la Columna Prestes. Ésta emprendió una extraordinaria marcha por el interior del país; recorrió unos 24 000 kilómetros hasta febrero-marzo de 1927, cuando sus últimos miembros dieron por terminado el movimiento y se internaron en Bolivia y Paraguay. La columna nunca tuvo más de 1 500 integrantes —su número osciló mucho con la entrada y salida de participantes transitorios— y evitó chocar con fuerzas militares importantes desplazándose rápidamente de un lugar a otro. El apoyo de la población rural resultó ilusorio. Las posibilidades de éxito militar de la columna eran prácticamente nulas, pero tuvo un efecto simbólico entre aquellos sectores de la población urbana que no estaban satisfechos con la élite dirigente. Fuese como fuese, a sus ojos era posible cambiar los destinos de la república: lo demostraban esos héroes que arrostraban toda clase de peligros para salvar a la nación.

El *tenentismo* fue sobre todo un movimiento del Ejército. En la Marina, el único episodio de importancia que involucró a los mandos medios fue la revuelta del acorazado *São Paulo*, encabezada por el teniente Hercolino Cascardo, en noviembre de 1924. Luego de un intercambio de disparos con las fortalezas de la bahía de Guanabara, el acorazado partió rumbo a altamar y llegó a Montevideo, donde los rebeldes se exiliaron.

La revuelta más importante en la Marina durante la Primera República tuvo como protagonistas a los marineros reclutados entre los sectores más pobres de la población, casi todos negros y mulatos. Fue la llamada Revuelta de la Chibata,[1] que estalló el 22 de noviembre de 1910. Sus participantes no querían derrocar al

Gobierno, sino acabar con el maltrato y la violencia de los castigos físicos a los que se veían sometidos.

El movimiento se inició de manera casi simultánea en varios buques de guerra fondeados en Guanabara tras la muerte sorpresiva de varios oficiales. Uno de sus principales líderes fue el marinero João Cândido. Ante la amenaza de la escuadra sublevada, el Congreso decretó una amnistía, siempre y cuando los revoltosos se sometieran a las autoridades, y se comprometió a eliminar los azotes del código disciplinario de la Marina.

Los sublevados aceptaron las condiciones y así concluyó el movimiento. Lo sucedió una revuelta de los fusileros navales a la que sobrevino una intensa represión que no perdonó a João Cândido ni a otros líderes de la Revuelta de la Chibata, aunque no estaban involucrados con los fusileros navales. Un "barco de la muerte" —el *Satélite*— salió de Río de Janeiro hacia la Amazonia. Llevaba a los marineros rebeldes, junto con ladrones, proxenetas y prostitutas. Muchos murieron o fueron fusilados en el camino. A los integrantes del levantamiento de noviembre se les acusó de participar en el episodio de los fusileros navales. Finalmente fueron absueltos, pero pasaron 18 meses en la cárcel, incomunicados y sufriendo violencias físicas.

¿Qué representó el *tenentismo*? ¿Cuáles eran sus objetivos? Para responder a estas preguntas es necesario recordar qué sucedía dentro del Ejército y en la sociedad.

La formación de los oficiales había cambiado mucho desde los primeros tiempos de la República. La Escuela Militar de Praia Vermelha cerró definitivamente en 1904, en ocasión de su última revuelta. Hasta 1911 el Gobierno sólo mantuvo en actividad la Escuela de Guerra de Porto Alegre. Ese mismo año se fundó en Río de Janeiro la Escuela Militar del Realengo. Ésta tenía un programa educativo muy distinto al de su antecesora: se centraba en materias de conocimiento militar, sin la

diversidad de la vieja escuela, influida por el positivismo. El propósito del Realengo no era formar soldados-ciudadanos, con un pie en el Ejército y otro en la sociedad civil y en la política: su cometido era formar soldados profesionales.

El entrenamiento de los oficiales mejoró gracias al viaje de tres grupos a Alemania entre 1906 y 1910. Hermes da Fonseca era un entusiasta de la organización militar alemana y había presenciado las maniobras castrenses de ese país en 1910. Años después, en 1920, el Ejército se renovó aún más gracias a la llegada de la Misión Francesa. Alemania había perdido la guerra y era inevitable buscar otro modelo.

Pero, aun siendo más profesionales, los oficiales del Ejército no podían dejar de tener una concepción de la sociedad y del sistema de poder existente. Durante el gobierno del mariscal Hermes, un conjunto de militares y civiles había conformado una especie de grupo de presión en torno al presidente. Se les llamó "salvacionistas" porque su objetivo era salvar a las instituciones republicanas. ¿En qué consistía esa "salvación"? Según ellos, había que reducir el poder de las oligarquías en aquellas zonas en las que esto parecía más fácil y donde las desigualdades sociales eran más impactantes. Es posible ver a los "tenientes" como herederos de los "salvacionistas" en un contexto en que los problemas dentro y fuera del Ejército se agravaban. Además, cuando el *tenentismo* surgió ya no había un presidente militar, sino presidentes civiles a los que se veía con muchas reservas.

En lo que respecta al Ejército, uno de los principales motivos de protesta entre los mandos medios era la rigidez de la carrera, que dificultaba la apertura de vacantes para ascender a los mandos más altos. También se criticaba el comportamiento de los mandos superiores, a los que se acusaba de complicidad con Gobiernos corruptos. Los "tenientes" querían, así, purificar no

sólo a la sociedad, sino también a la institución de la que provenían.

En la década de 1920 los militares rebeldes no tenían una propuesta clara de reformulación política. Querían dotar al país de un poder centralizado que educara al pueblo y ejerciera una política vagamente nacionalista. Se trataba de reconstruir al Estado para construir la nación. Sostenían que uno de los grandes males del dominio oligárquico era la fragmentación de Brasil, su transformación "en veinte feudos" a cuyos señores elegía la política reinante.

Aunque en esa época no llegaron a formular un programa antiliberal, los "tenientes" no creían que el "liberalismo auténtico" fuera la vía hacia la recuperación del país. Hacían reparos a las elecciones directas y al sufragio universal, insinuando que se inclinaban por una vía autoritaria para reformar el Estado y la sociedad.

¿Fue el *tenentismo*, como suele afirmarse, un movimiento representativo de la clase media? Aunque gozó de amplias simpatías en ese sector social durante la década de 1920, reducirlo a una expresión de la clase media sería simplificar. En cuanto a su origen social, los "tenientes" provenían en su mayoría de familias de militares o de ramas empobrecidas de familias de la élite del nordeste del país. Pocos fueron reclutados entre la población urbana de Río o de São Paulo. Hay que recordar, sobre todo, que los "tenientes" eran tenientes, o sea, miembros del Ejército. Su visión del mundo se había forjado principalmente a través de su socialización dentro de las Fuerzas Armadas. Era una visión específicamente suya, tal como eran específicas sus quejas contra la institución de la que formaban parte.

Con excepción de algunos apoyos, los "tenientes" terminaron enfrentando al Gobierno prácticamente solos. No pudieron

atraerse al Ejército. Hasta 1930 ningún sector considerable de la élite civil se mostró dispuesto a jugarse una carta tan radical. El radicalismo no estaba en el contenido de las acciones *tenentistas*, sino en su método: el enfrentamiento armado.

El presidente Artur Bernardes (1922-1926), originario de Minas Gerais, gobernó en una coyuntura difícil, decretando continuamente estados de sitio. Muy impopular en las zonas urbanas, sobre todo en Río de Janeiro, ejerció una represión dura para los estándares de la época. La insatisfacción popular era resultado de un cuadro financiero complejo. Las emisiones masivas de moneda que Epitácio Pessoa llevó a cabo entre 1921 y 1923 para emprender la tercera valorización del café devaluaron el cambio e incrementaron la inflación.

Durante el gobierno de Bernardes tuvo lugar un hecho importante en el terreno de la política cafetalera. Una de las mayores preocupaciones del presidente eran los pagos de la deuda externa, que se incrementarían a partir de 1927, cuando se retomara el servicio no sólo de los intereses, sino de la deuda principal. Una misión financiera inglesa encabezada por lord Montagu visitó Brasil a finales de 1924 para evaluar la situación del país. En el informe que envió a la presidencia de la república, la misión señalaba el serio riesgo que representaban las operaciones de valorización y las emisiones de papel moneda. Evidentemente los acreedores internacionales temían que Brasil no pudiera cumplir sus compromisos.

Ante semejante contexto el Gobierno federal se mostraba poco dispuesto a cargar con los gastos de la defensa del café. Al mismo tiempo el sector cafetalero se quejaba cada vez más de su "situación de abandono". La solución fue transferir la defensa de este producto de la Unión al estado de São Paulo, que la asumió permanentemente. Esto cambió los derroteros de la política

cafetalera. En adelante, el Gobierno ya no protegería al sector únicamente en los momentos de crisis. La protección sería permanente. El Gobierno paulista asumía la atribución de regular la entrada del grano al puerto de Santos y de comprar la mercancía cuando lo considerara necesario. Aparentemente, la acción del Gobierno del estado acabaría para siempre con las crisis del café, o por lo menos las suavizaría.

La sucesión de Bernardes fue tersa. La rotación entre São Paulo y Minas se cumplió con la elección de Washington Luís, aunque Washington era un "paulista de Macaé" (había nacido en esa ciudad fluminense). El principal sueño del nuevo presidente era estabilizar la moneda con el objetivo final de volver convertible todo el papel moneda que había en circulación.

En la década de 1920, la evolución política de Rio Grande do Sul y de São Paulo siguió caminos opuestos. Mientras que en Rio Grande do Sul, después de un gran enfrentamiento armado, la élite tendió a agruparse, en São Paulo se rompió el monopolio partidista que detentaba el PRP. Tras la guerra civil de Rio Grande do Sul se eligió como gobernador del estado, en 1927, a un exministro de Hacienda de Washington Luís: Getúlio Vargas. Getúlio Vargas impulsó un acuerdo definitivo entre el PRR y la oposición, que fortaleció mucho la presencia *gaúcha* a nivel federal, como habrían de demostrarlo los acontecimientos de 1929-1930.

En São Paulo, la diferenciación de la sociedad y otros factores impidieron que el PRP acogiera todos los intereses —muchos de ellos personales— y abrazara la diversidad de concepciones políticas. Las disidencias en el interior del partido no eran novedad, pero hasta la década de 1920 su impacto había sido limitado. En 1926 surgió el Partido Democrático (PD), con un programa liberal. Su objetivo básico era hacer una reforma política a través del voto secreto y obligatorio, la representación

de las minorías, la independencia de los tres poderes y la atribución de la vigilancia electoral al Poder Judicial.

Al menos hasta 1930, los cuadros dirigentes del PD fueron en su mayoría profesionales liberales de prestigio y jóvenes hijos de hacendados cafetaleros. Como presidente del partido se eligió al respetado consejero Antônio Prado, representante de la gran burguesía paulista y viejo adversario del peerrepismo. El PD atrajo a algunos inmigrantes, pero la línea de su órgano —el *Diário Nacional*— muestra que su base era la clase media tradicional. Los inmigrantes, sobre todo los "plutócratas de la industria", eran blanco de violentas críticas.

El PD se distinguía del PRP por su liberalismo, que el partido en el poder había repudiado en la práctica, y por la relativa juventud de sus integrantes. Despertó entusiasmo en un sector considerable de la clase media que no había gozado de los favores del peerrepismo y que aspiraba a ampliar sus oportunidades en la sociedad y en la administración pública. No es posible definir al PD como un partido moderno que controlaba las grandes ciudades, mientras el arcaico PRP controlaba el campo. Los demócratas tenían reductos en las zonas rurales y recurrían allí a prácticas *coronelistas* idénticas a las de sus adversarios.

La división partidista dificultó a São Paulo incidir en el escenario político nacional. Con Rio Grande do Sul sucedió lo contrario.

La Revolución de 1930

A principios de 1929, tras la presidencia relativamente serena de Washington Luís, las élites de los grandes estados se dividieron, lo cual condujo al fin de la Primera República.

Los conflictos comenzaron cuando, sorprendentemente, Washington Luís insistió en la candidatura de un paulista como su sucesor. Por si fuera poco, se empeñó en que ese sucesor fuera el entonces presidente de São Paulo, Júlio Prestes. La actitud de Washington Luís orilló a los *mineiros* y a los *gaúchos* a establecer una alianza, y se reprodujo así, hasta cierto punto, la alineación de fuerzas de la campaña de 1909-1910.

A mediados de 1929, luego de varias conversaciones, los opositores presentaron la candidatura de Getúlio Vargas a la presidencia y de João Pessoa a la vicepresidencia. Este último era sobrino de Epitácio Pessoa y presidente de Paraíba. Juntos conformaron la Alianza Liberal, en cuyo nombre se llevaría a cabo la campaña. Getúlio recibió el apoyo de los demócratas de São Paulo, al tiempo que en Minas una escisión del PRM apoyó a Júlio Prestes.

El programa de la Alianza Liberal reflejaba las aspiraciones de las clases dominantes regionales que no estaban asociadas con el núcleo cafetalero, y su objetivo era sensibilizar a la clase media. Sostenía la necesidad de fomentar la producción nacional en general, y no únicamente la cafetalera; se oponía a los programas de valorización de este producto en nombre de la ortodoxia financiera y, por lo mismo, no difería a este respecto de la política de Washington Luís. Proponía algunas medidas para proteger a los trabajadores. Insistía sobre todo en defender las libertades individuales, la amnistía (un guiño a los tenientes) y la reforma política para garantizar la llamada "verdad electoral".

Pese a las reticencias de Getúlio, que durante algún tiempo trató de conciliar con el presidente, la campaña ganó fuerza. Caravanas liberales conformadas por los elementos más jóvenes recorrieron las principales ciudades del nordeste. El candidato

fue recibido con entusiasmo en los mítines que se celebraron en Río de Janeiro y São Paulo.

En octubre de 1929, en plena campaña electoral, estalló la crisis mundial y esto puso a la caficultura en una situación complicada. La defensa permanente del café había hecho creer que se tendría una ganancia segura, garantizada por el Estado. En consecuencia, las plantaciones se habían extendido en el estado de São Paulo. Mucha gente pidió préstamos con elevados intereses para cultivar café. La crisis provocó una brusca caída en los precios internacionales. Como el consumo se retrajo, fue imposible compensar la disminución de precios mediante un incremento en el volumen de las ventas. Los hacendados que se habían endeudado contando con ganancias futuras quedaron arrinconados.

El sector cafetalero entró entonces en conflicto con el Gobierno federal. Los caficultores solicitaron a Washington Luís que hiciera frente a la crisis concediendo nuevos financiamientos y una moratoria para sus deudas. Preocupado por mantener el plan de estabilidad cambiaria —sin éxito, por cierto—, el presidente no accedió. Aunque en São Paulo se levantó una ola de descontento, éste no se tradujo en una ruptura entre el sector cafetalero y el Gobierno federal. La crisis no tuvo mayores consecuencias electorales. Aunque el PD se había sumado a la Alianza Liberal, no había por qué creer que la victoria de la oposición redundaría en una mayor atención a los intereses cafetaleros.

Júlio Prestes ganó las elecciones del 1º de marzo de 1930. Aunque la Alianza Liberal condenaba verbalmente ciertos recursos políticos habituales, no por ello dejó de usarlos. Las "maquinarias electorales" produjeron votos en todos los estados, incluso en Rio Grande do Sul, donde Getúlio ganó por 298 627 votos contra 982.

Los cuadros jóvenes de la oposición no aceptaron el resultado de las elecciones y se disponían a seguir el camino que los "tenientes" habían hecho prácticamente solos. Aunque derrotado, el movimiento *tenentista* seguía siendo una fuerza importante por su experiencia militar y su prestigio dentro del Ejército. Había entonces condiciones para un acercamiento entre los políticos más jóvenes y los militares rebeldes, que de hecho tuvo lugar a pesar de las reservas de ambas partes.

La única excepción importante fue la de Luís Carlos Prestes. En mayo de 1930 la figura de más prestigio entre los "tenientes" lanzó un manifiesto en el que se declaraba socialista revolucionario y condenaba el apoyo a las oligarquías disidentes. Desde su perspectiva, las fuerzas en pugna no eran sino un juguete en la lucha más amplia entre el imperialismo británico y el estadounidense por el control de América Latina.

Prestes estaba influido por los comunistas desde una reunión que tuvo con uno de los fundadores del PCB —Astrojildo Pereira— cuando estaba exiliado en Bolivia. Esta influencia creció a través de lecturas y de su contacto con líderes comunistas argentinos y uruguayos. Pero Prestes no se afilió de inmediato al PCB. Junto con un pequeño grupo fundó la Liga de Acción Revolucionaria (LAR). Durante algunos años el PCB condenó el "personalismo prestista", hasta que por orden de Moscú permitió el ingreso de Prestes al partido en 1934.

Hacia mediados de 1930 la conspiración revolucionaria marchaba mal. Pero un acontecimiento inesperado le dio fuerza. El 26 de julio, João Dantas, uno de los adversarios políticos de João Pessoa, asesinó a éste en un café de Recife. Los motivos del crimen fueron tanto privados como públicos. En el momento, sólo se hizo énfasis en los públicos, pues los otros habrían dañado la figura de João Pessoa como un mártir de la revolución. La muerte de Pessoa tuvo gran resonancia y se explotó

políticamente. Su funeral en la capital de la república, adonde se trasladó el cuerpo, congregó a grandes masas. Esto daba a los oposicionistas un arma poderosa. En adelante les resultó más fácil desarrollar su organización revolucionaria.

Un aspecto importante de esto fue su avance dentro del Ejército. Tanto es así que el mando general del movimiento armado se le dio a un hombre al que se consideraba representante de sectores clave de las Fuerzas Armadas. Se trataba del entonces teniente coronel Góis Monteiro, nacido en Alagoas, cuya carrera estaba vinculada con Rio Grande do Sul. Góis conocía a Getúlio y a otros políticos *gaúchos* desde 1906, cuando estudiaba en la Escuela Militar, y había estado de su parte en las pugnas internas del estado. No había sido revolucionario en la década de 1920: al contrario, había combatido a la Columna Prestes en el nordeste.

La revolución estalló en Minas Gerais y Rio Grande do Sul el 3 de octubre de 1930. En São Paulo, para efectos prácticos, el PD se mantuvo al margen de los preparativos revolucionarios. En Minas hubo cierta resistencia. En el nordeste el movimiento se inició la madrugada del día 4, bajo el mando de Juarez Távora, con Paraíba como centro de operaciones. Gracias al apoyo de la población de Recife, Juarez aseguró el triunfo de la revolución en Pernambuco. El pueblo tomó edificios federales y un depósito de armas, mientras los ferrocarrileros de la Great Western se ponían en huelga.

En el nordeste la situación pronto se inclinó a favor de los revolucionarios y las atenciones se centraron en los contingentes militares que, tras tomar el control del sur del país, se preparaban para invadir el estado de São Paulo. Pero antes del choque decisivo, el 24 de octubre, en Río de Janeiro miembros de la cúpula militar depusieron al presidente de la república en

nombre del Ejército y la Marina, e instituyeron una Junta Provisional de Gobierno.

La Junta Provisional trató de mantenerse en el poder, pero reculó ante las manifestaciones populares y la presión de los revolucionarios del sur. Getúlio Vargas viajó en tren a São Paulo y desde allí se dirigió a Río, adonde llegó precedido por 3 000 soldados *gaúchos*. Ese hombre, que al mando del país habría de insistir en la unidad nacional, se esmeró entonces en mostrar sus rasgos regionales. Llegó a la capital de la república en uniforme militar y ostentando un gran sombrero de las pampas. Para rematar el simbolismo del triunfo regional, los *gaúchos* amarraron sus caballos en un obelisco de la avenida Rio Branco. La toma de posesión de Getúlio Vargas como presidente del país el 3 de noviembre de 1930 marca el fin de la Primera República y el inicio de nuevos tiempos, entonces poco claros.

El movimiento revolucionario de 1930 en Brasil se inserta en una coyuntura de inestabilidad detonada por la crisis mundial de 1929 que afectó a toda América Latina. Once episodios revolucionarios, predominantemente militares, tuvieron lugar en la región entre 1930 y 1932. El golpe militar del general Uriburu, en Argentina, en septiembre de 1930 sentó un precedente para Brasil, donde los medios de la oposición lo aplaudieron como ejemplo a seguir.

No fueron representantes de una supuesta nueva clase social —ya fuera ésta la clase media o la burguesía industrial— quienes hicieron la Revolución de 1930. La clase media aportó la base de la Alianza Liberal, pero era demasiado heterogénea y dependiente de las fuerzas agrarias como para formular en la arena política un programa en su propio nombre.

En cuanto a la clase de los industriales, recordemos que la formación social de la Primera República había acentuado los

rasgos regionales de sus diversos sectores. Como muestra el ejemplo de São Paulo, a lo largo de los años la burguesía industrial y el sector agrario empezaron a diferenciarse: prueba de ello fue la creación del Centro de las Industrias del Estado de São Paulo (CIESP) en 1928. Pero esta diferenciación no llegó a romper la alianza de la clase dominante en nombre de los intereses paulistas. Los grandes industriales contaban con la protección del PRP, que los representaba. Tampoco tenían razones para simpatizar con la oposición, pues eran blanco de sus críticas. Por eso no es de sorprender que las asociaciones de industriales apoyaran abiertamente la candidatura de Júlio Prestes.

En Río de Janeiro los industriales se organizaron en el Centro Industrial de Brasil (CIB). En los últimos años de la década de 1920 figuras representativas de la burguesía industrial carioca ocuparon puestos en el Gobierno. En 1929, por ejemplo, en plena crisis económica, el gran industrial textil Manuel Guilherme da Silveira fue elegido presidente del Banco de Brasil. Cuando estalló la Revolución de 1930, el CIB expresó su solidaridad con Washington Luís y se refirió a la insurrección como algo "muy perjudicial para la situación económica del país". Es verdad que, poco después de la victoria de los revolucionarios, los industriales de Río de Janeiro trataron de acercarse al Gobierno. Pero esto no significa que vieran a Getúlio Vargas como representante del empresariado; lo que quiere decir es que, ya fuera antes o después de 1930, la cercanía con el Estado seguía siendo un factor decisivo para el fortalecimiento de la burguesía industrial.

Los vencedores de 1930 conformaban un mosaico heterogéneo desde el punto de vista social y político. Se habían unido contra un mismo adversario, pero desde perspectivas distintas: los viejos oligarcas, típicos representantes de la clase dominante

regional, sólo querían que se diera mayor atención a su región y recibir una cuota de poder personal más amplia y con los menores cambios posibles; los cuadros civiles más jóvenes se inclinaban por reformular el sistema político y se asociaron transitoriamente con los tenientes, formando el grupo de los llamados "tenientes civiles"; el movimiento *tenentista* —al que los altos mandos de las Fuerzas Armadas veían como una amenaza— defendía la centralización del poder y la adopción de algunas reformas sociales; el PD pretendía controlar el Gobierno del estado de São Paulo y que se adoptaran efectivamente los principios de un Estado liberal, lo que aparentemente aseguraría su predominio.

A partir de 1930 y sin grandes rupturas se dio un cambio de las élites que ocupaban el poder. Cayeron los cuadros oligárquicos tradicionales; ascendieron los militares, los técnicos titulados, los jóvenes políticos y, un poco más tarde, los industriales.

Muy pronto el nuevo Gobierno procedió a centralizar en sus manos tanto las decisiones económico-financieras como las de naturaleza política. Así se convirtió en el árbitro de los diversos intereses en pugna. El poder de tipo oligárquico, basado en la fuerza de los estados, perdió terreno. Las oligarquías no desaparecieron ni tampoco el modelo de relaciones clientelistas. Pero ahora era el centro el que irradiaba hacia la periferia, y no al revés. A partir de 1930 nació un nuevo tipo de Estado que se distinguía del Estado oligárquico no sólo por su centralización y por un mayor grado de autonomía, sino también por otros elementos: *1*) sus acciones en el terreno económico se fueron enfocando en promover la industrialización; *2*) sus acciones en el terreno social tendieron a dar cierta protección a los trabajadores urbanos, incorporándolos a una alianza de clases promovida por el poder estatal, y *3*) se atribuyó un papel central

a las Fuerzas Armadas —en especial al Ejército— como un apoyo para crear una industria de base y como un factor del orden interno.

El Estado getulista promovió el capitalismo nacional sobre dos pilares: el aparato del Estado y las Fuerzas Armadas; socialmente se apoyaba en una alianza entre la burguesía industrial y sectores de la clase trabajadora urbana. Así, y no porque hubiera participado en la Revolución de 1930, la burguesía industrial ascendió y empezó a tener voz y fuerza dentro del Gobierno. De hecho, el proyecto de industrialización se debió mucho más a los cuadros técnicos del Gobierno que a los empresarios.

Estos cambios no se dieron de la noche a la mañana ni obedecieron a un plan global del Gobierno revolucionario. Fueron llevándose a cabo a lo largo de los años, unas veces con más énfasis en un aspecto y otras en otro. Así, sólo en retrospectiva ha quedado clara la visión del conjunto.

---

[1] *Chibata* en portugués quiere decir 'látigo' (N. de la T.).

4. EL ESTADO GETULISTA (1930-1945)

La acción gubernamental

Una vez que obtuvo el poder, en octubre de 1930, Getúlio Vargas lo conservó por 15 años, primero en calidad de jefe del Gobierno provisional; luego como presidente electo por votación indirecta, y, finalmente, como dictador. Volvería a la presidencia por voto popular en 1950, pero no llegaría a concluir ese mandato, pues se suicidó en 1954.

El personaje más significativo de la historia política brasileña del siglo XX venía de una familia de estancieros de São Borja, en la zona *gaúcha* de Campanha. Su padre —líder local del Partido Republicano Riograndense (PRR)— había estado implicado en la lucha contra los federalistas. Getúlio siguió hasta 1930 la carrera tradicional de los cuadros del PRR, bajo la protección de Borges de Medeiros. Fue fiscal, diputado estatal, líder de la bancada *gaúcha* en la Cámara federal, ministro de Hacienda de Washington Luís y presidente de Rio Grande do Sul. En 1930 saltó a la presidencia de la república, encarnando una línea de acción muy distinta a la de los políticos oligárquicos.

A principios de la década de 1930 el Gobierno provisional buscó consolidarse en medio de grandes incertidumbres. La crisis mundial había dejado la producción agrícola sin mercado y había causado la ruina de los hacendados y el desempleo en las grandes ciudades. Los problemas financieros iban en aumento: se desplomaba el ingreso por concepto de exportaciones y la moneda convertible se había evaporado.

En el terreno político las oligarquías de los estados que habían triunfado en 1930 trataban de reconstruir el Estado de acuerdo con los viejos moldes. Los "tenientes" se oponían a esa tendencia y apoyaban a Getúlio en su propósito de reforzar el poder central. Pero al mismo tiempo constituían una corriente difícil de controlar, que ponía en riesgo la jerarquía en el interior del Ejército.

Una base de apoyo importante para el Gobierno fue la Iglesia católica. La colaboración entre Iglesia y Estado no era nueva; se remontaba a la década de 1920, sobre todo a partir de la presidencia de Artur Bernardes, pero ahora se volvía más estrecha. Uno de sus momentos más simbólicos fue la inauguración de la estatua del Cristo Redentor en el Corcovado el 12 de octubre de 1931, fecha del descubrimiento de América. Getúlio y todo el gabinete se apiñaron en la estrecha plataforma de la estatua que dominaba Río de Janeiro. Allí, el cardenal Leme consagró la nación "al Santísimo Corazón de Jesús, reconociéndolo para siempre como su Rey y Señor". La Iglesia llevó a la masa de la población católica a apoyar al nuevo Gobierno. Éste, a cambio, tomó medidas relevantes en favor de la Iglesia; entre ellas destaca un decreto promulgado en abril de 1931 que permitía la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

El Gobierno provisional pronto empezó a tomar medidas centralizadoras. En noviembre de 1930, al disolver el Congreso Nacional, Vargas no sólo asumió el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo, incluso a nivel estatal y municipal. Destituyó a todos los antiguos gobernadores, con excepción del nuevo gobernador electo de Minas Gerais, y en su lugar nombró interventores federales. En agosto de 1931 el llamado Código de los Interventores formalizó las normas por las que éstos quedaban subordinados al poder central; también limitó el margen de

acción de los estados, prohibiendo que contrajeran préstamos con el extranjero sin autorización del Gobierno federal, e impidiendo que dedicaran más de 10% del gasto ordinario a los servicios de la policía militar, que dotaran a las policías estatales de artillería y aviación, y que las armaran en un grado superior al del Ejército.

La centralización se extendió también al campo económico. El gobierno de Vargas no abandonó —ni podría abandonar— al sector cafetalero. Pero trató de concentrar en sus manos la política cafetalera; lo logró a partir de 1933, con la creación del Departamento Nacional del Café (DNC).

No obstante, el problema de fondo continuaba. ¿Qué hacer con la parte de las reservas actuales y futuras que no tenía salida en el mercado internacional? La respuesta llegó en julio de 1931. El Gobierno compraría el café con los ingresos derivados del impuesto a la exportación y de la confiscación cambiaria, es decir, de una fracción de los ingresos fruto de las exportaciones, y destruiría físicamente parte del producto. De este modo trataría de reducir la oferta y mantener los precios. Era una decisión semejante a la que llevó a destruir la uva en Argentina o a sacrificar rebaños de carneros en Australia. El esquema brasileño duró mucho tiempo, aunque en algunos aspectos fue cambiando con el paso de los años. La destrucción del café no se detuvo sino hasta julio de 1944. En 13 años se eliminaron 78.2 millones de costales, cantidad que equivalía a tres años de consumo mundial.

A mediados de 1931 la situación financiera del país se hizo insostenible. En septiembre de ese año los pagos de la deuda pública externa se suspendieron y se reintrodujo el monopolio cambiario del Banco de Brasil. Esta última medida se había decretado durante los últimos meses de la presidencia de

Washington Luís, pero el Gobierno revolucionario la había revocado.

Uno de los aspectos más coherentes del gobierno de Vargas fue la política laboral. Pasó por varias fases entre 1930 y 1945, pero desde el principio se mostró innovadora en comparación con la del anterior periodo. Sus principales objetivos fueron reprimir los esfuerzos de organización de la clase trabajadora urbana que escaparan al control del Estado y atraerse el apoyo difuso de los trabajadores.

Para alcanzar el primer objetivo, Vargas recurrió a una represión bastante más sistemática que la que se había practicado durante la Primera República, represión que se abatió, ya desde 1930, sobre los partidos y organizaciones de izquierda, especialmente sobre el Partido Comunista de Brasil (PCB). En cuanto al segundo objetivo, la atención esporádica que se había dado al problema de la clase trabajadora urbana en la década de 1920 dio paso a una política gubernamental específica. Esto se anunció desde noviembre de 1930, cuando se creó el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio. A continuación se promulgaron leyes que protegían a los trabajadores e integraban los sindicatos al Estado, y se formaron órganos dedicados al arbitraje de los conflictos entre patrones y obreros: las "Juntas de Conciliación y Juicio".

La integración de los sindicatos al Estado se estableció mediante un decreto promulgado en marzo de 1931. Éste contenía disposiciones sobre la sindicalización de las clases obreras y patronales, aunque las primeras constituían su principal interés. El sindicato se definió como un órgano consultivo y de colaboración con el poder público. Se adoptó el principio de unidad sindical, es decir, el reconocimiento por parte del Estado de un solo sindicato por categoría profesional. La sindicalización no sería obligatoria. El Gobierno se atribuyó el

control de la vida sindical al decretar que funcionarios y empleados del gabinete supervisaran las asambleas sindicales. La legalidad de un sindicato dependía del reconocimiento ministerial y podía revocarse si no se cumplía con una serie de normas. Este decreto estuvo en vigor hasta julio de 1934, cuando fue sustituido por otro. La principal diferencia era el principio de pluralidad sindical; en la práctica, esa pluralidad no existió, pero no desapareció de la legislación sino hasta 1939. Las asociaciones de industriales y comerciales terminarían aceptando la legislación laboral, aunque al principio se opusieron a las medidas gubernamentales, sobre todo a aquellas que concedían derechos a los trabajadores.

Las organizaciones obreras controladas por las corrientes de izquierda trataron de resistirse a que el Estado las integrara, pero no tuvieron éxito. Además del Gobierno, las mismas bases de esas organizaciones presionaron por su legalización. Varias prestaciones, como las vacaciones y la posibilidad de defender derechos ante las Juntas de Conciliación y Juicio, dependían de que los trabajadores fueran miembros de un sindicato reconocido por el Gobierno. A finales de 1933 el viejo sindicalismo autónomo había desaparecido y los sindicatos, para bien o para mal, se habían integrado a la legislación.

Los vencedores de 1930 se ocuparon de inmediato del problema de la educación. Su principal objetivo era formar una élite más amplia, mejor preparada intelectualmente. Los intentos de reformas educativas se remontaban a la década de 1920, pero en esa época habían sido iniciativa de los distintos estados de acuerdo con el modelo de la república federativa. A partir de 1930 las medidas orientadas a crear un sistema educativo y promover la educación cambiaron de sentido y fluyeron principalmente del centro hacia la periferia. La educación formó parte de la visión general centralizadora. Un

parteaguas en este sentido fue la creación del Ministerio de Educación y Salud Pública en noviembre de 1930.

En el terreno educativo, como en otros, las iniciativas del gobierno de Vargas tuvieron una inspiración autoritaria. El Estado trató de organizar la educación de arriba hacia abajo, sin que esto involucrara una gran movilización de la sociedad, si bien no promovió de manera consistente una formación escolar totalitaria que abarcara todos los aspectos del universo cultural.

La educación estuvo impregnada de una mezcla de valores jerárquicos y de conservadurismo derivado de la influencia católica, pero ni aun durante la dictadura del Estado Novo llegó a tomar la forma de un adoctrinamiento fascista. La política educativa quedó sobre todo en manos de jóvenes políticos *mineiros* que habían iniciado su carrera en la vieja oligarquía de su estado para tomar otro rumbo a partir de 1930. Era el caso de Francisco Campos, ministro de Educación y Salud entre noviembre de 1930 y septiembre de 1932, y de Gustavo Capanema, que lo sustituyó y permaneció largos años en el gabinete: de 1934 a 1945. Entre 1930 y 1932, Francisco Campos desempeñó una intensa actividad en el gabinete, preocupándose esencialmente por la educación media y superior.

En lo que respecta a la educación superior, el Gobierno trató de sentar las condiciones para el surgimiento de verdaderas universidades, dedicadas a la enseñanza y la investigación. La educación media y media superior aún debía implantarse: hasta entonces, en la mayor parte del país ésta se había reducido a cursos de preparación para ingresar a las escuelas superiores. La Reforma Campos estableció definitivamente un programa seriado, dos ciclos educativos, la asistencia obligatoria y la exigencia de un diploma del nivel medio para ingresar al nivel superior.

Las medidas más importantes en cuanto a la creación de universidades se tomaron en el Distrito Federal y en São Paulo; en el segundo caso, al margen de la participación federal. Así nacieron, en 1934, la Universidad de São Paulo (USP) y, en 1935, la Universidad del Distrito Federal.

El proceso político

Dos puntos importantes y relacionados entre sí definen el proceso político del periodo comprendido entre 1930 y 1934: la cuestión del *tenentismo* y la lucha entre el poder central y los grupos regionales.

Con la victoria de la Revolución de 1930, los "tenientes" pasaron a formar parte del Gobierno y formularon un programa más claro. Proponían que las necesidades de las distintas regiones del país se atendieran de manera más uniforme, que se diseñaran algunos planes económicos, que se instalara una industria de base (sobre todo siderúrgica) y que se instaurara un programa de nacionalizaciones que incluyera las minas, los medios de transporte y comunicación y la navegación de cabotaje. Para llevar a cabo estas reformas era necesario contar con un Gobierno federal centralizado y estable. Los "tenientes", disociándose claramente de la posición de los liberales, eran partidarios de prolongar la dictadura y elaborar una Constitución que estableciera la representación por clase además de la representación individual. En cuanto a esta última, cada estado tendría el mismo número de representantes.

Getúlio trató de servirse de los cuadros *tenentistas* para luchar contra el dominio de las oligarquías estatales en dos regiones muy distintas: el nordeste del país y São Paulo. El nordeste fue uno de los campos de acción predilectos de los "tenientes".

Muchos eran oriundos de esa zona, marcada por una pobreza extrema, donde era flagrante la violencia que ejercía el pequeño círculo en el poder.

Varios interventores nombrados para los estados del nordeste eran militares; en noviembre de 1930 el Gobierno creó la división regional del norte y se la entregó a Juarez Távora. El movimiento *tenentista* procuró hacer ciertas mejoras y atender algunas demandas populares, retomando en otro contexto la tradición del "salvacionismo". Juraci Magalhães —interventor de Bahía— nombró comisiones para el desarrollo de la agricultura, trató de ampliar los servicios de salud y decretó una reducción forzosa de las rentas. Távora intentó expropiar los bienes de los oligarcas más comprometidos con la Vieja República.

Pero puesto que no estaban en condiciones de hacer grandes cambios ni tenían la intención de hacerlos, los "tenientes" acabaron entendiéndose con sectores de la clase dominante regional. Sus medidas en cuanto a la reducción de las rentas y la expropiación de bienes se toparon con la resistencia del Gobierno federal y no se les dio seguimiento. Las acciones de los *tenentistas* en el nordeste —pese a sus limitaciones— atrajeron el ataque de los grupos dominantes de las zonas más desarrolladas del país. A Juarez se le apodó irónicamente "Virrey del Norte" y se le combatió de forma violenta por su intento de crear un bloque de pequeños estados.

En São Paulo, la torpeza del Gobierno federal contribuyó al estallido de una guerra civil. Tras rechazar las pretensiones del Partido Democrático (PD), Getúlio hizo a un lado a la élite paulista y nombró como interventor al "teniente" João Alberto. Éste no pudo resistir las presiones de São Paulo y del interior del Gobierno mismo y renunció en julio de 1931. Otros tres interventores se sucederían hasta mediados de 1932, lo que demuestra la gravedad del llamado caso de São Paulo.

Al mando del estado de São Paulo, o a partir de su influencia, los "tenientes" trataron de establecer una base de apoyo para sus iniciativas. Centraron su objetivo en asociaciones caficulturas poco importantes y en sindicatos obreros. En este aspecto destaca la figura de Miguel Costa, secretario de Seguridad Pública y comandante de la Fuerza Pública. De Costa se decía que llevaba el comunismo en el corazón y a los comunistas a la cárcel. El viejo líder de la Columna Prestes impulsó el resurgimiento de sindicatos como el Centro de los Estibadores de Santos, cuya dirección quedó bajo su influencia.

Los "tenientes" tuvieron en su contra a la gran mayoría de la población de São Paulo, que ideológicamente gravitaba en torno a la élite regional. Ésta defendía la constitucionalización del país con base en los principios de la democracia liberal. Como medida transitoria exigía que se nombrara un interventor civil y paulista. La bandera de la constitucionalización y de la autonomía sensibilizó a vastos sectores de la población y facilitó un acercamiento entre el Partido Republicano Paulista (PRP) y el PD. Este acercamiento se concretó en la formación del Frente Único Paulista (FUP) en febrero de 1932. Ese mismo mes el Gobierno provisional se dispuso a atender las presiones que se oponían a que se prolongara la dictadura —que no sólo llegaban desde São Paulo, sino también de Rio Grande do Sul y Minas Gerais— promulgando el Código Electoral, que incorporaba algunas innovaciones importantes: establecía el carácter obligatorio y secreto del voto, incluyendo a ambos sexos. Por primera vez se reconocía el derecho al voto de las mujeres. La ley electoral de Rio Grande do Norte, promulgada en 1927, había sido la primera en reconocerlo, pero sólo a nivel estatal.

Las elecciones para el Legislativo serían proporcionales para asegurar la representación de las minorías. Aunque la representación profesional se inspiraba en ideas corporativas y

fascistas, su objetivo era más inmediato. Como era previsible, el Gobierno podría controlar a la bancada de los 40 "constituyentes clasistas",[1] más numerosa que la de Minas Gerais. De este modo, podría servir de contrapeso a los estados más grandes, sobre todo São Paulo y Rio Grande do Sul, que entonces eran los principales núcleos de oposición.

Por último, el Código Electoral ayudó bastante a estabilizar el proceso de las elecciones, o por lo menos a reducir los fraudes, mediante la creación de la Justicia Electoral, que quedó encargada de organizar y fiscalizar los comicios y de juzgar las apelaciones.

En marzo de 1932, Vargas dio aparentemente un paso más en su intento de pacificar a São Paulo, nombrando un interventor civil y paulista: Pedro de Toledo. Pero Toledo no era una figura muy prestigiada en el estado. Aún se dudaba si el Gobierno convocaría a elecciones y si lograría controlar a los "tenientes". Se le criticaba por su renuencia a reprimir a un grupo *tenentista* que había atacado la sede del *Diário Carioca* en Río de Janeiro inmediatamente después de la promulgación del Código Electoral.

El Frente Único Gaúcho —formado por los partidos regionales— rompió con Vargas. Esto llevó a los grupos que ya conspiraban en São Paulo, en su mayoría ligados al PD, a acelerar los preparativos para una revolución, que al final estalló el 9 de julio de 1932. Los revolucionarios planeaban lanzar un ataque fulminante sobre la capital de la república para obligar al Gobierno federal a negociar o a capitular. Pero el plan falló. Aunque la "guerra paulista" despertó mucha simpatía en la clase media carioca, quedó militarmente confinada al territorio de São Paulo. Además, la Marina bloqueó el puerto de Santos.

Lo cierto es que, a pesar de sus divergencias con el poder central, las élites regionales de Rio Grande do Sul y Minas Gerais

no estaban dispuestas a arriesgarse a enfrentar por la vía de las armas a un Gobierno al que habían ayudado a ascender hacía menos de dos años. São Paulo se vio prácticamente solo: contó, sobre todo, con la milicia estatal y una intensa movilización popular para hacer frente a las fuerzas federales.

El movimiento de 1932 unió a distintos sectores sociales, desde los caficultores hasta la clase media, pasando por los industriales. Sólo la clase obrera organizada, que había protagonizado algunas huelgas importantes en el primer semestre de 1932, permaneció al margen de los acontecimientos. La lucha por la constitucionalización del país y los temas de la autonomía y la superioridad de São Paulo frente a los demás estados electrizaron a buena parte de la población paulista. Una imagen muy eficaz en la época asociaba a São Paulo con una locomotora que tiraba de una veintena de vagones vacíos: los otros 20 estados de la federación. La radio, que por primera vez se utilizaba a gran escala, también ayudó a fomentar la afluencia del pueblo a los mítines, así como el flujo de voluntarios al frente de combate. Muchas personas donaron joyas y otros bienes familiares atendiendo a la campaña del "oro por el bien de São Paulo".

Los revolucionarios trataron de compensar sus evidentes deficiencias en materia de armamento y municiones con los recursos del parque industrial paulista. Enviaron también emisarios a Estados Unidos para intentar comprar armas y aviones. Pero la superioridad militar del Gobierno era notoria. Pese al desequilibrio de fuerzas, la lucha duró casi tres meses. Culminó con la rendición de São Paulo en octubre de 1932.

La "guerra paulista" tuvo una cara vuelta al pasado y otra vuelta al futuro. Bajo la bandera de la constitucionalización se agruparon tanto los que esperaban retroceder a las formas oligárquicas del poder como quienes querían establecer una

democracia liberal en el país. El movimiento tuvo consecuencias importantes. Al Gobierno, aunque resultó vencedor, le quedó más claro que no podía ignorar a la élite paulista. Los vencidos, por su parte, comprendieron que tendrían que entablar algún tipo de compromiso con el poder central.

En agosto de 1933, Getúlio nombró por fin a un interventor civil y paulista en todo el sentido de la expresión: Armando de Sales Oliveira, vinculado con el PD. Ese mismo mes se promulgó el decreto del llamado Reajuste Económico, que reducía las deudas de los agricultores afectados por la crisis. Por su parte, la élite política de São Paulo adoptaría en adelante una actitud más cautelosa.

En el transcurso de 1933 el *tenentismo* se fue disgregando como movimiento. No había podido convertir al Estado en su partido, había fracasado o visto segados sus intentos de hacerse de una base social, había perdido fuerza en el interior del Ejército, donde ponía en riesgo la jerarquía. Entre 1932 y 1933 varios interventores *tenentistas* del nordeste renunciaron. El Club 3 de Octubre —principal centro organizativo de los "tenientes"— tendió a convertirse en un "órgano doctrinario, libre de demagogia", como dijo con satisfacción el general Góis Monteiro. Algunos "tenientes" se subordinaron al gobierno de Vargas, mientras que otros fueron a engrosar los partidos de derecha e izquierda.

El Gobierno provisional decidió constitucionalizar al país y celebró elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 1933. La campaña electoral reveló un aumento en la participación popular y la organización partidista. En los estados surgieron muchos partidos de las más diversas tendencias, algunos con bases reales y otros de membrete. No obstante, con excepción de los comunistas, cuyo partido era ilegal, y de la Acción Integralista, no se formaron partidos nacionales.

Los resultados en las urnas mostraron la fuerza de las élites regionales. En Rio Grande do Sul los elegidos fueron en su mayoría partidarios de Flores da Cunha, en Minas ganaron los seguidores del viejo gobernador Olegário Maciel, en São Paulo la victoria del Frente Único fue aplastante. En cambio, los "tenientes" obtuvieron magros resultados.

Luego de meses de debates, la Constituyente promulgó la Constitución el 14 de julio de 1934. Era semejante a la de 1891, pues establecía una república federativa, pero contenía varios aspectos nuevos que reflejaban los cambios vividos en el país. Se inspiraba en el modelo de la Constitución alemana de Weimar.

Había tres títulos que no constaban en las constituciones anteriores: el orden económico y social; la familia, la educación y la cultura; y la seguridad nacional. El primero tenía intenciones nacionalistas. Preveía la nacionalización progresiva de las minas, reservas minerales y cascadas, consideradas básicas o esenciales para la defensa económica o militar del país. Los dispositivos de carácter social aseguraban la pluralidad y autonomía de los sindicatos. Disponían también sobre la legislación laboral. Ésta debía contemplar, por lo menos, preceptos como salario igual por trabajo igual sin diferencias por motivos de edad, sexo, nacionalidad o estado civil; salario mínimo; regulación para el trabajo de mujeres y menores; descanso semanal; vacaciones pagadas, e indemnización por despidos injustificados.

En el título referente a la familia, la educación y la cultura, la Constitución establecía el principio de la educación primaria gratuita y obligatoria. La enseñanza religiosa sería opcional en las escuelas públicas y estaría abierta a todos los credos, no sólo al católico.

Figuraba por primera vez en la Constitución el tema de la seguridad nacional. Todo lo referente a ésta sería examinado por un Consejo Superior de Seguridad Nacional, encabezado por el

presidente de la república e integrado por los ministros y los jefes de los Estados Mayores del Ejército y la Marina. Se reafirmó el carácter obligatorio del servicio militar, una norma ya presente durante la Primera República, pero que había funcionado poco en la práctica.

El 15 de julio de 1934, Getúlio Vargas fue elegido presidente de la república por el voto indirecto de la Asamblea Nacional Constituyente. Tendría que ejercer su mandato hasta el 3 de mayo de 1938. En adelante habría elecciones directas para la presidencia.

Parecía, finalmente, que el país viviría bajo un régimen democrático. Pero poco más de tres años después de que se promulgara la Constitución, el golpe del Estado Novo frustró estas esperanzas. Condujeron a ese desenlace ciertos grupos situados dentro del Gobierno, sobre todo en el Ejército, así como los titubeos de los liberales y la irresponsabilidad de la izquierda.

Desde el fin de la Primera Guerra Mundial los movimientos e ideas totalitarios y autoritarios habían empezado a ganar fuerza en Europa. En 1922, Benito Mussolini asumió el poder en Italia; Iósif Stalin empezó a construir su poder absoluto en la Unión Soviética, y el nazismo triunfó en Alemania en 1933. La crisis mundial también contribuyó al desprestigio de la democracia liberal, que en el terreno económico se asociaba con el capitalismo. Este último, que había prometido abundancia e igualdad de oportunidades, había caído en un hoyo negro del que no parecía ser capaz de salir. En vez de una vida mejor había traído pobreza, desempleo y desesperanza.

Los ideólogos totalitarios veían la democracia liberal —con sus partidos y sus luchas políticas aparentemente inútiles, que dividían al organismo nacional— como un régimen incapaz de

hallar soluciones para la crisis. La época del capitalismo y de la democracia liberal parecía cosa del pasado.

En Brasil habían surgido algunas pequeñas organizaciones fascistas en la década de 1920. Un movimiento que sería más significativo durante la década de 1930 surgió cuando, en octubre de 1932, Plínio Salgado y otros intelectuales fundaron en São Paulo la Acción Integralista Brasileña (AIB). El integralismo se definía como una doctrina nacionalista con un contenido más cultural que económico. Se oponía, claro está, al capitalismo financiero y pretendía el control del Estado sobre la economía, pero enfatizaba sobre todo la necesidad de tomar conciencia del valor espiritual de la nación, basado en principios unificadores: el lema del movimiento era "Dios, Patria y Familia".

En cuanto a las relaciones entre Estado y sociedad, el integralismo se oponía a la pluralidad de partidos políticos y a la representación individual de los ciudadanos. El Estado integral debía estar conformado por el jefe de la nación y abrigar órganos representativos de las profesiones y entidades culturales.

La AIB identificaba como enemigos al liberalismo, el socialismo y el capitalismo financiero internacional, supuestamente controlado por los judíos. El integralismo usó con mucha eficacia rituales y símbolos como el culto a la personalidad del jefe nacional, las ceremonias de adhesión y los desfiles de los camisas verdes, que ostentaban un brazalete con una sigma (Σ).

La AIB reclutó a sus dirigentes nacionales y regionales sobre todo entre los profesionistas urbanos de clase media y, en menor medida, entre los militares. El integralismo atrajo a sus filas a un número considerable de adeptos. De acuerdo con estimaciones moderadas, su número llegó a 100 000 o 200 000 personas durante el auge del movimiento, a finales de 1937, una cifra notable si se toma en cuenta la escasa movilización política que había en el país.

Integralistas y comunistas se enfrentaron mortalmente a lo largo de la década de 1930. Pero ambos movimientos tenían puntos en común: criticaban al Estado liberal, valoraban el partido único y rendían culto a la personalidad del líder. No en vano hubo cierta circulación de militantes, que se pasaban de una tendencia a la otra.

No obstante, la guerra entre estos grupos no se debió a un malentendido. En realidad, cada uno daba cauce a sentimientos muy distintos. Los integralistas basaban su movimiento en temas conservadores, como la familia, la tradición nacional y la Iglesia católica. Los comunistas proclamaban conceptos y programas de origen revolucionario: la lucha de clases, la crítica a las religiones y prejuicios, la emancipación nacional mediante la lucha contra el imperialismo y la reforma agraria. Estas formas diferentes de concebir las relaciones sociales eran más que suficientes para desatar el antagonismo entre los dos movimientos. Además, ambos reflejaban la oposición de sus inspiradores europeos: por un lado, el fascismo, y, por otro, el comunismo soviético.

No tan colorida, pero sí más eficaz, la corriente autoritaria ganó fuerza en el Brasil de la década de 1930. Debido a las dificultades que suponían la organización de las clases y la formación de partidos y asociaciones representativas, las soluciones autoritarias fueron siempre tentadoras, no sólo para los conservadores, sino para los liberales y la izquierda. Ésta solía asociar el liberalismo con el dominio de las oligarquías; en consecuencia, no daba mucho valor a la llamada democracia formal. Los liberales justificaban esta visión, pues temían las reformas sociales y aceptaban o incluso fomentaban la interrupción del juego democrático cada vez que éste parecía amenazado por fuerzas subversivas.

La corriente autoritaria asumió, muy consecuentemente, la perspectiva de la llamada modernización conservadora, o sea, la idea de que, en un país desarticulado como Brasil, era el Estado el que debía organizar a la nación para fomentar ordenadamente el desarrollo económico y el bienestar general. De este modo, el Estado autoritario acabaría con los conflictos sociales, las luchas partidistas y los excesos de la libertad de expresión, que no hacían más que debilitar al país.

La corriente autoritaria y el integralismo totalitario tenían rasgos en común, pero no eran idénticos. El integralismo pretendía lograr sus objetivos mediante un partido que movilizara a las masas descontentas y tomara por asalto al Estado. La corriente autoritaria no le apostaba al partido, sino al Estado; no creía en la movilización de la sociedad a gran escala, sino en la clarividencia de algunos hombres. En última instancia, el partido fascista conduciría a la crisis del Estado; el estatismo autoritario, a su fortalecimiento. Los autoritarios estaban dentro del Estado: donde mayor expresión tuvieron fue en la cúpula de las Fuerzas Armadas.

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, y en particular del Ejército, fue un rasgo característico de la historia de los años 1930-1945. Esto se expresó en el aumento de su número de efectivos, en su reequipamiento y en su acceso a posiciones de prestigio. En comparación, las milicias estatales perdieron terreno. Sin embargo, en los meses que siguieron a la Revolución de 1930, el Ejército no se había mostrado como fuerza cohesionada. No sólo estaba el problema del *tenentismo*, sino que muchos integrantes de la alta jerarquía en activo simpatizaban con la Vieja República. El propio jefe militar de la revolución tenía únicamente el puesto de teniente coronel. Hubo que ascenderlo tres veces en poco más de un año para elevarlo al grado de general. La Revolución de 1932 ayudó a depurar el

Ejército. Ese año se exiliaron 48 oficiales; entre ellos, siete generales. Para fines de 1933, 36 de los 40 generales en activo habían ascendido a ese grado bajo el nuevo Gobierno.

Así se consolidó un grupo leal a Getúlio Vargas, en el que destacaban dos figuras: Góis Monteiro y Eurico Gaspar Dutra. Góis formulaba la política del Ejército y Dutra era su principal ejecutor. Ambos monopolizaron los principales cargos militares a partir de 1937. Góis fue jefe de Estado Mayor de 1937 a 1943; Dutra fue ministro de Guerra de 1937 a 1945, año en que renunció al puesto para contender por la presidencia de la república. Lo sustituyó Góis Monteiro, quien, por cierto, ya había estado al frente de ese ministerio entre 1934 y 1935. La lealtad que el nuevo grupo al mando del Ejército profesó por el gobierno de Vargas, no obstante ciertos episodios que la menoscabaron, se mantuvo inquebrantable hasta 1945.

El año de 1934 estuvo marcado por reivindicaciones obreras y efervescencia en ciertos sectores de la clase media. En Río de Janeiro, São Paulo, Belém y Rio Grande do Norte estalló una serie de huelgas entre las que destacaron los paros en el sector servicios: transportes, comunicaciones y bancos. Las campañas contra el fascismo ganaron impulso y culminaron en un violento enfrentamiento que tuvo lugar en octubre de 1934 entre antifascistas e integralistas.

En respuesta, a principios de 1935 el Gobierno propuso una Ley de Seguridad Nacional (LSN), que el Congreso aprobó con el voto de los liberales. La ley definía los delitos contra el orden político y social. Entre ellos se contaban las huelgas de empleados públicos, la incitación a la animosidad entre las clases armadas, la instigación al odio entre las clases sociales, la propaganda subversiva y la creación de asociaciones o partidos que tuvieran como fin subvertir el orden político o social por medios ilegales.

Mientras se discutía la LSN, los comunistas y los "tenientes" de izquierda, muy cercanos a ellos, preparaban el surgimiento de la Alianza Nacional Liberadora (ANL). Ésta salió a la luz en Río de Janeiro el 30 de marzo de 1935. Ese día, un joven estudiante de derecho —Carlos Lacerda— leyó el manifiesto del movimiento y propuso como su presidente honorario a Luís Carlos Prestes, que fue elegido por aclamación. Como presidente en funciones de la ANL fue designado el capitán de Marina Hercolino Cascardo, que en 1924 había dirigido la revuelta del acorazado *São Paulo*.

El programa básico de la ANL era de contenido nacionalista. Los problemas de la clase obrera no se abordaban específicamente en ninguno de sus cinco puntos. Eran éstos: la suspensión definitiva del pago de la deuda externa; la nacionalización de las empresas extranjeras; la reforma agraria; la garantía de las libertades populares, y la constitución de un Gobierno popular, en el que pudiera participar "cualquier persona de acuerdo con la eficiencia de su colaboración".

La formación de la ANL seguía la línea que la Comintern le había dictado al PCB y que abogaba por la creación de frentes populares en todo el mundo contra la amenaza fascista. Al reunir a varios sectores sociales dispuestos a enfrentar al fascismo y al imperialismo, la ANL sería el ejemplo de un frente popular adaptado a las características del llamado mundo semicolonial.

El cambio que sufrió el PCB a partir del ingreso de Prestes en agosto de 1934 también facilitó la creación de la ANL. La organización había dejado de ser un pequeño grupo centrado esencialmente en la clase obrera para convertirse en un organismo numéricamente más fuerte y con una composición social más diversa. Se alistaron en el PCB los militares que seguían a Prestes, así como integrantes de la clase media. Los temas

nacionales empezaron a prevalecer sobre los temas de clase, en coincidencia con la línea de la Comintern.

En pocos meses, la ANL alcanzó una gran proyección. Cálculos conservadores indican que en julio de 1935 reunía entre 70 000 y 100 000 personas. Sus dirigentes oscilaron entre el intento de consolidar una alianza de clases y la perspectiva de una insurrección que conquistara el poder. Al menos de palabra, la perspectiva de la insurrección fue más fuerte. En la conmemoración del 5 de julio de 1935, Carlos Lacerda leyó un manifiesto en el que Prestes, que vivía clandestinamente en Brasil, llamaba a derrocar al "Gobierno odioso" de Vargas y a tomar el poder para instaurar un Gobierno popular, nacional y revolucionario.

Esto dio al Gobierno, que ya reprimía las actividades de la ANL, un excelente motivo para clausurarla, cosa que hizo mediante un decreto promulgado el 11 de julio. A partir de ese momento, conforme se sucedían los arrestos, el PCB empezó los preparativos para desencadenar una insurrección, los cuales se tradujeron en el intento de golpe militar de noviembre de 1935.

El levantamiento de 1935 —que recuerda las revueltas *tenentistas* de la década de 1920— fue un fracaso. Se desató el 23 de noviembre, en Rio Grande do Norte, anticipándose a una iniciativa coordinada desde Río de Janeiro. Una junta de gobierno tomó el poder en Natal y lo conservó durante cuatro días, hasta que fue derrotada. A continuación estallaron rebeliones en Recife y Río de Janeiro, esta última de grandes proporciones: allí, un enfrentamiento entre los rebeldes y las fuerzas legales dejó un saldo de varios muertos hasta que los primeros se rindieron.

¿Por qué se embarcó el PCB, con el apoyo decisivo de la Comintern, en la aventura de noviembre de 1935, cuando al parecer ya se había establecido una estrategia de frentes

populares? Todo parece indicar que el intento de golpe en Brasil era el canto de cisne de la línea política previa. Lo alentó la información fantasiosa de los comunistas brasileños, según la cual había en el país un ambiente prerrevolucionario. A nivel local pesó también la influencia de los métodos *tenentistas*.

El episodio de 1935 tuvo serias consecuencias, pues abrió el camino a amplias medidas represivas y a la escalada autoritaria. El fantasma del comunismo internacional alcanzó enormes proporciones, tanto más cuanto que la Comintern había enviado a Brasil algunos cuadros dirigentes del extranjero para coordinar los preparativos de la insurrección.

Durante 1936, el Congreso aprobó todas las medidas excepcionales que solicitó el Poder Ejecutivo para reprimir a los comunistas y a la izquierda en general. En marzo de ese año la policía invadió el Congreso y apresó a cinco parlamentarios que habían apoyado a la ANL o simplemente mostrado simpatías por ella. El Congreso aceptó la justificación de estas aprehensiones y autorizó que se enjuiciara a los detenidos. Al mismo tiempo se crearon órganos específicos para la represión. En enero de 1936 el ministro de Justicia y Asuntos Internos anunció la formación de una Comisión Nacional de Represión al Comunismo, encargada de investigar la participación de funcionarios públicos y otras personas en actos o delitos contra las instituciones políticas y sociales. A finales de octubre de 1936 entró en funciones un tribunal de excepción: el Tribunal de Seguridad Nacional (TSN). En principio, el TSN sólo juzgaría a las personas involucradas en la insurrección de 1935, pero en la práctica se convirtió en un órgano permanente, que existió durante todo el Estado Novo.

A finales de 1936 y durante los primeros meses de 1937 se definieron las candidaturas para la sucesión presidencial. Las elecciones se celebrarían en enero de 1938. El Partido

Constitucionalista, formado por el PD y algunos partidos menores, presentó el nombre de Armando de Sales Oliveira. Como candidato oficial se eligió a José Américo de Almeida, un político del nordeste que había sido ministro de Vialidad y Obras Públicas en el gobierno de Vargas. Por último, los integralistas presentaron la candidatura de Plínio Salgado. El candidato oficial contaba con el apoyo de la mayoría de los estados del nordeste y de Minas Gerais, además de los sectores favorables a Vargas en São Paulo y Rio Grande do Sul.

El inicio de la contienda política permitió un relajamiento de las medidas represivas. Por orden del ministro de Justicia y Asuntos Internos se liberó a unas 300 personas en junio de 1937. Aunque se solicitó que se extendiera el estado de guerra vigente, el Congreso lo rechazó. Pero Getúlio y su círculo íntimo no estaban dispuestos a dejar el poder, menos aún considerando que ninguna de las tres candidaturas gozaba de su confianza. La campaña de José Américo tendía cada vez más al populismo; presentaba al suyo como "candidato del pueblo" y denunciaba la explotación imperialista. Un observador cercano al Gobierno llegó a decir que la campaña presidencial estaba poniendo al centro la cuestión social y que Brasil corría el riesgo de convertirse en una España desgarrada por la guerra civil.

A lo largo de 1937, para prevenir posibles problemas regionales, el Gobierno intervino en algunos estados y en el Distrito Federal. Pero le faltaba un pretexto para reavivar el ambiente golpista. Ese pretexto fue el Plan Cohen, cuya verdadera historia tiene muchos ángulos oscuros. Un oficial integralista —el capitán Olímpio Mourão Filho— fue sorprendido o se dejó sorprender en septiembre de 1937 mecanografiando en el Ministerio de Guerra un plan de insurrección comunista. El autor del documento era un supuesto Cohen: nombre

marcadamente judío, que podría ser también una corruptela de Béla Kun, el líder comunista húngaro.

Aparentemente el "plan" era una fantasía que se iba a publicar en un boletín de la AIB para mostrar cómo sería una insurrección comunista y cómo le harían frente los integralistas. La insurrección provocaría masacres, saqueos y destrucción, violencia contra los hogares, quema de iglesias, etc. El hecho es que el documento pasó de ser una obra de ficción a considerarse verdadero cuando, de las manos de los integralistas, llegó a las de la cúpula del Ejército. El 30 de septiembre se transmitió a través de un programa oficial de radio y se publicó parcialmente en los periódicos.

La divulgación del Plan Cohen tuvo efectos inmediatos. Por mayoría de votos, el Congreso aprobó apresuradamente el estado de guerra y la suspensión de las garantías constitucionales durante 90 días. El comandante de la III Región Militar decretó que la Brigada Militar riograndense pasara a depender de la federación. Flores da Cunha, sin condiciones de resistir, renunció a su cargo y se exilió en Uruguay.

A finales de octubre, el diputado Negrão de Lima recorrió los estados del norte y del nordeste para garantizar el apoyo de los gobernadores al golpe y recibió su adhesión casi unánime. La oposición no se movilizó sino hasta principios de noviembre de 1937. Armando de Sales Oliveira publicó un manifiesto en el que llamaba a los jefes militares a impedir el golpe. Lo único que le valió ese gesto fue la cárcel. Con el argumento de que el manifiesto se estaba distribuyendo en los cuarteles, Vargas y la cúpula militar decidieron anticipar el golpe, planeado originalmente para el 15 de noviembre.

El Estado Novo

El 10 de noviembre de 1937 la policía militar rodeó el Congreso e impidió la entrada de los congresistas. El ministro de Guerra —el general Dutra— se había opuesto a que fuera el Ejército quien llevara a cabo la operación. Esa noche, Vargas anunció una nueva fase política y la entrada en vigor de una Carta Constitucional elaborada por Francisco Campos. Comenzaba así la dictadura del Estado Novo.

Se instauró un régimen de estilo autoritario, sin grandes movilizaciones. El movimiento popular y los comunistas estaban maltrechos y no podrían reaccionar; la clase dominante aceptaba el golpe como algo inevitable y hasta benéfico. El Congreso disuelto se sometió, hasta el punto de que 80 de sus miembros fueron a presentar su adhesión a Getúlio el 13 de noviembre, mientras varios de sus colegas estaban presos.

Quedaban los integralistas, que habían apoyado el golpe y esperaban ver a Plínio Salgado a la cabeza del Ministerio de Educación y Salud, un peldaño importante en el ascenso al poder. Vargas frustró sus esperanzas. En mayo de 1938 un grupo de integralistas trató de tomar por asalto el palacio residencial del presidente para deponerlo. Los asaltantes terminaron rodeados y, al enfrentarse con la guardia, varios murieron aparentemente fusilados en los jardines del palacio.

El Estado Novo no significó un corte radical con el pasado. Muchas de sus instituciones y prácticas habían ido tomando forma en el periodo de 1930 a 1937. Pero a partir de noviembre de este último año se integraron y adquirieron mayor coherencia en el contexto del nuevo régimen. La tendencia a la centralización, evidente desde los meses inmediatamente posteriores a la Revolución de 1930, llegó a su culminación. A cargo de los estados quedaron interventores nombrados por el Gobierno central a los que se elegía siguiendo diferentes criterios. Recibieron el cargo parientes de Vargas y militares. En

general, sin embargo, para los principales estados se contempló a algún sector de la oligarquía regional.

Que el Estado se centralizara no quiere decir que se desligara de la sociedad. La representación de los distintos intereses sociales cambió de forma, pero no dejó de existir. Hasta noviembre de 1937 esos intereses se habían expresado en el Congreso y en algunos órganos gubernamentales. A partir del Estado Novo, la representación desapareció del Congreso y se reforzó la que tenía lugar en los órganos técnicos, dentro del aparato del Estado.

Desde el punto de vista socioeconómico, el Estado Novo significó una alianza de la burocracia civil y militar con la burguesía industrial, cuyo objetivo común más inmediato era promover la industrialización del país sin grandes convulsiones sociales. La burocracia civil apoyaba el programa de industrialización porque consideraba que era la vía hacia la verdadera independencia del país; los militares, porque creían que la instalación de una industria de base fortalecería la economía, un componente importante de la seguridad nacional; los industriales, porque terminaron por convencerse de que el impulso a la industrialización dependía de una intervención activa del Estado. La burguesía industrial y el gobierno de Vargas se acercaron principalmente a partir de 1933, luego de la derrota de la revolución paulista.

El que estos sectores se aliaran no quiere decir que sus opiniones fueran idénticas. En comparación con los técnicos del Gobierno, los industriales eran menos radicales respecto al intervencionismo del Estado y al énfasis contra el capital extranjero. Defendían, principalmente, que se tomaran medidas en el sector cambiario y en materia de aranceles sobre las importaciones con el objetivo de proteger la industria instalada en el país.

El creciente interés del gobierno de Vargas en promover la industrialización nacional a partir de 1937 se reflejó en el campo educativo. Aunque el ministro Capanema impulsó una reforma de la educación media y media superior, su preocupación central fue organizar la educación industrial para preparar mano de obra fabril calificada.

Al mando del Estado, el poder personal de Getúlio era la instancia decisiva en las resoluciones fundamentales. Era evidente la relación de confianza entre el presidente y sus ministros. Entre marzo de 1938, cuando Osvaldo Aranha entró al Ministerio de Relaciones Exteriores, y junio de 1941, no hubo ni un solo cambio en el gabinete. Las Fuerzas Armadas ejercieron su influencia a través de los varios organismos técnicos que proliferaron en el Estado Novo, a través de los Estados Mayores y del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). El CSN se tomó en un sentido amplio la prerrogativa de investigar todas las cuestiones relativas a la seguridad nacional: esto lo llevó a asumir un papel importante en las decisiones económicas.

Se responsabilizó a las Fuerzas Armadas de instalar una industria estatal siderúrgica, aunque no siempre se aceptaran las recomendaciones de sus representantes. En el sector petrolero, el Consejo Nacional del Petróleo (CNP), creado en julio de 1938 como órgano especial de la presidencia de la república, quedó a cargo del general Horta Barbosa. El Gobierno aprobó los planes militares para la compra de armamento, incluyendo artillería de la empresa alemana Krupp, barcos de guerra de Gran Bretaña e Italia, armas de infantería de la entonces Checoslovaquia y aviones de Estados Unidos.

Aunque el poder formal e informal de las Fuerzas Armadas era muy extenso, no era absoluto. Los militares no aspiraban a simplemente sustituir a las élites civiles, ni estaban en condiciones de hacerlo. Eso estuvo claro desde el momento del

golpe. La propuesta de presentar la candidatura de un militar no había tenido gran resonancia, y el ministro de Guerra incluso evitó que el Ejército se involucrara abiertamente en el episodio.

La cohesión de las Fuerzas Armadas se debía a su consenso en torno a un objetivo común: modernizar al país por la vía autoritaria. Pero los puntos de vista de los militares en cuanto a las relaciones con las grandes potencias y a la mayor o menor autonomía del proyecto de desarrollo económico variaban según los grupos y las inclinaciones personales.

El presidente podía, así, manipular las pretensiones del Ejército para que coincidieran con los intereses más generales del Gobierno. Podía también hacer frente a la cúpula militar cuando era necesario. Poco después del golpe de 1937, cuando Vargas tomó la determinación de interrumpir el pago de la deuda, movilizó el apoyo de los militares planteando la decisión en estos términos: o se paga la deuda externa o se reequipa a las Fuerzas Armadas y el sistema de transporte. Años más tarde, a principios de 1942, la iniciativa del presidente de solidarizarse con Estados Unidos tras el ataque japonés a Pearl Harbor despertó la suspicacia de los generales Dutra y Góis Monteiro. Los dos presentaron su renuncia, pero el presidente no se la aceptó. Según el subsecretario de Estado estadounidense Sumner Welles, Getúlio llegó a decir a los dos militares que contaba con el pueblo y que no necesitaba a las Fuerzas Armadas para contener las actividades subversivas.

La política económico-financiera del Estado Novo cambió respecto a la de los años 1930-1937. En aquel primer periodo no había habido una línea clara de fomento al sector industrial. El Gobierno había tenido que equilibrarse entre distintos intereses, incluyendo los agrarios, y también había sido bastante sensible a las presiones externas. A partir de noviembre de 1937 el Estado asumió más decididamente una política de sustitución de

importaciones mediante la producción interna y abrazó el proyecto de crear una industria de base. Los partidarios de este enfoque ganaron fuerza, en parte porque había problemas críticos con la balanza de pagos que se remontaban a 1930, y en parte por el riesgo creciente de que estallara una guerra mundial; la guerra impondría, como de hecho lo hizo, grandes restricciones a las importaciones.

Hasta 1942 la política de sustitución de importaciones se llevó a cabo sin una planeación general, considerando a cada sector como un caso específico. En agosto de ese año, con la entrada de Brasil a la guerra y la continuación del conflicto, el Gobierno tomó a su cargo la supervisión de la economía. Con ese fin creó la Coordinación de Movilización Económica, dirigida por el antiguo "teniente" João Alberto.

El fomento a la industrialización se asoció muchas veces con el nacionalismo, pero Getúlio evitó llevar al país a una cruzada nacionalista. La Carta de 1937 reservaba a los brasileños la explotación de minas y cascadas. Determinaba que la ley regularía su nacionalización progresiva, así como la de las industrias consideradas esenciales para la defensa económica o militar. También disponía que en el país sólo podría haber bancos y compañías de seguros cuyos accionistas fueran brasileños. Se concedería a las empresas extranjeras un plazo fijado por ley para que se convirtieran en nacionales.

Estas normas se vieron limitadas por una serie de decretos ley que dejan ver la presión de los diversos grupos y la falta de una dirección estricta por parte del Gobierno. No se tocó, por ejemplo, a las empresas de energía eléctrica y, en octubre de 1941, Vargas rechazó un proyecto de decreto que establecía que los bancos y compañías de seguros quedarían en manos nacionales para agosto de 1946. Incluso la nacionalización del

acero se logró mediante un acuerdo con el Gobierno estadounidense, no mediante un enfrentamiento.

Los casos del acero y el petróleo son particularmente significativos para entender la política de inversión estatal en la industria de base; el Gobierno se ocupó de cada uno de manera distinta. La historia de la implantación inicial de la gran industria siderúrgica comenzó y terminó dentro del periodo del Estado Novo. En el caso del petróleo, la historia se prolongó y sólo halló un desenlace en la segunda presidencia de Vargas.

En julio de 1940 se decidió instalar la planta de Volta Redonda en el estado de Río de Janeiro y se definió cómo funcionaría. La planta se financió con créditos estadounidenses concedidos por el Export-Import Bank of the United States (Exim Bank) y con recursos del Gobierno brasileño. Su control quedó en manos de una empresa de capital mixto, la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), fundada en enero de 1941. Esta solución no obedeció a un plan claro que el Gobierno hubiera tenido desde el principio del Estado Novo, ni tampoco a que el aparato gubernamental tuviera un pensamiento uniforme respecto al asunto. Los distintos grupos sólo coincidían en que era necesario ampliar y diversificar la producción siderúrgica. La expansión de los servicios de transporte y la instalación de una industria pesada dependían de la solución de ese problema; además, las importaciones de acero representaban una carga cada vez mayor en una balanza de pagos continuamente desfavorable.

Los grupos privados y Vargas mismo se inclinaban por una asociación con capitales foráneos, alemanes o estadounidenses. Quienes más presionaban por construir una industria libre de control extranjero eran las Fuerzas Armadas. Pero los militares no estaban en condiciones de imponer inmediatamente la solución que se adoptó al final. Al contrario: durante 1939, los

acuerdos del Gobierno brasileño con la United States Steel Corporation dominaron la escena; incluso se proyectó instalar una industria en la que esa empresa estadounidense participaría al lado de grupos privados y del Gobierno brasileño. Pero la empresa renunció al plan, pese a los esfuerzos conciliadores de Vargas y del Departamento de Estado. A partir de entonces se impuso la solución estatal.

A diferencia de la siderúrgica, el desarrollo de una industria petrolera no era algo apremiante en la década de 1930. Las importaciones de petróleo sólo crecieron después de la Segunda Guerra Mundial y no causaron mayores problemas a la balanza de pagos por mucho tiempo. Hasta mediados de 1939, cuando se descubrió petróleo en el estado de Bahía, parecía que la instalación de una industria petrolera se limitaría a refinerías. Aun después de este descubrimiento, la extracción fue insignificante y las dudas en cuanto a las reservas de petróleo perduraron hasta la década de 1950. Por estas razones había mayores diferencias en cuanto a la política petrolera que en cuanto al acero; el mismo Ejército estaba mucho más dividido. Sea como fuere, las principales iniciativas en este terreno surgieron del Ejército.

A partir de 1935, algunos industriales comenzaron a interesarse en la instalación de refinerías. Esto llevó a la Standard (1936), la Texaco, la Atlantic Refining Company y la Anglo-Mexican (todas en 1938) a proponer la creación de grandes refinerías en el país. Se empezaron a discutir las posibles opciones y la política de intervención del Gobierno se asentó en un decreto ley de abril de 1938, que nacionalizaba la industria de refinación del petróleo, fuera éste importado o nacional. La nacionalización significaba que el capital, la dirección y la administración de esas empresas debían quedar en manos de brasileños. No equivalía, pues, a un monopolio estatal.

Mediante ese mismo decreto se fundó el CNP, integrado por personas a las que el presidente de la república nombraba en representación de los varios ministerios y grupos de interés. Los sectores del Ejército favorables a ampliar el control del Estado dominaron el CNP desde 1938 hasta mediados de 1943. Durante ese periodo estuvo a cargo de su gestión el general Júlio Caetano Horta Barbosa, ingeniero militar. Horta fracasó en su intento de establecer grandes refinerías estatales. Los grupos de interés, los ministros y Vargas mismo bloquearon al CNP.

En el caso del petróleo, Estados Unidos siguió una política distinta a la del acero, pues defendió los intereses de las grandes empresas que tradicionalmente controlaban ese sector. Presionado por varios frentes, Horta Barbosa renunció a mediados de 1943, cuando sobrevino un periodo en el que dominaron los intereses privados.

En realidad, en el terreno del petróleo, el Estado Novo alcanzó pocos logros, que sin embargo no carecieron de importancia en dos sentidos. Por un lado, la política del CNP bloqueó las iniciativas de las grandes empresas extranjeras, aunque no recibió una respuesta alternativa a sus propuestas. Por otro lado, el proceder del general Horta Barbosa se convirtió en un punto de apoyo y en una referencia para aquellos grupos que, en la década de 1950, presionarían por la adopción de una línea semejante a la suya; esto se lograría con la creación de una empresa estatal, Petróleo Brasileño (Petrobras), en octubre de 1953.

En el terreno financiero, el Estado Novo trató de basarse en nociones conservadoras, encarnadas por el ministro de Hacienda Artur de Sousa Costa, a quien Getúlio mantuvo en el cargo durante prácticamente todo el periodo. Aun así fue necesario tomar algunas medidas drásticas, aunque siempre se les consideró excepcionales. Recién consumado el golpe, para hacer

frente a la crisis de la balanza de pagos, Getúlio suspendió el pago de la deuda externa, decretó el monopolio de la venta de divisas e impuso un tributo sobre todas las operaciones cambiarias. Se mantuvo el control del comercio exterior; en cuanto a la deuda externa, se llegó a un acuerdo con los acreedores, y el pago se retomó en 1940, pese a la resistencia de los militares, que temían que el pago de la deuda redujera la inversión pública.

La política laboral del Estado Novo se caracterizó por dos aspectos: las iniciativas materiales y la construcción simbólica de la figura de Getúlio Vargas como protector de los trabajadores. En cuanto al primer aspecto, el Gobierno continuó prácticas que se venían ejerciendo desde principios de la década de 1930 y las sistematizó. Su legislación se inspiró en la Carta del Lavoro, vigente en la Italia fascista. La Carta de 1937 volvió a adoptar el principio de la unidad sindical, que nunca se había abandonado en la práctica. Se prohibieron la huelga y el *lock-out*. En agosto de 1939, un decreto ley estableció los lineamientos de la organización sindical, que volvieron a los sindicatos aún más dependientes del Estado. También se reforzó la estructura sindical vertical, ya existente, mediante la creación de federaciones regionales y confederaciones nacionales.

En julio de 1940 se creó el impuesto sindical, un instrumento básico para el financiamiento de los sindicatos y su subordinación al Estado. Este impuesto era una contribución anual obligatoria que equivalía a un día de trabajo pagado por cada empleado, sindicalizado o no. Su recaudación correspondía al Banco de Brasil. El 60% de lo recabado se destinaba al sindicato, 15% a la federación, 5% a la confederación y 20% al Fondo Social Sindical. El dinero del Fondo Social Sindical se utilizó con frecuencia como "recurso secreto" para financiar ministerios y, más adelante, campañas electorales.

El impuesto sindical sostuvo la figura del *pelego*. El epíteto se debe a uno de los significados del término: *pelego* es la cubierta de tela o cuero que se pone bajo la silla de montar para amortiguar el impacto producido por el movimiento del animal en el cuerpo del jinete. La imagen del amortiguador resulta adecuada. Los *pelegos* son los dirigentes sindicales que actúan más en interés propio y del Estado que en interés de los trabajadores, haciendo las veces de amortiguadores en los conflictos. El que los sindicatos no tuvieran que atraer a una gran masa de trabajadores facilitó la existencia de los *pelegos*. Como el impuesto aseguraba la sobrevivencia del sindicato, el número de afiliados era un factor secundario.

Para dirimir las cuestiones laborales, el Gobierno estableció en mayo de 1939 la Justicia del Trabajo, cuyo antecedente eran las Juntas de Conciliación y Juicio. La legislación laboral se sistematizó y amplió con la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) en junio de 1943.

En el terreno de la política salarial, el Estado Novo hizo una innovación importante. En mayo de 1940 se estableció un salario mínimo que debía satisfacer las necesidades básicas del trabajador. Inicialmente, así fue. Con el paso de los años, se fue deteriorando hasta acabar muy por debajo de este objetivo explícito.

La imagen de Getúlio como protector de los trabajadores se fue construyendo a través de diversas ceremonias y de un empleo intensivo de los medios de comunicación. Entre las ceremonias destacan las conmemoraciones del 1º de mayo, celebradas a partir de 1939 en estadios de futbol. En esos actos, que congregaban a grandes masas de obreros y del pueblo en general, Getúlio iniciaba sus discursos con la exhortación "Trabajadores de Brasil", y anunciaba alguna medida de alcances sociales muy esperada. La radio también se utilizó

sistemáticamente como un instrumento para acercar a los trabajadores al Gobierno. El ministro de Trabajo, Industria y Comercio daba conferencias radiofónicas una vez a la semana. En ellas contaba la historia de las leyes sociales, presentaba casos concretos y a veces se dirigía a públicos específicos: jubilados, mujeres, padres de obreros menores de edad, migrantes, etcétera.

Con estos y otros elementos se fue conformando la figura simbólica de Getúlio Vargas como dirigente y guía de los brasileños, en especial de los trabajadores; como amigo y padre, equivalente en la esfera social al jefe de familia. Este guía y padre obsequiaba beneficios a su gente y tenía derecho a esperar de ella fidelidad y apoyo. No se trataba de beneficios ilusorios. Pero, más allá de las ganancias materiales que representaban, sirvieron políticamente para construir la figura presidencial, que fue cobrando forma y contenido en el curso del Estado Novo.

El régimen de 1937 no apelaba sólo a los trabajadores. Por el contrario, trató de formar a la opinión pública a su favor censurando las críticas y la información independiente y elaborando su propia versión de la fase histórica que atravesaba el país. La preocupación del gobierno de Vargas en este sentido se remontaba a sus primeros tiempos, desde que se fundó el Departamento Oficial de Publicidad en 1931. En 1934 se creó en el Ministerio de Justicia y Asuntos Internos un Departamento de Propaganda y Difusión Cultural que estuvo en funciones hasta diciembre de 1939, cuando el Estado Novo instituyó un verdadero Ministerio de Propaganda —el Departamento de Prensa y Propaganda (DIP, por sus siglas en portugués)—,[2] directamente subordinado al presidente de la república. El DIP tenía atribuciones bastante extensas, que incluían el cine, la radio, el teatro, la prensa, la literatura "social y política", la organización del programa de radio oficial del Gobierno, la

prohibición del ingreso al país de "publicaciones nocivas a los intereses brasileños" y la colaboración con la prensa extranjera para evitar que se divulgara "información nociva al reconocimiento y la cultura del país". La instancia fue responsable de la transmisión diaria del programa *Hora de Brasil*, que sería durante años el instrumento de propaganda y divulgación de las obras del Gobierno.

El Estado Novo persiguió, encarceló, torturó y forzó al exilio a intelectuales y políticos, sobre todo de izquierda, aunque también a algunos liberales. Pero su persecución no fue indiscriminada. Sus dirigentes comprendieron la importancia de atraer a su servicio a ciertos sectores letrados. Católicos, integralistas autoritarios e izquierdistas disimulados ocuparon cargos y aceptaron las ventajas que les ofrecía el régimen.

A través de diversas expresiones dirigidas al gran público y de las páginas de publicaciones como *Cultura Política*, destinadas a un círculo más restringido, el Estado Novo trató de transmitir su versión de la historia nacional. En relación con la historia más reciente, se presentaba como la consecuencia lógica de la Revolución de 1930. Hacía un corte radical entre el viejo Brasil desunido, dominado por el latifundio y las oligarquías, y el Brasil que había nacido con la revolución. De acuerdo con este discurso, el Estado Novo había cumplido los objetivos revolucionarios al llevar al país —mediante la búsqueda de sus raíces, la integración nacional y un orden ajeno a las disputas partidistas— a los tiempos modernos.

En la Primera República, el servicio público se había ajustado a la política clientelista. Salvo raras excepciones, no existía el concurso público y los cuadros especializados se reducían a una pequeña élite. El Estado Novo buscó reformular la administración pública para transformarla en un agente de modernización. Se intentó crear una élite burocrática

desvinculada de la política partidista, que se identificara con los principios del régimen. Esta élite, dedicada únicamente a los intereses nacionales, debía introducir criterios de eficiencia, economía y racionalidad.

La principal institución responsable de la reforma de la administración pública fue el Departamento Administrativo del Servicio Público (DASP), creado en 1938 como órgano ligado a la presidencia de la república. Para el reclutamiento de personal se buscó establecer una carrera en la que el mérito fuera el requisito básico de ingreso. Este criterio abrió oportunidades a los profesionistas de clase media, pero en la práctica se topó con muchas restricciones. La realidad y la legislación misma limitaron la posibilidad de formar un gran estrato burocrático, sometido a reglas formales de ingreso y ascenso de acuerdo con el mérito. En la cúpula del aparato burocrático, la mayor parte de los nombramientos para los llamados cargos de confianza, cuyos titulares podían ser despedidos en cualquier momento, siguió obedeciendo a las preferencias del presidente de la república o de sus ministros. La designación exigía un mínimo de capacitación, pero no necesariamente se elegía a los elementos de la carrera del servicio público.

La política exterior puede entenderse mejor si se considera como un todo el periodo que va de 1930 a 1945. Los alineamientos y realineamientos obedecieron a la interacción de Brasil con las grandes potencias, y el Estado Novo fue sólo uno de los elementos de esa interacción.

La crisis mundial precipitó el fin de la hegemonía inglesa y el ascenso de Estados Unidos. Esto sucedió sobre todo a partir del momento en que las medidas del presidente Franklin Roosevelt contra la crisis empezaron a surtir efecto. Al mismo tiempo, a partir de 1933, apareció otro competidor en la escena internacional: la Alemania nazi. En este escenario, el Gobierno

brasileño adoptó una posición pragmática: trató de negociar con quien le ofreciera mejores condiciones y de sacar ventaja de la rivalidad entre las grandes potencias.

El periodo que va de 1934 a 1940 estuvo marcado por la creciente participación de Alemania en el comercio exterior brasileño. Alemania se convirtió en la principal compradora del algodón de Brasil y en el segundo mercado para su café. Pero su influencia creció, sobre todo, en el sector de las importaciones. En 1929, alrededor de 13% de las importaciones brasileñas provenía de Alemania y 30% de Estados Unidos; para 1938, los alemanes superaban ligeramente a los estadounidenses con 25% de las importaciones contra 24%. Ese mismo año 34% de las exportaciones se dirigió a Estados Unidos y 19% a Alemania. Las transacciones con este país no sólo eran atractivas para ciertos grupos exportadores, sino también para quienes sostenían que había que modernizar e industrializar a Brasil. Los alemanes siempre insinuaron la posibilidad de romper con la forma en que las grandes naciones conducían su comercio exterior, ofreciendo en cambio material ferroviario, bienes de capital, etcétera.

Por otro lado, el comercio con Alemania presentaba algunos aspectos negativos: el Reich siempre insistió en comerciar con una moneda no convertible —los llamados "marcos de compensación"—, de manera que sus transacciones con Brasil fueran acuerdos bilaterales que ahuyentaran a otros competidores. Los representantes alemanes trataban de controlar todo el comercio imponiendo cuotas y precios a los productos, así como el valor de sus marcos de compensación.

Ante el avance de Alemania, Estados Unidos adoptó una política que combinaba la presión con la cautela. Ciertos grupos económicos estadounidenses —inversionistas, banqueros, importadores— deseaban que se tomaran represalias contra Brasil. Franklin Roosevelt prefirió evitar las medidas extremas

que pudieran orillar a Brasil a aliarse con Alemania o a abrazar una vía nacionalista radical.

En los círculos del Gobierno y en el sector económico había quien se inclinaba por una mayor relación con Estados Unidos y quien prefería a Alemania. Osvaldo Aranha, embajador en Washington desde 1934, y Valentim Bouças, representante de la empresa International Business Machines (IBM) en Brasil, tomaron el lado de los estadounidenses, mientras que elementos de la cúpula militar, como Dutra y Góis Monteiro, simpatizaban con Alemania.

Tras el golpe de 1937, que Alemania e Italia recibieron con entusiasmo, Brasil mantuvo su posición pragmática. Los militares presionaron por un acuerdo con los alemanes y en marzo de 1938 lograron firmar con la empresa Krupp un gran contrato para el abasto de artillería. Sin embargo, poco antes, al nombrar a Osvaldo Aranha como ministro de Relaciones Exteriores, Vargas había dejado claro que no estaba dispuesto a hacer cambios esenciales en materia de política exterior.

Paradójicamente, pese a que cierta afinidad ideológica podría haber facilitado una mayor cercanía con los alemanes, las relaciones entre Brasil y Alemania sufrieron una sacudida en 1938. Ese año, el régimen se estabilizó, eliminando de la escena política a la única fuerza que aún escapaba a su control: el integralismo. El Estado Novo se distanciaba del fascismo nacional y embestía contra los grupos nazis que había en el sur del país. Un agente alemán, líder del Partido Nazi en Rio Grande do Sul, fue arrestado. El embajador de Alemania fue declarado *persona non grata* y tuvo que dejar Brasil. Aunque el conflicto terminó resolviéndose, dejó marcas.

Más que la instauración del Estado Novo, el factor decisivo en la determinación de la política exterior brasileña fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El bloqueo inglés hizo retroceder

la presencia comercial de Alemania en América Latina, pero Inglaterra no estaba en condiciones de aprovechar ese vacío. Esto hizo que se fortaleciera la presencia estadounidense. Ya desde antes de que empezara la guerra, Roosevelt sabía que se trataría de un conflicto de escala mundial que involucraría a Estados Unidos. Esta perspectiva llevó a los estrategas estadounidenses a ampliar lo que consideraban el círculo de seguridad del país, incluyendo a América del Sur y, en especial, al nordeste brasileño, la región que geográficamente penetra más en el océano Atlántico. Los estadounidenses emprendieron también una ofensiva político-ideológica al promover, entre otras iniciativas, las Conferencias Panamericanas en torno a un objetivo común: la defensa de las Américas, sin importar el régimen político vigente en cada nación, bajo el mando de Estados Unidos. En el terreno económico este país trató de establecer una política bastante conservadora. Se interesó principalmente en materiales estratégicos, como el caucho, el mineral de hierro y el manganeso, y trató de controlar su compra.

Brasil respondió a este conjunto de iniciativas acercándose cada vez más al "coloso del norte" y tratando de aprovechar la nueva situación. La entrada de Estados Unidos a la guerra, en diciembre de 1941, obligó a Brasil a definirse. Vargas empezó a hablar más claramente el lenguaje del panamericanismo, mientras insistía en que se reequipara económica y militarmente a Brasil como condición de su apoyo a Estados Unidos.

A finales de 1941, sin esperar la aprobación del Gobierno brasileño, tropas estadounidenses se instalaron en el nordeste de Brasil. El primer semestre de 1942 estuvo marcado por una atmósfera de ambigüedad, si bien se tomaron dos decisiones importantes: en enero de ese año, pese a las reticencias de Góis Monteiro y Dutra, Brasil rompió relaciones con el Eje; en mayo,

Brasil y Estados Unidos firmaron un acuerdo político-militar de carácter secreto.

Sin embargo, los estadounidenses tardaban en entregar los pedidos de equipo militar porque consideraban que buena parte de la oficialidad brasileña simpatizaba con el Eje. Esta indefinición se superó entre el 5 y el 17 de agosto de 1942, cuando submarinos alemanes hundieron cinco mercantes brasileños. Presionado por grandes manifestaciones populares, Brasil entró a la guerra ese mismo mes.

Brasil se alineó definitivamente con el frente antifascista el 30 de junio de 1944, cuando la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) partió a luchar a Europa. La FEB no fue una iniciativa impuesta por los Aliados, sino una decisión del Gobierno brasileño, que tuvo que superar las reservas de los estadounidenses y la franca oposición de los ingleses. Algunos dirigentes de estos países creían que sería difícil integrar con éxito tropas brasileñas al esfuerzo bélico. Más de 20 000 hombres lucharon en Italia hasta que el conflicto terminó en ese país, el 2 de mayo de 1945, pocos días antes del fin de la guerra. Murieron en combate 454 brasileños. El retorno a Brasil de los *pracinhas* —como se llamaba a los soldados de la FEB—, a partir de mayo de 1945, despertó un gran entusiasmo popular que contribuyó a las presiones por la democratización del país.

El fin del Estado Novo

El Estado Novo se proyectaba como un régimen autoritario y modernizador que duraría mucho tiempo. Pero su vida fue breve: no llegó a cumplir los ocho años. Los problemas del régimen se debieron más a la inserción de Brasil en el cuadro de las relaciones internacionales que a las condiciones políticas

internas del país. Esta inserción dio impulso a las oposiciones y abrió paso a las divergencias dentro del Gobierno.

Cuando el país entró en la guerra, voces opositoras empezaron a explotar la contradicción entre el apoyo de Brasil a las democracias y el carácter dictatorial del régimen de Vargas. Al interior del Gobierno hubo al menos un personaje que se mostró francamente favorable a la apertura democrática: el ministro de Relaciones Exteriores Osvaldo Aranha.

Más grave aún fue el distanciamiento gradual entre el Estado Novo y quien fuera uno de sus artífices y sostenes militares. Convencido de que el régimen no sobreviviría a los nuevos tiempos, el general Góis Monteiro abandonó en esa misma época el cargo que ocupaba en Montevideo como embajador de Brasil ante el Comité de Emergencia y Defensa Política de América, y regresó a su patria. Góis volvería al Ministerio de Guerra en agosto de 1945, mucho más para propiciar la salida de Vargas que para asegurar su permanencia en el poder.

Hacia 1943 los estudiantes universitarios empezaron a movilizarse contra la dictadura, organizando la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y sus secciones estatales. En São Paulo se destacaban los académicos de la Facultad de Derecho. En diciembre de 1943 la policía disolvió violentamente una manifestación en que los estudiantes marchaban tomados de los brazos y con una mordaza como símbolo de la supresión de la palabra. Dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas, lo que provocó una ola de indignación.

El Gobierno trató de hacer frente a las distintas presiones, justificando la continuidad de la dictadura con el pretexto de la guerra y prometiendo que convocaría a elecciones cuando volviera la paz. A finales de 1944 una maniobra de la oposición liberal obligó al Gobierno a cambiar de actitud: la postulación del brigadier mayor de la Fuerza Aérea Eduardo Gomes como

candidato a la presidencia de la república. No se trataba de un personaje cualquiera. Militar en activo, se le asociaba con el *tenentismo* y con el legendario episodio del Fuerte de Copacabana. Por su parte, la prensa burlaba cada vez más a la censura y publicaba reportajes y entrevistas favorables a la celebración de elecciones.

En este escenario, en febrero de 1945, Vargas promulgó el llamado Acto Adicional a la Carta de 1937, en el que se fijaba un plazo de 90 días para decidir la fecha de las elecciones generales. Pasado exactamente ese lapso, se decretó el nuevo Código Electoral, que regulaba la conformación del padrón y de las votaciones. Establecía la fecha del 2 de diciembre de 1945 para la elección del presidente y de una Asamblea Constituyente, y la del 6 de mayo de 1946 para los comicios estatales.

Hasta ese momento, Getúlio declaraba que no se presentaría como candidato a la presidencia de la república. Del interior del Gobierno surgió la candidatura del general Dutra, que aún era ministro de Guerra, en oposición a la de Eduardo Gomes.

En el decisivo año de 1945 surgieron también los tres principales partidos que habrían de existir en el periodo que se extendió hasta 1964. En abril, la vieja oposición liberal, heredera de la tradición de los partidos democráticos estatales y adversaria del Estado Novo, conformó la Unión Democrática Nacional (UDN). Inicialmente la UDN acogió también al reducido grupo de los socialistas democráticos y a unos cuantos comunistas.

En junio de 1945, por iniciativa de la burocracia, del propio Getúlio y de los interventores de los estados, surgió, del aparato estatal mismo, el Partido Social Democrático (PSD). Finalmente, en septiembre de ese mismo año, también por inspiración de Getúlio, del Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio y de la

burocracia sindical, se fundó el Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués),[3] cuyo objetivo era unir a las masas trabajadoras urbanas bajo la bandera getulista. La UDN se organizó en torno a la candidatura de Eduardo Gomes; el PSD, en torno a la candidatura de Dutra. El PTB se presentaba en la escena política sin grandes figuras y aparentemente sin candidato a la presidencia.

A la oposición no le gustaba la idea de que el jefe de un Gobierno autoritario fuera quien dirigiera el proceso de transición a la democracia. Getúlio, por su parte, adoptó un comportamiento que sorprendió a la oposición liberal conservadora y a los altos mandos del Ejército. Viendo que el régimen perdía apoyo en la cúpula militar, trató de sostenerse de una manera más amplia en las masas populares urbanas, a través de la acción del Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, de los *pelegos* sindicales y de la iniciativa de los comunistas.

El apoyo del PCB al régimen de Vargas obedeció a una orientación llegada de Moscú. Se había decidido allí que los partidos comunistas de todo el mundo respaldaran a los Gobiernos de sus países cuando éstos formaran parte del frente antifascista, sin importar si se trataba de dictaduras o democracias. Brasil no sólo le había declarado la guerra al Eje, sino que, en abril de 1945, entabló relaciones diplomáticas con la Unión Soviética por primera vez en su historia. Poco después de este hecho, cuando Prestes salió de la cárcel gracias a una amnistía, confirmó lo que el partido ya había decidido bajo su influencia: en nombre de las "necesidades históricas", debía tenderle la mano a quien había sido su enemigo hasta la víspera.

Las huelgas obreras, reprimidas durante el Estado Novo, empezaron a resurgir en 1945. Los trabajadores se movilizaban gracias a la gradual restauración de las libertades democráticas

y presionados por el aumento de la inflación en las postrimerías de la guerra. A lo largo de ese año los comunistas trataron de frenar las movilizaciones. Según ellos, aquél no era momento de huelgas, sino de "apretarse los cinturones" para no causar problemas al Gobierno.

A mediados de 1945 una iniciativa impulsada por los círculos laboristas vinculados con Getúlio y apoyada por los comunistas cambió el destino de la sucesión presidencial: la campaña *queremista*, llamada así porque el lema "queremos a Getúlio" resumía sus objetivos. Los *queremistas* salieron a las calles a defender la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente con Vargas en el poder. Sólo entonces se celebrarían elecciones directas para la presidencia, con Getúlio entre los candidatos.

Esta campaña causó un efecto profundamente negativo en la oposición liberal y los medios militares. Parecía claro que Vargas pretendía mantenerse en el poder ya fuera como dictador o como presidente electo, liquidando de paso a los dos candidatos que ya se habían postulado. La carga emocional de la disputa se elevó cuando, el 29 de septiembre, el embajador estadounidense Adolph Berle Jr. expresó su confianza en que habría elecciones el 2 de diciembre de 1945. Los *queremistas* denunciaron la injerencia estadounidense en los asuntos brasileños y afirmaron que las elecciones, tal como estaban previstas, eran una "manipulación de los reaccionarios".

Por otro lado, ciertos acontecimientos ocurridos en la vecina Argentina repercutieron en Brasil. Desde la revolución de junio de 1943 había ido creciendo en aquel país la influencia del coronel Juan Domingo Perón. El peronismo y el getulismo tenían muchos puntos en común. Ambos pretendían impulsar, en el terreno económico, un capitalismo nacional sostenido por la acción del Estado. Ambos pretendían, en el terreno político,

reducir las rivalidades entre las clases, invitando a las masas populares y a la burguesía nacional a una colaboración fomentada por el Estado. El Estado encarnaría, de este modo, las aspiraciones de todo el pueblo y no los intereses particulares de una u otra clase.

Esto caracteriza al populismo latinoamericano, cuyos orígenes y matices variaron de país a país. En Argentina, donde la estructura de clases estaba mucho más articulada que en Brasil, el peronismo se vio obligado a fomentar de una manera más profunda la organización sindical, mientras trataba de poner freno a los intereses de la clase dominante rural. En Brasil, los gestos simbólicos y las concesiones económicas a las masas populares fueron la tónica del getulismo, por lo menos durante la primera gestión de Vargas. El hecho de que se favoreciera a la burguesía industrial no se tradujo en un choque directo con el sector dominante del campo.

En el transcurso de 1945, mientras Vargas trataba de equilibrarse al mando del Estado, probando una política populista, Perón ensayaba los pasos que lo conducirían a la presidencia. En octubre de ese año, una conspiración militar lo llevó de la vicepresidencia de la república a la cárcel. Una enorme movilización popular apoyada por sectores del Ejército logró liberarlo en tan sólo ocho días. Así se le abrió a Perón el camino hacia la victoria electoral, que alcanzaría en febrero de 1946.

Estos sucesos llevaron a los antigetulistas a precipitar la caída de Vargas con el beneplácito del Gobierno de Estados Unidos. Ni el Getúlio de los meses más recientes ni Perón inspiraban confianza a los estadounidenses, aunque con este último mantuvieron algunos puentes.

La caída de Getúlio no se debió, sin embargo, a una conspiración externa, sino a un juego político complejo. Hubo

también un factor detonante. El 25 de octubre de 1945, el jefe de Gobierno dio un paso en falso: destituyó a João Alberto del cargo estratégico de jefe de la policía del Distrito Federal. La decisión fue tanto más desafortunada cuanto que, en su remplazo, Getúlio nombró a su propio hermano: el truculento Benjamim Vargas. A partir de ese momento el general Góis, desde el Ministerio de Guerra, movilizó a las tropas del Distrito Federal. Dutra trató en vano de mediar pidiéndole a Vargas que revocara el nombramiento de su hermano, pero su petición fue rechazada.

Finalmente la caída de Getúlio se consumó en frío. Forzado a renunciar, dejó el poder declarando públicamente que estaba conforme con separarse del cargo. No tuvo que exiliarse y pudo retirarse a São Borja, su ciudad natal.

La transición de un régimen a otro dependió, pues, de la iniciativa militar. Lo que es más: el general Góis Monteiro, figura importante de la Revolución de 1930, que había llevado a Getúlio al poder, tuvo un papel decisivo en su caída, 15 años más tarde. Estas y otras circunstancias hicieron que la transición al régimen democrático no representara una ruptura con el pasado, sino un cambio de rumbo en medio de muchas continuidades.

El cuadro socioeconómico

Entre el censo de 1920 y el de 1940, la población brasileña pasó de 30.6 millones de habitantes a 41.1 millones. Ambos censos muestran prácticamente un equilibrio entre el número de hombres y mujeres. Se trataba de una población joven: los menores de 20 años correspondían aproximadamente a 54% del total, tanto en 1920 como en 1940.

En cuanto a las distintas regiones fisiográficas que adoptaba el censo de 1940, tan sólo 3.5% de la población se concentraba en

el norte, 24% en el nordeste, 38.5% en el este, 3% en el centro-oeste y 31% en el sur.

Un cambio importante fue que disminuyó el peso de la inmigración internacional y creció el volumen de las migraciones internas. Los acontecimientos de los años posteriores a 1929 fueron cruciales para consolidar esa tendencia. La crisis mundial y el dispositivo constitucional de 1934, que fijaba límites al ingreso de inmigrantes, contribuyeron a reducir el flujo proveniente del extranjero, con la excepción, ya mencionada, de los japoneses.

El desplazamiento interno de la población tuvo distintos sentidos dependiendo de la región. El norte presentó una elevada tasa negativa de migración interna (aproximadamente -14%) como resultado de la crisis del caucho. Se trató, en gran medida, de un movimiento de retorno de los nordestinos a su región de origen. En cambio, el centro-sur del país, en su conjunto, registró altas tasas positivas (11.7%). Es significativo recordar que, hasta 1940, los migrantes que se dirigían al sur del país provenían sobre todo de Minas Gerais y no del nordeste. El núcleo que más migrantes atraía era el Distrito Federal. La migración con destino a São Paulo no fue relevante sino a partir de 1933, cuando tuvo lugar un nuevo auge industrial y se impusieron restricciones a la inmigración extranjera.

Los historiadores de la economía suelen tomar el año de 1930 como el punto de partida de la sustitución de importaciones. Esto es, hasta cierto punto, exagerado, pues el proceso había comenzado décadas antes. Pero no hay duda de que la dificultad para importar debida a la crisis mundial de 1929 y la existencia de una industria de base, así como la capacidad ociosa de las industrias, sobre todo en el sector textil, impulsaron esta sustitución.

Si se observan los valores de la producción agrícola en comparación con la industrial, resulta evidente el crecimiento de esta última. En 1920, la agricultura aportaba 79% del valor de la producción total y la industria, 21%. En 1940, estas proporciones correspondían a 57% y 43% respectivamente, como resultado de las tasas anuales de crecimiento de la industria, muy superiores a las de la agricultura.

El periodo que se inicia en 1929-1930 es muy relevante desde el punto de vista de la producción tanto agrícola como industrial. En esos años comenzó la crisis del café: el lugar de este producto en la agricultura de exportación empezó a decaer. La producción de algodón creció y se destinaba tanto a la exportación como a la industria textil nacional. Entre 1929 y 1940 la participación de Brasil en la superficie cultivada de algodón a nivel mundial creció del 2% al 8.7%. Entre 1925 y 1929 la participación del café en el valor total de las exportaciones brasileñas era de 71.7% y la del algodón tan sólo de 2.1%. En el periodo que va de 1935 a 1939, la participación del café cayó a 41.7% y la del algodón ascendió a 18.6 por ciento.

Además de la producción industrial, hay que resaltar el crecimiento de la producción agrícola destinada al mercado interno. El arroz, el frijol, la carne, el azúcar, la yuca, el maíz y el trigo pasaron a representar, entre 1939 y 1943, 48.3% del valor de la producción de los cultivos. Entre 1925 y 1929 no superaban el 36 por ciento.

Las tasas de crecimiento anual de la industria permiten entender mejor el proceso de industrialización que se dio a partir de 1930. Dejan ver que hubo considerables avances entre 1933 y 1939, y que el avance fue menor entre 1939 y 1945. Esto significa que la industria se recuperó rápidamente tras los años de depresión que se iniciaron en 1929. El hecho de que no se renovara el equipo industrial y los disturbios que sufrió el

comercio internacional a consecuencia del arranque de la Segunda Guerra Mundial contribuyeron al descenso de las tasas de crecimiento entre 1939 y 1943. No obstante, desde el punto de vista cualitativo este periodo fue importante para sostener y expandir el proceso de industrialización en la posguerra. Es posible que la inversión pública en infraestructura contribuyera a evitar o a atenuar estrangulamientos serios.

La importancia de los distintos ramos industriales fue cambiando gradualmente entre 1919 y 1939. Las industrias básicas —metalurgia, mecánica, de material eléctrico y material de transporte— prácticamente duplicaron su participación en el total del valor agregado de la industria. Las industrias tradicionales —principalmente la textil y las de vestido y calzado, alimentos, bebidas, tabaco y muebles—, aunque constituían todavía 60% del valor agregado de la industria, habían sufrido una caída en su participación relativa, pues en 1919 representaban 72% de ese valor. Las industrias química y farmacéutica crecieron extraordinariamente: su participación se triplicó entre 1919 y 1939.

En cuanto al sector educativo, entre 1920 y 1940 hubo cierto declive en el índice de analfabetos, que, no obstante, siguió siendo muy elevado. Entre la población de 15 años o más, el índice de analfabetos cayó de 69.9% en 1920 a 56.2% en 1940. Estos porcentajes muestran que el esfuerzo por expandir el sistema escolar produjo resultados partiendo de índices muy bajos de asistencia a la escuela en 1920. Se estima que en aquella época el índice de niños y niñas de entre 5 y 19 años que asistían a escuelas de nivel primario o medio rondaba el 9%. Para 1940 este índice había ascendido a poco más de 21%. En cuanto a la educación superior, entre 1929 y 1939 el número total de alumnos se incrementó al pasar de 13 200 a 21 200, un aumento del 60 por ciento.

[1] En esta bancada de constituyentes denominados clasistas se incluían 20 diputados en representación de los empleadores y 20 en representación de los empleados; de ahí su nombre (N. de la T.).

[2] Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP).

[3] Partido Trabalhista Brasileiro (N. de la T.).

5. LA EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA (1945-1964)

Las elecciones y la nueva Constitución

Tras la caída de Getúlio Vargas, los militares y la oposición liberal, con la anuencia de los dos candidatos a la presidencia de la república, decidieron entregar el poder transitoriamente al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF). Se mantuvo el calendario que preveía las elecciones para el 2 de diciembre.

A juzgar por la afluencia a los mítines, la candidatura del brigadier Eduardo Gomes estaba en franca expansión, al tiempo que la de Dutra se estancaba. La campaña del brigadier atraía a sectores de la clase media de los grandes centros urbanos con la bandera de la democracia y del liberalismo político. Dutra no entusiasmaba a nadie e incluso se llegó a pensar en sustituirlo por otro candidato con mayor atractivo electoral. Casi en vísperas de las elecciones, Getúlio manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Dutra. Aun así, aclaró que se pondría del lado del pueblo contra el presidente si éste no cumplía sus promesas de campaña.

Las elecciones de 1945 despertaron gran interés entre la población. Tras años de dictadura, la Justicia Electoral no había puesto al día el sistema de recepción y cómputo de votos. Los ciudadanos esperaron pacientemente, en largas filas, su turno para votar. En las últimas elecciones directas para la presidencia de la república, que habían tenido lugar en marzo de 1930, habían participado 1.9 millones de electores, es decir, 5.7% de la población total; en diciembre de 1945 tomaron parte 6.2 millones, que equivalían a 13.4% de los brasileños.

En esa época en que no existían encuestas electorales, la clara victoria de Dutra sorprendió a la oposición. Del total de los votos emitidos, sin contar los votos en blanco y nulos, el general obtuvo 55%, contra 35% atribuidos al brigadier. El resultado mostró la fuerza de la maquinaria electoral que el Partido Social Democrático (PSD) había montado apoyándose en los interventores, así como el prestigio de Getúlio entre los trabajadores. Evidenció también el repudio de las grandes masas al antigetulismo, asociado con los intereses de los ricos.

Dutra triunfó por la combinación de estos factores. No se trató, pues, de una victoria del atraso contra la modernidad ni del campo contra la ciudad. Dutra venció por un amplio margen en los tres grandes estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul y São Paulo. El brigadier obtuvo su mejor resultado en el nordeste, donde perdió por una pequeña diferencia.

La cantidad de votos que recibió el Partido Comunista de Brasil (PCB), entonces legal, fue bastante significativa. Aun con un candidato desconocido —el ingeniero Iedo Fiúza—, el PCB obtuvo 10% del total de votos. Su electorado estaba significativamente concentrado en las grandes ciudades. Los comunistas se vieron beneficiados por el prestigio interno de Luís Carlos Prestes y el prestigio externo de la Unión Soviética.

Getúlio fue uno de los principales ganadores de las elecciones de 1945, no sólo por el papel que tuvo en la victoria de Dutra, sino porque se benefició de la ley electoral: varios estados lo eligieron como diputado y senador, y él optó por ser senador de Rio Grande do Sul.

También se celebraron elecciones legislativas para la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas cámaras conformarían de manera conjunta un Congreso Constituyente hasta que se aprobara una Constitución. Luego se separarían y seguirían funcionando como Congreso Ordinario. La votación dejó claro

que el aparato político que el Estado Novo había montado para apoyar la dictadura también podía ser muy eficiente para captar votos en un régimen democrático. Para una parte considerable del electorado pesaban más las relaciones personales clientelistas que el hecho de que los candidatos fueran partidarios de los liberales o del Estado Novo. Esto último no tenía significado en la vida cotidiana de los electores y era demasiado abstracto como para que lo comprendieran personas que sólo habían tenido una educación rudimentaria. El PSD obtuvo la mayoría absoluta de los escaños, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, seguido por la Unión Democrática Nacional (UDN).

A finales de enero de 1946, Dutra tomó posesión y comenzaron las sesiones de la Constituyente. En septiembre se promulgó la nueva Constitución brasileña, que se distanciaba de la Carta de 1937: optaba por un modelo liberal-democrático, aunque en algunos puntos abría puertas a la continuidad del modelo corporativo.

Brasil se definió como una república federativa, con un sistema de gobierno presidencialista. El Poder Ejecutivo recaería en un presidente de la república elegido por voto directo y secreto para un periodo de cinco años.

Por otro lado, se suprimió la representación profesional en la Cámara de Diputados, prevista en la Constitución de 1934, que llevaba la marca del corporativismo de inspiración fascista.

En el capítulo referente a la ciudadanía se concedía el derecho y la obligación de votar a los brasileños alfabetizados mayores de 18 años de ambos sexos. Con esto se alcanzó la igualdad entre hombres y mujeres en el plano de los derechos políticos. La Constitución de 1934 establecía la obligatoriedad del voto únicamente para aquellas mujeres que desempeñaran una función pública remunerada.

El capítulo sobre el orden social y económico contenía, en su parte económica, criterios para el aprovechamiento de los recursos minerales y de energía eléctrica. En su parte social enlistaba las prestaciones mínimas que debía asegurar la legislación, muy semejantes a las previstas en la Constitución de 1934.

El capítulo sobre la familia dio lugar a largos y acalorados debates entre los partidarios del divorcio y sus adversarios. Al final, prevaleció la presión de la Iglesia católica y la opinión de los más conservadores. Se definió que la familia se conformaba mediante el matrimonio entendido como un vínculo indisoluble.

Fue en la parte referente a la organización de los trabajadores donde los constituyentes dejaron ver su apego al sistema corporativista del Estado Novo. No se suprimió el impuesto sindical, soporte primordial de los *pelegos*. El derecho de huelga se reconoció en principio, pero la legislación ordinaria hizo que fuera inoperante, pues enumeraba todas aquellas "actividades esenciales" en las que las huelgas no estarían permitidas. Casi todos los ramos se incluían en esa lista. El profesor de derecho del trabajo Cesarino Júnior llegó a comentar que, de obedecerse el decreto, sólo serían legales las huelgas de las perfumerías.

En el gobierno de Dutra comenzó la represión al PCB. Ésta se debió al peso de la ideología conservadora, al crecimiento del partido y al cambio en las relaciones entre las grandes potencias. En 1946 el PCB era el cuarto partido del país, y se calcula que su número de militantes oscilaba entre 180 000 y 200 000.

Por otro lado, la hermandad festiva de las naciones que habían vencido al nazifascismo duró muy poco. En China y Grecia estallaron guerras civiles. La hegemonía de Estados Unidos y el equilibrio de Europa se veían amenazados por la Unión

Soviética, que ocupaba directa o indirectamente los países del este europeo. Se confirmaban, así, las peores sospechas sobre las intenciones de Stalin. En suma, las esperanzas de una paz mundial desembocaron en la Guerra Fría.

En mayo de 1947, basado en unas denuncias que presentaron dos oscuros diputados, el STF le revocó el registro al PCB. La decisión fue controvertida y se tomó con un solo voto de diferencia. Exactamente el mismo día en que se proscribió al PCB, el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio ordenó que se intervinieran 14 sindicatos y cerró una central sindical controlada por los comunistas. En los meses siguientes se llevaron a cabo nuevas acciones represivas, al punto que, en el último año del gobierno de Dutra, llegó a haber más de 200 sindicatos intervenidos. Aunque en muchos sindicatos la influencia de los comunistas era real, resultaba evidente que, en nombre del combate al comunismo, el Gobierno trataba de reventar a las organizaciones de trabajadores que se opusieran a su línea.

En enero de 1948 se tomaron las últimas medidas que llevaron al PCB a la clandestinidad. Una ley aprobada por el Congreso Nacional determinó la revocación del mandato de los diputados, senadores y concejales elegidos bajo la insignia del partido.

En materia de política económica, el gobierno de Dutra empezó siguiendo un modelo liberal. Se condenaba la intervención estatal y se fueron aboliendo los controles que el Estado Novo había establecido. Se creía que el desarrollo del país y el fin de la inflación de los últimos años de la guerra dependían de la libertad de los mercados en general y, sobre todo, de la libre importación de bienes. La situación de Brasil en el terreno financiero era favorable, pues el país había acumulado divisas en

el extranjero, gracias a sus exportaciones durante los años de la guerra. A pesar de ello, la política liberal fracasó. La ola de importaciones de bienes de toda clase, favorecida por la valorización de la moneda brasileña, prácticamente llevó al agotamiento de las divisas sin dejar consecuencias positivas.

En respuesta, en junio de 1947 el Gobierno cambió de rumbo y estableció un sistema de licencias para importar. En la práctica, el criterio de las licencias favoreció la importación de artículos esenciales, como equipamiento, maquinaria y combustibles, y limitó la importación de bienes de consumo. Puesto que la moneda brasileña se mantuvo a un buen nivel respecto al dólar, se desalentaron las exportaciones y se estimuló la producción para el mercado interno.

La nueva política económica surgió ante todo como respuesta a los problemas de la balanza de pagos y de la inflación, pero acabó favoreciendo el avance de la industria. En sus últimos años, el gobierno de Dutra alcanzó resultados significativos. A partir de 1947 el crecimiento empezó a medirse más eficientemente a través del cálculo anual del producto interno bruto (PIB). Tomando como base el año de 1947, el PIB creció en promedio un 8% anual entre 1948 y 1950.

En contrapartida, la represión del movimiento sindical facilitó que se impusiera la reducción de los salarios reales. Se calcula que entre 1949 y 1951 el costo de la vida aumentó un 15% en São Paulo y un 23% en Río de Janeiro, mientras que el salario promedio creció un 10.5% en São Paulo y un 12% en Río de Janeiro.

Las maniobras para preparar la sucesión presidencial comenzaron antes de que Dutra terminara la primera mitad de su mandato. Getúlio surgía como un polo de atracción. Sin presentarse casi en el Senado, había hecho algunos viajes

estratégicos a los estados y recibido en São Borja el besamanos de los políticos. Su estrategia era clara: asegurarse la lealtad de los jefes de la maquinaria política que el PSD había montado en el campo y, al mismo tiempo, construirse una sólida base de apoyo.

En São Paulo surgía una nueva fuerza. En las elecciones estatales de 1947, Ademar de Barros fue elegido gobernador con el apoyo de los comunistas. Ademar había iniciado su carrera en el Partido Republicano Paulista (PRP), había sido interventor en São Paulo durante el Estado Novo y había sabido adaptarse a los nuevos tiempos, en los que el éxito político dependía de la capacidad de atraer los votos de una gran masa de electores.

Ademar montó una maquinaria partidista, el Partido Social Progresista (PSP), cuya razón de ser se concentraba en su persona. Sin desarrollar nada que se pareciera a un programa ideológicamente consistente, promovió su imagen presumiendo de una supuesta capacidad administrativa y una ausencia de escrúpulos políticos. Odiado por los partidarios de la UDN, que insistían en la moralidad de los asuntos públicos, se atrajo a elementos de los sectores populares y a algunas porciones de la pequeña y mediana burguesías de la capital y, sobre todo, del interior de São Paulo.

A principios de la década de 1950, Ademar no tenía fuerzas para contender por la presidencia de la república, pero podía ser valioso para uno de los candidatos. Con su apoyo a la candidatura de Vargas, sumó a la corriente getulista la importante base electoral que tenía en São Paulo y que empezaba a expandirse al Distrito Federal.

Dutra se negó a respaldar la candidatura de Vargas, pues ésta no representaría la continuidad de su línea de gobierno. Maniobró dentro del PSD y logró que se postulara un político *mineiro* casi desconocido, el abogado Cristiano Machado. En

realidad, los grandes jefes del PSD renunciaron, en su mayoría, a esa candidatura.

La UDN volvió a presentar al brigadier Eduardo Gomes, que ya no era tan popular como en 1945. Éste consiguió el apoyo de los antiguos integralistas y tuvo la falta de tacto de defender la revocación de la ley del salario mínimo.

Getúlio basó su campaña en la defensa de la industrialización y en la necesidad de ampliar la legislación laboral. Modulaba su discurso según el estado que recorría. En Río de Janeiro, donde la influencia comunista era real, llegó a decir que, de elegirlo, el pueblo subiría junto con él los peldaños del Palacio del Catete y quedaría al mando. Además del Partido Laborista Brasileño (PTB) y el PSP, Getúlio contó con el apoyo abierto o velado de una parte del PSD e incluso de la UDN.

Aunque la división entre el PSD y el PTB le impidió alcanzar el porcentaje de votos que había obtenido Dutra en 1945, Vargas logró una gran victoria en las elecciones del 3 de octubre de 1950. Consiguió 48.7% del total de votos, mientras que el brigadier y Cristiano Machado no pasaron de 29.7% y 21.5% respectivamente.

La vuelta de Getúlio

Getúlio Vargas tomó posesión el 31 de enero de 1951. La UDN trató de impugnar su elección, alegando que sólo era posible considerar vencedor a un candidato que obtuviera la mayoría absoluta de votos. Pero no tuvo éxito: ese requisito no constaba en la legislación de la época. Los liberales, así, mostraban sus contradicciones al desnudo. Defensores en principio de la legalidad democrática, no habían sido capaces de ganarse el voto de las grandes masas en las elecciones más importantes. A partir

de entonces, empezaron a cuestionar los resultados electorales con argumentos dudosos y a reclamar, cada vez más, la intervención de las Fuerzas Armadas.

Getúlio inició su gobierno tratando de desempeñar, bajo las condiciones de un régimen democrático, un papel que ya había tenido: el de árbitro de las diversas fuerzas políticas y sociales. Intentó ganarse a la UDN y eligió un gabinete bastante conservador, con amplio predominio de figuras del PSD. Pero para el cargo estratégico de ministro de Guerra nombró al general Estillac Leal: un viejo "teniente", presidente del Club Militar y vinculado con la corriente nacionalista del Ejército.

En las Fuerzas Armadas se había cristalizado una división ideológica entre los nacionalistas y sus adversarios, llamados despectivamente entreguistas. Esta división incluía los temas de política económica interna y de la posición de Brasil en el cuadro de las relaciones internacionales.

Los nacionalistas eran partidarios de un desarrollo basado en la industrialización y enfatizaban la necesidad de crear un sistema económico autónomo, independiente del sistema capitalista internacional. Esto implicaría dar al Estado un papel importante como regulador de la economía y como inversionista en sectores estratégicos: petróleo, siderurgia, transportes y comunicaciones. Aunque no rechazaban el capital extranjero, los nacionalistas lo veían con muchas reservas, ya fuera por razones económicas o porque creían que la inversión de capital extranjero en sectores estratégicos pondría en riesgo la soberanía nacional.

Los adversarios de los nacionalistas eran partidarios de una menor intervención del Estado en la economía, no daban tanta prioridad a la industrialización y estaban convencidos de que el progreso del país dependía de una apertura controlada al capital extranjero. Sostenían también una postura de rígido

combate a la inflación, mediante el control de la emisión de moneda y de los gastos del Gobierno.

En cuanto a las relaciones internacionales, los nacionalistas favorecían un distanciamiento e incluso una oposición de Brasil respecto a Estados Unidos. Sus adversarios, en cambio, decían que era necesario que el país se alineara con los estadounidenses sin restricciones en el combate mundial contra el comunismo, en una época en que se agravaban las tensiones causadas por el estallido de la Guerra de Corea. Un síntoma claro de que la tendencia favorable a la alineación con Estados Unidos se volvía mayoritaria entre la oficialidad del Ejército fue la victoria de los opositores de los nacionalistas en las elecciones para la dirección del Club Militar, celebradas en mayo de 1952.

A principios de la década de 1950, el Gobierno promovió varias disposiciones destinadas a fomentar el desarrollo económico, con énfasis en la industrialización. Se tomaron medidas para invertir fondos públicos en los sistemas de transporte y energía, contando con la apertura de un crédito extranjero de 500 millones de dólares. Se hicieron esfuerzos para ampliar la oferta de energía en el nordeste y se resolvió el problema del carbón nacional. También se reequiparon parcialmente la marina mercante y el sistema portuario. En 1952 se fundó el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE) con el propósito directo de acelerar el proceso de diversificación industrial. Uno de los principales responsables de su fundación fue el primer ministro de Hacienda del gobierno de Vargas: Horácio Lafer.

Mientras se esforzaba por dinamizar la economía, el Gobierno se veía ante un problema de fuertes repercusiones sociales: el avance de la inflación. En 1947 la inflación, que había ido en aumento desde los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, perdió intensidad. Pero poco después volvió a tomar fuerza. Pasó

de 2.7% en 1947 a un promedio anual de 13.8% entre 1948 y 1953. Tan sólo en el espacio de ese último año presentó una variación de 20.8 por ciento.

Getúlio se veía obligado a maniobrar en un mar de corrientes contradictorias. Por un lado, no podían dejar de preocuparle las reivindicaciones de los trabajadores que sufrían por el aumento del costo de la vida; por otro lado, tenía que adoptar medidas impopulares para controlar la inflación. Entre junio y julio de 1953 hizo cambios en su gabinete. Nombró ministro de Trabajo, Industria y Comercio a un joven político y estanciero *gaúcho*: João Goulart, mejor conocido como Jango. El ascenso político de Jango se vio inicialmente favorecido por el contacto que tenía su familia con la de Getúlio en el municipio de São Borja. Había tenido vínculos con los medios sindicales del PTB y parecía ser una figura capaz de contener la creciente influencia comunista en los sindicatos. Aunque ése era el papel que podía desempeñar, los militares antigetulistas y la UDN, que tenía una influencia considerable en cierto sector de la clase media, convirtieron a Jango en un personaje odioso. En esos círculos se le consideraba como el defensor de una "república sindicalista" y como la encarnación del peronismo en Brasil.

Por entonces, Vargas nombró ministro de Hacienda a su viejo colaborador Osvaldo Aranha, que ya se había destacado en el mismo cargo a principios de la década de 1930. Su programa, llamado Plan Aranha, tenía como objetivo controlar la expansión del crédito y el cambio en las transacciones con el exterior. En este último aspecto, representaba una continuación de las medidas tomadas desde enero de 1953, las cuales habían establecido un cambio flexible de acuerdo con los bienes que se importaran o exportaran. Con la mayor flexibilidad del cambio se esperaba restaurar la capacidad competitiva de las

mercancías exportadas y favorecer la importación de bienes considerados básicos para el desarrollo económico del país.

En octubre de 1953 se introdujo la llamada confiscación cambiaria, que establecía un valor más bajo para el dólar que recibían los exportadores del café en su conversión a cruzeiros. Gracias a esta medida, el Gobierno pudo mover algunos ingresos derivados de la exportación de café a otros ámbitos económicos, sobre todo a la industria. La iniciativa provocó la reacción del sector cafetalero, que trató de organizar marchas de protesta con contenido político. El Ejército las impidió. Fueron las llamadas "marchas de la producción", que tuvieron lugar ya durante el mandato del presidente Juscelino Kubitschek. Pero sería exagerado decir que el gobierno de Vargas simplemente abandonó la caficultura. Procuró, aunque sin éxito, mantener los precios elevados en el exterior, y esto causó irritación en Estados Unidos. Una comisión del Senado estadounidense llegó incluso a investigar los "exorbitantes precios" que exigía Brasil.

A partir de 1953 la política estadounidense en relación con el Tercer Mundo empezó a cambiar de rumbo. El presidente Harry Truman (1945-1952) había forzado a esos países a definir su posición respecto al comunismo, sobre todo después del estallido de la Guerra de Corea. Pero había mantenido una política de asistencia para con las naciones que estaban dentro de la órbita estadounidense. En enero de 1953 el general Dwight Eisenhower asumió la presidencia y nombró como secretarios del Tesoro y de Estado a George Humphrey y John Foster Dulles, respectivamente. Además de hacer del anticomunismo una verdadera cruzada, el Gobierno de Estados Unidos adoptó una postura rígida ante los problemas financieros de los países en desarrollo. La línea dominante sería abandonar la asistencia del Estado y dar preferencia a la inversión privada. Las posibilidades de que Brasil obtuviera créditos públicos para hacer obras de

infraestructura que cubrieran los déficits de la balanza de pagos se redujeron sensiblemente.

Este cambio de línea dificultó la ejecución del significativo Plan de Reequipamiento y Fomento a la Economía Nacional,[1] conocido como Plan Lafer. Buena parte de sus proyectos habría de integrarse al Plan de Metas del gobierno de Kubitschek.

Vargas no se olvidó de una de sus principales bases de apoyo: los trabajadores urbanos, ni siquiera al inicio de su gobierno, cuando trató de congregar a su alrededor a todas las fuerzas conservadoras. En el mitin del 1º de mayo de 1951 dio un paso para estrechar los lazos con la clase obrera. No se limitó a las palabras genéricas: conminó a los trabajadores a organizarse en sindicatos para ayudarlo en la lucha contra "los especuladores y codiciosos". Al mismo tiempo abolió el llamado "comprobante de ideología" como requisito para participar en la vida sindical. Esto favoreció la vuelta de los comunistas y, en general, de aquellos a los que el gobierno de Dutra había excluido.

Pero el Gobierno no fue capaz de controlar por completo el mundo del trabajo. La liberalización del movimiento sindical y los problemas ocasionados por el aumento en el costo de la vida llevaron a una serie de huelgas en 1953. Entre ellas destacan la general de marzo en São Paulo y la de los trabajadores marítimos en Río de Janeiro, Santos y Belém, en junio. Se trató de dos huelgas muy distintas.

La huelga paulista, que empezó por el sector textil, llegó a movilizar a 300 000 trabajadores: se sumaron a ella los carpinteros, ebanistas, obreros del sector del calzado, trabajadores gráficos y vidrieros. Su reivindicación principal era un aumento de 60% a los salarios, pero su contenido también desafiaba las leyes que limitaban el derecho de huelga. Marcada

por frecuentes choques con la policía, esta huelga duró 24 días. Al final terminó en acuerdos por separado con cada sector.

Este movimiento representó una derrota para el getulismo en São Paulo. El presidente conservaba parte de su prestigio personal, pero el PTB y los *pelegos* sindicales se habían visto rebasados en la dirección del movimiento. Los comunistas, en ese entonces férreos opositores de Getúlio, a quien acusaban de ser un "lacayo del imperialismo", tuvieron un papel protagónico en la organización del paro.

La huelga de los marítimos movilizó a unos 100 000 trabajadores. Los sindicatos involucrados exigían aumentos salariales, mejores condiciones laborales y la destitución de los directivos de la Federación de Marítimos, a quienes acusaban de tener vínculos con el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio. Esta última exigencia coincidía con la intención de Getúlio de sustituir al ministro.

En efecto, João Goulart asumió el cargo de ministro ya con la huelga en curso y actuó como un intermediario eficaz. Puesto que la huelga afectaba a un sector de interés público, sometido a la regulación económica del Estado, Goulart pudo imponer una solución que satisfacía la mayor parte de las reivindicaciones de los huelguistas. Al mismo tiempo obligó a renunciar a los directivos de la Federación de Marítimos y con ello abrió paso a otra dirección más cercana a los trabajadores y a sí mismo.

El mismo marzo de 1953 en que estalló la Huelga de los Trescientos Mil tuvo lugar en São Paulo un acontecimiento político que en su momento se consideró importante, pero cuyos verdaderos alcances sólo quedarían claros con el paso de los años. Un concejal, exprofesor de nivel medio, ganó las elecciones para alcalde de São Paulo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el minúsculo Partido Socialista Brasileño (PSB), derrotando

a los candidatos de otros partidos, que parecían ser más fuertes. Jânio Quadros triunfó gracias a una campaña populista —la del "tostón contra el millón"—, sumada a la bandera de la lucha contra la corrupción. Jânio entendió que este tema sería muy rentable políticamente si dejaba de asociarse con la élite udenista y se expresaba a través de imágenes eficaces. El símbolo de la escoba es el mejor ejemplo de estas imágenes. El deseo de innovar derrotando a las maquinarias partidistas y la fe en los poderes mágicos de un personaje providencial que acabaría con la corrupción unieron a distintos sectores sociales —desde la masa trabajadora hasta la clase media— en torno a la figura de Jânio.

Mientras tanto, en el escenario federal, Jango era el blanco preferido de los ataques de los sectores civiles y militares antigetulistas. Se le asociaba con los supuestos planes de implantar una república sindicalista y de elevar en un 100% el salario mínimo. Entre los adversarios civiles del Gobierno se contaba la mayoría de los integrantes de la UDN y de otros partidos menores, así como gran parte de la prensa. Por su radicalismo y potencia verbal se destacaba el excomunista Carlos Lacerda. Con el paso de los años, Lacerda no sólo había roto con sus antiguos compañeros, sino que se había convertido en uno de sus enemigos más encarnizados. El populismo y el comunismo eran los blancos preferidos de sus ataques. Desde su periódico, la *Tribuna da Imprensa*, inició una violenta campaña antigetulista que exigía la renuncia del presidente. Además pedía que se decretara un estado de emergencia, durante el cual habría que reformar las instituciones democráticas para impedir que —en palabras de Lacerda— los políticos populistas las pervirtieran.

Entre los opositores militares del Gobierno se contaban los oficiales anticomunistas, enemigos del populismo, algunos de ellos identificados con la UDN, y otros adversarios de los políticos

en general. Las figuras más conocidas eran los generales Cordeiro de Farias y Juarez Távora y el brigadier Eduardo Gomes. La fuerza de la oficialidad joven no tardaría en dejarse ver. Una muestra de la efervescencia que se vivía en los medios militares fue la publicación del llamado "Manifiesto de los coroneles" en febrero de 1954. Se trataba de un documento firmado por 42 coroneles y 39 tenientes coroneles que protestaban contra lo que ellos consideraban el deterioro de los estándares materiales y morales del Ejército. El manifiesto se oponía también a que el salario mínimo se elevara a niveles incompatibles con la realidad del país.

La caída de Getúlio

En febrero de 1954, Getúlio reorganizó su gabinete. João Goulart alcanzó a proponer el aumento de 100% al salario mínimo, pero luego fue sustituido por un personaje gris. La salida de Goulart dejó la impresión de que lo habían destituido porque quería conceder beneficios a los trabajadores. Con la esperanza de calmar a las Fuerzas Armadas, Getúlio nombró ministro de Guerra al general Zenóbio da Costa, un hombre de su confianza y famoso adversario del comunismo.

A pesar de estas precauciones, el discurso del presidente y el conjunto de sus medidas chocaban cada vez más con los intereses de los sectores sociales conservadores. En el terreno económico, Getúlio adoptó una línea nacionalista, achacándole al capital extranjero los problemas de la balanza de pagos. En abril de 1954, como las empresas canadienses y estadounidenses que producían energía eléctrica no se decidían a hacer nuevas inversiones, propuso un proyecto de ley que creaba una empresa

estatal en ese sector: las Centrales Eléctricas Brasileñas (Eletrobras).

Ese mismo mes, el exministro de Relaciones Exteriores, João Neves da Fontoura, concedió una entrevista en la que expresó con mayor consistencia las críticas de la oposición. Neves acusaba al presidente y a João Goulart de haber firmado un acuerdo secreto con Argentina y Chile para impedir la presencia estadounidense en el Cono Sur. La supuesta alianza, que incluía ni más ni menos que a la Argentina de Perón, parecía un paso más hacia la instauración de la "república sindicalista". En cuanto a las relaciones laborales, el 1º de mayo Vargas anunció el aumento de 100% al salario mínimo, con lo que provocó una oleada de protestas.

A pesar de las presiones y de que su gobierno no tenía una base de apoyo sólida en esos momentos, Getúlio se equilibraba en el poder. La oposición necesitaba que un acontecimiento lo suficientemente traumático animara a las Fuerzas Armadas a traspasar los límites de la legalidad y deponer al presidente. Y fue el círculo íntimo de éste el que dio pie a ese acontecimiento. En ese círculo se tenía la convicción de que era preciso sacar a Lacerda de la escena política para asegurar la permanencia de Getúlio en el poder. Según se averiguó más tarde, personajes cercanos a Getúlio insinuaron a Gregório Fortunato —jefe de la guardia presidencial del Palacio del Catete— que había que "resolver el tema" de Lacerda. Fiel servidor de Vargas desde hacía más de 30 años, Gregório planeó el asesinato de la figura más visible de la oposición.

Si la idea del crimen era desastrosa, más lo fue aún su ejecución. En la madrugada del 5 de agosto de 1954, un pistolero trató de matar a Lacerda disparándole cuando se acercaba a la puerta de su domicilio en Río de Janeiro. Pero al que asesinó fue al acompañante de éste —el mayor de la Fuerza Aérea Rubens

Vaz—, dejando a Lacerda sólo levemente herido. Ahora Vargas tenía en su contra un acto delictivo que provocó indignación general, un adversario con mejores cartas para lanzarse contra él y a la Fuerza Aérea en estado de rebelión. Tanto las investigaciones de la policía como la que emprendió la propia Fuerza Aérea empezaron a sacar a la luz aspectos sombríos del gobierno de Vargas, aunque no pudieron involucrar personalmente al presidente en lo que él mismo describió como un "mar de fango".

El movimiento por la renuncia de Vargas adquirió grandes proporciones. Pero el presidente resistía, insistiendo en que él representaba el principio de la legalidad constitucional. El 23 de agosto quedó claro que el Gobierno había perdido el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ese día se publicó un manifiesto a la nación firmado por 27 generales del Ejército que exigían la renuncia del presidente. Entre los firmantes se contaban no sólo célebres adversarios de Getúlio, sino también generales que se habían mantenido lejos de la oposición sistemática, como Henrique Lott, que al cabo de poco más de un año se convertiría en portavoz de la legalidad.

Al verse cercado, Vargas respondió con un último y trágico acto. La mañana del 24 de agosto se disparó al corazón en sus aposentos del Palacio del Catete. El suicidio de Vargas expresaba su desesperanza personal, pero tuvo también un profundo significado político. La carga dramática del acto mismo podría electrizar a las grandes masas. Además, el presidente dejó como legado un mensaje conmovedor a los brasileños —su llamada "carta testamento"— en el que se presentaba como víctima de las fuerzas antipopulares y al mismo tiempo como su acusador, señalando a los grupos internacionales, aliados de sus enemigos internos, como responsables del callejón sin salida al que había llegado.

Las consecuencias de su gesto fueron inmediatas. Las masas urbanas salieron a las calles de todas las grandes ciudades y atacaron los blancos más significativos de su odio, como, por ejemplo, los periódicos de oposición y la representación diplomática de Estados Unidos en Río de Janeiro. Los comunistas participaron en esas manifestaciones. Aunque se habían mantenido en la oposición durante todo el gobierno de Vargas —hasta el punto de inclinarse por su renuncia—, cambiaron de frente de la noche a la mañana. En adelante, abandonaron la línea radical, que con frecuencia acababa beneficiando a sus peores enemigos, y apoyaron cada vez más el esquema del nacionalismo populista.

El hecho de que en la cúpula del Ejército se prefiriera darle una salida legal a la crisis, aunado al impacto que provocaron las manifestaciones populares, impidió que se concretara un golpe contra las instituciones. El vicepresidente Café Filho asumió el poder, formó un gabinete de mayoría udenista y aseguró al país que garantizaría la celebración de las elecciones presidenciales previstas para octubre de 1955.

El primer partido que presentó un candidato fue el PSD. En febrero de 1955, anunció la candidatura de Juscelino Kubitschek. Éste había hecho carrera entre los cuadros del PSD de Minas Gerais y había sido gobernador del estado. Era un buen representante de una de las vertientes del getulismo y estaba en condiciones de obtener el apoyo del PTB, como en efecto sucedió. Se restauraba así la alianza PSD-PTB que en 1945 había dado a Dutra una extraordinaria cantidad de votos. En mayo, Ademar se decidió a contender, aunque Jânio lo había derrotado en las elecciones para el Gobierno de São Paulo en octubre de 1954.

Un mes después, la UDN presentó, de nueva cuenta, un candidato militar. Ya no era posible insistir en el nombre del

brigadier Eduardo Gomes, desgastado por dos derrotas. Otro viejo integrante del movimiento *tenentista* —el general Juarez Távora— surgió como candidato del partido.

En su campaña, Juscelino insistía en la necesidad de avanzar en el sentido del desarrollo económico apoyado en capitales públicos y privados. Juarez enfatizaba la moralización de las costumbres políticas; al mismo tiempo, se mostraba contrario a la intervención excesiva del Estado en la economía, que estaba llevando al país a un peligroso desequilibrio.

En la contienda no faltaron jugadas sucias. En septiembre de 1955 los adversarios de Jango y Juscelino hicieron publicar en los periódicos la llamada Carta Brandi, que supuestamente le había enviado en 1953 el diputado argentino Antonio Jesús Brandi a João Goulart cuando éste era ministro de Trabajo, Industria y Comercio. La misiva hacía referencia a supuestas maquinaciones entre Jango y Perón para desatar en Brasil un movimiento armado que instauraría la república sindicalista. Inmediatamente después de las elecciones una investigación llevada a cabo por el Ejército comprobó que la carta era obra de unos falsificadores argentinos que se la habían vendido a los opositores de Jango.

El 3 de octubre de 1955 las urnas dieron la victoria a Juscelino por un estrecho margen. Ganó con 36% de los votos, al tiempo que Juarez obtuvo 30%; Ademar, 26%; y Plínio Salgado, candidato de los viejos integralistas, 8%. Como entonces se podía votar por nombres que integraran planillas diferentes para la presidencia y la vicepresidencia, João Goulart resultó electo vicepresidente con un porcentaje de votos ligeramente superior al de Juscelino. El éxito de Jango era una muestra del avance del PTB.

Tras la victoria de Juscelino y João Goulart se desató una campaña contra su toma de posesión. A principios de noviembre de 1955, Café Filho sufrió un ataque cardiaco que lo obligó a dejar momentáneamente el poder. Lo sustituyó el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Luz, a quien se acusaba de favorecer abiertamente a los partidarios de un golpe militar. Se dio entonces un "golpe preventivo", es decir, una intervención militar cuyo objetivo no era impedir la toma de posesión del presidente electo, sino garantizarla.

El personaje central de esta acción, ocurrida el 11 de noviembre de 1955, fue el general Lott, que puso en movimiento a las tropas del Ejército en Río de Janeiro. Éstas ocuparon edificios gubernamentales, estaciones de radio y periódicos. Los mandos militares se pusieron del lado de Lott, mientras que los ministros de la Marina y de la Fuerza Aérea tacharon su proceder de "ilegal y subversivo". El Ejército rodeó las bases aéreas y marítimas para impedir un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas. Depuesto, Carlos Luz se refugió en el crucero *Tamandaré* acompañado de sus ministros y de otras figuras políticas —entre ellas Carlos Lacerda— para tratar, inútilmente, de organizar la resistencia.

Rápidamente, el mismo 11 de noviembre, el Congreso Nacional se reunió para evaluar la situación. Contra los votos de la UDN, los parlamentarios declararon a Carlos Luz incapacitado para ocupar la presidencia de la república. El cargo pasó entonces al presidente del Senado, Nereu Ramos, el siguiente en la línea de sucesión constitucional. Diez días después, aparentemente recuperado, Café Filho quiso volver a tomar posesión como presidente de la república. El Congreso lo declaró incapacitado y confirmó a Nereu Ramos al frente del Ejecutivo. Poco después, a petición de los ministros militares, el Congreso declaró al país en estado de sitio por 30 días, que después se

extendieron a 60. Estas medidas de excepción garantizaron la toma de posesión de Juscelino y Jango el 31 de enero de 1956.

Del nacionalismo al desarrollismo

En comparación con el gobierno de Vargas y con los meses que siguieron a su suicidio, los años de gobierno de Kubitschek fueron un periodo de estabilidad política. Más aún, fueron tiempos de optimismo, acompañados de altos índices de crecimiento económico, en los que se cumplió el sueño de construir Brasilia. La promesa de avanzar "cincuenta años en cinco", como decía la propaganda oficial, tuvo resonancia en amplios sectores de la población.

La alta oficialidad de las Fuerzas Armadas —especialmente del Ejército— estaba dispuesta, en su mayoría, a garantizar el régimen democrático dentro de ciertos límites que tenían que ver con la conservación del orden interno y el combate al comunismo. Esta mayoría sólo ponía reparos al getulismo cuando éste se internaba en el terreno de un nacionalismo agresivo o cuando apelaba a la organización de los trabajadores.

Pero había sectores de las Fuerzas Armadas que no seguían a la mayoría. Por un lado, estaban los oficiales nacionalistas —algunos de ellos, cercanos a los comunistas—, partidarios de un nacionalismo radical, contra el llamado imperialismo estadounidense. Por otro lado, estaban los "purificadores de la democracia", convencidos de que sólo un golpe que renovara las instituciones podría impedir el avance de la república sindicalista y del comunismo.

No todos los golpistas eran entreguistas. En algunos, la idea del golpe se combinaba con la defensa de los intereses nacionales. Los oficiales de la Fuerza Aérea que se rebelaron en

enero de 1956, por ejemplo, además de denunciar la infiltración comunista en los mandos militares, acusaban al Gobierno de haber hecho acuerdos con grupos financieros internacionales para entregarles el petróleo y venderles minerales estratégicos.

Para cuando se inició el gobierno de Kubitschek, la cúpula militar estaba tranquila. Los partidarios del golpe habían jugado su carta fuerte al exigir la renuncia de Vargas e intentar impedir la toma de posesión de Juscelino, pero habían perdido. Juscelino empezó su mandato enfatizando que había que promover "el desarrollo y el orden", objetivos generales compatibles con los de las Fuerzas Armadas. El presidente se esforzó por satisfacer las reivindicaciones específicas de la corporación militar en materia de salarios y equipo. También se ocupó de mantener el movimiento sindical bajo control en la medida de lo posible. Se acentuó, además, la tendencia a nombrar militares para cargos estratégicos del Gobierno. En la empresa estatal de Petróleo Brasileño (Petrobras), por ejemplo, así como en el Consejo Nacional del Petróleo (CNP), los principales puestos quedaron en manos de miembros de las Fuerzas Armadas.

Uno de los principales representantes del apoyo de los militares al gobierno de Kubitschek fue el general Lott, ministro de Guerra durante casi todo el lustro que duró el periodo presidencial. Pese a no tener mucha autoridad entre los militares, Lott reunía dos cualidades importantes: tenía un historial impecable y no pertenecía a ningún partido. Esto último le permitía limar asperezas dentro de las Fuerzas Armadas.

En lo que concierne a la política partidista, el acuerdo entre el PSD y el PTB aseguró apoyo del Congreso a los principales proyectos del Gobierno. Los rasgos de cada partido se habían ido definiendo a lo largo de 10 años. No dejaron de ser vehículos de

disputas personales ni vías de posicionamiento para grupos rivales en busca de privilegios, pero, al mismo tiempo, cada uno empezó a representar aspiraciones e intereses más generales.

Un rasgo común acercaba al PSD y al PTB a pesar de sus divergencias: el getulismo. Pero el getulismo del PSD era una cosa, y el del PTB, otra. El del PSD reunía a una parte de los sectores dominantes del campo, a la burocracia del Gobierno que había nacido con el Estado Novo y a una fracción de la burguesía industrial y comercial que se había visto beneficiada por el desarrollo y había lucrado con la inflación. El getulismo del PTB acogía a la burocracia de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio (que controlaba la estructura vertical del sindicalismo y otras instancias importantes, como la del sistema de pensiones), al sector de la burguesía industrial más propenso al nacionalismo y a la mayoría de los trabajadores urbanos organizados.

Para que la alianza de estos dos partidos pudiera funcionar, ninguno debía radicalizar sus características. El PSD, por un lado, no debía ser tan conservador como para chocar con la burocracia sindical y las reivindicaciones obreras; el PTB, por el otro, no debía llevar muy lejos esas reivindicaciones al ocupar los cargos más disputados del Estado ni hacer del nacionalismo una bandera de agitación social.

Durante buena parte de su gobierno, Juscelino pudo sintetizar los límites de la acción de estos dos partidos. El lema de "desarrollo y orden" agradaba a los cuadros del PSD, que lo habían formulado. En el terreno social, Kubitschek no se opuso a los intereses de la burocracia sindical y trató de limitar el estallido de huelgas. Así, no le cortó el camino al PTB ni a Jango, aunque tampoco se puede decir que se pusiera a su servicio.

Juscelino definió su política económica en el Programa de Metas, que incluía 31 objetivos divididos en seis grandes grupos: energía, transporte, alimentación, industrias de base, educación y la construcción de Brasilia, también conocida como "metasíntesis".

En su intento de superar la rutina burocrática, el Gobierno creó órganos paralelos a los de la administración pública, así como nuevas entidades. Al lado del inútil y corrupto Departamento Nacional de Obras contra las Sequías (DNOCS) surgió, por ejemplo —rodeado de esperanzas que en su mayoría no se concretaron—, la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (Sudene), para planear la expansión industrial en esa región. A fin de emprender la construcción de Brasilia se creó la Compañía Urbanizadora de la Nueva Capital de Brasil (Novacap).

El gobierno de Kubitschek impulsó una extensa participación estatal tanto en el sector de infraestructura como en el fomento directo a la industrialización. Pero también asumió abiertamente la necesidad de atraer capital extranjero, incluso concediéndole grandes facilidades. Así, la ideología nacionalista perdía terreno ante el desarrollismo. El Gobierno consintió el amplio ejercicio de una ley promulgada durante el gobierno de Café Filho que permitía a las empresas importar equipo extranjero sin cobertura cambiaria, es decir, sin tener que depositar moneda extranjera para pagar las importaciones. Para optar por este beneficio, las empresas debían poseer en el extranjero los equipos que trasladarían a Brasil o recursos para pagarlos. Las empresas extranjeras, que podían cumplir fácilmente con estos requisitos, quedaron en una situación ventajosa a la hora de transportar el equipo de sus casas matrices e integrarlo al capital que poseían en Brasil. La ley facilitó la inversión extranjera en sectores que el Gobierno

consideraba prioritarios: industria automotriz, transportes aéreos, ferrocarriles, electricidad y acero.

Los resultados del Programa de Metas fueron impresionantes, sobre todo en el sector industrial. Entre 1955 y 1961 el valor de la producción industrial, descontando la inflación, creció en un 80%, con altos porcentajes en las industrias siderúrgica (100%), mecánica (125%), de electricidad y comunicaciones (380%) y de material de transporte (600%). De 1957 a 1961, el PIB aumentó a una tasa anual de 7%, lo que corresponde a una tasa *per capita* de casi 4%. Si se considera toda la década de 1950, el crecimiento del PIB brasileño *per capita* fue de aproximadamente el triple que el del resto de América Latina.

El régimen de Kubitschek se asocia con la instalación de la industria automotriz, aunque ya desde antes había en Brasil una cantidad limitada de ensambladoras y fábricas de autopartes. El Estado fomentó la producción de automóviles y camiones con capitales privados, sobre todo extranjeros, atraídos a Brasil por las facilidades que concedía el Gobierno y por el potencial del mercado brasileño.

Las grandes multinacionales, como Willys Overland, Ford, Volkswagen y General Motors (GM), se concentraron en el ABC paulista —en la zona que se conoce como la Gran São Paulo, que incluye los municipios de Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul— y transformaron por completo la fisonomía de la región. Una de las consecuencias de la industria automotriz fue la concentración de obreros en proporciones nunca antes vistas en el país. En 1960, último año del gobierno de Kubitschek, tan sólo las cuatro empresas mencionadas produjeron alrededor de 78% de un total de 133 000 vehículos: lo bastante para satisfacer la demanda brasileña. Las empresas extranjeras siguieron expandiéndose. En 1968, Volkswagen, Ford y GM producían casi 90% de los vehículos.

En términos de números y de organización empresarial, la instalación de la industria automotriz fue un éxito innegable. Pero obedecía al propósito de crear una "civilización del automóvil" en lugar de ampliar los medios de transporte colectivos para las grandes masas. A partir de 1960 creció la tendencia a fabricar autos, al punto que llegó a representar casi 58% de la producción de vehículos en 1968. Como en la práctica se abandonó a los ferrocarriles, Brasil dependió cada vez más de la ampliación y conservación de carreteras y del uso de los derivados del petróleo para el área de transportes.

La memoria colectiva recuerda los cinco años de gobierno de Kubitschek como un periodo de optimismo asociado con grandes logros, cuyo mayor ejemplo fue la construcción de Brasilia. En su momento, la fundación de una nueva capital dividió las opiniones: para los funcionarios públicos de la vieja capital de la república, que se vieron obligados a mudarse al altiplano central, fue un tormento.

La idea no era nueva, pues la primera Constitución republicana de 1891 daba al Congreso la atribución de "mudar la Capital de la Unión". Pero fue Juscelino quien llevó el proyecto a la práctica, y lo hizo con enorme entusiasmo, poniendo en movimiento recursos y mano de obra, ésta conformada sobre todo por migrantes nordestinos (los llamados *candangos*). Al frente del diseño de Brasilia quedaron el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, dos figuras de renombre internacional.

El proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso para la construcción de Brasilia se aprobó en septiembre de 1956, pese a la fuerte resistencia que opuso la UDN. Los udenistas alegaban que aquélla era una iniciativa demagógica y que se traduciría en un aumento de la inflación y en el aislamiento de la sede del Gobierno. Cuando ya se habían iniciado los trabajos, Carlos

Lacerda encabezó una solicitud de que se constituyera una comisión investigadora para averiguar si había irregularidades en la contratación de las obras, pero fue en vano. Por fin, el 21 de abril de 1960 —fecha simbólica—, Juscelino inauguró solemnemente la nueva capital.

En la gestión de Kubitschek, el sindicalismo sufrió cambios que se harían más evidentes durante los primeros años de la década de 1960, en el gobierno de João Goulart. Conforme se iba ampliando el movimiento de los trabajadores, líderes sindicales de distintas tendencias empezaron a darse cuenta de lo difícil que era articular dicho movimiento dentro de la estrecha estructura oficial. Nacieron así organismos que comenzaron a actuar en paralelo a aquélla. Ejemplos de estos organismos son el Pacto de Unidad Intersindical (PUI), fundado en São Paulo en 1955, y el Pacto de Unidad y Acción (PUA), instituido en Río de Janeiro. A diferencia del PUI, el PUA actuaba en el sector público o en sectores de utilidad pública controlados por empresas estatales y concesionarias de servicios públicos. Este organismo abrió el camino para la formación del Comando General de los Trabajadores (CGT), que desempeñaría un papel relevante en las huelgas del periodo de Goulart.

La creación del PUA acentuó una tendencia que ya estaba presente desde hacía algunos años y que tenía que ver con el campo de acción de los sindicatos. Éste se había ido concentrando cada vez más en el sector público o de utilidad pública. Además, en el sector del mercado la organización sindical tuvo un mayor peso relativo en los ramos tradicionales que estaban en decadencia, como el caso típico de los productos textiles.

En esa época el sindicalismo tuvo dificultades para penetrar en un sector de punta: la industria automotriz. Esto se debió, al

parecer, a dos factores básicos. Por un lado, al tradicional arraigo del movimiento sindical, y sobre todo de los comunistas, en las empresas ligadas al Estado; por el otro, a la desorientación del movimiento ante las nuevas técnicas de relaciones de trabajo introducidas por las empresas multinacionales.

Mientras construían organizaciones paralelas, los líderes sindicales trataron de politizar a los sindicatos. Esto significaba llevarlos a apoyar la corriente nacionalista y las propuestas de reformas sociales —las llamadas reformas de base—, entre las que se incluía la reforma agraria.

Pero no todo fue color de rosa en el periodo de Kubitschek. Los peores problemas se concentraron en dos áreas interconectadas: el comercio exterior y las finanzas del Gobierno. Los gastos de éste para mantener el programa de industrialización y la construcción de Brasilia, aunados a una grave caída de los términos de intercambio con el exterior, produjeron un déficit creciente en el presupuesto federal. Dicho déficit pasó de menos de 1% del PIB en 1954 y 1955 a 2% en 1956 y 4% en 1957. Con excepción de 1957, este cuadro estuvo acompañado de un aumento en la inflación, que alcanzó su punto más alto del gobierno de Kubitschek en 1959, con una variación de 39.5 por ciento.

El incremento de la inflación se debió a varias razones. Entre las principales se cuentan los gastos que el Gobierno destinó a la construcción de Brasilia y a atender los aumentos salariales de ciertos sectores del funcionariado, aprobados por el Congreso; la caída de los términos de intercambio; la compra de café mediante la emisión de papel moneda para evitar el desplome de los precios, y el crédito fácil concedido al sector privado.

En junio de 1958, desgastado por estos problemas, el ministro de Hacienda, José Maria Alkmin, renunció a su cargo. Juscelino

nombró en su lugar al ingeniero Lucas Lopes, primer presidente del BNDE durante su gobierno; Roberto Campos lo sustituyó al frente del banco. Ambos elaboraron un plan para estabilizar la economía que buscaba hacer compatibles el combate a la inflación y a la deuda pública con los objetivos del Programa de Metas.

El plan no preveía grandes sacrificios, pero aun así hubo fuertes reacciones en su contra. En primer lugar, ningún grupo social estaba dispuesto a perder ni lo más mínimo a cambio de la estabilidad: todos esperaban que fuera otro quien hiciera el sacrificio. En segundo lugar, la inflación era un excelente negocio para muchos sectores sociales: como los salarios no lograban estar a la altura de los precios, la inflación abría la perspectiva de ganancias excepcionales mediante el reajuste de precios y la especulación con reservas de mercancías por parte de industriales y comerciantes. Además, como las deudas aún no estaban sujetas a la corrección monetaria, la inflación hacía que los préstamos fueran extraordinariamente atractivos, sobre todo aquellos que se obtenían en condiciones de privilegio en bancos y órganos estatales de financiamiento.

Entre los trabajadores organizados, la resistencia obedecía sobre todo a dos factores. Se sospechaba que el programa de estabilización implicaba "pactos con el imperialismo", y esto les daba escalofríos al PTB y la izquierda. Al mismo tiempo, cualquier plan de esa índole implicaba a corto plazo restricciones adicionales. Los dirigentes sindicales y los trabajadores que estaban bajo su influencia temían que los asalariados fueran el único sector obligado a aceptar esas nuevas restricciones, mientras los otros las rechazaban. Esto pondría a los asalariados en la peor situación posible: tendrían que hacer frente a una inflación igual o mayor, con los salarios reales más reducidos.

En São Paulo, los intentos de restringir el crédito que se concedía a los industriales provocaron protestas apoyadas por el presidente del Banco de Brasil. En octubre de 1958 los caficultores organizaron una marcha de la producción contra la confiscación cambiaria y contra las nuevas medidas del Gobierno para limitar las compras de las reservas de café.

En la medida en que el programa de estabilización tenía que ver con las cuentas externas de Brasil, su funcionamiento dependía de la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI). Brasil consultó a ese órgano, entre otras cosas porque esperaba un préstamo estadounidense de 300 millones de dólares. Contra lo que afirmaban los adversarios del plan, el FMI no estaba detrás de él; veía con reservas el gradualismo del programa y criticaba, sobre todo, los gastos del Gobierno para subsidiar la importación de trigo y de petróleo.

La indefinición en las relaciones entre Brasil y el FMI duró casi un año, hasta junio de 1959. Para entonces, Juscelino estaba por terminar su mandato y tenía los ojos puestos en la sucesión presidencial. Los nacionalistas y los comunistas atacaban al presidente porque estaba dispuesto a "vender la soberanía nacional a los banqueros internacionales y al FMI". La única que veía favorablemente el acuerdo con el FMI era la UDN, pero Juscelino no podría contar con el apoyo político de la oposición ni aunque optara por ese camino.

Estas circunstancias llevaron al Gobierno a romper con el FMI y, en consecuencia, a abandonar en definitiva el plan de estabilización. En agosto de 1959, Lucas Lopes y Roberto Campos renunciaron a sus puestos. La ruptura con el FMI provocó una oleada de apoyo a Juscelino. Como era de esperarse, el PTB aplaudió la decisión. Los comunistas participaron en una manifestación a favor del presidente en los jardines del Palacio del Catete. Entre los manifestantes estaba Luís Carlos Prestes,

que desde 1958 había salido de la clandestinidad. Poco a poco el PCB encontraba vías de expresión, aunque formalmente seguía siendo ilegal. Pero los apoyos no llegaron sólo del PTB y de la izquierda. También la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) y la cúpula militar secundaron esa ruptura.

Este entusiasmo, sin embargo, no alcanzó a las grandes masas, como se vería en las elecciones presidenciales del 3 de octubre de 1960. Las candidaturas surgieron desde 1959. Tras haber sido electo gobernador de São Paulo, Jânio Quadros se lanzó en abril como candidato por un pequeño partido, con el apoyo de Lacerda. Ademar se presentó como candidato del PSP, animado por los buenos resultados que había obtenido en las elecciones de 1955. El PSD y el PTB volvieron a unirse, esta vez en torno a la candidatura del general Lott, con João Goulart como candidato a vicepresidente.

La UDN dudaba entre presentar una candidatura propia o apoyar a Jânio. Jânio actuaba por su cuenta: criticaba la corrupción del Gobierno y el desorden financiero. Sin un programa definido y despreciando a los partidos políticos, atraía al pueblo con su figura populachera y amenazante, que prometía un castigo implacable a los que se beneficiaran de negocios sucios y corruptelas de cualquier tipo. No coincidía con el estilo de la UDN, respetuoso de las formas, pero a la vez incorporaba, a su modo, algo de su discurso. Para la UDN Jânio representaba, sobre todo, una oportunidad de llegar por fin al poder, aunque por un atajo imprevisto. En la convención que celebró en noviembre de 1959, la UDN decidió finalmente respaldar a Jânio.

Desde el principio de la campaña fue evidente que Jânio sería el favorito. Reunía las esperanzas de la élite antigetulista, del sector de la clase media que esperaba la llamada moralización de las costumbres políticas y sufría por el aumento del costo de la vida, y de la mayoría de los trabajadores.

Lott fue un candidato desastroso. El general había tenido un papel importante en los círculos más selectos del poder, donde había encarnado la garantía de la continuidad del régimen burocrático. Pero cuando se expuso a una audiencia más amplia, sus debilidades se hicieron evidentes. Hablaba mal en público y trataba de asumir artificialmente el discurso getulista. Su defensa de la concesión del voto a los analfabetos molestaba al PSD; sus críticas a Cuba y al comunismo desagradaban al PTB y sobre todo a la izquierda.

En las cuatro elecciones presidenciales que se fueron sucediendo desde 1945, el electorado creció bastante debido a la urbanización y al mayor interés en la participación política. De 5.9 millones en 1945, el electorado ascendió a 7.9 millones en 1950, 8.6 millones en 1955 y, finalmente, 11.7 millones en 1960, la última elección directa para presidente de la república que tendría lugar en el país hasta 1989.

Jânio ganó las elecciones de octubre de 1960 con 48% de esos 11.7 millones de votos, mientras que Lott obtuvo 28% y Ademar 23%. En términos porcentuales, el éxito de Jânio sólo había sido superado por el de Dutra en 1945. João Goulart fue elegido vicepresidente de la república a pesar de la clara derrota de Lott.

Por primera vez un presidente tomaba posesión en Brasilia, encarnando las esperanzas del futuro. En menos de siete meses su renuncia destrozaría esas esperanzas y arrojaría al país a una grave crisis política.

Jânio empezó a gobernar de un modo desconcertante. Se encargaba de asuntos que no correspondían a la importancia del puesto que ocupaba, como la prohibición de los lanzaperfumes, de los bikinis y de las peleas de gallos. En cuanto a las medidas más serias, combinó iniciativas que agradaban a la izquierda con

disposiciones que agradaban a los conservadores y, de algún modo, con este proceder disgustaba a ambos. La política exterior le granjeó la oposición de los conservadores, especialmente de la mayoría de la UDN. Fue durante la breve gestión de Jânio Quadros cuando el Gobierno estadounidense lanzó la Alianza para el Progreso, un plan de reformas que prometía destinar 20 000 millones de dólares a América Latina en el curso de 10 años. Esta alianza se aprobó en una reunión de los países americanos celebrada en Punta del Este, Uruguay. La delegación cubana, encabezada por Ernesto *Che* Guevara, no firmó la carta de Punta del Este. En su viaje de vuelta a Cuba, el *Che* Guevara hizo una escala en Brasilia, donde recibió de manos de Jânio una significativa condecoración: la Orden de la Cruz del Sur. El gesto no tenía ninguna intención de mostrar apoyo al comunismo. Para el gran público fue un símbolo de la política exterior independiente que Jânio había empezado a ejercer, buscando una tercera vía para Brasil entre los dos bloques enfrentados.

En el terreno financiero, Jânio anunció un plan para hacer frente a los problemas heredados del gobierno de Kubitschek. En su discurso inaugural enfatizó las dificultades que enfrentaba el país. Optó por un paquete ortodoxo de estabilización, que implicaba una fuerte devaluación cambiaria, así como la contención del gasto público y de la expansión monetaria. Los subsidios para la importación de trigo y petróleo se redujeron, y esto provocó un incremento de 100% en el precio del pan y los combustibles.

Las medidas fueron bien recibidas por los acreedores de Brasil y por el FMI. En 1961, el Club de la Haya, conformado por los acreedores europeos y estadounidenses, reestructuró la deuda brasileña. Se contrajeron nuevos préstamos con Estados Unidos gracias al apoyo del presidente John Kennedy. A sus ojos, Jânio parecía un medio para impedir que la nación más grande

de América Latina se precipitara en la inestabilidad y el comunismo.

Para agosto de 1961, Jânio había empezado a aflojar las medidas de contención financiera sin llegar a un verdadero cambio de rumbo. Ese mismo mes, con un gesto, puso fin a su gobierno.

El presidente había estado administrando el país sin contar con una base de apoyo político. El PSD y el PTB dominaban el Congreso; Lacerda se había pasado a la oposición, criticando a Jânio insistentemente y con la misma vehemencia con que lo había respaldado. La UDN tenía varios motivos de queja: el presidente actuaba prácticamente sin consultar a los líderes udenistas en el Congreso. Además, la política exterior independiente que el presidente conducía y su simpatía por la reforma agraria despertaban preocupaciones.

La noche del 24 de agosto de 1961, Lacerda —que había sido electo gobernador de Guanabara— pronunció un discurso que se transmitió por la radio, en el que denunciaba un intento de golpe por parte de Jânio, articulado por el ministro de Justicia y Asuntos Internos, Oscar Pedroso Horta. Extrañamente los golpistas habrían invitado a Lacerda a sumarse. Pedroso Horta negó la acusación. Al día siguiente, Jânio renunció a la presidencia de la república y comunicó su decisión al Congreso Nacional.

Los motivos de la renuncia nunca se aclararon. El propio Jânio se negó a dar una explicación de los hechos, aludiendo únicamente a las "fuerzas terribles" que lo habían llevado a dimitir. La explicación más plausible es que los rasgos inestables de su personalidad se sumaron a un cálculo político erróneo. Según esta hipótesis, con su gesto teatral, Jânio esperaba obtener mayores facultades para gobernar, librándose hasta cierto punto del Congreso y los partidos. Se había creído imprescindible para

los partidos durante la campaña presidencial y se consideraba imprescindible para Brasil como presidente. ¿Acaso los conservadores y los militares entregarían el país a Jõao Goulart?

Jânio partió precipitadamente de Brasilia y aterrizó en una base militar de São Paulo. Allí los gobernadores de algunos estados le mandaron pedir que reconsiderara su gesto. Pero, fuera de eso, no hubo ninguna otra acción significativa a favor de la vuelta del presidente. Cada grupo tenía sus motivos de queja contra él, que empezaba a tomar conciencia de la nueva situación. Como el Congreso no sanciona las renuncias, simplemente se dio por enterado. A partir de ese momento, empezó la lucha por el poder.

La Constitución no dejaba lugar a dudas sobre la sucesión de Jânio: era el vicepresidente João Goulart quien debía asumir el cargo. Pero su toma de posesión se suspendió por iniciativa de los sectores militares, que veían en él la encarnación de la república sindicalista y un riesgo de que los comunistas llegaran al poder. Por una casualidad llena de simbolismo, Jango estaba fuera del país, visitando la China comunista.

Mientras el presidente de la Cámara de Diputados asumía provisionalmente la presidencia de la república, los ministros militares de Jânio prohibieron a Jango volver a Brasil alegando motivos de seguridad nacional. Pero esta decisión no contó con la unanimidad de la cúpula militar. En Rio Grande do Sul, el comandante del III Ejército se declaró a favor de la toma de posesión de Goulart, y así se inició lo que se conoce como la Batalla de la Legalidad. La principal figura de este movimiento fue el gobernador de Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cuñado de Jango. Brizola ayudó a organizar la resistencia militar y promovió grandes manifestaciones populares en Porto Alegre. Cuando el ministro de Marina anunció que enviaría una fuerza

naval al sur, Brizola amenazó con bloquearle la entrada de Porto Alegre y hundir varios barcos.

Al final, el Congreso adoptó una solución de compromiso. El sistema de gobierno dejó de ser presidencialista para volverse parlamentarista, y el 7 de septiembre de 1961 João Goulart tomó posesión con poderes disminuidos. El parlamentarismo, que había servido como un simple paliativo para resolver la crisis, no podía durar mucho, y de hecho no duró.

La crisis del régimen y el golpe de 1964

Cuando comenzó el gobierno de Jango, era claro que los movimientos sociales avanzaban y surgían nuevos actores. Los sectores olvidados del campo —verdaderos huérfanos de la política populista— empezaron a movilizarse. El telón de fondo de estas movilizaciones eran los grandes cambios estructurales que había vivido Brasil entre 1950 y 1964, caracterizados por el crecimiento urbano y la rápida industrialización.

Estos cambios ampliaron el mercado de los productos agrícolas y pecuarios, lo cual modificó las formas de uso y propiedad de la tierra. Ésta se volvió más rentable y los propietarios trataron de expulsar a los viejos *posseiros*[2] o hicieron empeorar sus condiciones de trabajo. Esto provocó un fuerte descontento entre la población rural. Además, gracias a las migraciones, la ciudad y el campo se acercaron, y eso facilitó que la gente del campo tomara conciencia de la extrema sumisión en que vivía.

El movimiento rural más importante del periodo fue el de las Ligas Campesinas, cuyo líder visible era una figura de la clase media urbana: el abogado y político de Pernambuco Francisco Julião. Julião fomentó el surgimiento de ligas al margen de los

sindicatos y se dedicó a organizar a los campesinos, considerando que era más viable atraer a éstos que a los asalariados rurales a un movimiento social significativo.

Las ligas empezaron a surgir a finales de 1955 con el propósito, entre otros, de defender a los campesinos impidiendo que se les expulsara de las tierras, que se elevara el precio de los arrendamientos y que se siguiera recurriendo al *cambão*, una práctica que exigía a los colonos —llamados *moradores* en el nordeste— trabajar gratis un día a la semana para el dueño de la tierra.

Julião trató de dotar a las ligas de una organización centralizada y estableció sus sedes en la capital de determinados estados o en los núcleos urbanos más importantes de ciertas regiones. Justificaba esa estrategia convencido de que en las grandes ciudades había clases y grupos aliados de los campesinos (obreros, estudiantes, intelectuales revolucionarios y pequeña burguesía), y de que el sistema de justicia allí sería menos reaccionario. Surgieron ligas en varios puntos del país, sobre todo en el nordeste, en estados como Pernambuco y Paraíba.

En noviembre de 1961 se celebró en Belo Horizonte el Primer Congreso Nacional de Labradores y Trabajadores Agrícolas de Brasil. En él se expresaron varias propuestas para la organización de las masas rurales. La reunión fue planeada de manera conjunta por Julião y otros miembros de las ligas, así como por los dirigentes comunistas, que tenían bases más numerosas entre los asalariados agrícolas de São Paulo y Paraná. En el encuentro, las dos corrientes se dividieron. Los líderes de las ligas sostenían que la primera exigencia de la gente del campo debía ser la expropiación de las tierras sin indemnización previa, mientras que los comunistas preferían centrarse en promover la sindicalización rural y en extender la legislación laboral al campo.

Un avance importante en la esfera legislativa se dio en marzo de 1963, cuando Jango promulgó una ley que sancionaba el Estatuto del Trabajador Rural. La ley instituía la libreta de trabajo[3] para el trabajador del campo, regulaba la duración de la jornada, establecía un salario mínimo y extendía a los trabajadores rurales derechos como el descanso semanal y las vacaciones remuneradas.

En el gobierno de Jango creció también la movilización de otros sectores de la sociedad. Los estudiantes, a través de la UNE, radicalizaron sus propuestas de transformación social y empezaron a intervenir directamente en el juego político.

El comportamiento de la Iglesia católica también sufrió cambios notables. A partir de la década de 1950, muchos de sus integrantes empezaron a preocuparse preferentemente por los sectores populares, que constituían su base social. Su férreo anticomunismo fue cediendo paso a una actitud más matizada: sin dejar de combatir al comunismo, se reconocía que los males del capitalismo habían sido la causa de la inconformidad, y que ésta había dado lugar a la expansión comunista.

La Iglesia se fragmentó en diversas posiciones, desde el conservadurismo de algunos obispos hasta las tendencias que se abrieron a la izquierda, típicas de la Juventud Universitaria Católica (JUC). Tocada por el clima de radicalización del movimiento estudiantil, la JUC empezó a asumir posiciones socialistas y chocó con la jerarquía eclesiástica. De la JUC surgió, en 1962, la Acción Popular (AP), una organización con objetivos revolucionarios desvinculada de la jerarquía. La AP participó activamente en las luchas políticas de la época y fue duramente reprimida tras la instauración del Gobierno militar en 1964.

En el nordeste, la Iglesia católica promovió la sindicalización rural, aunque se opuso frontalmente a las Ligas Campesinas. La publicación, en mayo de 1961, de la encíclica *Mater et Magistra*, del

papa Juan XXIII —la primera que se ocupaba explícitamente de los problemas del Tercer Mundo—, fue un importante incentivo para el catolicismo reformista.

La toma de posesión de João Goulart como presidente significó la vuelta del modelo populista en un contexto de movilizaciones y presiones populares mucho más grandes que las del periodo de Vargas. Los ideólogos del Gobierno y los dirigentes sindicales trataron de fortalecer el modelo. Éste debía basarse en la colaboración entre el Estado (incluyendo a los oficiales nacionalistas de las Fuerzas Armadas y los intelectuales que formulaban su política), la clase obrera organizada y la burguesía nacional. El Estado sería el eje articulador de esta alianza, cuya ideología básica eran el nacionalismo y las reformas sociopolíticas denominadas reformas de base.

Éstas abarcaban una amplia gama de medidas. En el terreno social se llevaría a cabo la reforma agraria para eliminar los conflictos por la posesión de la tierra y asegurar el acceso a la propiedad a millones de trabajadores del campo. Para lograrlo, se proponía cambiar un dispositivo de la Constitución de tal modo que la tierra pudiera expropiarse por motivos de necesidad, utilidad pública o interés social, previa indemnización monetaria. Además de la reforma agraria se hacía referencia a una reforma urbana, cuyo principal objetivo sería crear las condiciones para que los inquilinos pudieran volverse propietarios de las viviendas que rentaban.

En el terreno de los derechos políticos, se sostenía la necesidad de extender el derecho al voto a dos sectores distintos: los analfabetos y los rangos inferiores de las Fuerzas Armadas, de sargento para abajo, en el caso del Ejército. Con esto se esperaba ampliar el sostén del Gobierno populista, que

contaría con la gran masa de los desvalidos y los grupos marginados de la base de la institución militar.

Las reformas incluían, además, medidas nacionalistas y contemplaban una intervención más amplia del Estado en la vida económica. Entre las disposiciones de este tipo se contaban la nacionalización de las concesionarias de servicios públicos, de los frigoríficos y de la industria farmacéutica, una reglamentación estricta para el envío de réditos al extranjero y la expansión del monopolio de Petrobras.

Las reformas de base no estaban destinadas a implantar una sociedad socialista. Constituían un intento de modernizar el capitalismo y reducir las profundas desigualdades sociales del país mediante la acción del Estado. No obstante, esto representaba un gran cambio al que las clases dominantes opusieron una fuerte resistencia. El Gobierno y los grupos de intelectuales de clase media que promovían las reformas de base creyeron que contarían con el apoyo de la burguesía nacional en el combate contra el imperialismo y por la reforma agraria. Desde su punto de vista, los inversionistas extranjeros representaban una competencia desleal para el capitalismo nacional; la reforma agraria, por su parte, ayudaría a integrar la población del campo a la economía de mercado, con lo que se generaría una nueva demanda para los productos industriales. En realidad, la burguesía nacional prefirió seguir otro camino y alejarse cada vez más del Gobierno ante el ambiente de movilizaciones sociales y de incertidumbre para las inversiones.

Las direcciones sindicales se mantuvieron fieles al modelo populista. Estaban conformadas sobre todo por laboristas y comunistas que actuaban paralelamente al Estado, pero sin la sumisión de los viejos *pelegos*. La táctica de crear organizaciones paralelas continuó y desembocó en la formación del CGT en 1962. En este contexto, los sindicatos expresaron, cada vez más,

demandas de carácter político. No es que se olvidaran de las reivindicaciones específicamente obreras, pero les fueron dando menos importancia.

En cuanto a los movimientos huelguísticos, hay que señalar tres factores: *1*) el número de huelgas aumentó mucho; *2*) los paros tendieron a concentrarse en el sector público, y *3*) se desplazaron espacialmente de São Paulo a otras regiones del país.

Si en 1958 se habían registrado 31 movimientos huelguísticos, en 1963 se contaron 172. Nada menos que 80% de los paros de 1958 se había concentrado en el sector privado; para 1963 sucedían ya mayoritariamente en el sector público (58%).

El crecimiento de las huelgas indica el avance de la movilización social. Su desplazamiento del sector privado al público tiene que ver con el carácter político de varias huelgas, que el Gobierno fomentó para forzar la aceptación de medidas que le interesaban.

En cuanto a su desplazamiento espacial, hay que recordar, ante todo, que en São Paulo se concentraban las empresas privadas, sobre todo las multinacionales. Era más difícil obtener conquistas en ese terreno, pues los directivos de las empresas tenían que pensar en términos de lucro y no pretendían asociar a la clase obrera con sus designios políticos. La coloración nacionalista de los sindicatos tenía poca repercusión en São Paulo, pues allí era difícil que se tradujera en logros concretos. A esto se sumaba el hecho de que, mientras el Gobierno federal tendía la mano a los dirigentes sindicales, el gobernador paulista Ademar de Barros reprimía duramente las huelgas.

Todo esto produjo en los dirigentes sindicales una ilusión que acarreó graves consecuencias. La cercanía con el poder, la escalada huelguística y la afluencia a los mítines causaban euforia y, al mismo tiempo, ocultaban los puntos débiles del

movimiento obrero. Éstos —como quedaría claro más tarde— tenían que ver con dos situaciones que estaban vinculadas entre sí: por un lado, el proporcional declive del movimiento obrero en el estado que concentraba al sector más dinámico de la economía; y, por el otro, la excesiva dependencia del movimiento respecto al régimen. De hecho, el régimen arrastraría en su caída al sindicalismo populista.

En la esfera política, junto con la movilización de la sociedad, se hizo cada vez más nítida la definición ideológica de las agrupaciones —que en varios casos se remontaba al periodo de Kubitschek— más allá de los límites de los partidos. El PTB creció beneficiándose de la ilegalidad del PC, pues obtuvo muchos votos que de otro modo hubieran recibido los comunistas, y del avance en la industrialización, ya que se trataba de un partido esencialmente urbano. También lo favoreció el ambiente proclive al nacionalismo y al cambio social.

Si de por sí no había homogeneidad dentro de los partidos, las divisiones se agravaron durante el periodo de Goulart, sólo que ahora tenían más que ver con diferencias ideológicas que con disputas personales. En distinto grado, la formación de tendencias en cada partido obedecía al avance de las posiciones nacionalistas y de izquierda. En el seno del PTB se formó el Grupo Compacto, que proponía una línea nacionalista agresiva y medidas concretas de reforma social. En la UDN surgió la Bossa Nova,[4] corriente favorable a las reformas de base y a los planes financieros del Gobierno.

No obstante, la mayoría udenista se acercó a la corriente militar enemiga de Jango y varios de sus miembros se integraron a la ultraconservadora Acción Democrática Parlamentaria. Estos círculos fomentaron y promovieron el golpe de Estado que pondría fin al régimen instituido en 1945.

En el PSD las aguas se habían dividido ya, con la formación del Ala Joven en 1955, durante la campaña de Juscelino. Renato Archer y Ulysses Guimarães fueron representantes destacados de esta tendencia. El Ala Joven enfrentó con cautela a los viejos zorros del PSD y adoptó una posición nacionalista. Se disolvió con la derrota de Lott, pero sus miembros contribuyeron al surgimiento del Frente Parlamentario Nacionalista.

En la izquierda también se dio una ruptura. Ésta se debió sobre todo a hechos sucedidos en la Unión Soviética, donde el estalinismo había entrado en crisis tras la divulgación del Informe Secreto de Jrushchov. Un sector del PCB se opuso a las medidas de apertura promovidas en el seno del partido y a la línea de franca colaboración con el gobierno de Jango. De esa disidencia nació el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), que fue a encontrar en China y más tarde en Albania un supuesto modelo de fidelidad a los principios marxistas-leninistas. El Partido Comunista de Brasil retomaba el nombre original del PCB, que en 1961, con la ola nacionalista, había pasado a llamarse Partido Comunista Brasileño.

Mientras los medios civiles se realineaban, en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas ganaba fuerza una visión de las relaciones internacionales enmarcada en la perspectiva de una guerra revolucionaria. Esta noción se había formulado en el contexto de la Guerra Fría y había adquirido contornos más nítidos tras el ascenso de Fidel Castro al poder. Para determinados sectores militares, la victoria de la Revolución Cubana probaba que en el mundo subdesarrollado tenía lugar una guerra revolucionaria que ocurría paralelamente al choque entre los dos grandes bloques de poder.

Esta guerra revolucionaria, cuyo objetivo final sería instaurar el comunismo, abarcaba a todos los niveles de la sociedad y

recurría a instrumentos que iban desde el adoctrinamiento y la guerra psicológica hasta la lucha armada. Por lo mismo, había que hacerle frente con acciones que tuvieran la misma amplitud. En este contexto, las Fuerzas Armadas pasaban a tener un papel activo y permanente en la derrota del enemigo y en garantizar la seguridad y el desarrollo de la nación. Nacía, así, la doctrina de la seguridad nacional.

Esta doctrina surgió, por influencia externa, en el ámbito de la Escuela Superior de Guerra (ESG), que se había fundado en agosto de 1949 con la asistencia de consejeros franceses y estadounidenses. La misión de Estados Unidos permaneció en Brasil de 1948 a 1960. Entre los brasileños, su principal técnico y organizador fue el general Golbery do Couto e Silva. Los cursos de la ESG no sólo se abrieron a los militares, sino también a los civiles. La participación de estos últimos fue importante para que se diera una articulación entre civiles y militares identificados con la visión imperante en la ESG.

A partir de la ESG y de órganos como el Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales (IPES, por sus siglas en portugués) y el Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD), financiado por la Central Intelligence Agency (CIA), fueron esbozándose los rasgos propios de un régimen político que se consideraba capaz de impedir la subversión del orden y de asegurar cierto tipo de desarrollo económico. Conforme el gobierno de Goulart se radicalizaba y perdía estabilidad, en los círculos de la ESG, el IPES y el IBAD, asociados entre sí, se fortalecía la convicción de que sólo un movimiento armado podría poner fin a la anarquía populista y contener el avance del comunismo.

Goulart empezó a gobernar con facultades limitadas por el sistema parlamentarista. Su primer gabinete lo encabezó Tancredo Neves, un político de Minas Gerais que había sido

ministro de Justicia y Asuntos Internos de Getúlio en 1954. En esos primeros tiempos, el presidente mantuvo una línea moderada: trataba de demostrar su apego a los principios democráticos y su rechazo al comunismo. En un viaje a Washington, habló ante el Congreso estadounidense y obtuvo recursos para auxiliar al nordeste.

Pronto surgió el tema de los poderes presidenciales. El auto que había instaurado el parlamentarismo preveía la realización de un plebiscito para 1965 que permitiera a la población decidir definitivamente cuál sería el sistema de gobierno. De los medios vinculados con Goulart surgió una campaña para anticipar la consulta popular.

Casi se tenía la certeza de que triunfaría el presidencialismo. Era evidente que, en las condiciones en que se había implantado, el parlamentarismo había sido un compromiso para limitar la acción de Jango. Además, se pensaba que un presidente con mayores facultades podría estabilizar al país y promover las reformas de base. La cúpula militar también se inclinaba en su mayoría a fortalecer al Poder Ejecutivo.

Tancredo Neves renunció a su cargo como primer ministro en junio de 1962. Él y otros varios ministros habían decidido dejar el gabinete con el fin de presentarse como candidatos en las elecciones de octubre de ese año para la Cámara federal y los Gobiernos de los estados. Además, ni el mismo Tancredo creía en el parlamentarismo. El presidente nombró en su remplazo a San Tiago Dantas. Como ministro de Relaciones Exteriores del gabinete dirigido por Tancredo, Dantas había defendido la neutralidad de Brasil ante el caso de Cuba, incurriendo en la ira de la derecha. La Cámara de Diputados rechazó el nombramiento y surgió como alternativa el nombre de Auro de Moura Andrade, presidente del Senado.

Contra la figura conservadora de Auro estalló la primera huelga política del periodo. Decretada el 5 de julio como un paro general de 24 horas para exigir un gabinete nacionalista, la huelga no llegó a ser general: afectó sobre todo a las empresas estatales o controladas por el Gobierno. Los trabajadores portuarios paralizaron prácticamente todos los puertos del país. En varios sitios, los huelguistas contaron con el apoyo del Ejército. En Río de Janeiro, por ejemplo, el I Ejército protegió a los trabajadores ante las amenazas de represión del gobernador Lacerda.

Finalmente, el Congreso aprobó como jefe de gabinete a una figura poco conocida del PSD *gaúcho*, Brochado da Rocha. Fue él quien obtuvo del Congreso que el plebiscito se adelantara a enero de 1963.

Antes del plebiscito, las elecciones de octubre de 1962 para el Congreso y las gubernaturas de los estados mostraron que las fuerzas del centro y la derecha tenían bastante peso en el país. Sin duda se habían beneficiado de los recursos que recibieron del IBAD y de otros órganos semejantes, pero también el Gobierno había hecho uso de su aparato. En São Paulo, Ademar derrotó a Jânio por un estrecho margen. En Rio Grande do Sul, Ildo Meneghetti, apoyado por la UDN y el PSD, venció al candidato de Brizola. Los nacionalistas y la izquierda celebraron la victoria de Miguel Arraes en Pernambuco y el extraordinario éxito de Brizola en Río de Janeiro. Este último, candidato a diputado federal, recibió la mayor cantidad de votos que hubiera obtenido jamás un candidato en elecciones legislativas: 269 000.

No obstante, en 1960, Carlos Lacerda y Magalhães Pinto habían sido elegidos gobernadores de Guanabara (Río de Janeiro) y Minas Gerais, respectivamente, de modo que Jango tenía en su contra a los gobernadores de los mayores estados.

En enero de 1963, alrededor de 9.5 millones de un total de 12.3 millones de votantes dijeron "no" al parlamentarismo. Volvió, así, el sistema presidencialista, con João Goulart a la cabeza del Gobierno.

Jango eligió un gabinete que dejaba clara su estrategia. Trataba de hacer frente a los problemas económico-financieros con seriedad, a través de figuras de la llamada "izquierda positiva", como San Tiago en el Ministerio de Hacienda y Celso Furtado en el Ministerio de Planeación. También se esforzó por fortalecer el "dispositivo sindical" y el "dispositivo militar", como se les llamaba en ese tiempo, para que fueran los sostenes de su gobierno. Como ministro de Trabajo y Pensiones designó a Almino Afonso, una figura que gozaba de buena acogida entre la izquierda del PTB y los comunistas. Frente al Ministerio de Guerra se mantuvo el general moderado Amauri Kruel, que ya tenía ese cargo desde el gabinete parlamentarista. Pero los oficiales nacionalistas Osvino Alves, comandante del I Ejército, con sede en Río de Janeiro, y Jair Dantas Ribeiro, comandante del III Ejército, con sede en Rio Grande do Sul, reforzaron aparentemente el dispositivo militar.

La situación financiera era grave. Hubo un repunte de la inflación, cuyo índice anual pasó de 26.3% en 1960 a 33.3% en 1961 y 54.8% en 1962. Para hacer frente a este y otros problemas, Celso Furtado presentó el Plan Trienal, que pretendía combinar el crecimiento económico con las reformas sociales y el combate a la inflación.

El plan dependía de la colaboración de los sectores que tenían voz en la sociedad. Pero una vez más la colaboración faltó. A los beneficiarios de la inflación no les interesaba que las medidas tuvieran éxito; los enemigos de Jango querían la ruina del Gobierno y el golpe; el movimiento obrero se negaba a

aceptar el recorte a sus salarios; la izquierda veía el dedo del imperialismo en todas partes. Los acreedores internacionales se mostraron reticentes durante el viaje que San Tiago Dantas hizo a Washington en marzo de 1963, el cual rindió escasos resultados.

A mediados de ese año ya estaba claro que el plan había fracasado. El último clavo en su ataúd fue el 70% de aumento salarial que se concedió al funcionariado en medio de una inflación que ya había llegado a 25% en los cinco primeros meses del año. Además, la economía en su conjunto daba muestras de declive. El crecimiento del PIB, que había sido de 5.3% en 1962, cayó a 1.5% en 1963.

Entonces Jango reorganizó el gabinete. San Tiago Dantas, el ejecutor del plan, abandonó el Gobierno, aquejado por un cáncer de pulmón. Almino Afonso dejó el Ministerio de Trabajo y Pensiones; el general Dantas Ribeiro entró al Ministerio de Guerra. Demostrando que no pretendía seguir un camino radical en materia de política financiera, Goulart nombró ministro de Hacienda a un personaje conservador: el exgobernador de São Paulo, Carvalho Pinto.

A partir de mediados de 1963 las diversas posiciones se fueron radicalizando más y más. En el campo, los propietarios rurales, que veían la reforma agraria como una catástrofe, empezaron a armarse. Por su parte, el movimiento de las ligas, la sindicalización rural y la ocupación de tierras ganaron fuerza. La adopción de iniciativas al margen de la legalidad se reforzó cuando, en octubre de 1963, el Congreso rechazó una enmienda constitucional que permitiría expropiar tierras sin previa indemnización.

La izquierda del PTB, con Brizola al frente, se quejaba de los titubeos de Jango en el terreno de las reformas sociales y de sus relaciones con el imperialismo. Desde 1963, Brizola empezó a

organizar grupos que debían articularse en todo el país para resistir los intentos golpistas y a favor de medidas como una Asamblea Constituyente y una moratoria para la deuda externa.

En los medios militares creció la conspiración contra Jango, reforzada por los partidarios de una "intervención preventiva" contra los excesos gubernamentales. Para entonces se contaba entre ellos el propio jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Humberto de Alencar Castelo Branco. Una revuelta de sargentos y cabos de la Fuerza Aérea y de la Marina, ocurrida en Brasilia en septiembre de 1963, terminó de inclinar a este grupo a la conspiración. La revuelta había estallado en protesta contra una decisión del Supremo Tribunal Federal que confirmaba la ilegibilidad de los sargentos. Los rebeldes ocuparon edificios públicos y se hicieron del control de las comunicaciones, además de capturar a varios oficiales, hasta que finalmente fueron derrotados.

Para comprender la tragedia de los últimos meses del gobierno de Goulart hay que considerar que todos los actores políticos fueron descartando la solución de los conflictos por la vía democrática como algo imposible o despreciable. La tesis de la derecha se ganó a los conservadores moderados: sólo una revolución podría purificar la democracia, poniendo fin a la lucha de clases, al poder de los sindicatos y al peligro del comunismo.

El camino que tomó Jango exigía medidas excepcionales. En octubre de 1963, inspirado por el dispositivo militar y pretextando que había que contener la agitación en el campo y restablecer el orden, propuso al Congreso que se decretara el estado de sitio por 30 días. La propuesta fracasó: fue mal recibida tanto por la derecha como por la izquierda, e intensificó las sospechas sobre las intenciones del Gobierno.

La izquierda veía a la "democracia formal" como un simple instrumento al servicio de los privilegiados. ¿Cómo aceptar su difícil juego de avances y retrocesos si había todo un mundo que ganar mediante la implantación de las reformas de base "por la ley o por la fuerza"?

La última gran huelga obrera de São Paulo antes de la caída de Jango tuvo lugar en 1963 y no obedeció a motivos estrictamente políticos. La llamada Huelga de los Setecientos Mil duró algunos días e incluyó sobre todo a los sectores metalúrgico, químico, del papel y del cartón.

A principios de 1964, por consejo de su círculo íntimo, Jango decidió seguir un camino que resultó desastroso. Era más o menos como sigue: con el apoyo de los dispositivos militar y sindical, el presidente pasaría por encima del Congreso y aplicaría por decreto las reformas de base. Para mostrar la fuerza del Gobierno, reuniría grandes masas en una serie de mítines en los que anunciaría las reformas. El primer gran mitin se llevó a cabo el 13 de marzo en Río de Janeiro. Unas 150 000 personas se reunieron allí, bajo la protección de las tropas del I Ejército, para escuchar las palabras de Jango y Brizola, que, por cierto, ya no congeniaban.

Las imágenes de banderas rojas que pedían la legalización del PC, de mantas que exigían la reforma agraria, etc., se transmitieron por televisión y horrorizaron a los medios conservadores. Ese día, Jango firmó dos decretos. El primero era más que nada simbólico y consistía en expropiar las refinerías de petróleo que aún no estaban en manos de Petrobras. El segundo —conocido como el Decreto de la Supra (Superintendencia de la Reforma Agraria)— declaraba sujetas a expropiación las propiedades subutilizadas y especificaba su ubicación y dimensiones.

El presidente anunció también que estaba preparando la reforma urbana —un horror para la clase media, que temía perder sus inmuebles a manos de los inquilinos— y otras propuestas que presentaría al Congreso y que contemplaban cambios fiscales y la concesión del derecho al voto a los analfabetos y a los rangos inferiores de las Fuerzas Armadas.

El primer mitin de las reformas de Jango marcó, en realidad, el principio del fin de su gobierno. Un anuncio de la tempestad fue la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad, convocada en São Paulo por las asociaciones de señoras católicas ligadas a la Iglesia conservadora. Unas 500 000 personas salieron a las calles de la ciudad el 19 de marzo, demostrando que los partidarios del golpe contaban con una significativa base de apoyo social.

Un grave acontecimiento militar ayudó a crear un ambiente aún más favorable a los conspiradores. La Asociación de Marineros se destacaba, en ese entonces, en la lucha por derechos y mejores pagos para los marinos. Su líder más importante era el cabo Anselmo, que más tarde sería —o ya era, según algunas versiones— informante del Centro de Información de la Marina (Cenimar).

El 24 de marzo, el ministro Sílvio Mota mandó apresar a los dirigentes de la asociación, acusados de subvertir la jerarquía. Al día siguiente, alrededor de 2 000 miembros de la Marina y del Cuerpo de Fusileros Navales se reunieron en el Sindicato de Metalúrgicos, donde se encontraban los dirigentes contra los que se habían girado órdenes de aprehensión, para celebrar el segundo aniversario del organismo y proponer nuevas reivindicaciones. El ministro Sílvio Mota rodeó el lugar con un contingente de fusileros y pidió ayuda al I Ejército. Finalmente se llegó a una solución negociada.

Bajo presión y sintiéndose desprestigiado, el ministro de Marina renunció. Jango nombró a un personaje gris para

sustituirlo: el almirante retirado Paulo Rodrigues, elegido con apoyo del CGT. El nuevo ministro quiso calmar los ánimos anunciando que no se castigaría a los revoltosos, pero sólo logró atizar el fuego: el Club Militar y un grupo de altos mandos de la Marina dijeron que aquello era una invitación a romper la jerarquía marcial.

Cuando Jango, en un último gesto desesperado, fue a Río de Janeiro a dar un discurso en una asamblea de sargentos, el golpe ya estaba en marcha. Lo había precipitado el general Olímpio Mourão Filho, que había estado implicado en el oscuro episodio del Plan Cohen en 1937. Con el apoyo del gobernador Magalhães Pinto, el 31 de marzo Mourão movilizó a las tropas que estaban bajo su mando en Minas Gerais y las llevó a Río de Janeiro.

La situación se definió con una rapidez inesperada. En Río de Janeiro, Lacerda se atrincheró dentro del Palacio de Gobierno, esperando un ataque de los fusileros navales, que no ocurrió. El 1º de abril, Goulart voló a Brasilia y evitó cualquier acción que pudiera resultar en un derramamiento de sangre. Las tropas del II Ejército, que se desplazaban desde São Paulo hacia Río de Janeiro al mando del general Amauri Kruel, confraternizaron con las del I Ejército.

La noche del 1º de abril, cuando Goulart se dirigía de Brasilia a Porto Alegre, el presidente del Senado declaró que el puesto de presidente de la república estaba vacante. Lo ocupó, siguiendo la línea constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados, Rainieri Mazzilli. Pero el poder ya no estaba en manos de los civiles, sino de los comandantes militares.

Brizola aún intentó movilizar a las tropas y la población en Rio Grande do Sul, como había hecho en 1961. Pero no tuvo éxito. A finales de abril se exilió en Uruguay, donde ya se encontraba Jango.

Ése fue el fin de la experiencia democrática de 1945-1964. Por primera vez en la historia del país, los militares asumían el poder con la perspectiva de conservarlo, instaurando un régimen autoritario.

El gobierno de Goulart, que aparentemente descansaba en fuerzas poderosas, se había desmoronado. ¿Qué ocurrió con los dispositivos militar y sindical? En realidad, João Goulart y la cúpula que lo sostenía tenían una visión equivocada del cuadro político. Consideraban que lo que sucedía en las esferas del poder era una manifestación de lo que sucedía en la sociedad. También creían que, en su mayoría, el Ejército apoyaba las reformas propuestas por el Gobierno; suponían que, por su historia y por el origen de sus integrantes, expresaba la voluntad popular. Sí, había golpistas, pero eran una minoría a la que el dispositivo militar y los rangos inferiores podían controlar.

Es cierto que, a lo largo de los años, la mayor parte de la oficialidad había preferido respetar el orden constitucional. Pero había otros principios más importantes para la institución militar: la preservación del orden social, el respeto a la jerarquía y el control del comunismo. Si se rompían estos principios, el orden se convertía en desorden, y el desorden justificaba la intervención.

La pérdida de legitimidad de Jango, la subsecuente ruptura de la disciplina y el acercamiento entre los rangos inferiores de las Fuerzas Armadas y los trabajadores organizados empujaron a los moderados de las Fuerzas Armadas a sumarse a la conspiración: un desplazamiento semejante al que tuvo lugar en los medios civiles. El llamado dispositivo sindical, por su parte, era capaz de movilizar a sectores de la clase obrera, especialmente a los que trabajaban para el Estado, pero no mucho más.

La gran masa de los asalariados, golpeada por la inflación, prácticamente ignoró el llamado a la huelga general del CGT. Sea como fuere, una movilización obrera no podía haber logrado mucho en el terreno práctico a menos que las Fuerzas Armadas se dividieran, cosa que no sucedió.

Así, aunque los movimientos sociales habían crecido mucho en el país, Jango se quedó sin apoyo político. Sólo permanecieron a su lado un ministro de Guerra que ya no mandaba, líderes sindicales perseguidos y con escaso liderazgo, y amigos que le habían insuflado ilusiones.

---

[1] Plano de Reaparelhamento e Fomento da Economia Nacional, en portugués.

[2] Personas que ocupaban las tierras que trabajaban sin tener su propiedad legal (N. de la T.).

[3] La *carteira profissional*, hoy *carteira de trabalho*, es un documento en el que se registra la vida laboral de los trabajadores y se garantiza su acceso a los derechos que les corresponden por ley (N. de la T.).

[4] El nombre aludía al género musical que estuvo en boga en Brasil en la década de 1950.

6. EL RÉGIMEN MILITAR Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1964-1990)

La modernización conservadora

Aparentemente, el movimiento del 31 de marzo de 1964 se había lanzado para restaurar la democracia y librar al país de la corrupción y el comunismo.

El nuevo régimen empezó a modificar las instituciones del país mediante los llamados Actos Institucionales (AI), que se justificaban como resultado "del ejercicio del Poder Constituyente, inherente a todas las revoluciones". El AI-1 lo decretaron el 9 de abril de 1964 los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Formalmente mantenía vigente la Constitución de 1946, aunque con varios cambios, preservando el funcionamiento del Congreso.

Ésta fue una de las características del régimen militar. Aunque el poder real se desplazó a otras esferas y se violaron los principios básicos de la democracia, el régimen casi nunca asumió explícitamente su carácter autoritario. Salvo breves periodos, el Congreso siguió en funciones y las normas que afectaron los derechos de los ciudadanos se plantearon como medidas temporales. El AI-1 fijaba su propia vigencia: concluiría el 31 de enero de 1966.

Varias de las medidas del AI-1 tenían como objetivo reforzar el Poder Ejecutivo y limitar el campo de acción del Legislativo. Se autorizaba al presidente de la república a enviar al Congreso proyectos de ley que tendrían que evaluarse dentro de un plazo

de 30 días en la Cámara y en el Senado; de lo contrario, se darían por aprobados. Como era fácil obstaculizar las votaciones en el Congreso y sus sesiones por lo general se extendían, la aprobación de los proyectos del Ejecutivo "por vencimiento de plazo" se hizo frecuente. También se dio al presidente de la república la atribución de presentar proyectos de ley que aumentaran o diversificaran el gasto público.

Se suspendió la inmunidad parlamentaria y se autorizó al Mando Supremo de la Revolución a revocar mandatos y suspender derechos políticos por un plazo de 10 años. El carácter vitalicio y estable de los cargos de los demás servidores públicos se suspendió durante seis meses para facilitar la purga del servicio público.

El AI-1 también sentó las bases para los interrogatorios policiaco-militares (IPMS), a los que quedaron sujetos quienes fueran responsables "de cometer delitos contra el Estado o su patrimonio, contra el orden político y social o actos de guerra revolucionaria".

Con estos poderes de excepción se desencadenó la persecución de los adversarios del régimen, que incluyó encarcelamientos y tortura. Pero aún no se trataba de un sistema cerrado. Era posible recurrir al *habeas corpus* ante los tribunales, y la prensa seguía siendo relativamente libre.

Gracias sobre todo a las denuncias del periódico carioca *Correio da Manhã*, el presidente Castelo Branco ordenó al entonces jefe de la Casa Militar, el general Ernesto Geisel, que investigara la práctica de la tortura. La investigación se archivó "por falta de pruebas". Como sea, durante algún tiempo la tortura dejó de ser una práctica sistemática.

Los estudiantes, que habían tenido un papel relevante durante el gobierno de Goulart, fueron un blanco especial de la represión. El mismo 1º de abril, la sede de la Unión Nacional de

Estudiantes (UNE) en Río de Janeiro fue tomada e incendiada. Luego de su disolución, la UNE pasó a la clandestinidad. Las universidades fueron otro objetivo predilecto de la represión. Un día después del golpe, la Policía Militar de Minas Gerais invadió la Universidad de Brasilia (UnB), que había sido fundada con propósitos renovadores y a la que los militares consideraban subversiva.

La represión más violenta se concentró en el campo, sobre todo en el nordeste, y afectó especialmente a quienes tenían relación con las Ligas Campesinas. En las ciudades fueron intervenidos muchos sindicatos y federaciones de trabajadores y se arrestó, además, a los dirigentes sindicales. Las intervenciones se centraron por lo general en los sindicatos más representativos y afectaron a 70% de las organizaciones que tenían más de 5 000 miembros.

En 1964, las purgas perjudicaron a 49 jueces. En el Congreso se les revocó el mandato a 50 parlamentarios. Una primera purga destituyó a 40 diputados, entre ellos 18 del Partido Laborista Brasileño (PTB), que encabezaba la lista. Ninguna revocación tocó a la Unión Democrática Nacional (UDN).

Se calcula, por lo bajo, que se despidió a más de 1 400 personas de la burocracia civil y aproximadamente 1 200 de las Fuerzas Armadas. Los principales afectados fueron aquellos que se habían destacado por sus posiciones nacionalistas y de izquierda.

También perdieron su cargo algunos gobernadores. Entre los personajes más famosos perjudicados por la revocación de mandato o la suspensión de derechos políticos figuraron —además de los nombres obvios de Jango y Brizola— Jânio y Juscelino. En el caso de Juscelino, a la sazón senador por Goiás, era clara la intención de impedir que un candidato civil de

prestigio pudiera llegar a las próximas elecciones presidenciales.

Todo lo dicho hasta aquí no basta para dar idea del ambiente de miedo y delación que gradualmente se fue instalando en el país. En junio de 1964, el régimen militar dio un paso crucial para el control de los ciudadanos con la creación del Servicio Nacional de Información (SNI). Su principal ideólogo y primer jefe fue el general Golbery do Couto e Silva. El objetivo primordial del SNI era "recabar y analizar información pertinente a la Seguridad Nacional, a la contrainformación y a la información sobre cuestiones de subversión interna". En la práctica, se convirtió en un centro de poder casi tan importante como el Ejecutivo, que actuó por cuenta propia en la "lucha contra el enemigo interno". El general Golbery trataría de justificarse, años más tarde, afirmando que sin querer había creado un monstruo.

El AI-1 establecía que la elección de un nuevo presidente de la República se llevaría a cabo mediante la votación indirecta del Congreso Nacional. El 15 de abril de 1964, el general Humberto de Alencar Castelo Branco fue elegido presidente. Su mandato concluiría el 31 de enero de 1966.

En el terreno político, el grupo castelista buscaba instituir una "democracia restringida" luego de realizar las cirugías previstas en el AI-1. En el terreno económico quería reformar el sistema capitalista; su modernización era un fin en sí mismo y un medio para contener la amenaza comunista. Para lograr esos propósitos era necesario hacer frente al caos de la situación económico-financiera que venía de los últimos meses del gobierno de Goulart, controlar a la masa trabajadora del campo y la ciudad, y reformar el aparato del Estado.

Con la primera de estas finalidades en mente se lanzó el Programa de Acción Económica del Gobierno (PAEG), bajo la responsabilidad del ministro de Planeación y Coordinación Económica, Roberto Campos, y del de Hacienda, Otávio Gouveia de Bulhões.

El PAEG trató de reducir el déficit del sector público, contraer el crédito privado y recortar los salarios. También procuró controlar el gasto de los estados mediante una propuesta de ley que les prohibía contraer deudas sin autorización federal. El equilibrio de las finanzas de la Unión se restableció mejorando la situación de las empresas públicas, cortando los subsidios a productos básicos, como el trigo y el petróleo, e incrementando la recaudación de impuestos. Las dos primeras medidas produjeron al principio un impacto en el costo de la vida, pues hubo que aumentar las tarifas de servicios, como la electricidad y el teléfono, y elevar el precio de la gasolina y del pan.

La mayor recaudación de impuestos se alcanzó mediante una mejor organización del aparato del Estado, que era notoriamente deficiente. Introducir la práctica de la corrección monetaria para el pago de impuestos atrasados también ayudó a que, por lo menos en parte, ser deudor del Estado dejara de ser un excelente negocio.

Los salarios se recortaron mediante fórmulas de reajuste inferiores a la inflación. Esto vino acompañado de medidas destinadas a impedir las huelgas y facilitar la rotación de la mano de obra en interés de las empresas. La Ley de Huelgas, que el Congreso aprobó en junio de 1964, establecía exigencias burocráticas que hacían casi imposible llevar a cabo huelgas legalmente. Es importante recordar, sin embargo, que, durante los casi 20 años de régimen democrático, el Congreso no había aprobado ninguna ley que cumpliera con el precepto constitucional de garantizar el derecho de huelga, aunque en la

práctica éste se ejerció libremente durante los últimos años de ese periodo.

El Gobierno anuló también uno de los derechos que más valoraban los asalariados urbanos: la estabilidad laboral después de 10 años de servicio, asegurada por la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT). La solución surgió en septiembre de 1966, cuando se creó un mecanismo compensatorio para sustituir la estabilidad: el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS).

En cuanto al campo, la política represiva del gobierno de Castelo Branco contra los llamados agitadores estuvo acompañada de medidas que trataban de hallar soluciones para el problema de la tierra. En noviembre de 1964, el Congreso aprobó el Estatuto de la Tierra, que debía llevar a cabo la reforma agraria y promover una política agrícola. Pero esta ley, así como otros instrumentos que la sucedieron, se quedaron en gran medida en el papel.

Uno de los cambios de enfoque importantes de Campos y Bulhões se dio en el terreno del comercio exterior. Estos ministros rompieron con la idea, entonces común, del "estrangulamiento de las exportaciones", o sea, de que éstas estaban sujetas a límites estructurales rígidos debido a la competencia internacional. Los ministros consideraban que el potencial de Brasil se había subestimado. Entonces lanzaron una campaña de exportación que no sólo explotaría las enormes reservas naturales del país y vendería productos agrícolas, sino que también promovería los bienes manufacturados.

Contaban con la entrada de capital extranjero, especialmente en el sector de la exportación. Para fomentar este flujo de capital, en agosto de 1964 se aprobó por vencimiento de plazo una nueva ley que regulaba la inversión extranjera y la salida de réditos. Se revocó una ley restrictiva de 1962, que había causado

protestas entre los estadounidenses y los inversionistas extranjeros en general.

El PAEG logró sus objetivos. El recorte de gastos, combinado con el aumento de la recaudación, redujo la deuda pública anual de 4.2% del producto interno bruto (PIB) en 1963 a 3.2% en 1964 y 1.6% en 1965. La fuerte inflación de 1964 fue cediendo gradualmente y el PIB volvió a crecer a partir de 1966.

¿Por qué tuvo éxito el PAEG, a diferencia de los planes anteriores? Campos y Bulhões hicieron un diagnóstico adecuado de la situación, pero eso no lo explica todo. La instauración de un régimen autoritario en el país facilitó la acción del Gobierno. Cualquier plan de estabilización, para poder funcionar, dependía de que la sociedad hiciera sacrificios. Dadas las condiciones de la sociedad brasileña y la percepción de los actores políticos, hubiera sido difícil lograr algo así en el ámbito de la democracia.

El régimen autoritario permitió a Campos y Bulhões imponer sacrificios forzosos, especialmente a la clase trabajadora, sin que ésta estuviera en condiciones de resistirse. El problema crítico de la deuda externa pudo resolverse provisionalmente gracias al visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la ayuda masiva del Gobierno estadounidense a través de la Alianza para el Progreso.

A nivel internacional, el gobierno de Castelo Branco se alineó claramente con la política estadounidense. Un ejemplo de ello pudo verse en la guerra civil que estalló en la República Dominicana durante los primeros meses de 1965. Estados Unidos intervino en el conflicto enviando a la isla a 42 000 *marines*. Junto con Honduras y Paraguay, Brasil aceptó mandar tropas bajo la protección de la Inter-American Peace Force (IAPF).

En octubre de 1965 se celebraron elecciones directas en 11 estados. Para entonces gran parte del entusiasmo por la revolución se había apagado. Era difícil ilusionarse con la propaganda sobre el fin de la corrupción, y los bolsillos de la clase media estaban vacíos.

Pese a que la llamada línea dura de las Fuerzas Armadas vetó a ciertos candidatos, la oposición triunfó en estados importantes, como Guanabara y Minas Gerais. Los resultados de las urnas alarmaron a los medios militares. Los grupos de línea dura, adversarios de los castelistas, vieron en esos resultados la prueba de que el Gobierno era demasiado complaciente con sus enemigos. Eran partidarios de que se instaurara un régimen autoritario, con un control militar estricto sobre el sistema de decisiones para intensificar la lucha contra el comunismo y la corrupción.

Presionado por estos sectores, Castelo Branco decretó el AI-2 en octubre de 1965, tan sólo 24 días después de las elecciones estatales. En el AI-2 se establecía en definitiva que la elección para presidente y vicepresidente de la república se decidiría por la mayoría absoluta del Congreso Nacional en una sesión pública y por votación nominal. El auto daba aún más poder al presidente al establecer que podía emitir decretos ley en materia de seguridad nacional. El Gobierno empezó a legislar sobre temas relevantes mediante decretos ley y amplió hasta donde quiso el concepto de seguridad nacional.

Otra medida importante del AI-2 fue la extinción de los partidos políticos. Los militares consideraban que el sistema multipartidista era una de las causas de las crisis políticas. De este modo dejaron de existir esos partidos que se habían creado en los últimos tiempos del Estado Novo y que, bien que mal, expresaban distintas corrientes de la opinión pública.

La legislación partidista sólo permitió en la práctica la existencia de dos partidos: la Alianza Renovadora Nacional (Arena), que agrupaba a los partidarios del Gobierno, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que reunía a la oposición. La mayor parte de los políticos que se afiliaron a Arena habían pertenecido a la UDN y, en una proporción casi igual, al Partido Social Democrático (PSD); el MDB se formó con figuras del PTB en primer lugar y, en segundo, del PSD.

El gobierno de Castelo Branco remató la transformación de las instituciones haciendo que el Congreso aprobara una nueva Constitución en enero de 1967. Sometido a nuevas purgas, el Congreso había estado cerrado un mes en octubre de 1966. Pero se le convocó a una sesión extraordinaria para que aprobara el nuevo texto constitucional.

La Constitución de 1967 incorporaba aquellas leyes que habían ampliado las facultades del Ejecutivo, especialmente en materia de seguridad nacional. Pero no mantuvo las figuras excepcionales que permitían seguir revocando mandatos, anulando derechos políticos, etcétera.

El grupo castelista no pudo encontrar un sucesor para Castelo Branco. El Congreso eligió como presidente al general Artur da Costa e Silva y como vicepresidente a un civil, el udenista Pedro Aleixo, que tomaron posesión en marzo de 1967.

Aunque había sido ministro de Guerra de Castelo Branco, Costa e Silva era una figura ajena a su grupo. El *Tío Viejo*, como lo llamaban los conspiradores de 1964, había hecho una carrera militar sólida, que incluía, entre otras cosas, meses de entrenamiento en Estados Unidos y el mando del IV Ejército durante los tensos años de 1961-1962. Pero su estilo no coincidía con el del culto Castelo Branco. No le interesaban las lecturas

complicadas de estrategia militar y prefería los entretenimientos ligeros y las carreras de caballos. Más significativo que su diferencia de personalidades era el hecho de que en Costa e Silva se centraban las esperanzas de la línea dura y de los nacionalistas autoritarios de las Fuerzas Armadas, descontentos con la política castelista de cercanía con Estados Unidos y de concesión de facilidades al capital extranjero.

Sin embargo, una vez en el poder, Costa e Silva no fue un simple instrumento de la línea dura. Teniendo en cuenta las presiones existentes en la sociedad, tendió puentes con sectores de la oposición y trató de escuchar a sus opositores. Al mismo tiempo, emprendió la ofensiva en el terreno laboral, dando impulso a la organización de sindicatos y a la formación de líderes sindicales confiables. Los acontecimientos acabarían por atropellar esta política de liberalización restringida.

El cierre político y la lucha armada

Pasado el primer impacto de la represión, desde 1966, la oposición había empezado a rearticularse. Muchos miembros de la jerarquía de la Iglesia se enfrentaron con el Gobierno. Destacaron en el nordeste las acciones del arzobispo de Olinda y Recife, don Hélder Câmara. Los estudiantes también comenzaron a movilizarse en torno a la UNE.

En el escenario político, Lacerda, que había quedado al margen, se acercó a sus enemigos tradicionales —Jango y Juscelino— para formar el Frente Amplio. Sus líderes, reunidos en Montevideo, se propusieron luchar por la redemocratización del país y la consolidación de los derechos de los trabajadores.

En 1968, las movilizaciones cobraron fuerza, en el contexto de un año cargado de significado en todo el mundo. El catalizador

de las manifestaciones callejeras fue la muerte de un estudiante a manos de la Policía Militar durante una pequeña protesta realizada en marzo en Río de Janeiro. Miles de personas se congregaron en su funeral. Hubo nuevas muestras de violencia y la indignación creció. Esto sentó las condiciones para una movilización más amplia que no sólo reunía a estudiantes, sino a sectores representativos de la Iglesia y la clase media. La convergencia de estas fuerzas, que luchaban por la democratización, llegó a su punto más alto con la llamada Marcha de los Cien Mil, en junio de 1968.

Al mismo tiempo tenían lugar dos huelgas obreras agresivas: la de Contagem, cerca de Belo Horizonte, y la de Osasco, en la Gran São Paulo. Mientras que la de Contagem fue hasta cierto punto espontánea, la de Osasco fue resultado del trabajo conjunto de trabajadores y estudiantes, que empezaron por la ocupación de una gran empresa. La prueba de fuerza terminó mal. El Ministerio de Trabajo y Pensiones intervino el Sindicato de Metalúrgicos y un fuerte operativo militar desocupó violentamente el inmueble.

La huelga de Osasco recibió el influjo de grupos de izquierda que consideraban que sólo la lucha armada podría poner fin al régimen militar. Estos grupos estaban fuertemente influidos por el ejemplo de la Revolución Cubana y por la aparición de guerrillas en varios países de América Latina, como Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú.

En Brasil, el Partido Comunista Brasileño (PCB), organización tradicional de izquierda, se oponía a la lucha armada. En 1967, un grupo liderado por el veterano comunista Carlos Marighella rompió con el partido y formó la Alianza Liberadora Nacional (ALN). La Acción Popular (AP) ya había optado por la lucha armada y fueron surgiendo nuevos grupos, entre ellos la Vanguardia

Popular Revolucionaria (VPR), que contó con una fuerte presencia de militares de izquierda.

Los grupos de lucha armada iniciaron sus acciones en 1968. Una bomba explotó en el consulado estadounidense en São Paulo; hubo también "expropiaciones", es decir, asaltos para reunir fondos. Estos hechos bastaban para reforzar la certeza de la línea dura de que la revolución se estaba perdiendo y de que había que echar mano de nuevos instrumentos para acabar con los subversivos. El pretexto para poner fin a la liberalización restringida fue un hecho aparentemente trivial: un discurso que pronunció en el Congreso el diputado Márcio Moreira Alves, que se consideró ofensivo para con las Fuerzas Armadas.

El texto del discurso —desconocido para el gran público— se distribuyó en las unidades de las Fuerzas Armadas. Ya establecido el ambiente de indignación, los ministros militares exigieron al Superior Tribunal Federal (STF) que se iniciara un proceso penal contra Moreira Alves por ofensas a la dignidad de las Fuerzas Armadas. El proceso dependía de la autorización del Congreso. Éste, en una decisión inesperada, se negó a suspender la inmunidad parlamentaria del diputado. Menos de 24 horas después, el 13 de diciembre de 1968, Costa e Silva decretó el AI-5 y cerró el Congreso.

El AI-5 fue el instrumento de una revolución dentro de la revolución, o de una contrarrevolución dentro de la contrarrevolución. A diferencia de los autos anteriores, éste no limitaba el plazo de su vigencia. El presidente de la república volvía a tener poderes para cerrar provisionalmente el Congreso, cosa que la Constitución de 1967 no permitía. Se restablecía la facultad presidencial de revocar mandatos, suspender derechos políticos y despedir o jubilar a servidores públicos.

A partir del AI-5, el núcleo militar del poder se concentró en la llamada comunidad de información, esto es, en aquellas figuras que estaban a cargo de los órganos de vigilancia y represión. Se abrió un nuevo ciclo de revocaciones, suspensión de derechos políticos y purgas en el funcionariado, incluyendo a muchos profesores universitarios. Se estableció en la práctica la censura a los medios de comunicación y la tortura se volvió parte integrante de los métodos del Gobierno.

Uno de los muchos aspectos trágicos del AI-5 fue que reforzó la tesis de los grupos partidarios de la lucha armada, cuyas acciones se multiplicaron a partir de 1969. El régimen parecía incapaz de ceder a las presiones sociales y de enmendarse: seguía, cada vez más, el curso de una dictadura brutal.

En agosto de 1969, Costa e Silva sufrió una embolia que lo dejó paralizado. Los ministros militares decidieron sustituirlo y con ello violaron la regla constitucional según la cual su remplazo debía ser el vicepresidente, Pedro Aleixo.

La izquierda radical empezó a secuestrar miembros del cuerpo diplomático de otros países para intercambiarlos por prisioneros políticos. La acción que más resonancia tuvo fue el secuestro de Charles Burke Elbrick, embajador de Estados Unidos en Río de Janeiro. A cambio de la libertad del diplomático, los secuestradores obtuvieron la liberación de 15 presos políticos que fueron enviados a México.

La Junta Militar creó la pena de destierro, aplicable a todo aquel brasileño que se volviera "inconveniente, nocivo o peligroso para la Seguridad Nacional". Los primeros desterrados fueron los prisioneros que se intercambiaron por el embajador estadounidense. También se estableció la pena de muerte para los casos de "guerra subversiva". Esta pena nunca se aplicó formalmente: se prefirieron las ejecuciones sumarias o la muerte

de prisioneros bajo tortura. Las defunciones se presentaban luego como resultado de enfrentamientos entre los subversivos y las fuerzas del orden, o como desapariciones misteriosas.

Hasta 1969 el Centro de Información de la Marina (Cenimar) había sido el órgano más conocido por usar la tortura. A partir de ese año, surgió en São Paulo la Operación Bandeirantes (Oban), ligada al II Ejército, cuyo radio de acción se concentró en el eje São Paulo-Río de Janeiro. La Oban dio lugar a los DOI-CODI, siglas del Destacamento de Operaciones de Información y del Centro de Operaciones de Defensa Interna. Los DOI-CODI se extendieron por varios estados y fueron los principales centros de tortura del régimen militar.

Mientras el país vivía uno de sus periodos políticos más tenebrosos, el Gobierno tenía éxito en el terreno económico. Una vez que Campos y Bulhões restablecieron el equilibrio financiero mediante una recesión relativamente breve, el ministro de Hacienda, Delfim Netto, fomentó el crecimiento económico facilitando la expansión del crédito. Al mismo tiempo estableció el control de precios para frenar la inflación, que en 1968 se había elevado en un 25.4%, pero a partir de entonces empezó a declinar.

En 1968 tuvo lugar una fuerte recuperación industrial, encabezada por las industrias automotriz, química y de materiales eléctricos. La construcción civil se expandió considerablemente, gracias sobre todo a los recursos que proporcionó el Banco Nacional de Vivienda (BNH por sus siglas en portugués).[1] En 1968 y 1969, el país creció a un ritmo impresionante; registró variaciones, respectivamente, de 11.2% y 10% del PIB, lo que corresponde a 8.1% y 6.8% del PIB *per capita*. Empezaba así el llamado milagro económico.

Para mediados de octubre de 1969, Costa e Silva seguía vivo, pero ya no podría recuperarse. Ante ello, la Junta Militar declaró vacantes los cargos de presidente y vicepresidente de la república y determinó que el 25 de octubre el Congreso Nacional eligiera a los sucesores. El alto mando de las Fuerzas Armadas designó como presidente al general Emílio Garrastazu Médici, y como vicepresidente al ministro de Marina, Augusto Rademaker.

Médici era un militar *gaúcho*, como Costa e Silva. Descendía de italianos por línea paterna y su madre era de origen vasco. En la década de 1950 había sido jefe del Estado Mayor de Costa e Silva, entonces comandante de la III Región Militar, y se había convertido en su amigo íntimo. Había apoyado el movimiento de 1964 y, tras la caída de Goulart, se le nombró agregado militar de Brasil en Washington. Cuando Costa e Silva asumió la presidencia de la república, Médici se convirtió en el jefe del SNI.

Para el gran público, Médici era un nombre desconocido. Además no le gustaba el ejercicio del poder, que delegó en sus ministros. De allí surgió la paradoja de un mando presidencial dividido durante uno de los periodos más represivos de la historia brasileña, si no es que el más represivo.

Los grupos armados urbanos, que al principio parecían haber desestabilizado al régimen con sus acciones espectaculares, menguaron y prácticamente desaparecieron. Esto se debió, en primer lugar, a la eficacia de la represión contra los militantes de la lucha armada y sus simpatizantes, estos últimos, en su mayoría, jóvenes profesionistas. Otro factor fue el aislamiento de esos grupos respecto a las masas de la población, que apenas si se sintió atraída por sus acciones. La izquierda radical se había equivocado completamente al pensar que podría crear en Brasil un nuevo Vietnam.

Quedó un foco de guerrilla rural que el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) había establecido en la cuenca del río Araguaia,

cerca de Marabá, al este del estado de Pará. Durante 1970 y 1971 los guerrilleros, aproximadamente 70, entablaron vínculos con los campesinos y los instruyeron sobre métodos de cultivo y cuidados de la salud. El Ejército descubrió este foco en 1972, pero no fue tan hábil para reprimirlo como lo había sido en el caso de la guerrilla urbana. No fue sino hasta 1975, después de haber convertido el área en una zona de seguridad nacional, cuando las fuerzas del Ejército pudieron liquidar o capturar al grupo del PCdoB. Nada de esto llegó al conocimiento del gran público, pues estaba prohibido divulgar el tema. Cuando mucho, corrieron rumores inconexos sobre la guerrilla del Araguaia.

Por otro lado, la oposición legal llegó a su nivel más bajo durante el gobierno de Médici debido a las condiciones económicas favorables, a la represión y, en menor medida, a la campaña por el voto nulo. En las elecciones legislativas de 1970, cuando se renovaron dos tercios de los escaños del Senado, Arena obtuvo una amplia victoria.

El gobierno de Médici no se limitó a la represión. Distinguió claramente entre un sector significativo pero minoritario de la sociedad, que era adversario del régimen, y la masa de la población, que vivía una cotidianidad aceptable durante aquellos años de prosperidad económica. La represión se dirigió al primer grupo, al tiempo que la propaganda se destinó a, por lo menos, neutralizar al segundo.

Después de 1964 el país avanzó mucho en materia de telecomunicaciones. Las facilidades de crédito personal permitieron que creciera el número de viviendas con televisión. En 1960 sólo 9.5% de las viviendas urbanas tenían este aparato; para 1970 el porcentaje era de 40%. Fue en esa época cuando, beneficiada por el Gobierno, del que se volvió portavoz, TV Globo se expandió hasta convertirse en una red nacional y hacerse prácticamente del control de ese sector. La propaganda

gubernamental adquirió un canal de expresión como nunca antes lo había tenido en la historia del país. El lema propagandístico "Brasil, gran potencia" surtió efecto en el imaginario de la población. Muchos brasileños ancianos de clase media se lamentaban por esos años de que no vivirían hasta el nuevo milenio, cuando Brasil se equipararía con Japón.

El periodo del llamado milagro se extendió de 1969 a 1973 y en él se combinaron un extraordinario crecimiento económico y tasas relativamente bajas de inflación. El PIB creció en un promedio anual de 11.2% en ese lapso; alcanzó el punto más alto en 1973, con una variación de 13%. La inflación media anual no sobrepasó el 18 por ciento.

El milagro tenía una explicación terrenal. Los técnicos que lo planearon, con Delfim Netto a la cabeza, se beneficiaron, en primer lugar, de la situación económica mundial, caracterizada por una amplia disponibilidad de recursos. Los países en desarrollo más avanzados aprovecharon las nuevas oportunidades para adquirir préstamos del extranjero. El total de la deuda externa de estos países, no productores de petróleo, pasó de menos de 40 000 millones de dólares en 1967 a 97 000 millones en 1972 y 375 000 millones en 1980.

Junto con los préstamos creció en Brasil la inversión de capital extranjero. En 1973 la entrada de capitales había llegado a un nivel anual de 4 300 millones de dólares, casi el doble que en 1971 y más del triple que en 1970.

Uno de los sectores más importantes para la inversión extranjera fue el de la industria automotriz, que se situó a la cabeza del crecimiento industrial con tasas anuales superiores a 30%. La ampliación del crédito al consumidor y el reajuste de las normas de producción, que autorizó la fabricación de autos de

mediano porte, atrajeron fuertes inversiones de General Motors (GM), Ford y Chrysler.

El comercio exterior experimentó una gran expansión. Para sostener el crecimiento económico era necesario ampliar la importación de determinados bienes. El incentivo a la exportación de productos industriales mediante la concesión de créditos en condiciones favorables, la exención o reducción de impuestos y otras medidas de subsidio a las exportaciones ayudaron a que éstas se diversificaran. Este esfuerzo por la diversificación, cuyo objetivo era que Brasil ya no dependiera tanto de un solo producto, rindió frutos. Si entre 1947 y 1964 el café había representado 57% del valor de las exportaciones brasileñas, entre 1965 y 1971 representó 37% y, entre 1972 y 1975, únicamente 15%. Por su parte, la capacidad gubernamental de recaudación de impuestos aumentó, y esto ayudó a reducir la deuda pública y la inflación.

Pero el milagro tenía sus puntos débiles y negativos. El principal punto débil era la excesiva dependencia del sistema financiero y del comercio internacional, que eran los responsables de la facilidad de los préstamos del extranjero, de la inversión de capital extranjero, de la expansión de las exportaciones, etc. El crecimiento económico también se tradujo en una creciente necesidad de contar con determinados productos de importación, entre los cuales el petróleo era el más importante.

Los aspectos negativos del milagro fueron, ante todo, de naturaleza social. La política económica de Delfim Netto privilegió la acumulación de capital a través de las facilidades ya mencionadas y de la creación de un índice preestablecido de aumento salarial a un nivel que subestimaba la inflación. En cuanto al consumo personal, la expansión de la industria, sobre todo en el caso de los automóviles, favoreció a las clases de

ingresos altos y medios, pero los salarios de los trabajadores poco calificados se redujeron.

Esto resultó en una concentración acentuada del ingreso, que ya venía de años anteriores. Si el índice del salario mínimo se calcula en 100 para enero de 1959, en enero de 1973 había caído a 39. Este dato es bastante significativo si se tiene en cuenta que, en 1972, 52.5% de la población económicamente activa recibía menos de un salario mínimo, y 22.8%, entre uno y dos. Sin embargo, el impacto social de la concentración de ingresos se atenuó, ya que, habiendo más oportunidades de empleo, el número de personas que trabajaban por familia urbana aumentó bastante.

Otro aspecto negativo del milagro, que persistió aun después, fue la desproporción entre el avance económico y el rezago o incluso el abandono de los programas sociales por parte del Estado. En el contexto mundial, Brasil llamaba la atención por su posición relativamente destacada en cuanto a potencial industrial y sus bajísimos índices de salud, educación y vivienda, que son los que miden la calidad de vida de un pueblo.

El "capitalismo salvaje" fue la marca de esos años y los que siguieron, con inmensos proyectos que no tenían en cuenta ni la naturaleza ni las poblaciones locales. La palabra "ecología" apenas se había consignado en los diccionarios y la contaminación causada por la industria y los autos parecía una bendición. El proyecto de la carretera Transamazónica durante el gobierno de Médici es un buen ejemplo de este espíritu. Se construyó para asegurar el control brasileño de aquella región —un eterno fantasma desde la óptica de los militares— y para asentar trabajadores nordestinos en agrovillas.[2] Tras provocar gran destrucción y engordar a las empresas contratistas, la obra fracasó.

Al igual que Castelo Branco, Médici tampoco pudo hallar un sucesor. A mediados de 1973, las Fuerzas Armadas eligieron como su remplazo al general Ernesto Geisel.

Geisel nació en Rio Grande do Sul, hijo de un alemán luterano que había migrado a Brasil en 1890. Además de su carrera en el Ejército, el general había ocupado puestos administrativos, el más importante de los cuales fue el de presidente de la empresa estatal de Petróleo Brasileño (Petrobras). También ponía los ojos en la política. Había colaborado con el gobierno de Dutra y ayudado a encontrar la solución de compromiso que permitió la toma de posesión de João Goulart en 1961. Sus vínculos con el grupo castelista eran notorios: fue miembro del cuerpo permanente de la Escuela Superior de Guerra (ESG) y jefe de la Casa Militar de Castelo Branco. En este último cargo, ayudó a mantener a raya a la línea dura. Dentro de la corporación militar no se eligió a Geisel porque fuera partidario de la liberalización del régimen, sino porque se valoraban su capacidad de mando y sus cualidades administrativas. También pesó en su designación el hecho de que fuera hermano del ministro del Ejército, Orlando Geisel. Como oposición a Ernesto Geisel, el MDB decidió presentar la candidatura simbólica de su presidente, Ulysses Guimarães, para denunciar las elecciones indirectas, la supresión de las libertades y la concentración de ingresos causada por el modelo económico.

Una enmienda a la Constitución de 1967 modificó la forma de elegir al presidente de la república. Se conformó un Colegio Electoral compuesto por miembros del Congreso y delegados de las asambleas legislativas de los estados. Geisel fue el primer presidente elegido por el Colegio, en enero de 1974. Tomó posesión el 15 de marzo de ese año.

El gobierno de Geisel se asocia con el inicio de la apertura política, que el propio general-presidente definió como lenta, gradual y segura. En la práctica, la liberalización del régimen, que al principio recibió el nombre de "distensión", siguió un camino difícil, lleno de pequeños avances y retrocesos. Esto se debió a varios factores. Por un lado, la línea dura, que aún conservaba gran parte de su fuerza, presionaba a Geisel. Por otro lado, el propio Geisel quería controlar esa apertura hacia una indefinida democracia conservadora, evitando que la oposición llegara demasiado pronto al poder. Así, la apertura fue lenta, gradual e insegura, pues hasta el fin del gobierno de Figueiredo la línea dura siguió representando una continua amenaza de retroceso.

Geisel formuló la estrategia de la distensión junto con el general Golbery, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. ¿Por qué decidieron Golbery y Geisel liberalizar el régimen? ¿Por las presiones de la oposición? Sin lugar a dudas, en 1973 la oposición había empezado a dar claras muestras de vida independiente; pero el choque entre la Iglesia católica y el Estado también era muy desgastante para el Gobierno. El equipo de transición de Geisel trató de tender puentes con la Iglesia a partir de un punto de acuerdo: la lucha contra la tortura.

Pero ni la oposición ni la Iglesia eran el indicador más sensible del grado en que la distensión se había hecho necesaria. Ese indicador eran las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el poder. Los órganos de represión habían tomado el poder, y eso se reflejó negativamente en la jerarquía de las Fuerzas Armadas. Las funciones y los principios básicos de la institución se distorsionaban, lo que ponía en riesgo su integridad. Para restaurar la jerarquía había que neutralizar a la línea dura,

ablandar la represión e impulsar la "vuelta de los militares a los cuarteles" de una manera ordenada.

Tras bambalinas, el Gobierno empezó a luchar contra la línea dura. Al mismo tiempo permitió que las elecciones legislativas de noviembre de 1974 se celebraran en un ambiente de relativa libertad, concediendo a los partidos acceso a la radio y la televisión. Se esperaba un triunfo fácil de Arena, pero los resultados electorales sorprendieron al Gobierno, pues mostraron un considerable avance del MDB, sobre todo en las grandes ciudades y en los estados más desarrollados. A lo largo de 1975, Geisel combinó medidas liberalizantes con medidas represivas. Suspendió la censura a los periódicos y autorizó una fuerte represión contra el PCB, al que se acusaba de estar tras la victoria del MDB.

Finalmente en São Paulo estalló un enfrentamiento importante entre el Gobierno y la línea dura. Aunque la guerrilla había sido eliminada, los militares de la línea dura continuaban viendo subversivos por todas partes. Aún se practicaba la tortura seguida de la "desaparición" de personas que en realidad eran asesinadas por la represión.

En octubre de 1975, en medio de una ola represiva, se ordenó al periodista Vladimir Herzog, director de periodismo de TV Cultura de São Paulo, que compareciera ante el DOI-CODI como sospechoso de tener vínculos con el PCB. Herzog acudió pero no salió vivo de allí. Su muerte se presentó como un suicidio por ahorcamiento, pero esto era un intento grosero de encubrir la realidad: lo habían torturado y asesinado.

Este acontecimiento despertó gran indignación en São Paulo, sobre todo entre los profesionistas de clase media y la Iglesia católica. La Iglesia y la Orden de Abogados de Brasil (OAB) se movilizaron para denunciar el uso sistemático de la tortura y los asesinatos encubiertos.

Pocos meses después, en enero de 1976, el obrero metalúrgico Manuel Fiel Filho murió asesinado en circunstancias semejantes a las de Herzog. Una vez más, la versión oficial fue que se había suicidado ahorcándose. El presidente Geisel decidió tomar cartas en el asunto. En São Paulo, el comandante del II Ejército había alentado o por lo menos permitido que se instalara un poder paralelo. Geisel lo sustituyó por un general de su entera confianza que empezó a usar otro lenguaje y establecer puntos de contacto con la sociedad. La tortura en las dependencias del DOI-CODI cesó, aunque la violencia en São Paulo no había terminado.

Tras el resultado de la contienda de noviembre de 1974, las elecciones empezaron a preocupar al Gobierno. Habría elecciones municipales en noviembre de 1976, y la posibilidad de que Arena perdiera era real.

Algunos meses antes, en julio de 1976, una ley que modificaba la legislación electoral había impedido que los candidatos tuvieran acceso a la radio y la televisión. Aunque la Ley Falcão, concebida por el ministro de Justicia, en principio afectaba tanto a Arena como al MDB, el principal perjudicado sería el partido de oposición, pues de este modo perdía una oportunidad única de divulgar sus ideas. Aun así, el MDB ganó en las elecciones para alcaldes y obtuvo la mayoría en las Cámaras municipales en 59 de las 100 mayores ciudades del país.

En abril de 1977, tras declarar en receso las sesiones del Congreso, Geisel estrechó el cerco introduciendo una serie de medidas conocidas como el Paquete de Abril. Entre ellas se contaba la invención de la figura del senador "biónico", que buscaba impedir al MDB obtener la mayoría en el Senado. Los senadores biónicos fueron elegidos o, más precisamente,

"fabricados" mediante la elección indirecta de un colegio electoral.

Al mismo tiempo, en 1978, el Gobierno inició conversaciones con líderes de la oposición y de la Iglesia para empezar a restaurar las libertades públicas. A partir de 1979, el AI-5 dejó de estar vigente, de modo que se restauraron las garantías individuales y la independencia del Congreso.

El MDB tuvo buenos resultados en las elecciones legislativas de 1978. El partido se había convertido en la vía de expresión política de todo el descontento de la población. Entre sus cuadros se incluían desde liberales hasta socialistas. La campaña electoral de 1978 contó con el apoyo de militantes de distintos grupos de la sociedad civil: estudiantes, sindicalistas, abogados y miembros de las organizaciones de base de la Iglesia católica. Estos grupos tendieron un puente entre el MDB y las grandes masas, y con ello contrarrestaron la grave desventaja de la falta de acceso libre a la radio y la televisión. El MDB obtuvo 57% de los votos válidos para el Senado, pero no llegó a tener la mayoría, pues la representación en el Senado no era proporcional, sino por estados. Además estaban los legisladores biónicos. Arena conservó la mayoría en la Cámara federal, con 231 escaños contra 189 del MDB. Los votos del MDB seguían concentrándose en los estados más desarrollados y las grandes ciudades. En la votación para el Senado recibió alrededor de 83% de los votos en São Paulo, 63% en el estado de Río de Janeiro y 62% en Rio Grande do Sul. De cualquier forma el Gobierno seguía teniendo la mayoría en el Congreso.

En octubre de 1973, todavía durante el gobierno de Médici, había tenido lugar la primera crisis internacional del petróleo como consecuencia de la llamada Guerra de Yom Kipur, que los países árabes declararon a Israel. Esta crisis había afectado

profundamente a Brasil, que importaba más de 80% del petróleo que consumía.

Sin embargo, cuando el general Geisel tomó posesión, en marzo de 1974, aún se sentía en el ambiente algo de la euforia de los años del milagro. Las riendas de la política económica quedaron en manos del economista Mário Henrique Simonsen, que sustituyó a Delfim Netto en el Ministerio de Hacienda, y de João Paulo dos Reis Veloso, ministro de Planeación y Coordinación General. Reis Veloso venía del gabinete de Médici.

El nuevo Gobierno presentó el Segundo Plan Nacional de Desarrollo (PND). El primero había sido formulado por Roberto Campos en 1967 para equilibrar las finanzas y combatir la inflación. El segundo PND buscaba consumar el proceso de sustitución de importaciones, que se había iniciado décadas antes, modificando su contenido. No se trataba ya de suplir la importación de bienes de consumo, sino de avanzar hacia la autonomía en materia de insumos básicos (petróleo, acero, aluminio, fertilizantes, etc.) y de la industria de bienes de capital.

La preocupación del segundo PND por el problema energético era evidente, pues se proponía impulsar la investigación en materia de petróleo, el programa nuclear, la sustitución parcial de gasolina por alcohol y la construcción de centrales hidroeléctricas. El ejemplo más representativo de estas últimas fue la central de Itaipu, que se erigió en el río Paraná, en la frontera de Brasil y Paraguay, gracias a un convenio firmado entre los dos Gobiernos. La central de Itaipu, la planta hidroeléctrica más grande del mundo, empezó a funcionar en 1984.

El segundo PND trató de fomentar inversiones de la gran empresa privada en la producción de bienes de capital. Todo el sistema de incentivos y créditos del Banco Nacional de

Desarrollo Económico (BNDE) se involucró en este esfuerzo. Y, sin embargo, la nueva política ponía en el centro del escenario de la industrialización de Brasil a la gran empresa estatal. Las enormes inversiones del sistema de Eletrobras, Petrobras, Embratel (Empresa Brasileña de Telecomunicaciones) y de otras empresas públicas fueron, en rigor, lo que sostuvo al programa.

En 1974, la decisión de impulsar el crecimiento económico en lugar de refrenarlo se tomó partiendo de criterios tanto económicos como políticos. Esta insistencia mostró lo fuerte que era, entre los círculos dirigentes, la convicción de que Brasil era un país destinado al crecimiento. Esta convicción no se había originado en los tiempos del milagro, sino que se remontaba a la década de 1950.

Por otro lado, dada su estrategia de distensión, el Gobierno prefería evitar una política recesiva, cuyo mayor peso recaería sobre la masa asalariada. Si la oposición estaba creciendo en condiciones económicas relativamente favorables, ¿qué pasaría si la economía entraba en recesión?

Las dudas de muchos empresarios, en especial de São Paulo, sobre el rumbo de la política económica dieron origen a una campaña contra el excesivo intervencionismo del Estado. Un sector social dominante trataba, así, de intervenir en la escena política, que hasta entonces había estado monopolizada por los militares y tecnócratas.

Entre los economistas existe mucha controversia sobre las consecuencias del segundo PND. En un extremo se sitúan los que ven en ese plan un intento inoportuno de crecimiento acelerado, que sirvió para postergar el ajuste de la economía y agravar el problema de la deuda externa. En el otro extremo están los que consideran que el segundo PND fue un verdadero cambio de rumbo para la industrialización brasileña, el cual permitió hacer

avances cualitativos en el proceso de sustitución de importaciones.

En retrospectiva, es posible ver con mayor claridad que el plan sufrió las contingencias de la recesión internacional y del alza en las tasas de interés, y al mismo tiempo que tenía un problema de fondo. Seguía un modelo de industrialización que los países del Primer Mundo ya estaban dejando atrás debido a sus consecuencias negativas. Industrias como la del acero, el aluminio y el cloro-soda consumen altos niveles de energía y son sumamente contaminantes. A pesar de todo lo anterior es importante señalar que a partir del segundo PND se alcanzaron algunos logros notables en materia de sustitución de importaciones, especialmente en el caso del petróleo.

El que la capacidad ociosa de las empresas fuera una palanca importante del crecimiento económico acelerado había sido un problema desde la fase del milagro. Para seguir creciendo era necesario ampliar la inversión y contar con recursos extranjeros nuevos y más cuantiosos, pues el ahorro interno era insuficiente. Y los recursos no faltaron. Entraron al país principalmente bajo la forma de préstamos. Pero esto se tradujo en un aumento de la deuda externa, tanto pública como privada. A finales de 1978 la deuda ascendía a 43 500 millones de dólares: más del doble que tres años antes.

Además, cubrir los intereses de la deuda se convertía en una carga cada vez más onerosa en la balanza de pagos, toda vez que la mayoría de los préstamos se había contraído con tasas flexibles de interés. Como el periodo se caracterizó por un alza en la tasa internacional de intereses, los compromisos de Brasil en cuanto al pago de la deuda se hicieron cada vez más pesados. El alza en la tasa internacional de intereses fue una consecuencia de la política de Estados Unidos, que trataba de

compensar el déficit de su balanza de pagos atrayendo inversiones de otros países.

No se puede decir que el dinero obtenido a través de esos préstamos simplemente se arrojara por la borda o sirviera sólo para engordar a los intermediarios. Aunque estas cosas ocurrieron, el principal problema fue que los recursos se invirtieron en proyectos dispendiosos, mal administrados y de lento o dudoso retorno.

En números brutos, el periodo de Geisel presentó resultados satisfactorios. El PIB creció en un promedio anual de 6.7% y de 4.2% en el cálculo *per capita* entre 1974 y 1978. La inflación subió en promedio 37.9% en el mismo lapso. Pero los peligros eran muchos. La relativa contención de la inflación se mantenía mediante artificios como la oferta de bienes producidos por empresas estatales por debajo de su precio, de modo que esas empresas se volvían cada vez más deficitarias. La deuda externa crecía y para pagarla se hacía necesario contraer nuevos préstamos. Otro problema se vislumbraba en el horizonte: la deuda interna empezaba a pesar debido al mecanismo de la corrección monetaria y el pago de intereses elevados, lo que ponía en riesgo el presupuesto de la Unión.

La indexación anual de los salarios, esto es, el que se les ajustara sólo una vez al año, agravaba el descontento de los asalariados.

El régimen militar reprimió a las direcciones sindicales ligadas al esquema populista, pero no desmanteló los sindicatos. En el campo, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag) empezó a actuar independientemente del Gobierno desde 1968 y a fomentar la organización de federaciones de sindicatos rurales en todo el país. El número de sindicatos rurales, que era de 625 en 1968, pasó a 1 154 en 1972, 1 745 en 1976 y 2 144 en 1980. El gran aumento de trabajadores

rurales sindicalizados a partir de 1973 —su número pasó de poco más de 2.9 millones en 1973 a más de 5.1 millones en 1979— obedeció a que eran los sindicatos quienes administraban los programas de pensiones.

Bajo la influencia de la Iglesia y a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), surgieron dirigencias combativas. Así, se dio en el campo una situación curiosa en que la política asistencialista del Gobierno favoreció el surgimiento de un movimiento social activo.

La alternativa entre la lucha por la posesión de la tierra o la extensión al campo de los derechos laborales, que había dividido a los líderes del movimiento rural antes de 1964, cobró un contenido más definido. Dependiendo de su zona de acción, los sindicatos hicieron énfasis en una u otra de estas opciones. La lucha por la posesión de la tierra continuó e incluso se extendió; al mismo tiempo, huelgas como la de los cortadores de caña en Pernambuco, iniciadas en 1979, llamaron la atención hacia nuevas realidades del mundo rural.

Por otro lado, surgieron sindicatos de trabajadores de "cuello blanco", entre los que se contaban no sólo los sectores tradicionales de profesores y bancarios, sino también médicos, trabajadores sanitarios y otras categorías. La organización sindical de estas categorías obedeció a un cambio en el carácter de las profesiones: la figura del profesionista autónomo daba lugar cada vez más a la del asalariado con diploma.

Durante el gobierno de Geisel, el movimiento obrero irrumpió con nuevo ímpetu y nuevos rasgos. Resurgió el sindicalismo, adoptando formas independientes del Estado, muchas veces a partir de la experiencia dentro de las empresas, donde los trabajadores se organizaron y ampliaron las comisiones de fábrica. El eje más combativo pasó de las empresas públicas a la industria automotriz. La gran reunión de

trabajadores en un número reducido de unidades y su concentración geográfica en el ABC paulista fueron factores materiales importantes para la organización de un nuevo movimiento obrero. En 1978, por ejemplo, había en São Bernardo do Campo alrededor de 125 000 obreros dedicados a la industria mecánico-metalúrgica, con un fuerte predominio de la industria automotriz; de ese total, 67.2% se concentraba en empresas con más de 1 000 obreros. En 1976, en la capital de São Paulo, ese mismo ramo industrial agrupaba a 421 000 obreros, pero sólo 20.8% de ellos convergía en empresas con más de 1 000 trabajadores.

Pero estas condiciones, aunque necesarias, no bastan para explicar el surgimiento del nuevo sindicalismo, que nació a partir del trabajo de sus organizadores, entre quienes se destacaron líderes obreros, muchas veces vinculados con la Iglesia. También tuvieron un papel importante los abogados sindicales. El que el movimiento obrero saliera a la luz tuvo que ver, asimismo, con el ambiente de apertura política, aunque ésta tardó mucho en extenderse a las manifestaciones colectivas de los trabajadores.

En agosto de 1977, el Gobierno admitió que los índices oficiales de inflación de 1973 y 1974 habían sido manipulados. Como éstos regulaban los índices de reajuste salarial, se constató que los asalariados habían perdido 31.4% de su sueldo real durante esos años. El Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo inició una campaña por la corrección salarial, que abrió camino a las grandes huelgas de 1978 y 1979, en las que participaron millones de trabajadores. El liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del sindicato, se fue consolidando en el trabajo cotidiano y en las grandes asambleas celebradas en São Bernardo do Campo.

Los metalúrgicos se pusieron al frente de movimientos que incluían a otros sectores. En 1979, alrededor de 3.2 millones de trabajadores se declararon en huelga a nivel nacional. Hubo 27 paros de metalúrgicos en los que participaron 958 000 obreros; al mismo tiempo se registraron 20 huelgas de profesores que incluyeron a 766 000 asalariados. Estas huelgas tenían como objetivo una amplia gama de reivindicaciones: aumento salarial, garantía de empleo, reconocimiento de las comisiones de fábrica y libertades democráticas.

La amplitud de las huelgas de 1979 mostró que la creencia de los sectores conservadores, que sostenían que São Bernardo do Campo era un mundo aparte, era en gran medida falsa. Lo que pasaba en São Bernardo do Campo repercutía en el resto del país. Pero, sin duda, el sindicalismo del ABC nació y creció con marcas propias. Entre sus rasgos más importantes se cuenta su mayor independencia en relación con el Estado, su alto índice de organización (hacia 1978, 43% de los obreros estaban sindicalizados) y la consolidación de sus líderes fuera de la influencia de la izquierda tradicional, es decir, del PCB.

Geisel sí pudo hallar un sucesor: el general João Baptista de Oliveira Figueiredo, que derrotó al candidato del MDB en la reunión celebrada por el Colegio Electoral el 14 de octubre de 1978. El nombramiento del general Figueiredo había superado una dura prueba de fuerza, pues Sílvio Frota, ministro del Ejército, había presentado su propia candidatura en los medios militares y sondeado al Congreso como portavoz de la línea dura. Frota había emprendido una ofensiva contra el Gobierno, al que acusaba de ser complaciente con los subversivos. El presidente lo destituyó de su cargo y cortó su ascenso.

El general Figueiredo había sido jefe del Gabinete Militar durante la gestión de Médici y jefe del SNI durante el gobierno de

Geisel. Parecía, pues, un buen candidato para dar continuidad al lento proceso de apertura y, al mismo tiempo, para neutralizar a la línea dura. Como sea, una de las paradojas de la apertura fue el hecho de que el hombre nombrado para darle continuidad había sido jefe de un órgano represivo.

El periodo de Figueiredo combinó dos rasgos que muchos consideraban incompatibles: la ampliación de la apertura política y el agravamiento de la crisis económica. El nuevo general-presidente tomó posesión en marzo de 1979, manteniendo a Simonsen al mando de la economía, como secretario de la entonces Secretaría de Planeación (Seplan), que tenía el estatus de ministerio. Luego de una temporada como embajador en Francia, Delfim Netto volvió al gabinete para ocupar el Ministerio de Agricultura, donde estaba bastante fuera de lugar.

Simonsen trató de imponer una política de restricciones, pero se encontró con la oposición de varios sectores, entre ellos los empresarios nacionales, que se beneficiaban del crecimiento con inflación, y muchos miembros del propio Gobierno, interesados en mantener su nivel de gastos para tener logros que mostrar. En agosto de 1979, Simonsen dejó la Seplan. Lo sucedió Delfim Netto, que tenía prestigio como el hombre del milagro. Pero la situación ya no era la misma ni a nivel interno ni a nivel internacional. El segundo choque del petróleo, con la consecuente alza de precios, agravó el problema de la balanza de pagos. Las tasas internacionales de interés seguían subiendo, y eso complicó aún más la situación. Era cada vez más difícil obtener nuevos préstamos y los plazos para el pago se estrechaban.

El anhelado crecimiento con control de la inflación duró poco. Presionado por los acreedores extranjeros, Delfim optó por una política recesiva a finales de 1980. Se limitó seriamente la

expansión de la moneda, se cortó la inversión de las empresas estatales, se elevaron las tasas de interés internas y también se redujo la inversión privada.

La recesión de 1981-1983 tuvo graves consecuencias. En 1981, por primera vez desde que en 1947 se establecieron los indicadores del PIB, éste mostró una variación negativa, con una caída de 3.1%. En esos tres años el PIB descendió en promedio un 1.6%. Los sectores más afectados fueron las industrias de bienes de consumo duradero y de capital, concentradas en las zonas más urbanizadas del país, lo que redundó en desempleo.

A pesar de que se impusieron estos sacrificios, la inflación no bajó significativamente. Tras llegar a un índice anual de 110.2% en 1980, cayó a 95.2% en 1981 para volver a subir en 1982 a 99.7%. Durante aquellos años se presentó un cuadro de estanflación, que conjugaba estancamiento económico e inflación.

El Estado brasileño ya era técnicamente insolvente, pero el Gobierno se dio golpes de pecho cuando, en agosto de 1982, México se declaró en moratoria y pidió ayuda al FMI. Brasil —decían los portavoces del Gobierno, con aires de superioridad— no era México. En realidad, la moratoria mexicana acabó con las ya de por sí escasas posibilidades de conseguir préstamos del extranjero. Finalmente, en febrero de 1983, con sus reservas en dólares agotadas, Brasil tuvo que recurrir al FMI.

A cambio de una modesta ayuda financiera y en un intento de restaurar su credibilidad internacional, Brasil aceptó la receta del FMI. Ésta consistía sobre todo en esforzarse por mejorar las cuentas externas del país manteniendo el pago de la deuda. Internamente se preveía recortar los gastos y comprimir aún más los salarios.

Sobrevino una serie de desavenencias entre Brasil y el FMI. En Brasil había presiones contra las medidas restrictivas y el pago

de los intereses de la deuda; el FMI estaba insatisfecho porque el acuerdo no se cumplía. En estas circunstancias, los acreedores internacionales no concedieron al país nuevos plazos para pagar la deuda ni tasas de interés más favorables, como habían hecho con México.

A pesar de los pesares, el esfuerzo por mejorar las cuentas externas dio resultados. A partir de 1984 la economía se reactivó, impulsada sobre todo por el crecimiento de las exportaciones, entre las que destacaban los productos industrializados. La caída en los precios del petróleo hizo que el peso de ese producto disminuyera en el conjunto de las importaciones. Además, gracias a las inversiones realizadas a partir del segundo PND, se redujo la importación de petróleo y otros productos; pero la inflación seguía subiendo.

A principios de 1985, cuando Figueiredo dejó el Gobierno, la situación financiera era de alivio temporal y el país había vuelto a crecer. Pero el balance de aquellos años resulta bastante negativo. La inflación se incrementó aceleradamente, al pasar de 40.8% en 1978 a 223.8% en 1984. En ese mismo periodo la deuda externa aumentó de 43 500 millones de dólares a 91 000 millones.

Figueiredo dio continuidad al proceso de apertura que había iniciado el gobierno de Geisel. La dirección de las iniciativas quedó en manos del general Golbery y del ministro de Justicia, Petrônio Portella. En agosto de 1979, Figueiredo arrebató a la oposición una de sus principales banderas: la lucha por la amnistía. No obstante, la ley de amnistía que aprobó el Congreso tenía restricciones y hacía una importante concesión a la línea dura al incluir a los responsables de ejercer la tortura. Sea como fuere, la amnistía posibilitó la vuelta de los exiliados políticos a

Brasil y fue un paso crucial en la ampliación de las libertades públicas.

La línea dura siguió obstaculizando el proceso de apertura. Una serie de actos delictivos culminó en abril de 1981 con un intento de hacer estallar bombas en un centro de convenciones de Río de Janeiro donde tenía lugar un festival de música al que asistían miles de jóvenes. Una de las bombas no llegó a su destino. Estalló dentro de un auto ocupado por dos militares; uno de ellos murió allí mismo y el otro quedó gravemente herido. La investigación abierta por el Gobierno produjo una versión absurda de los hechos, además de eximir a los responsables. La renuncia de Golbery a la dirección de la Casa Civil en agosto de 1981 tuvo que ver, ciertamente, con la manipulación de las averiguaciones.

La legislación electoral aprobada en 1965 se había transformado en una trampa para los detentadores del poder. Las elecciones se convertían cada vez más en plebiscitos en los que se votaba a favor o en contra del Gobierno. Con el fin de quebrar la fuerza de la oposición, el Gobierno logró que el Congreso aprobara en diciembre de 1979 una nueva ley de organización partidista que extinguía al MDB y a Arena, al obligar a las organizaciones que se crearan en lo sucesivo a incluir la palabra "partido" en sus denominaciones. Arena, cuyo nombre era impopular, trató de cambiar de fachada y se convirtió en el Partido Democrático Social (PDS). Los dirigentes del MDB tuvieron la habilidad de simplemente añadir la voz "partido" a sus siglas; así, el MDB se convirtió en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Los tiempos de la oposición unida habían quedado atrás. Las diversas tendencias se mantuvieron juntas mientras hubo un enemigo común todopoderoso. A medida que el régimen

autoritario se fue abriendo, las diferencias ideológicas y personales empezaron a salir a flote. Del sindicalismo urbano y rural, de ciertos sectores de la Iglesia y de los profesionistas de clase media surgió el Partido de los Trabajadores (PT). Éste se proponía representar los intereses de los amplios estratos de asalariados que había en el país, con un programa de derechos mínimos y transformaciones sociales que dieran paso al socialismo. Adoptando una postura contraria al PCB y al culto a la Unión Soviética, el PT evitó definirse sobre la naturaleza del socialismo. Esto se debía en gran medida a que albergaba corrientes opuestas. En un extremo estaban los simpatizantes de la socialdemocracia; en el otro, los partidarios de la dictadura del proletariado. En el terreno sindical, el partido y el sindicalismo del ABC establecieron lazos íntimos. El movimiento del ABC fue uno de los núcleos más importantes para la conformación del PT, proceso en el que adquirió cada vez más relieve la figura de Lula.

Brizola no se acomodó en el PMDB y prefirió seguir su propio camino, tratando de capitalizar el prestigio del laborismo de izquierda. Una decisión judicial le impidió usar las siglas PTB, y entonces fundó el Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués).[3]

Las posiciones también se fueron diferenciando en el campo sindical. En agosto de 1981 se celebró la I Conferencia Nacional de la Clase Trabajadora (primera Conclat), que reunió representantes de las varias tendencias del sindicalismo brasileño. Allí se definieron dos corrientes principales. Una, muy cercana al PT, apostaba a una línea reivindicatoria agresiva, que consideraba más importante la movilización de los trabajadores que el sinuoso proceso de apertura. Su núcleo impulsor era el sindicalismo del ABC. La otra corriente sostenía que había que limitar la acción sindical a aquellas luchas que no pusieran en

riesgo el proceso de apertura. No asumía una postura ideológica clara e insistía en la importancia de alcanzar conquistas concretas e inmediatas para los trabajadores. Esta corriente incluía sindicatos destacados, como el de los Metalúrgicos de São Paulo, que estaban controlados por sindicalistas menos definidos políticamente y por integrantes de los dos partidos comunistas.

En 1983, el sindicalismo identificado con el PT fundó la Central Única de Trabajadores (CUT), sin la participación de los llamados moderados. Éstos formaron en marzo de 1986 la Central General de Trabajadores de Brasil (CGTB). Así se establecieron en el país dos centrales sindicales con perspectivas opuestas, que a lo largo de los años chocarían frontalmente.

Figueiredo se atuvo al calendario electoral, que preveía votaciones para noviembre de 1982. Pese a las restricciones vigentes, entre ellas la Ley Falcão, la campaña electoral permitió un amplio debate. En noviembre de 1982 más de 48 millones de brasileños fueron a las urnas para elegir desde concejales hasta gobernadores. Por primera vez desde 1965 éstos serían designados por voto directo.

En las elecciones legislativas triunfó el PDS, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En la votación de gobernadores, las oposiciones lograron victorias significativas, aunque el PDS ganó en la mayoría de los estados. Salieron victoriosas en São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, donde Brizola consiguió elegirse a pesar de un intento de fraude, manteniendo vivo un prestigio que se remontaba a la década de 1960.

En el curso de 1983 el PT asumió como una de sus prioridades realizar una campaña por las elecciones directas para la presidencia de la república. Para alcanzar ese objetivo, su dirección se dispuso por primera vez a formar un frente con

otros partidos. Luego de varias manifestaciones, en enero de 1984 se celebró en São Paulo un gran mitin que reunió a más de 200 000 personas.

En adelante, el movimiento por las elecciones directas fue más allá de las organizaciones partidistas y se convirtió en una posición casi unánime a nivel nacional. Millones de personas llenaron las calles de São Paulo y Río de Janeiro, con un entusiasmo pocas veces visto en el país. La campaña "Directas Ya" expresaba, al mismo tiempo, la vitalidad de la manifestación popular y lo difícil que era para los partidos encauzar reivindicaciones. La población ponía todas sus esperanzas en las elecciones directas: la expectativa de una representación auténtica y también la solución de muchos problemas (salarios insuficientes, inseguridad, inflación) que la mera elección directa del presidente de la república no podría resolver.

Pero había una brecha entre las manifestaciones callejeras y el Congreso, donde el PDS tenía la mayoría. Las elecciones directas dependían de una enmienda constitucional, que debía aprobarse con el voto de dos tercios de los congresistas. La enmienda se votó en medio de una gran expectativa popular. En Brasilia, Figueiredo decretó estado de emergencia por temor a las manifestaciones. Pero, aunque se aprobó, la enmienda no obtuvo los votos necesarios para que se hiciera un cambio a la Constitución.

El rechazo de las elecciones directas para la presidencia causó gran frustración popular. La batalla por la sucesión se dio en el Colegio Electoral. Tres figuras se esbozaban como posibles candidatos del PDS: el vicepresidente Aureliano Chaves; el ministro del Interior, Mário Andreazza, que era coronel del Ejército, y Paulo Maluf. Maluf había sido alcalde y gobernador de São Paulo por voto indirecto y había sido elegido para la Cámara de Diputados por una votación numerosa.

En 1984 la elección del candidato del Gobierno ya no pasaba por la corporación militar, aunque los militares tenían cierto peso en la decisión. Maluf emprendió una intensa campaña entre los delegados de la convención del PDS y logró que lo nombraran candidato en agosto de 1984, derrotando a Mário Andreazza. Su victoria causó la escisión definitiva de los sectores del PDS que apoyaban a otros contendientes. Ya en julio, Aureliano Chaves había retirado su candidatura y se había puesto a organizar una disidencia que dio origen a un nuevo partido: el Partido del Frente Liberal (PFL). El PFL se acercó al PMDB, que había postulado a Tancredo Neves para la presidencia de la república. Estas dos fuerzas llegaron a un acuerdo y formaron la Alianza Democrática en oposición a Maluf. Tancredo Neves quedó como candidato a la presidencia y José Sarney a la vicepresidencia.

El PMDB veía con muchas reservas a Sarney, pues hasta hacía muy poco tiempo había sido una de las principales figuras políticas del PDS, partido por el que había sido senador y del que había sido presidente. Su nombre tenía poco o nada que ver con la bandera de la democratización que enarbolaba el PMDB. Pero el PFL no estaba dispuesto a prescindir de Sarney y el PMDB cedió. En 1984 nadie podía imaginar los alcances que tendría esta decisión.

Aunque era candidato en elecciones indirectas, Tancredo apareció en la televisión y en los mítines, y eso reforzó su prestigio y la presión popular a favor de su candidatura. Maluf trató de recurrir a las viejas técnicas de seducción personal en un intento de ganarse, uno a uno, a los miembros del Colegio Electoral, pero su estrategia falló.

El 15 de enero de 1985, Tancredo y Sarney obtuvieron una clara victoria en el Colegio Electoral. Por caminos intrincados y sirviéndose del sistema electoral impuesto por el régimen autoritario, la oposición llegaba al poder.

¿Cuáles fueron los principales rasgos del régimen que se instauró en el país a partir del 31 de marzo de 1964?

Por primera vez la cúpula de las Fuerzas Armadas asumió directamente el poder y muchas funciones del Gobierno. Los militares rara vez actuaron en bloque en el terreno político; se dividieron en varias tendencias aunque con puntos en común: los castelistas, los de la línea dura y los nacionalistas. El poder de cada uno de estos grupos varió, lo mismo que su popularidad en la opinión más amplia de las Fuerzas Armadas, incluyendo a los mandos medios, para tratar de imponer candidaturas o legitimar determinadas orientaciones.

El régimen que se instauró en 1964 no fue una dictadura personal. Se le podría comparar con un dominio compartido, en el que se escogía a uno de los jefes militares —general de cuatro estrellas— para gobernar el país por un tiempo definido. En efecto, la sucesión presidencial se daba en el interior de la corporación militar, con mayor o menor audiencia de las tropas dependiendo del caso y de la decisión del alto mando de las Fuerzas Armadas. Aparentemente, de acuerdo con la legislación, era el Congreso el que elegía al presidente de la república, postulado por Arena. Pero en realidad, descontando los votos de la oposición, lo único que el Congreso hacía era consagrar la orden que venía de arriba.

Los militares no gobernaron solos y muchas veces no controlaron de cerca a los civiles que compartían el poder con ellos. El régimen instaurado en 1964 puso en primer plano a los artífices de la política económica —hombres como Delfim Neto y Mário Henrique Simonsen— y les dio un amplio margen de acción. Privilegió a ciertos sectores de la burocracia del Estado, en especial a los dirigentes de las empresas estatales, al grado de que es posible hablar de un dominio compartido entre los

militares (como el grupo decisivo en última instancia) y la burocracia técnica del Estado.

El régimen tuvo rasgos autoritarios, pero se distinguió del fascismo. No se esforzó por organizar a las masas en apoyo del Gobierno; no trató de construir un partido único por encima del Estado ni una ideología que pudiera ganarse a los sectores letrados. Al contrario, la ideología de izquierda siguió siendo la dominante en las universidades y en los medios culturales en general.

Las diferencias entre el régimen representativo, vigente entre 1945 y 1964, y el régimen militar son claras. En este último, no son los políticos profesionales los que están al mando y el Congreso no es una instancia decisiva importante. Quienes mandan son la alta cúpula militar, los órganos de información y represión, y la burocracia técnica del Estado.

El populismo dejó de utilizarse como un recurso de poder. Los grupos que habían tenido voz en el periodo anterior —la clase obrera organizada, los estudiantes y los campesinos— perdieron fuerza. Pero no se destrozó materialmente a los sindicatos, aunque se reprimió a muchos de sus dirigentes. El impuesto sindical siguió en pie, lo que aseguró la supervivencia y posterior expansión de los organismos sindicales.

El régimen no fue un simple instrumento de la clase dominante. Ésta se benefició —aunque con ventajas distintas para sus diversos sectores— de la política del Gobierno, pero durante muchos años no participó de la conducción de la política económica, que estaba en manos de los poderosos ministros de Hacienda y Planeación.

No todo cambió después de 1964 en el terreno de la política económica. Siguió en pie el principio de la fuerte presencia del Estado en la actividad económica y en la regulación de la economía. Este rasgo no se mantuvo siempre igual sino que fue

variando según el Gobierno: fue, por ejemplo, más típico de la administración de Geisel que de la de Castelo Branco. Pero, aunque no todo cambió, sí se transformaron muchas cosas. El modelo que se había esbozado en el periodo de Kubitschek se aplicó a gran escala. Los préstamos del extranjero y el fomento a la entrada de capital foráneo se convirtieron en elementos esenciales para el financiamiento y la promoción del desarrollo económico, privilegiando a las grandes empresas, ya fueran multinacionales o nacionales, públicas o privadas. De este modo el régimen militar rompió claramente con la práctica del gobierno de Goulart, basada en un esquema populista que incluía el fallido intento de promover el desarrollo autónomo apoyándose en la burguesía nacional.

La transición al régimen democrático no terminó con la elección de Tancredo Neves, y aún estaría sujeta a imprevistos. La toma de posesión del nuevo presidente, programada para el 15 de marzo de 1985, no tuvo lugar. Tras un viaje al extranjero, Tancredo fue internado de emergencia en un hospital de Brasilia, donde sufrió una primera y muy discutida cirugía. Políticos y amigos suyos estuvieron presentes en la sala de operaciones. En ese ínterin, Sarney subió la rampa del palacio del Planalto y tomó posesión en lugar del presidente electo, en lo que se creía sería una fase transitoria.

Entonces comenzó la agonía de Tancredo, que implicó su traslado a São Paulo y una serie de cirugías. El país estaba en suspenso, atento a los boletines médicos, que en ocasiones alimentaban un falso optimismo. Tancredo murió el 21 de abril, fecha simbólica por coincidir con el aniversario de la muerte de Tiradentes. Multitudes salieron a las calles para acompañar el cuerpo en su salida de São Paulo, en su paso por Brasilia y Belo Horizonte, hasta su sepelio en su ciudad natal. Las

manifestaciones se debían en parte a la conmoción causada por la muerte de un presidente, sobre todo en condiciones tan dolorosas. Pero también se tenía la sensación de que el país había perdido a una figura política importante en un momento delicado. Y esa sensación no carecía de fundamento. Tancredo tenía algunas cualidades raras en el mundo político: honestidad, equilibrio y coherencia. Estas virtudes se sobreponían a las preferencias ideológicas de derecha o de izquierda.

Para colmo, el sustituto de Tancredo era un oposicionista de último momento que no tenía autoridad en la Alianza Democrática. Sarney empezó a gobernar bajo la fuerte sombra de Tancredo Neves y ratificó al gabinete que éste había elegido. Desde el punto de vista político, las atenciones se centraban en dos puntos: la revocación de las leyes heredadas del régimen militar, que aún restringían las libertades democráticas (el llamado "lastre autoritario"), y la elección de una Asamblea Constituyente, que se encargaría de elaborar una nueva Constitución. Sarney respetó las libertades públicas, pero mateniendo algunos vínculos con el pasado. El SNI, por ejemplo, continuó en funciones y se le siguieron asignando recursos sustanciales.

En mayo de 1985 se restauraron legalmente las elecciones directas para la presidencia de la república y se aprobó el derecho al voto de los analfabetos, así como la legalización de todos los partidos políticos. Se volvieron legales el PCB y el PCdoB. Estos partidos se convirtieron en organizaciones minoritarias ante la crisis del estalinismo y el creciente prestigio del PT en los medios de izquierda.

Las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente se programaron para noviembre de 1986. En esa fecha se celebrarían elecciones para el Congreso y las gubernaturas de los

estados. Los diputados y senadores electos se encargarían de elaborar la nueva Constitución.

Cuando Sarney asumió el Gobierno, en 1985, el cuadro económico era menos grave que en los años previos. El gran impulso debido a las exportaciones había permitido reanudar el crecimiento. La caída en las importaciones y el aumento en las exportaciones dieron como resultado un saldo de la balanza comercial de 13 100 millones de dólares, el cual hacía posible pagar los intereses de la deuda. Además, Brasil había acumulado reservas que a finales de 1984 ascendían a 9 000 millones de dólares. Esto daba margen al Gobierno para negociar con los acreedores extranjeros y le permitía ahorrarse el inconveniente de acudir al FMI; con ello podía concentrarse en acuerdos directos con los bancos y acreedores privados. Pero el problema de la deuda externa e interna subsistía a largo plazo, lo mismo que el de la inflación, que alcanzó niveles extremos: 223.8% en 1984 y 235.5% en 1985.

El ministro de Hacienda, Francisco Dornelles —sobrino de Tancredo Neves—, adoptó una receta ortodoxa para combatir la inflación. Pero a finales de 1985 las presiones contra la política de austeridad en el gasto público y la disputa por cargos estratégicos en el Gobierno llevaron a la destitución de Dornelles. Su sustituto fue el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Dílson Funaro. Empresario paulista y exsecretario de Hacienda del Gobierno de São Paulo, Dílson tenía contacto con economistas ligados a las universidades y no era partidario de aplicar recetas que acabaran con la inflación por la vía recesiva. Cuando Dílson y el secretario de la Seplan, João Sayad, tomaron las riendas de la economía, el gobierno de Sarney se encontraba en una situación sumamente difícil. Las disputas entre partidos crecían; las acusaciones de favoritismo hacia amigos y grupos económicos se agravaban, y en

la población se había extendido la idea de que el presidente sólo actuaba cuando se trataba de favorecer intereses particulares.

Un grupo de economistas vinculados con la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ) había estado criticando la tesis de que la contención de las actividades económicas y la reducción del déficit del Estado resultarían necesariamente en una caída de la inflación. Como ejemplo de ello este grupo señalaba la recesión de 1981-1983, en que el país había retrocedido con un alto costo social sin que la inflación disminuyera significativamente. Este ejemplo contrastaba con el de países del mundo desarrollado en los que la recesión, pese a sus inconvenientes, era un arma eficaz en el combate a la inflación.

¿Por qué en Brasil no sucedía lo mismo? El argumento central era que en las economías indexadas, como la brasileña, la inflación pasada se incorporaba a la futura como "inflación inercial". De este modo se formaba un círculo vicioso del que no sería posible salir salvo rompiendo el mecanismo de la indexación. Esa ruptura sólo podría ser eficaz mediante una terapia de choque que acabara con la corrección monetaria y estableciera una nueva moneda fuerte, que sustituyera al desmoralizado cruzeiro. Esta propuesta —una terapia de choque a la que se dio mucha publicidad— se implementaría de tal modo que resultaría redituable a los intereses políticos de un Gobierno que buscaba restaurar su prestigio.

El 28 de febrero de 1986, a través de la red nacional de radio y televisión, Sarney anunció al país el Plan Cruzado: el cruzeiro sería remplazado por una nueva moneda fuerte —el cruzado— en una proporción de 1 000 a 1; la indexación terminaría; los precios y la tasa de cambio se congelarían indefinidamente y los alquileres por un año. El Gobierno no quería agravar la situación

de los trabajadores; incluso quería mejorarla. El salario mínimo se reajustó de acuerdo con el valor promedio de los últimos seis meses más un bono de 8%. Los reajustes posteriores serían automáticos, siempre que la inflación llegara a 20 por ciento.

Sarney invitó al pueblo a colaborar en la ejecución del plan y a declarar la guerra a muerte a la inflación. De la noche a la mañana el presidente adquirió un enorme prestigio. La congelación de los precios resonó muy positivamente en la población, que no podía seguir los complicados meandros de la economía y prefería creer en los actos de voluntad de un dirigente. Las medidas en el terreno salarial dieron cierta holgura a las capas más pobres. Un optimismo infinito se adueñó del país. El tránsito se volvió insoportable, pero, en compensación, mucha gente tomó cerveza a sus anchas por primera vez en la vida.

Pasado el primer golpe de entusiasmo, el Plan Cruzado empezó a hacer agua. Había arrancado en un momento de expansión de las actividades económicas y en muchos casos se había traducido en aumentos salariales reales. Como los precios estaban congelados, hubo una verdadera escalada de consumo. La gente compraba desde carne y leche hasta autos y viajes al extranjero. En consecuencia, el congelamiento empezó a infringirse. Otro problema serio fue el desequilibrio de las cuentas externas, provocado por un impulso a las importaciones debido a su vez al fortalecimiento artificial de la moneda brasileña.

Cuando en noviembre se celebraron elecciones, el Plan Cruzado ya había fracasado, pero esto aún no era perceptible para el gran público. Los candidatos del PMDB podían achacar a este o a aquel sector los problemas del plan. Pasadas las elecciones, el aumento de las tarifas públicas y de los impuestos indirectos, que se había venido postergando, hizo explotar la

inflación. La crisis de las cuentas externas llevó a Brasil a declarar una moratoria en febrero de 1987, que fue recibida con indiferencia tanto en el país como en el extranjero. A la euforia del Plan Cruzado siguió una atmósfera de decepción y desconfianza entre la población respecto al rumbo de la economía.

Las elecciones de noviembre de 1986 dejaron claro que el PMDB y el Gobierno aún gozaban de gran prestigio. En todos los estados, con excepción de Sergipe, fueron elegidos gobernadores del PMDB, que también conquistó la mayoría absoluta de los escaños de la Cámara de Diputados y del Senado. En aquel momento se llegó a decir que Brasil corría el riesgo de "mexicanizarse". El PMDB podría convertirse en una especie de Partido Revolucionario Institucional (PRI), que monopolizó el poder durante muchos años en México.

Las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente se iniciaron el 1º de febrero de 1987. La atención y las esperanzas del país se dirigieron a la Constitución que se estaba elaborando. Se tenía la expectativa de que ésta no sólo fijara los derechos de los ciudadanos y las instituciones nacionales básicas, sino que resolviera muchos problemas que estaban fuera de su alcance.

Los trabajos de la Constituyente fueron largos y concluyeron formalmente el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la nueva Constitución. El texto, que fue muy criticado desde que entró en vigor porque se metía en temas que técnicamente no eran de naturaleza constitucional, reflejaba las presiones de los distintos grupos de la sociedad. En un país donde las leyes valen poco, los distintos grupos trataron de plasmar la mayor cantidad posible de reglas en el texto constitucional para asegurar su cumplimiento.

La Constitución de 1988 reflejó los avances que había vivido el país en materia de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos en general y de las llamadas minorías, incluyendo a los indígenas. Incorporó también otras medidas innovadoras, como el *habeas data*, que asegura a las personas el derecho a acceder a la información de su interés resguardada en archivos de entidades gubernamentales, así como un código de protección al consumidor.

Al mismo tiempo, la Constitución consagró un cuadro que las nuevas realidades del mundo globalizado ya estaban dejando atrás, sobre todo en el terreno económico. Pronto quedó claro que el monopolio que se concedía al Estado en materia de petróleo, telecomunicaciones, electricidad, puertos y carreteras era un obstáculo para el abasto de bienes y servicios, y una carga que un Estado en crisis no podría soportar. Las varias enmiendas constitucionales que se aprobarían en un espacio de pocos años son clara prueba de ello.

Pese a lo anterior, la Constitución de 1988 puede verse como el marco que puso fin a los últimos vestigios formales del régimen autoritario. Al proceso de apertura que iniciara el general Geisel en 1974 le tomó más de 13 años desembocar en un régimen democrático.

La transición del régimen militar a la democracia se inserta en un contexto más amplio que abarcó a casi todos los países de América del Sur. Brasil tomó la delantera en comparación con sus vecinos más importantes. La dictadura argentina cayó bruscamente en 1983, a consecuencia de la desastrosa Guerra de las Malvinas. El régimen de Augusto Pinochet terminaría en 1987-1988. Como parecía posible que ocurrieran agudos conflictos sociales en esos países, en Brasil se les consideraba ejemplos a evitar. Tanto los promotores de la apertura dentro

del Gobierno como muchas figuras de la oposición hallaron su modelo de transición concertada no en los países de América Latina, sino en España.

Sin embargo, había más diferencias que semejanzas entre el escenario brasileño y el español. El grado de articulación de las agrupaciones sociales en España era mayor que en Brasil, y esto daba a sus dirigentes un mayor grado de representatividad. Esto ayudó a alcanzar ese gran acuerdo que fue el Pacto de la Moncloa, que trató de emularse sin éxito en Brasil. En cuanto a personajes políticos, Brasil no tuvo una figura como la del rey Juan Carlos, que, además de ser rey, había hecho una carrera en el Ejército y tenía un prestigio capaz de agrupar a varias fuerzas políticas y echar a andar la transición.

¿Por qué fue tan larga la transición brasileña y qué consecuencias tuvo la forma en que se llevó a cabo? La estrategia de la transición "lenta, gradual y segura" partió del propio Gobierno. Su ritmo y su amplitud sólo podrían haber sido distintos si la oposición hubiera tenido la fuerza suficiente o si el régimen autoritario hubiera colapsado por su propio desgaste. No fue el caso.

La transición brasileña tuvo la ventaja de no causar grandes convulsiones sociales. Pero también tuvo la desventaja de no poner sobre la mesa problemas que iban mucho más allá de garantizar derechos políticos a la población. No sería correcto decir que estos problemas nacieron con el régimen autoritario. La desigualdad de oportunidades, la ausencia de instituciones públicas confiables y abiertas a los ciudadanos, la corrupción y el clientelismo son males arraigados en Brasil. Ciertamente, estos males no se curarían de la noche a la mañana, pero se les podría haber hecho frente en el momento crucial de la transición.

El aparente consenso de casi todos los actores políticos a favor de la democracia facilitó la continuación de prácticas

contrarias a las de una democracia verdadera. Así, el fin del autoritarismo llevó al país más a una "situación democrática" que a un régimen democrático consolidado. Su consolidación fue una de las tareas centrales del Gobierno y de la sociedad en los años que siguieron a 1988.

Las primeras elecciones directas para la presidencia de la república desde 1960 se llevaron a cabo en 1989. Según la nueva Constitución, si un candidato obtenía más de 50% de los votos válidos en la primera vuelta, se le consideraría electo. De no ser así, los dos candidatos más votados contenderían en una segunda vuelta.

Esto último fue lo que ocurrió. Fernando Collor de Mello compitió con Luiz Inácio Lula da Silva. Lula hizo énfasis en el tema de la desigualdad social y apeló a los sectores populares organizados. Collor insistió en la necesidad de combatir la corrupción, modernizar el país y reducir el gasto público, centrándose en la crítica a los salarios demasiado elevados de algunos funcionarios públicos a los que apodaba "marajás".

Contendiendo prácticamente sin el apoyo de los partidos políticos, pero con espaldarazo de los medios de comunicación, especialmente de la poderosa TV Globo, Collor ganó con casi 36 millones de votos contra los 31 millones de Lula.

Estas elecciones dejaron ver dos cosas importantes. Brasil se estaba convirtiendo en una democracia de masas con aproximadamente 100 millones de electores; 85% de éstos fueron a las urnas, y ese porcentaje se mantendría en las elecciones posteriores. La elevada participación no se debió sólo al carácter obligatorio del voto para los electores de entre 18 y 70 años, sino también al gran valor simbólico que los ciudadanos brasileños atribuían al sufragio. El otro hecho significativo de las elecciones de 1989 fue la considerable cantidad de votos que obtuvo Lula, que se consolidó como líder popular.

Aunque el candidato vencedor tenía el apoyo de la élite por ser la alternativa a un candidato de izquierda, se le veía con reservas. Gobernador del pequeño estado de Alagoas, donde poseía una empresa de comunicaciones, Collor tenía escasos vínculos con los círculos financieros y con la gran industria del centro-sur del país.

Cuando tomó posesión, en marzo de 1990, la inflación había llegado a 80% y amenazaba con seguir escalando. Collor anunció un plan económico radical que bloqueó todas las cuentas bancarias existentes durante 18 meses; únicamente se permitían retiros de hasta 50 000 cruzeiros. El plan establecía también el congelamiento de los precios, recortes al gasto público y el aumento de algunos impuestos. Al mismo tiempo, Collor empezó a tomar medidas destinadas a modernizar el país, privatizando empresas estatales, posibilitando una mayor apertura al comercio exterior y reduciendo el número de funcionarios públicos, aunque sin ningún criterio cualitativo.

En poco tiempo, las acusaciones de una avasalladora corrupción gubernamental, basadas en denuncias que había presentado el propio hermano del presidente —Pedro Collor de Mello—, llevaron a la Cámara de Diputados a votar por la suspensión del mandato de Collor en septiembre de 1992, mientras el Senado evaluara una solicitud de *impeachment.* Las investigaciones, que todo el país siguió por la televisión, y la movilización de los jóvenes de clase media, que salieron a las calles a exigir el *impeachment*, presagiaban que Collor no volvería nunca a la presidencia. Seguro de la derrota, éste renunció al cargo en diciembre de 1992. Aun así, el Senado lo juzgó culpable de delitos de responsabilidad y suspendió sus derechos políticos por ocho años.

La caída de un presidente de la república por corrupción, en un país que no se caracteriza particularmente por lo escrupuloso

de sus negocios públicos ni privados, se explica por ciertas razones básicas. Por un lado, Collor se comportó de manera desastrosa en el curso de las investigaciones, minimizando los riesgos que corría. Esto hizo que perdiera apoyo en el Congreso, donde no contaba con la mayoría. Al mismo tiempo, la élite económica, con la que nunca había tenido buena relación, se fue alejando de él. Por otro lado, el inesperado ímpetu con que se movilizó la juventud de clase media —un indicador del rechazo a la gran corrupción de los círculos del poder— sensibilizó al Congreso y fue un elemento importante en la caída del presidente.

Asumió la presidencia de la república el vicepresidente Itamar Franco, antiguo opositor moderado del régimen militar y exsenador por el estado de Minas Gerais. El principal problema que tuvo que enfrentar fue la vuelta de la inflación debido al fracaso de las medidas tomadas por Collor. En enero de 1993, el primer mes del nuevo Gobierno, la inflación ya rondaba el 29%; para diciembre de ese año llegó a más de 36 por ciento.

En los primeros meses de 1994, el ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, empezó a tomar medidas preparatorias para un nuevo plan de estabilización económica. Tras implementar las primeras iniciativas, dejó el gabinete para contender por la presidencia de la república. Cardoso, un intelectual altamente respetado que había pasado con éxito de la vida académica a la vida política, aún era relativamente desconocido para el gran público cuando tomó la decisión de presentar su candidatura apoyándose en una alianza entre el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el PFL. El Plan Real se anunció en julio de 1994 y tenía claras diferencias en relación con los esquemas previos. No tomó a la población por sorpresa, como había sucedido en años recientes. El plan creó una nueva moneda —llamada real—, sobrevalorada respecto al

dólar. La iniciativa se vio facilitada por el saneamiento de la deuda externa y por el hecho de que Brasil había acumulado reservas de aproximadamente 40 000 millones de dólares. No se estableció una relación fija entre el real y el dólar, pues se preveía la oscilación de la moneda dentro de ciertos límites. El ejemplo de Argentina, donde la paridad había causado graves problemas de liquidez, evitó que Brasil repitiera esa fórmula.

El plan de estabilización no congeló los precios y se proponía desindexar gradualmente la economía. La operación del cambio de moneda —de cruzeiros reales a reales— no fue sólo simbólica. En unos cuantos meses toda la moneda del país se remplazó por el real, en una operación significativa tanto por su grado de organización como por su aceptación entre el público.

En las elecciones de octubre de 1994, Cardoso fue elegido presidente en la primera vuelta, con aproximadamente 54% de los votos válidos. Lula, que había vuelto a contender, quedó en segundo lugar. Este resultado se debió a varios factores, pero el Plan Real tuvo un papel decisivo. La oposición, sobre todo el PT, cometió un serio error de apreciación al insistir en que el Plan Real no era más que una "trampa electorera" que a corto plazo causaría una grave recesión. Aunque se presentó en un momento estratégico y facilitó la victoria de Cardoso en las elecciones presidenciales, el plan no se reducía a eso. En realidad, no hubo recesión y el poder adquisitivo de las grandes masas se incrementó gracias a la sensible caída de la inflación durante varios años seguidos.

---

[1] Banco Nacional de Habitação.

[2] Las agrovillas pretendían ser pequeños asentamientos urbanos con actividades agrícolas y pecuarias y formaron parte del proyecto de ocupación y explotación de la Amazonia durante parte del régimen militar (N. de la T.).

[3] Partido Democrático Trabalhista.

7. LA MODERNIZACIÓN POR LA VÍA DEMOCRÁTICA (1990-2010)

Sérgio Fausto

Introducción

En las últimas décadas, Brasil ha vivido muchos cambios. Desde el punto de vista político, en términos generales, el principal desafío ha sido hallar formas de compatibilizar las aspiraciones consignadas en la Constitución de 1988 con las exigencias que plantea la integración de Brasil a la economía global.

Brasil llegó a la década de 1990 como una de las economías más cerradas del mundo capitalista. Estructuralmente, el cierre de la economía era fruto del modelo de industrialización que se había forjado desde la década de 1950. La economía se había cerrado aún más a principios de la década de 1980, como una de las consecuencias de la llamada crisis de la deuda externa. La necesidad de generar crecientes superávits comerciales había llevado al último Gobierno militar a devaluar la moneda y a recrudecer el control administrativo sobre las importaciones.

El ajuste exterior se llevó a cabo con éxito, pero con un enorme costo económico y social. La economía prácticamente no creció a lo largo de la década de 1980. Bajo los efectos fiscales de la crisis de la deuda externa —la mayor parte de la deuda brasileña con acreedores extranjeros era pública— y de las devaluaciones del cambio, la inflación se aceleró, los mecanismos de indexación de la economía empezaron a operar a intervalos

cada vez más breves y con ello reforzaron el componente inercial de la inflación. Las tentativas de acabar con el proceso inflacionario a través de terapias de choque fracasaron y llevaron la inflación a niveles cada vez más altos. El temor de que a la vuelta de la esquina estuviera esperando un nuevo congelamiento de los precios hacía que estos últimos se ajustaran preventivamente. Así, el país llegó al borde de la hiperinflación.

En este proceso, crecieron la pobreza y la desigualdad social, pues los más pobres no contaban con ningún tipo de protección contra los efectos corrosivos de la inflación: ni salarios indexados, ni acceso a aplicaciones financieras indexadas. Esto hacía ganar a los bancos, a las grandes empresas y al Estado, porque la inflación corroía el valor de los gastos programados en el presupuesto público, mientras que la indexación de los impuesots protegía el ingreso.

Nada podía contradecir más que este cuadro las aspiraciones sociales consignadas en la Constitución de 1988. La inflación elevada, crónica y en aumento agravaba la pobreza y la desigualdad social e impedía que el Estado pusiera en práctica políticas públicas acordes con los dispositivos constitucionales. Por otro lado, varios de estos dispositivos, en particular los que se referían al orden económico, no ayudaban al país a salir de la crisis estructural en que se hallaba.

La Constitución de 1988, si bien fue progresista en el campo social, resultó ser anacrónica en lo referente a la organización y la regulación de la economía: reforzó y extendió los monopolios estatales y discriminó al capital extranjero. Además, se mostró inconsistente en el terreno fiscal, pues creó gastos sin la necesaria contrapartida en fuentes de ingreso. En este aspecto, la mayor carga recayó sobre la Unión, que se vio privada de fuentes de ingreso, transferidas parcial o totalmente a los estados y municipios, al tiempo que aumentaban sus

responsabilidades en el área de seguridad social, en especial en lo tocante a las pensiones.

Definitivamente, Brasil llegó a la década de 1990 en una posición desventajosa respecto a su trayectoria de crecimiento y el avance hacia una sociedad más justa. Al espectro de la regresión socioeconómica se sumaba el fantasma de la ingobernabilidad. Tras el periodo de Sarney y la breve gestión de Collor, que acabó en el *impeachment* del presidente, se tenía la sensación de que el sistema político brasileño era irremediablemente incapaz de producir Gobiernos estables y eficaces.

La historia de las dos décadas siguientes desmiente el pesimismo imperante en el país por aquellos años. De ese periodo se ocupa este capítulo.

El gobierno de Sarney: democratización e inflación descontrolada

El fin del gobierno del presidente José Sarney fue melancólico. El fracaso de los planes económicos y la moratoria del pago de los impuestos de la deuda externa llevaron a Brasil a una situación muy inestable, mientras se acumulaban denuncias de todo tipo contra el Gobierno. Entre los elementos positivos que dejó su periodo se cuentan el respeto a las reglas democráticas —que entonces no era poca cosa— y algunas decisiones a nivel internacional. La más importante de éstas fue la iniciativa conjunta de fortalecer los lazos políticos y económicos entre Brasil y Argentina, con el presidente Raúl Alfonsín.

Esta iniciativa puso fin a la sorda tensión que había predominado en las relaciones bilaterales durante décadas, si no es que durante siglos, y reforzó los regímenes democráticos recién establecidos en la región. Fue entonces cuando empezó a

nacer el Mercado Común del Sur (Mercosur), que se constituiría en Asunción, Paraguay, en marzo de 1991, con la adhesión de cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La aproximación entre Brasil y Argentina se tradujo también en un acuerdo en el que ambas naciones se comprometían a abandonar los objetivos bélicos de sus programas nucleares.

En el curso de los años que duró el gobierno de Sarney pesaron sobre la población problemas económicos y denuncias de privilegios en un ambiente que favoreció el surgimiento de la candidatura de Fernando Collor de Mello para las elecciones presidenciales de 1989. Collor se presentó como un héroe salvador, combatiente temerario contra la corrupción y los llamados "marajás", es decir, aquellos servidores públicos que gozaban de altos salarios. Collor asoció con estos rasgos populares un programa de reformas del Estado y de la economía que estaba influido por los vientos liberales que soplaban en el mundo en la segunda mitad de la década de 1980, sobre todo después del colapso del socialismo real en Europa del Este, previo al fin de la Unión Soviética. Estos vientos también soplaban en Brasil por la crisis del modelo nacionalista autárquico, cuyo síntoma más claro era el descontrol de la inflación.

La crisis política y el cambio económico: el breve gobierno de Fernando Collor

Collor, hijo de un exsenador de la república, pertenecía a la oligarquía de uno de los estados más rezagados y pobres de la federación, Alagoas, del que había sido gobernador en 1986. Era un *outsider* en lo que respecta a las élites económicas del centro-sur, aunque se había criado en la ciudad de Río de Janeiro y se

había casado en primeras nupcias con la heredera de uno de los mayores grupos empresariales del país. Sus principales adversarios en la primera vuelta de las elecciones fueron Leonel Brizola, heredero político de Vargas y miembro del Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués), y Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). Collor no gozaba del apoyo de las grandes coaliciones partidistas, de modo que se presentó como candidato de un partido modesto, el Partido de la Reconstrucción Nacional (PRN). Sin embargo, contó con la simpatía de TV Globo, que pertenecía al grupo de comunicaciones más importante de Brasil y que no veía con buenos ojos la posible victoria de Brizola o de Lula. Como candidato a la vicepresidencia, Collor eligió a Itamar Franco, un político sin relevancia nacional que en esa época era senador por Minas Gerais.

Ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta en la primera vuelta. La contienda se decidió en la segunda vuelta entre los dos primeros lugares: Collor y Lula. Explotando el temor de que Lula tomara medidas radicales, entre ellas la confiscación de las cuentas de ahorro de la población, Collor venció con aproximadamente 43% de los votos contra 38% que obtuvo Lula.

No bien asumió la presidencia, el 15 de marzo de 1990, Collor anunció un programa de estabilización monetaria que incluía una medida drástica: el bloqueo de todos los activos financieros existentes que sobrepasaran los 50 000 cruzados nuevos. La llamada confiscación fue la piedra angular del Plan Collor, que se presentó como una medida terapéutica extrema para curar una inflación que había llegado a 80% mensual y que amenazaba con seguir subiendo. Por la sorpresa y por sus alcances, esta medida traumó a la población brasileña durante años. Los recursos estuvieron bloqueados 18 meses y durante ese periodo

perdieron valor. Esta medida extrema, aunada al congelamiento de precios y salarios, a los recortes al gasto público y al aumento de algunos impuestos, no produjo los resultados esperados. A finales de 1990 ya estaba claro que la inflación volvía a tomar impulso. A principios del año siguiente el presidente sustituyó a su joven y heterodoxo equipo económico por otro, de línea ortodoxa. La adopción de una política de intereses elevados, contención de gastos y rechazo a nuevos impactos económicos evitó que la inflación explotara, pero no resultó ser capaz de romper con la inercia inflacionaria. La inflación se estabilizó a un nivel muy alto que giraba en torno a 20% mensual.

El gobierno de Collor fue una mezcla de aventuras políticas y rupturas fundamentales con el modelo de desarrollo que, con algunos cambios, se había mantenido desde las décadas de 1940 y 1950. Entre estas rupturas se cuentan la apertura comercial y la privatización de empresas estatales del sector industrial. Collor abolió de golpe muchos de los controles administrativos sobre el comercio exterior y estableció un cronograma de apertura comercial que reduciría el arancel promedio sobre las importaciones de más de 50% en 1990 a aproximadamente 15% en 1994. Las privatizaciones, hasta entonces limitadas a empresas de menor importancia, empezaron a tener lugar en sectores esenciales de la base industrial brasileña, como la industria siderúrgica y la petroquímica. Se hicieron cambios en la ley que creaba una reserva de mercado para los bienes de informática, aprobada en el gobierno de Sarney y considerada el máximo ejemplo del nacionalismo autárquico. De este modo, se acabó con la virtual imposibilidad de importar en ese sector.

La faceta reformista del gobierno de Collor explica por qué llegó a contar con figuras de peso en algunos de los puestos más altos de la administración, incluso a nivel ministerial, y a despertar entusiasmo en ciertos sectores de la élite, pese al

trauma que había causado su plan de estabilización. El Partido del Frente Liberal (PFL) se integró al Gobierno en el segundo año de la gestión de Collor, tras la salida del equipo responsable de la confiscación. Enseguida, el presidente se empeñó en obtener el apoyo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que estaba de acuerdo con las líneas generales del programa de apertura y desestatización de la economía.

El PSDB, creado en 1988 a partir de una escisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), bajo el liderazgo de Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra y Franco Montoro, había nacido como un partido de centro-izquierda (sus principales dirigentes, oriundos del estado de São Paulo, se habían destacado en la lucha contra la dictadura y contra el modelo de desarrollo concentrador del ingreso) con el propósito de representar una renovación en el campo progresista. Sin el arraigo del PT en el mundo sindical o en los movimientos sociales, el PSDB surgió como un partido de la clase media ilustrada, que fue bien acogido por el empresariado más moderno.

A mediados de 1992 salieron a la luz acusaciones sobre un esquema de corrupción en el gobierno de Collor, que trataba de consolidarse rápida y vorazmente, prevaleciendo sobre otros esquemas ya establecidos. Quien hizo las denuncias fue nada menos que el hermano menor del presidente en una entrevista concedida a una de las revistas más importantes del país. Las acusaciones afectaban directamente al tesorero de la campaña presidencial, Paulo César Farias, más conocido como PC Farias, e indirectamente al mandatario, a quien se señalaba como beneficiario final de las acciones del extesorero. Tras la caída de Collor, Farias fue asesinado en circunstancias que siguen sin aclararse.

Una comisión parlamentaria de investigación (CPI) empezó a hacer averiguaciones en la Cámara de Diputados. Al principio

estas averiguaciones fueron recibidas con desconfianza por los políticos y la opinión pública, pero pronto recabaron datos y entonces surgió un movimiento popular que exigía el *impeachment* de Collor. Se trataba, sobre todo, de un movimiento de jóvenes de clase media: los caras pintadas. Se les llamaba así porque cubrían sus rostros con colores, especialmente con el verde y el amarillo de la bandera nacional. Sin salida, Collor decidió renunciar a finales de 1992. Aun así, el Parlamento votó por el *impeachment* y suspendió sus derechos políticos por 18 años.

Si bien el proceder de Collor rompió muchas esperanzas, el episodio del *impeachment* mostró la estabilidad de las instituciones democráticas y la capacidad de presión de la sociedad civil, aunque sin la amplitud que había tenido años antes, en la campaña por las elecciones directas para la presidencia de la república.

El gobierno de Itamar Franco: de la crisis política al Plan Real

Una vez más, tal como había sucedido tras la muerte del presidente electo Trancredo Neves, en abril de 1985, un vicepresidente asumía el poder. Brasil sería gobernado por una figura provinciana, de temperamento inestable y con propensiones nacionalistas. El Gobierno agrupó a varios partidos, con el PMDB y el PSDB en las posiciones más destacadas. El PT se negó a apoyarlo y permaneció en la oposición, adonde también se desplazó el PFL, que se había mantenido fiel a Collor hasta el fin.

Contra toda expectativa, el gobierno de Itamar Franco no interrumpió el programa de privatizaciones: la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), símbolo de la industrialización bajo el control del Estado, se privatizó en 1993. Una marca de este

Gobierno fue el Plan Real, que quedó a cargo de Fernando Henrique Cardoso, quien, tras algunos meses como ministro de Relaciones Exteriores del presidente Itamar Franco, en mayo de ese año fue nombrado ministro de Hacienda.

La posibilidad de llevar a poner en práctica un plan de estabilización exitoso con un Gobierno que en poco más de siete meses ya había cambiado tres veces de ministro de Hacienda se veía con enorme escepticismo. El presidente daba pruebas de su personalidad voluble. Para colmo, el Gobierno no contaba con una mayoría sólida en el Congreso. Éste, por si fuera poco, estaba hundido en una crisis luego de que se descubrió un esquema de corrupción en la comisión encargada de elaborar el presupuesto federal.

La desconfianza no era sólo interna. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también veía con escepticismo las posibilidades de estabilizar la economía brasileña en aquellas circunstancias, no obstante la exitosa renegociación de la deuda externa del país, un proceso que había durado más de 10 años y había concluido pocos meses antes del lanzamiento de la nueva moneda.

En 1993, la inflación anual llegó casi a 2 000%, acelerándose en el segundo semestre. Así, aumentó la presión para que el ministro de Hacienda actuara. Pero Cardoso se negó a adoptar un plan de choque. Ya se había recurrido a seis planes de este tipo, sin éxito, desde el Plan Cruzado: un promedio de casi uno al año. Cardoso concluyó que la única manera de recuperar la confianza en el Gobierno y alcanzar un éxito duradero en el combate a la inflación sería formular un programa de estabilización que la población pudiera conocer de antemano y que no operara tanto a través de medidas obligatorias, sino mediante mecanismos voluntarios de adhesión.

El ministro de Hacienda reunió un equipo encabezado por economistas que habían participado en el Plan Cruzado y reflexionado sobre las causas de su fracaso. Además de congregar a ese equipo, respetado dentro y fuera del país, el papel de Cardoso fue central en cuanto a la obtención del apoyo político necesario para llevar a cabo el Plan Real, no sólo en el Congreso y en la sociedad, sino también dentro del propio Ejecutivo. Entre los principales integrantes del Gobierno, no faltaban quienes preferían reeditar un plan que siguiera el modelo del Plan Cruzado.

La unidad real de valor (URV), oficializada el 28 de febrero de 1994, fue el instrumento que permitió bajar la inflación sin tener que congelar salarios y precios. Éstos empezaron a contabilizarse en URV, aunque se seguían pagando en cruzeiros, de acuerdo con una tasa de conversión que variaba a diario. La conversión de los salarios, obligatoria, se efectuó de acuerdo con el promedio de los cuatro meses previos. La conversión de los precios, por su parte, fue gradual y voluntaria, y se dio a través de la negociación entre los agentes económicos, con la mediación del Gobierno cuando hacía falta. Durante cuatro meses, la nueva moneda, en estado embrionario, conviviría con la vieja, que estaba por extinguirse. La URV era una referencia estable de valor, al tiempo que el cruzeiro se iba carcomiendo, día con día, por efecto de la inflación.

De este modo se preparó el terreno para que la nueva moneda saliera a la luz sin necesidad de nuevos congelamientos. Con ello se evitó reutilizar una herramienta a la que habían recurrido los planes anteriores y que había perdido credibilidad debido a su ineficacia en el combate a la inflación, a los desórdenes que causó en la economía y a las numerosas acciones que se presentaron contra el Gobierno ante el Poder Judicial.

Antes de lanzar la URV, el Gobierno había logrado que se aprobara en el Congreso un ajuste fiscal de emergencia. Este ajuste incluía la creación de un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, el Impuesto Provisional sobre Movimientos Financieros (IPMF), así como una ley que libraba al Gobierno de la obligación de gastar 20% de lo recaudado en gastos previamente definidos por la Constitución. Este mecanismo de desvinculación de ingresos recibió el nombre de Fondo Social de Emergencia (FSE) y, al igual que el IPMF, habría de prorrogarse en los años sucesivos, aunque bajo otros nombres. Cardoso recurrió a todo su peso político para que se aprobara el FSE y logró sumar el apoyo del PFL, que estaba en la oposición. Allí empezó a nacer la alianza que sostendría su candidatura a la presidencia.

El aumento de los ingresos y su desvinculación parcial del gasto obligatorio eran esenciales para que el Gobierno compensara los efectos negativos de la caída de la inflación sobre las cuentas públicas. Ésta era otra de las lecciones que había dejado el fracaso del Plan Cruzado. Se trataba, de cualquier modo, de un ajuste fiscal mínimo, de emergencia. Hacer frente a las causas estructurales del déficit público sería uno de los grandes desafíos que el futuro gobierno de Cardoso tendría que encarar.

La adhesión a la URV fue masiva. Así, en mayo el Gobierno pudo anunciar que el siguiente 1º de julio concluiría el cambio del cruzeiro al real, la nueva moneda, de acuerdo con la tasa de conversión de cruzeiros a URV de ese día. La ingeniosa convergencia de precios y salarios en una unidad estable de valor que no era el dólar, pero que estaba vinculada con la tasa de cambio, dio lugar a una caída abrupta de la inflación. Para el éxito del real fue esencial que la economía hubiera empezado a abrirse con anterioridad. Este programa de estabilización, sin

sustos ni sorpresas, restableció la confianza en el Gobierno y produjo dividendos políticos para su principal dirigente.

Para las elecciones del 3 de octubre de 1994, Cardoso se presentó como candidato en compañía del senador Marco Maciel. Esta planilla sellaba la alianza entre el PSDB y el PFL, la cual le valió críticas a Cardoso, incluso por parte de algunos de sus militantes o simpatizantes. Los orígenes del PFL se remontaban a la dictadura militar y se le veía como representante de viejas prácticas *coronelistas*. No obstante, prevaleció la apreciación que se tenía en la dirigencia del PSDB, empezando por su candidato a la presidencia de la república. Para Cardoso, la alianza con el PFL era esencial, si no para ganar la elección, sí para llevar a cabo las reformas estructurales que pretendía emprender. El PFL era partidario de una economía más abierta hacia el exterior, con una participación reducida del Estado en el sector productivo.

Por su parte, el PT volvió a presentar como candidato a Luiz Inácio Lula da Silva. Una vez más, su compañero de planilla venía de los partidos de izquierda. En esta ocasión se trataba de Leonel Brizola. El partido optó por oponerse por completo al Plan Real. Convocó con ese fin al movimiento sindical vinculado con el partido y denunció el plan como una estafa electoral. El PT y su candidato pagaron caro esta posición. Lula, que había sido puntero en las encuestas hasta junio, fue superado por Cardoso poco después del lanzamiento de la nueva moneda y perdió las elecciones en la primera vuelta.

Con la inflación a la baja y el ingreso de los más pobres al alza, Cardoso ganó las elecciones en la primera vuelta con alrededor de 54% del total de votos. Lula obtuvo 27.04%, pese a haber sido inicialmente el favorito. La presidencia de Cardoso abarcaría dos mandatos, es decir, ocho años consecutivos. En las elecciones de octubre de 1998 volvería a vencer por mayoría

absoluta (poco más de 53% de los votos válidos); derrotó a Lula una vez más en la primera vuelta.

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso: estabilización económica y reformas estructurales

La coalición de partidos que llevó a Cardoso a la presidencia no bastaba para asegurar al Gobierno la mayoría que necesitaba para emprender la agenda de reformas que el candidato había prometido en su programa de campaña. Muchas de ellas implicaban enmiendas constitucionales, de modo que no podrían concretarse sin los votos de dos terceras partes de los diputados y de los senadores. Así, al PSDB, al PFL y al Partido Laborista Brasileño (PTB), que formaban la coalición electoral, se sumaron el PMDB y, posteriormente, el Partido Progresista (PP) —un partido pequeño que, como el PFL, se remontaba a la Alianza Renovadora Nacional (Arena), agremiación partidista que había sostenido a la dictadura militar—.

Todos los partidos de esta coalición heterogénea obtuvieron puestos ministeriales, aunque al PSDB —sobre todo a personas de la confianza del presidente— le correspondió la mayor parte de los cargos del más alto nivel. Se procuró blindar el área económica contra las presiones políticas. Los miembros del equipo que había formulado el Plan Real ocuparon los principales puestos en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central (BC), que adquirió autonomía *de facto*, pero no *de iure*.

La agenda no se limitaba a cambios en la esfera económica. El nuevo Gobierno también se proponía hacer reformas en el terreno social para dar una consecuencia práctica a los derechos asegurados en la Constitución Ciudadana, como la llamó Ulysses

Guimarães. Así, al lado del programa liberal, había otro con una orientación socialdemócrata.

No se trataba de agendas incompatibles: eso lo había dejado claro desde la década de 1980 el ejemplo de países europeos como España y Francia. De hecho, el liberalismo del programa del nuevo Gobierno era blando y se limitaba a las formas de participación del Estado en la economía, pero no implicaba una reorganización (ni una reducción) de los servicios sociales que prestaba el Estado, cosa que ocurrió en Inglaterra durante los gobiernos de Margaret Thatcher. En Brasil, según el nuevo Gobierno, de lo que se trataba era de reducir el peso de la inversión directa del Estado en la economía para fortalecer su capacidad de acción en el terreno social. Las nuevas funciones económicas del Estado causaron más divergencias entre los llamados desarrollistas, que defendían el avance de sectores considerados estratégicos para el desarrollo, y los liberales, que se inclinaban por políticas que redujeran los costos y mejoraran la eficiencia económica en general. Ideológicamente, los primeros se afiliaban a la tradición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), muy influyente en la región, sobre todo durante las décadas de 1960 y 1970, y con la que el propio Cardoso había estado estrechamente asociado. Sin romper con la tradición de la CEPAL, el presidente se había ido acercando progresivamente a los economistas liberales agrupados en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ), que a partir de la década de 1980 había sido el centro del pensamiento más innovador sobre la inflación brasileña y los medios de combatirla.

Aunque no eran incompatibles, las agendas liberal y socialdemócrata tampoco encajaban a la perfección. Como lo mejor para una no siempre era lo mejor para la otra, al menos a corto plazo, las dificultades eran reales. En las difíciles

condiciones de la estabilización económica, por ejemplo, para llevar a cabo la agenda socialdemócrata sería necesario elevar de manera pronunciada la carga tributaria, y eso golpearía a la inversión privada. No siempre fue posible compatibilizar las dos agendas, y esta dificultad fue un factor de tensión dentro del Gobierno y del partido mismo del presidente. Por lo general, desarrollistas y socialdemócratas se empalmaban políticamente, distinguiéndose de los liberales.

Además de la dificultad real para compatibilizar estas dos agendas, el Gobierno enfrentaba una dificultad simbólica, pues en la tradición política brasileña se sospechaba que el liberalismo era insensible a las penurias sociales del país y se le asociaba con los intereses de los grandes grupos extranjeros. La oposición habría de explotar intensamente este elemento ideológico. Para todo fin, trató de pintar a Cardoso como el presidente de un Gobierno neoliberal, rehén de la lógica económica que el Consenso de Washington imponía al país desde fuera.

Contra esta interpretación se lanzó el propio Cardoso, quien contraargumentaba que había una izquierda moderna y otra arcaica. Para la primera no era posible, ni deseable siquiera, rechazar la economía de mercado, pues había quedado demostrado que esta última era superior a la economía socialista. Cardoso sostenía que la globalización era un hecho ineludible: se trataba de globalizar o de ser globalizado; Brasil debía inspirarse en el ejemplo de países como España, que, bajo el liderazgo del primer ministro Felipe González, había integrado su economía a Europa y al mundo, había consolidado la democracia y, al mismo tiempo, se había convertido en una sociedad próspera y más justa. Por su parte, la izquierda arcaica, con el colapso de la utopía revolucionaria, se aferraba, según el

presidente, a formas ya superadas de nacionalismo y a la nostalgia del Estado como líder de la nación.

La oposición opinaba que Cardoso se había embarcado en la oleada neoliberal que se había extendido por todo el mundo a partir de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra y cobrado fuerza con la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Según la oposición, el presidente había abandonado el campo de la izquierda para realizar el programa de la nueva derecha brasileña, que, en el terreno político, se valía de las viejas prácticas del clientelismo y, en el económico, veía en las privatizaciones y en la internacionalización de la economía las vías más promisorias hacia una nueva fase de acumulación.

El fin de la era Vargas

La presencia de varios partidos en el gabinete no aseguraba al Gobierno una vida tranquila en el Congreso. El principal reto era obtener el apoyo en bloque de los parlamentarios del PMDB, el mayor partido en el Senado y el segundo mayor en la Cámara. En la votación de enmiendas constitucionales, 30% de los diputados, en promedio, votaría contra el Gobierno. También le dificultaba la vida a éste el hecho de que el rito legislativo fuera especialmente complejo en el caso de las enmiendas constitucionales.

Aunque eran francamente minoritarios en el Congreso, el PT y las agremiaciones menores de izquierda movilizaron una aguerrida oposición al Gobierno valiéndose de todos los instrumentos legalmente disponibles. Para llevar a cabo su guerra de desgaste contra el Gobierno, el PT contaba, además, con simpatizantes en el Ministerio Público (MP).

La batalla de las privatizaciones

A pesar de todo, en 1995 el Gobierno aprobó sin mayores problemas las enmiendas constitucionales de índole económica y otras leyes vinculadas con ellas, con las que se puso fin a los monopolios de las empresas estatales y se abrieron en consecuencia varios sectores de la infraestructura al capital privado bajo un régimen de concesiones (telecomunicaciones, petróleo y gas, electricidad, puertos, etc.). Se acabó también con la diferencia en el trato que la Constitución daba a las empresas brasileñas de capital nacional y a las de capital extranjero.

La aprobación relativamente serena de las enmiendas de índole económica prueba que en la opinión pública había cierto consenso sobre la necesidad de actualizar el Estado y la economía del país a la luz de lo que estaba sucediendo en el mundo desarrollado. La enmienda que más resistencia encontró fue la que flexibilizaba el monopolio estatal en los sectores del petróleo y el gas. En los primeros meses de la gestión de Cardoso estalló una huelga de petroleros: los obreros ocuparon las refinerías de la estatal de Petróleo Brasileño (Petrobras). Temiendo que la victoria de ese movimiento fomentara otras huelgas en el sector público que exigieran aumentos salariales y se opusieran a las reformas, el Gobierno no cedió. Luego de que la Justicia del Trabajo decretara que la huelga era ilegal, el presidente mandó al Ejército a desocupar las instalaciones de la empresa. Debido a la estrecha relación entre la Federación Nacional de Petroleros (FNP) y la Central Única de Trabajadores (CUT), central sindical ligada al PT, el fin de esa huelga se consideró una victoria política del Gobierno. En el Congreso, la aprobación de la enmienda referente al petróleo exigió que Cardoso enviara una carta a los senadores asegurando que no pretendía privatizar Petrobras.

Aprobadas las enmiendas constitucionales y la legislación complementaria correspondiente, empezó la privatización de empresas estatales y la concesión de servicios al sector privado en las áreas afectadas por las modificaciones que se hicieron a la Constitución. Los partidos y movimientos nacionalistas y de izquierda, incapaces de movilizar cantidades importantes de manifestantes para oponerse a las privatizaciones, se enfrascaron en una verdadera serie de batallas judiciales contra las subastas de empresas estatales. En el caso de la estatal Telecomunicaciones Brasileñas (Telebras), que se privatizó en junio de 1998, las organizaciones sindicales vinculadas con los partidos de oposición presentaron 140 acciones judiciales con la finalidad de suspender la privatización. Ya antes, el PT había protocolizado en el Supremo Tribunal Federal (STF) dos acciones directas de inconstitucionalidad (ADIS) contra la privatización. Telebras se vendió por más de 22 000 millones de reales, un valor 60% superior al precio mínimo fijado. A pesar de ello, las oposiciones acusaron al Gobierno de haber malbaratado la estatal y cuestionaron el precio mínimo fijado para la subasta.

El año anterior se había presentado un debate semejante, cuando se privatizó la Compañía Vale do Rio Doce (CVRD), gran empresa minera nacional, uno de los iconos del impulso industrializador que tuvo lugar en Brasil a partir de la década de 1940. La lucha contra la venta de la compañía al sector privado agrupó fuerzas que iban desde los partidos de izquierda hasta la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB, por sus siglas en portugués),[1] un órgano de la cúpula de la Iglesia católica brasileña, pasando por varios abogados de renombre que trataron de bloquear el proceso por la vía judicial.

El siguiente argumento resume las críticas que se hacían a la venta de la CVRD: la compañía era mucho más que una empresa minera; era un instrumento para el desarrollo científico y

económico nacional, y un factor de poder para Brasil en el mundo. Por ello, debía seguir en manos del Estado. Para el Gobierno, en cambio, la soberanía nacional no estaba en juego, la minería ya no era una actividad estratégica y el control sobre los recursos naturales del subsuelo brasileño estaba asegurado por las leyes del país, a las que tendrían que someterse los grupos privados que controlaran la CVRD en el futuro, ya fueran nacionales o extranjeros. Bajo control privado —argumentaba el Gobierno—, la compañía estaría en mejores condiciones de competir con otras gigantes globales, y el Estado recibiría más por concepto de impuestos de lo que obtenía en dividendos cuando la empresa estaba bajo su custodia.

En mayo de 1997, la CVRD se remató a favor de un consorcio dirigido por un grupo nacional, el mismo que había adquirido el mando de la CSN, privatizada en 1993. Formaban parte de este consorcio el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y fondos de pensión de empresas estatales, que, junto con una gran institución financiera privada nacional y un grupo siderúrgico japonés, asumieron el control de la compañía algunos años más tarde. La CVRD no fue la única que adoptó este modelo de composición societaria. En realidad, los fondos de pensión de las empresas estatales obtuvieron posiciones relevantes en muchas empresas privatizadas. El capital extranjero respondió por aproximadamente la mitad de los 87 000 millones de dólares percibidos por la venta de empresas estatales en el periodo de 1991 a 2002. Grandes grupos privados nacionales se fortalecieron y ganaron la musculatura necesaria para internacionalizarse en los años siguientes.

A la luz de la posterior trayectoria de la CVRD, cuyo desempeño mejoró extraordinariamente y bajo todos los criterios tras la privatización, el debate que tuvo lugar en ese entonces parece irracional. Lo mismo puede decirse del ataque

contra la privatización del sistema Telebras si se tiene en cuenta la innegable expansión y la modernización de los servicios de telefonía que se verificaron una vez que la empresa se transfirió al sector privado.

Una de las aparentes paradojas de la política brasileña de las dos últimas décadas es la distancia que hay entre los resultados casi siempre positivos del proceso de privatizaciones y la percepción mayoritariamente negativa que la población brasileña tiene de ellas. Esto puede explicarse en parte porque el intento de privatizar el sector eléctrico resultó en un fracaso asociado con el racionamiento de la electricidad en 2001. El episodio se conoce como el Apagón de Cardoso, y fue uno de los peores reveses políticos de su gobierno.

Hay que considerar también que los opositores de las privatizaciones promovieron la sospecha de que, en este proceso, el Gobierno favorecía a grupos privados. Tuvo especial repercusión la supuesta colusión entre los dos principales responsables directos de las subastas del sistema Telebras, que tenían la intención de formar un consorcio encabezado por el Banco Opportunity de Inversión, al que se había asociado uno de los formuladores del Plan Real. El caso adquirió tintes de escándalo político a finales de 1998, cuando salieron a la luz unas grabaciones ilegales. Finalmente, el sistema de justicia declaró inocentes a los acusados. Prevaleció la teoría de que habían procedido así con el fin de incrementar la competencia en la subasta de una de las empresas del sistema Telebras para que se vendiera a un mejor precio. Pero el daño político a la imagen del Gobierno y del proceso de privatizaciones estaba hecho.

Las batallas en el Congreso

Más difíciles que las enmiendas de índole económica fueron las relativas a la reforma de la administración pública y el sistema de pensiones. Sólo fue posible aprobarlas a finales de 1998, luego de muchas idas y venidas y bajo la presión de una crisis internacional que amenazaba con destruir la estabilidad monetaria que se había alcanzado con el real. La reforma tributaria, por su parte, pese al consenso genérico en relación con la necesidad de racionalizar el sistema y aliviar la carga de impuestos sobre las exportaciones y la inversión, no progresó en el Congreso por las pugnas entre la Unión, los estados y los municipios en torno a la forma en que se repartiría el eventual pastel tributario.

Otro terreno donde las reformas se mostraron inviables fue el de la legislación laboral, cuyos orígenes se remontaban al Estado Novo, a finales de la década de 1930. Al Gobierno le parecía conveniente dar mayor lugar a la negociación directa entre patrones y empleados, de modo que algunas reglas de la legislación general pudieran adaptarse a situaciones específicas en una economía que se diversificaba. Con este fin, envió al Congreso un proyecto de ley que, aunque reservaba a los sindicatos el poder de veto sobre los acuerdos negociados y aseguraba los derechos sociales previstos en la Constitución, se encontró con la resistencia del movimiento sindical, en especial de la CUT, y no prosperó.

La reforma del sistema de pensiones y la reforma administrativa también enfrentaron la resistencia organizada de los sindicatos, en particular de los servidores públicos, que se habían convertido en la principal base de apoyo de la CUT. Además de la oposición organizada, los mismos legisladores se resistían a apoyar unas reformas que podrían costarles el voto de los servidores públicos y de sus familiares, un contingente electoral significativo, sobre todo en los municipios más

pequeños de los estados menos desarrollados, que estaban sobrerrepresentados en el Congreso. La población en general también veía con temor las reformas que modificarían el régimen del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), responsable de la jubilación de los trabajadores del sector privado. El Gobierno abogaba por la adopción de edades mínimas para contener la tendencia al alza en los déficits del INSS y reducir los gastos que implicaban los ya significativos déficits por los regímenes especiales de los servidores públicos. Quienes se oponían a la reforma sostenían que lo que el Gobierno quería era eliminar derechos adquiridos y favorecer a las instituciones financieras que tenían interés en ampliar el mercado de la previsión social complementaria privada. Junto con las privatizaciones, la reforma de la seguridad social fue uno de los principales blancos de la oposición durante el gobierno de Cardoso.

Luego de mucho desgaste y derrotas parciales en el Congreso, el Gobierno logró aprobar medidas importantes, aunque insuficientes, para controlar el ritmo al que crecían los déficits de la seguridad social y eliminar algunos de los privilegios presentes en el sector público. En cuanto a la reforma administrativa, lo poco que quedó de ella luego de su trámite por el Congreso fue bloqueado más tarde por el Poder Judicial debido a la acción de los partidos de oposición y los sindicatos de servidores públicos. En su propuesta original, esta reforma pretendía modernizar las formas de organización y gestión del sector público, así como distinguir entre las carreras típicas del Estado y los empleos públicos que no requerían un régimen de estabilidad. De entre sus planteamientos centrales sólo sobrevivió una norma que fijaba un porcentaje máximo de gastos por concepto de pago a personal y que habría de aprovecharse en la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2000.

Entre las idas y vueltas que hubo que dar para que se aprobaran las reformas de seguridad social y administración pública, se discutió un cambio constitucional más. José Mendonça Filho, diputado del PFL de Pernambuco y miembro de la base aliada del Gobierno, presentó en 1995 una enmienda que permitiría la reelección de alcaldes, gobernadores y del presidente de la república. En la revisión constitucional que se había llevado a cabo a finales de 1993 se había aprobado que el periodo presidencial se acortara de cinco a cuatro años. No obstante, en ese momento no se había examinado la cuestión de la reelección por temor a la candidatura de Lula, que entonces era el candidato puntero en las encuestas para las elecciones de octubre de 1994. El tema volvió a la agenda política a principios de 1996.

Cardoso dejó que la iniciativa prosperara. El presidente enfrentaba resistencia en el Congreso para la aprobación de las reformas y presiones para que se sancionara una CPI sobre el Programa de Estímulo a la Reestructuración y Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional (Proer), del que se hablará más adelante. Consideraba que la simple posibilidad de que se aceptara la enmienda de la reelección le evitaría perder poder, como sucede a todos los presidentes, en mayor o menor grado, conforme se acerca el fin de su mandato. Las oposiciones de derecha e izquierda veían en la posibilidad de la reelección una maniobra continuista que perjudicaría las candidaturas de Paulo Maluf y Lula, respectivamente.

A principios de 1997 la enmienda de la reelección se aprobó por un amplio margen en la Cámara de Diputados y, algunos meses después, en el Senado. Ese mismo año se denunció en la prensa que se habían comprado votos para que se autorizara la reelección en la Cámara. La acusación de que el Gobierno había patrocinado la compra de algunos diputados del pequeño estado

de Acre no presentó pruebas suficientes. Pero el escándalo, como lo llamó la oposición en general y el PT en particular, fue uno de los ingredientes del desgaste político que afectó a la segunda gestión de Cardoso como presidente.

En esta segunda etapa las reformas perdieron ímpetu. Al desgaste sufrido en los cuatro años previos se sumó la pérdida de popularidad del Gobierno tras la devaluación del real, en enero de 1999, que tuvo lugar un mes después de la toma de posesión de Cardoso para un segundo mandato de cuatro años. El PT trató de emprender una nacional para exigir la dimisión del presidente. Con el eslogan "Fuera FHC", esta campaña se abortó por un solo voto dentro de la dirección del partido. El nuevo mandato, alegaba el PT, no era legítimo porque el presidente había dado un giro en su política cambiaria meses después de su victoria. A este cuadro se sumaba el creciente desgaste dentro de la propia base de apoyo del Gobierno: había fricciones entre los líderes del PFL y los del PMDB. En 2001, el PFL se alejó de la base gobiernista. Empezaba a vislumbrarse el camino que llevaría a Lula a la presidencia en octubre de 2002.

La sinuosa vía a la estabilización

El gobierno de Cardoso empezó con la expectativa de que la estabilidad económica, una vez consolidada, acelerara el crecimiento económico. Pero esa expectativa se vio frustrada en gran medida. Aunque las reformas que se aprobaron resultaron fundamentales para dar solidez fiscal y financiera a la economía, haciéndola más eficiente, sus efectos sobre el crecimiento económico fueron poco relevantes. En el periodo que va de 1995 a 2002, el producto interno bruto (PIB) creció un 2.4% en promedio al año, más que durante el periodo que va de la crisis de la deuda externa (1982) a la adopción del Plan Real (1994),

pero menos de lo necesario para que el mercado laboral absorbiera a un contingente cada vez más numeroso de personas en busca de empleo.

El magro desempeño del PIB se debió a las crisis internacionales que golpearon a la economía brasileña cada vez con más fuerza: la de México en 1995 —y el llamado efecto tequila—, la de Asia en 1997 y la de Rusia en 1998. Todas nacieron en países específicos y se expandieron por la vía de los mercados financieros globalmente interconectados. El contagio alcanzaba a aquellas naciones que, a los ojos de los inversionistas, presentaban problemas semejantes o se veían afectadas por sus relaciones económicas con el Estado en el que surgía el desequilibrio.

Las crisis internacionales afectaron crecientemente a Brasil no sólo porque fueron cada vez más graves, sino porque la economía brasileña se volvió más vulnerable a los impactos externos entre 1995 y 1998.

El debate sobre la política económica

Durante los primeros seis meses del Plan Real, la valorización de la moneda brasileña, que llegó a valer más que el dólar, fue útil para hacer caer la inflación e imprimirle una tendencia a la baja. Pero ya desde el principio del gobierno de Cardoso, el presidente mismo y parte de su equipo económico se convencieron de que las consecuencias negativas de la valorización excesiva del real ya no compensaban sus beneficios inmediatos. El punto más sensible era la balanza comercial, que había pasado rápidamente de un resultado positivo a un saldo negativo, lo cual indicaba una tendencia al deterioro progresivo de la cuenta corriente (además de la balanza comercial, la

cuenta corriente incluye la balanza de servicios, tradicionalmente deficitaria en el caso de Brasil).

Para fomentar las exportaciones y frenar las importaciones, en marzo de 1995 se trató de corregir a toda prisa la valorización del cambio. Pero el intento fracasó. El mundo aún estaba bajo el efecto tequila y la nueva política cambiaria anunciada por el Gobierno provocó una fuga masiva de capitales. Estancada la sangría, se llevó a cabo una pequeña devaluación y se decidió devaluar gradualmente la tasa de cambio. El BC empezó a operar con un sistema de bandas, limitando el rango de la variación de la tasa de cambio. Pero el cambio no era fijo. Se devaluaría aproximadamente 20% en los cuatro años siguientes.

Aun tras el fracasado intento de corregir con rapidez el rezago cambiario, ese tema siguió suscitando diferencias dentro y fuera del Gobierno, al menos hasta mediados de 1996, cuando el ministro de Planeación y Presupuesto, José Serra, dejó su cargo para presentarse como candidato a la alcaldía del municipio de São Paulo. Serra señalaba el daño que el dólar barato podía ocasionar a la industria y las exportaciones.

Fuera del Gobierno, la crítica a la política cambiaria emanaba principalmente del empresariado del estado de São Paulo, cuna de la industrialización a partir de los años 1950. De acuerdo con los críticos, la estrategia gradualista no sería suficiente para resolver el "pecado original" del plan de estabilización. La evolución en los resultados de la balanza comercial reforzaba este punto de vista. De un superávit de 10 500 millones de dólares en 1994, el saldo se había vuelto negativo, con 3 500 millones de dólares en 1995 y 5 600 millones en 1996.

No obstante, lo que prevaleció fue el gradualismo defendido por el BC y por el Ministerio de Hacienda, que había quedado a cargo de Pedro Malan. Aunque la balanza comercial se mantenía

en negativo y el déficit en la cuenta corriente se incrementaba, también es cierto que crecía la inversión extranjera en activos productivos. De esta manera, el déficit en la cuenta corriente se cubría con capital de buena calidad. Donde los críticos de la política cambiaria veían una bomba de efecto retardado, sus defensores percibían un proceso sostenible de absorción del ahorro externo a favor del desarrollo del país. Desde este punto de vista, el aumento de las importaciones no era una amenaza, sino un vector de modernización del sistema productivo. Las empresas, que antes estaban cómodas, en un ambiente protegido, se sentían obligadas a competir en el mercado interno con productos importados. Los aranceles de importación reducidos y el dólar barato permitían la importación de maquinaria y equipos para hacer frente a la nueva situación. Se trataba del medio más rápido para que el país superara el atraso tecnológico que había acumulado a lo largo de décadas de economía cerrada. El momentáneo desequilibrio externo no se resolvería manipulando artificialmente el tipo de cambio, como en el pasado, sino mejorando la eficiencia y la productividad de las empresas ya instaladas y por instalarse en Brasil.

Aunque en líneas generales compartía esta visión, el presidente aprobó una propuesta de su ministro de Planeación y Presupuesto que iba en sentido contrario. Ya desde el primer semestre de 1995 se adoptaron medidas para contener el aumento de las importaciones en algunos sectores, como los de vehículos y electrodomésticos. Asimismo se instauró un régimen especial de fomento a las ensambladoras automotrices con el propósito de atraer nuevas inversiones hacia ese sector, una intervención típica de la política industrial en un sector considerado estratégico por su importancia para el uso y la difusión de progreso técnico.

Quedó clara entonces la diferencia entre la visión de un grupo llamado liberal y la de otro considerado desarrollista. Esta diferencia coincidía, con sus matices y excepciones, con la división de las opiniones en materia de política económica. La distinción entre un grupo y otro giraba en torno al papel que creían que debía tener el Estado en la promoción del desarrollo económico. Al grupo desarrollista pertenecían los principales cuadros del PSDB en los más altos niveles del Gobierno, empezando por José Serra, que encabezó la iniciativa de que se adoptara un régimen especial para el sector automotriz. Serra era el heredero más destacado del pensamiento de la CEPAL dentro del Gobierno.

En general, los desarrollistas coincidían con los liberales en la defensa de las privatizaciones, de la apertura y de la estabilidad, pero diferían de ellos porque sostenían que el Estado debía adoptar políticas industriales específicas para sectores que el Gobierno considerara estratégicos para el desarrollo del país. Creían que la decisión de producir localmente, innovar y exportar no podría dejarse exclusivamente al criterio empresarial, sino que el Estado tendría que establecer incentivos sectoriales para inducir a las empresas a tomar decisiones acordes con el desarrollo nacional.

Los liberales, por su parte, eran más escépticos en cuanto a la capacidad del Gobierno de identificar lo mejor para el desarrollo del país. Insistían en que la mejor política industrial consistía en reducir los costos de producción y logística en todos los sectores de la economía. Además, subrayaban los errores de las políticas industriales del pasado y el costo que habían tenido para la sociedad. Entre los liberales no había políticos. Eran un grupo conformado por economistas de alto nivel académico, educados en las principales universidades estadounidenses, la mayoría con experiencia en Gobiernos anteriores. Este grupo constituía el

núcleo duro del equipo económico desde los orígenes del real. Su poder se derivaba del éxito que había tenido el plan.

Durante su primera gestión, Cardoso se empeñó en mantener a estos dos grupos dentro del Gobierno y mediar en sus conflictos. Aunque los desarrollistas influyeron en varias políticas sectoriales importantes, la posición de los liberales fue la que determinó las decisiones fundamentales en materia de política macroeconómica.

Cardoso temía que un cambio en la estrategia de devaluación gradual del tipo de cambio echara por tierra la estabilidad monetaria, piedra angular de su presidencia y fuente del apoyo social que le permitía llevar a cabo reformas en las que había empeñado gran parte de su capital político. La política económica formulada por el BC y por el Ministerio de Hacienda atendía a la prioridad de asegurar una caída continua de la inflación. Ésta pasó de 20% anual a finales de 1995 a menos de 10% anual a finales de 1996. Éste, no obstante, era un nivel elevado de acuerdo con quienes formulaban la política económica, con el respaldo del presidente.

Para el Ministerio de Hacienda y el BC, si algo había que corregir, era la política fiscal. Conteniendo aún más el gasto sería posible reducir los intereses más rápidamente sin que ello afectara el combate a la inflación. Pero el Gobierno no estaba dispuesto a cargar con el peso político de un ajuste fiscal. El componente socialdemócrata de la plataforma política del candidato y luego presidente Cardoso consideraba importantes los programas sociales. Además, un reclamo general de la sociedad brasileña era que se cumplieran las aspiraciones consignadas en la Constitución de 1988. En ese contexto, el resultado primario del sector público en su conjunto pasó de un superávit promedio de aproximadamente 3% entre 1991 y 1994,

a resultados levemente negativos en el promedio de los cuatro años siguientes.

Los efectos secundarios de la caída de la inflación

Mientras trataba de mantener la inflación a la baja, el Gobierno tenía que lidiar con los efectos secundarios de ese proceso. Éstos se dejaron sentir en aquellos sectores que dependían más de una inflación elevada: los bancos públicos y privados, así como los estados y municipios, cuyos desequilibrios, antes latentes, salieron a la luz.

La quiebra de bancos se hizo inminente en el segundo semestre de 1995, cuando dos bancos de mediano a gran tamaño se mostraron insolventes. Uno de ellos estaba controlado por un grupo empresarial de Bahía estrechamente vinculado con el senador Antônio Carlos Magalhães, de modo que, además del problema financiero, había un problema político en ciernes. Para acabar con la amenaza de una crisis sistémica, que podría lanzar al país a una recesión y desestabilizar toda la economía, el Gobierno decidió adoptar un programa de reestructuración del sistema financiero.

El Proer logró evitar una oleada de quiebras bancarias y las consecuencias que ésta podría haber tenido en la economía. Su costo fiscal fue reducido en comparación con los programas emprendidos en otros países para sanear el sistema financiero después de crisis graves. Y con el tiempo se consolidó la opinión de que el programa ayudó a reforzar a largo plazo las bases del sistema financiero nacional, algo que resultó decisivo en los momentos de turbulencia financiera que tuvieron lugar en los años siguientes en el escenario internacional. Cuando se adoptó, sin embargo, el Proer fue el blanco predilecto de la oposición, que explotó, en contra del Gobierno el escaso prestigio de que

gozaban los bancos y banqueros entre la población, aunque el programa exigía el despido de los socios que controlaban los bancos que estuvieran en problemas.

Los problemas que enfrentaban los bancos públicos, en especial en los estados, eran peores que los de las instituciones bancarias privadas. Desde la década de 1980, el BC había tratado, sin éxito, de someterlos a un comportamiento prudente. El desequilibrio de los bancos de los estados reflejaba el déficit presupuestal de quienes los manejaban: los Gobiernos estatales, presionados sobre todo por el costo del personal. Este gasto, antes controlado por el efecto corrosivo de la inflación, se disparó en 1995. Algunos estados empezaron a pedir préstamos bancarios con tasas elevadas de interés y plazos cada vez más cortos. De continuar así, este proceso llevaría a los Gobiernos estatales a la quiebra.

Éste fue el escenario en el que se puso en marcha, en el primer semestre de 1996, el Programa de Incentivo a la Reducción del Sector Público Estatal en la Actividad Bancaria (Proes). El nombre del programa dejaba claro su objetivo. El Proes redujo drásticamente el número de bancos de los estados, que pasaron de ser más de 30 a sólo un puñado. Así se cortaron de raíz las fuentes de la indisciplina fiscal estatal, que ponían en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional.

Los ingresos generados por la venta de estos bancos ayudaron a los Gobiernos de los estados a reducir la suma total de su deuda. Pero ésta era muy elevada y seguía creciendo conforme incidían en ella las tasas de interés que cobraba el mercado. En 1997, para hacer frente a esta situación, el Gobierno federal se ofreció a asumir las deudas de aquellos Gobiernos que se ciñeran a un programa de ajuste fiscal a largo plazo. Esta vez las condiciones serían radicalmente distintas a las del refinanciamiento de las deudas estatales en la década de 1980:

habría sanciones efectivas para los estados que no cumplieran con las condiciones del contrato.

Los resultados fiscales de los programas de saneamiento del sector financiero y de los estados y municipios no fueron inmediatos. Al contrario: en un primer momento causaron un aumento de la deuda pública del Gobierno federal. Pero pronto quedó clara su importancia, cuando una modificación drástica en el cuadro financiero internacional, con repercusiones políticas internas, puso en jaque a la política económica y a la propia estabilidad monetaria. Además representaron un cambio en la dinámica del federalismo, pues restituyeron a la federación, en la práctica, parte de los poderes que los estados y municipios habían conquistado en la Constitución de 1988.

El fin del gradualismo y la prueba de la devaluación del cambio

Entre mediados de 1996 y mediados de 1997 la controversia en torno a la política económica se calmó ante los resultados positivos: una vez absorbidos los efectos de la crisis de México, que obligó al Gobierno a elevar los intereses y a limitar el crédito, la economía retomó su crecimiento, que casi llegó a 4% en 1997; el poder adquisitivo de las familias aumentaba gracias al decremento de la inflación y de los intereses (aunque elevados, éstos cayeron sin cesar desde junio de 1995 hasta noviembre de 1997, lo mismo que la inflación, que llegó a 5% al final de ese periodo); la importación de bienes de consumo cedió terreno a la de insumos y maquinaria, un indicio de la modernización del parque productivo; la inversión extranjera directa también se incrementó, cubriendo una fracción cada vez mayor del déficit en cuenta corriente, que crecía pero no de manera explosiva y el país acumulaba reservas internacionales.

El cuadro cambió cuando, en noviembre de 1997, Brasil sufrió el impacto de la crisis que se había iniciado en junio en Tailandia y que desde entonces había arrasado con varias naciones del Sudeste Asiático, devaluando abruptamente las monedas locales e imponiendo profundas recesiones a los respectivos países. Al igual que muchos de éstos, Brasil tenía un déficit elevado en la cuenta corriente: casi 4% del PIB, un resultado que contrastaba con el déficit inferior a 1% del PIB en 1994. El país empezó a verse como la próxima pieza que el efecto dominó haría caer.

Esta crisis internacional fue mayor que la de 1995 y también era mayor la fragilidad de la economía brasileña debido al aumento de las deudas externa —que se contrajo para cubrir el continuo déficit en cuenta corriente— e interna. La primera afectaba sobre todo a las empresas, que se endeudaron en dólares alentadas por la perspectiva de que la política cambiaria se sostuviera. La segunda tocaba directamente al sector público, y había ido en aumento desde el inicio del Plan Real. La deuda pública interna crecería más aún cuando se elevara drásticamente la tasa de interés, pese a un ajuste fiscal de emergencia que se trató de implementar como respuesta a la crisis. El choque de las tasas de interés que aplicó el BC surtió efecto a corto plazo y con ello cortó el ataque especulativo contra el real, pero no cambió el rumbo de la historia, pues el escenario exterior se había transformado de manera radical y prolongada.

Entre agosto de 1998 y enero de 1999, en pleno proceso de sucesión, se escribió el epílogo de la estrategia de la política económica que se había articulado a partir de marzo de 1995. Decretada en agosto, la moratoria de la deuda externa de Rusia casi creó una atmósfera de pánico financiero. A diferencia de las crisis anteriores —la de México y la de Asia—, esta vez el contagio llegó al corazón del sistema, sobre todo después de la

quiebra de un banco de inversiones de Wall Street. En vísperas de la contienda presidencial de octubre de 1998, Cardoso, candidato a su propia sucesión, anunció al país que vendrían tiempos difíciles y que se impondría un duro ajuste fiscal. En el Congreso se aprobó un programa trienal de estabilidad fiscal con metas anuales de superávit primario —es decir, los ingresos menos los gastos antes del pago de intereses—, apoyado en un conjunto de recortes del gasto y aumentos de impuestos. Las metas apuntaban a un esfuerzo fiscal muy superior al que se había venido realizando desde 1995. El Gobierno se comprometía, por ley, a cumplir con estas metas. Parte del programa de estabilidad fiscal implicaba la aprobación de las reformas iniciadas en los años previos, como la del sistema de pensiones. Sólo el espectro de una crisis inminente, que parecía potencialmente fatal para la estabilidad, podría orillar al Congreso a aceptar medidas como aquéllas. Y los diputados y senadores las aprobaron.

A partir de este programa, el país obtuvo un préstamo del FMI para reforzar sus reservas. Cardoso fue reelegido en octubre en la primera vuelta: la mayoría sentía que estaba mejor preparado que Lula para enfrentar la crisis. El 1º de enero de 1999, en su discurso de toma de posesión, declaró que se le había elegido como presidente para que superara la crisis, no para que la administrara. Inmediatamente después de su toma de posesión, el real volvió a estar bajo ataque. Como el mercado forzaba a hacer una devaluación, el Gobierno se vio obligado a dejar que el cambio fluctuara para proteger las reservas internacionales, que se disipaban rápidamente, y a renegociar el acuerdo con el FMI, elevando las metas del ajuste fiscal. El FMI quería que se adoptara un sistema de convertibilidad como en Argentina, pero el Gobierno se negó a aceptarlo.

En las semanas siguientes, Brasil vivió una vez más momentos de incertidumbre y sobresaltos, con rumores de pánico bancario y temor al descontrol de la inflación. El tipo de cambio se devaluó aproximadamente en un 100%. Pero en los meses siguientes no se confirmaron los peores escenarios. Respaldado por un programa fiscal creíble y dotado de los recursos del FMI, el BC, con una nueva dirección y con Armínio Fraga como presidente, recurrió a los instrumentos de la política monetaria para suavizar la devaluación del cambio e impedir el descontrol inflacionario. A finales de 1999, el cambio se había devaluado en un 40%, aproximadamente. Ese mismo año, la inflación al consumidor fue un poco inferior a 10%, una tasa más alta que las observadas en los dos años previos, en los que la inflación se había acercado a 1%, pero menor que las variaciones que habían tenido lugar en 1995 y 1996, e incomparablemente más baja que la tasa media de inflación anual del periodo anterior al Plan Real.

Para mediados de 1999, la amenaza del descontrol de la inflación ya estaba lejos. El Gobierno trató entonces de establecer un sistema de metas de inflación. De este modo se definiría una nueva ancla para las expectativas inflacionarias y el tipo de cambio permitiría más libertad para ajustar las cuentas externas. En mayo de 2000, contra el voto del PT, el Congreso aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fijaba normas globales para la gestión fiscal y financiera en los tres niveles del Gobierno. Más o menos en esos tiempos terminó la negociación sobre los programas de ajuste fiscal de los estados y principales municipios. Fue así como se conformó el nuevo trípode de la política económica: cambio fluctuante, sistema de metas de inflación y normas de responsabilidad fiscal.

En el segundo semestre de 1999 ya era evidente la tendencia a la recuperación de la economía, que habría de crecer más de

4% en 2000. Por una combinación de factores, este crecimiento no se mantendría al mismo nivel en 2001 ni en 2002: en 2001, el factor principal fue el racionamiento de la energía; en 2002, la incertidumbre sobre el futuro de la política económica, que se debía a que Lula era el favorito en la contienda por la sucesión. No obstante, los tres elementos que conformaban el trípode de la política económica mantuvieron un alto grado de legitimidad y eficacia y produjeron resultados concretos: la caída de la inflación dentro de las metas establecidas, la disminución del déficit en cuenta corriente —que bajó aproximadamente a 1.5% del PIB en 2002— y la estabilización de la deuda pública como fracción proporcional del PIB.

A pesar del control de la inflación, la devaluación del cambio, como era de esperarse, tuvo un impacto negativo en los ingresos de los trabajadores y en el nivel de empleo, como se verá más adelante.

La estabilización y la modernización de la economía: breve balance

Pese a las crisis vividas por el país, la economía brasileña que resultó de la exitosa devaluación del cambio y que se benefició de ella daba muestras de una vitalidad renovada, aunque desigualmente distribuida según los sectores y el tamaño de las empresas.

Brasil ya no producía "carretas", como se había referido el presidente Collor a los vehículos que se fabricaban en el país antes de la apertura. Llegaron nuevas ensambladoras. Éstas, antes concentradas en São Paulo y Minas Gerais, se propagaron por diversos estados del centro-sur, y una de ellas hizo una importante inversión en Bahía. Igual de exitosa fue la historia de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), productora de

jets de tamaño mediano para uso civil y militar, que se privatizó en 1994 y se convirtió en líder mundial en su sector.

La participación de la industria en el PIB, que había caído significativamente en los 15 años previos, se mantuvo prácticamente estable durante el periodo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Además del buen desempeño de la industria extractiva, la industria transformadora preservó su núcleo, conformado por el complejo metalmecánico. La industria ligada a los alimentos y bebidas también prosperó en el nuevo ambiente. Por su parte, sectores como el textil, el de muebles y el de calzado, que requerían un empleo intensivo de mano de obra, sufrieron pérdidas importantes.

El que más se benefició de la combinación de apertura y estabilidad fue el agronegocio. En ese periodo se consolidó en Brasil la agricultura tropical más competitiva del planeta. La cosecha de granos prácticamente se duplicó, casi sin que aumentara el área de cultivo. El país también se convirtió en uno de los más grandes productores y exportadores de proteína animal del mundo: carne de res, de pollo y de cerdo. La mejora del ambiente económico fortaleció a los productores que se habían modernizado en años previos en condiciones adversas. Surgió con fuerza el agronegocio, un sistema que incorpora y produce innovación, articulando además la producción primaria con una amplia gama de servicios y con la industria de procesamiento. En los años siguientes, el agronegocio fue el responsable de los superávits de la balanza comercial brasileña ante la tendencia deficitaria de la industria.

Como todo en Brasil, los nuevos mundos rural e industrial estaban marcados por la heterogeneidad. En la industria, un gran conjunto de medianas empresas sucumbió a la presión de la apertura económica en condiciones competitivas adversas: el alto costo del capital, la pesada carga tributaria, etc. Pese a las

condiciones especiales, como la adopción de un régimen tributario simplificado, a las micro y pequeñas empresas les costó mucho prosperar. Esto, como se verá más adelante, se reflejó en la dinámica del mercado laboral.

La democracia y los derechos sociales

En los años que habían transcurrido desde que se aprobó la Constitución Ciudadana, en octubre de 1988, los derechos sociales que ésta contemplaba no se habían reflejado en políticas sociales concretas ni en resultados palpables. Una vez dominada la inflación, hubo condiciones para atenderlos. Pero antes hay que entender en qué escenario se planteaba este desafío.

Los constituyentes habían definido la oferta gratuita de educación a nivel básico y de salud como deberes del Estado. En el terreno educativo, habían previsto porcentajes mínimos de aplicación del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), el principal gravamen estatal, pero no habían creado instrumentos para la acción del Gobierno federal. En cuanto a la salud, la Unión participaba directamente a través del Sistema Único de Salud (SUS), fundado con el propósito de articular las acciones de los tres niveles del Gobierno para ofrecer servicios sanitarios integrales a todos los ciudadanos brasileños en todo el territorio nacional. Para garantizar el financiamiento de la salud, la asistencia social y las pensiones, se creó un presupuesto de seguridad social con fuentes de recursos propias, lo cual muestra que los constituyentes aspiraban a construir un Estado de bienestar social en Brasil. También se habían definido los nuevos derechos en materia de seguridad y asistencia social. Los constituyentes preveían, por ejemplo, que se concediera un salario mínimo a todos los brasileños de la

tercera edad o a las personas con discapacidad que comprobaran ser de escasos ingresos. No obstante, las fuentes de recursos que se crearon para financiar la seguridad social fueron insuficientes. La cobija presupuestal era demasiado corta como para abarcar los gastos crecientes. El caso más grave era el del sector salud, donde con frecuencia resultaba difícil cubrir el pago de los hospitales en convenio.

En el sector educativo no había una crisis aguda, sino problemas crónicos. Brasil seguía presentando índices de cobertura educativa muy inferiores al nivel de desarrollo económico del país. A principios de la década de 1990, alrededor de 10% de los niños de entre 7 y 14 años no asistía a la escuela —en las regiones norte y nordeste, entre los más pobres y los negros, este porcentaje era dos o tres veces mayor—, pese a lo que decía la Constitución.

En un país que se democratizaba, había presiones políticas para acortar la distancia entre los derechos previstos por la ley y su efectivo cumplimiento. Y también para mejorar la remuneración de las categorías profesionales y las instituciones involucradas en la ejecución de las políticas sociales. En materia de salud, el Gobierno federal sentía de manera directa la exigencia de mayores recursos. En el sector se habían organizado grupos de presión con objetivos no siempre coincidentes. Como ejemplo, pueden mencionarse los legisladores vinculados con hospitales que tenían convenio con el SUS, por un lado, y los movimientos que abogaban por fortalecer la asistencia sanitaria básica, encabezados por médicos sanitaristas, por el otro. En el sector educativo, la presión recaía sobre los estados y municipios, responsables de gestionar la educación básica.[2]

La categoría más importante del funcionariado desde el punto de vista cuantitativo y en términos de influencia electoral eran los profesores y demás profesionales de la educación

pública. Éstos se organizaron en sindicatos, un derecho que la Constitución de 1988 otorgó a los servidores públicos. Se volvieron frecuentes las huelgas de profesores y de otros sectores; los movimientos sumaban a las reivindicaciones corporativas proclamas de alcances más generales, como la exigencia de que se destinaran mayores recursos a la educación pública. El PT y la CUT crecieron con el proceso de sindicalización de las categorías de servidores públicos y alcanzaron la hegemonía en ese terreno.

La disputa en torno a la política social, propia de la democracia, se volvía explosiva cuando el tema era la reforma agraria, que al menos en el nivel del discurso se había vuelto prioridad desde el fin del régimen autoritario. Ya desde 1985, el presidente Sarney había creado un ministerio específico para tratar el asunto y los constituyentes habían destacado la cuestión en la nueva Carta, que condicionaba la propiedad de la tierra al cumplimiento de su función social y preveía la posibilidad de que las propiedades consideradas improductivas se expropiaran de acuerdo con criterios establecidos en la legislación posterior.

En este contexto creció el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), originario de la región sur del país, donde la pequeña propiedad familiar había ido perdiendo espacio dentro de la estructura agraria, asediada por la modernización del campo. Desde fines de la década de 1980, el MST fue ampliando el alcance geográfico y el número de sus acciones, sobre todo la invasión de tierras —o su ocupación, según el lenguaje adoptado por el movimiento—, para forzar el proceso de expropiación y asentamiento de los trabajadores sin tierra. Apoyado por el PT y por un ala de la Iglesia católica ligada a la teología de la liberación, los sin tierra conquistaban la

simpatía de sectores más extensos de la sociedad que se identificaban con las causas progresistas.

Para oponerse al crecimiento del MST, los hacendados organizaron la Unión Democrática Ruralista (UDR), que acusaba a los sin tierra de no respetar la propiedad privada en el campo. Para defenderse, o pretextando defenderse, algunos propietarios rurales conformaron milicias. Si la reforma agraria avanzaba a paso lento, la violencia en el medio rural escalaba rápidamente.

Éste era el escenario cuando comenzó el gobierno de Fernando Henrique Cardoso: el financiamiento era insuficiente y había una gran presión para aumentar el gasto social, sobre todo en el sector salud; faltaban políticas nacionales de educación básica, e intensos conflictos tenían lugar en el campo.

Para financiar el sector salud se aprobó un impuesto específico, la Contribución Provisional sobre Movimientos Financieros (CPMF), que atenuó los problemas financieros en ese terreno. El SUS, además de contar con más recursos, empezó a distribuirlos de tal modo que se atendiera mejor a las poblaciones más pobres. Antes el dinero se repartía según el número de camas de hospital, y esto favorecía a los municipios más ricos en detrimento de las acciones de salud preventiva en los municipios más pobres. Con la nueva norma para el reparto de recursos aumentó el número de programas de asistencia directa a la salud de las familias de menores ingresos. La expansión de los programas de asistencia directa a la familia, de carácter preventivo, ayudó a reducir drásticamente la mortalidad infantil y permitió que Brasil cumpliera anticipadamente la meta fijada para esta variable en los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODU), que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció en el año 2000.

Al final del gobierno, con José Serra de vuelta en el gabinete, esta vez como ministro de Salud, se aprobó una enmienda constitucional que obligaba a la Unión, a los estados y a los municipios a asignar al sector salud un porcentaje preestablecido de su presupuesto. Esa misma enmienda preveía un mecanismo para asegurar un aumento real del gasto destinado al sector sanitario. Como habría de quedar claro durante el gobierno de Lula, la administración y el financiamiento del SUS seguirían siendo un tema pendiente de enorme relevancia política y social.

Al igual que en el sector salud, en el educativo se crearon políticas para ampliar la escolarización, especialmente deficiente entre los más pobres. Contra el voto de la oposición se aprobó el Fondo de Mantenimiento y Educación Fundamental y Valorización del Magisterio (Fundef),[3] que redistribuyó recursos favoreciendo a los municipios con mayor número de inscritos y aseguró un gasto mínimo por alumno que, de ser necesario, sería complementado por el Gobierno federal: el valor de este complemento fue objeto de intensas disputas políticas y judiciales. El Fundef sirvió de estímulo para que los municipios ampliaran la matrícula de primaria y secundaria, y permitió que se aumentaran los salarios de los profesores en las zonas menos desarrolladas del país. Por otro lado, se instituyó el programa *Bolsa-Escola*,[4] que ofrecía una ayuda financiera a las familias pobres con hijos de entre 7 y 14 años, siempre y cuando éstos asistieran a clases. Este conjunto de políticas permitió alcanzar la meta de llevar a todos los niños a la escuela.

En este grupo de edad, el problema educativo dejó de ser cuantitativo. Los sistemas de evaluación instituidos por el Gobierno revelaron que la calidad de la educación seguía siendo lamentable. Algunas evaluaciones indicaron que la calidad educativa, medida a partir del desempeño de los alumnos,

incluso empeoró. Éste fue un efecto no intencional y quizá inevitable de la integración de alumnos de familias más pobres y menos instruidas al sistema escolar.

En cuanto a la asistencia social, el gobierno de Cardoso rompió con la tradición clientelista de la Legión Brasileña de Asistencia (LBA). Esta entidad, creada por Vargas, estuvo durante el gobierno de Collor en el centro de un escándalo relacionado con la distribución políticamente condicionada de sus recursos. Cardoso disolvió la LBA. En 1996 se aprobó en el Congreso el reglamento de la Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS). Se crearon también varios programas de transferencia condicionada de ingresos, entre ellos el ya mencionado *Bolsa-Escola* y el *Bolsa-Maternidade*,[5] a través de los cuales las familias pobres empezaron a recibir beneficios, obligándose, por su parte, a cumplir con ciertos deberes, como garantizar la asistencia de los hijos a la escuela y, en el caso de las mujeres embarazadas, realizarse estudios prenatales. Estos programas marcaron un cambio en la relación del Estado con los pobres, pues el beneficio concedido se caracterizó como un derecho y no como un favor.

Aunque a pequeña escala el programa Comunidad Solidaria, dirigido por Ruth Cardoso, antropóloga y esposa del presidente, también representó un cambio muy importante en el terreno social. Este programa partía de dos presupuestos: primero, que los desafíos que enfrentaba Brasil en el plano social eran demasiado amplios y diversos como para que sólo el Gobierno les hiciera frente, y segundo, que en la sociedad había recursos, conocimiento y capacidades dispersos que, de ponerse en movimiento, podrían encontrar soluciones innovadoras para los consabidos problemas sociales. Al principio, algunas figuras dentro del Gobierno consideraron que el programa sería ineficaz. Un ministro llegó a describirlo como "masturbación sociológica". La oposición dudaba de la neutralidad política del

proyecto. Pero a la larga los resultados obtenidos y sobre todo las innovaciones conceptuales granjearon al programa reconocimiento y legitimidad.

De entre las políticas sociales, la reforma agraria fue sin duda la más densa en conflictos. Desde el punto de vista de la cantidad de tierras que se expropiaron o compraron para que se establecieran los trabajadores rurales sin tierra, el programa puede considerarse exitoso. El Gobierno agilizó los procesos legales para la expropiación. Más de 450 000 familias se asentaron; este número era muy superior al total de familias instaladas desde que se había promulgado el Estatuto de la Tierra en 1964, ley con la que el Gobierno militar había tratado de hacer frente al tema de la reforma agraria, el cual constituyó un foco de intensa radicalización política desde 1961 hasta el golpe militar.

Durante la administración de Cardoso no se dio una radicalización semejante. Pero los embates fueron frecuentes y, muchas veces, agudos. Involucraron al Gobierno, a los hacendados y a sus representantes políticos, así como a movimientos sociales del campo, sobre todo al MST, vinculado con el PT. A principios de 1996, en Eldorado do Carajás, al sur de Pará, una zona donde el conflicto agrario adquiría un cariz especialmente violento, tropas de la Policía Militar (PM) movilizadas para liberar una carretera asesinaron a trabajadores sin tierra. El caso repercutió a nivel nacional e internacional. Dentro y fuera del país la masacre de Carajás atrajo gran simpatía hacia la causa del MST. Condensaba en imágenes una historia de violencia e injusticia social en el campo.

Esto presionó al Gobierno para que acelerara el programa de la reforma agraria. Por su parte, el MST decidió intensificar la invasión de propiedades rurales. En reacción, el Gobierno determinó que las tierras que se invadieran no podrían

expropiarse para fines de reforma agraria durante por lo menos dos años, y que quienes participaran en las invasiones no podrían formar parte de los asentamientos creados por el poder público. Esto hizo que el PT y el MST acusaran al Gobierno de criminalizar el movimiento social.

La reacción del Gobierno contuvo con eficacia la oleada de invasiones a las propiedades rurales. El MST respondió ocupando edificios públicos en zonas urbanas. En consecuencia, perdió la simpatía que la masacre de Carajás le había propiciado en la opinión pública.

El avance del programa de reforma agraria agotó las propiedades improductivas situadas en aquellas zonas donde los suelos eran de mejor calidad y había mayor oferta de infraestructura. Dejó claro además lo difícil que era la viabilidad comercial de estos asentamientos y su independencia de los recursos públicos.

Con Cardoso se extendieron las bases de financiamiento, la amplitud y la diversidad de las políticas sociales. Se institucionalizaron programas con la perspectiva de que se les diera continuidad a lo largo del tiempo. Y, no obstante, su gobierno fue criticado por hacer poco por lo social, una percepción que se volvió dominante. Esto se explica en parte por el hecho de que, aunque una amplia gama de indicadores mejoró, desde la mortalidad infantil hasta la cobertura escolar, las carencias y desigualdades sociales en Brasil siguieron siendo graves. También puede explicarse en parte por la derrota que sufrió el Gobierno en el terreno de la comunicación política ante una oposición que era más eficaz en esa materia. Pero, sobre todo, la percepción de que el gobierno de Cardoso hizo poco por lo social se debe a que en las principales ciudades del país, a lo largo de la década de 1990, el desempleo y la inseguridad laboral crecieron.

Entre 1994 y 2002, la tasa de desempleo varió mucho, de un mínimo de 4% poco después del Plan Real, a un máximo de 8% entre las crisis financieras de 1997 y 1998, cerrando el periodo aproximadamente en un 7%. Éstos fueron, *grosso modo*, los porcentajes para las seis principales regiones metropolitanas del país, donde reside alrededor de 40% de la fuerza de trabajo. Fuera de estas regiones, el cuadro fue mejor, aunque no completamente distinto.

El aumento del desempleo en relación con su nivel histórico se debió a un conjunto de factores. No puede explicarse aisladamente por el escaso crecimiento del PIB. A fin de cuentas, la economía crecía poco desde hacía una década. Para entender el aumento del desempleo es necesario tomar en consideración las transformaciones estructurales que atravesaba el país.

Durante los primeros años que siguieron a la apertura, la industria se adaptó de manera defensiva al ambiente de escasa demanda interna y a la persectiva de una competencia creciente contra los productos importados en el mercado nacional.

Con el Plan Real el ambiente macroeconómico cambió. En la fase de la URV la inflación ya había dejado de corroer los salarios. Lanzada la nueva moneda, aumentó la capacidad de consumo de los más pobres, que eran los más afectados por los altos niveles de inflación. La economía empezó a crecer a pasos acelerados, impulsada por el consumo interno. Y el desempleo cayó a su nivel más bajo en varias décadas. El año de 1994 cerró con el desempleo por debajo de 4 por ciento.

Pero la velocidad inicial del crecimiento no pudo sostenerse. El consumo estaba por delante de la oferta y disparaba las importaciones, favorecidas por la valorización del tipo de cambio, de modo que el Gobierno se vio obligado a frenar el

ritmo del crecimiento para mantener la inflación a la baja e impedir que explotaran las importaciones.

Pronto la desaceleración de la economía que se había iniciado en el primer semestre de 1995 se reflejó en el mercado laboral, en especial en los empleos industriales. El orden de la política económica ejercía una fuerte presión sobre un sector que se había acostumbrado a operar con tasas de cambio devaluadas. Los altos intereses y la valorización del cambio no invitaban a hacer grandes inversiones que requirieran contratar trabajadores. Con el real se intensificó la modernización del parque productivo a costa de la creación de empleos en el sector industrial.

Protegido de la competencia externa y menos expuesto a los cambios tecnológicos, el sector servicios compensó temporalmente la disminución de la oferta laboral en el sector industrial. Pero la compensación fue parcial y a finales de 1996 el desempleo ya había llegado a 6%. El alza se exacerbaría en los años finales de la década, entre una serie de crisis financieras que llevaría a la devaluación del real en enero de 1999. La modificación del régimen de cambio tuvo un efecto positivo sobre la producción, las exportaciones y el empleo industrial, pero no bastó para revertir el deterioro que el mercado laboral había sufrido en los años previos.

Para entender la inseguridad laboral no basta analizar las oscilaciones de la tasa de desempleo. Además de la tendencia al alza de éste, creció la informalidad en las relaciones laborales. En 1990 alrededor de 40% de la fuerza de trabajo se desempeñaba en la informalidad. Diez años después este porcentaje superaba el 50%. En ese periodo se redujo el empleo industrial, que solía estar respaldado por contratos basados en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), y aumentó el empleo

informal, que por lo general no contemplaba los derechos laborales previstos en la ley.

Añádase a esto el hecho de que el mercado laboral se volvía más selectivo en cuanto a la contratación de mano de obra. En otras palabras, las empresas empezaron a exigir mayor escolaridad a los trabajadores que buscaban empleo, un reflejo de la introducción de nuevas tecnologías y del esfuerzo por aumentar la productividad. Esto, por un lado, hizo crecer significativamente el grado de escolaridad de la mano de obra empleada y alargó la permanencia de los jóvenes en el sistema escolar. Por otro lado, dificultó el ingreso y la reubicación en el mercado laboral, lo cual incrementó el desempleo desalentado, así como el tiempo promedio de desocupación.

No es de sorprender que la inseguridad laboral se haya convertido en una de las preocupaciones centrales de la población y en uno de los principales blancos de la crítica de la oposición al Gobierno. El hecho de que el desempleo y la precarización del empleo se dejaran sentir sobre todo en las zonas metropolitanas exponenciaba los efectos políticos de la crítica oposicionista, pues es en las ciudades donde se forman y desde donde irradian las visiones de la realidad nacional.

Otra fuente de malestar en las zonas metropolitanas era la criminalidad y la violencia asociada a ella. Los crímenes violentos se dispararon en la década de 1980, década en que la tasa de homicidios prácticamente se duplicó. Pero fue en los años 1990 cuando la violencia ocupó el primer lugar entre las preocupaciones de la población brasileña, y la agenda pública empezó a reflejar esta situación. Se hizo evidente entonces la relación entre la escalada de la violencia y la proliferación del crimen organizado a raíz del narcotráfico y del contrabando de armas.

La violencia asociada al crimen se convirtió en la primera causa de muerte entre jóvenes varones de 15 a 24 años; afectaba sobre todo a los habitantes pobres de los mayores centros urbanos, asesinados en enfrentamientos entre traficantes y víctimas de acciones policiacas indiscriminadas o simple y llanamente de exterminio.

Quedó claro que las policías estatales no estaban preparadas para hacer frente a la escalada de la violencia. Parte de ellas, además, se había vuelto cómplice del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.

Ante este cuadro, el Gobierno federal se vio obligado a actuar aunque, como hoy, la seguridad pública recaía sobre los estados salvo por funciones atribuidas a la Policía Federal (PF), una policía judicial limitada a investigar y reprimir delitos federales. Así, en 2000, tarde, según los críticos, se crearon el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) y el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), con recursos para ayudar a los estados a entrenar y equipar a sus fuerzas policiacas. Empezó a debatirse el uso de las Fuerzas Armadas en situaciones específicas; pero no sólo había restricciones legales que lo impedían, sino que los militares se resistían a involucrarse con la seguridad pública, temiendo que las Fuerzas Armadas se contaminaran con la corrupción inherente al crimen organizado.

La crisis metropolitana que explotó en la década de 1990 es fruto de una larga y compleja acumulación de problemas: el desordenado e intenso flujo migratorio entre 1950 y 1980, que provocó la expansión de las ciudades sin que hubiera la necesaria contrapartida en materia de infraestructura urbana; la desindustrialización de las zonas metropolitanas luego de la apertura de la economía, sin que floreciera un sector servicios lo suficientemente dinámico como para compensar la migración de las industrias hacia otras regiones, y el aumento del consumo de

drogas: Brasil dejó de ser una simple ruta de paso para convertirse en un importante mercado consumidor.

La política exterior: la autonomía por la inserción

Ésta fue la idea central de la política exterior de Fernando Henrique Cardoso. El país anteriormente había conservado una relativa autonomía en materia de política exterior, manteniéndose a cierta distancia del mundo, lo cual era acorde con su modelo de desarrollo, vuelto hacia adentro, y con el objetivo de no alinearse automáticamente con Estados Unidos. Pero a mediados de la década de 1990 la Guerra Fría ya había terminado y el desarrollo exigía una integración creciente a los flujos internacionales de comercio, capital y tecnología. Con un sistema democrático y una economía estable, Brasil estaba en mejores condiciones de participar en la economía global y de tener una voz más activa en los organismos internacionales. Para lograrlo se consideraba esencial consolidar el Mercosur.

Para la segunda mitad de la década de 1980, Brasil y Argentina ya habían dejado atrás sus dictaduras militares, largos periodos de inestabilidad económica y décadas de desconfianza mutua a nivel estratégico. La cercanía entre los dos principales países de América del Sur se estrechó con el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, firmado en 1988; con el Acuerdo para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear, suscrito en 1991 (un paso inicial para la adhesión de ambas naciones al Tratado de No Proliferación Nuclear —TNP—, pocos años más tarde) y con el Tratado de Asunción, también firmado en 1991, en el que Brasil y Argentina se comprometieron a reducir a cero las alícuotas de importación entre los miembros del bloque hasta el 31 de diciembre de 1994. En esa fecha el

Mercosur se convertiría en una unión aduanera. El bloque no sólo practicaría el libre comercio interno, sino que los cuatro Estados miembros (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) aplicarían los mismos aranceles a los diversos productos que importaran de otros países.

No eran pequeñas las ambiciones de la unión aduanera. Además de eliminar las barreras que obstaculizaban el comercio entre sus miembros y adoptar una política comercial en común respecto a otros países y bloques, el Mercosur tenía como objetivo coordinar las políticas macroeconómicas y sectoriales de sus integrantes.

Brasil y Argentina conformaron la columna vertebral del bloque. En las negociaciones para establecer las alícuotas del arancel externo común (AEC), el Gobierno argentino cedió ante el Gobierno brasileño: el AEC prácticamente reflejó la estructura arancelaria de Brasil, que entonces tenía una economía más cerrada que la de Argentina. Se aceptó que el AEC tuviera una lista de excepciones que le permitiera amoldarse a las situaciones específicas de cada país, pero esta lista tendría que irse reduciendo con el paso del tiempo, hasta desaparecer del todo.

Argentina veía en el Mercosur una puerta de entrada al gran mercado interno brasileño. Brasil veía en Argentina un mercado complementario al suyo y un espacio para que sus empresas pudieran fortalecerse y participar, en mejores condiciones, en la competencia global. Entre 1991 y 1994, con la progresiva reducción de los aranceles que gravaban el comercio entre los países miembros, las transacciones de mercancías y servicios dentro del Mercosur pasaron de 4 000 millones a 12 000 millones de dólares, lo que despertó el optimismo sobre el futuro de la unión aduanera.

Pero la realidad no confirmó cabalmente el optimismo inicial. La lista de excepciones del AEC no se redujo. Brasil se aprovechó de ella para poner en práctica políticas industriales que le interesaban de manera exclusiva en los sectores de bienes de capital y telecomunicaciones, por ejemplo. Por su parte, Argentina se aferró a la protección del sector azucarero. Las instituciones del Mercosur tampoco se desarrollaron como se esperaba: los contenciosos comerciales siguieron resolviéndose de manera puntual y politizada. Pero el mayor problema se debió a que las políticas macroeconómicas de los dos principales socios estaban desacompasadas.

Entre 1995 y 1998 el flujo comercial dentro del Mercosur pasó de 12 000 millones a 20 000 millones de dólares en un contexto de esperanza renovada respecto al porvenir de la unión aduanera. Se creía que el Mercosur sería uno de los pilares de un futuro mercado común sudamericano, y esta confianza se veía reforzada por los acuerdos de libre comercio que el bloque firmó en ese periodo con Chile y Bolivia.

En esos años, con el saldo comercial a su favor, Argentina se benefició del comercio con Brasil, que le permitió obtener una parte importante de los dólares que necesitaba para sostener la paridad entre el peso y la moneda estadounidense, estipulada en la ley. La paridad era una pieza esencial del sistema de convertibilidad que ese país había adoptado con éxito para acabar con la hiperinflación al principio de la década.

El cuadro cambió después de enero de 1999, cuando se devaluó el real y se invirtió el signo de la balanza comercial, que empezó a ser favorable a Brasil. Desde entonces se multiplicaron los contenciosos entre los dos vecinos, pues Argentina obstaculizaba la entrada de importaciones brasileñas.

Ante el nuevo escenario, el Gobierno brasileño prefirió adoptar una actitud de paciencia estratégica. Prevaleció la

convicción de que el futuro de una integración que se consideraba estratégica no podía ponerse en riesgo por tensiones comerciales delimitadas y supuestamente momentáneas. En palabras del entonces canciller Celso Lafer, el Mercosur "no era una opción, era un destino". Y, sin embargo, los años de 1998 a 2002 fueron desalentadores: el comercio entre los países miembros cayó a la mitad, y al final de ese periodo apenas si superó los 10 000 millones de dólares.

Ante la crisis de Mercosur, Cardoso convocó a mediados de 2000 a una cumbre de presidentes de América del Sur, la primera de su tipo, para discutir el tema de la integración física de la región. De esta cumbre resultaría la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El mandatario trataba, así, de abrir un nuevo horizonte para la integración regional, tema que retomaría su sucesor. El Gobierno brasileño había reforzado sus credenciales en la región, entre otras cosas porque había sido mediador en la solución del conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador, que se venía arrastrando desde el siglo XIX y que había recrudecido hasta incluir escaramuzas bélicas en 1995. A finales de 1988 las partes firmaron en Brasilia un Acuerdo Global y Definitivo de Paz.

Pese a sus complicaciones y frustraciones, el Mercosur no causaba divisiones ideológicas en Brasil. No puede decirse lo mismo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto presentado por el Gobierno estadounidense en la primera Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Miami, Estados Unidos, en diciembre de 1994. Para Estados Unidos, este tratado representaba la posibilidad de ampliar el acuerdo de libre comercio firmado con Canadá y México en 1993, conocido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en inglés, North American Free Trade Agreement, NAFTA). Además de la liberalización del comercio de bienes y servicios, Estados

Unidos pretendía establecer reglas comunes para proteger las inversiones y la propiedad intelectual.

Brasil se comprometió en el proceso de negociación del ALCA. El diálogo se inició efectivamente en 1998, tras la II Cumbre de las Américas, en Santiago de Chile. El año anterior, en una reunión ministerial del ALCA en Belo Horizonte, se habían definido tres premisas de negociación: *1*) las decisiones se tomarían por consenso; *2*) no se implementarían partes aisladas del acuerdo; *3*) las reglas tendrían que ser compatibles con las de los bloques subregionales, entre ellos Mercosur. A pesar de estas premisas, las oposiciones veían en el ALCA un proyecto de dominio económico estadounidense sobre los países de la región. La izquierda nacionalista de varios otros Estados sudamericanos compartía este sentimiento. Por todas partes se oía la consigna: "El ALCA no es integración, sino anexión".

Para el Gobierno brasileño, el que el ALCA fuera o no favorable a los intereses del país dependería del resultado de esas negociaciones. Pero abandonarlas no era una posibilidad. El Gobierno no quería dejar el camino libre a Estados Unidos para que firmara con los demás países de la región acuerdos que pudieran perjudicar las exportaciones brasileñas. Le preocupaba especialmente Argentina, que no disimulaba sus intenciones de entablar relaciones "carnales" con Estados Unidos, según la expresión de su canciller del momento, aun a costa del Mercosur.

Conforme avanzaron las negociaciones, Brasil dejó claro que su eventual adhesión al ALCA sólo se daría bajo ciertas condiciones. Cardoso estableció éstas en un discurso pronunciado en la III Cumbre de las Américas, que se celebró en la ciudad canadiense de Quebec en 2001. Eran las siguientes: la igualdad en el acceso a los mercados, normas comunes para adoptar medidas *antidumping* y un equilibrio entre el respeto a la

propiedad intelectual y la necesidad de avances tecnológicos para los países con un menor grado relativo de desarrollo.

Ese mismo año, en Brasil, partidos de izquierda y organismos vinculados con los movimientos sociales —desde la CNBB, órgano máximo de la Iglesia católica en el país, hasta el MST— empezaron a movilizarse para llevar a cabo un plebiscito sobre la conveniencia de sumarse al ALCA o incluso de seguir en las negociaciones en torno a su formación. El plebiscito, cuyo resultado era previsible, se realizó en septiembre de 2002, en vísperas de la contienda en la que Lula sería electo sucesor de Cardoso. Aunque no tenía efectos legales, movilizó a 10 millones de personas, de acuerdo con los organizadores.

La oposición al ALCA no sólo crecía en Brasil. Con la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, con el agravamiento de la crisis en Argentina, que llevaría a renunciar a Fernando de la Rúa a finales de 2001, y con el desencanto ante la globalización luego de la crisis financiera de 1997-1998, que surgió en Asia y se expandió por el mundo, un sentimiento contrario al libre comercio se fortalecía en las Américas y en todas partes. Incluso en Estados Unidos hubo un cambio importante tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Si para el gobierno de Bill Clinton la prioridad era conquistar mercados mediante acuerdos de integración, el de George W. Bush tenía como objetivo la guerra contra el terrorismo. El proceso de negociación del ALCA se interrumpió definitivamente en 2005, como se verá más adelante, cuando se hable de la política exterior del gobierno de Lula.

Mientras movía sus piezas en el tablero del Mercosur y el ALCA, Brasil se mantuvo activo en la esfera multilateral, pero ya en un nuevo contexto, dada la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, en sustitución del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Para Brasil, el tablero

multilateral ocupaba un lugar central en las negociaciones con los países desarrollados. Se consideraba que allí, gracias a la presencia de muchos Estados y la amplia gama de alianzas posibles, las condiciones para negociar eran mejores que en foros más limitados.

El principal interés ofensivo del país era reducir las barreras contra la exportación de productos agropecuarios, sobre todo en el mercado europeo, tan protegido. El tema de la apertura de esos mercados quedó pendiente en la Ronda de Uruguay, aunque los países en desarrollo estuvieron de acuerdo en disminuir los aranceles de sus sectores industriales. Los Gobiernos de Brasil y de otros países en desarrollo con exportaciones significativas de productos agropecuarios hicieron hincapié en esta asimetría. Pese a ello, se avanzó poco en ese sentido y la negociación llegó al callejón sin salida donde se encuentra hasta nuestros días.

Aun así, el desempeño de Brasil en la OMC produjo resultados en ese periodo. En la reunión que presentó la Ronda de Doha en 2001 Brasil alcanzó un importante logro en lo relativo al derecho de propiedad de medicamentos esenciales para la salud pública. El caso en cuestión eran los retrovirales utilizados en el combate al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), cuyos elevados costos pesaban sobre el programa brasileño de lucha contra esa epidemia.

También la dimensión política tuvo su importancia en la forma en que se condujo la política exterior de ese periodo. Brasil, además de firmar el TNP, entró al Régimen de Control de Tecnología de Misiles (Missile Technology Control Regime, MTCR) y suscribió el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, así como la Convención Internacional sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas. Así, el país reafirmó externamente el compromiso de usar pacíficamente la

tecnología nuclear, que ya estaba consignado en la Constitución de 1988.

El compromiso internacional con la democracia se plasmó en el Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998, que incorporó una cláusula democrática a las reglas del Mercosur. Esta misma cláusula se incluiría después entre las decisiones de la Cumbre Sudamericana celebrada en Brasilia en 2000 y se integraría al ALCA en la III Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Quebec en 2001. La defensa del régimen democrático pasó a ser un requisito para formar parte de los acuerdos de integración económica y comercial.

¿Una herencia maldita o bendita?

Si se evalúan de manera imparcial los dos mandatos del gobierno de Cardoso resulta imposible negarle al menos dos méritos.

El primero fue la estabilización de la economía brasileña tras más de una década de inflación elevada, crónica y creciente; este proceso implicó la reestructuración del sistema bancario y el reordenamiento de las finanzas públicas, cuya expresión más visible y abarcadora es la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El segundo mérito innegable del gobierno de Cardoso fue la consolidación de la democracia brasileña. En este sentido, vale la pena destacar tres hechos: el reconocimiento, por parte del Estado, de los crímenes que se cometieron en el periodo de la dictadura militar; la creación del Ministerio de Defensa, marco de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, y la transición del poder de su gobierno al de su sucesor, organizada de tal modo que facilitó el acceso de la nueva administración a la información necesaria para la gestión del Estado.

El gobierno de Cardoso ahondó la distancia —práctica y conceptual— respecto al modelo de economía cerrada, con gran participación del Estado en el sector público y una intervención estatal generalizada y discrecional en las actividades económicas.

Lo que siguió a la Era Vargas no fue un Estado mínimo que se limitara a funciones reguladoras en el campo económico. El gobierno de Cardoso abrió el sector del petróleo y del gas a la participación del sector privado, pero no privatizó Petrobras, fundada en la segunda gestión de Vargas. Al contrario: le dio condiciones para operar con mayor libertad y eficiencia, y esto le permitió crecer en el ambiente más competitivo al que se vio sometida. El BNDES, creado también durante la segunda gestión de Vargas, recibió mayores atribuciones en las políticas gubernamentales de apoyo a la reestructuración productiva del sector industrial y a la exportación de productos manufacturados. El Banco de Brasil fue capitalizado por el Tesoro y siguió en manos del Estado, con líneas de apoyo a la exportación y la agricultura.

Finalmente, aunque esto pocas veces se recuerde, durante las dos gestiones de Cardoso se institucionalizó una gama amplia y variada de políticas sociales que hicieron más efectivos los derechos sociales consignados en la Constitución de 1988.

Este conjunto de cambios positivos redundó en un mayor prestigio y una mejor posición de Brasil en el mundo.

Pese a haber hecho estos cambios, el gobierno de Cardoso legó a su sucesor —junto con la enorme lista de desafíos propia de un país en desarrollo— problemas que ponían trabas al crecimiento.

Entre 1995 y 2002, la deuda pública creció de 30% a más de 50% del PIB. Este aumento se dio a pesar de una gran elevación de la carga tributaria, que pasó de 26% a 35% del PIB, y del uso de

prácticamente del 100% de los recursos recabados por la privatización para disminuir la deuda pública. Los elevados intereses y la pesada y acumulativa carga tributaria siguieron inhibiendo la inversión privada.

El gasto creciente en intereses y políticas sociales impidió que se retomara la inversión pública, que había estado cayendo desde la década de 1980. La inversión privada en infraestructura, impulsada por las privatizaciones, no fue suficiente para compensar la falta de inversión pública. En el sector eléctrico, el cambio de modelo quedó a medio camino: se privatizaron las empresas de distribución, pero no las empresas generadoras, en un escenario de incertidumbre que cohibió la inversión. Cuando el crecimiento económico volviera a acelerarse —si es que esto llegaba a suceder—, se correría el riesgo de un nuevo racionamiento de energía, como el que había tenido lugar en 2001.

En este escenario, el país creció poco y junto con la modernización de la economía aumentaron el desempleo y la informalidad en el mercado laboral.

Desde la perspectiva del Gobierno, el incremento de la deuda pública y de la carga tributaria era el costo de la exitosa estabilización de la economía en condiciones externas adversas. También era una expresión del compromiso del Estado con el sector social. Una parte significativa del aumento de la deuda pública reflejaba la incorporación de los pasivos de estados y municipios, el saneamiento del sistema financiero y el reconocimiento de deudas que aún no se habían contabilizado, los llamados "esqueletos". En la misma línea, la mayor parte de la engrosada carga tributaria correspondía al aumento del gasto social.

Para el Gobierno, Cardoso dejaba a su sucesor un país preparado para acelerar el crecimiento sin perder la

estabilidad, siempre y cuando no se echaran atrás las reformas realizadas y se mantuvieran las líneas generales de la política económica que se había establecido a partir de la devaluación del cambio.

Pero el discurso de las oposiciones era muy distinto. En opinión del PT, Lula recibiría una "herencia maldita", fruto de la orientación neoliberal y de los "errores" de la política económica de la administración anterior. La orientación neoliberal había debilitado deliberadamente la capacidad del Estado para emprender políticas de desarrollo y había conducido a una apertura irresponsable de la economía. Los errores de la política económica partían —según el PT— de la apertura de la economía brasileña a los flujos financieros globales. Esta apertura había dejado a la economía expuesta a los cambiantes humores del mercado financiero internacional. Las privatizaciones formaban parte de la lógica de subordinación a los intereses financieros internacionales a costa del patrimonio público y del Estado desarrollista.

De acuerdo con esta perspectiva, los dos mandatos de Cardoso habían sido una continuación radicalizada del gobierno de Collor; ambos políticos serían representantes de una misma orientación neoliberal que se había vuelto hegemónica en el mundo desde la crisis del socialismo, que culminó con el colapso de la Unión Soviética y la consolidación de Estados Unidos como la única gran potencia mundial a finales de la década de 1980. De mantenerse, esta orientación condenaría al país a una integración subordinada al capitalismo global, con un alto costo económico y social. Prueba de ello eran los procesos de desindustrialización, aumento del desempleo y precarización laboral.

En su XII Encuentro Nacional, celebrado en diciembre de 2001, el PT aprobó un documento que pregonaba la ruptura con el

modelo neoliberal como condición necesaria para retomar el desarrollo. Esta ruptura implicaría denunciar el acuerdo con el FMI, auditar la deuda externa pública, superar la política fiscal de superávits crecientes, suspender las privatizaciones e investigar aquellas que ya se habían llevado a cabo. En el mismo documento, el PT proponía la transición hacia un nuevo modelo en el que el eje dinámico del crecimiento sería el "mercado interno de masas".

Es interesante señalar que el mercado interno de masas realmente floreció con el gobierno de Lula, pero sin la "ruptura necesaria" que preconizaba su partido. No obstante, la gestión de Lula no fue una simple continuación de la de Cardoso. Aunque, por un lado, las líneas generales de la política económica se mantuvieron y no se reestatizaron las empresas privadas ni se renegoció la deuda externa, la figura del Estado como conductor del desarrollo sí volvió a aparecer en el discurso y parcialmente en la realidad.

La alternancia en el poder: la victoria de Lula

En octubre de 2002, en su cuarta contienda consecutiva por la presidencia de la república, Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido presidente de Brasil. Derrotó en la segunda vuelta al candidato de la alianza PSDB-PMDB, el senador *tucano*[6] José Serra, exministro de Planeación y Presupuesto y de Salud de Fernando Henrique Cardoso. Lula obtuvo 61% de los votos válidos, mientras que Serra se quedó con 39 por ciento.

El candidato del PT logró sumar un nuevo contingente a su fiel electorado, que ya había votado por él en 1989, 1994 y 1998. Este nuevo grupo estaba conformado por amplios sectores de la clase media que no se habían atrevido a apoyar al candidato del

PT en los comicios anteriores. Esta vez Lula supo atraerlos. No sólo había disminuido el temor al candidato del PT, sino que también había bajado la popularidad del gobierno de Cardoso hacia el final de su mandato. El año de las elecciones, su índice de popularidad rondaba el 30 por ciento.

El gobierno de Lula es resultado de la democratización de la política y de la sociedad brasileñas. En este proceso, los movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos de izquierda, en especial el PT, tuvieron un papel crucial aunque a veces contradictorio. Crucial, porque estas fuerzas sociales llevaron a la arena política a actores que antes estaban ausentes. Y esta ampliación de la arena política, que implicó la entrada de dirigentes, partidos y movimientos que no provenían de la élite tradicional, fue un aspecto esencial de la redemocratización. Contradictorio porque, con frecuencia, esas mismas fuerzas negaron la validez de los avances democráticos. Nada más elocuente, en este sentido, que el hecho de que el PT se negara a aprobar el texto final de la Constitución de 1988 porque en aquel momento lo consideró "burgués y conservador".

Pero el PT y el Lula que llegaron al poder en 2003 no eran los mismos que en 1988. El partido ya no defendía un "Gobierno de los trabajadores" ni rechazaba las alianzas con partidos que no fueran de izquierda y, si no en la retórica, en la práctica sin duda había dejado atrás la utopía de una sociedad socialista. Se había convertido en un partido pragmático y reformista que apostaba más a la fuerza de las urnas que a la movilización de las calles. A lo largo del tiempo, había ido acumulando experiencias administrativas en varios Gobiernos municipales —incluyendo algunas capitales importantes, como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre y Fortaleza—, y en uno de los mayores estados de la federación —Rio Grande do Sul, además de Espírito Santo y Acre —, que en su mayoría se habían evaluado positivamente. Había

construido una maquinaria partidista de peso que movilizaba y consumía recursos y empleaba gente. Sus lazos iniciales con los movimientos sociales se fueron debilitando a medida que esos mismos movimientos perdieron fuerza y autonomía. Al mismo tiempo, el partido fortaleció sus raíces en la estructura sindical a través de la CUT, estrechamente ligada al partido.

Aunque cada vez estaba más inserto en la política real, el PT había sido capaz de mantener y consolidar su imagen de partido ético y asociado a los intereses de los asalariados y de los pobres, pese a que sus principales cuadros y dirigentes habían surgido de la clase media o ascendido a ella.

Lula también había cambiado en ese periodo. Él mismo, para poder presentarse de nuevo como candidato en 2002, exigió a su partido la libertad de hacer alianzas más amplias. Esto permitió la elección del senador *mineiro* José Alencar, político moderado y gran empresario del ramo textil, como candidato a la vicepresidencia en su planilla. Para contender en las elecciones, Alencar se afilió al Partido Liberal (PL).

A pesar de los cambios que sufrió el partido, y en especial su candidato, el PT seguía manteniendo un discurso de ruptura respecto a los lineamientos del gobierno de Cardoso, y esto despertaba temores en amplios sectores de la clase media e incluso en los sectores populares, por no hablar del mercado financiero. Se temía que un eventual gobierno de Lula interviniera en las inversiones financieras para reducir la deuda pública —seguía vivo el trauma de la confiscación del primer Plan Collor— y pusiera en riesgo la estabilidad monetaria. Para asegurar que su gobierno sería distinto, el candidato del PT firmó una Carta a los Brasileños que salió a la luz en junio de 2002. Lo dicho allí chocaba con las tesis que la convención nacional del partido había aprobado apenas unos meses antes, a finales de

2001, y que se publicaron en un documento titulado "La ruptura necesaria".

Así, el gobierno de Lula se inauguró con un difícil dilema: el nuevo presidente tenía que responder, por un lado, a la expectativa de cambio que había suscitado su elección; por el otro, tenía que superar los temores que persistían en el mercado financiero y en la sociedad para asegurar la estabilidad económica alcanzada con el Plan Real, estabilidad que la población veía como la herencia principal y más positiva del gobierno de Cardoso.

La formación del nuevo Gobierno

Los nombramientos para los puestos clave de la economía dejaron ver la preferencia del presidente por la estabilidad económica. Como ministro de Hacienda se eligió a Antonio Palocci, que se había ganado la simpatía de los empresarios como exalcalde de la próspera ciudad de Ribeirão Preto, en São Paulo, el corazón de la moderna agroindustria del azúcar y el alcohol. Palocci, que también fue diputado federal y se había dedicado a las cuestiones tributarias, asumió la dirección del equipo de transición del presidente electo. Se le veía como un petista cercano al sector privado.

Como presidente del BC se nombró a Henrique Meirelles, un ejecutivo de altas finanzas que había ocupado la presidencia global de un gran banco estadounidense. Elegido diputado federal por el PSDB, tuvo que desafiliarse de ese partido para asumir el cargo. Lula aseguró a Meirelles que no interferiría en la autonomía del BC.

Al mismo tiempo, Lula nombró ministro-jefe de la Casa Civil de la presidencia de la república a un típico representante de la

maquinaria del PT, una figura simbólica de la izquierda brasileña: José Dirceu. No había duda de que el PT llevaba las riendas de la política del Gobierno.

Para conformar los demás ministerios, Lula siguió la tradición del presidencialismo brasileño de elegir representantes de sectores sociales con intereses divergentes, cuando no antagónicos.

Aunque esta heterogeneidad en ocasiones dio tonalidades disonantes a las políticas gubernamentales, también proporcionó al Gobierno un mayor espacio para maniobrar políticamente. La capacidad gubernamental para abrigar estas contradicciones redujo el radio de acción de las oposiciones.

Si se analiza el origen social de los integrantes del más alto nivel —ministros, BC— y los cargos de confianza (secretarios), salta a la vista que hubo un cambio en la élite del poder. No desaparecieron las figuras vinculadas con la gran burguesía ni los profesionistas de clase media, pero es evidente la aparición de los sindicalistas; algunos, viejos compañeros de lucha del presidente Lula.

Lula y el presidencialismo de coalición

Además de granjearse la confianza de los mercados, el nuevo Gobierno se vio de entrada ante la necesidad de ampliar su base de apoyo en el Congreso.

Lula fue elegido por una coalición formada por los siguientes partidos, además del PT y del PL: el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Comunista Brasileño (PCB) y el Partido de la Movilización Nacional (PMN). Sumados, los representantes de estos organismos políticos no daban al presidente la mayoría en el Congreso. Para librar esta situación, Lula integró a su gabinete

representantes de partidos que no habían estado a su lado en la contienda electoral.

Temiendo convertirse en rehén del PMDB, Lula optó por no hacer de él su colaborador preferente. Para asegurarse una holgada mayoría y no inflar artificialmente al PT, como le había sucedido al PSDB tras la victoria de Cardoso, Lula y sus asesores políticos fomentaron la migración de diputados y senadores elegidos por la oposición a partidos menores de la coalición gobiernista que se gestaba. De este intercambio partidista poselectoral salieron fortalecidas agrupaciones como el PL y el PTB.

Además de acoger a los pequeños partidos y al PMDB, Lula dio cabida en su gabinete a las diversas corrientes de su partido. Esta composición resultó en más de 30 carteras ministeriales. Las empresas estatales se sometieron a una ocupación político-partidista más intensa que en el Gobierno anterior, fenómeno que afectó también a las agencias reguladoras.

La crisis política del *mensalão*, que analizaremos más adelante, puso en evidencia la vulnerabilidad de una alianza política organizada con base en el apoyo *ad hoc* de pequeños partidos que más parecían siglas en alquiler.

En su segunda gestión, Lula, que había aprendido la lección, organizó sus bases de apoyo parlamentarias en torno a la unión PT-PMDB, pero sin dejar fuera a los demás partidos aliados. Esto dio como resultado la más grande coalición de partidos gobiernistas desde que la democracia había vuelto al país.

Aunque sirvió para proteger al Gobierno de nuevas crisis políticas y conformar una robusta alianza electoral para la contienda presidencial de 2010, la unión con el PMDB no se tradujo en una producción legislativa importante. La agenda de reformas se paralizó, con excepción de algunos cambios introducidos al principio de la primera gestión en materia de

pensiones para el sector público —que llevaron a una escisión del ala izquierda del PT y a la formación del Partido Socialismo y Libertad (PSOL)—, y de algunas iniciativas de la llamada agenda macroeconómica, heredada del Gobierno anterior y adoptada por el equipo de Palocci. Lula, que había criticado la estructura sindical cuando fue presidente del entonces Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no tocó dicha estructura cuando llegó a la presidencia del país. Para sellar su alianza con las centrales sindicales, apoyó un proyecto que les reservaba parte de los recursos provenientes de la cuota sindical obligatoria, además de vetar el dispositivo que otorgaba al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) el poder de auditar el uso de esos recursos.

La aceleración del crecimiento y la distribución del ingreso

Cuando Lula asumió la presidencia, la inflación estaba al alza. Las cuentas fiscales del país habían mejorado desde 1999, pero no eran lo suficientemente robustas como para acabar con la incertidumbre surgida a lo largo de ese año ante la perspectiva de que Lula esta vez sí llegara al poder. Ante esa situación, durante los últimos meses de su gobierno, Cardoso había negociado con el FMI un préstamo de 30 000 millones de dólares; puso en conocimiento de los términos del préstamo a todos los principales candidatos a sucederlo, y Lula dio su apoyo tácito a la iniciativa: era una de las condiciones para que el FMI aprobara la solicitud.

La política económica durante la primera gestión de Lula

La política de Palocci y Meirelles enfrentó la coyuntura económica tomando medidas de ajuste fiscal y monetario más radicales que las adoptadas por Fernando Henrique Cardoso. El ajuste se expresó en un estrechamiento simultáneo en la política monetaria, con incrementos sucesivos en las tasas de interés hasta mediados de 2003 y con la adopción para el periodo de 2003 a 2006 de una meta de resultado primario—el saldo entre ingresos y egresos del Gobierno antes del pago de intereses— más alta que la fijada por la administración de Cardoso. Las medidas de ajuste tuvieron éxito, pues refrenaron las presiones inflacionarias y dieron credibilidad al Gobierno en los mercados financieros. Pero Palocci y Meirelles fueron blanco del fuego amigo del PT y de sus principales representantes en el más alto nivel del Gobierno. La intensidad de este fuego sólo cesó cuando los resultados de la política económica se consolidaron, a partir de 2005. Palocci y Meirelles sobrevivieron porque contaron con el respaldo de Lula.

A partir del segundo semestre de 2003, la inflación empezó a declinar claramente, y para 2006 había caído a menos de 4%. La caída de la inflación vino seguida de la reducción de la tasa de interés y la reanudación del crecimiento. Al principio su motor principal fue el comercio exterior. La devaluación del real acumulada entre 2001 y 2002 dio impulso a las exportaciones brasileñas, que entre 2000 y 2004 pasaron de aproximadamente 60 000 millones de dólares a 100 000 millones de dólares. También las favoreció la expansión de la economía mundial y el alza de los precios de las *commodities* agrícolas y minerales, que se debió sobre todo al crecimiento acelerado de China.

Brasil, productor competitivo de una amplia gama de *commodities*, fue uno de los países que más se beneficiaron del crecimiento acelerado de la demanda china, que continuaría en los años siguientes. Entre 2004 y 2008 el valor de las

exportaciones brasileñas casi se triplicó: pasó de 100 000 millones de dólares a 200 000 millones de dólares anuales. La participación de las *commodities* aumentó en la agenda de exportaciones.

Mientras las exportaciones crecían y con ello generaban mayores superávits en la balanza comercial, la entrada de capitales recuperaba la tendencia ascendente observada en la década de 1990. Sobraban recursos en el mundo, que hasta 2007 habría de vivir una larga etapa de relativa tranquilidad y optimismo. Lo cierto es que, entre 2003 y 2008, la economía mundial vivió su quinquenio más brillante desde el periodo de 1968 a 1973. Con superávits crecientes en la balanza comercial y una abundante entrada de capitales, Brasil presentó entre 2004 y 2007 superávits en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que registra todos los ingresos y egresos de divisas del país. Para mitigar la tendencia a la valorización del tipo de cambio, el BC adoptó una política de acumulación de reservas. En 2007, 20 años después de la moratoria de la deuda externa, Brasil se convirtió en acreedor neto extranjero, es decir: el valor de sus activos —créditos por recibir más reservas internacionales— superó el valor de sus pasivos en moneda extranjera. Ésta era la justificación que faltaba para que el país recibiera, a principios de 2008, el reconocimiento como *investment grade* de las agencias calificadoras de riesgo.

Progresivamente, la fuerza motriz del crecimiento de la economía dejó de ser la exportación y empezó a ser el consumo interno. Éste se vio impulsado por la expansión del empleo formal, la política de aumento del salario mínimo por encima de la inflación —el salario mínimo creció, en términos reales, aproximadamente un 40% en el gobierno de Cardoso y un 60% en el de Lula—, la ampliación del acceso al crédito y el

fortalecimiento de los programas de transferencia directa de ingreso a las familias más pobres.

La coyuntura económica de inflación reducida y tasa de interés nacional decreciente facilitó el acceso al crédito. Entre 2003 y 2008, el crédito total en el país pasó de poco más de 25% del PIB a más de 40% y siguió en aumento durante los años siguientes, al grado de despertar preocupaciones ante la velocidad de su expansión y la eventual formación de burbujas crediticias. Los bancos públicos, sobre todo la Caja Económica Federal, se destacaron en la cesión de créditos a consumidores de bajos ingresos y siguieron concediendo préstamos personales aun en los momentos de retracción económica.

No fue menos importante el ritmo acelerado de creación de empleos formales. A partir de 2004 se observó una creación anual neta de más de 1.5 millones de puestos de trabajo en promedio, tendencia que no se interrumpió sino hasta 2009, por los efectos que tuvo la crisis financiera global sobre la economía nacional. Así, al finalizar las dos gestiones de Lula se habían creado más de 10 millones de empleos formales, lo que hizo caer a la mitad la tasa de desempleo registrada al inicio del periodo. El desempleo no sólo disminuyó gracias a la intensa creación de puestos de trabajo, sino también a que el número de personas que ingresaban por primera vez al mercado laboral creció menos, fruto, entre otros factores, de un cambio demográfico iniciado en la década de 1970: la reducción acentuada del ritmo de crecimiento de la población brasileña. Este cambio demográfico empezó a reflejarse en el mercado laboral en la primera década del siglo XXI.

El surgimiento de una nueva clase media

En ese mismo periodo la pobreza se redujo significativamente y un gran contingente de personas —se estima que más de 30 millones— ascendió socialmente a la llamada clase C, que agrupa a las familias cuyo ingreso es de aproximadamente 1 200 a 4 800 reales. La gran movilidad social ascendente se debió a una combinación entre la baja inflación, el crecimiento del empleo y la expansión del crédito. Hubo también una movilidad ascendente de la clase E a la clase D. En la base de la pirámide social, el motor más importante del ascenso fue el incremento en la transferencia de ingreso a través de *Bolsa-família* y otros programas sociales del Gobierno. Con mayores ingresos y crédito, el consumo popular se expandió. La canasta de consumo de la clase C incorporó artículos a los que antes sólo tenían acceso las clases A y B, como computadoras y automóviles. El uso de teléfonos celulares se generalizó. Además se abrieron las puertas al financiamiento para obtener una vivienda propia, la principal aspiración adquisitiva de la nueva clase media.

El surgimiento de una nueva clase media fue un fenómeno de grandes proporciones, con implicaciones socioeconómicas y políticas. La clase C pasó a representar a más de 50% del electorado brasileño y su poder adquisitivo superó al de las clases A y B juntas.

Llamar clase media al amplio contingente poblacional que conforma la clase C es discutible. La clase media no se define únicamente por su ingreso. Pero es indiscutible que el consumo de la llamada clase C fue el principal motor del crecimiento del PIB y un factor que atrajo y generó nuevas inversiones en el periodo reciente. En los años inmediatamente posteriores al Plan Real había tenido lugar un fenómeno semejante, hasta que las crisis exteriores de finales de la década de 1990 hicieron disminuir los ingresos de los consumidores más pobres. Como a partir de 2004 no hubo crisis exteriores, el fenómeno se repitió

en mayor escala e intensidad. Ésta es una de las razones por las que, durante ese periodo, Brasil fue percibido de un modo tan favorable en el extranjero: además de una economía estable, en crecimiento, con las finanzas en regla y una democracia consolidada, al menos en comparación con la mayoría de las naciones en desarrollo, el país proyectaba la imagen de una sociedad en que las clases medias se expandían.

Los alcances de este fenómeno social son profundos. Las nuevas clases medias generan exigencias inéditas sobre el Estado. Su surgimiento viene acompañado de una expansión de la oferta privada en los sectores educativo y sanitario. En la primera década del siglo XXI se duplicó el número de clientes de planes privados de salud: hoy sus usuarios suman aproximadamente 50 millones de personas. La educación superior pasó por un proceso parecido, aunque cuantitativamente más modesto: las instituciones privadas ya responden por casi 80% de la oferta total de matrículas. La expansión de la oferta privada de servicios sociales plantea al Estado nuevas exigencias en materia de regulación, que ya son temas de la agenda política. Por otro lado, el ascenso de un nuevo e inmenso contingente de personas a un nivel de ingresos que ya entra en el marco de la tributación directa a través del impuesto sobre la renta tiende a reforzar la autopercepción del electorado como *tax payer*, lo que agrava el descontento social ante la elevada carga tributaria sin que exista una contrapartida en servicios públicos que las nuevas clases medias consideren aceptables.

La política económica en el segundo mandato de Lula

En 2006, el crecimiento superó el 6% y, al año siguiente, se mantuvo por encima de 5%. Una vez revitalizado el consumo

interno, las importaciones empezaron a crecer a una velocidad que superaba la de las exportaciones, y esto hizo que el superávit de la balanza comercial se redujera de más de 45 000 millones de dólares en 2005 a menos de 25 000 millones de dólares en 2008. La cuenta corriente volvió a presentar un pequeño déficit que habría de aumentar en los próximos años hasta llegar a 2.5% del PIB al final del periodo en cuestión. Pero no faltó financiamiento extranjero para cubrir ese déficit. Al contrario, con excepción de un breve lapso —de finales de 2008 a 2009—, el ingreso de dólares al país se mantuvo constantemente por encima de su salida. Las reservas internacionales no dejaron de engrosarse en la medida en que el BC compraba dólares para suavizar la tendencia a la valorización de la tasa de cambio. Aun así, ésta se valorizó significativamente, más que en los primeros meses del Plan Real. Pero ahora Brasil gozaba de una economía estable y contaba con términos de intercambio muy favorables gracias al aumento de la demanda de *commodities* y de sus precios en el mercado internacional.

Junto con la sensación de que podría ser duradera la tendencia a la valorización del real —que, en última instancia, tenía que ver con la creciente demanda de *commodities*, fruto del crecimiento acelerado de China— volvió a surgir el debate sobre el riesgo de que la economía brasileña se desindustrializara, debate que había permanecido latente desde la devaluación del cambio de enero de 1999.

La gran novedad respecto al pasado reciente fue precisamente China, un país que habría de volverse el principal socio comercial de Brasil en 2010. China, gran importadora de productos primarios, se convirtió a lo largo de la primera década del siglo XXI en una destacada exportadora de una amplia gama de manufacturas. La apreciación del cambio acentuó las dificultades que tuvo que enfrentar la industria brasileña para

competir con los productos chinos, sobre todo en el mercado interno, pero también en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos. En términos relativos, la presencia de las exportaciones brasileñas en el mercado estadounidense se redujo mucho durante las primeras décadas del siglo XXI. El aumento de las exportaciones a China y la reducción de las exportaciones a Estados Unidos se reflejaron en un descenso importante de la participación de los productos manufacturados en el total de las ventas externas de Brasil, que pasó de alrededor de 50% en 2000 a aproximadamente 30% 10 años después.

A juzgar por el pasado, el gobierno de Lula reaccionaría a este cuadro cerrando la economía para proteger la industria brasileña. No faltaron líderes empresariales que se manifestaran en este sentido. Pero el Gobierno se limitó a mantener una política de compra de reservas internacionales para impedir que el real se valorizara aún más.

El cuadro internacional, muy favorable, permitía al Gobierno mantener el crecimiento acelerado, la inflación bajo control y un relativo equilibrio en la situación fiscal y en las cuentas externas, pese a la velocidad con que se expandían el gasto del Gobierno y el crédito al consumidor. Impulsado por el consumo de las familias y por el gasto del Gobierno, el crecimiento acelerado despertaba gran optimismo y una sensación de bienestar, sobre todo entre los más pobres. Entre 2002 y 2009, los ingresos de este grupo se elevaron más de 60%, mientras que los de los más ricos aumentaron alrededor de 12%. Todos los barcos subían con la marea de la economía, pero el de los pobres más rápido que los demás.

No obstante, en el segundo semestre de 2008, Brasil sintió los efectos que, a partir de la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, se habían extendido por el mundo financiero

global. La crisis hipotecaria que se desarrollaba en Estados Unidos desde el año anterior, se volvió dramática y generalizada.

La contracción general del crédito y de las inversiones en el mundo sacudió a la economía brasileña. El Gobierno tomó medidas para impedir la recesión. Usó reservas internacionales para financiar el comercio exterior, amplió la liquidez del sistema financiero reduciendo los intereses y el encaje bancario, incrementó el gasto público y otorgó estímulos fiscales a algunos sectores, como el automotriz. Las medidas dieron el resultado esperado: tras una fuerte desaceleración a finales de 2008, la economía volvió a dar señales de vida en el segundo trimestre de 2009. En términos comparativos, Brasil, como China e India, salió mejor librado —y antes— de la crisis, que se prolongaría en Europa y Estados Unidos.

En un mundo en el que los países desarrollados seguían en crisis, Brasil reforzó su imagen como potencia económica emergente. Los intereses internacionales sumamente bajos y el crecimiento reducido en los países desarrollados pronto hicieron que Brasil volviera a ser un poderoso imán para el capital extranjero a una escala aún mayor que antes. Añádase a esto que el precio de las *commodities* no tardó en recuperarse en el mercado internacional por influencia del crecimiento retomado en China. Para Brasil, en suma, el cuadro externo no tardó en volver a ser favorable. La tasa de cambio volvió a valorizarse. Entre las monedas de los países emergentes, el real fue la que más se valorizó durante los dos años que siguieron a las crisis.

Pero el Gobierno prefirió prolongar las medidas de fomento a la economía. Había alcanzado una victoria económica y política y se sentía lo suficientemente confiado como para sostener que esas medidas continuaban siendo necesarias, pese a las advertencias de que, de seguir vigentes una vez que se

superaran los efectos de la crisis, dichas medidas podrían sobrecalentar la economía y acelerar la inflación. La oposición vio motivos electorales en la decisión de mantener los estímulos, pues se acercaban las elecciones generales de 2010.

Ese año, Brasil creció más de 7% y generó tres millones de empleos formales. Con ello, el promedio de crecimiento durante los ocho años del gobierno de Lula superó el 4%, es decir, estuvo por encima del 2.5% del periodo de Cardoso, pero por debajo del promedio de varios otros países emergentes. Y, no obstante, la inflación se aceleró: cerró el año en un 6% aproximadamente, con tendencia a crecer. Junto con la contención del gasto, que durante el gobierno de Lula había superado por mucho el crecimiento del PIB, el control de la inflación fue el mayor desafío que Lula heredó a su sucesora.

La política social: más continuidad que ruptura

También en el área social hubo más continuidad que ruptura con las políticas que se venían estructurando desde la administración anterior, siguiendo el camino trazado por la Constitución de 1988. Se trataba de una continuidad con más recursos, que provenían de las sustantivas ganancias en materia de recaudación, y que se canalizaron en gran medida a las políticas sociales, dejando ver una clara prioridad política.

En la educación, por ejemplo, el Fundef se convirtió en el Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), e incluyó también a la educación media superior, además de la primaria y secundaria. Para evaluar la educación básica se incorporaron dos pruebas complementarias y en 2007 se estableció un índice de desarrollo. Ese mismo año se lanzó el

Plan Nacional de Educación (PNE), con metas para la evolución de ese índice. El consenso en el terreno de la educación básica también se expresó en la sociedad. En 2006, con el apoyo de grandes empresas, se creó el movimiento Todos por la Educación, no sólo con el propósito de discutir y observar las políticas gubernamentales para la educación básica, sino también de exigir resultados y colaborar con su planteamiento y ejecución en los tres niveles del Gobierno. No obstante, aunque se aportaron más recursos públicos y parte de la sociedad se movilizó, los resultados fueron modestos en lo concerniente a la calidad educativa. Los mayores problemas los enfrentaba la educación de nivel medio superior, para jóvenes de entre 15 y 17 años, y las materias de ciencias y matemáticas. A nivel medio superior de hecho se redujo el número de inscritos y aumentó la tasa de deserción, un resultado sorprendente dada la universalización de la primaria y secundaria.

Para la imagen del Gobierno, la política social más importante fue, sin duda, el programa *Bolsa-família*, que resultó de la unión de cuatro programas de transferencia de ingreso condicionada creados por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. La decisión de unirlos y convertirlos en la insignia de las acciones del Gobierno en el terreno social se dio después de que fracasara el experimento del programa *Fome Zero*,[7] cuyo objetivo era fomentar la agricultura familiar mediante la distribución local de alimentos a la población necesitada, una de las principales premisas electorales de Lula cuando era candidato.

Al cambiar el *Fome Zero* por el *Bolsa-família*, el Gobierno relegó a un segundo plano un programa cuyo ADN llevaba la marca de la izquierda cristiana, presente en la formación del PT, para abrazar un programa que se había puesto en boga en Latinoamérica en la

década de 1990 bajo los auspicios del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este cambio produjo resultados ventajosos. Además de unir los programas de transferencia de ingreso, el gobierno de Lula amplió sustantivamente el número de beneficiarios —pasó de aproximadamente 4 a 12 millones de familias, entre 2002 y 2009—, incrementó el valor de los apoyos y los extendió a familias que tuvieran jóvenes de entre 15 y 17 años inscritos en la escuela. Al crecer el número de beneficiarios y la cantidad de recursos transferidos, *Bolsa-família* desempeñó un papel importante en la reducción de la pobreza, sobre todo en el nordeste, y ayudó a consolidar la amplia mayoría electoral de Lula en la región.

Al *Bolsa-família* se sumó la política de reajuste real del valor del salario mínimo, como ya se mencionó en la sección dedicada a la economía y la política económica. Además de repercutir en los salarios más reducidos del mercado laboral, el aumento del salario mínimo se reflejó en el crecimiento del volumen de transferencias hechas a familias pobres por medio de otros programas sociales creados en administraciones anteriores. Esto se debió a que los apoyos otorgados por estos programas están constitucionalmente indexados al salario mínimo. Para dar una idea del impacto de ese conjunto de programas, incluyendo el *Bolsa-família*, cabe mencionar los datos recabados por la Investigación Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD, por sus cifras en portugués)[8] de 2006. Según estos datos, casi 30% de la población brasileña recibía ese año al menos un tipo de apoyo social otorgado por el Gobierno; el porcentaje llegaba a 45% en las regiones más pobres del país, como el nordeste.

En materia de visibilidad política, el *Bolsa-família* superó por mucho al programa de reforma agraria, una de las banderas históricas del PT. Esto no quiere decir que la reforma agraria se

interrumpiera. Al contrario, al agotarse la reserva de tierras expropiables, cosa que empezó a suceder hacia el final del gobierno de Cardoso, el gobierno de Lula recurrió cada vez más a la compra de tierras para destinarlas a la reforma agraria y asentar en ellas 600 000 familias entre 2003 y 2010. Esto implicó un mayor desembolso. Se gastó mucho dinero a lo largo de las dos gestiones y fueron pocos los resultados que se obtuvieron en cuanto al arraigo de esas familias a la tierra y la viabilidad económica de dichos asentamientos. No en vano las relaciones entre el Gobierno y el MST se tensaron aún más.

Las aspiraciones de las nuevas clases medias no escaparon del radar del Gobierno. En 2009 se echó a andar un programa destinado a la adquisición de vivienda propia, llamado Mi casa, Mi Vida, con recursos subsidiados para los sectores sociales que tenían menos ingresos. Este programa ganó fuerza en los años siguientes. Además del acceso a una vivienda propia, el Gobierno fue sensible ante la aspiración de acceder a la educación superior. Para apoyar a los alumnos de más bajos recursos se dieron estímulos fiscales a las instituciones privadas, que concentran la mayor parte de las inscripciones a nivel superior, a cambio de la concesión de becas de estudio a estudiantes pobres. Las políticas de acción afirmativa, que ya se habían planteado desde el Gobierno anterior, ganaron fuerza a nivel federal y estatal. Éstas, concentradas en la educación superior, dieron lugar a un encendido debate público que puso en movimiento a intelectuales de todas las posturas. Uno de los partidos de oposición, los Demócratas (DEM, nueva sigla del viejo PFL), presionó al STF para que juzgara si la política de cuotas era constitucional. La acción judicial no se juzgó en el STF sino hasta 2012, y fue favorable a la constitucionalidad de las cuotas raciales. Pero el debate público prosiguió.

El gobierno de Lula tampoco descuidó a las viejas clases medias. Los salarios de los funcionarios federales y el número de concursos para ingresar al servicio público aumentaron significativamente. Se dedicó una atención importante a los profesores universitarios, cuyos salarios base se reconfiguraron. De hecho, la virtual ausencia de aumentos salariales generalizados en las universidades federales había sido uno de los motivos de descontento entre una parte representativa de los profesores universitarios en relación con el gobierno de Cardoso.

Aunque en la práctica la política social y económica del nuevo Gobierno continuó la política del Gobierno previo, retóricamente Lula y su partido estigmatizaron desde el principio la gestión de su antecesor. De esta estigmatización nació el eslogan "herencia maldita", acompañado de otro que se repetía en los discursos en los que el presidente elogiaba los logros de su administración: "nunca antes en la historia de este país". Con esta expresión se propagaba la idea de que el gobierno de Lula había inaugurado una nueva fase en la historia brasileña.

Entre las pocas referencias positivas al pasado, Vargas fue, por mucho, la más importante en la estrategia discursiva de Lula. Esto permitía al presidente acentuar su contraste simbólico con el gobierno de Cardoso, que se había propuesto superar la Era Vargas.

Para comunicarse con la población y reforzar la identidad que su biografía de hombre del pueblo ya le confería, Lula recurrió, más que a líderes políticos del pasado, a símbolos y expresiones lingüísticas de la cultura popular. Así, construyó para sí mismo la imagen de un padre de familia benévolo, comprensivo y justo en el trato que daba a todos sus hijos, pero especialmente atento a los más necesitados. Los críticos vieron en esto un populismo regresivo, que reducía a los ciudadanos a

una condición infantil y subordinada. No obstante, la retórica presidencial fue bien acogida por amplios sectores de la población, que seguía siendo mayoritariamente pobre y no estaba plenamente incorporada al universo de la ciudadanía. Esto no sólo se debió a la eficacia comunicativa del presidente, derivada de su biografía, sino también al hecho concreto de que la retórica presidencial venía acompañada de una efectiva ampliación de los programas de transferencia de ingreso y de un significativo aumento del salario mínimo.

Esta combinación de atributos personales y logros sociales del Gobierno explica por qué Lula sobrevivió políticamente a una serie de escándalos y alcanzó en su segundo mandato niveles de popularidad sin precedentes.

La crisis política y la crisis de la política: serie de escándalos

Durante sus largos años como oposición, el PT había enarbolado la bandera de la ética en el terreno político, denunciando actos de corrupción supuestos o comprobados. Incluso quienes no se identificaban con el partido estaban convencidos de que su conducta sería moralmente distinta. Pero esta convicción se derrumbó.

El gobierno de Lula estuvo marcado por escándalos de gran repercusión. Aunque en administraciones anteriores también había habido escándalos e incluso habían llevado a un presidente al *impeachment*, los de la gestión de Lula se distinguieron por la acción organizada de dirigentes de partidos y miembros del primer nivel del Gobierno en episodios que se expusieron a la opinión pública.

El *mensalão*

De todos los escándalos que tuvieron lugar durante la gestión de Lula, el llamado *mensalão* fue el único que puso en riesgo al Gobierno y potencialmente la estabilidad política del país. El escándalo empezó cuando el diputado Roberto Jefferson (PTB), hasta entonces aliado del Gobierno, profirió un discurso en que acusaba al equipo de Lula de sobornar diputados con dinero público y privado, mediante pagos mensuales y sin el conocimiento del presidente, para que aprobaran los proyectos que interesaban al Gobierno. El blanco principal de la acusación era el ministro jefe de la Casa Civil, José Dirceu, a quien la Cámara de Diputados terminaría destituyendo.

La estrategia de defensa del Gobierno se dio en dos frentes. En el frente político, consistió en negar la existencia de un esquema de compra de votos en el Congreso, concentrar las culpas y responsabilidades en el tesorero del PT y decir que las denuncias eran una orquestación golpista de una élite molesta ante el éxito de un trabajador en la presidencia de la república. Según el discurso oficial, Lula no sabía nada del supuesto esquema. En el frente jurídico, el Gobierno alegó que los movimientos financieros identificados por la CPI eran ajustes de cuentas entre los partidos de la coalición gobiernista que se habían llevado a cabo con recursos que no se incluían en la contabilidad oficial que se entregaba a la Justicia Electoral. Es decir, se argumentaba que no había un esquema organizado y centrado en la Casa Civil para comprar diputados, alimentado con recursos desviados de los cofres públicos, sino operaciones puntuales que se habían efectuado con recursos de la llamada "caja dos".[9] Este argumento tenía como objetivo tipificar los eventuales delitos como infracciones contra la legislación electoral, imputables a los representantes de los partidos, y evitar que se tipificaran como un delito de responsabilidad, lo cual podía dar lugar a una demanda de *impeachment* contra el

presidente de la república si surgía algún indicio de que estaba involucrado.

El Gobierno venció la batalla política. La oposición decidió no luchar por la destitución del presidente, pues temía apostarle a la polarización política y perder, y temía también los efectos que tendría eso a largo plazo en la convivencia democrática, así como la posibilidad de que la sociedad brasileña se dividiera en dos. Había imaginado que el mero escándalo político bastaría para desgastar a Lula y hacerlo fracasar en las elecciones de octubre de 2006. Pero la historia fue distinta.

Es cierto que la popularidad del presidente cayó de manera significativa a lo largo de 2005. Pero este fenómeno no fue más allá de los sectores que tenían más ingresos y mayor nivel educativo, y fue transitorio. Al iniciarse la contienda electoral, a finales del primer semestre de 2006, el presidente ya había recuperado la popularidad perdida y descollaba como el franco favorito a su propia sucesión, a pesar de que un nuevo escándalo, de otra naturaleza, hizo caer a su ministro de Hacienda. Sobre los daños causados por las denuncias prevalecieron las ganancias materiales que resultaban de la continua expansión del ingreso, del crédito, del empleo y de la transferencia de ingresos del Gobierno por medio de programas como *Bolsa-família*, a los que los más pobres eran naturalmente más sensibles. Lula perdió momentáneamente a la clase media, por así decirlo, pero su apoyo en la base de la sociedad se consolidó.

En el ámbito del PT las voces minoritarias que insistían en "refundar" el partido callaron. Las represalias morales se concentraron en expulsar al tesorero del partido y sustituir a su presidente.

No obstante, el procurador general de la república presentó ante el STF una denuncia contra varios ministros del Gobierno por participar en el supuesto esquema del *mensalão*. El tribunal

aceptó la denuncia, pero no la juzgó sino hasta 2012. Resultó en la condena de 25 acusados, entre parlamentarios, exministros, banqueros y un publicista responsable del andamiaje financiero del esquema. Entre los condenados había dos figuras de la primera línea del PT, José Dirceu y José Genoino —éste, presidente del partido en aquel entonces—, además del tesorero del partido, reo confeso y principal operador de las transacciones financieras del *mensalão.*

Lula salió de esos episodios un poco golpeado y sin dos de sus hombres fuertes en el gabinete, Dirceu y Palocci, sustituidos, respectivamente, por Dilma Rousseff, hasta entonces ministra de Minas y Energía, y Guido Mantega, que ocupaba la presidencia del BNDES, tras haber sido ministro de Planeación, Presupuesto y Gestión. Su imagen personal sufrió menos que la de su partido, que había alzado durante años la bandera de la ética en la política. Esta coyuntura acentuó lo que ya era un rasgo estructural del cuadro político: Lula se había elevado por encima del PT y se había vuelto más grande que su partido. Éste, sin embargo, seguiría siendo la sigla preferida de la mayor parte del electorado. Investigaciones de identidad partidista revelan que, a lo largo de la última década, el PT se ha asegurado regularmente un porcentaje de aproximadamente 15% del electorado, dos veces más que el segundo lugar (el PMDB), y tres veces más que el tercero (el PSDB).

Los partidos de oposición más importantes no fueron capaces de capitalizar políticamente el daño momentáneo que sufría el PT. Esto se debió en parte a que surgieron denuncias que involucraban a dichos partidos. En el proceso de averiguación del *mensalão* salieron a relucir indicios de que en 1998 en Minas Gerais había operado un esquema semejante en el que contratos de empresas públicas con una agencia de publicidad se usaban para conseguir fondos ilegales para la campaña de reelección del

entonces gobernador Eduardo Azeredo, del PSDB. Ya en la segunda gestión de Lula, a finales de 2009, el *mensalão* del DEM llegaría a los noticiarios políticos, protagonizado por el único gobernador del viejo PFL elegido en octubre de 2006.

La principal víctima de esta serie de escándalos fue el ya de por sí endeble prestigio de la política, en general, y del Congreso, en particular, aunque paradójicamente en todos esos episodios destacaba la participación de miembros del más alto escalafón del Poder Ejecutivo.

Como reacción a este estado de cosas, organismos de la sociedad civil presentaron al Congreso un proyecto de iniciativa popular —que recabó dos millones de firmas— en el que exigían que se modificara la legislación electoral para impedir que se candidatearan políticos con antecedentes penales. El proyecto *Ficha Limpa*[10] se aprobó en el primer semestre de 2010, a poco menos de seis meses de las elecciones generales de octubre. La versión aprobada consideraba que tenían antecedentes penales aquellos candidatos que hubieran sido condenados por un tribunal, aunque pudieran apelar a una instancia superior del Poder Judicial, o que hubieran renunciado a su cargo para evitar que el Legislativo revocara sus mandatos.

¿Un nuevo modelo de desarrollo?

Con la salida de Palocci, el Gobierno se distanció de la línea más liberal que había adoptado durante la primera gestión de Lula. El cambio se dio menos en la conducción de la política económica y más en el papel que se atribuía al Estado en la regulación y el fomento a la economía. Se acentuó, así, una tendencia que ya estaba presente desde el inicio de la administración, al debilitarse las agencias reguladoras creadas por Cardoso.

En el segundo mandato de Lula se fortaleció la convicción de que la clave del desarrollo económico era la alianza de las empresas estatales con algunas grandes empresas privadas, de preferencia controladas por capital nacional, con una escala de producción suficiente para competir en el mercado global. Se crearon nuevas empresas estatales o se resucitaron las antiguas, aumentó la participación accionaria del BNDES y de los fondos de pensiones de las empresas estatales en compañías privadas y en nuevas iniciativas en el área de infraestructura e insumos básicos, y se promovió la fusión de empresas privadas para formar grandes compañías controladas por capital privado brasileño.

Para impulsar la inversión se creó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Lanzado en 2007, el PAC se convirtió en una de las principales banderas de la segunda gestión de Lula. Dilma Rousseff, que sería candidata a sucederlo, recibió la atribución de coordinar el programa y el título de madre del PAC, que le dio el propio presidente.

El movimiento del péndulo hacia una posición más "estatista" significó una reaproximación entre el Gobierno y el pensamiento dominante en el PT sobre el papel del Estado en el desarrollo económico. Esto fue posible porque la política económica de la primera gestión fue efectiva y porque Brasil, como ya se dijo, se benefició del crecimiento de la economía y el comercio mundiales, que en el quinquenio de 2003 a 2007 presentaron el mejor desempeño desde el periodo de 1968 a 1973. Con más recursos disponibles gracias al aumento de la recaudación y de la capacidad de captar recursos interna y externamente, el gobierno de Lula tuvo más libertad de acción para poner en práctica lo que, con cierta exageración, denominó "un nuevo modelo de desarrollo", apoyado en el mercado interno de masas y en el liderazgo del Estado en el proceso de inversión.

El nuevo modelo ya estaba claramente trazado cuando sobrevino la crisis financiera global, que golpeó a Brasil en el segundo semestre de 2008. El gobierno de Lula aprovechó la nueva atmósfera ideológica global para reforzar la legitimidad del cambio de rumbo en el modelo de desarrollo brasileño y para forzar un contraste con el neoliberalismo que atribuía al gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

La oposición a Lula, expresada sobre todo por su antecesor, advirtió sobre los riesgos económicos y políticos de retroceder al modelo de desarrollo nacional estatista del gobierno del general Ernesto Geisel, cuando, bajo el régimen autoritario, el Estado había expandido fuertemente su participación directa en la economía. Además de la expansión estatal, se criticaba el uso de recursos subsidiados del Tesoro para ofrecer préstamos cuantiosos a un grupo limitado de empresas a través del BNDES.

El empeño del Gobierno en movilizar recursos y promover la inversión fue mayor que los resultados obtenidos. En el agregado, la tasa de inversión mostró una tendencia al alza, pero terminó en alrededor de 20% al cierre de la segunda gestión de Lula, un nivel que no bastaba para sostener un crecimiento de 5% anual sin mayores presiones inflacionarias o desequilibrios externos. En términos de infraestructura, se llegó a un cuello de botella por el crecimiento económico, que saturó los puertos y aeropuertos y deterioró las carreteras. Ante este escenario, el Gobierno titubeó entre la conveniencia de poner en movimiento capital privado para invertir en esos sectores y la dificultad de hacer las inversiones públicas que tenía programadas, lo cual se reflejó en el decepcionante desempeño del PAC.

La controversia sobre el presal

Por su simbolismo y sus posibles alcances futuros ninguna iniciativa fue tan determinante en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo como la propuesta de cambiar el marco regulatorio del sector del petróleo y del gas natural.

La propuesta se presentó ante el Congreso con carácter de urgencia a finales de 2009, en vísperas de que se iniciara la sucesión presidencial. Se refería a la explotación del llamado presal, es decir, las reservas de petróleo descubiertas en 2006 en aguas ultraprofundas de la plataforma marítima brasileña, a aproximadamente 300 kilómetros de la costa de los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Espírito Santo, en la región sudeste del país. Según estimaciones de Petrobras, en el presal hay reservas de petróleo que equivalen a 36 000 millones de barriles, más del doble de las reservas identificadas hasta entonces. De ser cierto, se incluirá a Brasil en el grupo de los 10 países con mayores reservas de petróleo y gas.

Desde el momento en que se confirmó la existencia de las primeras reservas del presal, el Gobierno utilizó intensamente el descubrimiento para reforzar la idea de que Brasil al fin se proyectaba como una potencia. Para explotar el recurso, propuso que el régimen de concesión, vigente desde 1997, cuando se aprobó la llamada Ley del Petróleo, fuera sustituido por el régimen de colaboración, en el que el Estado recibe su parte en barriles de petróleo y no en impuestos. Según el Gobierno, éste sería el único régimen capaz de asegurar el control del país sobre la explotación de esa riqueza natural.

Para los críticos, la propuesta del Gobierno no se justificaba más que desde el punto de vista ideológico y político. Alegaban que el régimen de concesión establecido por la llamada Ley del Petróleo, cuyos resultados positivos ni el propio Gobierno negaba, ya disponía de mecanismos que le permitirían al Estado apropiarse de una parte más cuantiosa del ingreso petrolero. El

cambio de régimen no sólo sería innecesario, sino también perjudicial, sobre todo porque venía acompañado de reglas que inhibirían la competencia y la atracción de mayores inversiones al sector. La propuesta gubernamental determinaba que Petrobras sería la única operadora de los campos de presal y que tendría una participación mínima de 30% en todos los proyectos que se realizaran en esa área.

El cambio del marco regulatorio del sector terminó de aprobarse en el Congreso a principios de 2010, ya en plena contienda por la sucesión. La incertidumbre que generó el nuevo marco legal, incluyendo el reparto de regalías entre los estados de la federación, sumada a una política que imponía la compra local de gran parte del equipo necesario para la explotación y distribución del petróleo, llevó a una virtual parálisis de las inversiones en el sector. En los años siguientes, en vez de autosuficiencia lo que se observó fue un aumento de la importación de combustibles por parte de Brasil.

El crecimiento y el medio ambiente

En la discusión sobre un nuevo modelo, además del papel del Estado, ganó cada vez más peso el tema del medio ambiente, a medida que la economía se expandía a una velocidad creciente y el gobierno de Lula empezaba a dar relieve a grandes inversiones en los sectores de energía y transportes. Otro punto de creciente tensión fueron los impactos ambientales del agronegocio ante el aumento de la demanda global de alimentos y la presión para que se ampliara el área destinada a la agricultura y la ganadería.

La cuestión medioambiental rebasó las fronteras nacionales y se convirtió en un asunto importante en la agenda externa del

país, tanto más cuanto que, con el desarrollo de la industria del etanol y el descubrimiento del presal, Brasil se percibía cada vez más como una potencia agropecuaria y energética.

En este contexto más extenso tuvo lugar, durante el gobierno de Lula, el proceso de toma de decisiones o de falta de toma de decisiones respecto al abanico cada vez más amplio y complejo de cuestiones relativas al uso de los abundantes recursos naturales brasileños para el desarrollo del país. Los conflictos en torno a estas cuestiones, presentes en la sociedad, se reflejaron también dentro del Gobierno. En la presidencia, Lula trataba de mediar en el conflicto, aunque tendía a inclinarse por quienes daban prioridad a la aceleración del crecimiento por encima de precauciones ambientales que consideraban excesivas.

En esos embates sobresalieron Marina Silva y Dilma Rousseff, ésta primero como ministra de Minas y Energía y después como ministra-jefe de la Casa Civil y principal responsable del PAC. Ambas serían candidatas a la sucesión de Lula.

Dilma Rousseff daba voz a una posición ampliamente mayoritaria en el empresariado, sobre todo el dedicado a la construcción pesada, así como entre los gobernadores, alcaldes y grandes bancadas parlamentarias, como la del agronegocio. Para ellos, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el MP, que había empezado a operar intensamente en el sector medioambiental desde la Constitución de 1988, obstaculizaban el desarrollo del país con el pretexto de proteger derechos colectivos difusos. No tardaron en surgir conflictos en torno a la concesión de permisos ambientales a proyectos de transportes y energía.

A Marina Silva se le criticaba por la lentitud del Ibama, órgano subordinado a su ministerio, para expedir esos permisos. Sus adversarios la acusaban de querer preservar la zona de la Amazonia Legal, que incluía parte del Cerrado, como un

"santuario ecológico". La censuraban asimismo por su resistencia a usar variedades transgénicas en la agricultura, y este reproche provenía no sólo del agronegocio, sino también de miembros de la comunidad científica. No obstante, Marina Silva contaba con el respaldo de ONG ambientalistas nacionales e internacionales que habían ganado terreno e influencia en el país a lo largo de la década de 1990. Tenía a su favor, de igual modo, el prestigio internacional que había conquistado como militante de causas socioambientales.

Fricciones sucesivas llevaron a Marina Silva a renunciar a su cargo en 2008. Atento al equilibrio de fuerzas políticas y sociales que constituía su Gobierno, Lula eligió como sustituto de Marina Silva a otro veterano de las luchas ambientales, Carlos Minc, entonces secretario de Medio Ambiente del estado de Río de Janeiro. Con el nuevo ministro, al que se tenía por más pragmático, se mitigaron los conflictos con la Casa Civil.

Pero los embates en torno a la cuestión medioambiental no cedieron. Sólo cambiaron algunos de sus personajes principales. La siguiente batalla se entablaría dentro y fuera del Congreso en torno a la propuesta de modificar el Código Forestal Brasileño. Esta lucha enfrentó a los representantes del agronegocio por un lado, y a los ambientalistas por el otro. Ambos estaban representados en la coalición gobiernista, aunque los primeros tenían mayor peso, sobre todo en la base de apoyo parlamentario del Gobierno.

El código, creado inicialmente en 1934, había sufrido ya varias modificaciones a lo largo de las décadas, en especial durante el gobierno de Cardoso, cuando se introdujeron reglas más estrictas en cuanto a la protección de la cobertura vegetal. Para los representantes del agronegocio, estas reglas, aplicadas en su opinión arbitrariamente por los fiscales, provocaban una inseguridad jurídica generalizada para los productores. Llegado

un límite, imposibilitaban gran parte de la actividad agropecuaria en aquellas áreas donde ya se había consolidado, además de impedir su expansión a nuevas zonas. Para los ambientalistas, en cambio, el código era una trinchera que había que defender, y el intento de modificarlo era una maniobra que abriría las puertas a una mayor deforestación. El gobierno de Lula llegó a su fin cuando el proyecto de ley para cambiar el Código Forestal Brasileño esperaba a ser votado en la Cámara de Diputados.

Aunque no pudo definir políticas integradas para un desarrollo sostenible desde el punto de vista socioambiental, el gobierno de Lula tuvo el mérito de reducir significativamente el ritmo de la deforestación en la Amazonia: ésa fue, interna y externamente, la carta fuerte de su administración en materia de medio ambiente. Durante su gestión, Brasil fue también el país donde se crearon más zonas de protección ambiental en el mundo.

Esta consideración nos remite a la participación de Brasil en las negociaciones relativas a la convención global sobre el clima.

La posición de Brasil en las negociaciones sobre el clima

A partir de 2007 se intensificaron las negociaciones globales en busca de un nuevo régimen de mitigación del calentamiento global y adaptación a sus efectos. El Protocolo de Kioto, firmado 10 años antes, estaría vigente hasta 2012.

Las negociaciones se dieron bajo la influencia del tercer informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), publicado en 2007, y con los ojos puestos en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebraría a finales de 2009 en Copenhague, Dinamarca (evento también conocido como la Cumbre de Copenhague). En ese informe, el IPCC señaló que el incremento de la temperatura en la Tierra aumentaría la probabilidad de escenarios críticos, y convocó a los Gobiernos a avanzar en las metas y medidas previstas en el Protocolo de Kioto. La Cumbre de Copenhague parecía ser decisiva para este fin.

Brasil, reflejando los cambios de la opinión pública nacional e internacional, ajustó su posición respecto a este tema. Desde la primera reunión cumbre, que se conoce como Río-92, celebrada ese año en la ciudad de Río de Janeiro, el Gobierno brasileño se guio por el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas entre los miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), firmada en aquella ocasión. De acuerdo con este principio, que es un elemento central de la convención, únicamente los países desarrollados estarían obligados a cumplir las metas internacionales para la reducción de emisiones, ya que históricamente son los responsables de la mayor parte de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. A esos países les correspondería también ofrecer asistencia técnica y financiera a las naciones en desarrollo para que pudieran transitar voluntariamente a una economía con bajas emisiones de carbono, en la medida de sus posibilidades y conveniencias económicas y sociales. Los países en desarrollo no estarían obligados a cumplir las metas definidas en el ámbito de la convención internacional sobre el clima. El Protocolo de Kioto concretó el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Sin embargo, la división del mundo entre países desarrollados y en desarrollo se volvió problemática tras la aceptación generalizada de la categoría de los países emergentes a lo largo de la primera década del siglo XXI. Esta categoría se confundió con un acrónimo formado por las iniciales de Brasil, Rusia, India y China: BRIC. Celebrados en general por el nuevo dinamismo que aportaban a la economía y al comercio internacionales, estos países se vieron presionados a asumir nuevas responsabilidades en temas relativos a la gobernanza mundial. En el caso de la convención sobre el clima debían someterse a metas de reducción de emisiones definidas internacionalmente en términos mesurables y verificables.

Brasil, que ocupaba el cuarto lugar entre los principales emisores del mundo en volúmenes absolutos, no escapó de estas presiones, aunque el blanco central de los países desarrollados, en especial de Estados Unidos, era China. No obstante, fue mayor el peso de las presiones internas para que el Gobierno brasileño ajustara su posición en esta materia. La cuestión adquirió relevancia política conforme creció la sensibilidad social ante la fuente primordial de las emisiones brasileñas de gases de efecto invernadero: la deforestación de la Amazonia. Y esa sensibilidad creció impulsada incluso por los programas gubernamentales de monitoreo y control de quemas y tala ilegal de madera en la región.

Así, en vísperas de la Cumbre de Copenhague, en 2009, el Gobierno presentó la enmienda al Plan Nacional sobre Cambio Climático (PNMC, por sus siglas en portugués),[11] que estaba en trámite final en el Congreso. En la enmienda se asumían metas cuantitativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; también se establecieron metas para reducir la deforestación de la Amazonia. Es decir, Brasil mantenía la posición de no asumir obligaciones internacionales en este

terreno, pero fijaba voluntariamente objetivos nacionales verificables para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Al hacer esto, el Gobierno se anticipó a la iniciativa anunciada por la senadora Marina Silva. Tras dejar su cargo, Silva se había desafiliado del PT y se había sumado al pequeño Partido Verde (PV); destacó de inmediato como probable candidata a la presidencia de la república y adversaria de Dilma Rousseff, que ya entonces había sido informalmente ungida como candidata a la sucesión de Lula. Para los críticos, éste fue un movimiento tardío y limitado. Como sea, Brasil se distinguió de sus tradicionales aliados en las negociaciones sobre el clima, como China e India, que llegaron a Copenhague con posiciones más a la defensiva. Sintomáticamente, se eligió a Dilma Rousseff como cabeza de la delegación que representaría a Brasil en la capital de Dinamarca.

En Copenhague estuvieron presentes aquellos que en las elecciones del año siguiente serían los tres principales candidatos a la presidencia. Además de Dilma Rousseff y Marina Silva, estaba allí José Serra como gobernador de São Paulo, estado que, durante su gestión, había adoptado un programa propio con metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ése fue un claro indicio de que el cambio climático se había convertido en un tema prioritario para la agenda política nacional.

La identidad de la política exterior

La política exterior ayudó de manera significativa a definir la identidad de la gestión de Lula. Además de marcar la imagen del

Gobierno en el extranjero, fue un elemento que se usó en la lucha con la oposición dentro del país.

Durante la primera gestión se le vio como una compensación a la política económica. Mientras en ésta prevalecía la continuidad con el Gobierno anterior, en la política exterior destacaban los cambios. En un terreno se serenaban los temores de los mercados, en el otro se satisfacían las demandas ideológicas de la izquierda en general y del PT en particular.

En el segundo mandato, con una política macroeconómica menos ortodoxa y una política de desarrollo más "estatista", la política económica y la política exterior empezaron a converger en torno a la idea de un Estado desarrollista y de una nación potente en el escenario internacional. En este proceso el sector defensa adquirió un relieve que no había tenido desde el periodo militar. La Estrategia Nacional de Defensa (END), presentada en 2008 sin apartarse de la tradición pacifista del país, externó la tesis de que Brasil había alcanzado una etapa de desarrollo que lo proyectaba internacionalmente y, por lo tanto, había que fortalecer sus Fuerzas Armadas. El documento destacaba la necesidad de proteger militarmente los recursos naturales del país, en especial las reservas de presal recién descubiertas, un tema caro al imaginario estatal-desarrollista y a las Fuerzas Armadas.

El diagnóstico general que sirvió de guía a la política exterior del gobierno de Lula puede resumirse del siguiente modo: con el relativo declive de Estados Unidos, salvo en la esfera militar, y el surgimiento de nuevos polos de poder político y económico, se abrió un espacio de libertad para que Brasil se insertara en la economía global y en el sistema internacional. Este fenómeno se vio fortalecido por los nuevos términos de intercambio en el comercio mundial, favorables a los países productores de *commodities*. En líneas generales este diagnóstico no dio lugar a

desacuerdos políticos. Las divergencias surgieron cuando se tradujo a acciones concretas.

Partiendo de la idea de que en el mundo se esbozaba un nuevo equilibrio de fuerzas, el gobierno de Lula trató de acentuar el contraste entre los intereses brasileños y los intereses de los países dominantes del hemisferio norte. Los intereses de Brasil se atenderían mejor a través de alianzas con los países emergentes del hemisferio sur en los diversos aspectos de la vida internacional, desde el comercio hasta el medio ambiente. En primer lugar, porque esto pondría a Brasil en mejores condiciones para emprender negociaciones inmediatas en los foros internacionales. En segundo lugar, porque el ascenso del sur fortalecería la presión a favor de la redistribución del poder en los organismos responsables de la gobernanza mundial, sobre todo en el área de finanzas (FMI) y seguridad (ONU).

Esta política, llamada Sur-Sur, no desembocó en un antagonismo sistemático entre Brasil y el norte. Más bien significó un intento de diversificar las relaciones económicas y políticas del país. Los defensores de esta política, ejercida por el canciller Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores durante los ocho años que duró el gobierno de Lula, sostienen que abrió espacios para la consolidación de Brasil en la nueva configuración multipolar del orden internacional, con su debida dosis de osadía, pues sin ella hubiera sido imposible conquistar esos espacios. Para sus críticos, la política exterior estuvo guiada por una búsqueda de prestigio circunstancial y, no pocas veces, por una evaluación nada realista de la efectiva capacidad de acción del país en el gran juego del poder global. Un ejemplo de esto sería el esfuerzo por conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. No se trataba de una reivindicación nueva, pero en el gobierno de Lula se volvió prioritaria. Para obtener la posición, Brasil se hizo de la vista

gorda ante las violaciones de derechos humanos en países árabes y africanos.

No obstante, incluso los críticos reconocen que el desempeño de Brasil en los foros multilaterales, empezando por la OMC, fue positivo. Aunque la Ronda de Doha no evolucionó ni produjo resultados concretos, la actuación de Brasil a la cabeza del G20 comercial, conformado en 2003 para hacer frente a una propuesta de los países desarrollados, reforzó la percepción de que el *soft power* brasileño era efectivo. La participación significativa del país en el ámbito del G20 financiero, reactivado como efecto de la crisis económica global de 2008, también produjo una impresión positiva, dentro y fuera de Brasil. El desempeño de Brasil en el primer grupo mostró su capacidad de construir alianzas entre los países en desarrollo, mientras que su participación en el segundo dejó claro el reconocimiento de su nuevo *estatus* por parte de los países desarrollados.

Más controvertidas, interna y externamente, fueron las acciones de política exterior adoptadas ante América del Sur.

América del Sur en el centro de la agenda

Desde la vuelta a la democracia, América del Sur estuvo en el centro de la política exterior brasileña. En el gobierno de Lula, la novedad fue el énfasis que se puso en la dimensión política de las relaciones con el entorno geográfico del país.

Se encargaron directamente de formular la política exterior para la región el diplomático Samuel Pinheiro Guimarães y el asesor especial para asuntos internacionales de la república, Marco Aurélio Garcia. Pinheiro Guimarães se había formado en el ala nacionalista del Itamaraty.[12] Garcia venía de una larga trayectoria en la izquierda: primero en la oposición clandestina a la dictadura militar y después en el PT.

Ya desde el principio quedó claro que el Gobierno veía una oposición entre la integración sudamericana y la integración hemisférica. La negociación que pretendía formar un área de libre comercio no tardó en interrumpirse. La parte brasileña consideró que el ALCA no serviría más que para cristalizar asimetrías desfavorables para el desarrollo de Brasil. La iniciativa se sepultó definitivamente en 2005, en la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina.

La política exterior frente a América del Sur se volvió más controvertida a partir de la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia y a medida que el mandatario venezolano Hugo Chávez radicalizó su "Revolución bolivariana" a nivel interno y regional. En lo que respecta a Bolivia, en mayo de 2006 tuvo lugar un episodio crucial, cuando Morales nacionalizó el petróleo y el gas y determinó que el Ejército ocupara las instalaciones de las empresas extranjeras con operaciones en Bolivia. Entre ellas se contaba Petrobras. Ante esta acción, la diplomacia brasileña reaccionó de una manera que se consideró tibia. Desde el punto de vista oficial, la suavidad de la reacción demostraba que Brasil no ejercería su liderazgo regional con arrogancia y sin comprender las aspiraciones de desarrollo que tenían sus países vecinos, más pobres.

A partir de 2005, cuando Chávez alzó la bandera del "socialismo del siglo XXI", la radicalización del régimen chavista y su búsqueda de liderazgo regional, expresada en la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), en 2004, representaron el mayor desafío político para Brasil en la región. En lugar de la confrontación, el Gobierno optó por contener dentro de ciertos límites el alcance de las iniciativas regionales de Chávez y con ello el propio liderazgo del presidente venezolano en América del Sur.

Para Chávez, la integración sudamericana representaba la actualización del proyecto de formación de la Patria Grande, acariciado por Simón Bolívar en el siglo XIX, como culminación del proceso de liberación de las excolonias españolas. El presidente venezolano consideraba que el protagonismo le correspondía a él, como heredero de Bolívar. Se trataba de integrar a los países sudamericanos bajo la égida de la República Bolivariana de Venezuela y en oposición a Estados Unidos. Esta perspectiva era contraria a los intereses de Brasil, aunque algunos miembros del Gobierno brasileño sintieran simpatía por Chávez y fueran suavemente antiestadounidenses.

Brasil, que había propuesto la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la cual recibió ese nombre en 2008, procedió de modo que la nueva institución no tuviera las características que deseaba el presidente de Venezuela. Esto quedó claro cuando se definieron los objetivos del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), al que Chávez pretendía adjudicar la coordinación de las Fuerzas Armadas de los países miembros. Por acción del Gobierno brasileño, las atribuciones que se asignaron a ese órgano fueron más limitadas. Así, incluso Colombia, que tenía relaciones especiales con Estados Unidos, aceptó tomar asiento en el consejo.

La Unasur encarnó la estrategia brasileña de consolidar la influencia preponderante de Brasil en la región a través de instituciones cuyas reglas no exigieran a los países miembros ceder parte importante de su soberanía. En esta estrategia la agenda económica perdió peso ante la agenda política de integración. Esta pérdida reflejaba las crecientes divergencias entre las estrategias económicas de los países que mantenían la orientación liberal de la década de 1990, como Chile, Perú y Colombia, y las de los países que dieron un viraje en sentido contrario, como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Brasil prefirió promover la incorporación de los "países bolivarianos" al Mercosur. La integración de Venezuela fue para muchos el tiro de gracia que acabó con la ya tambaleante unión aduanera, debilitada por el creciente proteccionismo de Argentina bajo las presidencias sucesivas de Néstor y Cristina Kirchner. El ingreso oficial de Venezuela al Mercosur, ratificado por los Senados de los demás países miembros, quedó pendiente de la decisión del Senado de Paraguay y no se consumó sino hasta 2012 en circunstancias extraordinarias.

Puede argumentarse, a favor de la estrategia brasileña, que amplió la influencia suave de Brasil en medio de las tensiones políticas latentes en la región y de la creciente inversión de empresas brasileñas en los países vecinos, tanto en los de orientación liberal como en los de orientación antiliberal. Esto permitió al país fortalecer su condición política como poder moderador y, al mismo tiempo, su presencia económica en la zona. No obstante, para los críticos de la política exterior, el Gobierno brasileño se mostró complaciente ante la exportación de la "Revolución bolivariana" a otras naciones latinoamericanas —la intrusión de Chávez en los asuntos internos de varios países de América Latina— y ante la importación de tensiones globales a América del Sur debido a las alianzas internacionales de Chávez, en particular con Irán. Desde el punto de vista de los críticos, la preferencia por ampliar el Mercosur condenaría a Brasil a procesos de integración con ganancias económicas limitadas.

Las relaciones con Estados Unidos

Tras la creación de la Unasur se conformó una institución regional aún más abarcadora: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La iniciativa se dio en

medio de las divergencias que tenían lugar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en torno a la readmisión de Cuba en ese organismo y las gestiones diplomáticas que se llevarían a cabo ante el golpe en Honduras. Brasil y Estados Unidos no estuvieron del mismo lado en estos dos episodios. Se trató de roces puntuales en una relación bilateral que se mantuvo dentro de parámetros normales. Lo cierto es que el ascenso del PT al poder no afectó la percepción positiva de Estados Unidos respecto al liderazgo brasileño en América del Sur. Pero no puede decirse lo mismo de la incursión de Brasil en un tema global que resultaba especialmente sensible para la seguridad estadounidense.

Firmado por Brasil durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso, el TNP fue motivo de controversias en la agenda exterior brasileña durante el gobierno de Lula. Ya desde los primeros meses de su gestión se criticó la asimetría del tratado. Pinheiro Guimarães, el segundo de a bordo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, llegó a decir que Brasil podría considerar retirarse del TNP. El Gobierno jamás suscribió esta postura, aunque tampoco la desautorizó. La END, que se presentó a finales de 2008, establecía oficialmente que Brasil se negaba a firmar el protocolo adicional del TNP.

Al año siguiente, Barack Obama, recién elegido presidente de Estados Unidos, estrechó el cerco contra Irán ante nuevas evidencias de que el programa nuclear iraní estaba incrementando cada vez más el enriquecimiento de uranio. Al mismo tiempo, Brasil daba muestras de cercanía con ese país: sus presidentes y cancilleres se habían hecho visitas recíprocas con breves intervalos de tiempo, y a ellas se sumaba el reconocimiento inmediato por parte del Gobierno brasileño de la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente de Irán

en unas elecciones en las que se sospechaba que había habido fraude.

El presidente y el canciller brasileños justificaban la cercanía con Irán por los intereses comerciales y advertían sobre el riesgo que podría representar una eventual imposición de sanciones a ese país. Invocaban el ejemplo de Irak, donde la sospecha de que había armas de destrucción masiva —que no se confirmó después— había servido de excusa para la invasión estadounidense.

Durante las semanas previas a una esperada votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la imposición de sanciones a Irán, Lula y Celso Amorim emprendieron la más osada iniciativa diplomática brasileña del periodo. Sintiéndose autorizados por Estados Unidos y con la cooperación de Turquía, firmaron un acuerdo con base en una propuesta que el grupo de países encabezados por Estados Unidos y por la Unión Europea había presentado unos meses antes. En abril de 2010 este acuerdo se anunció en Teherán como un gran triunfo de las diplomacias brasileña y turca. En periódicos de todo el mundo se imprimió la foto de Lula levantando los brazos de Ahmadineyad.

La ilusión de que esto era un gran triunfo sólo duró unas horas. A la mañana siguiente, Hillary Clinton, jefa de la diplomacia estadounidense, declaró que los términos del acuerdo presentado la víspera eran inaceptables: afirmó que estaban desactualizados, ya que la producción de uranio enriquecido había aumentado desde que el convenio se había propuesto inicialmente. Ese mismo día, Hillary Clinton anunció que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China— habían coincidido en una propuesta común de sancionar a Irán. De esta manera se frustró la expectativa de la diplomacia brasileña de que Rusia y China apoyaran el acuerdo que Brasil y Turquía habían moldeado.

Aunque los brasileños argumentaron que era preferible negociar a sancionar y que las sanciones ya habían mostrado ser contraproducentes en el pasado, prevaleció la capacidad de Estados Unidos de hacer valer sus intereses y su visión del problema.

Para el Gobierno esta iniciativa diplomática, a pesar de haber sido infructífera, fortaleció la imagen de Brasil como un —nuevo— actor relevante en la resolución de temas cruciales de la gobernanza mundial. Para los críticos dentro y fuera del país la iniciativa confirmaba los peores defectos de la política exterior del gobierno de Lula: sobrevaloraba la capacidad de acción de Brasil en regiones altamente complejas del mundo, donde la influencia real del país era escasa o nula, y buscaba oportunidades de prestigio circunstancial sin evaluar correctamente los intereses brasileños.

La sucesión de Lula

El mapa que trazaron las elecciones presidenciales de octubre de 2006 —en las que Lula fue reelegido tras derrotar en la segunda vuelta al candidato del PSDB y exgobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, con un porcentaje de votos prácticamente idéntico al de la elección anterior— mostró a un país dividido social y geográficamente. Los votos de la oposición se concentraban en los estratos de la población con ingresos más altos, un mayor nivel educativo y ubicados en las regiones sur y sureste, en especial en el estado de São Paulo. El presidente Lula venció por un amplio margen entre los más pobres y en las regiones del norte y nordeste. André Singer, científico político y portavoz de la presidencia durante la primera gestión de Lula, identificó en los datos arrojados por las elecciones presidenciales

de 2006 una realineación del electorado en torno al fenómeno del lulismo: en los comicios anteriores, los votos por Lula habían salido, en su mayoría, de las bases sociales de su partido, es decir, el proletariado fabril y algunos sectores de la clase media urbana; en las elecciones de 2006, en cambio, el grueso de los votos de Lula provenía de los sectores más pobres de la población, ligados sobre todo a la economía informal.

Es importante notar, sin embargo, que el Gobierno, en lugar de exacerbar la polarización geográfica y social que las urnas pusieron en evidencia y con la que había coqueteado en la crisis del *mensalão*, trató de superarla con la mira puesta en las elecciones de 2010. Así, adoptó un conjunto de programas que, además de sus justificaciones intrínsecas, atendían demandas de las clases medias urbanas, tanto de las tradicionales, arraigadas en el servicio público, como de las emergentes, compuestas por ciudadanos urbanos a los que les interesaba tener acceso a la educación superior y a una vivienda propia.

Descartada la hipótesis de un cambio constitucional que permitiera una tercera reelección —propuesta ventilada por parlamentarios de su partido, pero que el presidente nunca abrazó—, Lula ungió como candidata a sucederlo a la ministra jefe de la Casa Civil, Dilma Rousseff. Ésta, que nunca había contendido por ningún cargo electivo ni tenía una larga historia dentro del PT, partido al que se había afiliado en 2001, fue una elección personal de Lula, que confiaba en que podría transferirle el inmenso poder político y electoral que había acumulado. De hecho, una vez superada la conmoción que provocó el escándalo del *mensalão*, la popularidad de Lula no hizo sino crecer a lo largo de su segunda gestión, y llegó a niveles sin precedentes. Lo que parecía una apuesta arriesgada —pues la candidata tendría que hacer frente a José Serra, contrincante con gran experiencia política y administrativa, conocido entre el

electorado nacional y entonces gobernador de São Paulo por el PSDB— tuvo éxito.

Para fortalecer a su candidata, Lula se empeñó en incorporar al PMDB a la vicepresidencia, que le correspondió al diputado paulista Michel Temer. Mientras configuraba una amplia alianza electoral, el presidente se dedicó a hacer una campaña abierta a favor de Dilma Rousseff mucho antes del inicio oficial de las campañas, aprovechándose de las ambigüedades y fisuras de la legislación en lo referente a la participación del jefe de Estado en campañas electorales.

La estrategia de Lula dio resultado, y la candidata oficial salió vencedora de la contienda. Pero no en la primera vuelta. La segunda vuelta fue necesaria debido al crecimiento de la candidatura de Marina Silva. Ésta, abanderada por el PV, había conquistado el voto de electores de clase media identificados con su biografía y con su plataforma en pro de una "nueva visión del desarrollo", con énfasis en el tema medioambiental. Había captado también el voto religioso, sobre todo de los evangélicos que temían las oscilaciones de la candidata oficial respecto al tema del aborto. Así, la candidata del PV, evangélica ella misma, obtuvo un sorprendente 20% de los votos válidos, que, sumado al 33% de José Serra, candidato del PSDB, exigió una segunda vuelta en la que finalmente resultó electa Dilma Rousseff con 56% de los votos válidos. Fue así como Brasil eligió, por primera vez en la historia, a una mujer como presidente de la república.

Pese a que la candidata oficial salió victoriosa y la representación de la oposición se redujo en el Congreso —la coalición electoral de Dilma obtuvo más de dos tercios de los votos en la Cámara y en el Senado—, el mapa electoral de octubre de 2010 reveló una vez más que el país era políticamente plural. Las oposiciones vencieron en 10 estados de la federación, incluyendo los dos más importantes: São Paulo y

Minas Gerais. Si se analizan los votos de los candidatos del PT y del PSDB en el segundo turno según su distribución geográfica y social y se les compara con el cuadro que arrojaron las elecciones de 2006, es posible ver una relativa estabilidad con algunos cambios: los votos del PT aumentaron en los sectores de la clase media y la diferencia respecto al PSDB se redujo en la región sur. Es decir, la clara división social y geográfica de 2006 se matizó un poco en 2010.

La democracia bajo Lula

El gobierno de Lula respetó las reglas formales del juego democrático. Aun teniendo índices de popularidad sin precedentes en el país, el presidente no apoyó la propuesta de enmienda constitucional presentada por un diputado del PT, amigo personal suyo, que le permitiría contender —probablemente con éxito— por un tercer mandato consecutivo. La enmienda de la "rerreelección" acabó sepultada en la comisión del Congreso que se encargó de evaluarla inicialmente a través de un dictamen de José Genoino, también del PT, y se consideró incompatible con la democracia brasileña.

No obstante, parte de la oposición y de la opinión pública vio al gobierno de Lula como una amenaza a la democracia brasileña. No porque hubiera adoptado ninguna estrategia deliberada en ese sentido, sino por un conjunto de acciones supuestamente capaces de minar las instituciones democráticas, sobre todo la libertad de expresión y el equilibrio de poderes.

Este temor expresaba en parte los prejuicios ante el origen de clase del presidente y de la nueva élite en el poder. Revelaba también lo difícil que resultaba convivir en el sistema político con un partido como el PT, que había sido la primera y única

organización partidista con cuadros, arraigo social y una amplia base de militantes que entraba al juego real del poder luego de la vuelta de la democracia a Brasil.

No obstante, el temor halló respaldo en un diagnóstico y en la interpretación plausible de ciertos hechos concretos. El que mejor formuló el diagnóstico fue el expresidente Fernando Henrique Cardoso, la voz más escuchada por las oposiciones. Éste sostenía que, auspiciado por el Estado y utilizando recursos públicos, había empezado a formarse bajo el gobierno de Lula un bloque de fuerzas que tenía el apetito y la capacidad suficientes para desequilibrar el juego político y perpetuarse en el poder. En este proceso se preservarían las formas exteriores de la democracia —con elecciones periódicas, incluso para la presidencia—, pero se corría el riesgo de que la captura del Estado y la progresiva reducción de los espacios sociales abiertos a la contradicción vaciaran esas formas de contenido real. Este bloque de poder estaría encabezado por el PT en alianza con las centrales sindicales, beneficiadas por la cuota sindical obligatoria, y con los grandes grupos privados, favorecidos por los préstamos subsidiados del BNDES. También formarían parte de este bloque los fondos de pensión de las empresas estatales —vínculo entre el mundo sindical y el mundo empresarial—, por el creciente dominio de la CUT en esas entidades, que, en asociación con grandes grupos privados, estaban presentes en un número cada vez mayor de emprendimientos y empresas.

A propósito, el sociólogo Francisco de Oliveira, fundador del PT, que había roto con el partido en el transcurso del gobierno de Lula, elaboró la idea de que en la intersección entre partido, sindicato y fondos de pensión de las empresas estatales se estaba formando una nueva clase cuya figura típica sería la del líder sindical y/o partidista elevado a la posición de dirigente de fondos estatales, en particular de fondos de pensión, entidades

que se convirtieron en un actor central del capitalismo brasileño.

El temor a los efectos del gobierno de Lula sobre el funcionamiento de la democracia a mediano plazo también se nutrió de hechos que no necesitaban una interpretación sociológica más elaborada. Las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación estuvieron marcadas por la tensión, sobre todo después del episodio del *mensalão*, aunque jamás llegaron, ni remotamente, al grado de confrontación observado en los países vecinos.

El Gobierno, en general, y el presidente, en particular, sentían que eran víctimas de un cerco mediático. Esta percepción se combinó con una posición históricamente sostenida por el PT: la de que la democratización no había llegado al sector de comunicaciones, donde no había reglas que impidieran la concentración de diversos vehículos —televisión, radio y periódicos— en manos de los mismos grupos empresariales. Bajo la equívoca expresión de "control social de los medios de comunicación" se generó una agenda que, en espíritu, cuando no en el contenido de sus propuestas, confundía la legítima regulación pública de los vehículos operados por la iniciativa privada en un régimen de concesión —canales de televisión y estaciones de radio— con el control del contenido al que daban cauce los diversos medios de comunicación, incluyendo los periódicos.

Aunque nunca se implementó, la ambigua agenda del "control social de los medios de comunicación" no desapareció, y sus rasgos tampoco se aclararon. Sólo fue frontalmente rechazada por la candidata y presidente electa Dilma Rousseff cuando generó cierta "incomodidad electoral".

[1] Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

[2] Por educación básica se entiende en Brasil todos los años que comprenden desde la educación infantil hasta que se concluye la educación media superior (hasta que el estudiante tiene 17 años).

[3] Por educación fundamental se entiende en Brasil primaria y secundaria.

[4] Literalmente: Beca-Escuela. Por tratarse de un término que ha circulado extensamente sin traducirse en medios en español en tiempos recientes, no se traduce en el texto (N. de la T.).

[5] Beca-Maternidad (N. de la T.).

[6] Se llama *tucanos* a los afiliados del PSDB porque la mascota de ese partido es un tucán (*tucano*) (N. de la T.).

[7] Hambre Cero (N. de la T.).

[8] Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (N. de la T.).

[9] Recursos financieros que no se contabilizan ni declaran (N. de la T.).

[10] Expediente limpio (N. de la T.).

[11] Plano Nacional sobre Mudança do Clima (N. de la T.).

[12] Con este nombre se hace referencia al Ministerio de Relaciones Exteriores. La denominación proviene del Palacio de Itamaraty, ubicado en Río de Janeiro, que fue sede del ministerio de 1899 a 1970. Hoy en día también se suele llamar así al Palacio de los Arcos, que alberga al ministerio en Brasilia (N. de la T.).

8. EL FIN DEL CICLO PETISTA Y EL SURGIMIENTO DE BOLSONARO

Dilma Rousseff fue la primera mujer electa presidente de Brasil. Nació en 1947 en el estado de Minas Gerais, región central del país, hija de madre brasileña y de un inmigrante búlgaro que ascendió a una posición cómoda de clase media.

Desde muy joven empezó a militar en el movimiento estudiantil; inició la carrera de economía y con poco más de 20 años ingresó a organizaciones clandestinas que, tras el Acto Institucional 5 (AI-5), de diciembre de 1968, emprendieron acciones armadas contra el Gobierno militar. Presa y torturada por los integrantes de los órganos de represión, pasó casi tres años en la cárcel. Cuando salió libre, en São Paulo, decidió irse a vivir a Porto Alegre, donde residía su primer marido.

Tras la redemocratización del país y la formación de nuevos partidos políticos, Dilma optó por el PDT de Leonel Brizola, una agrupación que tenía gran influencia en Rio Grande do Sul. Dilma no es, pues, una petista de "pura sangre", cosa que se señaló cuando en el seno del PT surgieron corrientes críticas con su forma de gobernar.

Titulada en economía, Dilma empezó a destacarse en cargos administrativos del Gobierno *gaúcho*. Cuando el PDT y el PT tuvieron desavenencias a nivel regional, ella optó por el PT. Lula simpatizó con la futura presidente subrayando su talento en la esfera administrativa, y la nombró ministra de Minas y Energía. Posteriormente la designó jefa de la Casa Civil, poniéndola así en una posición estratégica, y la nombró administradora del

Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), dirigido principalmente a obras de infraestructura y a la construcción de viviendas populares.

Aunque Lula había llamado a Dilma "la madre del PAC", cuando el PT la postuló como candidata a la presidencia de la república, la gran mayoría de los brasileños aún no la conocía. Fue Lula quien avaló su nombre ante el electorado, y fue él el principal factor de su victoria en la segunda vuelta contra José Serra, exgobernador de São Paulo, con una cómoda diferencia de 12 puntos porcentuales en las elecciones de octubre de 2010. La alianza con el PMDB también contribuyó a su triunfo, asegurándole una mayor porción del tiempo televisivo a la planilla gobiernista y llevando a la vicepresidencia a Michel Temer.

Dilma inició su gestión con un fuerte apoyo de la población. Venía impulsada por un crecimiento económico que en el último año del gobierno de Lula había alcanzado una tasa de 7.1%, sólo comparable con el "milagro económico" que había tenido lugar en ciertos años del régimen militar. Parte de la clase media que veía con prejuicios a Lula encontró en Dilma una figura con la que tenía afinidad por factores como su origen social y su nivel educativo.

Dilma Rousseff: nuevo personaje, nuevo contexto

Beneficiaria de la popularidad de Lula, Dilma se vio de entrada frente a tres grandes desafíos: conseguir un capital político propio, administrar una coalición amplia y heterogénea de partidos, y sostener el crecimiento y las conquistas del periodo anterior en términos de ingreso y empleo, pero en otro contexto económico. Como se verá, no pudo superar estos desafíos.

En el terreno político inició su primer mandato destituyendo a una serie de ministros en lo que la prensa calificó como una limpieza ética en el más alto nivel del Gobierno. El primero en caer fue nada menos que Antonio Palocci, hombre fuerte de la economía en el primer mandato de Lula, nombrado jefe de la Casa Civil de Dilma por su experiencia en el mundo político y en el sector privado, y por su estrecho vínculo con el expresidente. Apenas había comenzado el gobierno, cuando Palocci se vio forzado a dejar el gabinete al no poder explicar el significativo aumento de su patrimonio en el breve periodo en el que fungió como asesor, entre su salida del Ministerio de Hacienda en 2006 y su toma de posesión del nuevo cargo.

A la destitución de Palocci siguieron varias otras, que afectaron a ministros de otros partidos gobiernistas acusados de corrupción. Al no hacer excepciones, Dilma proyectaba una imagen ética, congruente con la de una administradora que no estaba cegada por la política partidista.

Pero su intento de distinguirse pronto se estrelló con la realidad política. La necesidad de mantener su base de apoyo en el Congreso la llevó a recomponer su gabinete con otros nombres que representaban las mismas fuerzas políticas de la coalición de partidos formada en el segundo mandato de Lula.

En el ámbito de la economía, después de un breve periodo de ajuste ortodoxo para lidiar con el sobrecalentamiento del consumo heredado del último año de la gestión anterior, Dilma introdujo cambios importantes que se conocerían con el nombre de Nueva Matriz Económica. Con ellos pretendía retomar el crecimiento acelerado del periodo anterior bajo nuevas bases, con la inversión creciendo más rápidamente que el consumo.

El contexto internacional era otro. Aunque ya habían pasado tres años de la gran crisis financiera global de 2008, sus efectos no se habían disipado. Los precios de las *commodities* y las

condiciones de liquidez internacional con que contaba Brasil ya no eran tan favorables como lo habían sido antes de 2008. Cuando Dilma tomó posesión, a principios de 2011, todavía se pensaba en la posibilidad de una recaída en la crisis financiera internacional, temor acentuado por el casi pánico que cundió en la zona del Euro en 2012, cuando los mercados pusieron en cuestión la solvencia fiscal de sus miembros más frágiles.

¿Cómo hacer frente, en ese contexto, a las expectativas de que siguieran mejorando los estándares de consumo y movilidad social como venían haciéndolo desde la gestión de su antecesor y padrino político? ¿Cómo cumplir la aspiración de que Brasil no sólo fuera un "país sin miseria", sino incluso "un país de clases medias", eslogan adoptado por el Gobierno mismo? La Nueva Matriz Económica fue una respuesta a estas preguntas, pero fracasó.

El objetivo último de la Nueva Matriz Económica era estimular la inversión, que había venido creciendo sistemáticamente por debajo del consumo. Para ello, Dilma agudizó dos tendencias que ya estaban presentes en la segunda gestión de su predecesor. Su gobierno amplió los incentivos y subsidios fiscales al sector privado —entre otras medidas, el Tesoro contrajo una deuda cada vez mayor para que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social pudiera hacer préstamos con intereses cada vez menores al sector privado— y reforzó el programa de inversiones de las empresas estatales.

Ante las oportunidades que representaban los yacimientos de presal, se dio prioridad al sector del petróleo y el gas. Con Petrobras a la cabeza se puso en marcha una política industrial de fomento a la producción local de servicios y equipo, dirigista y burocráticamente minuciosa.

La Nueva Matriz Económica no produjo los resultados esperados. La inversión privada no respondió a los estímulos

fiscales y crediticios, y la inversión pública se topó con problemas de ineficiencia y corrupción. La situación fiscal se deterioró —en razón del aumento constante del gasto público y de la pérdida de ingresos fiscalmente exentos— y la inflación cobró aliento. El Gobierno respondió controlando los precios públicos y con una contabilidad creativa de las cuentas públicas, lo cual agravó la desconfianza de los agentes económicos internos y externos en cuanto a la viabilidad de la Nueva Matriz Económica.

Se le impidió a Petrobras reflejar el aumento del precio internacional del petróleo en los precios internos de los combustibles, y al mismo tiempo se le obligó a hacer inversiones cuantiosas. Esto produjo un fuerte desequilibrio financiero en la compañía. En el sector eléctrico, también para sostener los precios, el Gobierno forzó a las compañías privadas y estatales a aceptar condiciones desfavorables al renovar los contratos de concesión.

La Nueva Matriz Económica mostró la convicción de la presidente Dilma en relación con el protagonismo del Estado en el fomento al desarrollo. Dilma se había formado como economista en la tradición del nacional-desarrollismo. Esta convicción formaba parte de la ideología dominante en el PT, que había aceptado de mala gana la orientación más liberal de la política económica durante la primera gestión de Lula y veía en la Nueva Matriz Económica la culminación del giro a la izquierda que se había iniciado en la segunda gestión del expresidente.

El resurgimiento del Estado desarrollista no sólo obedeció a razones ideológicas, sino también a intereses. Es imposible disociarlo del acuerdo político-empresarial que dio sustento al Gobierno y a los partidos de la coalición dominante, y que la operación Lava Jato sacaría a relucir. La política de creación de "campeones nacionales", empresas desproporcionalmente

favorecidas por las políticas de desarrollo, tuvo una contrapartida política bajo la forma del apoyo financiero —legal e ilegal— a partidos y campañas electorales. Tecnócrata por formación y por estilo, Dilma no participó en la construcción ni en la operación de este acuerdo político. Incluso tuvo el impulso, en especial al principio de su primera gestión, de debilitarlo. Pero no tuvo ni la aptitud ni la fuerza política para hacerlo.

A diferencia de su antecesor, Dilma, concentrada en los temas internos, obsesionada con los detalles y centralizadora en cuanto a las decisiones en materia de políticas públicas internas, relegó la política exterior al segundo plano. Las principales líneas de la política exterior heredada del Gobierno anterior se mantuvieron, ahora implementadas burocráticamente por el Itamaraty. La presidente no ejerció la diplomacia presidencial ni se acercó a sus cancilleres, todos discretos diplomáticos de carrera, tanto como Lula a Celso Amorim. El punto más alto de la política exterior de su gobierno se dio en el tema de medio ambiente, en particular en la negociación del Acuerdo de París, al que la delegación brasileña, encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, hizo aportes importantes.

En las políticas sociales también hubo continuidad, pero con un mayor énfasis en la agenda de las llamadas cuestiones identitarias. La Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial y la Secretaría Especial de Derechos para las Mujeres se habían creado al inicio de la primera gestión de Lula. En el gobierno de Dilma cobraron mayor protagonismo, ya fuera por su desarrollo institucional, por el hecho de que la presidente era mujer o por los conflictos que se generaron en torno a la agenda identitaria. El Gobierno había impulsado la Ley de Cuotas, que reservaba lugares para los negros en las universidades federales, y en 2012, una vez que el Supremo Tribunal Federal juzgó que eran constitucionales las políticas de acción afirmativa adoptadas por

algunas universidades públicas, el Congreso la aprobó. Ese mismo año, el STF falló también a favor de la constitucionalidad del aborto en el caso de fetos anencefálicos.

Además del desgaste que sufrió frente a sectores religiosos conservadores que habían apoyado su candidatura, Dilma tuvo problemas con los militares. La manzana de la discordia fue la Comisión Nacional de la Verdad, instituida en noviembre de 2011 para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar y señalar a los responsables. Esta comisión iba un paso más allá de la creada por Fernando Henrique Cardoso para reconocer la culpa del Estado en esos crímenes e indemnizar a las víctimas.

La cuestión de si el crimen de tortura era o no era imprescriptible había llegado al Supremo Tribunal Federal y a la Corte Interamericana de Justicia en 2010. El primero, amparado en la Ley de Amnistía, que se había promulgado todavía bajo el régimen militar, en 1979, falló a favor de la extinción de cualquier imputabilidad por actos que hubieran cometido los órganos del Estado o las organizaciones involucradas en la lucha armada contra la dictadura. Por su parte, la Corte Interamericana se inclinó por lo contrario, invocando el principio de la dignidad humana y afirmando el carácter imprescriptible del crimen de tortura. Este conflicto jurisdiccional hizo temer a las Fuerzas Armadas que algunos de sus miembros fueran llevados al banquillo de los acusados.

Además, los militares se sintieron discriminados en la composición de la Comisión de la Verdad y en la definición de lo que se iba a investigar. Los trabajos de la comisión, concluidos en diciembre de 2014 con la entrega de un informe sustancial, no produjeron ninguna ruptura en el orden constitucional, pero la insatisfacción de las Fuerzas Armadas agravó la situación

política que la presidente Dilma tendría que enfrentar en su segundo mandato, cuando sufrió el *impeachment*.

Las protestas sociales de junio de 2013: un parteaguas

Antes de examinar esa coyuntura crítica, hay que destacar la oleada de protestas que tomó las principales ciudades brasileñas en julio de 2013 y que fue un parteaguas no sólo para el mandato de la presidente Dilma, sino para la política brasileña, con repercusiones a largo plazo.

Las manifestaciones empezaron con una protesta contra el aumento en el precio del pasaje de autobuses, tren urbano y metro en la ciudad de São Paulo. Las convocaba una organización estudiantil partidaria de la gratuidad del transporte público en esa ciudad. Al principio, no congregaron más que algunos cuantos miles. ¿Cómo explicar que, en pocas semanas, las protestas iniciales se convirtieran en una ola de manifestaciones que se expandió a todas las principales ciudades del país y puso en movimiento sobre todo a las clases medias?

Quien busque explicaciones en variables meramente económicas no las hallará. Aunque el crecimiento ya no era igual al que había tenido lugar a lo largo del gobierno del presidente Lula, el desempleo seguía cayendo a niveles históricamente bajos y las ganancias de las capas más pobres, aunque más despacio, seguían incrementándose gracias a la continuación de las políticas de valorización del salario mínimo y transferencia de ingreso, así como de expansión de la oferta de empleo.

Para explicar el descontento que estalló en junio de 2013 pueden plantearse dos hipótesis, no necesariamente excluyentes: *1*) aunque el acceso a bienes de consumo se había expandido, no podía decirse lo mismo del acceso a servicios

públicos de calidad; *2*) las clases medias más establecidas veían disminuir sus prerrogativas ante la emergencia de los "sectores más bajos de la sociedad".

Pero estas hipótesis sólo tienen pleno sentido si se les considera en un contexto en el que el tema de la corrupción, que involucraba a políticos, partidos, empresas públicas y privadas, se había adueñado de la agenda del debate público. El esquema de compra de votos de diputados, revelado en 2005 (el tercer año de la primera gestión del presidente Lula), se llevó a juicio en el STF en 2012. El proceso culminó a principios de 2013 con la condena y aprehensión de decenas de acusados, entre los que se contaban destacados políticos de los partidos que conformaban la alianza en la que se apoyaba el presidente Lula.

Aunque la ola de manifestaciones menguó pasado un mes, las protestas de junio de 2013 tuvieron consecuencias duraderas. En 2013 surgió en la esfera pública una nueva sociedad que tomó a los partidos por sorpresa. Pero, pasado el susto, éstos volvieron a su rutina política habitual, con los ojos puestos en las elecciones de 2014, que serían las más caras desde la vuelta de la democracia y en las que la mayor parte correspondería a la candidata del PT, Dilma Rousseff.

Además de dejar ver algunos cambios sociales y políticos que estaban en curso, las protestas de 2013 dieron lugar a cambios legislativos importantes, cuyo impacto sobre un sistema político al que le interesaba mantener el *statu quo* no se había previsto.

Como respuesta al clamor que exigía moralidad pública, el Congreso había aprobado, todavía en julio de 2013, dos proyectos de ley, de autoría del Gobierno, que dormitaban en el Legislativo. Uno de ellos se convirtió en la llamada Ley Anticorrupción, que tipificaba la responsabilidad de las empresas y sus ejecutivos en casos de corrupción y preveía la posibilidad de recurrir a los denominados acuerdos de lenidad,

que hasta entonces se habían limitado al caso de los carteles. La segunda ley que se aprobó, sobre organizaciones delictivas, consagraba en el derecho penal brasileño una figura típica del derecho anglosajón, el *plea bargaining*, e insistía en la llamada delación premiada, mediante la cual los miembros de una asociación delictiva dispuestos a colaborar con la justicia podían verse beneficiados por una reducción de su condena.

Reelección y crisis política

Después de las manifestaciones que marcaron 2013, el tema central del año siguiente fueron las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en octubre y noviembre, y el inicio de la Operación Lava Jato. El ambiente político y el cuadro económico eran muy distintos a los de cuatro años antes. Todos los indicadores económicos se habían deteriorado: la inflación llegaba a 10% anual, pese al control de las tarifas públicas; el crecimiento se acercaba al cero, con todo y los estímulos de la política fiscal; el déficit fiscal se elevaba, a pesar de las maniobras contables; la balanza de pagos empeoraba, no obstante la devaluación del cambio que se había buscado a lo largo de los años anteriores. Pero el ingreso y el empleo resistían frente a la caída de la macroeconomía y eso fue decisivo para la reelección de la presidente.

Dilma pudo asegurar su candidatura por la coalición gobiernista, aun con las presiones para que el candidato fuera Lula. Esta vez la presidente no contó con el mismo respaldo que en 2010: ciertas secciones estatales de los partidos gobiernistas, en particular del más grande, que era el PMDB, prefirieron apoyar al candidato del PSDB, Aécio Neves, gobernador de Minas Gerais. El PSB decidió presentar un candidato propio, Eduardo Campos,

gobernador de Pernambuco, con la exministra Marina Silva —que se había afiliado al Partido Verde luego de dejar el gabinete de Lula— como candidata a la vicepresidencia. Campos murió en un accidente aéreo al principio de la campaña, de modo que Marina tomó su lugar. También hubo deserción en las centrales sindicales y en las Iglesias evangélicas, cada vez más distanciadas del PT.

La campaña electoral fue bastante encarnizada e incluyó golpes bajos que sobrepasaron los límites de una contienda democrática. Marina Silva, respetada nacional e internacionalmente por su defensa de la Amazonia y de los derechos indígenas, perdió su liderazgo, que parecía asegurarle un lugar en la segunda vuelta y una posibilidad real de derrotar a la candidata oficial. Los golpes bajos fueron obra del principal encargado de *marketing* del PT, João Santana, y no permitieron que Marina llegara a la segunda vuelta de las elecciones. Como sea, las diferencias entre una candidata ideológicamente desarrollista y otra a la que le preocupaba la defensa del medio ambiente eran obvias. En la segunda vuelta, Dilma derrotó por un estrecho margen de cuatro puntos a Aécio Neves, candidato de la oposición postulado por el PSDB. Lo pequeño de esta diferencia se explica por el deterioro del cuadro económico y porque había salido a relucir un esquema de corrupción que superaba al llamado *mensalão*. El esquema, que salió a la luz en marzo de 2014, recibió el apodo de *petrolão*, pues tenía lugar principalmente —aunque no sólo— en la mayor empresa estatal brasileña, Petrobras. Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y por la Policía Federal recibieron el nombre de Operación Lava Jato porque empezaron desbaratando un esquema de lavado de dinero que involucraba, entre otras empresas, una gasolinera donde se lavaban autos a presión.[1] La instrucción y el juicio de los procesos quedaron bajo la

jurisdicción de un juzgado de la Justicia Federal con sede en Curitiba, en el estado de Paraná, porque allí residía el principal cambista del esquema de lavado de dinero. En ese juzgado de distrito, especializado en delitos financieros, trabajaba el juez Sérgio Moro. El esquema consistía en la distribución previamente acordada de contratos superfacturados entre los integrantes de los carteles. Los recursos desviados engordaron las cuentas de intermediarios y los cofres de los partidos políticos que controlaban posiciones estratégicas en las empresas estatales.

Entre los principales beneficiarios del esquema destacaban las grandes constructoras del país, en particular Odebrecht, y los mayores partidos de la coalición gobiernista (PT, PMDB y PP). Los partidos de oposición, incluyendo el PSDB, el mayor adversario del PT, se vieron favorecidos por esquemas similares en los estados que gobernaban. Pero las investigaciones no llegarían a los partidos de oposición sino hasta dos años después.

Apenas concluyeron las averiguaciones, la orientación política de Dilma dio un giro de 180 grados, cuando se comprometió a realizar el mismo ajuste fiscal que había achacado a sus adversarios y nombró ministro de Hacienda a un economista de la Universidad de Chicago que entonces estaba al frente del *asset management* del segundo mayor banco privado de Brasil. En pocos días, la imagen color rosa de un país en franco progreso, que la presidente había presentado en su campaña por la reelección, dio paso a advertencias de que Brasil tendría que hacer frente a tiempos difíciles de ajuste macroeconómico.

Las manifestaciones callejeras de marzo de 2015 a favor del *impeachment* de Dilma surgieron en un contexto tumultuoso. Las convocaron los movimientos de ciudadanos que habían ganado impulso en los años anteriores en torno a un sentimiento anti-PT que venía extendiéndose entre las clases medias desde 2013. En

el amplio abanico de fuerzas antipetistas despuntaban grupos de derecha e incluso de ultraderecha que progresivamente, sin dejar de tener al PT como blanco principal, comenzarían a atacar también al PSDB y a todos los representantes de la llamada "vieja política".

El flujo de información producido por los avances en las investigaciones de la Operación Lava Jato alimentó la indignación que excitaba las manifestaciones por el *impeachment* de Dilma. Fueron 14 las etapas por las que pasó la investigación a lo largo de 2015, el doble que el año anterior. El país empezó a seguir, atónito, la sucesión de delaciones premiadas, conducciones compulsivas y encarcelamientos de empresarios y políticos. Además, como repercusión de la Lava Jato, se iniciaron nuevas investigaciones en 2015, enfocadas en otras empresas estatales federales.

La corrupción empezó a señalarse como el primero de los males que aquejaban al país. La posición de los medios de comunicación contribuyó a ello. TV Globo insistía en el tema en su noticiario nocturno —*Jornal Nacional* (JN)—, que se transmite en horario estelar. Mucha gente sintió que, por primera vez en la historia de Brasil, la justicia alcanzaría a "los que mandan", y esta percepción no podía considerarse equivocada.

Los partidos de izquierda optaron por no reconocer sus malas acciones y presentaron las medidas contra la corrupción como un falso moralismo de los sectores conservadores. De este modo, el PT y algunos partidos menores le dieron la espalda a un sentimiento profundamente arraigado entre las masas, para quienes un país con tantas riquezas como Brasil sólo podía tener una población mayoritariamente pobre a consecuencia de la profunda corrupción de su élite.

En síntesis, ¿cómo evaluar, en su conjunto, la Operación Lava Jato? Es innegable que el juez federal de Curitiba, Sérgio Moro,

erigido en héroe nacional, así como varios fiscales que participaron en las investigaciones y los procesos, transgredieron los límites de la estricta observancia del proceso legal. Pero muchos se preguntaron si, de otro modo, habrían tenido éxito unas investigaciones dirigidas contra personajes poderosos, que siempre se habían valido de toda clase de artilugios, muchas veces ilícitos, y de las filigranas de la ley.

La crítica más contundente contra los responsables de la Operación Lava Jato fue que tenían el propósito político de atrapar a Lula en las redes de la justicia para impedir que se presentara como candidato a la presidencia de la república. No es que las acusaciones contra Lula fueran todas fantasiosas, pero la velocidad con que avanzaron los procesos en su contra no corresponde a los morosos estándares del Poder Judicial brasileño. A partir de un caso dudoso, Lula fue condenado en primera instancia en 2017 a 12 años de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero. La condena en segunda instancia lo declaró inelegible, de acuerdo con la llamada Ley de *Ficha Limpa*, que no permite que contiendan en las elecciones aquellas personas que hayan sido condenadas por un tribunal. En abril de ese mismo año, en una decisión controvertida, se decretó el encarcelamiento de Lula, pese a que éste todavía podía apelar a instancias superiores del Poder Judicial.

El encarcelamiento del expresidente, que encabezaba las encuestas electorales, polarizó aún más el ambiente político del país. Su partido, duramente golpeado por las investigaciones de la Lava Jato, había sufrido un severo castigo en las urnas en las elecciones locales de octubre de 2016, pero había ido recuperando prestigio, en la medida en que crecía el descrédito de Michel Temer, que sustituyó a la presidente cuando ésta tuvo que retirarse de su cargo por el proceso de *impeachment*.

A lo largo de 2015 distintos partidos y ciudadanos empezaron a solicitar a la Cámara de Diputados que se abriera un proceso de *impeachment* contra la presidente Dilma. Estas solicitudes pasaron muchos meses archivadas en espera de que el entonces presidente de la Cámara —Eduardo Cunha— decidiera si se les daba o no seguimiento. Cunha aprovechó su posición de poder para acorralar al Gobierno y, después, cuando el PT se negó a salvarlo de acusaciones ante la Comisión de Ética de la Cámara, determinó, en diciembre de 2015, dar curso al proceso de *impeachment*.

La solicitud a la que se dio prioridad estaba suscrita por tres personas: el exprocurador de Justicia, Hélio Bicudo, viejo afiliado del PT que se había vuelto famoso en todo el país por su lucha a favor de los derechos humanos, y dos profesores de leyes, Miguel Reale Jr. y Janaína Paschoal. Además de alegatos técnicos de orden presupuestal, el principal fundamento jurídico de la solicitud eran las llamadas *pedaladas* o maniobras fiscales, un procedimiento que se utiliza para que el Tesoro Nacional cumpla sus obligaciones con los programas sociales y de fomento económico mediante recursos de los bancos públicos federales, práctica vetada por la Ley de Responsabilidad Fiscal. El Gobierno había recurrido a esta práctica desde 2013 y con especial intensidad en 2014 para ocultar el deterioro del resultado fiscal y seguir expandiendo el gasto público. Si bien no se trataba de un simple berrinche, como afirmaban los defensores de la presidente, el proceso de *impeachment* tenía, como no puede ser de otro modo, un carácter predominantemente político.

La discusión en la Cámara cumplió con todos los requisitos legales y, durante varios meses, millones de brasileños siguieron por la televisión un apasionado debate que corroyó cada vez más

el prestigio de la presidente. Grandes manifestaciones llenaron las calles de las principales ciudades del país y empezaron a aparecer con nitidez ciertos objetivos característicos de la extrema derecha. Sin embargo, salvo raras excepciones, nadie se tomó en serio las mantas y pancartas que exigían el regreso de los actos institucionales del régimen militar o la instauración de una nueva dictadura.

En abril de 2016, en medio de estos acontecimientos, la Cámara autorizó al Senado federal a abrir el proceso de *impeachment*. La votación, que se llevó a cabo en una sesión transmitida al público por televisión, reveló las razones que condujeron a la mayoría de los diputados a aprobar dicha medida. Para algunos, se votaba contra una presidente que había agotado su capacidad de gobernar, empujando al país al borde de un desastre económico de grandes proporciones; se mencionaba el hecho de que, aunque personalmente Dilma no hubiera cometido actos de corrupción, había estado encubriendo los desmanes de su partido y de sus partidos aliados, que iban mucho más allá de las "maniobras fiscales". Hubo incluso un diputado poco conocido para el gran público —Jair Bolsonaro— que aprovechó la ocasión para hacer un homenaje a la figura del coronel Brilhante Ustra, llamándolo "el pavor de Dilma Rousseff". Estando al mando del principal órgano de represión en São Paulo, Ustra fue el responsable de la tortura que se infligió, durante varias semanas, a la futura presidente.

El 17 de abril de 2016, por 367 votos contra 137, conforme manda la Constitución, la Cámara determinó que la presidente se apartara de su cargo y fuera provisionalmente sustituida por el vicepresidente Michel Temer. Para entonces, ya nadie creía que Dilma estaría en condiciones de reasumir la presidencia de la república. De hecho, el 31 de agosto, los senadores decidieron destituirla en un juicio presidido por el ministro del STF, Ricardo

Lewandovski, cercano al PT. En una especie de "pacto de caballeros", contra el precepto constitucional explícito, la mayoría de los senadores aceptó que los derechos políticos de la expresidente no se suspendieran.

La caída de Dilma Rousseff se debió a varias razones. Recordemos los siguientes factores sin ningún orden en particular. En primer lugar, el muy grave cuadro económico que resultó de la coyuntura internacional y de los ya mencionados errores del equipo de Gobierno. Después, con la Operación Lava Jato en curso, muchos parlamentarios acusados de corrupción esperaban que la caída de Dilma abriera paso a la revisión de las acusaciones y procesos y que todo "acabara en pizza", para usar la expresión popular brasileña.[2] Otro factor que llevó al *impeachment* fue la opinión pública. Las acusaciones de corrupción que afectaron principalmente al PT calaron hondo en diversas capas de la población, y el antipetismo se convirtió en un sentimiento avasallador.

El interregno *postimpeachment*

El vicepresidente Michel Temer asumió la presidencia de la república el 31 de agosto de 2016 y gobernó hasta el 1º de enero de 2019. Temer nació en una pequeña ciudad del interior del estado de São Paulo y es descendiente de padres libaneses.

Licenciado en Derecho y profesor universitario, Temer llegó al poder con poco apoyo social, pero con una sólida base de apoyo en el Congreso. Era un político con amplia experiencia parlamentaria y había sido dos veces presidente de la Cámara de Diputados. Conformó un gabinete que reflejaba fielmente la representación de la coalición de partidos que lo respaldaba en el Congreso. En comparación con el gabinete de Dilma, perdieron

espacio la izquierda y las mujeres. El PSDB vaciló y se dividió, pero acabó por integrarse al Gobierno. Los partidos que habían sostenido la gestión de Dilma, salvo los de izquierda, se unieron a la administración de Temer. El Ministerio de Hacienda fue ocupado por Henrique Meirelles, que había sido presidente del Banco Central durante toda la presidencia de Lula y que gozaba de buena acogida entre el sector financiero.

El apoyo parlamentario permitió al nuevo presidente retomar la agenda de reformas que los gobiernos del PT habían abandonado a partir de la segunda gestión de Lula. Para detener la escalada del gasto público, el Ejecutivo hizo aprobar una enmienda constitucional que le fijaba un tope, y una ley que limitaba los subsidios implícitos en los préstamos que daba el BNDES. Además puso en marcha una ambiciosa reforma de la seguridad social. La agenda reformista y la política económica imprimieron a la inflación y a los impuestos una trayectoria descendente, pero esto no tuvo un reflejo significativo en la economía real. Luego de dos caídas sucesivas en 2015 y 2016, con una variación negativa de 7% en el bienio, el crecimiento del PIB apenas si superó el 2% en la suma de los años 2017 y 2018, con tasas de desempleo elevadas.

Por si fuera poco, la ya baja popularidad inicial de Temer disminuyó aún más cuando también fue acusado de corrupción. La Procuraduría General de la República presentó dos denuncias contra él, pero las dos fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, a la que correspondía autorizar o impedir el proceso contra el presidente. Temer conservó su cargo, pero terminó su gestión con índices de popularidad tan bajos como los de su antecesora o incluso más. También se denunció a algunos líderes del PSDB, entre ellos a Aécio Neves y José Serra, que dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La imagen del PSDB, golpeado por la Operación Lava Jato y asociado con un Gobierno

impopular, naufragó ante la opinión pública. Parte de sus electores, que lo habían votado en sucesivas elecciones más por oponerse al PT que por afinidad con su ideario socialdemócrata, quedaron a la disposición de un candidato de verdadera derecha.

El surgimiento de Jair Bolsonaro

El surgimiento de Bolsonaro y del bolsonarismo no es expresión de un fenómeno exclusivamente brasileño. La persona y el movimiento están insertos en un cuadro internacional de crisis del sistema democrático, en el que ascienden corrientes y personalidades autoritarias que varias veces llegan al poder por la vía electoral. Aún en la etapa de la precampaña, Bolsonaro y sus hijos establecieron canales de interlocución con Steve Bannon, quien fuera el principal estratega de la campaña de Donald Trump y más tarde su asesor en la Casa Blanca.

La extrema derecha, con fuertes rasgos populistas, supo explotar la crisis de la democracia representativa, recurriendo con agresividad a nuevas técnicas de comunicación y de *fake news* que desorientaron a sus adversarios.

En el caso de Brasil, la red de derecha que rodeaba a Bolsonaro empezó a tejerse en 2014, al margen de los partidos y de los medios tradicionales de comunicación. En ella participaron pastores evangélicos, grupos civiles y militares de extrema derecha y seguidores movilizados por los constantes viajes que el entonces diputado federal Jair Bolsonaro estaba haciendo por todo Brasil. También impulsaron su red de apoyo los adeptos de Olavo de Carvalho, exastrólogo convertido al catolicismo ultraconservador, autodidacta y escritor prolífico, que llevaba varios años reclutando un número creciente de

discípulos a través de los cursos de filosofía política que ofrecía *online.* Conforme el nombre de Bolsonaro ascendía en las encuestas de intención de voto, su candidatura comenzó a recibir el apoyo de sectores de la élite, empezando por representantes del agronegocio. La adhesión de los sectores empresariales se vio impulsada por la polarización que los enfrentaba al PT y por la presencia de un economista liberal, Paulo Guedes, futuro ministro de Economía, entre los principales asesores del candidato.

Bolsonaro escaló en la política como una especie de sindicalista que reivindicaba aumentos salariales dentro de las Fuerzas Armadas y más tarde fuera de ellas. En un acuerdo conveniente había tenido que aceptar su retiro por haber realizado acciones al margen de la legalidad que rompían la jerarquía militar. Había sido elegido para sucesivos mandatos en la Cámara federal y tres de sus hijos lo acompañaron en su ascenso electoral a cargos legislativos.

Mientras que los bolsonaristas supieron utilizar, en el curso de la campaña electoral, los mecanismos ya mencionados, el campo democrático se atuvo a la comunicación tradicional, como lo muestra el ejemplo del candidato Geraldo Alckmin, exgobernador de São Paulo. Aunque éste disponía del mayor tiempo de propaganda gratuita en la televisión, tuvo que tragarse una escandalosa derrota, pues no obtuvo más que 4.7% de los votos.

Pero, aunque el uso agresivo de las redes sociales y de otros recursos novedosos tuvo un papel muy importante en la victoria de Jair Bolsonaro, sería erróneo creer que esto, por sí solo, decidió la elección. El éxito de Bolsonaro obedeció a un conjunto de factores, entre los cuales destacan los que se enlistan aquí sin seguir ningún orden particular. *1*) El antipetismo, apuntalado por los escándalos que afectaron tanto a miembros del PT como al

partido en cuanto organización. Los bolsonaristas supieron explotar este tema, combatiendo al PT como el enemigo principal por erradicar y sugiriendo, incluso, que empleaban la expresión en un sentido literal. *2*) La agenda de costumbres, que cada vez dividía más el comportamiento de los brasileños: por un lado, había un campo progresista que defendía los derechos reproductivos de la mujer, el matrimonio igualitario, la aceptación social de los transexuales y de los comportamientos no binarios en materia de sexo; por el otro, había un campo conservador opuesto a estas prácticas que, en su opinión, conducirían a la destrucción de la familia y de la sociedad. Esta división facilitó que los principales líderes evangélicos y pentecostales apoyaran en bloque a Bolsonaro, asegurándole el voto de sus seguidores, que representan más de 30% de la población brasileña. *3*) La cuestión de la seguridad pública: como había personas de distintos estratos sociales a las que les preocupaba un temible escenario de asaltos y homicidios, el candidato les prometió el remedio aparentemente eficaz de dar armas al pueblo. *4*) El respaldo del empresariado del campo y de las ciudades, que buscaba orden y estabilidad a cualquier precio, tanto que fue el primer sector social que apoyó al candidato. *5*) El papel de las Fuerzas Armadas, cuyos cuadros inferiores promovieron con entusiasmo el nombre de Bolsonaro. Y, lo que es más importante, el comportamiento de la cúpula militar que en un primer momento vio con reparos al candidato —un simple capitán apartado del Ejército—, pero luego apoyó su ascenso al poder.

Bolsonaro estuvo cerca de ganar las elecciones de 2018 ya desde la primera vuelta. Ganó en la segunda, con una diferencia considerable de alrededor de 10% de los más de 100 millones de votos válidos, superando al candidato del PT, Fernando Haddad. Venció en todas las regiones del país, con excepción del

nordeste, donde el progreso social y económico alcanzado con los gobiernos de Lula y de Dilma, aunado a la mística que rodeaba al primero —un nordestino de origen pobre—, dio fuerza electoral al PT.

La extrema derecha llegó al poder de manera sorprendente, si se tiene en cuenta tanto la velocidad de su éxito como la desarticulación del campo democrático. Es necesario plantear una pregunta final: ¿estamos ante un interregno coyuntural que se superará pronto, o ante un corte que durará largo tiempo en la historia de Brasil? Al escribir estas líneas, en junio de 2021, no tenemos —y creemos que nadie tiene— una respuesta segura a esta interrogante.

---

[1] Se le conoce también en español como "Operación Autolavado", "Operación Lavado de Autos", "Lavado de Carros" y otras expresiones equivalentes. No obstante, como también se popularizó en los medios de comunicación hispanohablantes como "Operación Lava Jato", se preserva este nombre en la traducción (N. de la T.).

[2] Es decir, que el asunto acabara sin mayores consecuencias y en un ambiente de concordia (N. de la T.).

9. BRASIL (1950-2020)

El objetivo de este capítulo es presentar una visión sintética de las principales transformaciones que ha sufrido Brasil desde mediados del siglo pasado. Se señalan también los desafíos que tendrá que enfrentar el país para alcanzar un mayor desarrollo a lo largo del presente siglo.[1]

Macroeconomía

La historia económica del Brasil de la posguerra puede dividirse en dos grandes periodos. En el primero, que va de 1950 a 1980, el país creció a una de las tasas más elevadas del mundo y presentó un 4.4% anual de incremento medio en el ingreso *per capita* (IBGE). Con esta tasa de crecimiento, Brasil duplicaría su ingreso *per capita* cada 16 años. Las tres primeras décadas de la posguerra fueron una etapa de intenso dinamismo económico, en que el ingreso medio de la población mejoró sustancialmente. Pero la desigualdad social aumentó, sobre todo con la instauración de un régimen autoritario encabezado por las Fuerzas Armadas (1964-1985).

En un segundo periodo, a partir de 1980, el crecimiento se desaceleró significativamente. Durante las cuatro décadas que siguieron, el crecimiento anual promedio del ingreso *per capita* fue solo de 0.6% (IBGE). Con esta tasa, harían falta 116 años para que el ingreso medio del brasileño se duplicara. En este periodo, el crecimiento no sólo fue bajo, sino también volátil: en ciertos años de las décadas de 1980 y 1990 el PIB se retrajo. Brasil cerró la

década de 2020 con un ingreso *per capita* más reducido que el que tenía al principio. El crecimiento sólo fue significativo en la primera década de los años 2000.

La tabla 1 muestra el crecimiento anual promedio del ingreso *per capita* y del nivel de los precios (inflación). En ella puede verse que el mal desempeño de la economía brasileña en las décadas de 1980 y 1990 se vio acompañado de altas tasas de inflación. Entre 1990 y 1994, el peor periodo para Brasil en términos de inflación, los precios fueron, en promedio, 14 veces más altos que el año anterior. La inflación elevada, crónica y creciente, corroyó el poder adquisitivo de los salarios, en particular entre las capas más pobres, y desalentó la inversión. El Gobierno no pudo detener el proceso inflacionario ni crear las condiciones necesarias para que se retomara el crecimiento y se redujera la pobreza sino hasta 1994, luego de 14 años con una inflación que superaba el 50% anual.

TABLA 1. Crecimiento anual promedio del ingreso *per capita* e inflación promedio anual (%)

Década	*Ingreso* per capita	*Inflación promedio*
1950	4.0	16.5
1960	3.1	44.7
1970	6.1	27.7
1980	0.9	201.7
1990	0.1	378.1
2000	1.7	10.5
2010	0.5	5.6

FUENTES: IBGE, IBRE (FGV).

En la década de 2000, con la moneda estabilizada y tras llevar a cabo importantes reformas económicas, Brasil alcanzó mejores índices de crecimiento en comparación con las dos décadas previas. Esto también se debió al "*boom* de las *commodities*" provocado por el crecimiento acelerado de China y de su participación en el comercio internacional. Brasil, gran productor de *commodities* agropecuarias y minerales, fue uno de los países que más se beneficiaron del extraordinario aumento de la demanda de esos productos en China. Durante la primera década de este siglo, el crecimiento, aunque menor que el observado entre 1950 y 1980, fue más equitativo, en gran medida porque se vio acompañado por la adopción de un conjunto de políticas sociales basadas en la Constitución de 1988, un parteaguas para la redemocratización del país. Esto se reflejó en una mejora significativa de los indicadores sociales e incluso en una caída de la desigualdad, como se verá más adelante.

No obstante, en la segunda década del siglo XXI los indicadores económicos y sociales del país sufrieron un retroceso. La excepción fue la inflación, que se mantuvo bajo control. Esta década tuvo la menor tasa de inflación anual promedio en la historia brasileña.

Transformación estructural

Durante los últimos 70 años la estructura de la economía brasileña ha vivido una profunda transformación. Entre 1950 y 1980, Brasil pasó de ser un país rural, productor y exportador de unos cuantos productos agrícolas, a ser un país urbano, con una industria significativa en los sectores de bienes duraderos y no duraderos.

En las tres primeras décadas de la posguerra se dio un intenso movimiento migratorio del campo a la ciudad. De acuerdo con el Censo (IBGE), en 1950 tan sólo 36% de la población residía en ciudades. Para 1980 este porcentaje ascendía a 68%. El aumento de la urbanización durante este periodo se vinculó estrechamente con la mejora de la productividad agrícola y la rápida industrialización del país. La importación de fertilizantes y herbicidas, el uso de nuevas tierras fértiles y el mayor acceso a la tecnología ayudaron a incrementar la productividad por trabajador y permitieron que muchos se desplazaran a las ciudades en busca de nuevos empleos sin que esto perjudicara el abasto de alimentos. La rápida industrialización ofrecía, por su parte, empleos a los inmigrantes del campo. La participación de la industria en la producción total de la economía creció de 24% en 1950 a 41% en 1980, mientras que la del sector agropecuario cayó de 24% en 1950 a 10% en 1980 (Ipeadata).

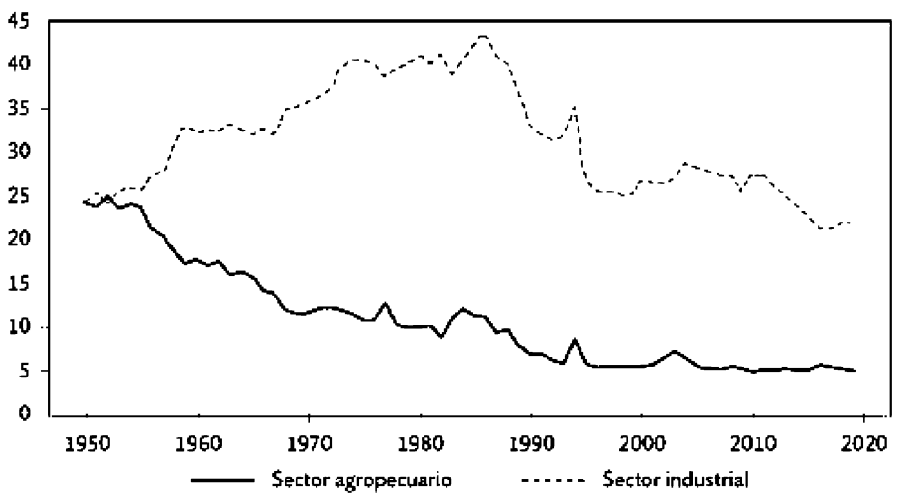
La urbanización y la industrialización rápidas fueron factores cruciales para el acelerado crecimiento económico que se experimentó en ese periodo. Sectores económicos típicamente urbanos, como los de industria y servicios, tienen en promedio una mayor productividad que la agricultura, y la redistribución de personas en estos sectores hizo crecer la producción económica del país. Pero Brasil siguió relativamente aislado del resto del mundo en términos de comercio exterior, como lo demuestra la evolución del grado de apertura comercial, que se calcula mediante la suma de las exportaciones más las importaciones sobre la producción.

El carácter casi autárquico de la economía fue determinante en el periodo que va de 1950 a 1980. Pero el llamado modelo de industrialización por sustitución de importaciones no impidió la llegada a Brasil de grandes empresas multinacionales,

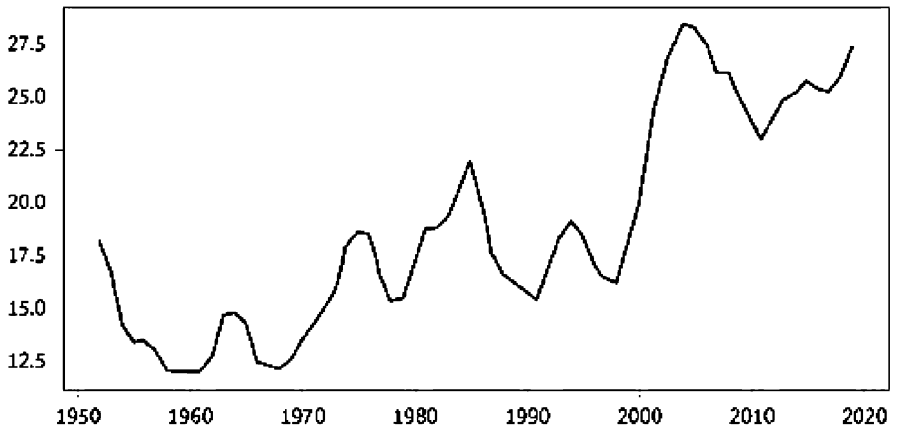
interesadas en las oportunidades que ofrecía un importante mercado interno en rápida expansión.

A partir de la década de 1990, cuando se agotó el dinamismo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se adoptaron reformas liberalizantes que impulsaron la apertura comercial y financiera, lo cual propició una mayor integración de Brasil a los flujos internacionales de comercio e inversiones, sobre todo una vez que el Plan Real puso un alto al proceso inflacionario. Aun así, en términos comparativos, la economía siguió estando relativamente cerrada, como lo muestra la gráfica 2.

Gráfica 1. Evolución de la producción sectorial: 1950-2021 (%)



Gráfica 2. Evolución del grado de apertura comercial: 1950-2021 (%)



FUENTE: Ipeadata.

La urbanización del país prosiguió tras 1980, pero a un ritmo cada vez más lento, como se ve en la tabla 2. En 1990, 76% de los brasileños vivía en ciudades y, 20 años después, en 2010, esta proporción era de 84%. La rápida transición del campo hacia las ciudades se tradujo en la formación de grandes centros urbanos, como São Paulo y Río de Janeiro, que se cuentan entre las más grandes metrópolis de América Latina.

TABLA 2. Tasa de urbanización en Brasil

Año	*Tasa*
1950	36.2
1960	44.7
1970	55.9
1980	67.6
1991	75.6
2000	81.2
2010	84.4

FUENTE: Censo (IBGE).

A partir de 1980 la participación de la industria en la economía se estancó y empezó a declinar, cediendo lugar al sector de servicios, como lo muestra la gráfica 1. Aunque la desindustrialización relativa es un fenómeno común en las economías modernas, la mayor parte de los analistas señala que, en el caso de Brasil, se trata de un proceso particularmente intenso y precoz, pues en otros casos suele partir de niveles más altos de ingreso *per capita* que los alcanzados en el país. En términos absolutos, el sector industrial creció un promedio de 2% al año entre 1980 y 2010, y ha crecido aún menos en la última década.

FUENTE: Ipeadata.

La desindustrialización y la expansión del sector servicios se reflejaron en una retracción de la actividad sindical y del peso de los sindicatos en la vida política brasileña, sobre todo en el sector privado. La sindicalización y el activismo sindical crecieron, en cambio, entre los servidores públicos y los empleados de las empresas estatales luego de que la Constitución de 1988 restableció el derecho amplio de los trabajadores a la sindicalización e instituyó el derecho de huelga para los funcionarios públicos. En general, los sindicatos, al igual que asociaciones de profesionales, perdieron relevancia en la sociedad civil brasileña, que se fragmentó aún más. Los movimientos sociales han llegado a tener en Brasil un mayor peso que los actores tradicionales.

En contraste con la industria, durante los últimos 40 años la agricultura brasileña ha experimentado una extraordinaria modernización. Entre 1975 y 2007 la productividad por área cultivada se duplicó en el caso de granos como el arroz, el frijol, el trigo, la soya y el maíz (IBGE). En el *cerrado*, el bioma que

predomina en la región centro-oeste del país, se incorporaron nuevas tierras, pero la productividad siempre se mantuvo por delante del aumento de la superficie cultivada. La agricultura se benefició de la apertura y se mostró capaz de responder a los desafíos que ésta planteó en términos de competitividad. Brasil se volvió un gran productor y exportador de una amplia gama de productos agrícolas. Gracias al desarrollo del sector pecuario, de la avicultura y de la porcicultura, se convirtió también en un importante proveedor de proteína animal para el mercado interno y externo.

El complejo del agronegocio, que integra la industria y los servicios a la producción primaria, se desarrolló a partir de la gran propiedad y de la incorporación creciente de tecnología, aunadas al decremento en el número de trabajadores rurales y la participación de la pequeña propiedad en la producción. La agricultura de base familiar sólo sobrevivió a la modernización en algunos estados del sur y del sureste, mediante la organización de cooperativas.

La modernización del campo propició, en contrapartida, el surgimiento de trabajadores rurales sin tierra, que empezaron a organizarse políticamente a favor de la redemocratización y a exigir políticas públicas que atendieran a sus demandas. Entre la última década del siglo pasado y la primera de éste, Brasil llevó a cabo un amplio programa de reforma agraria. Pese a la escala del proceso, la permanencia del pequeño productor en el campo mostró ser precaria.

La agricultura es altamente productiva, pero no puede decirse lo mismo del sector pecuario brasileño, donde aún predomina la ganadería extensiva. Al ceder terreno al cultivo de granos en el centro-oeste, la actividad pecuaria de baja productividad empezó a ejercer presión sobre el bioma amazónico, afectado también por prácticas ilegales asociadas al

garimpo[2] y al comercio de madera. Tomando en cuenta sólo las áreas deforestadas, el bioma amazónico ha perdido aproximadamente 17% de su extensión original en Brasil. Si a esto se suman las áreas degradadas, el porcentaje es considerablemente más alto. Un estudio publicado en 2021 en *Nature*,[3] una de las revistas académicas más respetadas del mundo, muestra que en los últimos años el bioma amazónico ha comenzado a emitir más carbono del que absorbe, debido al aumento en el ritmo de la deforestación y la degradación. La deforestación, cuyo ritmo declinó significativamente entre 2004 y 2014, ha vuelto a acelerarse en años recientes, sobre todo a partir de 2018.

El bioma amazónico —60% del cual se encuentra en Brasil— representa aproximadamente un 50% de la extensión total de las selvas tropicales del mundo y es una fuente importante para regular el clima en el planeta. Es aún más crucial para Brasil, donde, entre otras funciones, controla el régimen de lluvias en las principales zonas donde se cultivan granos.

Conciliar la producción agropecuaria con la preservación y regeneración del medio ambiente es uno de los grandes desafíos para Brasil en el siglo XXI. Al mismo tiempo, es una gran oportunidad para que el país se desarrolle haciendo un uso sostenible de los recursos naturales. Aproximadamente 70% de las emisiones brasileñas de gases de efecto invernadero se deben a la deforestación y la degradación de la selva, y no generan desarrollo. Brasil es uno de los países que más tienen que ganar con la transición hacia una economía baja en carbono.

Transición demográfica

Además del cambio en la composición sectorial de su economía y en el grado de urbanización, Brasil pasó en los últimos 70 años por una intensa transformación demográfica. En la década de 1950 el país era mayoritariamente joven: casi 60% de la población estaba compuesto por niños y jóvenes de hasta 24 años de edad. Para 2020 sólo 36% se encontraba en este rango de edades. En cambio, la población de personas de la tercera edad sigue en aumento: si en 1950 correspondía a 3%, en 2020 llegó a 9.5%. Según proyecciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2060 los porcentajes de jóvenes y de personas de la tercera edad se igualarán en torno a 25%, aproximadamente.

El cambio demográfico tiene un impacto significativo en el aumento del ingreso medio de la economía. Mientras la tasa de crecimiento de la población de niños y personas de la tercera edad siga siendo menor que la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar, la cantidad de trabajadores crecerá más que la de sus dependientes (niños y personas de la tercera edad). A lo largo de este periodo, que se conoce como ventana de oportunidad demográfica, el producto *per capita* aumentará aunque la productividad de la economía no sufra cambios. Se trata, pues, de una etapa particularmente favorable para que un país se enriquezca antes de envejecer, es decir, antes de tener un porcentaje significativo de personas de la tercera edad, cuyos gastos crecientes en salud y jubilaciones tendrán que ser cubiertos por la población económicamente activa.

En Brasil este periodo tuvo lugar entre mediados de la década de 1960 y finales de la segunda década de este siglo. Pero, debido al crecimiento reducido de la productividad de su economía, el país no aprovechó como hubiera debido la ventana de oportunidad demográfica. Una vez agotado el bono

demográfico, Brasil requerirá inversiones aún más fuertes en educación, así como reformas que incrementen la productividad de la economía para poder crecer sin caer en la llamada "trampa del ingreso medio". Esta expresión se refiere al fenómeno de los países pobres que pasan a la categoría de países "en desarrollo": en una primera fase, su ingreso *per capita* aumenta porque un contingente cada vez más numeroso de población se desplaza de las zonas rurales, donde la productividad de la agricultura es baja, hacia zonas urbanas en las que la industria y los servicios son comparativamente más productivos que los que se encuentran en el campo, aunque también rudimentarios si se les compara con los de los países desarrollados. En una segunda fase el crecimiento se dificulta porque ya no cuenta con el impulso de la transición rural-urbana y empieza a depender cada vez más de inversiones en materia de educación, formación, recalificación de la mano de obra, investigación científica y desarrollo tecnológico.

TABLA 3. Distribución de la población por edad

Año	*0-14 (%)*	*15-24 (%)*	*25-64 (%)*	*65+ (%)*	*Total (millones)*
1950	41	19	36	2	52
1960	43	18	35	3	71
1970	42	19	34	3	94
1980	38	20	37	3	119
1990	35	19	41	4	147
2000	29	19	45	5	174
2010	24	17	50	6	194

FUENTE: IBGE.

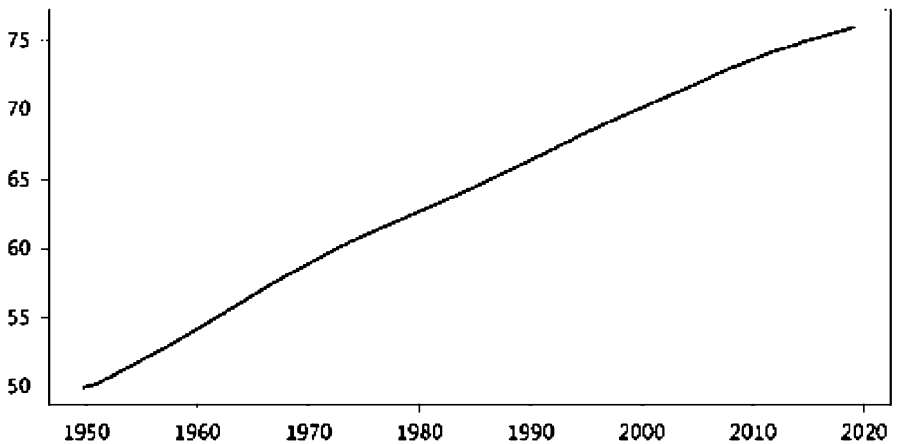
Aunque el crecimiento se desaceleró desde 1980, Brasil ha alcanzado a partir de entonces avances sociales importantes, que se han reflejado en la reducción de las tasas de extrema pobreza, mortalidad infantil y analfabetismo, entre otras. Estos avances se deben en gran medida a que, bajo la forma de políticas públicas en los sectores de salud, educación y asistencia social, se concretó la aspiración, plasmada en la Constitución de 1988, de crear un Estado de bienestar social en Brasil.

Pero el país aún enfrenta grandes desafíos en el terreno social, que se resumen en la presencia de una amplia masa de pobres urbanos y rurales —70% de los brasileños vive en hogares con un ingreso *per capita* que no supera los dos salarios mínimos (IBGE)— y en la persistencia de altos niveles de desigualdad. Esta gran masa de pobres rurales y urbanos está conformada por casi la totalidad de los trabajadores del sector informal, que siempre ha correspondido a un vasto porcentaje del mercado de trabajo en Brasil, incluso en el periodo de crecimiento acelerado. Hoy en día, el sector informal responde aproximadamente por un 50% del total de empleos en el país.

La precariedad del mercado de trabajo, las grandes concentraciones urbanas, la rentabilidad del narcotráfico y la escasa preparación de la policía para hacer frente al fenómeno del crimen organizado, cuando no su complicidad con éste, han llevado a un incremento significativo de la violencia a lo largo de las últimas décadas. Datos del Instituto de Investigaciones Aplicadas (IPEA, por sus siglas en portugués) muestran que entre finales de la década de 1980 y finales de la segunda década del presente siglo, la tasa de homicidios se ha elevado en un 50%. Si hasta mediados de la década de 1990 hubo una tasa de aproximadamente 20 homicidios por cada 100 000 habitantes, en

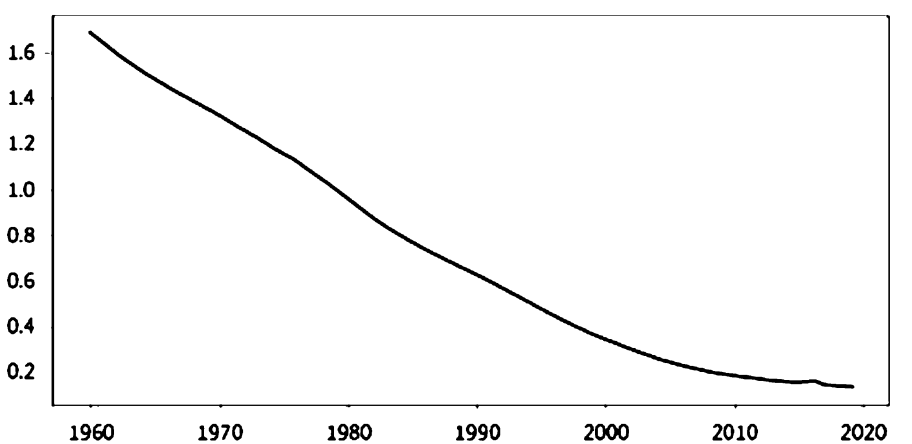
las dos décadas siguientes Brasil ha presentado tasas que rondan los 30 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Gráfica 3. Esperanza de vida al nacer: 1950-2019



Fuentes: IBGE, UNICEF (ONU).

Gráfica 4. Tasa de mortalidad en niños de entre 0 y 5 años: 1960-2020 (%)



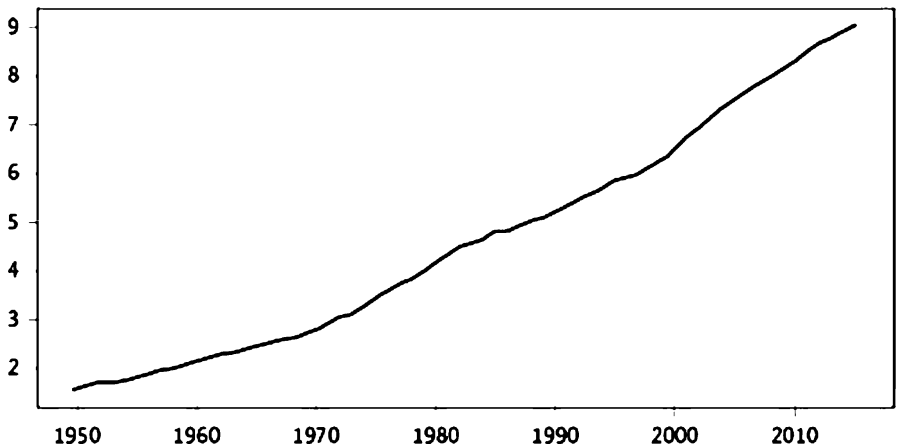
Fuentes: IBGE, UNICEF (ONU).

Al universalizar los servicios públicos de salud y educación y prever programas asistenciales, la Constitución de 1988 integró a los trabajadores informales al universo de las políticas públicas. Pero el problema económico de la informalidad sigue existiendo, ya sea por la volatilidad del ingreso de los trabajadores ocupados en ese sector o bien porque se sobrecarga al sector formal con el peso de los impuestos. Aunque no se explica exclusivamente por este factor, la violencia endémica se ve realimentada por la inserción precaria de los jóvenes pobres en el mercado de trabajo.

Sin negar la importancia de las políticas sociales que se adoptaron a partir de la Constitución de 1988, es posible observar que ya desde antes había una tendencia positiva en la evolución de los indicadores sociales de Brasil. En 1950 la esperanza de vida era de 50 años (IBGE), es decir, una persona nacida en 1950 viviría, en promedio, tan sólo 50 años. En cambio, una persona nacida en 2019 tendría una esperanza de vida de 76 años. Este avance se relaciona en gran parte con la caída de la tasa de mortalidad de niños de entre cero y cinco años. En 1950, 17 de cada 1 000 niños no llegarían a los cinco años de edad. Para 2019 sólo moría uno de cada 1 000 niños nacidos (ONU). Es decir, el número de muertes se redujo 17 veces: se trata de un aumento increíble en el bienestar de incontables familias.

El progreso en el área de la salud se aceleró en el periodo más reciente gracias a la institución de un sistema único de salud previsto en la Constitución de 1988. El Sistema Único de Salud (SUS) virtualmente universalizó en el país el acceso gratuito a los servicios de sanitarios, antes limitado a los trabajadores del sector formal.

GRÁFICA 5. Años de escolaridad promedio: 1950-2015 (%)



FUENTE: Kang (2019).

TABLA 4. Evolución del porcentaje de la población por nivel educativo (%)

Año	*Sin escolaridad*	*Nivel fundamental (primaria y secundaria)*	*Nivel medio superior*	*Nivel superior*
1950	58	39	1	0
1960	42	54	2	0
1970	35	57	4	1
1980	26	60	8	4
1990	18	60	14	6
2000	10	57	23	8
2010	5	44	35	14

FUENTE: Kang (2019).

De igual modo, hubo también un gran progreso en el sector educativo. La tasa de analfabetismo, que en 1950 era de 60%, cayó a un increíble 3.4% en 2015. El tiempo medio de estudio también aumentó bastante: pasó de 1.6 años en 1950 a nueve años en 2015, un incremento de casi ocho años. El acceso a la

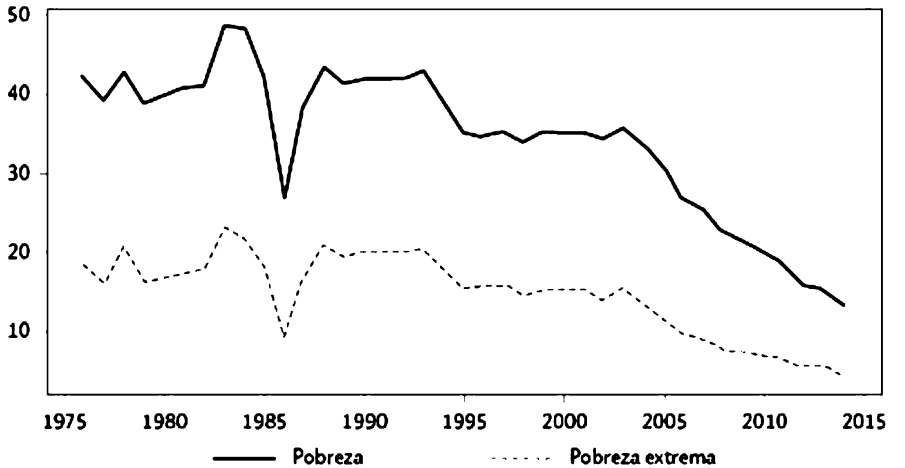
educación superior creció de 0.8% en 1950 a 19% en 2015, y la educación fundamental (primaria y secundaria) prácticamente se universalizó (Kang, 2019).[4]

En la década de 1990, siguiendo los preceptos de la Constitución de 1988, la educación fundamental (que va de los 7 a los 14 años de edad) se convirtió en un deber del Estado y en un derecho de los ciudadanos. Hacia la vuelta del siglo, la tasa de cobertura educativa a nivel fundamental alcanzó virtualmente al 100% de la población en todas las regiones. Entre 1995 y 2010 el gasto promedio por alumno inscrito a nivel fundamental en el sistema público aumentó en un 94%, ya sin contar la inflación (Kang, 2019).

Por su parte, la tasa de cobertura educativa a nivel medio superior, pese al incremento del gasto público, no evolucionó como se esperaba y, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación, se estancó en torno a 60% de la población del país, con un aumento en la deserción en años más recientes.

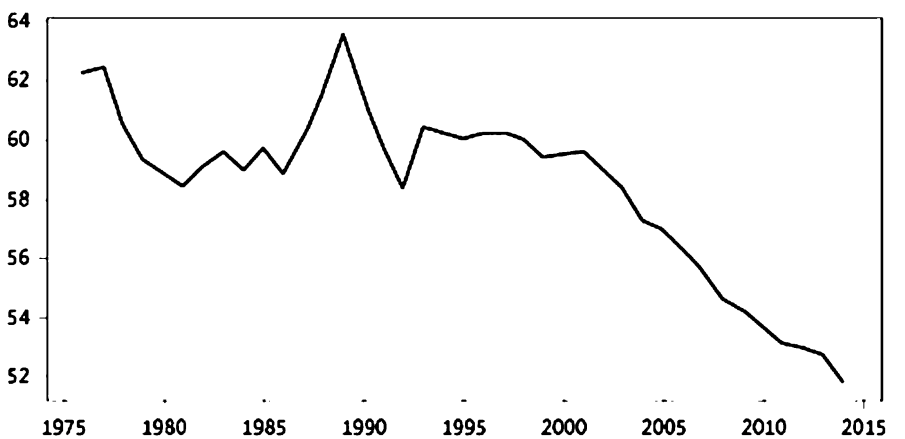
A nivel superior, la matrícula se extendió rápidamente a lo largo de este siglo, gracias a los programas de crédito educativo, el fomento fiscal a instituciones privadas de educación superior y la creación de nuevas universidades públicas federales. De acuerdo con el Ministerio de Educación, el número de vacantes en las universidades públicas federales, estatales y municipales pasó de 250 000 en 2001 a 860 000 en 2020.

Gráfica 6. Tasa de pobreza y extrema pobreza: 1976-2014 (%)



FUENTES: Ipeadata, PNAD.

GRÁFICA 7. Evolución del coeficiente de Gini: 1976-2014 (%)



FUENTES: Ipeadata, PNAD.

No obstante lo anterior, la calidad de la educación brasileña sigue siendo muy baja si se le compara con la de los países ricos, como lo demuestran las evaluaciones del Program for International Student Assesment (PISA) de la OCDE.

A partir de la década de 2000, la cantidad de personas que vivían en estado de pobreza en el país disminuyó considerablemente porque se llevaron a cabo amplias reformas en los programas de redistribución del ingreso. La tasa de extrema pobreza, es decir, la proporción de personas con un ingreso inferior al valor mínimo necesario para comprar una canasta básica de alimentos, se redujo de un promedio de 20% en 1978 a un 4% en 2014 (Ipeadata). Esto quiere decir que en 1978 a uno de cada cinco brasileños se le dificultaba alimentarse adecuadamente debido a carencias económicas. Ese mismo año los pobres conformaban 42% de la población; para 2014 habían caído a 13%. Se trata de un decremento considerable que, no obstante, deja ver que aún hay mucho camino por recorrer.

Junto con la disminución de la pobreza, se redujo la desigualdad. A finales de la década de 1970, Brasil tenía un coeficiente de Gini de 60% y era una de las naciones más desiguales del planeta. Entre 2000 y 2014, la desigualdad en el país se redujo considerablemente: de acuerdo con la Investigación Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD, por sus siglas en portugués), en 2014 llegó a 51.8%. Aun así, Brasil figura entre los países más desiguales del mundo.

Consideraciones finales

Hoy en día, Brasil es un país de ingreso medio, con un ingreso *per capita* de USD 14 835 PPP en 2020, de acuerdo con el Banco Mundial. Como hemos visto, su desarrollo futuro dependerá esencialmente de que mejore su productividad. Puesto que llegó a la categoría de país de ingreso medio sin haber resuelto el problema de la pobreza a gran escala y con altos índices de desigualdad, Brasil enfrenta el reto de hacer crecer más rápido

el pastel y distribuir mejor sus rebanadas. Los avances sociales alcanzados, en especial después de la redemocratización del país, fueron importantes pero no bastaron. Los elevados índices de desigualdad se reflejan en asimetrías políticas y desequilibrios en la oferta de oportunidades que limitan el crecimiento económico cuando éste comienza a depender esencialmente de que mejore la calidad del gasto público y del capital humano. Con una de las cargas tributarias más elevadas entre los países de ingreso medio —aproximadamente 33% del PIB, de acuerdo con el Tesoro Nacional, casi 10 puntos porcentuales más que antes de la Constitución de 1988—, ya no hay margen para que Brasil mejore sus indicadores sociales mediante la expansión del gasto público.

El pacto que posibilitó la redemocratización del país significó implícitamente que el gasto destinado a las políticas universales dirigidas a la mayoría de la población se contemplaría en el presupuesto público, pero sin hacer a un lado los gastos, exenciones y beneficios fiscales concedidos a un amplio conjunto de intereses especiales, desde corporaciones del sector público hasta grupos económicos, pasando por oligarquías políticas sobrerrepresentadas en el Congreso Nacional. Como la sociedad ya no acepta los niveles elevados y crecientes del proceso inflacionario —que servía para moderar el conflicto de intereses en torno a los recursos públicos simplemente postergando en mayor o menor medida el momento de su liberación efectiva—, el financiamiento de los gastos del Estado pasó a depender de una carga tributaria y de una deuda pública crecientes (la deuda bruta del sector público brasileño ronda hoy 80% del PIB). El margen para mitigar el conflicto distributivo mediante la inflación o el aumento de la deuda pública es hoy mucho más estrecho que en cualquier otro momento en los últimos 40 años.

La crisis crónica de los últimos 10 años, periodo en que el país se ha empobrecido, refleja en gran medida este proceso de agotamiento. Éste es el contexto en que se observa el ascenso de las fuerzas de extrema derecha en Brasil, encabezadas por el actual presidente, Jair Bolsonaro. Personaje ajeno al *establishment* político, aunque fue parlamentario desde principios de la década de 1990, este exteniente del Ejército, ascendido a capitán cuando dejó las Fuerzas Armadas, ganó las elecciones de 2018 aprovechándose del ambiente de miedo e insatisfacción provocado por la combinación de la recesión económica, los escándalos de corrupción que involucraban a todos los partidos, el aumento de la violencia y la criminalidad, y el pánico moral entre los sectores más conservadores de la población ante un supuesto ataque a los valores cristianos. Por primera vez desde el fin del autoritarismo, la democracia brasileña se ve puesta en jaque por fuerzas políticas que no sólo son autoritarias, sino también oscurantistas en su rechazo a la ciencia y depredadoras, no sólo de las instituciones democráticas, sino del medio ambiente.

Brasil está en una encrucijada. Para avanzar, necesita reencontrar el camino de desarrollo que se había esbozado entre mediados de la década de 1990 y la primera de este siglo, pero bajo las nuevas condiciones; unas condiciones exigentes, que requieren profundas reformas del Estado para reducir la porción del presupuesto público que queda en manos de intereses especiales. Estas reformas tendrán que hacerse en una situación política difícil: sea cual sea el Gobierno, no le será sencillo hacer crecer al país de nuevo, ahora que se ha agotado el bono demográfico, ni promover la creación de buenos empleos para la mayoría, dado el desfase entre el nivel medio de calificación de la mano de obra y el grado de calificación que demandan las nuevas tecnologías a los trabajadores. El país depende de un

nuevo pacto político-social para asegurar la democracia y hacer posible una trayectoria de desarrollo socialmente incluyente, y ambiental y tecnológicamente sostenible. Derrotar a la extrema derecha y reducir el grado extremo de polarización política será el primer paso en ese sentido.

---

[1] Los autores agradecen la colaboración del economista Filipe Fernandes Fiedler en la elaboración del texto y los datos de este capítulo.

[2] Minería artesanal (N. de la T.).

[3] Luciana V. Gatti, *et al.* "Amazonia as a Carbon Source Linked to Deforestation and Climate Change". *Nature*, 595.7867 (2021): 388-393.

[4] T. H. Kang (2019). *The Political Economy of Education Under Military Rule in Brazil, 1964-1985.*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El Brasil colonial (1500-1822)

La descripción de los cambios socioeconómicos que tuvieron lugar en Europa antes de la era de la expansión marítima portuguesa se basan en Immanuel Wallerstein, *The Modern World-system* (Nueva York/San Francisco/Londres, Academic, 1974, 3 vols.), y en Fernand Braudel, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme* (París, Armand Colin, 1979, 3 vols.). Para la descripción y análisis de la expansión marítima portuguesa, ver la síntesis de José Hermano Saraiva, *História Concisa de Portugal* (9ª ed., Mem Martins, Europa-América, 1984).

El subtítulo referente a los indígenas se basa en Carlos Fausto, "Fragmentos de História e Cultura Tupinambá: Da Etnologia como Instrumento Crítico de Conhecimento Etnohistórico" (en *História dos Índios do Brasil*, São Paulo, Companhia das Letras, 1992).

Varias secciones del capítulo reproducen observaciones presentes en los siguientes ensayos, que forman parte de la colección *The Cambridge History of Latin America*, organizada por Leslie Bethell (Cambridge/Nueva York/Melbourne, Cambridge University Press, 1984-2008, 11 vols.). Ensayos del vol. I: Frédéric Mauro, "Portugal and Brazil: Political and Economic Structures of Empire, 1580-1750", y Andrée Mansuy-Diniz Silva, "Portugal and Brazil: Imperial Re-organization, 1750-1808". Ensayos del vol. II: Stuart B. Schwartz, "Colonial Brazil, 1580-1750: Plantations and Peripheries"; A. J. R. Russell-Wood, "Colonial

Brazil: The Gold Cycle, *c.* 1690-1750", y Dauril Alden, "Late Colonial Brazil, 1750-1808".

Para la discusión sobre el funcionamiento y la crisis del sistema colonial, ver Caio Prado Júnior, *Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia* (3ª ed., São Paulo, Brasiliense, 1948), y Fernando A. Novais, *Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial, 1777-1808* (São Paulo, Hucitec, 1979).

Una obra interpretativa clásica de Brasil, que no sólo abarca el periodo colonial, es la de Sérgio Buarque de Holanda, *Raízes do Brasil* (5ª ed., Río de Janeiro, José Olympio, 1969).

La descripción y análisis de la economía azucarera se basa, esencialmente, en Stuart B. Schwartz, *Segredos Internos: Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial, 1550-1835* (São Paulo, Companhia das Letras, 1988).

Las referencias a la economía paulista en el siglo XVII se encuentran en el trabajo de John Manuel Monteiro, *São Paulo in the Seventeenth Century: Economy and Society* (tesis de doctorado, Chicago, University of Chicago, 1985).

Las guerras holandesas y el sentimiento nativista pernambucano se basan, respectivamente, en Evaldo Cabral de Mello, *Olinda Restaurada: Guerra e Açúcar no Nordeste, 1630-1654* (São Paulo, Forense/Edusp, 1975), y *Rubro Veio: O Imaginário da Restauração Pernambucana* (Río de Janeiro, Nova Fronteira, 1986), del mismo autor.

Para la sociedad de Minas Gerais en la época del oro, ver Laura de Mello e Souza, *Desclassificados do Ouro: A Pobreza Mineira no Século XVIII* (Río de Janeiro, Graal, 1982). El texto sobre la Conspiración Minera toma muchos datos y observaciones de Kenneth Maxwell, *A Devassa da Devassa: A Inconfidência Mineira - Brasil-Portugal, 1750-1808* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1978). Para los aspectos simbólicos del episodio, ver José Murilo de Carvalho, *A Formação das Almas: O Imaginário da República no Brasil* (São Paulo,

Companhia das Letras, 1990). La referencia a la economia de Minas Gerais tras el apogeo de la explotación del oro es Borges Martins, "Minas Gerais, Século XIX: Tráfico e Apego à Escravidão numa Economia não Exportadora" (*Estudos Econômicos*, vol. 13, núm. 1, pp. 181-209, enero-abril de 1983).

El énfasis en los vínculos triangulares entre Brasil, Portugal y la costa africana en el tráfico de esclavos está tomado de Luiz Felipe de Alencastro, *Le commerce des vivants: traite d'esclaves et "pax lusitana" dans l'Atlantic sud* (tesis de doctorado, París, Université de Paris X, 1985-1986, 3 vols.). Otros datos y observaciones sobre el esclavismo en Brasil derivan de Herbert S. Klein, *A Escravidão Africana: América Latina e Caribe* (São Paulo, Brasiliense, 1987); Kátia M. de Queirós Mattoso, *Ser Escravo no Brasil* (São Paulo, Brasiliense, 1982); Manuela Carneiro da Cunha, *Negros, Estrangeiros: Os Escravos Libertos e Sua Volta à África* (São Paulo, Brasiliense, 1985), y Pedro Carvalho de Mello, "Estimativas de Longevidade de Escravos no Brasil na Segunda Metade do Século XIX" (*Estudos Econômicos*, vol. 13, núm. 1, pp. 151-180, enero-abril de 1983).

En cuanto a la controversia sobre la forma básica de la colonización portuguesa, se alinean, de un lado, Caio Prado Júnior y Fernando A. Novais, que hacen énfasis en los productos primarios destinados a la exportación. Del otro lado, a partir de Capistrano de Abreu, *Capítulos de História Colonial, 1500-1800* (5ª ed., Río de Janeiro, Livraria Briguiet, 1969), hay que recordar a Ciro Flamarion Santana Cardoso, que resalta la pequeña producción campesina dirigida al mercado interno. Una síntesis de este punto de vista se encuentra en el capítulo "O Trabalho na Colônia", que el autor escribió para el volumen *História Geral do Brasil* (Río de Janeiro, Campus, 1988), obra organizada por Maria Yedda Linhares. La tesis que subraya la importancia del mercado interno fue desarrollada por Jorge Caldeira en *A Nação Mercantilista: Ensaio sobre o Brasil* (São Paulo, Editora 34, 1999).

El análisis del significado económico y social del comercio de esclavos como fuente de acumulación se encuentra principalmente en Manolo Florentino, *Em Costas Negras: Uma História do Tráfico de Escravos entre a África e o Rio de Janeiro* (São Paulo, Companhia das Letras, 1997), y João Fragoso y Manolo Florentino, *O Arcaísmo como Projeto: Mercado Atlântico, Sociedade Agrária e Elite Mercantil no Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1840* (Río de Janeiro, Diadorim, 1993). Para el caso de Bahía, ver Kátia M. de Queirós Mattoso, *Bahia, Século XIX: Uma Província no Império* (Río de Janeiro, Nova Fronteira, 1992).

Para las interpretaciones divergentes de las relaciones entre Estado y sociedad, ver Raymundo Faoro, *Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro* (2ª ed., Porto Alegre/São Paulo, Globo/Edusp, 1975); Oliveira Viana, *Instituições Políticas Brasileiras* (2ª ed., Río de Janeiro, José Olympio, 1949, 2 vols.); Nestor Duarte, *A Ordem Privada e a Organização Política Nacional: Contribuição à Sociologia Política Brasileira* (São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1939).

Para el proceso político que va de la apertura de los puertos a la independencia, ver Leslie Bethell, "The Independence of Brazil", en el vol. III de la colección *The Cambridge History of Latin America*, ya citada, y Emília Viotti da Costa, "Introdução ao Estudo da Emancipação Política", en *Brasil em Perspectiva* (São Paulo, Difusão Europeia do Livro [Difel], 1968), libro organizado por Carlos Guilherme Mota.

Se utilizaron como obras generales el vol. 1 de *Colônia* de *Brasil História. Texto e Consulta* (São Paulo, Brasiliense, 1976), e *História Geral do Brasil*, título ya citado.

El Brasil monárquico (1822-1889)

Ver, para empezar, varios ensayos que forman parte de *História Geral da Civilização Brasileira*, organizada por Boris Fausto y Sérgio Buarque de Holanda (São Paulo, Difusão Europeia do Livro [Difel], 1960-1984, 11 vols.).

Especialmente, en el t. II, vol. 1, Amaro Quintas, "A Agitação Republicana no Nordeste"; en el vol. 2, Amaro Quintas, "O Nordeste, 1825-1850"; en el vol. 3, Maria Thereza Schorer Petrone, "Imigração Assalariada", y, en el vol. 4, Odilon Nogueira de Matos, "Vias de Comunicação"; Alice P. Canabrava, "A Grande Lavoura"; John Schulz, "O Exército e o Império".

En *The Cambridge History of Latin America*, colección organizada por Leslie Bethell (Cambridge/Nueva York/Melbourne, Cambridge University Press, 1984-2008, 11 vols.), ver, en el vol. IV, Leslie Bethell y José Murilo de Carvalho, "Brazil from Independence to the Middle of the Nineteenth Century", y Richard Graham, "Brazil from the Middle of the Nineteenth Century to the Paraguayan War", y, en el vol. V, Emília Viotti da Costa, "Brazil: The Age of Reform, 18701889".

La descripción y análisis del proceso político en el Imperio deben mucho a José Murilo de Carvalho, *A Construção da Ordem: A Elite Política Imperial* (Río de Janeiro, Campus, 1980). Los datos electorales se tomaron de Walter Costa Porto, *O Voto no Brasil* (Brasilia, Gráfica do Senado Federal, 1989, vol. I).

Para la Guerra de los Farrapos, ver Spencer Leitman, *Raízes Socioeconômicas da Guerra dos Farrapos: Um Capítulo da História do Brasil no Século xix* (Río de Janeiro, Graal, 1979). Para la historia del Levantamiento de los Malês en Bahía, ver João José Reis, *Rebelião Escrava no Brasil: A História do Levante dos Malês, 1835* (São Paulo, Brasiliense, 1986). La interpretación de la Guerra de Paraguay recurre al libro *Guerra do Paraguai: Escravidão e Cidadania na Formação do Exército* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1990), de Ricardo Salles, y, sobre todo, a *A Guerra do Paraguai* (São Paulo,

Brasiliense, 1991), de Francisco Doratioto. Algunas observaciones sobre la Guardia Nacional y el Ejército derivan de *A Espada de Dâmocles: O Exército e a Crise do Império* (tesis de doctorado, Campinas, Universidade Estadual de Campinas [Unicamp], 1990), de Wilma Peres Costa.

Para los últimos años de la esclavitud, ver Robert Conrad, *Os Últimos Anos da Escravatura no Brasil: 1850-1888* (2ª ed., Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978). Otros datos sobre la esclavitud se tomaron de *Estatísticas Históricas do Brasil: Séries Econômicas, Demográficas e Sociais de 1550 a 1988* (Río de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 1987, vol. 3).

Los datos sobre la población en el periodo que va de 1822 a 1890 se tomaron de los *Cadernos Cebrap*, núm. 16, 1973 (Crecimiento Demográfico [Histórico y Actual] y Componentes del Crecimiento [Fecundidad y Migraciones]), presentados por artículos de Maria Luiza Marcílio y otros. Algunas referencias al café, al azúcar y al caucho al final del quinto capítulo se basan, respectivamente, en Antonio Delfim Netto, *O Problema do Café no Brasil* (Río de Janeiro, Editora FGV, 1979); Peter L. Eisenberg, *Modernização sem Mudança: A Indústria Açucareira em Pernambuco - 1840-1910* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1977), y Barbara Weinstein, *The Amazon Rubber Boom: 1850-1920* (Stanford, Stanford University Press, 1983). Sobre los ferrocarriles, ver Flávio Azevedo Marques de Saes, *A Grande Empresa de Serviços Públicos na Economia Cafeeira: 1850-1930* (São Paulo, Hucitec, 1986).

Las interpretaciones divergentes sobre las razones por las que Brasil no se fragmentó tras la Independencia son de José Murilo de Carvalho, en *A Construção da Ordem: A Elite Política Imperial*, obra ya citada, y de Luiz Felipe de Alencastro, en "La traite négrière et l'unité nationale brésilienne" (*Revue Française d'Histoire d'Outre-mer*, vol. 66, núm. 244, pp. 395-419, 1979).

Posiciones contrapuestas sobre el esclavismo y la "brecha campesina" enfrentan, de un lado, aunque guarden diferencias entre sí, a Luiz Felipe de Alencastro, ya citado, y a Jacob Gorender, *A Escravidão Reabilitada* (São Paulo, Ática, 1990); del otro, a Ciro Flamarion Santana Cardoso, *Escravo ou Camponês?: O Protocampesinato Negro nas Américas* (São Paulo, Brasiliense, 1987).

Para una interpretación global del Imperio, ver Ilmar Rohloff de Mattos, *O Tempo Saquarema* (São Paulo, Hucitec, 1987).

Una síntesis de la política externa, que va desde el periodo imperial hasta los años más recientes, puede leerse en Amado Luiz Cervo y Clodoaldo Bueno, *História da Política Exterior do Brasil* (São Paulo, Ática, 1982).

La Primera República

Los principales datos económicos para el periodo de 1889 a 1945 se tomaron de Annibal Villanova Villela y Wilson Suzigan, *Política do Governo e Crescimento da Economia Brasileira: 1889-1945* (Río de Janeiro, Instituto de Pesquisas [Inpes]/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [IPEA], 1973). En la discusión sobre la política económica y las alianzas oligárquicas se incorporan análisis que constan en *Difícil Hegemonia: Um Estudo sobre São Paulo na Primeira República* (tesis de doctorado, São Paulo, Universidade de São Paulo [USP], 1986), de Eduardo Kugelmas. Los datos comparativos sobre las elecciones en el Imperio y en la República son de Joseph L. Love, "Political Participation in Brazil, 1881-1969" (*Luso-Brazilian Review*, vol. 7, núm. 2, pp. 3-24, 1970). Del mismo autor son las observaciones sobre la presencia de Rio Grande do Sul en la política federal, tomadas de *O Regionalismo Gaúcho e as Origens da Revolução de 1930* (São Paulo, Perspectiva, 1975).

Para un análisis global del periodo se reproducen fragmentos de Boris Fausto, *Cadernos Cebrap*, núm. 10, 1972 (Pequenos Ensaios de História da República).

La parte que se refiere a la inmigración debe mucho a Thomas H. Holloway, *Imigrantes para o Café: Café e Sociedade em São Paulo, 1886-1934* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1984); Maria Stella Ferreira Levy, "O Papel da Migração Internacional na Evolução da População Brasileira (1872-1972)" (*Revista de Saúde Pública*, vol. 8 [supl.], pp. 49-90, 1974); Herbert S. Klein, "A Integração Social e Econômica dos Imigrantes Espanhóis no Brasil" (*Estudos Econômicos*, vol. 19, núm. 3, pp. 443-456, 1989), y, del mismo autor, "The Social and Economic Integration of Portuguese Immigrants in Brazil in the Late Nineteenth and Twentieth Centuries" (*Journal of Latin American Studies*, vol. 23, núm. 2, pp. 309-337, mayo de 1991), así como a Maria Thereza Schorer Petrone, "Imigração" (en Boris Fausto y Sérgio Buarque de Holanda [orgs.], *História Geral da Civilização Brasileira*, São Paulo, Difusão Europeia do Livro [Difel], 1977, t. III, vol. 2, pp. 95-133).

Sobre la industrialización, ver Wilson Suzigan, *Indústria Brasileira: Origem e Desenvolvimento* (São Paulo, Brasiliense, 1986), y Paul Singer, *Desenvolvimento Econômico e Evolução Urbana: Análise da Evolução Econômica de São Paulo, Blumenau, Porto Alegre e Recife* (São Paulo, Companhia Editora Nacional/Edusp, 1968). Las observaciones sobre la burguesía industrial, que van más allá de la Primera República, se basan, entre otras fuentes, en el libro de Maria Antonieta P. Leopoldi, *Política e Interesses na Industrialização Brasileira: As Associações Industriais, a Política Econômica e o Estado* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 2000).

Los datos sobre la economía *gaúcha* son de Pedro Cezar Dutra Fonseca, "A Transição Capitalista no Rio Grande do Sul: A Economia Gaúcha na Primeira República" (*Estudos Econômicos*, vol. 15, núm. 2, pp. 263-289, mayo-agosto de 1985). Sobre las

migraciones internas, ver Douglas H. Graham y Sérgio Buarque de Holanda Filho, *Migration, Regional and Urban Growth, and Development in Brazil: A Selective Analysis of the Historical Record, 1872-1970* (São Paulo, Instituto de Pesquisas Econômicas [IPE], Universidade de São Paulo [USP], 1971).

Las observaciones acerca del avance de las actividades agrícolas ligadas al mercado interno en São Paulo se basan en Mauricio A. Font, *Coffee, Contention and Change in the Making of Modern Brazil* (Cambridge [Estados Unidos], Basil Blackwell, 1990).

Para el tema de la inversión extranjera y el de la deuda externa, ver Flávio Azevedo Marques de Saes y Tamás Szmrecsányi, "O Capital Estrangeiro no Brasil, 1880-1930" (*Estudos Econômicos*, vol. 15, núm. 2, pp. 191-219, mayo-agosto de 1985); Warren Dean, "The Brazilian Economy, 1870-1930" (en *The Cambridge History of Latin America*, Cambridge/Nueva York/Melbourne, Cambridge University Press, 1986, vol. 5, pp. 685-725), y Steven Topik, *The Political Economy of the Brazilian State, 1889-1930* (Austin, University of Texas Press, 1987).

El Estado Getulista (1930-1945)

La descripción de los movimientos revolucionarios echa mano de Edgard Carone, *Revoluções do Brasil Contemporâneo: 1922-1938* (São Paulo, Desa, 1965). Para la descripción del proceso político me basé más directamente en Boris Fausto, *Cadernos Cebrap*, núm. 10, 1972 (Pequenos Ensaios de História da República), y Robert M. Levine, *O Regime de Vargas: Os Anos Críticos, 1934-1938* (Río de Janeiro, Nova Fronteira, 1980). Muchos datos sobre el periodo de 1930 a 1983 se tomaron de Israel Beloch y Alzira Alves de Abreu (coords.), *Dicionário Histórico-biográfico Brasileiro, 1930-1983* (Río de

Janeiro, Editora FGV/Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil [CPDOC]/Forense, 1984, 4 vols.).

El análisis del integralismo se basa en Hélgio Trindade, *Integralismo: O Fascismo Brasileiro na Década de 30* (São Paulo, Difusão Europeia do Livro [Difel], 1974). Sobre el papel de los industriales, ver Eli Diniz, *Empresário, Estado e Capitalismo no Brasil: 1930-1945* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1978).

La principal fuente para el análisis de la política exterior es Gerson Moura, "A Revolução de 1930 e a Política Externa Brasileira: Ruptura ou Continuidade" (en *A Revolução de 30: Seminário Internacional*, Brasília, Editora UNB, 1982). Sobre las Fuerzas Armadas, ver José Murilo de Carvalho, "Forças Armadas e Política, 1930-1945", también en *A Revolução de 30: Seminário Internacional*. Las referencias a la formación de la opinión pública en el gobierno de Vargas se basan en Ângela Castro Gomes, *A Invenção do Trabalhismo* (São Paulo/Río de Janeiro, Vértice/Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro [Iuperj], 1988). Para la cuestión de la educación y la fundación de la Universidad de São Paulo (USP), ver, respectivamente, Otaíza de Oliveira Romanelli, *História da Educação no Brasil: 1930-1973* (4ª ed., Petrópolis, Vozes, 1978), y Fernando Limongi, "Mentores e Clientelas da Universidade de São Paulo" (en Sergio Miceli [org.], *História das Ciências Sociais no Brasil*, São Paulo, Vértice/Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo [IDESP], 1989, vol. 1). Sobre la política financiera en el exterior, ver Marcelo de Paiva Abreu, "O Brasil e a Economia Mundial, 1929-1945" (en Boris Fausto y Sérgio Buarque de Holanda [orgs.], *História Geral da Civilização Brasileira*, São Paulo, Difusão Europeia do Livro [Difel], 1984, t. III, vol. 4).

LA EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA (1945-1964)

El análisis general del proceso político se basa en Thomas E. Skidmore, *Brasil: De Getúlio Vargas a Castelo Branco, 1930-1964* (Río de Janeiro, Saga, 1969). Para el gobierno de Juscelino Kubitschek, ver Maria Victoria de Mesquita Benevides, *O Governo Kubitschek: Desenvolvimento Econômico e Estabilidade Política, 1956-1961* (3ª ed., Río de Janeiro, Paz e Terra, 1979). Las referencias a la Unión Democrática Nacional (UDN) se basan principalmente en el libro de la autora arriba citada: *A UDN e o Udenismo: Ambiguidades do Liberalismo Brasileiro, 1945-1965* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1981). La principal fuente para el análisis del Ejército es Alfred Stepan, *Os Militares na Política* (Río de Janeiro, Artenova, 1971).

El análisis del movimiento obrero se basa en Leôncio Martins Rodrigues, "Sindicalismo e Classe Operária, 1930-1964" (en Boris Fausto y Sérgio Buarque de Holanda [orgs.], *História Geral da Civilização Brasileira*, São Paulo, Difusão Europeia do Livro [Difel], 1983, t. III, vol. 3), y Francisco Correa Weffort, *Sindicatos e Política* (tesis de libre-docencia, São Paulo, Universidade de São Paulo [USP], 1972).

Para las relaciones económicas internacionales, ver Pedro Sampaio Malan, "Relações Econômicas Internacionais do Brasil, 1945-1964" (en Boris Fausto y Sérgio Buarque de Holanda [orgs.], *História Geral da Civilização Brasileira*, São Paulo, Difusão Europeia do Livro [Difel], 1984, t. III, vol. 4). Los datos sobre la industria automotriz se tomaron de Benedicto Heloiz Nascimento, *Formação da Indústria Automobilística Brasileira: Política de Desenvolvimento Industrial em uma Economia Dependente* (São Paulo, Instituto de Geografia, Universidade de São Paulo [USP], 1976).

EL RÉGIMEN MILITAR Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1964-1990)

La descripción del proceso político se basa en Maria Helena Moreira Alves, *Estado e Oposição no Brasil, 1964-1984* (Petrópolis, Vozes, 1984), y principalmente en Thomas E. Skidmore, *Brasil: De Castelo a Tancredo - 1964-1985* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1988). Para el análisis del modelo político, ver Fernando Henrique Cardoso, *O Modelo Político Brasileiro: E Outros Ensaios* (São Paulo, Difusão Europeia do Livro [Difel], 1979). Del mismo autor, ver un análisis de las relaciones entre la economía y la política titulado "Desenvolvimento Associado-dependente e Teoria Democrática" (en Alfred Stepan [org.], *Democratizando o Brasil*, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1988).

Sobre los militares, ver Alfred Stepan, *Os Militares: Da Abertura à Nova República* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1986). Los resultados electorales y un análisis del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) se encuentran en Maria d'Alva Gil Kinzo, *Oposição e Autoritarismo: Gênese e Trajetória do MDB, 1966-1979* (São Paulo, Vértice/Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo [IDESP], 1988).

Los datos sobre los trabajadores del sector automotriz del ABC paulista son de John Humprey, *Fazendo o "Milagre": Controle Capitalista e Luta Operária na Indústria Automobilística Brasileira* (Petrópolis, Vozes/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento [Cebrap], 1982).

Se utilizaron varios ensayos que constan en Edmar Bacha y Herbert S. Klein (orgs.), *A Transição Incompleta: Brasil desde 1945* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1986, 2 vols.). Ver especialmente, en el vol. 1, para la población, Thomas W. Merrick, "A População Brasileira a partir de 1945"; para la cuestión agraria, David Goodman, "Economia e Sociedade Rurais a partir de 1945". Para la educación, en el vol. 2, Cláudio de Moura Castro, "O que Está Acontecendo com a Educação no Brasil?".

El análisis de las migraciones se basa en Douglas H. Graham y Sérgio Buarque de Holanda Filho, *Migration, Regional and Urban Growth, and Development in Brazil: A Selective Analysis of the Historical Record, 1872-1970* (São Paulo, Instituto de Pesquisas Econômicas [IPE]/Universidade de São Paulo [USP], 1971). En cuanto a la controversia sobre el significado del II Plan Nacional de Desarrollo (II PND) del gobierno de Geisel, están, de un lado, con una interpretación negativa, Albert Fishlow, "Uma História de Dois Presidentes: a Economia Política da Gestão da Crise" (en Alfred Stepan [org.], *Democratizando o Brasil*, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1988), y Alkimar R. Moura, "Rumo à Entropia: a Política Econômica de Geisel a Collor" (en Bolivar Lamounier [org.], *De Geisel a Collor: O Balanço da Transição*, São Paulo, Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo [IDESP]/Sumaré, 1990); en la posición contraria, el trabajo más significativo, con una interpretación positiva, es el de Antonio Barros de Castro y Francisco Eduardo Pires de Souza, *A Economia Brasileira em Marcha Forçada* (Río de Janeiro, Paz e Terra, 1985).

Para las observaciones sobre la estructura del campo y la cuestión de la reforma agraria, ver Francisco Graziano, *A Tragédia da Terra: O Fracasso da Reforma Agrária no Brasil* (São Paulo/Jaboticabal, Iglu/Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão [Funep]/Universidade Estadual Paulista [Unesp], 1991).

Los datos estadísticos se obtuvieron, entre otros, de Wanderley Guilherme dos Santos (coord.), *Que Brasil é Este?* (Río de Janeiro/São Paulo, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro [Iuperj]/Vértice, 1990), y *Brasil em Números* (Río de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 1999, vol. 7).

La modernización por la vía democrática (1990-2010)

Para un panorama amplio del proceso político que va de la transición democrática al gobierno de Lula, ver Carlos Ranulfo Melo y Manuel Alcántara Sáez (orgs.), *A Democracia Brasileira: Balanço e Perspectivas para o Século XXI* (Belo Horizonte, Editora UFMG, 2007). Para un análisis político-institucional de las reformas constitucionales en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ver Marcus André Melo, *Reformas Constitucionais no Brasil: Instituições Políticas e Processos Decisórios* (Río de Janeiro, Renavan, 2002). Para un análisis del significado político y electoral del lulismo, ver André Singer, *Os Sentidos do Lulismo: Reforma Gradual e Pacto Conservador* (São Paulo, Companhia das Letras, 2012).

Para un panorama amplio de los cambios económicos y sociales que tuvieron lugar en la década de 1990, ver Renato Baumann (org.), *Brasil, Uma Década em Transição* (Río de Janeiro, Campus, 1999).

Para un panorama amplio de los efectos económicos de la dinámica demográfica en Brasil a partir de los años 2000, ver Fabio Giambiagi y Paulo Tafner, *Demografia: A Ameaça Invisível – O Dilema Previdenciário que o Brasil se Recusa a Encarar* (Río de Janeiro, Campus/Elsevier, 2009).

Sobre los programas de privatización en la década de 1990, ver Armando Castelar Pinheiro y Fabio Giambiagi, "Os Antecedentes Macroeconômicos e a Estrutura Institucional" (en Armando Castelar Pinheiro y Kiichiro Fukasaku [ed.], *A Privatização no Brasil: O Caso dos Serviços de Utilidade Pública*, Río de Janeiro, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social [BNDES], 2000).

Para una evaluación crítica de los procesos de apertura y privatización, ver Mariano Laplane, Luciano Coutinho y Célio Hiratuka (orgs.), *Internacionalização e Desenvolvimento da Indústria no Brasil* (São Paulo, Editora Unesp, 2004). Para una breve visión

histórica de la evolución del sistema de protección social en Brasil entre 1980 y 2000, ver Sônia Draibe, "Brasil, 1980-2000: Proteção e Insegurança Sociais em Tempos Difíceis" (en Taller Inter-Regional: Protección Social en una Era Insegura – Un Intercambio Sur-Sur sobre Políticas Sociales Alternativas en Respuesta a la Globalización, Santiago, 14-16 de mayo de 2002). Para un análisis basado en datos empíricos de la evolución de los indicadores económicos y sociales en las décadas de 1990 y 2000, ver Marcelo Neri, "Desigualdade, Estabilidade e Bem-estar Social" (*Ensaios Econômicos*, núm. 637, diciembre de 2006).

Para un análisis económico de la aparición de la nueva clase media, ver Marcelo Neri, *A Nova Classe Média: O Lado Brilhante da Base da Pirâmide* (São Paulo, Saraiva, 2011). Para un análisis de los aspectos de innovación y continuidad de la política exterior brasileña en el gobierno de Cardoso, ver Celso Lafer, *A Identidade Internacional do Brasil e a Política Externa Brasileira: Passado, Presente e Futuro* (2ª ed. rev. y aumentada, São Paulo, Perspectiva, 2004).

Para un análisis de la política exterior brasileña desde el gobierno de Sarney hasta el de Lula, ver Tullo Vigevani y Gabriel Cepaluni, *A Política Externa Brasileira: A Busca da Autonomia, de Sarney a Lula* (São Paulo, Editora Unesp, 2011).

SOBRE EL AUTOR

Boris Fausto es doctor en Derecho e Historia por la Universidad de São Paulo y fue profesor en el Departamento de Ciencia Política de esa casa de estudios. Es miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. Escribió solo o en colaboración diversos libros y artículos que abordan diferentes momentos y aspectos de la historia de Brasil, de sus movimientos sociales y también estudios sobre criminalidad e inmigración. Entre ellos se encuentran: A *Revolução de 1930. Historiografía e Historia* (1970), *Trabalho Urbano e Conflito Social* (1975), *Crime e Quotidiano. A Criminalidade em São Paulo, 1880-1924* (1984), *Historiografía da Imigração para São Paulo* (1991) e *Historia do Brasil* (1994). Editó también los cuatro volúmenes de la *Historia Geral da Civilização Brasileira* referidos al periodo republicano.

Historia mínima de Brasil.

Portada: Pablo Reyna.
Cuidó la edición la Dirección de Publicaciones de El Colegio de México.
Imagen de portada: *Abaporu*, Tarsila do Amaral, 1928, óleo sobre tela, 85.3 x 73 cm, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

libros.colmex.mx

video-comentarios de libros COLMEX

Octubre de 2022

Este libro propone un recorrido de más de 500 años por el pasado de lo que hoy conocemos como Brasil, desde los orígenes de la colonización portuguesa hasta nuestros días. Se trata de un esfuerzo de síntesis para poner al alcance de un público amplio los hechos más relevantes de la historia brasileña y también cuestiones centrales de interpretación histórica en torno a ese largo periodo.

Se ofrece al lector un panorama general de los grandes procesos e instituciones que han forjado la nación brasileña: el sistema colonial, la esclavitud, el imperio, la república, el liberalismo y el autoritarismo que impregnó el siglo XX. Boris Fausto expone sus interpretaciones sin descartar la existencia de otras posibles, para dar cuenta de procesos tan singulares como, por ejemplo, las razones por las que Brasil, a diferencia de buena parte de América Latina, mantuvo su unidad política y territorial después de su independencia.

Con la mirada puesta en el presente, *Historia mínima de Brasil* avanza sobre las primeras décadas del siglo XXI para encontrar las permanencias de un pasado esclavista, las rupturas que hicieron posible transitar hacia órdenes más democráticos, las consecuencias de constantes desequilibrios macroeconómicos y las peligrosas crisis políticas que amenazan con regresiones autoritarias.

EL COLEGIO DE MÉXICO